

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**  
**DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA**



**TESIS DOCTORAL**

**FRANCISCO PÉREZ CARBALLO:**  
**MEMORIA Y BIOGRAFÍA**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**José Galán Ortega**

Director

Juan Pablo Fusi Aizpurúa

**Madrid, 2015**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
Dpto. de Historia Contemporánea**

**FRANCISCO PÉREZ CARBALLO:  
MEMORIA Y BIOGRAFÍA**

**Bajo la dirección del Catedrático de  
Historia Contemporánea D. Juan Pablo  
Fusi Aizpurúa.**

**Autor: José Galán Ortega.**

## ÍNDICE

Introducción.....	3
I. ENTRE LOS PLIEGUES DE LA MEMORIA.....	12
La arquitectura de la memoria.....	12
Los primeros días: mapa de la confusión, fábrica de mitos, imposición de olvido.....	22
De la Transición a la actualidad: la memoria y sus caminos, el discurso de las metáforas.....	52
II. EL ESTUDIANTE Y LAS NUEVAS MULTITUDES.....	76
Madrid, distrito de <i>Universidad</i> .....	76
Socio del Ateneo de Madrid. Una vocación intelectual y política hacia las primeras luces de la República.....	99
El estudiante de leyes y la universidad en el laberinto de una dictadura.....	105
III. UNIVERSIDAD VERSUS POLÍTICA EN LA ENCRUCIJADA DE LA VIDA PROFESIONAL.....	141
Presidente de la APED de la Universidad Central y directivo de la FUE de Madrid.....	141
Un discurso, un ideal, una frontera imprecisa.....	154
Del XV Congreso de la CIE en Venecia a la Conferencia Franco-Española de Inter-Ayuda Universitaria.....	175
IV. EL MERITORIO Y LA ESCENA.....	185
Acción Republicana en el espejo de su organización juvenil.....	185
La Juventud de Izquierda Republicana y el reverso de la política.....	213
V. EN EL CORAZÓN DE UNA REPÚBLICA AMENAZADA.....	237
Entre Azaña y Casares: ¿el gobernador civil frente a la lógica de un sistema?.....	237
A Coruña: bajo el foco que proyecta sombras. La trama conspirativa de abril de 1936.....	256
Orden público, conflictos laborales, anarquistas...Flujos de política local y provincial.....	286
VI. EL DEBER DEMOCRÁTICO O EL ÉXITO DE UN GOLPE DE ESTADO.....	320
La estrategia de <i>apaciguamiento</i> . El gobierno y sus gobernadores.....	320
Comienza la sublevación en Marruecos: A Coruña espera su turno.....	334
El asalto al Gobierno Civil: una plaza más en poder de los rebeldes.....	360
Conclusiones.....	386
Fuentes y bibliografía.....	399
Anexo documental.....	411
Summary (resumen).....	431

## INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es trazar la biografía de Francisco Pérez Carballo, un joven de extracción humilde nacido en Madrid el 8 de noviembre de 1910, educado en las aulas de las Escuelas Pías de San Antón o del instituto Cardenal Cisneros y forjado políticamente entre los pliegues del movimiento estudiantil universitario –APED/ FUE– y las organizaciones juveniles de la izquierda burguesa representada por los partidos liderados por Manuel Azaña (JARy JIR), plataformas desde las que accedió, siguiendo el *cursus honorum* del militante republicano azañista, hasta el Gobierno Civil de A Coruña en la primavera de 1936.

En este último destino, se enfrentó a dos procesos involutivos: el primero resuelto de manera satisfactoria en abril; el segundo, convertido en el preámbulo de la guerra civil y causa de su muerte y la de su esposa, la bibliotecaria e intelectual madrileña Juana Capdevielle, unida de manera tan estrecha a él que hasta compartió, virtualmente, el modo, cronología y significado de su propia desaparición física, así como un espacio conjunto, íntimo pero a la vez público, reservado para ambos en la memoria de varias generaciones. En cualquier caso, debe quedar claro que aquí el sujeto histórico, el biografiado en estas líneas, es Pérez Carballo, líder estudiantil y político en ciernes, ateneísta, abogado y profesor ayudante de derecho romano en la Universidad Central, oficial letrado de las Cortes, gobernador civil de A Coruña de abril a julio de 1936, y no su esposa, aunque para ella se reservan páginas marcadas por la perspectiva o la desazón intelectual impuestas por la dialéctica intemporal que la memoria (o las distintas memorias) sostienen contra las expresiones del *olvido* y sus distintos usos combinados.

En apariencia, se trataría de reflejar, desde el prisma del relato y la investigación historiográfica, los rasgos más destacados de una trayectoria vital corta, brillante en lo intelectual –un curriculum académico sobresaliente en todos los niveles, una capacidad de trabajo innegable–, prometedora en su proyección política, pero casi anónima en lo que se refiere a su impacto social, marcada por el mismo olvido proyectado por la sociedad española durante tantos años sobre una generación perdida de ciudadanos comprometidos de muy diversos modos y maneras con la idea regeneradora de la República.

La elección de un sujeto histórico en apariencia menor, quizá, entendiendo por ello una falta de protagonismo o de talla política especialmente relevante en función de su edad, no debe implicar sombra alguna. Es cierto que a Pérez Carballo le faltó tiempo para alcanzar el brillo intelectual de ministros y docentes universitarios como Giral, Ruiz Funes o Sánchez Albornoz, hombres de peso en AR e IR, los dos partidos en que militó durante la Segunda República, pero esta circunstancia no puede cuestionar la escritura de estas páginas. El tratamiento de una figura a priori *secundaria*, ofrecería la oportunidad de utilizar, sin duda, líneas transversales que, por ejemplo, recorriesen de forma cronológica el tiempo histórico del ingreso de la juventud en las vías de la movilización política, de la eclosión y estabilización del movimiento estudiantil y de los procesos sedicentes que acabaron por yugular la experiencia republicana, contemplados



desde la atalaya del Gobierno Civil de A Coruña, desembocadura de una trayectoria vital y política frustrada cuando apenas estaba despuntando.

Por otra parte, es notoria la falta de estudios historiográficos sobre la actuación y funciones de los gobernadores civiles en la historia contemporánea de España –escasez acentuada desde la perspectiva biográfica- y, muy especialmente, en relación a su papel en situaciones tan críticas para el país como la representada por la amenaza involucionista que se cernió sobre el recién inaugurado estado democrático durante la Segunda República y sus diferentes traducciones a la realidad, la última de ellas convertida en la mecha de una sangrienta guerra civil. Este esquema metodológico permitiría iluminar problemas históricos subyacentes desde un foco inmerso en el propio lenguaje factual y en sucesivas coyunturas políticas y culturales, una contribución desde luego modesta pero no por ello despreciable o irrelevante.

Bajo la premisa de que el individuo corporeiza la estructura al tiempo que ésta lo hace con aquél –el sujeto refleja al mundo, como el mundo refleja al sujeto-, nunca desaparecen, esto es obvio, los rasgos y el valor específico de una biografía humana, con independencia de la dimensión exacta o probable de la misma.

En sí, ese *todo* (esa estructura) no es, en palabras de Edgar Morin, un sistema concebido exclusivamente como unidad global en el que las partes se funden o se confunden con él todo, manteniendo una doble identidad, “una identidad propia que permanece en ellas (y por tanto no es reductible al todo) y una identidad común, la de su ciudadanía sistémica”.<sup>1</sup> El paradigma de la complejidad puede ayudar trascendiendo la falta de precisión con que en la historiografía, y en las Ciencias Sociales en general, se utiliza el lenguaje conceptual –que, por otra parte, se entiende en aras de una fluidez narrativa-, para retratar las multiplicidad de identidades y personalidades desplegadas por un mismo individuo en diferentes contextos (ideológico, profesional, académico, político...), ese monólogo interior Faulkneriano desde donde abordar el análisis social en sus múltiples variables.<sup>2</sup>

La vida o la trayectoria política de Francisco Pérez Carballo no se debe contemplar en un sentido de “ejemplaridad” o “representatividad”, su relato vital no está enfocado sobre ninguna condición arquetípica de movimientos estudiantiles, ideológicos o intelectuales, aunque en su actividad puedan detectarse las huellas de los espacios políticos que habitó, de lo que se deduce nuestro interés en la dimensión donde el sujeto histórico de una biografía confronta con la estructura o el contexto y genera destellos siempre imprevisibles. No en vano, y como escribía Lytton Strachey: “los seres humanos son demasiado importantes para tratarlos como meros síntomas del pasado. Tienen un valor que es independiente de cualesquier procesos temporales, que es eterno y que debe percibirse por mérito propio”.<sup>3</sup>

En este trabajo se privilegia una interpretación de la biografía como manera de contribuir a la observación del carácter abierto y plural del pasado, en el intento de trascender categorías rígidas o fronteras difusas entre la historia social o política, -por resaltar las más importantes- y de subrayar que la escritura de la historia es, sobre todo,

<sup>1</sup> E. Morin, *Ciencia con conciencia*, versión *on line* en [www.edgarmorin.org](http://www.edgarmorin.org), p. 199.

<sup>2</sup> E. Morin, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 2004, p 84.

<sup>3</sup> L Strachey, *Victorians eminentes*, Madrid, Valdemar, 1998, p. 26.

eso mismo, escritura, narración basada en una sólida y prolongada investigación que persigue la objetividad y la captación de matices y contextos sometidos a múltiples variables. Y este hecho resalta con mucha más razón en la biografía, género historiográfico que ha retornado después de no haberse ausentado nunca.

Isabel Burdiel ha precisado algo más sobre esta cuestión y ha señalado que “la relación entre individuo y sociedad puede reformularse en términos de la visión que de su sociedad y de la política de su tiempo tiene un individuo y como ésta afecta a la definición de la “gama de los posibles” y a la memoria (memorias) que queda de todo ello.”<sup>4</sup>

En este punto, es importante completar el conocimiento de un acontecimiento o una figura histórica con el análisis de la percepción y representación del mismo a lo largo del tiempo, de esa vida añadida que, reconstruida por unos o creada por otros con fines muy diferentes entre sí, suministra información sobre su origen en la realidad y sobre los observadores de su reflejo en las diferentes tentativas de contextualización.

Este trabajo operará, o intentará operar, esa función de recuperación de memoria que se justifica también en el hecho de que tanto de Francisco Pérez Carballo como de su esposa, Juana Capdevielle -intelectual, mujer avanzada a su tiempo, madre asesinada antes de dar a luz- sólo ha trascendido hasta ahora, en realidad, su recuerdo, ante la carencia de estudios historiográficos específicos dedicados a ellos. Un recuerdo articulado en sentido reivindicativo, reducidos ambos a la categoría de chivos expiatorios de la barbarie represiva franquista o a la de símbolos de un concepto de ciudadanía republicana transparente, que encarnarían en los últimos tiempos -después de haber sido reelaborado su valor referencial por memorias políticas o culturales diversas-, o denigratorio, por parte de la historiografía y la prensa franquista en su momento. Recuerdo, memoria, memorias que han oscurecido las escasas y fragmentadas referencias historiográficas existentes sobre ambos, y han demandado, por su valor subjetivo e instrumental -y por adquirir una importancia desmedida, alta y significativamente desproporcionada, sobre las muy contadas aportaciones de la historiografía al estudio de sus vidas-, a la elaboración de un capítulo -el primero- dedicado en exclusiva al tratamiento y evolución de su memoria desde un punto de partida trágico y paralelo: el fusilamiento del gobernador de A Coruña el 24 de julio de 1936 y el alevoso asesinato de su esposa, Juana Capdevielle, ocurrido veinticinco días más tarde,

Las imágenes en el tiempo de Pérez Carballo y su esposa se reflejaron, siempre a ojos de los distintos agentes o vectores de memoria, como metáforas o símbolos de la República y su impronta civilizatoria, renovadora, y ése es uno de los ejes o la hipótesis centrales que vertebran este trabajo y deben contrastarse con los resultados de la investigación realizada, dispuesta a dilucidar la razón de ejemplaridades o arquetipos contruidos en torno a patrones culturales o ideológicos.

Es necesario advertir que contra el riesgo de solapar testimonios y fuentes que insertaremos en su contexto correspondiente -los fragmentos de memoria utilizados aquí se examinan tanto en su valor de elementos de diferentes discursos ideológicos o

---

<sup>4</sup> I. Burdiel, “Historia política y biografía: más allá de las fronteras”, en *Ayer* nº 93, 2014 (1).

culturales, como en su dimensión de fuente historiográfica-, nos ceñiremos, en el capítulo dedicado al estudio memorialístico, a su valor intrínseco como portadores y receptores de memoria y recuerdos, sin pretender explorar en profundidad los fragmentos de realidad histórica que contienen, objeto reservado para los restantes capítulos de este trabajo.

En consecuencia, el primer capítulo indagará en la representación, a lo largo del tiempo y desde múltiples focos, de la trayectoria de Francisco Pérez Carballo y, en cierto modo, de su esposa, ligada a él también en el recuerdo como refuerzo o complemento en la narrativa de la memoria. Así mismo, se buscará sobre sus imágenes o reflejos, o entre los acervos de las memorias colectivas e individuales que las contengan, sometidas a los profundos cambios sufridos por la sociedad española durante más de siete décadas y diseminadas en distintos planos generacionales.

La línea argumental que explorará historia, memoria y olvido propondrá un enfoque teórico fundamentado en la nítida distinción conceptual entre historia, como operación intelectual que exige un discurso y análisis críticos, y memoria, entendida esta última (haciendo abstracción de sus diferentes tipos y versiones, individual, colectiva, histórica, hegemónica, dominante...) como una presencia del pasado, reconstrucción psíquica e intelectual que supone, de hecho, una representación selectiva que no es nunca la del individuo aislado, sino la de un individuo inserto en un contexto familiar, social, nacional; en otras palabras, una memoria siempre colectiva.<sup>5</sup>

La memoria, como facultad de recordar, de representar permanentemente el pasado (a la ciencia histórica le correspondería el papel de su racionalización), no será concebida como una reproducción fiel del mundo exterior,<sup>6</sup> sino como un importante instrumento para interpretarlo desde la perspectiva, precisamente, de la historia de la memoria, disciplina que concibe la información rescatada por este medio como fuente privilegiada o, incluso, como objeto de investigación historiográfica.<sup>7</sup>

En cuanto al tratamiento de uno de los tipos de memoria más controvertidos y mediáticos, la denominada *memoria histórica*, tomaremos como referencia y punto de partida la definición esbozada por Paloma Aguilar, que la concibe como la

---

<sup>5</sup> H. Rousso, “La mémoire n’est plus ce qu’elle était”, en *Écrive l’histoire du temps présent. En hommage à François Bedarida*, París, CNRS Edits, pp 105-114.

<sup>6</sup> Desde el reciente debate mediático entre la historia y la memoria en España, concebido en términos de una batalla planteada por los movimientos sociales de reivindicación de la memoria por el derecho a participar en la construcción del recuerdo colectivo (por el poder de contar el pasado a la sociedad), algunos autores reclaman una sugestiva pero compleja democratización del conocimiento histórico, basada en la incorporación de múltiples voces ciudadanas al intento de lograr un cierto consenso sobre el pasado, véase por ejemplo, S. Faber, P. Sánchez León y J. Izquierdo, “El poder de contar y el paraíso perdido. Polémicas públicas y construcción colectiva de la memoria en España”, *Política y Sociedad*, 2011, Vol. 48, nº.3, p.463-480.

<sup>7</sup> Entre las obras de referencia para los historiadores de la memoria, pueden citarse: P. Novick. *The Holocaust in American Life*. Chicago: University of Chicago Press. 2000; Y. Zerubavel. *Recovered roots: Collective memory and the making of Israeli national tradition*. University of Chicago Press, 1995; H. Rousso, *The Vichy Syndrome. History and memory in France since 1944*, Cambridge, Harvard University Press, 1991; P. Nora, *Les lieux de mémoire* (3 vol), París, Galliard, 1997; J. Cuesta, *La odisea de la memoria: historia de la memoria en España, Siglo XX*, Madrid, Alianza, 2008; E. González Calleja, *Memoria e historia. Vademécum de conceptos y debates fundamentales*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013 y R. García Cárcel, *La herencia del pasado*, Barcelona, Galaxia, 2011.

interpretación (no recuerdo) del pasado que comparten mayoritariamente los miembros de un grupo que disponen de un sentimiento de identidad común.<sup>8</sup> La constatación de que el flujo actual de la *memoria histórica* se nutre de una permanente y, en realidad, necesaria dialéctica con otros usos narrativos y sociales de la memoria y sus tipologías de fronteras imprecisas (social, colectiva, cultural...), nos obligará, en medio del escenario metodológico propio de una disciplina en construcción (¿la historia de la memoria y sus insospechadas interacciones?), a flexibilizar o, directamente, a relajar determinadas categorías y taxonomías. Éstas serán reconducidas, en última instancia, al umbral de las figuras discursivas o referenciales, en beneficio tanto de la fluidez narrativa pretendida como del progreso de la investigación historiográfica propuesta.

Del mismo modo, en este primer capítulo no se contemplará lo referenciado a cuentagotas por la historiografía académica y científica sobre Francisco Pérez Carballo o Juana Capdevielle, que se revisará en el lugar de esta introducción reservado a contemplar un estado de la cuestión, dedicado, en lo fundamental, a los principales núcleos temáticos contenidos, transitados a lo largo de una trayectoria individual demasiado corta en el tiempo. El hecho de privilegiar –y tal vez proteger– la noción de objetividad característica del historiador como investigador, observador y analista desprovisto de vínculos primordiales, comprometido por tanto con la cultura de la ciencia y el conocimiento de la realidad en el tiempo, no significa ignorar su capacidad de generar memoria, bien sea a través de un esfuerzo intencional o de la interpretación o lectura amplia de la contribución científica o literaria de la historiografía –idea de consenso entre los sociólogos y antropólogos de la memoria–, pero sí presupone el empleo de una perspectiva disociadora de la producción consciente o voluntaria de memoria, con diferentes grados de visibilidad, del impacto o repercusión social del trabajo crítico de los historiadores.<sup>9</sup>

El segundo capítulo abordará, fundamentalmente, los años de formación del hijo de una familia humilde en la efervescencia de los centros educativos y culturales madrileños, traspasada al ambiente de las calles y espacios públicos de la ciudad, durante la década de los veinte. Años de instituto, Ateneo y Universidad que fluyen desde las aulas del Instituto Cardenal Cisneros a las de la facultad de Derecho de la Universidad Central y retratan también los rostros de profesores y compañeros de Francisco Pérez Carballo, muchos de ellos –como él mismo– ya inmersos en la acción política contra la dictadura de Primo de Rivera y en un contexto de profundo cambio histórico. El tercer capítulo se centrará exclusivamente en la esfera del activista estudiantil que gravita en la órbita de la FUE y en los distintos niveles de participación ofrecidos a un estudiante de derecho (APED/FUE/UFEH), así como analizará algunas aportaciones intelectuales realizadas por Pérez Carballo a la doctrina de la organización –centradas en el espectro ideológico del republicanismo liberal de orientación socialdemócrata– y el funcionamiento de la universidad, relacionadas también con su

<sup>8</sup> P. Aguilar Fernández, *Políticas de la memoria y memorias de la política*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 59-60.

<sup>9</sup> Para reflexionar desde los estudios de campo sobre la perspectiva empleada por los historiadores para enfocar una cuestión tan compleja como la memoria, véase también G. Cubitt, *History and memory*, Manchester University Press, 2007 y, en especial, J. Tumblety, *Understanding memory as source and subject* (versión Kindle), 2013.

vínculo con la CIE o la ISS y sus congresos internacionales. El cuarto apartado de este trabajo penetrará en los mecanismos de movilización política, y de estructuración o desarticulación interna –según el caso-, de los partidos de Acción Republicana e Izquierda Republicana en los que se insertaron las organizaciones juveniles de ambos partidos (JAR y JIR, respectivamente), de cuyas directivas formó parte el abogado y profesor universitario madrileño. El quinto capítulo se adentrará, también desde una perspectiva multifocal, en la última etapa de la vida de Pérez Carballo, determinada por su nombramiento como gobernador civil de A Coruña a principios de abril de 1936, y contemplará tanto las claves de la política provincial gestionada por el Gobierno Civil como los primeros coletazos de la trama conspirativa local, en especial del episodio acontecido en la madrugada del 19 de abril, que sentará las bases del golpe militar definitivo, asestado en toda Galicia a partir del 20 de julio. La secuencia completa en A Coruña de esta sublevación anunciada, y sus contundentes efectos sobre la democracia republicana y uno de sus gobernadores civiles (el más joven), constituirán el nudo central de sexto y último capítulo, punto y final de una experiencia concentrada en unas pocas décadas y de arranque para los distintos y complejos trabajos de la memoria.

En realidad, y como ya se ha anticipado párrafos atrás para argumentar la pertinencia de dedicarle un capítulo a la memoria del sujeto histórico abordado aquí, la historiografía científica apenas ha hecho referencia a algún rasgo de la biografía política o intelectual de Francisco Pérez Carballo, con excepción de algunas menciones a su función como gobernador civil y garante de la democracia republicana durante las horas en que dirigió la resistencia del Gobierno Civil de A Coruña frente a los golpistas. En todo caso, y en relación al marco referencial de este trabajo, para definir los contextos de movilización política o los procesos de maduración del movimiento estudiantil o de las organizaciones juveniles de los partidos políticos, se ha tomado como referencia los trabajos de los historiadores Eduardo González Calleja y Sandra Souto Kustrin, que destacan tanto por su calidad como por ser parte de una preocupación historiográfica que en España se abre camino con determinación.<sup>10</sup>

Sobre la actuación del gobernador civil de A Coruña aparecen breves notas genéricas en muchas obras de carácter general, pero casi nunca aportaciones lo suficientemente amplias para retratar, al menos, el ámbito competencial y político de un gobernador ante los retos afrontados en la primavera de 1936. Como es obvio, esta situación cambia significativamente, aunque no hasta el punto de cubrir con suficiencia el hueco existente, en las obras de referencia en el estudio del golpe de estado en A Coruña y Galicia, algunas de las cuales –caso de las firmadas por L. Lamela y C. Fernández Santander- si bien no proceden de historiadores de estricto perfil académico sí que respetan los cánones de la investigación objetiva y rigurosa en su metodología, resultando de gran calidad e interés.<sup>11</sup> Junto a ellos, destacan las aportaciones de la

---

<sup>10</sup> En especial, E. González Calleja, *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea*, Madrid, Alianza, 2009; y del mismo autor y S. Souto Kustrin, “De la dictadura a la República. Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España”, en *Hispania (Revista española de Historia)*, 2007, Vol. LXVII, num. 225 (enero-abril).

<sup>11</sup> Por citar una de las más recientes, que valora significativamente su activo papel al frente del Gobierno Civil frente a la sublevación, véase J. Aróstegui, *Por qué el 18 de julio...Y después*, Madrid, Flor del viento, 2006....

historiografía académica gallega más pujante, liderada en este ámbito por E. Grandío, quien se muestra algo más crítico que Lamela o Fernández Santander en relación a la actuación de Pérez Carballo al frente del Gobierno Civil de A Coruña, -estos autores reconocen la preparación, capacidad y lealtad a la República del gobernador y sólo cuestionan su falta de experiencia para afrontar un *coup d'état*, tesis generalizada en este punto-, y pone el acento en su rol de hombre de partido, designado para recuperar el peso de IR en la coalición del Frente Popular coruñés, o en su estado de indecisión o desconcierto durante los momentos críticos del estallido de la insurrección en A Coruña.<sup>12</sup>

Al margen de las obras citadas, todas ellas de indudable interés y calado historiográfico, merecen especial mención varios estudios colectivos dedicados a la actuación del gobierno del Frente Popular en la primavera de 1936, periodo en que Francisco Pérez Carballo estuvo al frente del Gobierno Civil de A Coruña, que se centran en el análisis y contextualización de la violencia política, la conflictividad socio-laboral y el desarrollo de la trama conspirativa a nivel nacional, entre otros asuntos relevantes para definir este momento histórico, que también han sido de gran utilidad para enmarcar esta investigación.<sup>13</sup>

Las fuentes primarias utilizadas en este trabajo son de variada naturaleza. Abarcan desde las puramente archivísticas o hemerográficas hasta los testimonios escritos u orales de testigos de época, incluyendo también algunos recursos –no necesariamente de menor relevancia- obtenidos a través de Internet.

Para la confección del primer capítulo, se contemplaron fuentes de muy diversa índole, y de gran valor en la mayoría de los casos para una aproximación a la evolución de la memoria de la figura de Pérez Carballo y sus distintos planos de representación.

A saber: desde testimonios impresos de un valor histórico muy controvertido, o pretendidos tratados de historia, firmados por propagandistas del franquismo, a los relatos de Ángel Pérez Carballo, hermano de Francisco y testigo de la resistencia dentro del Gobierno Civil, o de intelectuales o políticos que conocieron a Pérez Carballo o insertaron su recuerdo en el flujo de la memoria cultural, pasando por noticias de prensa republicana o franquista y entrevistas orales a miembros de la familia del último gobernador republicano de A Coruña.

Entre otros, el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, el AGA, el Archivo del Congreso de los Diputados, el de la Edad de Plata (o el de la Residencia de Estudiantes), los del Ateneo, Instituto Cardenal Cisneros, Fundación Universitaria Española (Fondo Sbert) y de la Villa de Madrid, así como el Archivo General de la Universidad Complutense y la Biblioteca *Marqués de Valdecilla* han proporcionado

---

<sup>12</sup>C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2007 (2 vol.) ; L. Lamela, *Estampas de injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2005; E. Grandío, *Anos de odio. Golpe, represión e guerra civil na provincia da Coruña (1936-1939)*, Diputación de A Coruña, 2007 y “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña”, en J. de Juana y J. Prada, *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.

<sup>13</sup> Vv.AA, *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013; *La España del Frente Popular/L'Espagne du Front Populaire*, en *Melanges de la Casa de Velázquez*, T. 41-1 (2011) y J. Prada y E. Grandío (cord), *La Segunda República: nuevas miradas, nuevos enfoques* (dossier), en *Hispania nova*, nº 11 (2013).

documentación suficiente para ilustrar las etapas académica y profesional y los inicios en política de Francisco Pérez Carballo. En su caso –y también en algunos otros, por qué no decirlo–, se ha observado el contraste existente entre el interés de los fondos (y la innegable diligencia del personal del AG de la Universidad Complutense) y la escasez endémica de los medios e infraestructuras disponibles.

Documentos recabados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, algunas publicaciones universitarias (*FUE*, *Gaceta Universitaria* o su propio discurso, *Estampa de Universidad*, leído en el acto de inauguración del curso 1933-34) e información extraída de la prensa (en especial, *Política*, *Jar*, *El Sol* o *Heraldo de Madrid*...) han permitido, debidamente contextualizadas, la aproximación a la faceta de Pérez Carballo como dirigente de la FUE y a la actividad de las organizaciones juveniles de AR e IR.

El Archivo del Reino de Galicia -en concreto los fondos del Gobierno Civil o de la Audiencia Provincial de A Coruña- ha suministrado datos para perfilar la labor de Pérez Carballo como gobernador de esta provincia, aunque no ha satisfecho las expectativas del investigador debido a que, como oros muchos centros documentales, fueron convenientemente expurgados por las autoridades franquistas (¿solamente?) en su momento y, en consecuencia, se ha perdido buena parte de la información relevante que este archivo debía contener. Por su parte, tampoco ha ofrecido resultados significativos la consulta de los archivos provinciales de Lugo, Orense y Pontevedra (el de A Coruña está englobado en el ARG), del Municipal y de la Diputación de A Coruña –que no disponen de documentación relativa al periodo en que Pérez Carballo ocupó el Gobierno Civil de esta provincia- o del de la Universidad de Santiago.

Las causas instruidas por la jurisdicción militar custodiadas en el Archivo del Tribunal Militar de la Región Noroeste o en el de la Marina, ambos radicados en Ferrol, revelaron importante información condensada en los testimonios de generales de División o Brigada (Salcedo, Caridad Pita); mandos de Tierra o navales (coroneles Martín Alonso, Cánovas, Torrado...vicealmirante Núñez, contralmirante Azarola); oficiales, clases y tropa del Ejército, Guardia Civil o de otros cuerpos policiales (Seguridad y Asalto, Vigilancia) y de autoridades y funcionarios civiles (los gobernadores de las provincias gallegas, excepto Pérez Carballo; el alcalde de A Coruña, Suárez Ferrín, entre ellos). Información, decimos, relativa tanto a los acontecimientos producidos en A Coruña durante los meses previos al golpe de estado y durante su desarrollo, como al papel desarrollado por el gobernador civil en el proceso político que precedió a la sublevación de julio y a la guerra civil. En el análisis de los testimonios citados, se ha tenido en cuenta la circunstancia –obvia, pero siempre peligrosa para el investigador- de que el rol político y personal jugado por cada declarante (sea de acusado, testigo o *dudoso*, por no hablar de lealtades o venganzas personales o *faccionales*) puede influir decisivamente o matizar, sutil o groseramente, su testimonio. Así, las declaraciones de diputados de IR como Manuel Guzmán o de UR como José Miñones, las del propio alcalde Suárez Ferrín o las de bastantes funcionarios del Gobierno Civil, efectuadas en causas instruidas en agosto de 1936 y más tarde (condicionadas por el temor de buena parte de los acusados a ser condenados a la pena capital o a una *benévola* cadena perpetua), señalarían con insistencia sus *malas o distantes relaciones* con Pérez Carballo o el protagonismo exclusivo de éste en la

defensa de la legalidad republicana y, en última instancia, en la resistencia ofrecida a los sublevados desde el interior del Gobierno Civil durante las horas críticas del lunes 20 de julio. Un gobernador, por cierto, convertido en excelente chivo expiatorio de todas las culpas –una estrategia de defensa seguida por algunos acusados que agranda o achica, según los casos, la figura de Pérez Carballo y dificulta la evaluación correcta de ciertas afirmaciones-, pues había sido fusilado semanas antes sin que, por otra parte, se instruyese en su contra causa sumarísima alguna, hipótesis por la que nos inclinamos finalmente, no sin expresar ciertas reservas, tras una búsqueda infructuosa de la misma.

Por otra parte, tampoco conviene olvidar que en la instrucción de una de las causas más relevantes que se han examinado, la 613/37 –situación extrapolable a las instruidas a medida que la guerra civil se iba revelando como un conflicto destinado a perdurar y no como una cuartelada de corta duración-, prestaron declaración como testigos de cargo algunos mandos y oficiales de la Guardia Civil y del Ejército que, o bien por hacerlo al calor del combate enquistado en el frente madrileño, o tal vez a causa del tiempo transcurrido desde los hechos de julio de 1936 en A Coruña, radicalizarían o enturbiarían sus testimonios, afectando al más o menos nebuloso pero constante ajuste de cuentas emprendido sobre las responsabilidades contraídas por militares, policías o guardias civiles que no manifestaron con claridad -o desde un principio- su adhesión al golpe de estado contra la República.

Otros archivos consultados para perfilar este tipo de cuestiones (junto a los de naturaleza militar radicados en Madrid o Ávila, de menor relevancia para el resultado final de esta investigación) han sido el Archivo Histórico Nacional, el de la Guardia Civil, el del Ministerio del Interior y el mismo CDMH, que han proporcionado documentos interesantes aunque manifiestamente desiguales.

En cuanto a las fuentes orales utilizadas, destacan las entrevistas realizadas a varios miembros de la familia Pérez Carballo, concretamente a Juan Pérez-Carballo Veiga y Carmen Veiga de Bernardo, sobrino y cuñada de Francisco Pérez Carballo, que han proporcionado, de forma muy generosa por su parte, una información de primera mano. Del mismo modo, se ha entrevistado a Isaac Díaz Pardo, Esther Varela Casares (nieta del político de IR y presidente del gobierno), entre otros, y se ha utilizado el archivo sonoro puesto a disposición de los investigadores por el Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”, así como las bases de datos y recursos hemerográficos que éste ofrece en la red.

Para finalizar esta introducción, bastaría reflexionar sobre unas palabras escritas por la historiadora María Jesús González, autora de un revelador estudio sobre Raymond Carr, que resultan aquí realmente evocadoras, sugestivas, además de proponer una mirada globalizadora: “una biografía no deja de ser un retrato aproximado de luces y sombras, un recital de voces y de silencios”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M.J. González, *Raymond Carr. La curiosidad del zorro. Una biografía*, Galaxia Gutenberg, 2010.



## **I. ENTRE LOS PLIEGUES DE LA MEMORIA.**

### **La arquitectura de la memoria.**

A lo largo de este capítulo se analizará la evolución de la memoria social o colectiva de Francisco Pérez Carballo, cuya imagen en el tiempo estuvo siempre vinculado a la de su esposa, la intelectual madrileña Juana Capdevielle, objeto también de atención por la íntima relación que los unió en su vida personal y, fundamentalmente, por la leyenda emanada tras la proximidad y significación de sus respectivas muertes durante la violenta rebelión militar iniciada en julio de 1936. La especial complejidad del equilibrio entre los planos de la realidad histórica y la memoria como reflejo condicionado y la posible influencia que Juana ejerció sobre Francisco desde que se conocieron en el Ateneo de Madrid —en principio, restringida al plano personal—, son razones suficientes para que en estas páginas iniciales, que pretenden encuadrar distintos relatos de memorias como contrapunto y fuente de información para la biografía del último gobernador republicano de A Coruña, se dedique un espacio significativo a Juana Capdevielle. Y se hace necesaria la explicación de esta relativa obviedad porque al margen de que ambos fuesen conyugues y víctimas, como tantos otros en definitiva, de un relato entreverado de mitos y silencios, al servicio de diferentes lecturas ideológicas del pasado orientadas a influir en el presente, sus historias personales, profesionales y políticas merecen y pueden ser contempladas por separado y desde perspectivas que trasciendan los límites de la memoria colectiva.

La memoria constituye en la actualidad una obsesión cultural, un fenómeno universal del que emergen con demasiada frecuencia confusos y sesgados debates políticos y jurídicos y, en ocasiones, sombras inquietantes de manipulación o imposición de una determinada lectura del pasado (¿políticas de la memoria en sentido estricto?). En este contexto, partidos políticos, medios de comunicación y colectivos portadores o depositarios de memoria buscan el respaldo de los historiadores para apoyar las tesis defendidas en cada caso o refutar los atisbos de contra-memoria. Los historiadores, por su parte, han reaccionado ante esta eclosión memorística con cierto escepticismo —su ética intelectual les obliga a recelar de las tácticas oportunistas— y en las últimas décadas han convertido la memoria en un nuevo campo historiográfico.

La memoria se ha convertido, de alguna manera, en una formidable arma de combate cultural y político. De ahí la existencia de emprendedores de la memoria y de políticas de memoria. Existe un permanente “deber de la memoria”, en especial acerca del pasado reciente, mientras que la “obsesión” por ella se manifiesta en la sinonimia, muchas veces abusiva, que se hace entre “pasado” y “memoria”. La memoria constituye la denominación actual, dominante, para designar el pasado, no de una manera objetiva y racional, sino con la idea explícita de que es preciso conservar el pasado, mantenerlo vivo, atribuyéndole un papel, sin que, por otra parte, se precise cuál<sup>15</sup>.

En un tiempo de constantes incertidumbres, caracterizado por una intensa “aceleración de la historia”, traducida en la dinámica de una doble revolución científica y tecnológica, y bajo importantes contradicciones dentro de la siempre compleja

---

<sup>15</sup> J. Aróstegui, *La historia vivida. Sobre la historia del presente*, Madrid, Alianza, 2004, pp. 166.

relación entre memoria e historia —en la que profundizaremos gradualmente—, surge la necesidad de realizar un importante esfuerzo de comprensión e interpretación de la realidad contemporánea:

The acceleration of history, then, confront us with the brutal realization of the difference between real memory —social and unviolated, exemplified in but also retained as the secret of so-called primitive or archaic societies—, and history, which is how our hopelessly forgetful modern societies, propelled by change, organize the past. On the one hand, we find an integrated, dictatorial memory —unself-conscious, commanding, all-powerful, spontaneously actualizing, a memory without a past that ceaselessly reinvents tradition, linking the history of its ancestors to the undifferentiated time of heroes, origins and myth—and on the other hand, our memory, nothing more in fact than sifted and sorted historical traces. The gulf between the two has deepened in modern times with the growing belief in a right, a capacity, and even a duty to change. Today, this distance has been stretched to its convulsive limit.<sup>16</sup>

Henry Rousso ofreció una interesante interpretación de las razones del auge de la memoria como fenómeno que trasciende el plano estrictamente científico —las ciencias humanas han contemplado la memoria colectiva como objeto de estudio específico desde H. Bergson y M. Halbwachs, cuyas obras, escritas después de la primera guerra mundial, sentaron las bases de la sociología de la memoria—<sup>17</sup> y destacó el impacto sobre la percepción social de los eventos más traumáticos o trascendentes de la historia forjada a partir de la segunda guerra mundial, que bien podría ser denominada *historia del tiempo presente*, para centrar las claves de su extraordinario relieve actual:

Cette montée en puissance de la mémoire résulte également, peut-être même en, priorité, du poids des réminiscences et des séquelles toujours vivaces de la Seconde Guerre mondiale et des autres tragédies du XX siècle. Même la justice s'est muée, en Allemagne, en France et ailleurs, en tribunal "pour la mémoire", avec les procès tardifs menés contre d'anciens nazis et d'anciens collaborateurs.<sup>18</sup>

Parece evidente que las grandes tragedias colectivas del siglo XX (en especial, el Holocausto), la crisis de las sociedades rurales y campesinas y sus referentes culturales, la confrontación entre los grandes relatos, las migraciones masivas y traumáticas, la crisis de las ideologías, la fractura de las identidades (la búsqueda permanente de respuestas para curar heridas reales o imaginarias) y, en definitiva, la globalización como desenlace de un tiempo histórico convulso han replanteado las relaciones entre las personas y los colectivos con sus respectivos pasados y sus propias memorias.<sup>19</sup>

Las memorias compartidas del Holocausto han proporcionado los fundamentos de una nueva memoria cosmopolita, una memoria transnacional, que trasciende las fronteras étnicas y nacionales. Y en una era de incertidumbre histórica, estas memorias que ahora interactúan entre lo global y local se constituyen en *a measure for humanist*

<sup>16</sup> P. Nora, "Between memory and history: Les lieux de mémoire", en *Representations*, n° 26, spring 1989, p. 8.

<sup>17</sup> H. Bergson, *La pensée et le mouvant. Essais et conférences*, París, Presses Universitaires de France, 1946; *Matière et mémoire*, París, PUE, 1990; *Memoria y vida*, Madrid, Alianza, 1977. M. Halbwachs, *La memoria colectiva*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

<sup>18</sup> H. Rousso, *La hantise du passé*, París, Textuel, 1998, p.14

<sup>19</sup> J. Cuesta, *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX*, Madrid, Alianza, 2008, p.12.

*and ideological identification*,<sup>20</sup> para invalidar el estigma de banalidad atribuido a la *homogeneizadora* cultura de la globalización y resaltar que en el proceso de construcción del estado-nación moderno también se menospreció la cultura global, entonces representada por la nación política, al carecer ésta supuestamente de la riqueza y autenticidad de los valores y atributos de las sociedades preexistentes.

Esta nueva relación con la memoria o las memorias --contempladas en su función perceptiva de la historia— como eslabones de un nuevo presente del pasado, establecida bajo nuevos parámetros y entre actores un tanto desubicados, no redundaría necesariamente en el fortalecimiento de una conciencia histórica en el seno de una sociedad azotada por cambios vertiginosos, sino que, más bien, la aproximación a la verdad histórica se relega en bastantes ocasiones a un segundo plano:

En efecto, memoria y conciencia histórica pueden coexistir sin que su correlación e interdependencia sean necesarias ni enteramente discernibles, ni sus manifestaciones convergentes por obligación (...) Quienes claman por la preservación de la memoria de determinados hechos del pasado, no reclaman necesariamente una mejor investigación histórica de ellos. Quienes exigen su conservación y se lanzan a la “lucha por la memoria”, son, de forma destacada los portadores mismos de ella. Son los depositarios concernidos de forma directa por los hechos cuyo recuerdo permanente se reclama, sus beneficiarios o sus víctimas. En manera alguna queremos decir que ello afecte a la legitimidad de los valores rechazados, sino que esa reclamación implica la preeminencia de las pretensiones de retribución de la memoria sobre la verdad de la historia. Por ello puede llamarse a nuestra época la del testigo. La reclamación de la historia del aumento de conciencia histórica o de conciencia de la historicidad, aunque pueda serlo, sino que se incardina primariamente en la lucha por las identidades, las restituciones y reparaciones, por la “justicia sobre el pasado”, el reconocimiento de las diferencias y los protagonismos, el rescate del olvido y el desvelamiento de las biografías marginales<sup>21</sup>

De este modo, las culturas de la memoria tratan de lograr un futuro con memoria --para ello han puesto el énfasis en los derechos humanos, la identidad de las minorías y de género y la revisión del pasado— y se han significado, en muchas partes del mundo, en procesos democratizadores y de defensa de los derechos humanos, que buscan expandir y fortalecer las esferas públicas de la sociedad civil.<sup>22</sup>

La memoria desempeña en la actualidad distintas funciones sociales, entre ellas, como es sabido, la de reivindicación de un pasado que se quiere preservar y la conservación o reconstrucción de identidades, propósitos en los que difiere, como veremos, de la historia, definida como disciplina científica por su discurso crítico, objetivo y contrastable.

Para sintetizar las funciones sociales de la memoria colectiva -de las múltiples memorias colectivas adheridas a un sujeto a través de sus pertenencias o adscripciones, todas ellas en continua evolución, selectivas, limitadas, subjetivas, de textura realmente sinuosa-, estableceríamos un vínculo entre la facultad de reflejar el pasado y la capacidad de incorporar innumerables representaciones del mismo, encarnadas en distintas prácticas culturales, en especial conmemorativas y simbólicas, sin olvidar su importancia en la forja de identidades y en la transmisión del orden social y político vigente. Otros “trabajos de la memoria” necesitarían un análisis que aquí se reduce a

<sup>20</sup> D. Levi y N. Sznajder, “Memory unbound. The Holocaust and the formation of cosmopolitan memory”, en *European Journal of social theory*, 5 (1), p. 88.

<sup>21</sup> J. Aróstegui, *La historia vivida. Sobre la historia del presente*, op cit, p. 163.

<sup>22</sup> A. Huyssen, *En busca del futuro perdido*, México, FCE, 2002, p. 37-38.

una breve explicación, nos estamos refiriendo al silencio (piénsese en lo ocurrido en España durante la transición con respecto a la guerra civil y la posguerra: un silencio generoso, pero nunca un olvido) y al olvido en sí, que no se opone a la memoria como se cree,<sup>23</sup> pues la memoria es una forma de olvido y el olvido es una forma de memoria oculta.<sup>24</sup> El derecho al olvido es tan digno de consideración como el derecho a la memoria –Nietzsche ya advertía sobre la necesidad de liberarse de la abrumadora carga del pasado, aunque proponía una visión excesivamente utilitarista del mismo – y el equilibrio entre el derecho de las víctimas a olvidar y el del resto de los ciudadanos a saber propone un dilema muy de actualidad, sobre el que volveremos más adelante.

La memoria colectiva se compondría no sólo de recuerdos de individuos y colectivos (que nunca deben ser concebidos como la simple acumulación, o la suma total, de recuerdos de sujetos o grupos), sino que incluiría las construcciones y reconstrucciones del pasado constitutivo de la comunidad específica:

In today's societies, which no longer "societies of memory" (...), social memory refers no so much to living memory but to organized cultural practices supplying ways of understanding the world, and providing people with beliefs and opinions which guide their actions (...) Memory's essential role in social life is connected with the fact that "collective memory is part of culture's meaning-making apparatus"(...) Because the past is frequently used as the mirror in which we search for an explanation and remedy to our present-day-problems, memory is seen "as a cure to the pathologies of modern life".<sup>25</sup>

Y en este contexto, caracterizado por la casi desaparición de las "sociedades de memoria", de comunidades y grupos que poseían reservas de memoria –la absorción de la cultura campesina por el mundo urbano, el fin de sociedades que habían garantizado durante largo tiempo la transmisión de valores colectivamente recordados– y por la fragmentación de las memorias nacionales en pequeñas memorias (étnicas, políticas, sociales, culturales), hay que referirse necesariamente a una contradicción interesante, esto es, al fenómeno del creciente culto memorístico en un momento histórico en el que se está produciendo el colapso de las denominadas sociedades de *memoria*.

Además, si en occidente la conciencia del tiempo se proyectó durante siglos hacia el futuro, en cierto modo hacia la utopía, en la actualidad se asiste a un fenómeno en el que, por un lado, las sociedades, los ciudadanos considerados colectiva o individualmente, asumen la tarea de responsabilizarse sobre el pasado y, por otro, se acusa a la cultura de la memoria contemporánea de amnesia, anestesia o obnubilación.<sup>26</sup>

Esta contradicción, y este dilema subyacente, obedecen tal vez a una confusión conceptual. El interés actual por la memoria sería en realidad un interés por la historia. El historiador fue durante muchos siglos el depositario de la memoria, un intérprete que gozaba del monopolio de la misma, como habitual instrumento del poder. La "historia-memoria", y en especial su última encarnación, la "nación-memoria", legitimaba el orden político y social y se encargaba de transmitir los valores necesarios para preservarlo, desempeñando, por tanto, un papel pedagógico indispensable. Pero la

<sup>23</sup> T. Todorov, *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Paidós, 2008, p. 22

<sup>24</sup> A. Huyssen, *En busca del futuro perdido*, México, FCE, 2002, p. 23

<sup>25</sup> B. A. Misztal, *Theories of social remembering*, Philadelphia, Open University Press, 2003, p. 12-13..

<sup>26</sup> A. Huyssen, *En busca del futuro perdido*, op cit, p. 22.

legitimación por el pasado, por la historia en definitiva, ha cedido el paso ahora a la legitimación por el futuro,<sup>27</sup> mientras grupos e individuos siguen construyendo sus identidades a través de instrumentos como la memoria, que en el plano más profundo, el de las mediaciones simbólicas de la acción, se incorpora a la constitución de la identidad a través de la función narrativa.<sup>28</sup>

El advenimiento de la sociedad, en el lugar ocupado antes por la nación y los sentimientos nacionales, y la progresiva consolidación de la historiografía como ciencia han contribuido decisivamente a establecer diferencias entre historia y memoria, separando los planos de percepción confundidos durante tanto tiempo.

What we call memory today is therefore not memory but already history. What we take to be flare-ups of memory are in fact its final consumption in the flames of history. The quest for memory is the search for one's history.<sup>29</sup>

Si, además de lo dicho, observamos como se trasluce el carácter líquido de la modernidad, tal y como la define Zigmunt Bauman, lo que en buena lógica demandaría la dilatación de la memoria (la historia) frente a los trazos efímeros de nuestra realidad cotidiana, caracterizada por la aceleración de los cambios, la inestabilidad, la incertidumbre y la fractura del espacio, entenderemos mejor este viaje a la memoria de las “sociedades sin memoria”:

La “vida líquida” y la “modernidad líquida” están estrechamente ligadas. La primera es la clase de vida que tendemos a vivir en una sociedad moderna líquida. La sociedad “moderna líquida” es aquella en la que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en una rutina determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo.<sup>30</sup>

Un viaje que se podría explicar en función de factores como el miedo al olvido, el vértigo ante la posible desaparición de nuestras culturas, absorbidas por procesos complejos como la globalización, el desarrollo del ciberespacio o el inmenso poder de los medios de comunicación de masas.

P. Nora, en su descripción de los *lieux de mémoire*, ofrecía claves importantes a la hora de iluminar la contradicción expuesta anteriormente. Recurriendo a la paradoja:

The lieux de mémoire are fundamentally remains, the ultimate embodiments of a memorial consciousness that has barely survived in a historical age that calls out for memory because it has abandoned it. They make their appearance by virtue of the deritualization of our world(...) Musseuns, archives, cemeteries, festivals, anniversaries, treaties, depositions, monuments, sanctuaries, fraternal orders (...) they mark the rituals of a society without rituals(...) We buttress our identities upon such bastions, but if what they defended were not threatened, there would be no need to build then. Conversely, if the memories that they enclosed were to be set free they would be useless, if history did not besiege memory, deforming and transforming it, penetrating and petrifying it, there would be no lieux of memory.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> P. Nora, *Les lieux de mémoire*, Tomo 1, París, Gallimard, p. XXV

<sup>28</sup> P. Ricoeur, *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta, 2003, p. 116.

<sup>29</sup> P. Nora, “Between memory and history”, op cit, p.13.

<sup>30</sup> Z. Bauman, *Vida líquida*, Barcelona, Paidós, 2007, p. 9.

<sup>31</sup> P. Nora, “Between memory and history”, op cit, p. 12.

El peso del presente, su supremacía actual, influye probablemente en el interés desmesurado en la memoria y en la relativización de la historia. Todo se enfoca con los criterios del convulso presente y se deja de creer en la historia, prefiriéndose tratar con una percepción cambiante, selectiva, constreñida a lo que el grupo ha vivido, inconsciente de sus continuas deformaciones, vulnerable a las manipulaciones, abierto, a la dialéctica del olvido, compuesta de recuerdos de un pasado vivido o imaginado.

Un fenómeno colectivo, aunque psicológicamente sea vivido de forma individual: la memoria, vínculo que nos une al eterno presente. Un presente que todo lo ocupa e interfiere, como juez supremo, al que la memoria colectiva se adhiere mejor que al pasado, pues ésta es esencial para determinar cómo un grupo social se contempla a sí mismo,<sup>32</sup> y cuya omnipresencia, en cierto modo, induce a la sociedad a fijarse más en las memorias sectoriales que en la perspectiva histórica en sentido estricto.

Por otra parte, la pujanza de la historia del tiempo presente, una escuela historiográfica que tiene como objeto de estudio fundamental la historia vivida (las grandes tragedias del siglo XX han democratizado la historia y han hecho al individuo y al grupo conscientes de su papel protagonista), ha contribuido, sin pretenderlo, pues sus métodos y objetivos son legítimos y estrictamente científicos, a sobredimensionar la memoria, la fuente oral y el testimonio, el campo de batalla entre el historiador y el testigo.

Como síntesis de lo dicho hasta el momento en esta pequeña introducción teórica, en la que pretendemos establecer algunas precisiones conceptuales útiles para adentrarnos en el estudio de la memoria de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle, y partiendo de la lógica diferenciación entre las perspectivas de historia y memoria --que, sin embargo, no están netamente separadas, como atestigua la práctica de la historia del tiempo presente y su necesidad de contar con la *memoria vivida* como fuente o el desarrollo reciente de una historia social de la memoria--,<sup>33</sup> recurrimos de nuevo a P. Nora para dilucidar la situación actual de la memoria, o en otras palabras, el problema general de la historia en la actualidad:

Lo que vivimos desde hace veinte años es el paso de una memoria modesta, que quería hacerse reconocer de una cantidad de víctimas que querían que sus penas y sufrimientos fueran tenidos en cuenta, a una memoria que se pretende dueña de la verdad histórica, más que de otra forma de historia, y que está dispuesta incluso a quererles cerrar la boca a los propios historiadores. En 20 años, hemos pasado de la defensa del derecho a la memoria, a la defensa del derecho a la historia.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> M. McMillan, *The uses and abuses of memory*, Londres, Profile Books, 2009, p. 48.

<sup>33</sup> H. Rousso, *La hantise du passé*, op cit, p.23-24.

En este mismo sentido, para F. Bedarida la historia se sitúa en un plano exterior al acontecimiento, mientras la memoria permanece en su interior, pero ambas giran en torno a su percepción. La historia tendría como objetivo la verdad, la memoria la fidelidad, F. Bedarida, "La mémoire contre l'histoire", en *Histoire, critique et responsabilité*, Bruselas, Editions Complexe, 2003, p. 259.

P. Ricoeur da un paso más adelante y afirma el valor de la memoria como matriz de la historia, en *La memoria, la historia el olvido*, op cit, p. 118-119. Y, por su parte, C. Wright Mills considera que la tarea del historiador es mantener completo el archivo humano y le atribuye la representación de la memoria organizada de la humanidad, y esa memoria, como memoria escrita, es enormemente maleable: cambia de una generación a otra porque se añaden nuevas investigaciones basadas en nuevos hechos, documentos, objetos de estudio y surgen esquemas metodológicos e interpretativos diferentes, en C. Wright Mills, *La imaginación sociológica*, México, FCE, 1961, p.158.

<sup>34</sup> Entrevista a Pierre Nora en *La Nación* (Buenos Aires), 15-3-2006.

Y la imposición de una memoria oficial que trate de adueñarse de la verdad histórica a través de una determinada interpretación del pasado dictada desde el gobierno y las instituciones del estado, entrañaría, sin duda, graves riesgos, entre ellos uno nada desdeñable: el que la historia sea escrita por los legisladores y determinados hechos históricos se declaren “verdades intocables”, con lo que la investigación histórica se vería gravemente perjudicada por los criterios estrictos del presente, por las políticas de la memoria, mucho más maleables que el trabajo científico de los historiadores. Hasta el momento no se ha establecido una tipología clara de las clases de memoria estudiadas por las ciencias sociales, ahora por la historia. No existe consenso al respecto, algo, por otra parte, lógico y saludable. Probablemente, no sería pertinente establecer definiciones categóricas cerradas cuando en un mismo sujeto, individual o colectivo, confluye una encrucijada de memorias (individual, colectiva o social, y dentro de éstas, familiar, política religiosa...),<sup>35</sup> pero sí se echa en falta un esquema teórico más sólido que proporcionase claves de interpretación más coherentes y precisas.

Así, en muchos casos, se utilizan indistintamente expresiones como “memoria social”, “memoria colectiva” o “memoria histórica”, prefiriéndose esta última expresión a “conciencia histórica”, que denotaría un conocimiento reflexivo de las cosas y se distanciaria así de esa facultad de recordar, a veces mágica, inconsciente, espontánea y siempre demasiado subjetiva. En este sentido, Paloma Aguilar ha esbozado una tipología de memorias que puede resultar muy útil al investigador que se adentra en este campo. Esta autora establece, con carácter provisional, los siguientes tipos:

Recapitulando, en mi opinión, existen memorias individuales (las de los testigos o participantes en los hechos), memorias institucionales u oficiales (las impulsadas mediante políticas de la memoria, que pueden llegar a ser dominantes y tienden a ocupar un lugar privilegiado en el ámbito público) y memorias colectivas o sociales (en las que los miembros de un determinado grupo van construyendo relatos comunes sobre el pasado, partiendo del intercambio entre las memorias individuales y de la información acumulada del hecho en cuestión). En este último caso, los relatos que acaben recabando más apoyo serán los que se conviertan, por encima de una pluralidad de memorias sociales que siempre existirá, en memorias hegemónicas, que pueden llegar a competir, si son suficientemente compartidas, con las institucionales. Las memorias colectivas o sociales se irán convirtiendo en memorias históricas a medida que los testigos directos vayan desapareciendo. El uso metafórico del concepto de “memoria” está presente en todos los casos, salvo en el primero, el de la memoria individual<sup>36</sup>.

Nuestro recorrido tendrá como referencia el esquema conceptual propuesto, a modo de síntesis, por Paloma Aguilar Fernández y, a la hora de afrontar la compleja relación entre el historiador y la memoria histórica, contemplará las observaciones realizadas por Santos Juliá en el sentido de distinguir entre memoria autobiográfica y memoria histórica. Esta última no puede ser considerada depósito de memorias, ni ser interpretada como un modo de conocimiento objetivo. Se concibe como:

<sup>35</sup>J. Cuesta, *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX*, op cit, p.91

<sup>36</sup> P. Aguilar Fernández, *Políticas de la memoria y memorias de la política*, op cit, p. 63-64.

Un relato de memorias que han llegado al sujeto a través de generaciones de antepasados o testigos de los hechos, una representación narrativa del pasado y, por lo tanto, como materia de la historia.<sup>37</sup>

Según este mismo autor, estos múltiples relatos o representaciones narrativas del pasado, materia propia de la investigación histórica, deben ser tratados con cautela, tratando de eludir la capacidad seductora de la memoria:

Sí, en relación con la memoria histórica, al historiador le queda algún trabajo por realizar, no consiste en tratarla como memoria personal en cuanto la persona es miembro de una colectividad o identificarla con ella y convertirla en fuente o matriz de su trabajo, sino en documentarla y analizarla como relato construido por sujetos determinados –nunca por la sociedad o por la colectividad en cuanto totalidad o mayoría-- con el propósito de dar coherencia al hecho recordado y derivar de ahí un sentido para quienes lo “recuerda” sin haberlo vivido.<sup>38</sup>

Trascendiendo las imprescindibles y muy útiles aportaciones realizadas por la teoría de la memoria desde distintas disciplinas, la clave metodológica que explica el lugar de este capítulo en el conjunto de este trabajo estriba en contrastar las imágenes reveladas por una breve historia de la memoria (el recuerdo, la interpretación, que de una corta trayectoria política y de un tiempo histórico concreto perdura a través del tiempo), expresada en las representaciones narrativas de los acontecimientos más significativos de la vida de Pérez Carballo, con los resultados de una investigación historiográfica que necesariamente corregirá aquéllas desde una perspectiva científica, y a las que debería enfrentarse desde un principio con espíritu crítico y abierto.

Se intentará dilucidar, partiendo de una muestra suficiente pero sin pretensiones de exhaustividad, la memoria del legado político e intelectual de unas biografías relevantes. Biografías, memorias, sumergidas durante tanto tiempo en el olvido de los vencidos y expuestas a la vigencia de los mitos, ahora elevadas por la memoria cultural a metáforas de la joven República defenestrada, hecho que por sí sólo justificaría estas páginas e incluso el resto de la tesis doctoral. Y a la hora de tratar con los mitos, tan abundantes en el territorio de la memoria, como es sabido, no se nos debe ocultar el hecho de que lo real puede ser mitologizado de la misma manera que lo mítico puede engendrar fuertes efectos de realidad.<sup>39</sup>

Para ello examinaremos, desde un punto de vista diacrónico, distintos tipos de memorias: individuales y colectivas, pero siempre múltiples y parciales, entrecruzadas en la esfera individual y colectiva pero contenidas, al fin y al cabo, en el propio individuo –como afirma Jan Assman, “every individual belongs to numerous such groups and therefore entertains numerous self-images and memories”<sup>40</sup>--, convergentes sobre la imagen de un brillante líder estudiantil y promesa de la política que enfrentó, como gobernador civil, y desde semanas antes del estallido de la rebelión militar, una situación compleja que acabó con su vida y la de su esposa. Partiendo de la premisa de

<sup>37</sup> S. Juliá, “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en S. Gálvez (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria*. Dossier monográfico de *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 7, p. 4.

<sup>38</sup> *Ibid*, p. 10.

<sup>39</sup> A. Huyssen, *En busca del futuro perdido*, op cit, pp. 21.

<sup>40</sup> Jan Assman, “Collective memory and cultural identity”, en *New German Critique* nº 65 (1995), p. 127.



la dificultad de clasificar las tipologías de la memoria, problema no menos complejo que el derivado de extrapolar la definición o el concepto de memorias colectivas a partir de análisis o muestreo muy limitados, conviene detenerse especialmente en la interacción de las distintas memorias, más o menos marcadas por condicionantes de tipo ideológico, cultural o de género, y no transgredir las reglas sutiles de la memoria familiar.

Aunque con matices, se contemplará también la producción historiográfica, en especial la que sirve directa o indirectamente a una determinada ideología o a un régimen político como el franquista –las dictaduras utilizan a los historiadores *oficiales* para producir memoria hegemónica que las justifique y consolide en el terreno de la percepción social-- y de carácter *ensayístico* en general, como modos de expresión y fuentes de memoria. Aunque consideramos que el trabajo de los historiadores y sus libros puede constituir en ciertos casos un importante *vector de memoria*,<sup>41</sup> no nos ocuparemos en este capítulo de la historiografía científica, pues sus fundamentos metodológicos y su carácter autónomo, abierto constantemente al debate, no están destinados a moldear la percepción social o interpretar subjetivamente la historia, sino a iluminar certezas sin trascender, en la medida de lo posible, los códigos narrativos y científicos más rigurosos.

Nuestro enfoque se fundamenta igualmente en la premisa de que el conocimiento del pasado no es suficiente para comprender totalmente el presente, siendo preciso contemplar la *percepción presente del pasado* para obtener una visión más centrada y amplia del mismo:

Este “presente del pasado” es precisamente la memoria, y el análisis historiográfico de ésta permite conocer mejor los procesos que utiliza para estructurar la realidad presente sobre la que incide.<sup>42</sup>

No bastaría entonces con analizar las imágenes de Francisco Pérez Carballo en los relatos de memorias de miembros de distintas generaciones: imágenes que oscilan entre los retratos de un alumno brillante y líder estudiantil -después un gobernador decidido y enérgico en la defensa de la legalidad republicana- y las de un personaje advenedizo o ambicioso, apadrinado por Azaña y Casares para desempeñar un cargo de excesiva responsabilidad para su juventud y temple, sino que deberíamos discernir las razones de la perdurabilidad en el tiempo de ciertos acontecimientos y, sobre todo, de sus representaciones (o, en otros casos, de la ausencia delatadora de éstas).

En definitiva, nos centraremos el recuerdo del acontecimiento que estigmatizó a Francisco Pérez Carballo (la sublevación militar), que absorbió su imagen oscureciendo prácticamente el resto de su biografía, y en su interior se focalizará la figura del gobernador cuyo recuerdo ha quedado ligado inevitablemente a aquel trágico lapso temporal, bien sea por ser percibido como héroe o como figura secundaria bajo el ascendente de su esposa, Juana Capdevielle, bien por ser considerado rebelde a pesar de no haberse rebelado, un eco más de esa curiosa lógica de la justicia militar franquista, y al hecho de perder la vida como precio de su fidelidad a la República.

---

<sup>41</sup> H. Rousso, *The Vichy Syndrome*, op cit, p. 11.

<sup>42</sup> J. Cuesta, *La odisea de la memoria...* op cit, p. 48.

En esta labor, nos fijaremos también en los *portadores de memoria* o *memory carriers* (ceremonias, celebraciones regulares o irregulares, monumentos, imposiciones de nombres de calles) como los concibe H. Rousso en su obra de referencia, *The Vichy Syndrome*, tan relevantes en el debate social en la actualidad:

By “carrier” I mean any source that proposes a deliberate reconstruction on a event for a social purpose<sup>43</sup>.

La decisión de estudiar la huella de Francisco Pérez Carballo en las memorias de varios grupos e individuos parte necesariamente, recordemos, de la premisa de la existencia de una pluralidad de memorias parciales y no de una única memoria histórica o colectiva, por pequeño que sea el grupo portador en cuestión, fenómeno que en la izquierda alcanza un alto nivel de complejidad, agravado por la subjetividad natural y carácter extremadamente maleable de la memoria individual, expuesta a una multiplicidad de variables subjetivas. En este caso, sería interesante identificar relatos o interpretaciones compartidos por un número significativo de personas, que siempre serán subjetivos, cambiantes y estarán ligados a intereses políticos o a proyecciones de valores e imágenes de “cada presente” en el pasado, con vistas a construir o recuperar determinados símbolos y metáforas que pueden ser muy eficaces en la actualidad. Cuando lleguemos cronológicamente a los portadores de la memoria de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle en el contexto del reciente proceso de recuperación de la memoria histórica, podremos observar nítidamente este proceso, sobre todo en el contexto de la memoria cultural.

De cualquier modo, y haciendo abstracción de los problemas metodológicos y teóricos derivados de la transformación de la memoria en objeto de estudio historiográfico, lo esencial aquí es tratar de completar la biografía de Francisco Pérez Carballo con el análisis de la proyección y de la perdurabilidad en el tiempo o en el silencio de su figura y tiempo histórico concretos, tarea en la que los mitos y clichés establecidos pueden ser puntos de referencia muy útiles si contextualizamos cada uno de los niveles de percepción a lo largo de un necesario hilo cronológico que arranca con la muerte del gobernador civil de A Coruña. En otras palabras, nuestro objetivo es averiguar qué se recuerda y por qué, y cuál es la razón de que se construyan determinados mitos, silencios y olvidos, con el fin ulterior de contrastar esta memoria recuperada con los resultados de la investigación historiográfica de una biografía (cuya relevancia será subrayada, cuando no justificada, por su impacto en la memoria social o colectiva), que se expondrán en los restantes capítulos que conforman este trabajo.

---

<sup>43</sup> H. Rousso, *The Vichy Syndrome. History and memory in France since 1944*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, p. 218.

### **Los primeros días: mapa de la confusión, fábrica de mitos, imposición de olvido.**

*La Voz de Galicia* y *El Ideal Gallego* publicaron el 25 de julio de 1936 la noticia de la muerte de Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña. Una breve nota situada en la parte inferior de la tercera página de *La Voz de Galicia* daba cuenta de las ejecuciones del gobernador civil y de los oficiales de Asalto Quesada y Tejero, consumadas en la madrugada del día anterior, viernes 24 de julio.

Por su parte, *El Ideal Gallego* fue un poco más explícito en su información y añadió datos sobre la localización geográfica del lugar de la ejecución, la península de Punta Herminia, junto al cementerio y la Torre de Hércules, para finalizar con una significativa revelación: los tres ejecutados rechazaron el auxilio espiritual de tres sacerdotes desplazados a la cercana prisión de A Coruña.<sup>44</sup> Sin embargo, este último extremo fue desmentido al día siguiente (26 de julio) en las páginas del mismo diario, al que no le importó caer en la contradicción ante sus lectores con tal de transmitir la imagen humillante de un gobernador republicano arrepentido, suplicante, que imploró religiosamente el perdón para él y sus dos subordinados. Una imagen demasiado elaborada:

El confesor ofreció a los tres reos sus servicios. Los dos oficiales se negaron. El ex-gobernador lo aceptó, casi desde el primer momento. Confesó con gran fervor y agradeció tanto al confesor este ofrecimiento, que después de confesarse le abrazó y besó repetidamente. No sólo esto. Le pidió dos o tres veces que volviese a rogar a los de Asalto que se confesasen, ruego que cumplió el sacerdote pero, desgraciadamente, sin éxito. Pidió por último al confesor el ex gobernador Pérez Carballo que rezase por él toda la vida y así, arrepentido, y poseído de una conformidad que sólo el catolicismo sabe inspirar a los hombres, entregó su vida el que fue gobernador civil de La Coruña Sr. Pérez Carballo<sup>45</sup>

Es especialmente significativo el hecho de que ambos diarios se refirieran al fusilamiento de los tres funcionarios leales a la República como el cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal militar (*El Ideal Gallego* señalaba que era el primer fallo de *carácter gravísimo* dictado por los tribunales militares de esta provincia, se entiende), lo que implicaba la celebración de un juicio previo del que resultase una sentencia inculpatória. Este juicio, en principio, no llegaría a celebrarse debido, fundamentalmente, a la urgencia de los golpistas en cumplir las instrucciones tajantes de Mola, que instaban a la eliminación física de las principales autoridades civiles y militares republicanas contrarias al golpe militar –con lo que se pretendía un doble efecto, la deslegitimación y desmembración del sistema político vigente, a la vez que la

---

<sup>44</sup> Desde su inauguración en 2001, un monumento conmemorativo diseñado por Isaac Díaz Pardo y situado en el denominado *Campo da rata* –un megalito acompañado de dos bellos poemas de García Lorca y Carré Alvarellos, una foto de un fusilamiento de 1936 y nueve manchas rojas de pintura simbolizando la sangre derramada por las víctimas-- recuerda a todos los republicanos ejecutados en ese lugar, un auténtico *lieu de mémoire* del que hablaremos algo más al final del texto. El estado de conservación del mismo no es precisamente el más idóneo para una efectiva reivindicación de la memoria de las víctimas. Sin embargo, su imagen algo deteriorada podría revelar la metáfora perfecta para describir la falta de sensibilidad hacia las víctimas de la violencia franquista (y no sólo de ésta) que todavía hoy manifiestan determinados sectores de la sociedad española.

<sup>45</sup> *El Ideal Gallego*. 26-07-1936. La idea del arrepentimiento de Pérez Carballo ante la hora de su muerte, expresada en la asunción de culpas y la necesidad de ser perdonado, también la filtraría el general de farmacia Ángel Ramos, llegado a A Coruña como oficial de ese Cuerpo el mismo día, en su diario. Véase a este respecto, A. Altamira Ramos, *Diario de un general*, Visión Libros, 2011.

imposición del terror como medio de disuasión ante cualquier impulso de resistencia al golpe militar--, empezando por las más representativas, los gobernadores civiles.

En apoyo de este argumento subyace, obviamente, el hecho de que hasta el momento no se ha hallado ni la causa judicial ni ninguna otra prueba documental o testimonio sólido que avalase la existencia de un juicio previo, por lo que las informaciones de la prensa gallega deberían su inexactitud a imperiosas necesidades de propaganda y legitimación del nuevo régimen, impuesto desde aberrantes bases jurídicas y éticas.

En torno a los días 30 y 31 de julio, y desde un punto de vista muy diferente, las primeras células de resistencia que ya se habían formado en la ciudad de A Coruña repartieron una serie de octavillas dirigidas a la población tras los violentos sucesos vividos los días previos. En una de ellas, denominada *Boletín de información del Frente Popular* (con el encabezado, “dirigido al pueblo de La Coruña y en particular a los trabajadores”), se aseguraba que la sublevación sólo había triunfado en unas pocas ciudades además de A Coruña y se exhortaba a los partidarios del Frente Popular a sostener la “bandera de la huelga general”, mientras aguardaban la liberación definitiva. En uno de los párrafos de la misma, se elogiaba el comportamiento de los jefes militares, autoridades civiles y, en general, de todos los partidarios de la República que defendieron la voluntad democrática del pueblo español en la provincia:

Esa voluntad que tan gallardamente ha respondido y responde en todos los rincones del país a los intentos criminales de los facciosos, y que aquí en La Coruña se personificasen los valerosos hijos del pueblo, héroes inmolados bárbaramente por los jefes militares y fascistas: en el Gobernador Civil y los dos nobles y leales Jefes de Asalto.<sup>46</sup>

El 18 de septiembre de 1936, el diario madrileño *El Sol* publicaba una información referente a la violencia de la represión franquista en Galicia, de cuya intensidad daba cuenta la emotiva repulsa al derramamiento de sangre atribuida por el redactor al mismo arzobispo de Santiago, frente a las demandas de mayor dureza expresadas por oficiales sediciosos en el transcurso de un acto religioso. El titular de la noticia informaba de la muerte del gobernador civil de La Coruña y de su esposa, ofreciendo una versión de los hechos que, más allá de las inexactitudes vertidas en ella (la más obvia, el gobernador no fue fusilado en presencia de su esposa, afirmación debida sin duda al flujo de información fragmentada y caótica procedente de la zona sublevada), reflejaba la admiración hacia quienes se consideraban ya símbolos de la fidelidad a la República, ejemplos claros del sacrificio por una causa:

Conducta ejemplarísima fue la del gobernador civil de La Coruña, señor Pérez Carballo, y de su esposa, señora Capdevielle, que murieron víctimas de su fervor por la causa de la República. El gobernador y su mujer salieron a la puerta del gobierno desde el primer momento para distribuir armas a los obreros y dirigir personalmente la resistencia. El señor Pérez Carballo cayó prisionero y fue (sic) fusilado en presencia de su mujer. Esta, que se hallaba encinta de ocho meses, se vió atropellado (sic) brutalmente, y conducida después al hospital, murió allí, según se dice, víctima de los malos tratos recibidos. Unos soldados simpatizantes dijeron al autor de este relato que la infortunada señora recibió la visita de algunos oficiales monárquicos, quienes tras insultarla, le anunciaron

---

<sup>46</sup> Tomamos la cita de E. Grandío Seoane, *Anos de odio. Golpe, represión e guerra civil na provincia de A Coruña*, Diputación Provincial de A Coruña, 2007, p. 186-187. Según el autor, esta octavilla forma parte de la causa 198/ 37 del ATMT IV, p. 66b.

que le robarían el hijo, para apartarlo de “la mala educación de sus padres desnaturalizados”.<sup>47</sup>

Sólo un mes después de la muerte de Juana Capdevielle, ya había quien la situaba como gestora de las decisiones políticas adoptadas en el gobierno civil, líder de la resistencia legal contra los rebeldes, cuidadora de los heridos o, en especial, participante destacada en la lucha desencadenada el lunes 20 de julio, embarazada como estaba en la hora de su muerte (en eso sí que acierta el texto, aunque no de ocho sino de cinco meses), que aconteció semanas después del comienzo de la sublevación militar.

Esta versión estaba muy lejos de una realidad en la que la bibliotecaria madrileña se limitó siempre a acompañar a su marido en su primer destino fuera de Madrid y, en muy señaladas ocasiones, como sucedió en su viaje a Madrid en mayo de 1936 para entrevistarse con Casares Quiroga, a cumplir un papel de enlace de acuerdo a determinadas instrucciones. De este modo, se traslucía el impacto de la muerte de una mujer atractiva, intelectual, emparentada con la modernidad y, sobre todas las cosas, inocente —para los apologistas del franquismo su imagen se tornará en la de una agitadora involucrada en la “rebelión” contra el golpe de estado, para justificar así su suerte final—, al tiempo que, y esto es quizá lo más importante, se empezaba a soldar su memoria a la de su marido Pérez Carballo, tendencia aún no revertida totalmente en nuestros días, aunque ahora es la memoria de la bibliotecaria madrileña la que nos remite a la del gobernador y no a la inversa como sucedía en un principio.

A instancias de la Juventud de IR, *La Voz* publicó una información titulada *La heroica muerte del gobernador de La Coruña, Pérez Carballo*, que venía a rectificar las declaraciones efectuadas a varios periódicos madrileños por dos fugitivos procedentes de la ciudad gallega, en las que se criticaba la negativa del gobernador Pérez Carballo, en el momento de la sublevación, a armar al *pueblo*, medida aplazada hasta que llegase el momento oportuno. Rectificación dirigida contra el posible (seguro) daño que, bajo criterios políticos e ideológicos reforzados por la creciente división interna del ya de por sí heterogéneo bando republicano, la citada entrevista pudiera causar en la memoria de una figura que se quería recordar como la de un héroe sacrificado en la defensa de la estricta legalidad:

La Directiva de la Juventud de Izquierda Republicana nos dirige atenta carta en la que, como de las transcritas palabras pudiera inferirse que el gobernador de La Coruña no actuó con la decisión y energía del caso, nos ruega que hagamos constar que el Sr. Pérez Carballo murió heroicamente al frente del Gobierno Civil. Y por ser ello de toda razón,, atendemos gustosos al ruego<sup>48</sup>

Todo un síntoma, como veremos, de la adjudicación de la responsabilidad en el fracaso de la resistencia al golpe a los cargos de responsabilidad ocupados por los republicanos burgueses de Azaña y Casares, visto este último como perfecto culpable de la pasividad de las autoridades republicanas en los momentos claves de la rebelión militar —el silencio en el que se refugió hasta su muerte en nada le beneficiaría-, correlato en otro plano de la asunción de la defensa de la memoria de sus caídos por las organizaciones de procedencia de los mismos, en este caso la JIR.

<sup>47</sup> *El Sol*, 18-09-1936.

<sup>48</sup> *La Voz* (Madrid), 2-11-1936

En torno a las mismas fechas en las que *La Voz* publicó la información referida, ya se encontraba activa en el frente de Madrid una unidad militar que llevaba el nombre del último gobernador republicano de A Coruña. El Batallón *Pérez Carballo* fue creado como milicia de la Juventud de Izquierda Republicana en un acto de homenaje al compañero caído con honor, al *glorioso mártir de la lucha antifascista*, título honorífico concedido por sus propios compañeros,<sup>49</sup> y encarnó la memoria del que fuera dirigente de esta agrupación juvenil, cuya promesa de fidelidad a la República le condujo a una muerte que, a los ojos de tantos republicanos, otros evitaron a cambio de actitudes pasivas o, sencillamente, cómplices de los intereses de los rebeldes. Constituía la segunda unidad organizada por las Juventudes del partido de Azaña, precedida por el Batallón Madrid, formado mayoritariamente por campesinos madrileños, algo que contrastaba con la fuerte presencia de estudiantes entre las filas del *Pérez Carballo*.

En los primeros días de la guerra, una parte importante de las milicias que se constituían tomaban los nombres de héroes o iconos de la mitología revolucionaria, mártires políticos y destacados militantes de partidos y sindicatos (*Durruti, Primero de mayo, Ernest Tahelman, Condés...*), pero pronto, en función de las vicisitudes de la guerra, con los desdoblamientos, fusiones, disoluciones, traslados y otros cambios de carácter organizativo y humano sufrido por las distintos cuerpos, el romanticismo del inicio dio paso a una nomenclatura más pragmática.<sup>50</sup>

El hecho de que la Juventud de Izquierda Republicana, entre cuyos afiliados se hallaba una mayoría de estudiantes, le pusieran a su batallón de milicias el nombre de un antiguo dirigente político y estudiantil significaba algo más que un obvio reconocimiento a un destacado compañero muerto, puesto que grababa en la memoria colectiva de los milicianos republicanos el ejemplo a imitar, la dignidad de una actitud recta y comprometida con la defensa de la República, la resistencia *heroica* de un representante de la estructura gubernamental, del sistema político amenazado, frente a conspiradores y rebeldes. Una imagen positiva del gobernador y antiguo compañero que no será compartida, como veremos pronto, por las memorias de otros actores de los hechos, tanto militantes de los partidos estrictamente republicanos como miembros de organizaciones revolucionarias y partidos de izquierda. Faltaban entonces dos años y medio para una derrota que ya se percibía como casi inevitable y ya habría momento para concentrarse en la búsqueda de culpables, chivos expiatorios a los que imputar pasividad, negligencia e incapacidad. Y el gobierno de republicanos tibios del Frente Popular, con Casares a la cabeza y toda su cohorte integrada en las estructuras político-administrativas del Estado, ofrecería un inmejorable blanco para obtener explicaciones rápidas, fáciles y convincentes y, de paso, saldar determinadas deudas políticas con el republicanismo burgués legalista que representaban Azaña y los suyos.

No obstante, ya en los primeros días de la contienda, la prensa de izquierdas, con *El Socialista* a la cabeza, empezó a señalar la actuación de los gobernadores civiles en los

---

<sup>49</sup>Véase una nota informativa de la Juventud de IR (JIR), que exhortaba a la juventud republicana a incorporarse al Batallón, publicada en *La Libertad*, 24-10-1936.

<sup>50</sup> C. Engel, *Historia de las brigadas mixtas del ejército popular de la República. 1936-1939*, Madrid, Almena Ediciones, 2005, p.8; M. Alport, *Historia del ejército popular de la República. 1936-1939*, Barcelona, Crítica, 2007, p. 37-38.

días críticos como decisiva, por general ineptitud, en el triunfo de la sublevación militar, pues en lugar de actuar con determinación (léase la entrega de armas al pueblo, en la creencia de que éstas serían utilizadas únicamente para defender la legalidad vigente), dudaron y, consecuentemente, se vieron totalmente desbordados por la situación, faltos de experiencia y paralizados por la descoordinación con Madrid.

Un reportaje periodístico, publicado en diciembre de 1936 por la revista *Estampa*, bajo el título “Los estudiantes del Pérez Carballo”, incidía en la imagen del *héroe-mártir*, añadiendo matices que apuntaban entonces al proceso de elaboración de un mito, de una leyenda necesaria y oportuna, y nos acercaba a los integrantes de este Batallón de las Juventudes de Izquierda Republicana, en su mayor parte estudiantes.<sup>51</sup> El documento resulta muy interesante tanto por la información que aporta sobre el Batallón y las Juventudes de IR, como por la realidad latente que refleja, el uso compartido --se entiende que por parte del partido y, de forma entusiasta, según se ve en los testimonios recabados, de los miembros de las Juventudes y del Batallón-- de la memoria y de la historia más recientes en función de la lectura más adecuada para afrontar una situación crítica, el recurso al lenguaje de los mitos revolucionarios y románticos. Se trataba de fijar un modelo a seguir en un momento donde mantener alta la moral de los hombres y, en especial, captar nuevos reclutas se antojaba, si cabe, un factor decisivo en la continuación de la lucha. Y la huella de un hombre que demostró su fidelidad a la República, al precio de su propia vida, no podía pasar desapercibida:

--Pérez Carballo era un gran estudiante, que a sus veinticinco años era gobernador de La Coruña. Ahí le cortó la vida su sino. Estaba arengando al pueblo desde un balcón de su gobierno cuando una bala lo mató. Murió en estampa revolucionaria, cuadro de muerte (...), con la mano levantada, de haber hecho el último ademán de orador, sangre inmediatamente pintada al pecho, y abajo, numerosa multitud (...) Sin embargo, esto no ocurrió en el 1800. Fue en 1936, en julio, Como ya te he dicho, Pérez Carballo ocupaba el puesto de gobernador civil en La Coruña. Estalló el movimiento y él le dio la cara. Otros gobernadores se vendieron al enemigo. Ya recordará...

Hay una lluvia menudita que no nos afecta. Es allá fuera, donde las gentes, pisoteando barro, tienen que aguantarla (...) <sup>52</sup>

A la estampa heroica que tergiversa intencionadamente la realidad para enfatizar su significado, le seguía la afirmación orgullosa de la valentía del republicano fiel al gobierno legalmente constituido, en contraste con la defección de otros gobernadores civiles y altos funcionarios del Estado republicano. Un poco más adelante, entre elogios superlativos a la figura de Pérez Carballo como líder estudiantil y promesa de la política republicana --objetivamente, un valor emergente entre las filas del republicanismo y aun del conjunto de la vida política nacional-, asomaba nuevamente, de forma un tanto súbita, la leyenda:

--Y diga usted, ¿trató íntimamente a Pérez Carballo?.

--No; yo no tuve ocasión. Murió, como le digo, cuando tomaron La Coruña los facciosos, peleando bravamente por la causa hasta el último momento y alentando a defenderla. si no hubiera acabado tan pronto hubiera tenido España la más alta figura de los tiempos. Aún casi niño pronunció un discurso, contestando al de un ministro en una asamblea, que le ganó la admiración incondicional de la U. F. E. Él era directivo de Unión Federal de estudiantes

<sup>51</sup> Véase, “Los estudiantes del Pérez Carballo”, en *Estampa* (Madrid), nº 463 (5-12-1936).

<sup>52</sup> *Ibid*, p.1

Españoles. Nosotros teníamos un batallón y le pusimos su nombre...Estecha ¿Tú trataste a Pérez Carballo?...Aquí le presento, compañero: Santiago Estecha, secretario de propaganda de nuestras Juventudes de Izquierda Republicana.

--Te he oído contar --dice el secretario-- que nuestro Pérez Carballo murió...Quizá no haya muerto. Parece que le recogieron herido y que vive.

--¿Es posible?. No sabía...

--Claro; no estás enterado. Acabas de llegar del frente. Tú, como tantos otros compañeros, crees muerto a nuestro héroe. Pero, verá usted, una tarde estaba yo aquí, trabajando, y se presentó un compañero con aire de gran desolación. Se dejó caer en esta butaca y no hacía más que balancear la cabeza y estirar el labio inferior, con ese aspecto del que sufre una catástrofe irremediable. ¿qué te pasa, hombre?", le dije. "Que acabo de encontrarme con la madre de Pérez Carballo", me explicó. "¿Y qué le has dicho?". No me he atrevido a decirle nada. ¡Si vieras con el ansia que me pedía noticias de su hijo!...A la madre que le desaparece un hijo no se le puede dar a cambio una noticia de dos o tres palabras. Quiere abundancia de datos y referencias sobre lo que perdió (...) ¿Qué le iba a decir a esa pobre madre? A nosotros nos basta su epitafio de héroe. ¿Pero qué más sabemos...". Esto me impresionó tanto, que mandé abrir una información amplia del entrañable Pérez Carballo. Que me suministraran todos los datos posibles de su actuación hasta el último minuto de morir, sin perdonar ni la minucia menos aparente relacionada con él, y...nunca me alegraré bastante del resultado de este empeño. ¡Pérez Carballo vive!. Por el momento no podemos asegurarlo, pero no son suficientes los informes que poseemos, y que ni decir tiene se los hemos comunicado a su pobre madre. Sí, compañero sí, Pérez Carballo culmina en esa epopeya que tú acabas de contar al periodista. Así fue exactamente, como te lo he contado, sólo que no murió. Parece que lo recogieron herido.<sup>53</sup>

Si bien es posible que el fusilamiento de Pérez Carballo no fuese conocido en zona republicana de forma inmediata, por las dificultades obvias en las comunicaciones, es muy dudoso que casi cuatro meses después de los suceso de julio de 1936 no hubiese trascendido al menos la noticia estricta de su muerte, verificable en los testimonios de los huidos de zona nacional que presenciaron o tuvieron noticias directas de los hechos o en la misma prensa gallega, ya controlada por los rebeldes, aunque no se puede subestimar la tendencia a elaborar relatos paralelos con fines estratégicos en medio de una guerra civil, donde la confusión gobernaba especialmente los procesos de información. Tal vez pesasen más necesidades de propaganda -en el sentido de realzar la mística de un héroe regresado con el fin de elevar la moral de los soldados y desconcertar a los observadores del enemigo-, o la misma compasión por una madre afligida a la que, seguramente, se le haría llegar la revista, en la intención de un texto que, al margen de la literatura que rezuma, parece obedecer la estructura de un guión perfectamente concebido. De cualquier forma, las hipotéticas funciones propagandísticas de este documento no pueden menoscabar el valor de una imagen real (la decidida respuesta del gobernador Pérez Carballo al golpe de estado) que estaba siendo insertada en la memoria de un grupo de jóvenes estudiantes, soldados republicanos en ciernes, y que, en el futuro, cuando las circunstancias demandasen un tiempo de reflexión para depurar responsabilidades, podría ser matizada o, directamente, ignorada, debido a razones no siempre relacionadas estrictamente con la política.

El resto del reportaje se refirió en sí al Batallón *Pérez Carballo* (su composición, emplazamiento y ubicación en el frente) y a la Juventud de Izquierda Republicana, que utilizaban un viejo palacio situado en la calle Recoletos de Madrid como oficinas y sede

---

<sup>53</sup> Ibid, p. 1-3.



de su Secretaría de Propaganda, y se centró en un grupo de estudiantes, hombres y mujeres, bastante alejados del arquetipo marcial del soldado de un ejército profesional, que abundaba en el bando contrario y se quería emular en el propio. Tal vez, es tan sólo una hipótesis, ese fuese el mejor homenaje posible a la memoria de Francisco Pérez Carballo:

Después me enseñan el palacio. Aquí se han venido estos muchachos de Izquierda Republicana, a llenar toda la planta baja de carteles de guerra, ficheros y correajes. Aquí han instalado su secretaría de propaganda de las J. I.R.(...) Entro y salgo por salones de mármoles y dorados, vacíos de vida. Aquí sólo tienen las juventudes de las J.I.R sus oficinas. El cuartel está en Doctor Esquerdo, 95. El Batallón Pérez Carballo lo constituyen unas trescientas unidades, en su mayoría estudiantes. Una compañía de él se encuentra actualmente en uno de los frentes de Madrid, donde está hace cuatro días peleando con ardor, al mando del capitán Losada. Compañía y media quedan acuarteladas en Doctor Esquerdo.

La estudiantina antifascista ostenta ya su gruesa orla de luto: varias bajas de responsables, entre ellas, las de cuatro directivos nacionales y numerosas de elementos de las Juventudes.

Después de subir y bajar suntuosas escaleras, rematadas en estatuas, Manzano, el fotógrafo, invita a retratarse a varias milicianas. Una pone al principio reparos, pero poco después la veo dar cara a la máquina, bien sonriente y satisfecha. Era que no encontraba su gorra de miliciano y no quería retratarse a pelo.

--Que se vea --dice-- que yo soy también del Batallón Pérez Carballo.<sup>54</sup>

Un cartel propagandístico difundido por las Juventudes de Izquierda Republicana en 1936, destinado a la captación de nuevos reclutas para el Batallón *Pérez Carballo*, ilustra la llamada a la defensa de la República dirigida a los jóvenes republicanos del partido de Azaña frente al enemigo común. La imagen habla con sencillez el lenguaje expresionista y simbólico del arte para una guerra contra el invasor fascista y extranjero, en este caso nazi: el avión con la esvástica en su cola que sobrevuela el rostro doloroso de una mujer, alegoría de la República en llamas, se enfrenta a la leyenda “¡para acabar con esto!”, que ocupa el centro de la imagen, sobre la propia sombra del aparato y el contorno sur del mapa de España. La parte inferior del cartel, fuera de la imagen, se reserva para exhortar a la población a alistarse en el Batallón *Pérez Carballo* de la Juventud de Izquierda Republicana, cuyas oficinas de alistamiento se encontraban en el Paseo de Recoletos de Madrid.<sup>55</sup>

Aunque las medidas legislativas que significaron la desaparición de las milicias culminaron con el decreto de 20 de octubre de 1936 (complementado eso sí con varias medidas posteriores), que estableció el fin legal de estas unidades, el proceso de incorporación de los batallones de milicias a las brigadas mixtas recién creados se prolongó en el tiempo. El reportaje citado anteriormente, publicado en diciembre de 1936, no mencionaba expresamente ningún vínculo con la 75 Brigada Mixta, unidad en la que posteriormente se encuadraron las milicias de las Juventudes de Izquierda

<sup>54</sup> Ibid, p. 3-4.

<sup>55</sup> Cartel titulado: “Para acabar con esto: alistaos en el Batallón Pérez Carballo de las Juventudes de Izquierda Republicana”, editado por la Universitat de Barcelona en la colección *Cartells del Pavelló de la República*. Se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: [http://209.85.229.132/search?q=cache:6OuI8mZfQrAJ:mdc.cbuc.cat/cdm4/item\\_viewer.php%3FCISOROOT%3D/pavellorepu%26CISOPTR%3D819%26CISOBBOX%3D1%26REC%3D4+cartell+batall%C3%B3+B3+P%C3%A9rez+carballo&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es](http://209.85.229.132/search?q=cache:6OuI8mZfQrAJ:mdc.cbuc.cat/cdm4/item_viewer.php%3FCISOROOT%3D/pavellorepu%26CISOPTR%3D819%26CISOBBOX%3D1%26REC%3D4+cartell+batall%C3%B3+B3+P%C3%A9rez+carballo&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es)

Republicana, aunque es lógico pensar que su incorporación a esta brigada se produciría en consonancia con la política de militarización paulatina adoptada por las autoridades republicanas.

Nacidas, como es sabido, de una reforma tímida y escalonada que, en contra de los fantasmas del antimilitarismo dominante al principio de la guerra en la izquierda revolucionaria y aun en amplios sectores del republicanismo burgués, las Brigadas Mixtas absorbieron a las milicias de partidos y sindicatos para integrarse a continuación en las divisiones y cuerpos de ejército correspondientes. Su creación respondió a la necesidad de regularizar unidades dispersas no militarizadas para construir un verdadero ejército popular, eficaz y disciplinado, capaz de afrontar una guerra larga y encarnizada frente a un enemigo superior en todos los sentidos. Un nuevo ejército, más organizado, distanciado del caos inicial de milicias de sindicatos y partidos obreros y republicanos actuando descoordinadamente hasta ser devoradas por la marcha del ejército franquista, no sin la multiplicación de estériles actos de valor por parte de los milicianos. Se trataba, en definitiva de una situación límite sobre la que incidió la equivocada y, al mismo tiempo, comprensible decisión de disolver los restos del ejército anterior al golpe de estado y hacer la guerra con el “pueblo en armas”, perdiendo con ello la oportunidad de aprovechar la estructura organizativa preexistente y enajenándose, en consecuencia, a buena parte de los oficiales indecisos o apolíticos.

Sería lógico pensar, en descargo del gobierno de la República, que si el sistema político y legal vigente hubiera sido lo suficientemente fuerte como para evitar la entrega de armas a las masas, también lo hubiera sido para dominar una rebelión militar mal planeada que estalló prematuramente, fracasó donde se preveía que iba a triunfar y triunfó donde parecía destinada al fracaso.<sup>56</sup>

Las brigadas mixtas estaban constituidas, normalmente, por cuatro batallones de infantería, una compañía de reserva y una serie de unidades complementarias (artillería, zapadores, blindados, caballería, intendencia, sanidad, entre otras). En concreto, la 75ª, a la que se adscribió finalmente el Batallón Pérez Carballo, junto a otras unidades de él dependientes como el Batallón *Jesús Gay*, participó en el asedio del santuario de Santa María de la Cabeza y en el frente de Madrid, donde se significó en el asalto al cerro Garabitas. Entre sus jefes, aparecen nombres como Melero, Ludeña, Vellido Tardío o González Obarro, mientras que por comisarios políticos tuvo a Eleuterio Dorado Lanza, José de la Vega y Alfonso Reyes Senén (IR). Su medio de difusión era el boletín “Balas Rojas”.<sup>57</sup>

Paralelamente a la constitución del Batallón Pérez Carballo, la Secretaría de Cultura de la Juventud de Izquierda Republicana creó el colegio-academia Pérez Carballo, centro de enseñanza gratuita destinado a la educación de jóvenes de ambos sexos mayores de dieciséis años, situado en la calle de la Cruz de Madrid, concretamente en el número 21.<sup>58</sup> De acuerdo con esta diferente orientación de los lugares de la memoria dedicados a la figura del gobernador republicano sacrificado --igualmente eficaces,

<sup>56</sup> M. Alport, *El ejército popular de la República. 1936-1939*, op. cit, p. 33.

<sup>57</sup> C. Engel, *Historia de las brigadas mixtas del ejército popular de la República. 1936-1939*, op cit, p. 103-104.

<sup>58</sup> *La Libertad*, 17-7-1937.

dado el contexto bélico imperante, en otros planos de estructuración de una sociedad civil abocada por igual a la lucha y al activismo ciudadano--, funcionaba en Madrid, a mediados de 1937, el grupo *Pérez Carballo del Socorro Rojo Internacional*,<sup>59</sup> organización de carácter filantrópico y político creada por la Komintern en 1922, cuya actividad en España contribuyó de forma notable, trascendiendo el sesgo ideológico inicial hacia una efectiva vertebración de una red solidaria internacional, al reforzamiento de los servicios sanitarios y sociales republicanos (creó numerosos hospitales, dotándolos de medios técnicos y humanos, así como bibliotecas) y al apoyo material y humanitario a las víctimas de la guerra, en especial a niños y huérfanos.

Por su parte, los mismos testigos y protagonistas de los hechos acontecidos al comienzo de la sublevación militar en Galicia, y en concreto en A Coruña, sintieron la necesidad de llevar a la escritura sus experiencias personales o, en su caso, la visión de unos hechos, de un golpe militar victorioso que se tradujo de inmediato en una durísima represión en una zona alejada de los campos de batalla, contemplada desde diferentes perspectivas ideológicas.

En 1938, fue publicado en París *Galicia bajo la bota de Franco*, subtítulo “episodios sobre el terror blanco acaecidos en las provincias de Galicia, contados por quienes los han vivido”, de autor desconocido en principio y bajo el sello editorial *Jean Flory*, aunque, en realidad, se intuye una doble autoría: Luis Seoane sería el autor de la parte del libro dedicada a A Coruña y el socialista Manuel Domínguez Benavides de la referida a Pontevedra, quedando las demás provincias gallegas excluidas del relato. El libro, basado en una selección de testimonios relativos a la represión en las provincias de Pontevedra y A Coruña, fue publicado en castellano y francés por varias editoras, cambiando de título en la otra edición parisina (*Lo que han hecho en Galicia*) y en la realizada en Buenos Aires (*Galicia mártir: episodios del terror blanco en las provincias gallegas*) y tuvo una gran difusión en los medios del exilio.<sup>60</sup>

La segunda parte de esta camaleónica obra se ocupa de la gestación y desarrollo del golpe militar en la provincia de A Coruña desde el viernes 17 de julio, fecha de su comienzo a escala nacional en Melilla, cubriendo también la secuencia completa de la sublevación en la capital, la ciudad más importante de Galicia desde el punto de vista de su centralidad en la estructura política, administrativa y militar del Estado en esta Comunidad, en la que el Gobierno Civil era el eje sobre el que se asentaba la amenazada legalidad republicana.

---

<sup>59</sup> *La Libertad*, 1-8-1937.

<sup>60</sup> Para poner un poco de orden, detallamos a continuación las ediciones publicadas en castellano:

--*Galicia bajo la bota de Franco. Episodios sobre el terror blanco acaecidos en las provincias de Galicia contados por quienes los han vivido*, París, Jean Flory, 1938.

--*Lo que han hecho en Galicia*, París, Ediciones España, 1938.

--H. Quijano (pseudónimo), *Galicia mártir. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas*, Buenos Aires, Neos, 1938.

Las aclaraciones sobre este particular figuran en el prólogo de Carlos Fernández Santander a la reedición, a cargo de Alvarellos Editora (Santiago de Compostela, 2005), de la obra original impresa bajo el pie editorial Jean Flory.

Por otra parte, fragmentos de *Lo que han hecho en Galicia*, con ligeras y significativas modificaciones en algún caso, fueron publicados por la revista *Facetas de actualidad española*, en sus números de julio y agosto de 1938.

Desde estas páginas se elogiaba, con algunos matices que afectaban al supuesto ascendente que su esposa Juana Capdevielle poseía sobre él, la actuación de Pérez Carballo, de quien se destacaba su actitud firme y decidida al oponerse a la intención del general Salcedo, jefe de la VIII división militar, de declarar el estado de guerra --según la versión del autor, el gobernador amenazó a Salcedo con armar al pueblo si esto ocurría, retractándose este último de su posición inicial a cambio de garantías en materia de orden público--; su cautela al disponer medidas especiales para recibir al jefe de las fuerzas de la Guardia Civil en A Coruña, pues temía un acto de traición por parte de los mandos de este cuerpo; su esfuerzo por evitar un derramamiento de sangre innecesario, al tratar de que la sublevación abortase en los cuarteles, tarea para la que contaba con elementos leales en el interior de las unidades militares, y, en definitiva, su enérgica decisión de resistir hasta el último momento.<sup>61</sup>

Junto a esta visión un tanto idealizada de la actuación del gobernador Pérez Carballo, subyacían, como decíamos, algunos matices, que al margen de las posibles inexactitudes en el relato de los acontecimientos, debemos contemplar con ciertas reservas dado el carácter propagandístico del texto: se carga toda la responsabilidad en la traición, vacilaciones o actitud manifiestamente pasiva de agentes de orden público --el comandante de Asalto Quesada no sale muy bien parado--, militares y guardias civiles, en estos dos últimos casos con algo más de lógica.

Con respecto a Juana Capdevielle, se observa una nueva interpretación que le atribuye a la esposa del gobernador un claro papel protagonista en el interior del Gobierno Civil (teoría esbozada desde un primer momento, como hemos visto ya, y posteriormente reelaborada en sucesivas versiones por escritores de diferentes ideologías), al punto de insinuar la enérgica actitud de la esposa del gobernador como un factor decisivo para que Pérez Carballo y el resto de los defensores de la legalidad republicana venciesen las dudas sembradas entre ellos por las amenazas y coacciones de los militares golpistas y adoptasen una posición más firme y activa contra el golpe militar, pues se dice en el texto, de forma telegráfica y un tanto confusa eso sí, que fue la “mismísima mujer de Pérez Carballo” quien cortó la comunicación telefónica en la que se estaba conminando al gobernador a rendirse, espetándole al portavoz de los rebeldes que ella no hablaría con traidores.<sup>62</sup>

La percepción del ascendente de Juana Capdevielle sobre su marido es, con toda probabilidad, una exageración si lo situamos fuera de la esfera privada, careciendo de fundamento la leyenda acuñada en este sentido por algunos escritores y propagandistas de ambos bandos. Si realmente existió, le habría sido difícil trascender el espacio íntimo de la pareja, dado el carácter serio y reservado de ambos (al margen de que a Juana se le atribuya, con más o menos razón, un carácter extrovertido y una vitalidad especial) y las estrictos límites impuestos entonces a los servidores públicos por el imaginario colectivo --el republicano incluía también, como herencia del romanticismo tardío, el honor, tan fuerte como el deber de defender la ley y la República--, a pesar de que las especiales circunstancias atravesadas dentro del Gobierno Civil podrían dar pábulo a

---

<sup>61</sup> *Galicia bajo la bota de Franco (...)*, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2005. p. 181-193.

<sup>62</sup> *Ibid*, p. 189

interpretaciones que expresan más la mentalidad atávica y los prejuicios ideológicos del observador (el propagandista franquista bebe directamente en las fuentes de la sublevación militar) que la propia realidad observada.

Tal vez el aura de modernidad de Juana, una intelectual republicana dedicada plenamente al mundo de la cultura desde el punto de vista de su formación y trayectoria profesional,<sup>63</sup> y su impacto sobre una sociedad poco sensible a los nuevos roles que la mujer empezaba a demandar; su mal interpretado papel en la desarticulación o denuncia del complot que se había urdido contra la vida del gobernador poco después de tomar posesión de su cargo --fue la encargada de viajar a Madrid para entrevistarse con Santiago Casares Quiroga como parte de una estrategia que no decidió unilateralmente y que le dio un protagonismo que nunca buscó<sup>64</sup>--; o, sencillamente, el ánimo de los apologistas de la sublevación militar de justificar de alguna manera su terrible asesinato, describiéndola como instigadora de la resistencia al alzamiento, metralleta en mano --al tiempo que se subrayaría la “sumisa” actitud de un débil e indeciso Pérez Carballo-- son, todos ellos, factores que propiciasen la confusión generalizada en este punto. Es

---

<sup>63</sup>Funcionaria por oposición del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (1930), Jefa de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central (1933), además de socia bibliotecaria del Ateneo de Madrid y tesorera de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliófilos de España (donde colaboró, formando parte del Seminario de Biblioteconomía de la Universidad de Madrid en la organización de un servicio circulante de lectura para los enfermos de los hospitales Clínico y de San José y de Santa Adela de la Cruz Roja), Juana Capdevielle no mostró adscripción ideológica alguna más allá de su fe en la obra reformadora de la República, especialmente visible en el mundo de la cultura. y la educación en España. Como parte de su actividad intelectual, presentó ponencias y comunicaciones a varios congresos científicos. En concreto, durante la celebración de las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas (21 de abril al 10 de mayo de 1933), leyó la ponencia titulada “El problema del amor en el ambiente universitario”, texto donde se hacía una reflexión sobre el modo en que su generación se enfrentaba al amor, el matrimonio y la vida sexual, proponiendo la aceptación sin traumas de los prejuicios culturales y religiosos inherentes a la educación recibida como paso indispensable para combatir el desconcierto en que, en su opinión, estaba sumida una parte de la juventud española.

Entre numerosas citas literarias, cinematográficas y filosóficas, hizo explícita su sincera admiración por Ortega y su teoría de las generaciones y por Marañón, de quien destacó el concepto de la “amistad amorosa”, refutó de manera elegante la tesis de Ramón Séndler en torno a la vuelta al instinto como respuesta a los tabúes culturales y religiosos y expreso su orgullo por ser mujer.

Del mismo modo, se pronunció en contra del donjuanismo y del matrimonio decimonónico, a los que opuso la preferencia por la complicidad intelectual frente a la atracción física, la paternidad responsable y la búsqueda de un cierto equilibrio espiritual en la vida. La lectura atenta de este discurso, culto, reflexivo y lleno de sensibilidad --aunque, desde una perspectiva actual, parezca un tanto ingenuo--, nos revela a una mujer inteligente y alejada conscientemente de todo extremismo. En E. Noguera y L. Huerta, *Libro de las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas: Genética, eugenesia y pedagogía sexual*, Vol II, Madrid, Javier Morata, 1934, p. 274-292.

<sup>64</sup> La presencia de Juana Capdevielle en los momentos trágicos que se vivieron en el Gobierno Civil hasta poco antes de iniciarse la acción militar contra el mismo, algo que pudo inducir, por extraño que parezca, a algunos testigos de una u otra significación política a exagerar su papel en los hechos, sobre todo en cuanto a los procesos de toma de decisiones que se dieron en ese lugar, tendría una explicación más sencilla y menos capciosa: J. Capdevielle vivía en ese lugar junto a su marido, concretamente en una vivienda habilitada en el último piso del Gobierno Civil, y, por lo tanto, se hacía más visible y compartía con él algunas obligaciones de su cargo de una forma más directa, dada la delgada línea que separaba el ámbito público del privado en estos casos. En concreto, varios testigos directos afirman que en hasta su salida del edificio, lunes 20 de julio, día del inicio de la sublevación en A Coruña y del asalto al Gobierno Civil, auxilió a Pérez Carballo en algunas ocasiones, relevándolo para permitirle unas horas de sueño y ejerciendo mientras tanto a modo de secretaria personal, seguramente para tomar nota de las incidencias registradas en ese lapso de tiempo, durante los acontecimientos dramáticos vividos hasta su salida del edificio a instancias del gobernador, pero, como afirman la mayoría de los testigos directos de los hechos, su papel nunca tuvo el relieve político personal pretendido por determinados autores.

necesario advertir que las versiones sobre la influencia de Juana Capdevielle en algunas decisiones adoptadas por el gobernador civil se retroalimentan mutuamente, sin duda, desde polos ideológicos opuestos, que, como se verá en el capítulo VI, arrancan, de forma más o menos consciente, desde un mismo origen: las declaraciones de los oficiales de la Guardia Civil, encabezados por Florentino González Vallés –obsesionado con la figura de Juana Capdevielle, a la que responsabilizó del fracaso del *putsch* de abril-, en el contexto de las causas militares instruidas contra los defensores de la legalidad republicana (y también contra los “dudosos”). Se retroalimentan –decimos- y coinciden en la obediencia a un prejuicio de género perfectamente asumido en el proceso judicial o intelectual de depuración o imputación de responsabilidades políticas o “criminales”.

En cualquier caso, parece difícil que Juana Capdevielle llegase a suplantar las funciones del gobernador en la manera en que algunos testimonios y autores reflejan (cuya influencia se puede percibir en la actualidad en algunas obras nada desdeñables), encontrándose en avanzado estado de gestación y corriendo el riesgo de dañar o perjudicar seriamente la credibilidad de su marido, cuya proyección política era entonces evidente. Téngase en cuenta que por muy graves que fuesen los sucesos de aquellos días, y aún más su proyección en una guerra incivil y una posterior dictadura – desde nuestra perspectiva es muy fácil medir todas las variables y elaborar teorías ad hoc, pues conocemos el desenlace y consecuencias de los hechos--, los actores de los mismos los vivieron como su presente y no pudieron predecir en tiempo real, al menos en toda su magnitud, tan dramático final para ellos (en especial, para el matrimonio Pérez Carballo) y para la República.

No tardó el recuerdo del gobernador civil de La Coruña, ya indisociable del de su esposa, Juana Capdevielle, en perder su impronta –discutida, sin embargo, como hemos visto, entre los supuestos testigos de los hechos en A Coruña-- de mártir de la causa republicana y héroe político sacrificado en aras de la libertad del pueblo español. Como es lógico, las primeras sombras velaron totalmente su imagen en los textos propagandísticos del bando franquista, que para algunos historiadores revisionistas constituyen en la actualidad una nada desdeñable fuente de información, cuando no un modelo a imitar en un espurio intento de inspirarse en la justificación del golpe de estado de julio de 1936.

Quizá los dos libros más significativos publicados por apologistas del bando vencedor sobre el desarrollo de la guerra civil en Galicia se debieron al abogado y escritor falangista Luis Moure Mariño y al sacerdote Manuel Silva Ferreiro. Este último, Silva Ferreiro, publicó en plena guerra civil (1938) *Galicia y el movimiento nacional*, editado por el Cabildo catedralicio. Su relato, aunque inspirado por el mismo afán de exaltación y justificación del golpe militar y sus artífices, se centraba en la narración detallada de la secuencia de la rebelión militar a lo largo de la geografía gallega, constituyendo una importante referencia para historiadores inmediatamente posteriores, como es el caso, por ejemplo, de J. Arrarás. Con respecto al hecho de la sublevación en A Coruña, juzgó con severidad la actuación del gobernador civil Pérez Carballo a la hora de afrontar la situación de caos generada –según esta visión- por la descoordinación con el general Salcedo, jefe de la VIII División. Según Arrarás,

Salcedo dispuso el envío, a instancias de Madrid, de telegramas donde se ordenaba el acuartelamiento de las tropas en las distintas plazas a su cargo, propósito frustrado por una contraorden del gobernador civil, decisión que originó una fuerte discusión entre ambos, pese a lo cual seguirían “trabajando para el mismo amo”.<sup>65</sup>

Del mismo modo, criticó la voluntad del gobernador de intervenir en asuntos de la exclusiva competencia de los militares y sus errores de cálculo al pensar que podía contar con el Cuerpo de Asalto y la Guardia Civil, cuando sus leales eran solamente, según esta versión, algunos guardias de Asalto, además de las “improvisadas aunque numerosísimas milicias”, núcleo principal de las fuerzas con las que Pérez Carballo organizaría “una resistencia que sólo iba a servir para comprar con ello su propia ruina, y poner de manifiesto el arrojo y valentía de la guarnición de la capital, confiado por Cánovas a las órdenes y dirección del coronel Martín Alonso”.<sup>66</sup>

Pero no acaba aquí la contribución de Silva Ferreiro al homenaje a los héroes del 20 de julio, como se puede observar en el fácil recurso al estigma que afectará al recuerdo del gobernador y su esposa durante años, ampliado aquí en su efecto distorsionador hasta alcanzar la caricatura mordaz:

El Gobernador, que contra el parecer de su mujer que le llamaba cobarde y otras lindezas, había tomado la decisión de entregarse, quedó detenido con muchos de sus acompañantes y todas las fuerzas de Asalto que defendían el Gobierno, y que fueran muy pronto puestas en libertad y armadas de nuevo.<sup>67</sup>

Por su parte, Luis Moure Mariño publicó en 1939 *Galicia en la guerra*<sup>68</sup>, cumplido homenaje a la aportación del pueblo gallego al glorioso alzamiento nacional, en el que se dedicaban fervorosos elogios al caudillo, se justificaba el alzamiento y se llegaba a ensalzar las virtudes raciales inherentes al alma gallega, visibles en la heroicidad de los soldados de esta tierra, un factor *importante* en la victoria del bando nacional. Obviamente, cuando se trataba de enjuiciar a los que encarnaron o defendieron el caótico y degenerado régimen republicano, las cosas cambiaban de modo sustancial. Veamos, por ejemplo, quién dio la orden de ejecutar al dirigente del Bloque Nacional y diputado José Calvo Sotelo:

No es el lugar más propicio el de estas páginas para describir los pormenores que precedieron a aquel crimen. Nadie ignora --y esto es lo importante y lo terrible-- que la orden de ejecución partió del Ministerio de Gobernación. Casares Quiroga, figura repugnante de tísico resentido, hombre dominado por extraños complejos de inferioridad y cargado de odios, fue el padre del asesinato.<sup>69</sup>

Partiendo de estas premisas de estilo y significado, no es nada extraño que se despachase en unas breves líneas la narración del levantamiento militar en A Coruña, preludio de la rebelión en las restantes provincias gallegas, revelando una versión adulterada, cuando no grotesca, de los hechos. Según ésta, el ataque de los sublevados al edificio del gobierno civil coincidió con el desarrollo en su interior de una comedia, o

---

<sup>65</sup> M. Silva Ferreiro, *Galicia y el movimiento nacional*, Santiago de Compostela, Imp. y enc. del Seminario Conciliar, 1938, p.39

<sup>66</sup> Ibid, p. 52.

<sup>67</sup> Ibid, p. 55.

<sup>68</sup> L. Moure Mariño, *Galicia en la guerra*, Madrid, Ediciones Españolas, 1939.

<sup>69</sup> Ibid, p. 27.

mejor dicho, de una “fiesta” en torno a una espléndida mesa, auspiciada por el propio gobernador Pérez Carballo:

LA CORUÑA dio el primer golpe. El lunes, día 20, en las primeras horas de la tarde, salieron a la calle fuerzas del Ejército, Guardia civil y voluntarios de Falange.

Los elementos revolucionarios se habían atrincherado en el Gobierno civil, edificio en el que se centró el más considerable medio de resistencia. El Gobernador y el Comandante de las fuerzas de Asalto, acompañados de otros significados elementos, decidieron hacerse fuertes en el edificio. Por cierto que, dentro del Gobierno civil tuvo lugar una comedia bastante graciosa: Para infundir ánimos a los amigos que le acompañaban, el Gobernador les obsequió con una espléndida comida. Pero, la fiesta tuvo un final desagradable: a los postres, las granadas de una batería emplazada enfrente del edificio, comenzaron a mellar sus muros y, con un número de cañonazos no superior a la docena, se rindieron el gobernador y sus leales.<sup>70</sup>

En la línea de atribución a Juana Capdevielle de una influencia negativa sobre su marido, destacaba el general de farmacia Ángel Ramos, entonces oficial de este Cuerpo, llegado a A Coruña el mismo día del estallido de la sublevación en esta ciudad:

En el Gobierno Civil, quedaron cercados el Gobernador Civil y su señora con los guardias de asalto, carabineros y milicianos rojos. La señora se constituyó en Jefe de aquellas fuerzas de resistencia, alentándoles con grandes gritos y vivas a la República, pero el gran ataque que sufrieron con fuego de ametralladoras, fusiles y morteros, hacía vacilar a los defensores (...).<sup>71</sup>

Como complemento a su demostración de oficio “guerrillero” –retrato muy tendencioso, si tenemos en cuenta que Juana Capdevielle, en esos momentos, se encontraba en avanzado estado de gestación, en el que influye la imagen de las milicianas en armas-, la esposa del gobernador civil, según relata este autor, testigo aparente de los hechos, se entregó a su naturaleza *perversa, femenina* a la par que *francesa*, concebida en clave de ciertas obsesiones deudoras del discurso de tintes y valores paranoides predominante en amplios sectores del ejército. Todo lo contrario que su marido, el gobernador Pérez Carballo, que optó por su definitiva *redención*. Una versión poco original si no fuera por las imágenes recurrentes y las falsificaciones de la realidad utilizadas con impunidad para describir (y justificar) la estancia de Juana en la cárcel y su trágico destino final:

El Gobernador Civil se arrepintió y murió cristianamente, diciendo que recibía lo que se merecía, pidió perdón a todos. No así su mujer que fue la que le empujó a la política y a los “lejí”, a hacer innumerables crímenes. En la prisión, provocaba a los guardianes haciéndoles exhibiciones obscenas y excitando a la rebelión a otros presos. Era francesa, debiendo tener un cargo muy importante en las organizaciones extremistas, pues llegaron muy fuertes presiones de varios países extranjeros, principalmente de Francia, para que se la pusiera en libertad, mandando un destructor de la Marina para recogerla. Se adelantaron a su llegada, dejando que se escapara la malvada individua que cayó en la huida. Este fusilamiento nos costó un ataque masivo de la prensa extranjera, principalmente la francesa. En Francia había triunfado en Frente Popular, con Leon Blum a la cabeza, de filiación comunista y nos hizo todo el daño que pudo.<sup>72</sup>

Este absurdo alegato sobre la “maldad” de la esposa del gobernador –una mujer, Juana, que apenas se significó ideológicamente en su actividad profesional en un momento en el que el debate político se traslucía hasta en las reuniones más técnicas de

<sup>70</sup> Ibid, p. 35.

<sup>71</sup> A. Altamira Ramos, *Diario de un general*, Visión libros, 2011, p. 105

<sup>72</sup> Ibid, p. 111.



los responsables de archivos y bibliotecas-<sup>73</sup> nos ofrece buena parte de los ingredientes de esa patología social que ha afectado a los propagandistas de extrema derecha españoles (y aún más a los receptores de esa propaganda), fanatismo religioso filtrado en un discurso político apocalíptico, misoginia, francofobia, culpabilización de la víctima en aras de la elaboración de una realidad que justifique el uso “legítimo” de la violencia, que aquí se emplean para componer la historia de una mujer embarazada que recibiría en el mismo acto las balas procedentes de la aplicación de la “ley de fugas” y de un pelotón de ejecución organizado al efecto.<sup>74</sup>

Intelectualmente más sólida y ambiciosa en su contribución a la memoria oficial de régimen, fue la obra del entonces director de Prensa y Propaganda franquista, el periodista e historiador Joaquín Arrarás, quien publicó de 1939 a 1943 los ocho volúmenes de su *Historia de la Cruzada Española*, editada por Ediciones Españolas de Madrid. En sus páginas, escritas como apología de los héroes militares del alzamiento nacional y justificación del nuevo estado, edificado sobre las cenizas del *corrupto* y *débil* régimen republicano, abundan las descalificaciones a políticos republicanos como Azaña, un auténtico “demonio” para Arrarás, y los demás miembros de su “secta” burguesa e izquierdista. En función de la obsesión hagiográfica y legitimadora de la rebelión militar de julio de 1936 que inspiró a este historiador pro franquista, podría pensarse que al analizar la secuencia del levantamiento franquista en La Coruña, y detenerse por obligación en la figura de su gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, quizá la más vulnerable de todas a la crítica simplificadora, surgiría la diatriba acostumbrada en el estilo literario de Arrarás cuando se trataba de enjuiciar a sus adversarios ideológicos, sarcástica y cruel hacia la trayectoria global de los vencidos, contemplada en una perspectiva circular –llega a relacionar, de forma sibilina, a muchos de los oficiales fieles a la República con los supervivientes o los evadidos de la tragedia de Anual en 1921. Y, en efecto, así es.

Las palabras que Arrarás dedicó en su obra a Francisco Pérez Carballo respondieron a las expectativas basadas en el sentido y la intención de su escritura, de su obra en conjunto. En ellas retrató a un hombre nervioso, desbordado por los acontecimientos, al frente de un gobierno civil que nunca tuvo el control de la situación y cuando actuó lo hizo bajo la influencia de las fuerzas revolucionarias del Frente Popular, que “ejercía una autoridad tiránica que anula la del mismo gobernador civil y aglutina las sindicales obreras y partidos de tendencia izquierdista”.<sup>75</sup> Demasiada responsabilidad para un joven inexperto a merced de los agitadores (léase también que por pasividad o

<sup>73</sup> Como reveló su biografía, Cristina Gállego Rubio, aunque el solvente y nada pretencioso libro de esta autora no trató esta cuestión, centrándose especialmente en el perfil técnico de una mujer profesional que hoy, obviamente, no hubiera llamado tanto la atención.

<sup>74</sup> Versiones como éstas tienen todavía un eco considerable en sectores sociales conservadores de la ciudad de A Coruña, casi ocho décadas después de los hechos y, consecuentemente, dejan una huella notable en Internet: por ejemplo, el blog titulado *La niña del exorcista* (<http://laninhadelexorcista.blogspot.com.es/2010/08/la-malvada-juana-capdevielle.html>) presenta varias perlas relativas a la cuestión que nos ocupa, véase si no el post “La malvada Juana Capdevielle”, publicado el miércoles 4 de agosto de 2010, cuyo autor (responsable de este medio y de la totalidad de las informaciones incluidas en él) demuestra su habitual pericia en la escritura y su cercanía a las fuentes archivísticas, en contraste con una mal disimulada y ciertamente tendenciosa animosidad política.

<sup>75</sup> J. Arrarás, *Historia de la cruzada española*, (reed), vol III, Madrid, Datafilms, 1984, p.510.

negligencia, o ambas cosas a la vez), claros culpables, desde este punto de vista, del deterioro del orden público y las turbulencias políticas y sociales que había que cercenar a toda costa.

Véase, por ejemplo, el relato de los acontecimientos desde la salida de las tropas a la calle en A Coruña, una vez hubo firmado el bando de guerra el coronel Cánovas, jefe en funciones de la VIII División tras haber sido destituido de su puesto el general Salcedo Molinuevo, y su inmediata presencia en la plaza María Pita para apoderarse del ayuntamiento, a muy escasa distancia del edificio del gobierno civil. Era el lunes 20 de julio de 1936, fecha definitiva del alzamiento militar en A Coruña:

La aparición de la tropa en la calle sorprende a los ocupantes del gobierno civil sentados a la mesa. Además de los dirigentes del Frente Popular están algunos elementos militares: Quesada y Tejero Langarita, comandante y capitán, respectivamente, del Cuerpo de Asalto, ambos fervientes adeptos del Frente Popular. Son los únicos de esta significación. Los restantes, como el comandante de la guardia civil Ríos y el capitán de Asalto Armas, aceptan una compañía que les es poco grata, dispuestos a aprovechar la primera ocasión para manifestar cuáles son sus sentimientos verdaderos. Durante la comida se oye por la radio la declaración de guerra que acaba de leer el teniente González. Pérez Carballo deja la mesa y corre al aparato del teléfono. Llama al teniente y le interpela con voz temblorosa, que quiere ser autoritaria:

--Soy el gobernador. ¿Quiere decirme en nombre de quién se declara el estado de guerra?.

El teniente replica ásperamente:

-- En nombre de quien puede ordenarlo.

La afirmación siembra el miedo: Los rostros palidecen, y antes de que puedan los comensales recobrar el ánimo, el teléfono vuelve a sonar. El que ahora llama es el teniente coronel Tovar, que le dice a Pérez Carballo:

--Somos los dueños de la ciudad. Harían ustedes bien en rendirse, si no quieren que se derrame sangre.

El gobernador vacila unos segundos, y acaso está dispuesto a acceder, porque la intimación va subrayada por el toque de las cornetas de las compañías que ocupan las calles y plazas inmediatas. Pero algunos de los que le rodean le disuaden, excitándole a la resistencia:

--No les haga usted caso. Han obtenido un triunfo momentáneo, pero los nuestros son dueños de los barrios, de las vías de comunicación, de los depósitos de víveres y de gasolina. Podemos resistir aquí, no nos rindamos...

Y no se rinden.<sup>76</sup>

Al margen del carácter novelesco del relato, de sus contradicciones, parece muy revelador el modo en el que Arrarás trataba la actitud del gobernador Pérez Carballo. Según esta versión, ajustada a un guion preestablecido –basado probablemente en los testimonios de militares y agentes de Seguridad y Vigilancia situados dentro y fuera del Gobierno Civil-- y desarrollado a lo largo del epígrafe dedicado a la “cruzada” en Galicia, muy semejante en algunos puntos esenciales al observado por Silva Ferreiro, el joven militante de IR estuvo a punto de ceder ante las amenazas de los rebeldes, inclinándose finalmente por ofrecer resistencia aconsejado por *algunos* de sus *colaboradores*, en este caso agentes de la autoridad. Sin embargo, esta afirmación es matizada cuando en otro pasaje del texto se atribuye el papel de consejeros “áulicos y constantes” de Pérez Carballo a los célebres “hermanos de la legía”, destacados militantes socialistas locales, cuyo papel en la defensa de la legalidad republicana resulta un tanto controvertido.<sup>77</sup> Y de igual modo que se mostró titubeante a la hora de tomar la decisión de decretar la resistencia al inminente asalto, no dudó Pérez Carballo

<sup>76</sup> J. Arrarás, *Historia de la cruzada española*, op cit, p.517

<sup>77</sup> Ibid, p. 521.

en claudicar cuando se cercioró de que la resistencia era imposible, debido, entre otros factores, a la presencia de traidores entre los defensores del gobierno civil:

Y aunque las fuerzas de Asalto defensoras del gobierno civil disponían de morteros, también el teniente Raigadas, que estaba a cargo de estas máquinas, desvió intencionadamente la puntería, por lo que sus efectos fueron nulos. En estas condiciones la continuación de la lucha era imposible y Pérez Carballo decidió no aguantar más. A las cinco de la tarde, se enarboló bandera blanca.<sup>78</sup>

Las tesis que dudan del compromiso con la defensa de la legalidad republicana de buena parte de los agentes de orden público y militares atrincherados en el Gobierno Civil, se centran, fundamentalmente, en su actitud contemplativa al inicio de las hostilidades o en el sabotaje de las tácticas de defensa establecidas al efecto (dentro de los cuales se incluye al comandante de Asalto, Quesada), sostenidas por Arrarás y otros autores, han sido recogidas por algunos historiadores en la actualidad, cuestión bastante controvertida que se analizará en el momento oportuno.

En otro lugar, Arrarás también se ha referido a la desconfianza que el gobernador sentía hacia el general de la VIII División, Salcedo, subrayando el desconcierto de aquél ante la evidente descoordinación entre Madrid, el gobierno civil y los jefes militares y policiales de La Coruña los días previos a la sublevación.<sup>79</sup>

Esta visión genérica y simplista de los hechos se hace coherente con la lógica maniquea de los argumentos manejados por Arrarás si tomamos en consideración la supuesta sumisión mostrada por Francisco Pérez Carballo, descrito por este autor como un “esclavo” complaciente, ante los arbitrios caprichosos de Casares Quiroga y las maniobras oscuras del Frente Popular:

El gobernador civil de La Coruña, don Francisco Pérez Carballo, cuenta veintisiete años de edad: es abogado, auxiliar de Derecho Romano en la Universidad Central, y oficial del Congreso. Lo que puede llamarse una carrera brillante. Acaba de contraer matrimonio con una señorita, también de formación intelectual, Juanita Capdevielle, de treinta años, licenciada en Filosofía y Letras y archivera de la Ciudad Universitaria.

La desgracia de este joven matrimonio es haber entrado en relaciones, por motivos profesionales, con Casares Quiroga, que al necesitar un gobernador de confianza en La Coruña, se acuerda de que Pérez Carballo le prestó un señalado favor recientemente, y quiere recompensarlo con el cargo, que es un regalo de bodas. Hasta entonces, Pérez Carballo no había sentido ambiciones políticas, aunque había actuado desde las aulas como miembro de la F.U.E. El Frente Popular lo ha envuelto en la fuerte red de sus odios y de sus maquinaciones, y Pérez Carballo se ha sometido, complaciente, a esta esclavitud<sup>80</sup>

Arrarás descalificaba, como vemos, la figura de Pérez Carballo como gobernador civil de La Coruña, tildándolo poco menos que de una marioneta de Casares, un juguete del Frente Popular a quien se nombró gobernador de La Coruña como regalo de bodas y agradecimiento de un favor personal prestado por el dirigente estudiantil a Casares Quiroga años atrás. Esta leyenda, o por lo menos esta poco fundamentada afirmación, que si bien surgió como una maledicencia propia de encendidas rivalidades políticas y de la tergiversación de una mera coincidencia --al parecer, se gestó en medios conservadores de A Coruña, conocedores del hecho de que el abogado madrileño había

---

<sup>78</sup> Ibid, p. 519.

<sup>79</sup> Ibid, p. 514-515.

<sup>80</sup> Ibid, p. 514.

contraído matrimonio semanas antes de su nombramiento como gobernador civil-, fue finalmente utilizada por Arrarás, tal vez el primero en utilizar este argumento tras la contienda para mayor escarnio de los vencidos, en un texto cuya intención primordial era, justamente, contribuir a forjar una memoria colectiva a la medida del régimen naciente.

No vamos a profundizar ahora en las razones del nombramiento de Pérez Carballo como gobernador civil, que tendrán su espacio oportuno en su lugar –nombramiento que se atribuye a una decisión de tipo clientelar que Casares tomaría en beneficio de su patrocinado Pérez Carballo, vinculación más real en la percepción colectiva que en el plano objetivo de los hechos-, pero si conviene llamar la atención sobre una de las constantes aparecidas en las obras de los memorialistas y propagandistas franquistas, esto es, el profundo desprecio por la política. Y ésta era casi patrimonio, a sus ojos, y en cierta manera en la realidad misma, de los republicanos de I.R y U.R, las principales fuerzas sobre las que se asentó el gobierno del Frente Popular.

En otras palabras, si el ataque preventivo contra los partidos y organizaciones marxistas y revolucionarias era fácilmente justificable desde la perspectiva de los propagandistas del franquismo, el asalto vía golpe de estado a las instituciones republicanas en julio de 1936 requería de un trabajo más laborioso, más fino, valga la expresión, puesto que la extracción burguesa y liberal, la procedencia del mundo intelectual y universitario y, en especial, la condición de “personas de orden” (adscritas a partidos republicanos comprometidos con la democracia y la legalidad vigente) de la mayoría de los miembros del gobierno del Frente Popular, y del aparato administrativo de él dependiente, eran factores difíciles de soslayar a la hora de argumentar la eliminación o represión de los mismos.

Por eso mismo, se optó por la vía más corta, incidiendo en la corrupta, endeble y negligente naturaleza de aquellos hombres, de aquellos políticos a merced de las fuerzas revolucionarias, que en pleno desconcierto, o quizá movidos por el simple capricho, nombraban gobernador civil de A Coruña, una de las ciudades más importantes del norte de España,<sup>81</sup> a un joven acólito al que premiaban una supuesta lealtad personal a Casares y su reciente matrimonio con Juana Capdevielle. Y durante muchos años, como es sabido, todo lo relacionado con Casares Quiroga ha corrido el riesgo de ser borrado de la memoria colectiva de la sociedad española o, sencillamente, estigmatizado, error en el que la historiografía tiene también alguna responsabilidad. ¿Es Casares, o lo ha sido al menos, uno de los grandes “malditos” de la historia contemporánea española?. La respuesta sería afirmativa, en buena lógica, si nos referimos a los años de la dictadura, donde la persecución hacia su figura cobró tintes surrealistas,<sup>82</sup> y tampoco

---

<sup>81</sup> A Coruña, la ciudad de Galicia con más peso en la estructura administrativa y política del estado republicano, era una ciudad ligada al republicanismo histórico y, muy especialmente, a Izquierda Republicana, a través de la O:R:G:A, una de sus partidos fundadores, por lo que su situación política y social en general, y el control de las redes de influencia y poder local en concreto, siempre representó una preocupación en el seno del partido de Azaña, al margen de dinámicas y factores coyunturales y estratégicos, como reflejan, por ejemplo, varias noticias publicadas en el órgano de expresión de IR, *Política*, aparecidas entre febrero y abril de 1936.

<sup>82</sup> A. Páramo, “Casares Quiroga o el compromiso republicano”, en *Cuadernos Republicanos*, nº 58 (2005), pp. 107-118. El autor atribuye a José Manuel Roberes, magistrado de A Coruña, el mérito de haber impedido un insólito expolio. Lo cierto es que Roberes desoyó en noviembre de 1937 un

podríamos decir que a partir de la transición recibiese un tratamiento más objetivo por parte de muchos escritores, memorialistas e historiadores o se restaurase su memoria en el plano simbólico, aunque en la última década la situación ha cambiado sustancialmente.

En realidad, Casares no sólo fue culpabilizado de una manera despiadada por sus adversarios ideológicos (y los herederos de éstos en la democracia), en consonancia con los odios desatados por una guerra civil, sino que en los escritos de bastantes de sus mismos correligionarios republicanos tampoco se le hizo la más mínima justicia, si bien es cierto que su huida hacia el silencio permitió que se volcase toda la responsabilidad en su persona. Lo cierto es que unos y otros, en función de sus respectivos planteamientos políticos e históricos, trascendieron la frontera de la crítica legítima hacia un discurso plagado de graves descalificaciones personales, más coherente en el contexto en el que el régimen franquista eliminaba todas las huellas posibles de la Segunda República, siguiendo una estrategia necesaria y perfectamente meditada para consolidar la memoria colectiva dominante en el país durante décadas.

Volviendo a la obra de J. Arrarás, es necesario advertir que al lado de la crítica lacerante al gobernador civil de A Coruña, como pieza del engranaje de las instituciones republicanas, casi rayando en el sarcasmo al referirse a Pérez Carballo como un esclavo complaciente --la caricatura de la política del gobierno Casares a la hora de nombrar cargos políticos no tiene precio--, subyace, como hemos visto en la cita textual anterior, y por contradictorio que parezca, un cierto reconocimiento del abogado, del profesor universitario y dirigente de la FUE. Reconocimiento que se hace extensivo, en cierto modo, a Juana Capdevielle, contemplada en esta ocasión al margen de la leyenda de su responsabilidad en el proceso de toma de decisiones y defensa activa del Gobierno Civil de A Coruña. De ella se dice más adelante que salió del gobierno civil, nada más iniciarse las hostilidades, para refugiarse en una farmacia cercana y que vivió allí con emoción el asalto de las fuerzas pro franquistas, sin referirse, lógicamente, a las trágicas circunstancias de su encarcelamiento y posterior asesinato.<sup>83</sup>

Más allá de las corrosivas afirmaciones vertidas sobre el perfil político de Pérez Carballo y su función estricta como gobernador republicano, parece que Arrarás intentaba salvar la trayectoria académica y profesional del gobernador, concebida como independiente de la política, presentándolo como un hombre despolitizado que, junto a “Juanita Capdevielle”, tuvo la desgracia de topar con Casares Quiroga, razón suficiente, se deduce, para que ambos fuesen represaliados. Pero quizá estos elogios entrecortados - este claro-oscuro de fondo- solo fuesen atisbos de una incipiente mala conciencia colectiva, visible más fácilmente con el paso de los años en algunos prohombres del franquismo. O tal vez la opinión de Arrarás, en este caso, sólo fuese un eco directo o

---

requerimiento para eliminar la partida de nacimiento de Casares Quiroga del libro del Registro Civil correspondiente, limitándose a pegar la hoja de la inscripción con la anterior para simular el daño pretendido.

<sup>83</sup> Ibid, p. 519.

indirecto de la estima y admiración general que se le profesaba al infortunado dirigente estudiantil, al margen de los respectivos credos ideológicos.<sup>84</sup>

De cualquier modo, la distinción de estos dos niveles de opinión establecidos por J. Arrarás a la hora de enjuiciar la actuación de Pérez Carballo, con absoluto desprecio del hombre público, no fue privativa, como se verá con algunas matizaciones, de los escritores alineados con la causa franquista.

De hecho, no mucho más tarde, en 1944, se publicó en México *La escuadra la mandan los cabos*, obra del escritor y periodista socialista M. Domínguez Benavides, comisario político de la Marina española durante la guerra civil y miembro del Círculo Cultural Jaime Vera en el exilio mexicano. Como ya hemos apuntado páginas atrás, Domínguez Benavides pudo ser uno de los dos autores de *Galicia bajo la bota de Franco*, editado en París y Buenos Aires bajo distintos títulos, en concreto de la parte del libro dedicada a los sucesos acontecidos en la provincia de Pontevedra, como afirma Carlos Fernández Santander.<sup>85</sup>

En *La escuadra la mandan los cabos* se analizaba, desde una perspectiva histórica, el papel de la marina de guerra republicana durante la guerra civil y se aportaban también datos sobre el estallido de la guerra civil en varias ciudades gallegas, con Ferrol a la cabeza. Especialmente crítico con las autoridades republicanas en general, y los gobernadores civiles de las provincias gallegas en particular, cómplices indirectos, en última instancia, del éxito del golpe militar por su negativa a entregar armas al pueblo, Domínguez Benavides no dudó en responsabilizar, ya de una forma explícita, a Pérez Carballo, en el caso de A Coruña, como representante del gobierno central:

El gobernador de La Coruña se oponía a que se armase al pueblo. El comandante Ros Hernández y la esposa del Gobernador opinaban lo contrario. Prevaleció el criterio del gobernador, influido por Madrid y por un comandante de la Guardia Civil que le prometió defender el orden con sus guardias<sup>86</sup>

Una vez más, observamos de nuevo la referencia al papel activo de Juana en las deliberaciones sobre la estrategia a seguir frente a los sublevados, enfatizado un poco más el retrato de la bibliotecaria madrileña realizado supuestamente por Luis Seoane en *Galicia bajo la bota de Franco* (recordemos que Luis Seoane se habría ocupado del capítulo dedicado a A Coruña y Domínguez Benavides del de la provincia de

---

<sup>84</sup> Juan Pérez Carballo y Carmen Veiga de Bernardo, basándose especialmente en los testimonios recogidos por Ángel Pérez Carballo, abogado y hermano de Francisco, confirmaron las grandes expectativas que sobre la carrera profesional y política de Francisco Pérez Carballo albergaban muchos de sus colegas del mundo académico y jurídico. Del mismo modo, a la familia Pérez Carballo le consta la amistad de Francisco con algunos miembros de Falange (como los hermanos González Canales, entre otros), que incluso quisieron cooptarlo para los cuadros dirigentes de su organización (algo que no sería una excepción, pensemos por ejemplo en casos como el de Matías Montero). Datos obtenidos en entrevista a Juan Pérez Carballo y Carmen Veiga de Bernardo. Madrid. 5-02-2008.

<sup>85</sup> Véase las observaciones realizadas por C. Fernández Santander sobre las semejanzas estilísticas entre ambos textos, condensadas en la agilidad y el vigor narrativo al servicio de una intencionalidad de denuncia que no repara en dar nombres y apellidos de los verdugos y acusa directamente, no sin fundamento, a la Falange como principal responsable de la represión tras el golpe militar, en el prólogo de *Galicia bajo la bota de Franco*, op cit. p. 7-11.

<sup>86</sup> M. Domínguez Benavides, *La escuadra la mandan los cabos*, México, Colección Luz sobre España, 1944, pp. 124.

Pontevedra), que resaltó su carácter enérgico, compartido, según el pintor gallego, por el gobernador Pérez Carballo.

Sobre los cuatro “hermanos de la legía”, activos militantes socialistas muy significados en los actos de resistencia contra la sublevación militar --tres de los cuales estuvieron entre los defensores del Gobierno Civil--, Domínguez Benavides vertía elogios que no se hacen extensivos a la máxima autoridad civil de la provincia. Refiriéndose al inicio del fuego artillero contra el edificio, escribía esto:

Sonó el cañón y los cuatro hermanos se ofrecieron al Gobernador para destruir con bombas de mano las piezas de artillería. Pérez Carballo rechazó el ofrecimiento, no creía en el heroísmo.<sup>87</sup>

En suma, para este autor el sacrificio de las masas populares, y en especial del campesinado gallego, se malogró por una concatenación de factores que se resumirían en:

la incapacidad de su gobernador civil y por el desquiciamiento del Estado, que abandonado por sus servidores, se venía abajo sepultando entre sus ruinas a sus generosos defensores y, aquí, en Galicia, a los campesinos gallegos<sup>88</sup>

La memoria republicana del exilio, en puridad las memorias republicanas del exilio, se mostraron tan plurales como en realidad lo fueron las ideologías que reflejaron la heterogeneidad interna del bando vencido en la guerra civil. Por lo tanto, es más fácil encontrar en ellas discrepancias y críticas transparentes que en las emanadas del discurso de los vencedores, dirigidas las del exilio en unas ocasiones a buscar auto justificaciones -y a saldar determinadas cuentas pendientes-, en otras a traducir lúcidas reflexiones sobre las causas de la guerra civil y la derrota republicana, las responsabilidades globales o individuales generadas en los distintos procesos políticos y bélicos y la naturaleza cruenta de la represión franquista.

En cambio, la memoria franquista, como hemos visto, por ejemplo, en el tratamiento de la figura de Pérez Carballo por parte de varios historiadores y escritores pro franquistas, convertidos en portadores del discurso memorístico de la dictadura a partir del momento fundacional del nuevo régimen, se mostró más compacta, homogénea y orientada a dotar de legitimidad al régimen naciente. Esta legitimidad de origen equivalía a una justificación última en el pasado y requería la sustitución de las memorias históricas preexistentes por una única oficial, generada por un relato mítico aglutinador que contribuyese a fijar determinados hechos relevantes en la memoria de los ciudadanos y al posterior encaje de ésta en la concepción histórica más conveniente a los fines del régimen, estableciendo una necesaria continuidad entre *memoria* e *historia*.<sup>89</sup> Para lograr este objetivo, fue vital la manipulación y demonización total del pasado republicano, desde sus actores a los símbolos, reservando una especial crueldad para la destrucción del legado de los más comprometidos con la defensa de la legalidad vigente hasta la consumación de la victoria franquista. En definitiva, la legitimación y justificación de la guerra civil y del consecuente estado franquista requería la

<sup>87</sup> M. Domínguez Benavides, *La escuadra la mandan los cabos*, op cit, pp. 125.

<sup>88</sup> Ibidem, pp. 125.

<sup>89</sup> J. Cuesta, *La odisea de la memoria...* op cit, p. 188.

eliminación del pasado de sus adversarios y, en consecuencia, la imposibilidad de cualquier tipo de reconciliación efectiva.

Para enfocar con más nitidez al papel de los *historiadores* franquistas en este proceso ambivalente de creación y aniquilamiento selectivo de memorias colectivas, resultan muy útiles las observaciones de Paloma Aguilar Fernández:

La historia oficial, al ofrecer una versión manipulada del pasado, trata de legitimar el presente y aspira a controlar el futuro. El historiador, considerado por muchos como un productor de memorias, influye sobre éstas, a la vez que éstas le afectan también a él. A pesar de esta mutua interrelación, en periodos autoritarios en los que la producción intelectual está sometida a la censura es el historiador oficial, como fiel reflejo del discurso dominante, quien difunde la versión consagrada, mientras que las memorias alternativas se diluyen en la vida privada. Esto dejó de ser así a medida que la sociedad española comenzó a transformarse, coincidiendo con la progresiva apertura del régimen.<sup>90</sup>

Es cierto que el historiador contribuye a la generación de memoria oficial, en especial en las dictaduras, donde se convierte con frecuencia en un simple amanuense del poder y se desnaturaliza su función científica. Pero en los sistemas democráticos este proceso es bastante más difícil, puesto que el debate científico en libertad reduce las probabilidades de lograr un consenso y una unanimidad suficientes para conformar la memoria en mayúsculas (puede influir, lógicamente, en memorias colectivas parciales e individuales, en el nivel de la percepción de la realidad histórica) y son reducidos los casos en los que un libro de historia o un historiador se convierten en la referencia intelectual básica de una sociedad o de una determinada cultura o familia política.

De cualquier modo, existen vías más moldeables que pueden ser utilizadas por el estado para socializar a la población en un sentido u otro –con mayor o menor intensidad, en función de la naturaleza y déficits democráticos contraídos–, al tiempo que se controla e institucionaliza la memoria colectiva. Entre ellos, se pueden citar los medios de comunicación, la escuela y el sistema educativo –con los libros de texto escolares como principal vector–, los museos, la ley y la administración de justicia

El sistema legal, en concreto, ha inducido cambios significativos en las memorias colectivas de muchos países, además de ser en sí mismo *an enormously influential institution of collective memory*.<sup>91</sup> De este modo, los tribunales de justicia contribuirían a modelar la memoria colectiva, como ejemplifican los juicios de Nuremberg y su influencia en una serie de memorias colectivas nacionales o, sin ir más lejos, las causas seguidas por la justicia franquista contra sus oponentes ideológicos y su efecto paralizador de la sociedad española desde el inicio de la sublevación militar.

El discurso oficial del franquismo, que se apoyó en la parte espuria de la historiografía española para producir memoria, mostró, asimismo, una indudable capacidad de adaptación al lenguaje exigido por el proceso interno de modernización del país y la necesidad vital del régimen de ser reconocido internacionalmente. De esa manera, evolucionó desde la inicial legitimación de origen a la de “ejercicio”, fundamentada en la apropiación que hizo de todo el mérito en el despegue económico y el cambio social que experimentó España a partir de los años sesenta y en la

<sup>90</sup> P. Aguilar. *Políticas de la memoria...* op. cit, p. 100.

<sup>91</sup> B. Misztal, *Theories of social remembering*, op cit, p.20.



consecución de la paz, objetivo que se pretendía hacer pasar como la verdadera obsesión del régimen desde un principio, pero nunca dejó de utilizar la memoria manipulada de la República y la guerra civil como instrumento para disuadir a la sociedad española de las perniciosas tentaciones democráticas. Esta memoria secuestrada sirvió, como es sabido, de coartada para el uso de la violencia, la perversión de la ley y la imposición de la religión católica como medios de reeducación social.<sup>92</sup> En el nuevo discurso de los años sesenta, la guerra civil formaría parte de una larga tradición histórica de conflictos que la dictadura clausuró para imponer la paz, y la democracia era vista como un sistema político apto para Europa y EEUU, pero no para la cainita España.

Por iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores franquista, Fernando María de Castiella, interesado en dar réplica a las tesis sostenidas por G. Jackson en *The second Republic and the civil war*, y con la autorización de Fraga Iribarne, titular de Información y Turismo, R.de la Cierva se encargó de escribir para la editorial argentina Codex la colección de fascículos titulada *Crónica de la guerra civil española no apta para irreconciliables*, publicada en 1966 sin la firma del autor.

Esta obra, divulgativa y propagandística, alcanzaría una gran difusión en España, puesto que aportaba una visión un poco más acorde, aunque con evidentes limitaciones en el análisis, a una nueva y un poco más objetiva interpretación del pasado, que ahora se opondría a la memoria dominante, no hegemónica, de la guerra civil integrada en el núcleo del discurso oficial franquista. Un factor importante en este cambio de perspectiva lo constituiría el impacto creciente de las obras de historiadores hispanistas en el mundo universitario y entre los sectores más cultos de la sociedad española.

En concreto, autores como el citado G. Jackson y, fundamentalmente, los británicos Elliot y R. Carr marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la historiografía española, ahora más proclive a concebir la guerra como una gran tragedia colectiva donde los culpables ya no eran solamente los vencidos.

Ante el peligro que representaban para la estabilidad de la memoria colectiva y el discurso oficial franquista estas nuevas y transgresoras visiones llegadas desde el exterior, el régimen revisó la maquinaria oficial de producción de memoria y creó el

---

<sup>92</sup> En el caso que nos ocupa, como en tantos otros, la maquinaria judicial represiva, alimentada por el discurso ideológico imperante, invadió también la memoria de los muertos. La Audiencia Provincial de La Coruña incoó un expediente de responsabilidad política contra Francisco Pérez Carballo y otros (nº 127 de 1941), que fue finalmente sobreseído (con fecha de 11 de enero de 1944 se le encarga a la Audiencia Provincial de Madrid la diligencia de notificar el auto del sobreseimiento dictado a Emilio Pérez, padre del fallecido gobernador civil de A Coruña). En la siguiente década, el Juzgado Especial número tres del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo archivó, en abril de 1956, la causa contra Francisco Pérez Carballo por su supuesta pertenencia a la masonería, tras un confuso cruce de diligencias que tardó dos años en acreditar el fallecimiento del acusado y, por lo tanto, la extinción de su posible responsabilidad penal. Este último tribunal basó su acusación en una lista de dudosa confección y procedencia (al parecer, archivada en un principio en los sótanos del comisariado político del PCE en Madrid, se intervino con posterioridad en un registro practicado por el S.I. P. M a Alfredo Aranda de Blas) donde figuraba, como miembro de la masonería, el nombre de Francisco Pérez Caballero, domiciliado en Plaza del Dos de Mayo, número 5. La confusión en el segundo apellido (aparecía *Caballero* en lugar de Carballo), una de las causas del retraso en las diligencias, no fue óbice para que el procedimiento se siguiese tramitando desde la correspondiente rectificación nominal y hasta el archivo definitivo del sumario, dadas las coincidencias en la profesión, domicilio y demás datos personales consignados. La documentación relativa a estos dos procesos legales se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica. T.O.P. 42/2844

*Sección de estudios sobre la guerra de España*, adscrito al Ministerio de Información y Turismo, delegando nuevas responsabilidades en los historiadores oficiales del régimen. La función de esta sección, a cargo de R. de la Cierva, era precisamente contrarrestar la influencia de las publicaciones especializadas extranjeras dedicadas al estudio de la historia moderna y contemporánea de España, labor en la cual sus funcionarios se verían obligados, en cierto modo, a matizar por inercia las interpretaciones más triunfalistas de los primeros años del franquismo para encajarlas en un contexto social, político y cultural cambiante -donde el control de la memoria histórica era aún más importante que nunca para evitar una peligrosa deslegitimación del régimen-, pero sin modificar una natural inclinación hacia el bando vencedor de la guerra civil.

En concreto, en la *Crónica de la guerra civil española*, de R. de la Cierva, el epígrafe dedicado a La Coruña, como en realidad el conjunto de la narración de los distintos acontecimientos políticos y bélicos abordados en la obra, no difería en lo sustancial de lo escrito por Joaquín Arrarás unas décadas atrás, abundando casi en los mismos errores. De hecho, este texto divulgativo se haría eco del supuesto nombramiento del gobernador Pérez Carballo en virtud de un poco meditado “regalo de bodas”, prueba palmaria de la irreflexión con la que, según esta versión, actuaba el gobierno republicano a la hora de adoptar, de forma casi aleatoria, decisiones esenciales para el mantenimiento del orden público y la legitimación del régimen en una situación tan crítica como la generada en España por la victoria Frente Popular en febrero de 1936.

Esta incipiente dinámica aperturista antes señalada, en la que empezaba a vislumbrarse una nueva sensibilidad social hacia interpretaciones más objetivas sobre el pasado más reciente de España --la guerra civil fue una tragedia, las causas y las culpas no se atribuían ya en exclusiva a los republicanos y a la izquierda, tesis muy influyente en las distintas memorias colectivas durante la transición--, amenazaba directamente la memoria dominante franquista, que hasta entonces sólo había sido refutada por las dispersas y plurales memorias de la izquierda, en especial las enmarcadas en la experiencia del exilio y, en el interior del país, las inscritas en la esfera íntima de la familia, pues las restantes se habían silenciado tras años de dura represión y estricta censura.

En la familia Pérez Carballo el legado del último gobernador republicano de A Coruña permaneció siempre muy vivo. Parece una obviedad --a priori, el ámbito familiar sería el menos permeable a la memoria oficial franquista--, pero si se contempla la violencia física y simbólica ejercida por el régimen sobre amplias capas de la sociedad española, no lo es tanto. En principio, los dos hermanos de Francisco (Ángel y José Andrés) tomaron la decisión de transmitir el apellido compuesto Pérez Carballo a sus hijos como homenaje familiar a la dignidad y valor demostrados por el último gobernador republicano de A Coruña. Ángel Pérez-Carballo había viajado a esa ciudad al terminar el curso escolar para pasar parte del verano en compañía de su hermano y su cuñada Juana Capdevielle, alojándose con ellos en la vivienda oficial situada en el mismo edificio del Gobierno Civil. Allí fue testigo directo de los acontecimientos políticos previos a la sublevación militar y, el lunes 20 de julio, del asalto de los

militares golpistas a la legalidad republicana.<sup>93</sup> Tras la toma del Gobierno Civil por parte de las fuerzas sublevadas fue encarcelado junto al gobernador, su hermano mayor. Liberado pocos días después de la ejecución de éste, realizó varias gestiones ante el cónsul francés en A Coruña para conseguir protección para Juana Capdevielle, cuyo padre era francés, frustradas finalmente por la negativa de las autoridades consulares de este país (Juana había renunciado la nacionalidad francesa para presentarse a las oposiciones de bibliotecaria). Una vez finalizada la guerra civil, contrajo matrimonio con Carmen Veiga de Bernardo, hija del diputado de Izquierda Republicana Victorino Veiga, en cuya casa de campo de Vilaboa (Culleredo) se refugió Juana Capdevielle después de abandonar la cárcel de A Coruña, a principios de agosto de 1936 (debido a una orden de destierro), pocas semanas antes de su asesinato a manos de un grupo de falangistas. Licenciado en Derecho, Ángel Pérez Carballo llegó a ser asesor jurídico de Tabacalera S.A.

Fiel a sus ideas republicanas y a la memoria de su hermano, mantuvo ante sus hijos, sin embargo, un prudente y dilatado silencio sobre los trágicos acontecimientos que acabaron con la vida de Francisco y Juana, adoptado probablemente, al menos en un principio, para proteger a sus hijos del estigma social que afectaba a los vencidos y sus familias, en un contexto político de represión y proscripción de ideas e identidades,<sup>94</sup> así como a preservar la naturaleza íntima del dolor por la tragedia experimentada en un pasado convertido en eterno presente. La ocultación de los trágicos recuerdos no fue total, ni tampoco se censuraron conversaciones donde afloraban cuestiones ideológicas que obligaban a tomar partido por las posiciones sostenidas por las fuerzas democráticas en la lucha clandestina contra las estructuras y políticas del régimen.

La familia desempeñó en ocasiones un papel esencial en la resistencia ideológica de los vencidos al discurso del régimen franquista. Recayó sobre ella la responsabilidad de constituir la institución clave tanto en la conservación y transmisión de la memoria republicana como en la configuración de un espacio protegido donde se podían intercambiar ideas heterodoxas o, en otros casos, correr un velo de silencio sobre determinados hechos traumáticos, conflictivos, peligrosos si llegaban a trascender el ámbito íntimo y a desafiar el orden político y moral establecido a través de la supresión de libertades, sobre todo en los primeros tiempos del franquismo. La familia generaría y reforzaría las identidades políticas y sociales de sus miembros, aportaría modelos éticos con referentes cercanos, convirtiéndose también en un canal libre donde expresar fragmentos de contra-memoria o memorias disidentes, para contrarrestar así el poder de la memoria dominante en la medida que ésta invadía experiencias y convicciones.

Identity itself is forged from many different experiences, as the influence of the national memory narrative on the individual, while formidable, does not diminish the power of the family as a

---

<sup>93</sup> Para proyectar el valor del testigo directo en la articulación del recuerdo, véase J. Cuesta, “Los componentes del testimonio, según Paul Ricoeur”, en *Historia, antropología y fuentes orales*, nº. 30, 2003, p. 41-52.

<sup>94</sup> Entrevista a Juan Pérez- Carballo Veiga. Madrid, 3 de diciembre de 2009. El entrevistado reconoció haberse informado sobre determinados detalles de la biografía de su tío Francisco de forma fragmentaria y tardía. En este proceso de lento acercamiento a la memoria familiar más trágica, pudo influir, en cierta forma, la prioridad que militantes antifranquistas y miembros del movimiento estudiantil como él concedieron al objetivo de derrocar el régimen o consolidar la nueva democracia antes que a volver la mirada sobre el pasado.

locus where a dissenting memory may be expressed, thereby counteracting the power of the dominant memory. This being so, the individual may adhere to his or her familiar memory, rather than the national one, and reject the tenets that not reflect his or her personal experiences<sup>95</sup>.

El estatus de la familia como fuente permanente de contra-memoria se entendería en la misma dinámica de la memoria colectiva oficial, que si por una parte refleja y reafirma el discurso del poder establecido, por otra se ve lastrada, paradójicamente, por su propia naturaleza cambiante y ambigua, y se muestra en el tiempo igualmente dependiente de o vulnerable a interpretaciones individuales y colectivas. Esta contradicción interna en el flujo de memoria dominante ayudaría al individuo o al grupo reprimido a rechazar o reconstruir, después de un proceso de filtrado, los códigos y significados impuestos desde el poder.

Como afirma José Antonio Maravall, la familia actuaría como primer enclave subcultural frente al control político de la desviación ideológica, como se puede contrastar en las entrevistas realizadas por el autor a dirigentes del movimiento estudiantil bajo el franquismo --un 58% de los mismos procedían de contextos familiares políticamente heterodoxos--<sup>96</sup> y se constituiría en un importante vehículo de socialización política junto a otros factores como el ambiente educativo de los centros de enseñanza donde se cursaron estudios (en especial, institutos o centros privados laicos), determinadas influencias personales, lecturas, viajes y experiencias adolescentes aleccionadoras.

En otros modelos de familia republicana, la función socializadora en la transmisión de una cultura política sería eclipsada total o parcialmente por una puramente protectora. En ese caso, los hijos de los vencidos no tendrían acceso a la información sobre el pasado republicano o izquierdista de sus padres o familiares, quedando inmersos en un silencio necesario para la adaptación o la pura supervivencia dentro del nuevo estado,<sup>97</sup> cuando no fueron sencillamente invitados a adoptar modelos sociales o, incluso, la propia ideología política y religiosa impuesta por el régimen franquista, en un intento de borrar toda huella incómoda del pasado con una firme ortodoxia en el presente.

---

<sup>95</sup> L. Ryan, "Memory, power and resistance. The anatomy of a tripartite relationship", en *Memory Studies* DOI: 101177/1750698010366502 (version on line first) (2010), pp. 12.

<sup>96</sup> J. M. Maravall, *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*, Madrid, Alfaguara, 1978, p. 195.

<sup>97</sup> Tanto el silencio como la mayor o menor transparencia puede contener un trauma significativo, a veces transferido a los descendientes, que hacen suya la memoria heredada. Para Marianne Hirsch, la memoria traumática de acontecimientos trágicos puede infiltrarse en la segunda generación (the *postgeneration*, formada por aquellos que nacieron después de los hechos), a través de una estructura inter-generacional de transmisión de experiencias y conocimiento traumáticos denominada *Postmemory*, que describiría "the relationship that the generation after those who witnessed cultural or collective trauma bears to the experiences of those who came before, experiences that they "remember" only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up". Véase M. Hirsch, "The generation of postmemory", en *Poetics Today*, 29:1 (spring 2008), p. 106.

Desde otra perspectiva, el concepto de *postmemory* es seriamente cuestionado en M. Bal, "Second generation, Testimony, transmission of memory and postmemory", en *Poetics today*, 2006, 27 (2), p. 473-488.

Volviendo al caso concreto de la familia de Ángel Pérez Carballo, ésta podría encuadrarse muy cerca de la línea de continuidad, apuntada anteriormente por Maravall, entre la adscripción liberal-republicana de los padres, que era reconocida sólo en privado, y la militancia antifranquista de los hijos, matizada gradualmente hacia la izquierda. Por ejemplo, Juan Pérez-Carballo Veiga llegó a militar en el PCE y se significó en la lucha clandestina del movimiento estudiantil madrileño contra el franquismo.

No obstante la discreción y la reserva con la que siempre se refirió a la historia y a la figura de su hermano Francisco --al que profesaba una gran admiración, más allá del fuerte vínculo familiar existente entre ambos--, o tal vez en estricta coherencia con su actitud de desconfianza ante un entorno hostil a los ideales y símbolos democráticos, Ángel Pérez Carballo escribió en 1967 (en el propio relato, el autor hace mención expresa de los treinta y un años transcurridos desde la muerte de su hermano en A Coruña) unas breves pero intensas páginas donde narra su experiencia durante el preámbulo y el desarrollo del golpe militar en A Coruña, que como apuntamos anteriormente contempló desde el interior del Gobierno Civil, además de aportar valiosos datos sobre la biografía del último gobernador civil republicano de esta ciudad.<sup>98</sup>

La reivindicación explícita que el autor hacía de la figura del gobernador Pérez Carballo no veló la mirada aguda que, trascendiendo el vínculo familiar y la intensa emotividad de los hechos, penetró desde la perspectiva del observador comprometido en la realidad de uno de los escasos gobernadores civiles que se opuso enérgicamente a la sublevación militar --el afán de exhaustividad y la vocación de síntesis al ofrecer datos sobre las actuaciones de su hermano Francisco al frente del Gobierno Civil y, en especial, la no evitación de cuestiones espinosas inciden en ello--, ni tampoco interfirió en el indudable interés historiográfico del texto.

Así por ejemplo, una de las afirmaciones menos consistentes de Ángel Pérez Carballo, en relación al control ejercido por la autoridad civil desde un principio de las fuerzas más radicales, en especial de los anarquistas, inscrito en un clima de entendimiento entre el conjunto de las fuerzas adscritas al Frente Popular en A Coruña (que se ve complementada por la crítica a la pasividad y negligencia del presidente del gobierno, Casares Quiroga), podría remitirnos por caminos diversos a una necesidad general e inconsciente de converger en una memoria común. Esta memoria de consenso permitiría la reconciliación de las heterogéneas fuerzas de la izquierda --que al final de la dictadura parecía una tarea menos utópica que en el primer franquismo--, en una *memoria republicana* más compacta, que aglutinase a la mayoría de las memorias de individuos y grupos no tan próximos y bien avenidos cuando protagonizaron la experiencia republicana, la guerra civil y el exilio, pero unidos, desde el punto de vista del observador actual, por el vínculo del sufrimiento colectivo, como ha puesto de

---

<sup>98</sup> Su lectura le proporcionó a su hijo Juan Pérez-Carballo Veiga una fuente de información muy valiosa para conocer más en profundidad la historia de su tío, lo que denota, en cierto modo, una actitud paterna cautelosa a la hora de tratar este tema. El texto permaneció inédito hasta que, previo conocimiento de Isaac Díaz Pardo, fue incluido por Carlos Fernández Santander en la colección de testimonios personales incluida en la primera edición de *El alzamiento de 1936 en Galicia* (1982).

manifiesto la historiografía hasta la fecha. Y este proceso afectaría también a los republicanos del partido de Azaña más relacionados con el proscrito Casares Quiroga, pero no tanto a este último.

Ángel Pérez Carballo retrató a su hermano Francisco como un hombre muy trabajador, de fuertes convicciones morales, cuya alta cualificación en el campo del Derecho “le hizo amar y respetar la ley por encima de cualquier otra consideración.”<sup>99</sup> Siguiendo el curso del relato nos encontramos con una escena muy significativa para definir la incómoda y vulnerable posición del gobernador civil, aislado entre la estrategia apaciguadora dictada por el gobierno de Casares y la presión movilizadora del “pueblo”, entendido como el conjunto de fuerzas políticas y sindicales englobadas en el Frente Popular, ante la inminencia del golpe militar:

Es interesante recordar, para que se comprenda cuál era la postura de Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros, un hecho harto significativo. Días antes del alzamiento, ya comenzado el mes de julio, envió a La Coruña a su hija Ester y a su yerno, Varela, quien acompañaba a su mujer para dejarla instalada en Ferrol. Fueron invitados a almorzar en el Gobierno Civil, comida a la que asistieron Ester Casares y su esposo, Varela, el gobernador civil y su mujer Juanita Capdevielle; el diputado, señor Guzmán, amigo personal de Casares Quiroga, el señor Prego, alto funcionario municipal, y el hermano pequeño del gobernador.

Tema principal de la conversación fue, como es natural, la tensa situación que imperaba, no ya en La Coruña, sino en toda España. Varela, militar adscrito –según creo– a la Casa Militar al servicio del Presidente, intentó serenar las inquietudes del gobernador civil, ante la pasividad que éste imputaba al gobierno, con los siguientes argumentos, que dijo eran los personales de Casares Quiroga. que en todos los cuarteles de la Guardia Civil, en lugar preferente, estaba colocado el retrato de D. Manuel Azaña, presidente de la República, que los militares desafectos, en su mayoría, se habían acogido a la ley Azaña de retiro voluntario; que todos los Generales y oficiales del Ejército habían jurado la bandera tricolor y, sobre todo, que la República tenía una gran baza: si el Ejército se sublevaba se echaba mano del pueblo y si éste era el que se levantaba, se echaba mano del Ejército (textual). El gobernador le respondió formulando una pregunta incontestable: “¿Entonces qué haremos los republicanos que hemos quedado en medio de ambas fuerzas?”<sup>100</sup>

El testimonio de Ángel Pérez Carballo revelaba de manera contundente la tensión existente entre las diferentes perspectivas de la situación y sus respectivos modos de afrontar la crisis política e institucional que había invadido el corazón de la República y ponía de relieve, de nuevo, tanto la focalización de la responsabilidad de los errores cometidos por el régimen republicano, al no tomar las medidas necesarias para prever y frenar el golpe militar, en la tibieza e indecisión mostradas por el gobierno de Casares Quiroga, como la inequívoca identificación con la ley y el estado de derecho manifestada siempre por el entonces gobernador civil de a Coruña.

Una fidelidad a la ley y a la República que se manifestó también –nos sigue informando el autor-- en la negativa a aceptar una posibilidad de huida que le hubiera podido salvar la vida: un marinero del vapor “Magallanes” consiguió alcanzar, a última hora de la tarde del 20 de julio, el Gobierno Civil batido por el fuego rebelde para

<sup>99</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, Gobernador Civil de La Coruña fusilado el 24-7-1936”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, Sada (A Coruña), 2007, p. 686.

<sup>100</sup> Ibidem, p. 690-691.

ofrecer su barco como transporte para huir a zona republicana.<sup>101</sup> Gesto de dignidad y honor repetido –según esta versión- cuando el propio gobernador, horas más tarde, después de la caída del gobierno Civil y ante los funcionarios de prisiones que estaban gestionando el ingreso en la cárcel de A Coruña de los hermanos Pérez Carballo y varios militantes del Frente Popular, consiguió ocultar el sello de goma del Gobierno Civil en el registro de sus pertenencias personales, con el fin de evitar que el escudo de la República refrendase decisiones de los sublevados contra ella.<sup>102</sup>

Finalmente, se refería a Juana Capdevielle destacando su entereza y valor ante una situación tan crítica y revelaba que ésta abandonó contra su voluntad el Gobierno Civil al inicio de las hostilidades, pues su intención hubiera sido la de permanecer junto a su marido en el interior del edificio. Esta versión contrasta evidentemente con la emanada de la Delegación de Orden Público dirigida por Florentino González Vallés, sucesor de Pérez Carballo en el Gobierno Civil controlado ya por los golpistas, según la cual Juana Capdevielle fue vista, metralleta en mano –como una miliciana más-, líder de una “rebelión” urdida por los defensores de la legalidad republicana.

Ya fuera del ámbito de la memoria familiar, en 1967 se publicó *Tres días de julio*, del escritor y periodista Luis Romero, una crónica de los acontecimientos que se sucedieron a lo largo de la geografía nacional durante los días 18, 19 y 20 de julio, narrados secuencialmente con la técnica de la acción simultánea. El libro, resultado de una larga investigación en la que se recabó una abundancia de testimonios escritos y orales de protagonistas de los hechos, respondía a una interpretación de la guerra civil como una tragedia que nunca se debería repetir, argumento que entonces empezaba a eclipsar el mito de la gloriosa cruzada y se consolidaría durante la transición sobre la idea de la culpabilidad colectiva. La objetividad con la que el autor trató de ensamblar este reportaje histórico, un mérito indudable a pesar de algunos sesgos en su planteamiento y el recurso inevitable a los diálogos –la mayoría, según el autor, basados en los testimonios recabados, el resto producto de su imaginación-- permitía contemplar personajes políticos y militares del bando republicano bajo una luz distinta a la acostumbrada en el discurso historiográfico y literario vinculado a la memoria oficial de la dictadura franquista.

En el prólogo de la obra, Luis Romero hacía una interesante reflexión sobre el valor demostrado por los protagonistas de una generación abocada a la tragedia:

El valor físico no estoy convencido de que sea virtud tan estimable como tradicionalmente venimos considerándolo, pero sí estoy seguro de que es virtud estimable y que merece respeto. De valor no anduvo floja aquella generación. Ante el paredón cayeron José Antonio Primo de Rivera, el gobernador de La Coruña y su esposa Juanita Capdevielle (...)<sup>103</sup>

Obviando el hecho de que Juana Capdevielle no fue fusilada –el error se explicaría en función de la leyenda adherida a su recuerdo--, la admiración que Luis Romero mostraba en estas palabras hacia el valor demostrado por Pérez Carballo y su esposa, como miembros de una generación sacrificada, derivó en un agudo retrato individual y

---

<sup>101</sup> Ibidem, p. 700.

<sup>102</sup> Ibidem, p. 697.

<sup>103</sup> L. Romero, *Tres días de julio*, Barcelona, Ariel, 1967, pp. XXVI.

colectivo cuando en el libro se describen, de forma novelada, aunque en este caso los diálogos pueden basarse en fuentes de información objetivas, las diferentes secuencias de los acontecimientos vividos en A Coruña durante los tres días que decidieron, probablemente, la suerte final de la República a lo largo del país:

Casares Quiroga está esperando que le pongan en comunicación telefónica con el gobernador civil de La Coruña, Pérez Carballo, amigo personal suyo, un muchacho de la FUE muy inteligente, en cuya competencia y lealtad confía. Casares Quiroga es coruñés y conoce a su gente, lo más probable es que en La Coruña no se altere el orden<sup>104</sup>

Más adelante, Luis Romero recrearía una conversación entre el presidente del gobierno de la República y el gobernador de La Coruña, mantenida pocas horas antes del estallido de la sublevación en A Coruña. Pérez Carballo aparecía en la misma como un hombre prudente, mesurado, decidido a controlar la situación ante la amenaza de los conspiradores y presionado por Frente Único Antifascista para que se anticipase a los movimientos de los militares. Otro reflejo de la realidad captado por el autor es la falta de información fiable que lastraba la acción tanto del presidente del gobierno como de sus gobernadores civiles, que demandaban constantemente noticias e instrucciones sobre el desarrollo y verdadero alcance del golpe militar. Hacia el final del libro, siguiendo el hilo cronológico con el que el autor enlaza las secuencias, se representaba la escena decisiva en el interior del gobierno civil de A Coruña, asediado por las fuerzas rebeldes. Luis Romero citaba la salida de Juana Capdevielle del edificio, acompañada del alcalde Suárez Ferrín, y las dudas y la confusión reinante por momentos entre los defensores del gobierno civil, deteniéndose finalmente en el dilema al que se enfrentaba el gobernador Pérez Carballo ante la inevitabilidad de la derrota:

Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña, está convencido de que nadie puede venir en su auxilio, de que nadie vendrá en su auxilio. Los militares sublevados empiezan a dominar las calles; poca oposición pueden hacerles los ciudadanos, los obreros, los pescadores, los campesinos que acuden de pueblos y aldeas, los mineros que confiaban en el poder de la dinamita. La partida se ha perdido. Las actitudes numantinas no tienen otro valor que el que pueda atribuirse a los gestos destinados a la exaltación de temperamentos románticos. Para que las actitudes numantinas puedan cumplirse, y no degeneren en tragedia bufa, es imprescindible que todos, unánime y espontáneamente, estén dispuestos a secundarlas.

Lo difícil es tomar determinaciones; averiguar cuál es el momento preciso de tomarlas y ponerlas en práctica. ¿No extremarán el rigor los vencedores cuanto más larga y sangrienta sea la resistencia?. ¿Cuál será la medida que aplicarán los vencedores y cuál el grado de rigor que se atribuyen el derecho de aplicar?. ¿Y por qué han de usar rigor con quien, de acuerdo con las leyes y las obligaciones que le impone su cargo, ha cumplido con su deber?.

Los interrogantes se encadenan; Francisco Pérez Carballo no acierta a responderse a sí mismo satisfactoriamente. Está convencido de que sus respuestas no coincidirán con la realidad de los hechos que está viviendo. Lo urgente es tomar una decisión, aunque desea consultarla con los demás. Ha llegado el momento de rendirse, de resignar el mando, la fuerza es la más poderosa de las razones, o de las sinrazones.

Desde el Parrote, la artillería continúa disparando con lenta y obstinada regularidad.<sup>105</sup>

Esta interpretación, dramatizada pero verosímil, de la posición del gobernador ante las opciones estratégicas posibles en un escenario límite, generador de responsabilidades cruzadas, inasumibles por un solo individuo, se ajustaba a los parámetros de la nueva visión del pasado emergente al final de la dictadura y

<sup>104</sup> Ibid, p. 69.

<sup>105</sup> Ibid, p. 584.



contrastaba, por su carácter ciertamente empático (y por provenir de un adversario durante la guerra, Luis Romero, voluntario después de la División Azul) con la construcción de determinados silencios, olvidos y clichés del estudiante, abogado y gobernador Pérez Carballo, latentes en el relato de algunos de sus coetáneos y afines en el plano ideológico e intelectual.

Otro tipo de referencias a su figura y a la de Juana Capdevielle, más numerosas y enfocadas en el hecho específico de su muerte, se inscriben en el intento de acentuar la barbarie represiva mediante la asignación de nombre y apellidos significativos a las cifras de víctimas de la violencia franquista, emprendido en la última etapa del franquismo. Desde esta perspectiva, la notoriedad del matrimonio Pérez Carballo dependería, probablemente, de factores como la juventud y perfil intelectual de la pareja, la crueldad de sus respectivas muertes, en especial la de la intelectual madrileña, mujer ajena a la lucha política directa, asesinada en avanzado estado de gestación, y la magnitud de la tragedia familiar consecuente, pero no tanto de sus trayectorias, experiencias y bagajes vitales. En este sentido, se pueden encontrar citas a Francisco Pérez Carballo en *La gallina ciega*,<sup>106</sup> el libro en forma de diario que Max Aub escribió tras su regreso y breve estancia en España en 1969, donde se reivindicaba la memoria de la República y la guerra civil frente al olvido impuesto por el discurso *pacificador* de la dictadura --la serie de novelas que conforman *El laberinto mágico* sería su principal aportación a este respecto--, y a Juana Capdevielle en *Descargo de conciencia* (1976), de Pedro Laín Entralgo. En esta última obra, controvertida y algo ambigua muestra de arrepentimiento basado en una profunda reflexión política, el autor afirma que Juana Capdevielle fue víctima de “las más inciviles balas de nuestra guerra civil”.<sup>107</sup>

### **De la transición a la actualidad: la memoria y sus caminos, el discurso de las metáforas.**

A partir de los años setenta, el recuerdo de Francisco Pérez Carballo se proyectó inicialmente en las memorias de exiliados retornados o antiguos compañeros de estudio o profesión con quienes el abogado madrileño mantuvo algún tipo de vínculo personal. En los últimos años, sin embargo, su figura ha sido reivindicada por determinados portadores de la memoria cultural --escritores, profesores universitarios, bibliotecarios--, atraídos quizá por el valor simbólico y metafórico de la pareja formada por él y por su esposa, Juana Capdevielle, dos republicanos jóvenes, cultos, comprometidos con la modernidad y la ley que la iba a sustentar, asesinados prematuramente, que encarnaría a la perfección la impronta intelectual y el destino trágico de la República. Durante la transición, el peso de la memoria negativa de la II República y la guerra civil, y con él el deseo obsesivo de evitar un nuevo enfrentamiento entre españoles, se reflejó, como es sabido, en el diseño institucional (desde la ley electoral a un parlamento bicameral, pasando por otras modificaciones en la estructura política del estado que diferenciaron notablemente la nueva democracia de su antecesora republicana), la actitud de todos los actores políticos, independientemente de las posiciones ideológicas

<sup>106</sup> M. Aub, *La gallina ciega*, México, Joaquín Mortiz, 1971, pp. 39.

<sup>107</sup> P. Laín Entralgo, *Descargo de conciencia (1930-60)*, Barcelona, Barral, 1976, p. 40.

defendidas, y la consideración del pacto como medio esencial para resolver cualquier obstáculo en el proceso de reconstrucción de la democracia en España.

Sin embargo, en la actualidad, surgen miradas retrospectivas que expresan juicios críticos sobre ese periodo —a una parte de la izquierda y de los nacionalismos periféricos, se han sumado los movimientos sociales y culturales emergentes y las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, débiles durante la Transición, muy activas en la actualidad—y, en particular, denuncian la imposición del olvido y la amnesia social derivadas del proceso constituyente iniciado tras la muerte de Franco.

La impugnación creciente de lo que se considera un importante borrón en la transición política española, esto es, el olvido de las víctimas republicanas de la guerra civil y el franquismo en aras de la superación del difícil contexto político, estaría, asimismo, relacionada con la supervivencia de una memoria negativa subyacente (claramente instrumental) y no precisamente con un fenómeno de amnesia colectiva, y expresaría un complejo aprendizaje de las lecciones del pasado. A este respecto, afirma P. Aguilar:

Que las políticas de la memoria hayan sido insuficientes, y así lo es realmente, y que las voz de las víctimas no haya suscitado la misma atención que en otros países no quiere decir que la democracia española se haya edificado sobre la amnesia o sobre la falta de memoria. Pocos procesos de cambio político han estado tan inspirados en el recuerdo del pasado y las lecciones aprendidas del mismo, como el español. Lo que si es cierto es que la amargura y el trauma asociado a ese pasado (...) parecían aconsejar dejarlo de lado y concentrarse en construir un futuro de convivencia pacífica y democrática.<sup>108</sup>

Cuando se habla del olvido inducido desde las élites políticas del país, pero aceptado tácitamente por la sociedad en su conjunto ante la inestabilidad política, económica y social de la época (crisis económica de los años 70, recrudecimiento de la ofensiva de ETA, ruido de sables antes y después del golpe de estado del 23 de febrero de 1981) - que no invitaba precisamente a la adopción de medidas de justicia transicional o de pública rehabilitación de los republicanos vencidos en la guerra civil-, se quiere significar otra cosa, seguramente una legítima reivindicación de justicia moral inserta en la dinámica de relevo generacional:

Lo que se trata de denunciar en dicho contexto es que no se ha investigado públicamente el pasado (mediante el equivalente a una comisión de la verdad), que no se ha juzgado a los responsables de los delitos de violaciones de los derechos humanos cometidas al amparo de la dictadura (que ni siquiera se les ha identificado a través de un informe que habría podido emanar de la citada comisión), que no se ha prestado suficiente atención a las víctimas del franquismo ni a sus familiares (ni se les ha rendido el homenaje que merecen, ni se ha realizado esfuerzo alguno por recopilar sus testimonios) y, finalmente, que las autoridades, al permitir la impunidad de los victimarios, no han creado el clima propicio para que las víctimas sean capaces de sobreponerse al miedo que les ha atenazado durante tantos años, y al trauma derivado de la persecución y la violencia, lo que explicaría que no pocos se hayan sumido en el silencio<sup>109</sup>

Asimismo, las miles de fosas comunes por exhumar a lo largo del territorio nacional, las evidentes lagunas en las medidas de reparación material tomadas desde los inicios de la transición (diseñadas para equiparar derechos entre vencedores y vencidos, pero sin

<sup>108</sup> P. Aguilar, *Políticas de la memoria. Memorias de la política*, op cit, p.70-71.

<sup>109</sup>Ibid, p. 69-70.

reconocer la condición de víctimas de estos últimos, al emanar de la capacidad discrecional del Estado de decretar medidas de gracia), la excesiva lentitud en el reconocimiento simbólico y moral de la causa de los republicanos y antifranquistas --no hay monumento nacionales al conjunto de las víctimas de ambos bandos, ni lugares de memoria en el calendario, importantes símbolos del franquismo permanecen inalterables, no ha habido anulación de procesos judiciales de raíz política- y la escasa concreción de los poderes públicos y de partidos políticos como el PP en la condena del franquismo explicarían que, desde la perspectiva de las asociaciones de víctimas y de una parte importante de la sociedad española, se considere superado el pacto de silencio y se demanden fórmulas para resolver las cuestiones pendientes.

Entre ellas, medidas como las “comisiones de la verdad”, que la ONU recomendó en 2008, serían útiles para fijar una “verdad oficial”, dirigida directamente a la sociedad, y aunque supondrían una interferencia de la política en el campo y la función historiográfica --que sólo podría justificarse en casos flagrantes de crímenes contra la humanidad-- compensarían, al menos moralmente, el hecho de que ningún dirigente franquista, ni alto cargo militar o policial, haya comparecido nunca ante un tribunal (tampoco ha habido muestras públicas de arrepentimiento) y, en cambio, la justicia franquista si emprendiera en su día una causa general para juzgar la represión en zona republicana.

Esta acusada sensibilidad social hacia lo que se ha considerado un silenciamiento o un secuestro de la memoria histórica de un país, no tendría en cuenta las medidas legislativas adoptadas paulatinamente en varias direcciones y escalas (la Ley de memoria histórica en 2007, por ejemplo) y reflejaría, de igual manera, la escasa permeabilidad de la sociedad española actual al potente trabajo de la historiografía en las últimas décadas. Otra arista de este complejo problema estriba en la negativa a aceptar lo que a estas alturas parece irreversible, esto es, la sólida penetración en la sociedad española de la memoria y del discurso de auto-justificación franquista -- la existencia de múltiples memorias históricas parciales revela, entre ellas, la heredada del régimen anterior--, ante el que sólo valdría un continuado esfuerzo pedagógico o, en otras palabras, la abdicación de los usos invasivos o manipulativos de la/las memorias en el trabajo científico (pero, en ningún modo, excluyente) de los historiadores

Si nos hemos extendido en estas consideraciones ha sido para entender el contexto en el que en estos últimos años algunos investigadores e intelectuales, en representación de esa sensibilidad social insatisfecha con el tratamiento público a las víctimas republicanas, han asumido, como vectores de una pujante memoria cultural, la reivindicación de algunas figuras (caso de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle en la actualidad), instituciones o símbolos condenados al olvido, haciendo al mismo tiempo una nueva y legítima lectura del pasado en función de las distintas inercias del presente.

Retomando el hilo cronológico utilizado desde el inicio de este capítulo, las primeras memorias individuales que durante los años setenta y ochenta del pasado siglo hicieron visible, aunque tangencialmente en la mayoría de los casos, la imagen de Francisco Pérez Carballo fueron las de antiguos correligionarios y compañeros suyos que escribieron acerca de sus experiencias vitales y políticas en España y el exilio.

Santos Martínez Saura, secretario particular de Azaña, comenzó a escribir sus memorias políticas durante los años setenta en su exilio mexicano. Su estilo elocuente e irónico, un tanto excesivo en algunos pasajes, nos acercó con notable agudeza a la figura política de Azaña y el contexto histórico de una época decisiva. De Francisco Pérez Carballo, uno de los miembros de las Juventudes de IR con más proyección profesional y política, Martínez Saura refería únicamente, aunque sin ahorrarse adjetivos, el hecho de su muerte y la de su esposa, tendencia acusada en la percepción social de su historia por parte de las memorias individuales y colectivas de varias generaciones, independientemente de la ideología de quien recuerda. Lo hacía en estos términos:

Otra salvajada más que cometieron allí los facciosos fue el fusilamiento del gobernador civil Pérez Carballo y de su mujer Juana Capdevielle, licenciada en Filosofía y Letras y archivista de la Facultad de Madrid, acababa de casarse y estaba embarazada, ambos eran miembros destacados de la FUE y quizá por ello señalados por el odio de aquellas bestias<sup>110</sup>

Más extenso y complejo es, sin duda, el recuerdo de Pérez Carballo en la memoria de Francisco Ayala. Como estudiantes de edades relativamente próximas,<sup>111</sup> fueron compañeros en la facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, que en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, y durante el gobierno Berenguer, vivió tiempos de agitación estudiantil y fuerte coacción gubernamental. Coincidieron también en el claustro de profesores de esta facultad a partir del curso 1933-34, fecha de la incorporación de Pérez Carballo al mismo, Ayala como auxiliar de Derecho Político (y secretario de la facultad) y Pérez Carballo como ayudante de prácticas de Derecho Romano. De forma paralela, ambos se presentaron y aprobaron en la misma convocatoria la oposición a oficial letrado del Congreso de los Diputados, tomando posesión de sus respectivos cargos en marzo de 1933.

Como reconoció Francisco Ayala en *Recuerdos y olvidos*, mantuvo una particular relación de amistad con varios de sus compañeros del Cuerpo de Letrados del Congreso. Entre ellos, citaba los nombres de Jesús Rubio, Segismundo Royo Villanova, Medina Echavarría y el propio Pérez Carballo, “un gallego muy joven –creo que el más joven de nuestra promoción— y muy ambicioso, a quien fusilarían los rebeldes en La Coruña, donde era gobernador, a la vez que asesinaban a su esposa en cinta”.<sup>112</sup>

El recuerdo de su antiguo compañero Pérez Carballo afloró de nuevo cuando Francisco Ayala, en el mismo libro, rememoraba su regreso a España, ya iniciada la guerra civil, después de haber impartido un ciclo de conferencias por varios países suramericanos, y su posterior reincorporación a la Secretaría del Congreso de los Diputados, en un Madrid azotado por la violencia y el miedo. El reencuentro con Jesús Rubio, quien permanecía en activo dentro del cuerpo de oficiales letrados del Congreso (dos décadas más tarde ministro de Educación con Franco), quizá su amigo más íntimo en aquella época, dio paso a frecuentes encuentros y, en sus conversaciones, a la evocación de antiguos compañeros:

<sup>110</sup> S. Martínez Saura, *Memorias del secretario de Azaña*, Madrid, Planeta, 1999, p. 459.

<sup>111</sup> Ayala había nacido en 1906 y Pérez Carballo en 1910, por lo que si no coincidieron en clase en ninguna de las asignaturas de la carrera, al menos si compartieron durante un corto periodo de tiempo la condición de estudiantes de licenciatura.

<sup>112112</sup> F. Ayala, *Recuerdos y olvidos*, Madrid, Alianza, 2006, p. 161.

Solíamos compartir tanto algunos placeres artísticos (el tocaba muy bien el piano y con frecuencia iba a tocarlo también a mi casa), como las bromas a expensas de algunos de nuestros compañeros, del ambicioso y caviloso Pérez Carballo, del ingenuo Rodríguez (que, siendo marxista, se aplicaba con ahínco al estudio del Derecho Mercantil para ser catedrático de la asignatura) y de los amigos falangistas, a cuya tertulia de la Ballena Alegre nos asomábamos alguna vez...”¿Para qué has venido?. Tenía obligación de venir”, fue mi respuesta. Y ya no hablamos más; estaba todo dicho.<sup>113</sup>

El mismo año de la primera edición de *Retratos y olvidos*, Rosario Hiriart publicaba *Conversaciones con Francisco Ayala* en la *Colección Austral*. Cuando la autora le preguntó al escritor granadino si tomó parte activa en la vida política durante los años anteriores a la República o durante ésta, Ayala se mostró tajante en su respuesta:

--Pues, según le decía, la actividad política en ese sentido me ha resultado siempre inadecuada a mi temperamento y aficiones (...)En un sentido amplio, ¿quién no hace política? Vivir es hacer política, tanto en el plano nacional e internacional como en el personal, pues la vida humana es histórica y el motor de la historia es la política. Pero yo nunca tuve la ambición de poner las manos en las palancas del mando...Recuerdo la extrañeza que me causaba el afán de un compañero mío en el cuerpo de Letrados del Congreso, un muchacho muy joven, gallego, Pérez Carballo, que deseaba ardientemente entrar en el juego político, y consiguió en efecto ser nombrado gobernador civil de La Coruña a raíz de triunfar en las elecciones el Frente Popular. Al infeliz, el logro de esa ambición le costó la vida pues a él y a su mujer, embarazada, los asesinaron los sublevados; pero ese destino me conmovió de una manera muy especial pues yo había presenciado con estupefacción sus afanes, para mí incomprensibles, de lograr el cargo donde le aguardaba la muerte. Estupefacción, digo, por ser algo tan radicalmente ajeno a mí naturaleza que apenas podía comprenderlo. Es una incapacidad mía de la que no alardeo, pues sé muy bien que constituye una seria limitación.<sup>114</sup>

Como ponen de manifiesto los fragmentos citados, Francisco Ayala reconocía sin ambages su incapacidad para la acción política y su renuncia a todo lo que significaba la cercanía a las instituciones y al poder, cuestión sobre la que reflexionó y se reiteró en sus escritos ensayísticos. Quizá como teórico del derecho político, como pensador inclinado hacia un “liberalismo esencial”, asumía las posiciones asépticas propias de los intelectuales no comprometidos o, tal vez, su memoria rechazaba con un énfasis especial la ambición política, por otra parte legítima, de la cohorte que rodeaba a Azaña, en función de fuertes principios morales o de determinadas diferencias personales, como reflejaba su decepción final ante el abandono de Azaña de la presidencia de gobierno para asumir la de la República. De cualquier modo, la lucidez de su escritura, su capacidad de sintetizar procesos políticos e históricos complejos, contrastaba en este caso con la frialdad de algunos retratos esbozados, y el de Francisco Pérez Carballo, contemplado en la dimensión de su insoslayable tragedia personal y familiar, sería un ejemplo.

Por su parte, Emilio González López, discípulo de Luis Jiménez de Asúa, profesor de Derecho Penal en varias universidades españolas, y, ya en el exilio, de Historia en el Hunter College de New York, fue secretario general de la FUE durante la dictadura de Primo de Rivera (con posterioridad, al dejar el cargo, fue miembro de su consejo nacional durante la República) y diputado a Cortes por la ORGA e Izquierda Republicana. Conoció a Francisco Pérez Carballo como miembro de la FUE y alumno

<sup>113</sup> Ibidem, p. 197.

<sup>114</sup> R. Hiriart, *Conversaciones con Francisco Ayala*, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 60-61.

de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, de la que González López fue profesor auxiliar en la cátedra de Derecho Penal.

La noche del 18 de julio González López se encontraba en el edificio de Telefónica en Madrid, junto a su cuñado Emilio Morayta, consejero del gobierno en la compañía, desde cuyo despacho pudo mantener comunicaciones telefónicas, entre otros interlocutores, con muchos gobernadores civiles a los que encontró desorientados y llenos de incertidumbre ante la gravedad de la situación y la imprevisión y negligencia que había demostrado el gobierno de Casares Quiroga desde un primer momento. Según esta visión de los hechos, la inoperancia y la improvisación gubernamental tuvo mucho que ver con la actitud personal de Casares Quiroga -su indecisa y premiosa manera de hacer política-, en quien carga la responsabilidad principal en la falta de un plan de actuación contra conspiradores y golpistas, coordinado entre el gobierno, los gobernadores civiles y las distintas fuerzas policiales y militares. De su experiencia en las conversaciones mantenidas con los gobernadores civiles, subrayaba el caso de Pérez Carballo:

Con el gobernador de La Coruña, mi antiguo discípulo Francisco Pérez Carballo, Oficial Letrado del Congreso, hablé varias veces en esa noche angustiosa; y pude comprobar su desorientación e incertidumbre, su falta de preparación, de instrucciones y de fuerzas para enfrentarse con los rebeldes (...) Los gobernadores civiles, muchos de los cuales, entre ellos los de Galicia, pararon con su vida su incertidumbre y su desorientación, que no era la suya, sino la del gobierno, parecían irresolutos y perdidos en medio de una gran confusión (...) Y de todos los gobiernos civiles con los que hablé fue en el de La Coruña en el que el gobernador era víctima de esa total falta de preparación por parte del gobierno de un plan en el que se coordinaran las fuerzas militares leales, sobre todo las de los guardias de Asalto, con las civiles<sup>115</sup>

Las críticas de González López al gobierno republicano y a la figura de Casares se insertan en la memoria negativa fraguada, desde muy diversas posiciones ideológicas e intelectuales, en torno a la personalidad política y humana del presidente del gobierno que debió afrontar la sublevación militar. El silencio en el que se sumió voluntariamente el propio Casares Quiroga durante la guerra, el exilio y hasta su muerte contribuyó, sin duda, a aumentar su particular leyenda negra: la del perfecto chivo expiatorio del bando republicano, que excluía cualquier matización destinada a explicar esa aparente inacción gubernamental en términos de una estrategia apaciguadora, de un plan consensuado para evitar cualquier tipo de provocación a las fuerzas antirrepublicanas.

Y, como hemos visto muy claramente en este caso, los más próximos a Casares, entre ellos gobernadores civiles como Francisco Pérez Carballo, cuya proyección política estuvo vinculada aparentemente al peso específico del político coruñés dentro de IR, al menos a los ojos de sus contemporáneos, se vieron afectados por la severidad de estos juicios, aunque, en este caso, se matice su responsabilidad subsidiaria de los fatales errores gubernamentales y se incida en su vulnerabilidad ante la ausencia de información y directrices claras de actuación, traducidas en las dificultades de coordinación con el poder central y los cuerpos de seguridad y militares a su cargo.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> E. González López, *Memorias de un diputado republicano en la guerra civil española (1936-1939)*, Sada (A Coruña), Edicións do Castro, 1990, p. 17-18

<sup>116</sup> Joaquín Maurín, dirigente del POUM que había llegado a A Coruña el 19 de julio como una escala más en su viaje de propaganda por Galicia, mantuvo ese día y el siguiente varias reuniones con Pérez

Distinto es el caso de Francisco García Valdecasas, amigo de Pérez Carballo desde los tiempos del instituto Cardenal Cisneros y la Universidad Central, donde estudió Medicina, se especializó en Fisiología y fue discípulo de Negrín, mucho antes de significarse, como catedrático de Farmacología y rector de la Universidad de Barcelona (1965-1969), en la política represiva contra el movimiento estudiantil de esta ciudad.

Al recordar sus vivencias durante la guerra civil en una entrevista concedida a una publicación de la Real Academia de Medicina de Catalunya en 2003, la memoria de García Valdecasas se detuvo en el recuerdo de Francisco Pérez Carballo, reflejo de una vieja amistad que se vio truncada por la contienda civil:

Jo tenia un amic, molt bona persona, que es deia Francisco Pérez Carballo, fill d'un humil maquinista de la Renfe, però amb un cap extraordinari que als 25 anys havia acabat la carrera de dret i havia guanyat oposicions a lletrat del Consejo de Estado i que a les Cortes era un dels homes més significants. El juny del 36, el ministre de la governació el va nomenar governador civil de La Corunya. El 16 de juliol jo em sentia molt disgustat perquè no havia tingut èxit en unes oposicions a càtedra que m'havien anat força bé, i amb una amigueta meva ens en va manar a casa d'aquest amic meu i la nostra arribada va coincidir amb l'Alzamiento Nacional. El meu amic, molt íntegre i bona persona, es va enfrontar amb els rebels, que el van empresonar. Alguns sindicalistes se li van oferir per ajudar-lo atacant els caps militars i immobilitzant-los, però ell no va voler i, l'endemà, un consell de guerra el va condemnar i el van afusellar. Per cert, a la seva dona, que era d'un geni molt viu, la van matar sense cap judici previ<sup>117</sup>.

Elocuentes palabras que trascenderían las diferencias ideológicas para centrarse en el plano humano, habitado por los valores y la dignidad de la persona, en este caso recordados en la historia de un amigo de la infancia.

Como ya hemos señalado páginas atrás, la deuda moral y material que la sociedad española contrajo con las víctimas republicanas de la guerra civil y el franquismo está en realidad lejos de ser saldada. Esta deuda pendiente, que ha impedido durante años la verdadera cicatrización de las heridas del pasado, está siendo transferida en la actualidad, una vez superadas casi por completo las razones que inducían al silencio, a las siguientes generaciones como un legado simbólico. La todavía vacilante respuesta política y material de las instituciones al desafío de la memoria, entendida como la percepción presente de un determinado pasado sustentada por una parte importante de la sociedad, ha generado una creciente insatisfacción entre un amplio sector de la

---

Carballo, quien en la primera de ellas le aconsejó que tomase precauciones y no se inscribiese en el hotel con su nombre real, ni hiciese constar su condición de diputado a Cortes, lo que probablemente le salvó la vida. El gobernador, según el relato de Maurín, parecía estar asustado y desorientado ante el desarrollo de los acontecimientos, impresión coincidente con lo relatado por Emilio González López acerca de las conversaciones mantenidas con Pérez Carballo la noche del 18 de julio. A partir del lunes 20 de julio, el confuso papel de Maurín en los enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno y los sublevados en las calles de A Coruña y, en especial, las circunstancias y vicisitudes que rodearon su frustrado intento de huida hacia territorio republicano y su posterior detención y encarcelamiento durante casi diez años, han hecho que sobre este nada convencional líder revolucionario se haya especulado en diferentes direcciones. Véase el testimonio de Joaquín Maurín y la introducción de Luis Portela en Jeanne Maurín, *Como se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios*, Madrid, Ediciones Jucar, 1980, en especial páginas 9 y 49-50.

<sup>117</sup> A. Caralps, "Retrat de metges: Francisco García Valdecasas", en *Annals de Medicina*, Vol 86, n ° 4 (octubre/noviembre/ diciembre 2004), p. 4.

ciudadanía, adscrito fundamentalmente a posiciones ideológicas de izquierda o nacionalistas.

Este malestar se manifiesta, por ejemplo, en el papel creciente de la memoria cultural en la reivindicación de los vencidos, de los olvidados, ante la lentitud del gobierno y las instituciones en satisfacer plenamente las demandas de justicia moral y material para las víctimas de la represión franquista, basadas en ocasiones, ciertamente, en premisas maximalistas que trascienden imperativos cronológicos y jurídico-técnicos, criterios coyunturales de oportunidad política o la difícil asimilación de la multiplicidad de memorias sociales existentes. A estos velos de la memoria, hay que añadir la extrema dificultad intrínseca al desiderátum de contrarrestar el peso o, directamente, la vigencia de algunos puntos del discurso y la visión histórica elaborados por el franquismo y reconstruidos *ad hoc* en la transición, porque, seguramente, la historia no puede volver atrás como proceso global y revela efectos permanentes entre los cimientos de la sociedad.

Pero lo que importa aquí es constatar que esta memoria cultural existe y se desarrolla paulatina e inexorablemente, y no sólo en función de las dudas del poder político en reconocer los agravios del pasado o en afrontar los evidentes obstáculos hallados en el camino, reducidos parcialmente en los últimos años de gobierno socialista.

Y lo que hemos denominado “memoria cultural” lleva tiempo expresándose en novelas, relatos, ensayos, películas, documentales, obras teatrales, exposiciones y otras manifestaciones artísticas y culturales conducidas por los denominados portadores de memoria, o memory carriers, según la definición de H Rousso “any source that proposes a deliberate reconstruction on a event for a social purpose”.<sup>118</sup>

En el caso de Juana Capdevielle y Francisco Pérez Carballo, la memoria cultural, a espaldas de las instituciones hasta tiempos recientes, ha rescatado gradualmente sus figuras del olvido y las ha elevado a la categoría de metáforas individuales, de símbolos que encarnan a la joven República yugulada por los espejismos revolucionario y contrarrevolucionario, movilizados de las tendencias extremistas involucradas en la controvertida escalada de agitación social y política que condujo al golpe de estado de julio de 1936 y a la desaparición de la democracia parlamentaria en España.

Dos de los máximos exponentes en el proceso de recuperación de la memoria de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle son, sin duda, los escritores y profesores universitarios lucenses Claudio Rodríguez Fer, director de la cátedra *José Ángel Valente* de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del excelente poemario *Tigres de ternura*, y Carmen Blanco, quien en los últimos años, y desde la perspectiva feminista<sup>119</sup> y profundamente humanista subyacente en su obra (orientada directamente hacia el vínculo entre la mujer, la literatura y las relaciones de poder y armonía entre sexos), ha reivindicado y homenajeado con especial intensidad la memoria de ambos en

---

<sup>118</sup> Citada anteriormente (H. Rousso, *The Vichy Syndrome*, p. 11).

<sup>119</sup> Una buena referencia para el análisis de la memoria feminista se encuentra en Marianne Hirsch and Valerie Smith, *Gender and Cultural Memory*, Special Issue of *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28, 1, (2002).



artículos y textos literarios de diversa naturaleza.<sup>120</sup> Hay que señalar que ambos autores no se han limitado a la reconstrucción desde la escritura de la memoria de los republicanos represaliados durante la guerra civil y el franquismo, sino que desde hace años vienen impulsando las actividades de la *Asociación para a dignificación das vítimas do fascismo*, de la que C. Rodríguez Fer es uno de sus directivos, y coordinan la revista *Unión Libre. Cadernos de vida e culturas*, editada por Edicións do Castro, que ha dedicado siempre un espacio central a las voces e historias personales de las víctimas de la represión franquista, con números especiales y monográficos como *Vermellas* (nº 11, 2006).

Quizá el más significativo de los homenajes literarios de Carmen Blanco al matrimonio Pérez Carballo esté contenido en *Atracción fatal* (Xerais, 2008), un libro difícil de clasificar, una profunda indagación sobre temas tan presentes en el lenguaje poético como la belleza o el amor, que también explora la memoria individual y la de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. En palabras de la autora este libro es:

*Unha obra caleidoscópica e fragmentaria feita con fragmentos que son historias e historias construídas con fragmentos, é dicir, confeccionada con distintos fragmentos de vida máis ou menos relacionados entre si (...) A súa estrutura é a do del patchwork ou a da colcha de fargallos que cómpre ler como un tapiz, cunha historia central, quizais a dos amantes de Augas Santas ou tamén a de Xoana Capdevielle.*<sup>121</sup>

Y es la memoria rescatada de Juana Capdevielle –intelectual avanzada a su época, no lastrada por compromiso político alguno-- la que, como tantas veces en los últimos años, nos lleva a la de su marido, el gobernador civil de A Coruña, y no a la inversa

<sup>120</sup> Los trabajos literarios y ensayísticos, artículos en publicaciones periódicas e Internet y otras iniciativas culturales de Carmen Blanco y Claudio Rodríguez Fer que, en su totalidad o a través de fragmentos o poemas sueltos, se dedican a Juana Capdevielle y Francisco Pérez Carballo, construyendo además un fuerte vínculo de memoria, serían hasta el momento los siguientes:

Bibliografía:

- C. Blanco, "Xoana Capdevielle", en *Marea negra* 11, Ferrol, enero-febrero (2006), pp. 3.
- "Vida y muerte de Juana Capdevielle", en *Unión Libre*, nº 11, *Vermellas*, Edicións do Castro (2006), pp. 13-22.
- "Juana Capdevielle", *Álbum de mulleres*, [www.culturagalega.org](http://www.culturagalega.org), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega (2006).
- Catálogo de la exposición *Vermellas. Chamábanlles "rojas"*, organizada por la Vicerrectoría de Cultura de la Universidad de Santiago de Compostela, dentro de las actividades del *Lugo cultural* (2009).
- Homenajes literarios:
- C. Blanco, *Alba de mulleres*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2003.
- "Juana Capdevielle", *Foeminas, Revista virtual de género*, nº 4, Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Lugo (2006). Recopilado en Manuel Fernández Rodríguez, (ed), *Poemas pola memoria (1936-2006)*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006.
- *Atracción total*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2008.
- "Juana Capdevielle", en *Foeminas. Revista virtual de género*, Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Lugo, marzo de 2009.
- C. Rodríguez Fer, "As costureiras", en *Unión Libre*, nº 11, *Vermellas*, Edicións do Castro, 2006.
- *A loita continúa*, Edicións Xerais de Galicia, 2004.
- *Km. 526*, Aula de Teatro de la USC, dirección y dramaturgia de Paloma Lugilde (sobre el texto "As costureiras", de C. Rodríguez Fer), 2006.
- "A Juana Capdevielle", en *Ámote vermella*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009.
- "La última lección de las maestras", en *Foeminas. Revista virtual de género de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Lugo*, julio de 2009.

<sup>121</sup> C. Blanco, *Atracción total*, op cit, p. 13-14.

como en décadas anteriores, donde la imagen de Juana se contemplaba en función de su ascendente y vinculación a su marido o como la protagonista del último episodio de una dilatada tragedia familiar, para constituir juntas ahora un símbolo del legado republicano de modernidad y esplendor intelectual.

Pero ante todo, se hace mención al papel relevante de Juana Capdevielle en la memoria resistente y a la responsabilidad asumida por la autora en la reivindicación de su figura y su elevación paulatina, ya rehabilitada a través de la palabra, al imaginario de la memoria colectiva. Este es el quizá el más importante de los fragmentos que Carmen Blanco le dedica a la esposa de Pérez Carballo:

***Juana Capdevielle***

*Hoxe vimos só dous amantes solitarios pasear os foxos de Rábade que acolleron tenros o teu corpo e visitar silenciosos a túa tumba solitaria, mais prométoche, Juana Capdevielle, que, como xa está o teu nome na memoria resistente antifascista, estará tamén un día na memoria comunal de todos coa máxima dignidade, que é a das vítimas insubmisas acosadas, torturadas e asesinadas pola prepotencia do poder fascista.*<sup>122</sup>

A partir de este pequeño texto surgen otros dedicados de forma sintética a los últimos días en la vida de Juana, desde su salida apresurada del Gobierno Civil de A Coruña, al inicio de las hostilidades, hasta su *muerte gallega*, y a perfilar definitivamente su retrato de mujer culta y progresista. De este modo, Carmen Blanco desempeña la función de “memory carrier” y contribuye, a través de la práctica de la memoria cultural, a la recuperación de principios y valores compartidos a lo largo del tiempo, elementos del aura de modernidad que tanto Francisco Pérez Carballo como Juana Capdevielle proyectaron en los críticos años treinta, para convertirlos ahora en símbolos y referencias personales y colectivos, en aras de una nueva sociedad posible.

Veamos algunos otros fragmentos especialmente significativos a lo largo de estas páginas, tejidos con una vocación minimalista. El primero, la nueva identidad gallega de Juana (madrileña de padre francés y madre navarra), cuya conexión con Galicia se fragua realmente desde sus últimos meses de vida en A Coruña y tras su muerte e inhumación en el cementerio de Rábade, a escasos Kilómetros de la ciudad de Lugo. Esta íntima adopción post-mortem trascendería, probablemente, el lenguaje poético y sus posibles lecturas políticas -en clave de silencios y olvidos oficiales o, en otro sentido, desde la mística nacionalista- para expresar un sentimiento intenso, profundo, hacia Juana, adoptada simbólicamente como hija de la tierra que la vio morir:

***Galega por la morte***

*Desde que chegaches a Galicia temiches sempre, con fundamento, pola vida do teu home, mais non imaxinaches ata ao final que a ti mesma te farían galega pola morte.*<sup>123</sup>

En el segundo, hay una referencia al mito de una Juana Capdevielle resistente dentro de los muros del edificio del Gobierno Civil, que es convenientemente matizado:

***Atendendo os feridos***

*Aínda que ti eras xa uhah refuxiada, a mente mítica dos dous bandos imaxinábate en pé xunto ao teu home na defensa do Goberno Civil atendendo os feridos.*<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Ibid. p. 152.

<sup>123</sup> Ibid. p.. 155.

<sup>124</sup> Ibid, p. 157.

Y en el siguiente aparece un retrato que, desde una perspectiva feminista y comprometida activamente con los derechos humanos, revela a la joven precursora, a la mujer intelectual, trabajadora y moderna que contribuía al cambio social, a la víctima finalmente (sujeto, por lo tanto, de una necesaria reivindicación), residente en la memoria junto al hombre con el que compartió todos sus valores, la imagen simbólica perfecta, por otra parte, para apoyar el discurso contra las huellas latentes en la sociedad actual del poder ilegítimo de una dictadura:

***Mulleres cultas e progresistas.***

*Juana foi unha bibliotecaria que participou moi activamente na alta cultura madrileña da República desde o seo da Universidade e do Ateneo. Pertenceu ao grupo de mulleres cultas e progresistas que estaba cambiando coa súa existencia consecuenta a vida pública e privada do país. Estivo afeada nas súas tarefas intelectuais e tardou en coñecer a un home que lle gustase por todo. Cando o encontrou casou con el e ao pouco tempo a parella ven vivir a Galicia, cando o home se puxo á fronte do Goberno Civil da Coruña, por cuxa defensa perdería a vida.<sup>125</sup>*

Juana Capdevielle y su marido Francisco Pérez Carballo simbolizan, por lo tanto – desde esta perspectiva-, uno de los legados más brillantes de la República, cuya identidad abstracta, no sólo como forma de estado vinculada a las ideas de democracia y modernización, sino como modo de entender y concebir el mundo, encarnarían desde la óptica de la memoria cultural republicana. Un legado traducido en el brillo intelectual de sus hombres y mujeres más eminentes y, también, más señalados por la tragedia:

***Das mellores cousas da República***

*A parella Francisco Pérez Carballo e Juana Capdevielle formaba parte das mellores cousas da República. O fascismo non puido soportar o brillo das súas figuras e liquidounos aos dous ignominiosamente. Mais na historia do progreso quedarán para sempre.<sup>126</sup>*

Y ese legado está siendo recuperado por los que se han convertido voluntariamente en portadores de su memoria, metáfora de la ilusión republicana, con el fin de extraer los valores contenidos en ella y fijarlos en una ética social capaz de influir en el presente y proyectarse en el futuro. Valores democráticos, republicanos, ciudadanos, constitutivos de la dignidad del individuo, restablecidos ahora por analogía con la modernidad y el progreso social invocados, mediante el trabajo de las memorias colectiva y cultural. Así pues, el caso que nos ocupa se podría entender mejor en el contexto de un proceso global protagonizado por la memoria colectiva:

By mediating and paring the past and the present, as well as providing analogies to events of the present in past events, collective memory is strategic in character and capable of influencing the present. In other words, as we search for a means to impose a meaningful order upon reality, we rely on memory for the provision of symbolic representations and frames which can influence and organize both our actions and our conceptions of ourselves.<sup>127</sup>

Por último, el latido poético, que trasciende sin dificultad las dimensiones social y política de los textos, nos deja en la misma obra una señal inequívoca. Veamos un fragmento donde se reproduce, traducida al gallego, parte de la nota que el gobernador Pérez Carballo le dejó a su esposa unas horas antes de ser ejecutado –cedida por la

<sup>125</sup> Ibid, p. 158.

<sup>126</sup> Ibid, p. 158.

<sup>127</sup> B. Misztal, *Theories of social remembering*, op cit, pp. 13.

familia-- y la contestación figurada de Juana Capdevielle nacida del pulso íntimo de la autora, que en este caso encarna y representa a la intelectual madrileña:

***O amor é indestrutible.***

*Juana fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentres poida pensar, pensarei en ti. Será como si estivésemos xuntos. Deixáchesme dito na noite do vinte e catro de xullo antes de que te matasen. Paco, fuches o máis fermoso da miña vida. Onde estea e mentres poida pensar, pensarei en t. Será como se estivésemos xuntos. Dígoche na noite do dezoito de agosto de 1936 antes de que me maten e pensó: quitaranme a vida, mais no me quitarán o amor porque o amor é indestrutible.*<sup>128</sup>

Por su parte, Claudio Rodríguez Fer escribió “As costureiras”, textos para teatro en memoria de Juana Capdevielle y las maestras socialistas Mercedes Romero Abellá (viuda del dirigente de la UGT coruñesa Francisco Mazariegos) y María Suárez, víctimas mortales de la represión franquista en Galicia.<sup>129</sup> Su adaptación teatral corrió a cargo de Paloma Lugilde, directora también de la obra que llevó por título *Km 526*, en referencia al punto exacto de la antigua carretera Madrid-A Coruña donde apareció el cadáver de Juana Capdevielle, trasladada allí desde Vilaboa (Culleredo) por sus verdugos, probablemente falangistas. La obra fue representada por el *Taller de Arte Dramático de la Universidad de Santiago de Compostela* (campus de Lugo) durante la *IV Mostra Teatro Cidade de Lugo*, celebrada del 2 al 10 de mayo de 2006, año declarado de la Memoria Histórica por el Congreso de los Diputados. En el programa de la obra figuraba una sinopsis del argumento, acompañada de una acertada contextualización factual, que explica claramente su articulación como vector de memoria entre el aliento poético y la sugestión histórica de la escena teatral:

***Argumento.***

*Juana Capdevielle, bibliotecaria no Ateneo y na Universidade, licenciada en Filosofía y Letras e intelectual republicana. Casou polo civil con Francisco Pérez Carballo, último gobernador da República en A Coruña, fusilado no 36. Ela foi primeiro encarcerada e logo posta en liberdade, pero o 17 de agosto de 1936 foi secuestrada e na madrugada do día seguinte apareceu acribillada a balazos nunha cuneta da estrada de A Coruña a Madrid, a poucos metros do paso a nivel de Rábade (Lugo). Unha persoa caritativa donou a caixa e aínda segue hoxe enterrada no cemiterio da vila. Estaba embarazada de varios meses.*

*A obra xira en torno a Juana e Francisco: primeiro cando se coñecen en Madrid e logo xa como matrimonio en A Coruña ata que os matan: as costureiras de Lugo entre as que se encontra Luz, unha moza aprendiz de poeta que quere coñecer a Juana, e ao doutor Rafael de Vega Barrera, médico este moi querido na vila lucense e fusilado en outubro do 36 tras un proceso cheo de inxustizas, venganzas e envexas.*

*Km 526 pretende ser un agarimoso recordo a todos aqueles seres humanos aos que se lles arrinocu a vida nunha cuneta.*

En 2009, Rodríguez Fer publicó *Ámote vermella*, que contenía un bello y emotivo poema dedicado a Juana Capdevielle. Unos pocos versos para un abrupto viaje de ida y vuelta hacia el pasado, del que no se hace una lectura solamente en función de los estímulos y necesidades del presente (la resistencia ante los excesos del poder, la denuncia del vacío legal y la indiferencia ante las víctimas), sino que se contempla desde posiciones claramente humanistas, en busca de referentes que consoliden

<sup>128</sup> Ibid, p. 158-159.

<sup>129</sup> Véase *Unión Libre. Cadernos de vida e culturas*, nº 11 (2006), p. 37-47.

identidades paralelas, imágenes de legítimos sucesores en la lucha por un mundo más justo:

**A Juana Capdevielle**

*Dispararon á cabeza de mapoula,  
mais medraron libres as silveiras  
e nunca desfaleceron as ideas.  
Dispararon ao corazón da rosa,  
mmis volveron voar as bolboretas  
e nunca feneceron os amores.  
Matáronna co prexuízo sen xuízo,  
Como quen queima xestas florecidas,  
E por iso é patrimonio da xustiza.  
Chamábase Juana Capdevielle,  
Como podía chamarse a vida mesma:  
morreu, como viviu, de amor e libaerdade.  
En Rábade deixounos un carábel  
para reinventar o amar, un xirasol  
co que pacer a paz e unha violeta  
para fabricar futuros mais muller.<sup>130</sup>*

Tanto Carme Blanco como C. Rodríguez Fer formaron parte del equipo de trabajo de la Vicerreitoría de Cultura de la Universidad de Santiago de Compostela (junto a varios investigadores vinculados al proyecto interuniversitario “As Víctimas, as voces, os nomes e os lugares”), encargado de organizar la exposición *Vermellas: Chamábanlles “rojas”*. *Borradas da historia*, inaugurada en marzo de 2009 dentro de los actos organizados por el consorcio *Lugo cultural*, en virtud del convenio firmado entre la Universidad de Santiago, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, la Fundación Caixa Galicia y el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo. El objetivo de esta exposición era restaurar la memoria de las mujeres que sufrieron en Galicia la violencia de la represión franquista durante la guerra civil.<sup>131</sup>

Otra expresión de la memoria cultural gallega como reconocimiento a la esposa del gobernador Pérez Carballo procedió también del mundo universitario, en este caso de la Universidad de A Coruña, que le dio el nombre de *Xoana Capdevielle* al edificio que alberga la biblioteca central de esta universidad (campus de Elviña), en cuya fachada principal se han colocado recientemente (mayo de 2010) fotografías del matrimonio Pérez Carballo.

Desde Madrid, la perspectiva de la memoria cultural ha dado también sus frutos en relación al caso que nos ocupa. Así, el escritor y periodista Rafael Torres publicó a finales de 2009 *Nuestra Señora de la Cuneta*, cuyo eje narrativo se trazó en torno a la muerte trágica de Juana Capdevielle, desde el que se proyectan síntesis biográficas de la

<sup>130</sup> Tomado de C. Rodríguez Fer, *Ámote vermella*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009.

<sup>131</sup> En el catálogo de la exposición figura un interesante artículo -- a cargo del equipo de investigadores del proyecto “As vítimas, as voces, os nomes e os lugares”, integrado por A. Domínguez Almansa, G. Hervella García, C. Martínez Domínguez y Antonio Somoza Cayado--, bajo el título “Da visualización social da muller á inmersión no terror: 1936. Golpe de estado, vítimas e memoria” (Catálogo de la exposición *Vermellas: Chamábanlles “rojas”...*) que identifica varias categorías simbólicas en la memoria de la represión de las mujeres en Galicia y diversos tipos de transmisión memorística, así como un primer informe sobre tipologías y perfil social de las represaliadas entre 1936 y 1939, que arroja una cifra inicial de 397, entre ejecutadas, encarceladas y procesadas sin condena.

bibliotecaria madrileña y de Francisco Pérez Carballo, complementada con pasajes relativos a la represión en la ciudad y la provincia de Lugo.

Muy interesante resulta la reconstrucción que hizo el autor de las últimas horas en la vida de Juana Capdevielle y de las circunstancias en que fue descubierto y reconocido su cadáver, para lo que contó con el relato de testigos directos de los hechos, entre ellos, de dos hijos de José Penas, el médico encargado del examen forense del cuerpo de Juana en el probable lugar del crimen, al que acompañaron en aquella ocasión. Las conclusiones a las que llega Rafael Torres no trascienden sustancialmente lo ya conocido, aunque la coherencia y lógica del relato permite descartar las hipótesis menos consistentes, iluminando así algunas zonas de sombra. Entre lo más importante, la reafirmación de la imputación de la máxima responsabilidad en el crimen a Florentino González Valles --teniente coronel de la Guardia Civil, conspirador reincidente contra las instituciones republicanas y sustituto de Pérez Carballo al frente del Gobierno Civil después del triunfo de la sublevación en A Coruña— y la sospecha cabal, basada en el testimonio de Ángel Pérez Carballo, quien se entrevistó en los años cuarenta con un fiscal implicado en la trama que acabó con la vida de Juana Capdevielle, de que si las autoridades franquistas involucradas esperaron hasta el 18 de agosto para ejecutarla fue porque se tomaron su tiempo para pensar el modo de infligir una muerte lo más abyecta posible a un mujer en avanzado estado de gestación. Proceso en el que el fiscal “arrepentido” propuso la solución más “humanitaria”, el fusilamiento,<sup>132</sup> sugerencia que, en cierto modo, fue finalmente la escogida, pues la infortunada esposa del gobernador civil de A Coruña murió de tres disparos recibidos en pecho y cabeza. En definitiva, se trata de una emotiva y documentada aportación de Rafael Torres a la memoria de una intelectual demócrata sin adscripción política concreta, ni responsabilidad alguna en la toma de decisiones y la consecuente resistencia activa a la sublevación militar en A Coruña, más allá de su vitalidad y el apoyo moral brindado a su marido en una coyuntura tan crítica, pero que representaba un modelo de mujer inasumible para la atávica sociedad resucitada por un estado asentado en la violencia y la anulación del pensamiento crítico.

*Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad Central*, es la aportación de Cristina Gállego Rubio (bibliotecaria también y funcionaria de los servicios centrales de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid) al entronque de una trayectoria vital y profesional en la memoria colectiva de la generación de técnicos e intelectuales que protagonizó la modernización de la biblioteca de la Universidad Central durante la II República. En palabras de la autora:

En la recuperación de la memoria histórica de Juana Capdevielle, este libro pretende ser una aportación más que contribuya a la rehabilitación de su figura, cuyo entusiasmo como bibliotecaria de la Universidad de Madrid, junto al de sus compañeros de trabajo, cumplió con

---

<sup>132</sup> Véase el testimonio de Ángel Pérez Carballo, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, op cit, vol II, p. 701. Se da la particularidad, además, de que la iniciativa de la reunión partió del mismo fiscal, quien en 1945, y en previsión de que la situación política pudiera dar un giro radical tras el triunfo de las potencias aliadas sobre el fascismo, quiso poner de relieve su gesto en medio de la indisimulada maldad de los otros ideólogos del asesinato.

creces el sueño de transformar una biblioteca que languidecía en otra moderna y adaptada a los nuevos tiempos<sup>133</sup>

Este sobrio, documentado y transparente ejercicio de rehabilitación de la memoria individual en el seno, fundamentalmente, de una determinada memoria colectiva, que podríamos denominar gremial por su estrecha vinculación a una determinada categoría profesional, se centra en la dimensión que adquiere la figura de Juana Capdevielle dentro del mundo cultural y universitario del Madrid republicano. La experiencia vital de Juana es contemplada, en especial, desde la perspectiva de su trayectoria académica, intelectual y profesional y de su papel en la transformación de la biblioteca universitaria en una poderosa herramienta cultural ensamblada en un moderno engranaje universitario, más allá de su tragedia personal y de su rol de víctima, circunstancias que, por otra parte, tampoco obvia esta autora.

En la aproximación a una biografía alejada de una adscripción política concreta –la solvente investigación de la autora no reveló indicio alguno en este sentido–, se nos habla de una Juana Capdevielle que se licenció en Filosofía y Letras (sección de Historia) por la Universidad de Madrid (1928) e ingresó por oposición, en junio de 1930, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, siendo destinada en primera instancia a la Biblioteca Nacional (septiembre de 1930) y, más tarde, en 1931, a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, convirtiéndose poco después (1933) en la primera mujer en ostentar la jefatura de una biblioteca de facultad en la Universidad Central.

En la Universidad Central de Madrid, que alcanzó entonces una de las más altas cotas en la historia universitaria española –el brillo intelectual y docente de su claustro de profesores eran, como es sabido, difícilmente igualable–, los años republicanos y las importantes reformas culturales y educativas inscritas en su ideario modernizador, trajeron, entre otras grandes realizaciones, la reestructuración de la hasta entonces diseminada biblioteca y su centralización bajo la dirección de Javier Laso de la Vega, a cuyas órdenes colaboró decisivamente Juana Capdevielle en el traslado de los fondos de la bibliotecas del Decanato, del Instituto de San Isidro y de las escuelas superiores de Magisterio y Diplomática al nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria.

Cristina Gállego también se refiere a la adscripción de Juana Capdevielle al Ateneo de Madrid, en calidad de socia-bibliotecaria, y a su papel como tesorera de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España y miembro, junto con Martín Almagro, Juana Quílez o María Luisa Fuertes, del Seminario de Biblioteconomía de la universidad madrileña. Las recién creadas bibliotecas de hospital –Juana Capdevielle participó muy activamente en la labor del servicio circulante de lectura constituido en los hospitales Clínico y de San José y Santa Adela–, constituyeron el objeto de la comunicación presentada por la bibliotecaria madrileña al II Congreso Internacional de

---

<sup>133</sup> C. Gállego Rubio, *Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad de Madrid*, Madrid. Editorial Complutense, 2010, p. 144

Bibliotecas y Bibliografía en mayo de 1935.<sup>134</sup> El discurso de inauguración de este evento, un ensayo titulado *La misión del bibliotecario*, fue leído en francés por el catedrático de metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Esta labor como articulista y ponente en congresos científicos no era nueva para Juana Capdevielle, pues años antes había publicado en *Compluto*, revista de la Asociación Profesional de Estudiantes de Filosofía y Letras (FUE) de la Universidad de Madrid, un artículo titulado “La biblioteca de Filosofía y Letras” y presentado, como ya se ha reseñado en otro lugar, a las *Primeras jornadas eugénicas españolas* la ponencia titulada “El problema del amor en el ambiente universitario”.<sup>135</sup>

De igual modo, su interés por el estudio de la Clasificación Decimal Universal, sistema de ordenamiento y clasificación de los fondos que se estaba implementando entonces en la biblioteca de la Universidad Central, le llevó a solicitar y obtener una pensión de cuatro meses para viajar a Francia, Bélgica, Suiza y Alemania, concedida por la Junta de Ampliación de Estudios en 1935. En el capítulo final de su libro, Cristina Gállego Rubio traza también una semblanza de Francisco Pérez Carballo, del que destaca su sólida formación académica e intelectual, un activo importante para un profesor universitario destinado a brillar en las cátedras universitarias de derecho romano.<sup>136</sup>

En los últimos años la memoria cultural madrileña ha ido cristalizando de forma progresiva, conducida desde universidades como la UCM y otras importantes instituciones vinculadas a una nueva sensibilidad política y ética, en varias exposiciones y jornadas conmemorativas, dedicadas a distintos centros universitarios y focos culturales de la etapa republicana, que se han ocupado también en los últimos años de la figura de Juana Capdevielle en su dimensión profesional e intelectual. Así, por ejemplo, la exposición *Bibliotecas en Guerra*, celebrada en la Biblioteca Nacional del 15 de noviembre de 2005 al 19 de febrero de 2006, reservó un espacio significativo a la bibliotecaria madrileña (una fotografía y un texto sobre su trayectoria vital) y a otros archiveros y bibliotecarios comprometidos en la difusión de la cultura durante los años treinta.<sup>137</sup>

Con posterioridad, las *Jornadas conmemorativas del LXXV aniversario del traslado de la Facultad de Filosofía y Letras al nuevo edificio de la Ciudad Universitaria de Madrid* (mayo de 2008), donde se hizo un homenaje a su memoria, y, de manera especial, la espléndida exposición *La facultad de Filosofía y Letras de Madrid durante la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años 30*, celebrada en el Cuartel de Conde Duque de Madrid del día 18 de diciembre de 2008 al 15 de febrero de

<sup>134</sup> El título exacto de la comunicación, incluida en la sección dedicada a las bibliotecas populares, donde también participaron, entre otros, María Moliner y Gabriela Mistral, fue: “El fin que presiguen las bibliotecas de hospital, ¿debe ser distraer o instruir a los enfermos?”, en *Actas del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, 20- 30 de mayo de 1935*, Madrid, Librería de Joaquín Barbazán, 1949, vol. 3, Bibliotecas Populares.

<sup>135</sup> J. Capdevielle San Martín, “La biblioteca de Filosofía y Letras”, en *Compluto*, Revista de la A.P.E.F.L (FUE), Madrid, núm. 1 (1932), p. 14-15; y “El amor en el ambiente universitario”, en *Genética, eugenesia y pedagogía sexual*, op cit, p. 174-192.

<sup>136</sup> C. Gállego Rubio, *Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad Central*, op cit. p.129.

<sup>137</sup> “Juana Capdevielle”, en *Biblioteca en guerra*, Madrid, Biblioteca Nacional, 2005, p.164.



2009, penetraron en la atmósfera cultural de la facultad y de la biblioteca donde estudió y trabajó hasta poco antes de su muerte. En concreto, en la exposición de Conde Duque se mostró una foto tamaño mural de Juana Capdevielle junto a un carro transportador de libros que aún se conserva en la actual biblioteca de Filología de la UCM,<sup>138</sup> tomada en la biblioteca del nuevo edificio de su facultad en la Ciudad Universitaria durante los trabajos de traslado y reubicación de los fondos.<sup>139</sup>

Como se puede observar, en los últimos años son bastantes las manifestaciones de la memoria cultural que desde distintos ángulos se han acercado a la figura de Juana Capdevielle y, desde su halo de intelectual demócrata, mujer avanzada a su tiempo y víctima absolutamente inocente de una violencia extrema, fortalecido por una profunda relación amorosa y de complicidad intelectual con Francisco Pérez Carballo, han conectado con la historia personal del último gobernador republicano de A Coruña y convergido en la lógica compleja de la memoria y el olvido, no siempre subordinada a los componentes ideológicos.

No obstante el hecho de que la memoria cultural se haya adjudicado el papel de arqueóloga del olvido, valga la expresión, la memoria oficial político-institucional o la memoria dominante —en puridad, las memorias colectivas oficiales vigentes en cada momento político—, fagocitada especialmente por la izquierda y los nacionalistas, no ha renunciado al reconocimiento, dignificación y rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Lo ha hecho, eso sí, con un ritmo lento e irregular y a partir, normalmente, de iniciativas de corporaciones locales o instituciones autonómicas, elevadas dificultosamente hasta el poder central, debido a razones políticas coyunturales y a la vigencia de una determinada interpretación de la historia impuesta por el discurso oficial franquista, sólo matizada durante la transición en aras de la estabilidad democrática del país.

En relación al caso que nos ocupa, el primer reconocimiento político-institucional que afectó a la memoria de Francisco Pérez Carballo —así como a la del conjunto de los republicanos fusilados en el denominado *Campo da rata* (Punta Herminia, A Coruña) y, por extensión, al conjunto de las víctimas de la guerra civil— fue la construcción en ese mismo lugar del monumento megalítico diseñado por Isaac Díaz Pardo en homenaje a los “inmolados nestes campos fronte ao mar tenebroso por amar causas justas. Presentes na lembranza do povo e do seu concello da Coruña”, como reza la inscripción conmemorativa colocada al efecto.

El 14 de abril de 2001 se celebró el acto de inauguración del monumento, inspirado en el círculo mágico de Stonehenge y compuesto por siete bloques de granito —una fotografía de un fusilamiento de 1936 y nueve franjas de pintura roja simbolizaban la sangre derramada allí—, que además coincidió con el setenta aniversario de la

---

<sup>138</sup> C. Gállego Rubio, *Ibid*, p 142.

<sup>139</sup> En el catálogo de esta exposición figuran varios artículos que hacen referencia a la figura de Juana Capdevielle. En la parte reservada a testimonios y documentos, se reproduce el artículo “La biblioteca de Filosofía y Letras”, escrito por ella misma y publicado en 1932 en la revista de la A.P.E.F.L (FUE) *Compluto* (citado anteriormente). Catálogo de la exposición *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años 30*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Ayuntamiento de Madrid/ Escuela de Arquitectura/ Fundación de Arquitectura COAM, 2008.

proclamación de la II República, ante cerca de un millar de personas, con la asistencia de las principales autoridades de la ciudad. En declaraciones a la prensa, el por entonces alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, defendió la necesidad de “hacer un justo homenaje a esos miles de personas que pagaron con su vida el ser consecuentes con sus ideas de democracia y libertad”. En opinión de Isaac Díaz Pardo, autor y supervisor del proyecto escultórico, el alcalde Vázquez había sido “o verdadero impulsor da idea que eu únicamente puxen en pé”.<sup>140</sup>

Más tarde, en 2003, el megalito del *Campo da Rata* fue complementado, dentro del parque escultórico allí constituido, por los doce “menhires por la paz”, o “Familia de menhires”, esculturas habitables obra del escultor Manuel Paz, cada uno de los cuales tiene practicada en el centro una abertura que permite ver el mar y la cercana Torre de Hércules. Como puede deducirse de la habitual y contradictoria instrumentación política del pasado por parte de los distintos poderes públicos, el estado actual de conservación de ambos conjuntos escultóricos, transcurridos ya unos años de su inauguración, y a pesar del intenso debate social desatado en torno a la memoria histórica, situada de forma intermitente en el primer plano de la actualidad, no es el más adecuado a la función de *Lieux de mémoire* para la que fueron diseñados.

En concreto, uno de los primeros homenajes que las instituciones políticas españolas rindieron a la memoria de Juana Capdevielle se verificó, a nivel local y autonómico, el sábado 28 de marzo de 2008 en Rábade (Lugo), el lugar donde apareció y recibió sepultura su cadáver, en un acto organizado por el ayuntamiento de este municipio lucense, la Consellería de Presidencia de la Xunta y la Asociación de Amigos de Galicia “O Grelo”. El programa de actos incluyó la inauguración de una estatua, obra de Luciano Couselo, erigida en memoria de la bibliotecaria madrileña -en cuya tumba se depositó un ramo de flores-, la lectura de textos poéticos por parte de Claudio Rodríguez Fer y Carmen Blanco y la alocución, entre otros, del conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia José Luis Méndez Romeu (PSOE), todo ello completado con la actuación de un cuarteto de cuerda y una suelta de palomas.<sup>141</sup>

La ceremonia, la propia figura representada en la estatua, una mujer en escorzo con los brazos estirados, simbolizando según el autor la maternidad perdida y anhelada, remiten al hecho de la muerte de Juana Capdevielle, al salvaje atropello de su inocencia, uno de los ángulos más tratados de su historia a lo largo de los años, ahora ampliado para entroncar con su trayectoria vital y la de su marido Pérez Carballo.

A este respecto, en la obra teatral de C.Rodríguez Fer *As Costureiras*, publicada también en 2008 en el monográfico *Vermellas*, citado anteriormente, aparece, dentro del apartado dedicado a las proyecciones de aspecto documental (voz en off), un fragmento entresacado de un escrito de Gordón Ordás en el que el embajador republicano en

<sup>140</sup> *La Voz de Galicia*, 15-04-2001.

<sup>141</sup> *El Progreso* del día 30 de marzo de 2008 subrayaba una frase pronunciada por el alcalde de Rábade, Francisco Fernández Montes, en la que se refería a Juana Capdevielle como la “mártir que a Rábade lle tocou por azar”, reflejo del simbólico sentimiento de culpa de un pueblo (o al menos de una parte importante de sus vecinos), siempre dispuesto a salvaguardar la memoria de la mujer encontrada en el km 526 de la antigua carretera Madrid- A Coruña. Como prueba de ello, bastaría con mencionar el hecho de que uno o varios vecinos anónimos de Rábade pagaron de su bolsillo la sepultura de Juana Capdevielle, que desde entonces ha sido honrada con flores de forma periódica.

México y Cuba y, posteriormente, presidente del gobierno de la República Española en el Exilio, se refería a la decidida acción del gobernador Pérez Carballo en defensa de la República y a la muerte de Juana Capdevielle.<sup>142</sup>

Según el texto de Gordón Ordás (no se cita la obra en concreto que lo contiene), basado en el relato confidencial de Avenol Montejo, cónsul portugués en A Coruña en el verano de 1936, a Juana Capdevielle le provocaron el aborto deliberadamente en el hospital, pues los falangistas, educados en la tradición católica, no se atrevían a fusilar a una mujer embarazada, cosa que sí hicieron inmediatamente después del aborto en una fosa abierta al efecto. Junto a este texto, aparecía una cita procedente del relato de Ángel Pérez Carballo publicado, recordemos, en el libro de C. Fernández Santander *El alzamiento de 1936 en Galicia*,<sup>143</sup> donde el autor refería la confesión de parte del fiscal José María O. Bejarano, quien reconocía la sádica premeditación con la que se acabó con la vida de la infortunada bibliotecaria madrileña. Si se focalizase estrictamente, haciendo abstracción del carácter de las fuentes citadas, la indudable fuerza narrativa y semántica de ambos fragmentos yuxtapuestos, su significación y valor al representar la visión de un familiar de las víctimas, además de testigo objetivo inmerso en el silencio durante años (Ángel Pérez Carballo), y de un político republicano en su involuntaria contribución a la elaboración social de una leyenda morbosa, se entendería mejor la vigencia del mito del ensañamiento adherido a la memoria de Juana Capdevielle —que, precisamente, por su base verosímil ha eclipsado toda su historia personal— y, al mismo tiempo, la necesidad y pertinencia de contextualizar el legítimo recuerdo a la víctima con el análisis del conjunto de su biografía. Porque muy probablemente ha llegado el momento de enfocar las trayectorias intelectuales y políticas de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle aisladamente, de forma independiente, separándolas cuando sea oportuno y posible de su vínculo conyugal y liberándolas de su trágico final, que durante años ha ensombrecido la realidad de unas cortas pero intensas experiencias vitales.

La política institucional de reconocimiento de la memoria del último gobernador republicano de A Coruña y su esposa vivió un nuevo capítulo el 4 de mayo de 2009, fecha en que el Concello de A Coruña inauguró dos calles en la periferia de la ciudad, muy cerca del Coliseum, con los nombres de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle. La decisión de dedicarle el nombre del gobernador civil a una de las calles de la ciudad fue tomada en abril de 2006 en medio de una nueva polémica memorística entre las dos principales fuerzas políticas del país. La oposición del grupo municipal del PP —partido ausente también en el homenaje del pueblo de Rábade a Juana Capdevielle en 2009— se fundamentó en la invocación de la existencia de víctimas causadas por el bando republicano que merecerían igualmente ese reconocimiento. Un portavoz del PP en el Concello de A Coruña alegó que “murieron muchos de los dos bandos y tal honor debería ser extensivo a todos”.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> “As costureiras. Textos para teatro en lembranza de Juana Capdevielle, María Vázquez Suárez e Mercedes Romero Abellá2, en *Unión Libre*, número 11, Edicións do Castro, pp. 45..

<sup>143</sup> Testimonio de Ángel Pérez Carballo en C. Fernández Santander, *El alzamiento de 1936 en Galicia*, op cit, vol II, pp. 701.

<sup>144</sup> *La Voz de Galicia*, 04-04-2006.

Esta postura de obstrucción de la memoria entronca con la estrategia política seguida por el PP en el debate sobre la memoria histórica a escala nacional –el abuso de la retórica guerra-civilista y las inercias del lastre de la memoria dominante durante una dictadura son factores que afectan a la clase política española en general--, y se hace especialmente coherente, en este caso concreto, si se la refleja en la renuencia de este partido a la eliminación de algunos símbolos del franquismo inscritos en una acentuada cultura de la violencia.

Un ejemplo de las contradicciones latentes en la memoria conservadora estaría en la contumaz defensa que el PP de A Coruña ha realizado durante años de la permanencia de la estatua dedicada por el consistorio coruñés a José Millán Astray en 1970, erigida a la memoria del fundador de la Legión en la plaza que lleva su nombre, hasta su definitiva retirada en la madrugada del 22 de enero de 2010. Postura a favor de un altamente significativo monumento y símbolo franquista que haría más difícil entender la oposición reiterada del grupo municipal popular al reconocimiento que la ciudad de A Coruña le hizo a Francisco Pérez Carballo, expresado en la simple imposición de su nombre a una de las calles de la ciudad.

Los seiscientos kilogramos de bronce y tres metros de altura de la estatua, el nombre de la plaza en sí y las especiales connotaciones asociadas a la figura de Millán Astray contrastaban con la ausencia en más de tres décadas de democracia de cualquier lugar de memoria, por modesto que fuese, dedicado a quien representó, con mayor o menor acierto, la defensa de la democracia republicana, acosada desde diversos flancos ideológicos y, en especial, desde el de la sublevación militar. Pero esto se veía de otra forma desde el grupo municipal del PP, que con su actitud apoyó de forma implícita los recursos de reposición presentados por la hija de Millán Astray, Peregrina Millán-Astray Gasset, y un grupo de veteranos de la legión, movilizados desde hacía tiempo en contra de la decisión adoptada por el concello de A Coruña en el sentido de estudiar la retirada de su emplazamiento de la estatua del militar gallego.

Por su parte, el bipartito (PSOE-BNG), al frente del gobierno municipal de esta ciudad desde 2007 --su alcalde, el socialista Javier Losada, sucedía a F. Vázquez en 2006-- se mostró un tanto críptico, y falto de confianza en sus propias fuerzas y convicciones democráticas, al justificar la decisión de retirar la estatua del fundador de la legión tanto en función de lo establecido por la Ley de Memoria Histórica --la estatua sería uno de los 53 símbolos franquistas señalados para su eliminación--, como en virtud del proyecto de remodelación de la anexa Plaza de España.<sup>145</sup> Mientras se representaba ante la opinión pública este confuso enfrentamiento político, el cementerio municipal de San Amaro, en su parte civil, seguía siendo el único lugar de memoria dedicado a Pérez Carballo en A Coruña desde que el 24 de julio de 1936 su cadáver fuese trasladado allí, inmediatamente después de su ejecución.<sup>146</sup>

Esta ambigüedad meditada en el discurso oficial y político, poco asertivo a la hora de argumentar la aplicación de la estricta legalidad, no es nueva en la estrategia seguida

---

<sup>145</sup> *Europa Press*, 22-01-2010.

<sup>146</sup> En 1941, la familia Pérez Carballo decidió el traslado de los restos desde la primera ubicación a un nicho, dentro del mismo cementerio, para el que se encargó una lápida donde figuraban, además de los datos personales acostumbrados, el cargo de gobernador civil ostentado en el momento de su ejecución.

por el PSOE en el concello de A Coruña, pues el grupo municipal socialista, encabezado por el alcalde Francisco Vázquez, había votado en 2005, junto al PP, a favor de la permanencia del símbolo franquista más importante de esta ciudad (la estatua de Millán Astray), objeto de los continuos desvelos de la *Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña* (CRMH), que en 2006 llegó a escribir una carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación a este asunto.

Este irregular, tímido y demasiado lento -aunque en los últimos años se haya acelerado considerablemente- proceso de rehabilitación de la memoria de las víctimas, de los republicanos derrotados en la guerra civil, afecta fundamentalmente a aquellos familiares de edad muy avanzada, testigos de un tiempo en declive, que han presenciado la eclosión del debate social por la memoria en el contexto de la sociedad del espectáculo en la que estamos inmersos. En cierto modo, son las familias las que, en última instancia, más allá de los esfuerzos de la memoria cultural y de las reservas de la memoria oficial, sostienen realmente el movimiento de recuperación de la memoria histórica, vertebrado en una red activa de asociaciones y colectivos diversos, cuyo fin último (restablecer la memoria de las víctimas, hacerles justicia reconociéndolas como tales) guardaría un complejo equilibrio con la realidad histórica, pero convergería con el enfoque metodológico del historiador en la neutralización de los mitos contruïdos durante el franquismo.

Ejemplos de esta responsabilidad reclamada por de la memoria familiar, son las cartas que Carmen Veiga de Bernardo, cuñada de Francisco Pérez Carballo, envió en septiembre de 2005 a Pedro. J. Ramírez, director del Grupo Unidad Editorial, editora de *La guerra civil española mes a mes* --distribuida en 36 volúmenes por el diario *El Mundo* desde septiembre de 2005 a abril de 2006-- y, un mes después, a Rosa Regás, entonces directora de la Biblioteca Nacional y colaboradora de dicha colección. En las mismas, Veiga de Bernardo expresaba su disgusto ante el tratamiento que esta publicación hizo tanto de las figuras de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle, como de la secuencia de la sublevación militar en A Coruña (concretamente en el tomo III), y solicitaba las pertinentes rectificaciones a las inexactitudes vertidas allí.

La disconformidad de la familia Pérez Carballo con las imágenes del gobernador y de su esposa reflejadas en el texto radicaba, fundamentalmente, en la nueva atribución del nombramiento de Pérez Carballo como gobernador civil de A Coruña a la generosidad de un regalo de bodas decidido por el gobierno republicano, eco de la vieja y malintencionada leyenda acuñada por Arrarás en su *Historia de la Cruzada Española* (1939-1943), recogida más tarde por R. de la Cierva en la *Crónica de la guerra civil española* (1966) y por la mencionada publicación de *El Mundo* (2005), cuya versión del levantamiento militar en La Coruña, y del papel representado por el gobernador en su transcurso, se ajustaba a la difundida en la obra escrita por R. de la Cierva para la editorial Codex de Buenos Aires, como observaba con acierto Carmen Veiga de Bernardo.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Carta de Carmen Veiga de Bernardo a Rosá Regás, Madrid, 27-10 2005, copia procedente del archivo privado de la familia Pérez Carballo. Se encuentra publicada en el monográfico *Vermellas* (*Unión Libre*, nº 11 (2006), op cit, p. 23-26).

El párrafo final de la carta dirigida por la cuñada de Francisco Pérez Carballo a Rosa Regás —en la que se interpelaba a esta última con el fin de que mediase en la publicación de las rectificaciones solicitadas— expresa nítidamente la naturaleza del reto que para muchas familias republicanas supone la recuperación de las huellas de una generación sacrificada en defensa de la República y arrojada después al olvido, al tiempo que sintetiza mucho de lo escrito hasta el momento en estas páginas sobre las funciones y la proyección de la memoria, el valor simbólico de algunos nombres y la diferencia existente entre el silencio y olvido:

Por todo lo expuesto, le ruego que contribuya a que se rectifique con generosidad y públicamente, lo aparecido en la obra que provoca esta carta, de manera que no se menosprecie gratuitamente la memoria ante la historia de dos jóvenes profesionales que representa, junto a muchos otros de su generación, la grandeza e ilusión del proyecto republicano. La injusticia de muchos años de oprobio, durante los que estuvimos silenciados, pero no silenciosos, ha de ser declarada por quienes defendemos la convivencia democrática pero que no queremos ni podemos olvidar a quienes dieron un ejemplo magnífico. Felizmente, la historia, en su imparable progreso, reconoce y recupera los ideales de aquella generación; hagámoslo también con la memoria de los hombres y mujeres buenos que los forjaron. Es nuestra ilusión y la ayuda que hoy le pido.<sup>148</sup>

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, las imágenes de Francisco Pérez Carballo transmitidas por la memoria republicana durante la guerra civil —con ciertos matices, la del héroe político, el ejemplo a imitar en la defensa a ultranza de la República— fueron contrarrestadas por la memoria oficial franquista, para cuyos portadores la figura del gobernador civil de A Coruña adolecía de la inexperiencia política y de la servidumbre complaciente al gobierno del Frente Popular, pues no en vano era la de un republicano burgués vinculado estrechamente a los estigmatizados Casares y Azaña o a los intereses y designios de las fuerzas de la izquierda revolucionaria. Asimismo, los escritores e historiadores pro franquistas crearon desde el primer momento el mito de una Juana Capdevielle tomando parte activa en las decisiones que coadyuvaban a la fuerte oposición presentada por el gobernador civil y sus colaboradores a la sublevación militar con el fin de justificar de alguna manera su posterior asesinato y, de paso, incidir en la debilidad de Pérez Carballo mediante la exageración de la personalidad y el papel de su esposa. Desde ese momento, la memoria de Francisco Pérez Carballo nos condujo a la de Juana Capdevielle, mujer de carácter sólo contemplada desde la perspectiva de su trágica muerte, envuelta con frecuencia en una morbosa leyenda llena de inexactitudes.

Con el transcurrir de los años, nuevas memorias relevaban, emanando de distintas posiciones ideológicas cruzadas y contaminadas entre sí por imágenes comunes e intereses personales, a las más inmediatas a los hechos y desvelaron muy débiles

---

<sup>148</sup> Ibid.

En el mismo sentido, véase el texto de la intervención de Juan Pérez-Carballo Veiga, fechada el 15 de julio de 2007 y bajo el título “Crimen premeditado, sistemático y monstruoso”, en el curso de verano de la Universidad de Santiago de Compostela *As vítimas do 36 en Galicia. Memoria e paz para sempre*, (publicada en *Unión Libre* nº 13, Edicións do Castro (2008), p. 33-35), en el que se incide también en la necesidad de culminar el proyecto de reconocimiento y recuperación de los ideales de la generación que trajo la República, emprendido ya hace años por la sociedad española, con la dignificación de las memorias de quienes los forjaron, en referencia a Francisco Pérez Carballo, Juana Capdevielle y tantos otros, con el fin de que su ejemplo sirva “para evitar que la España intolerante vuelva a dominarnos”.

percepciones de la historia personal y política de Francisco Pérez Carballo y de su esposa. De modo que no sería muy difícil dilucidar la verdadera dimensión colectiva del silencio o la ausencia de memoria detectados, explicables en este caso quizá por factores como la excesiva juventud o la falta de relevancia política observadas en Francisco Pérez Carballo y, en general, por el olvido de los vencidos decretado por el régimen anterior. Olvido y silencio forzados después de enterrar cualquier vestigio de los militantes republicanos del espectro azañista y, en otro sentido, de la adjudicación, por parte de un amplio sector de la izquierda, de la responsabilidad (y culpabilidad) en el triunfo de la sublevación militar al gobierno de Casares Quiroga y a los gobernadores civiles de él dependientes.

Finalizado el franquismo y atravesado el complejo ciclo de la transición a la democracia, donde determinados clichés de culpabilidad permanecieron clavados en el recuerdo de Casares y los suyos (la vinculación a Casares y, en menor medida, a Azaña se pagó cara en muchos casos), la memoria de los olvidados, entre ellos las de los protagonistas de esta reflexión, ha sido reivindicada, fundamentalmente, por la memoria cultural republicana y acogida por sólo una parte de la sociedad española.

Los productores o portadores de la memoria cultural, decididos a recuperar no sólo el proyecto y la idea republicana sostenidos por la generación perdida, sino los vectores individuales que los forjaron a través de principios y valores imprescriptibles, han convertido a jóvenes políticos e intelectuales como Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle en metáforas perfectas de la ilusión republicana e importantes referencias personales.

En este proceso de reconstrucción deliberada del pasado con un propósito social -en el que se soslaya en ocasiones la heterogeneidad del bando republicano y sus distintas memorias se reducen a la de la condición de víctimas específicas de la represión franquista-, y desde hace relativamente pocos años, es la memoria de la bibliotecaria e intelectual madrileña la que nos remite a la de su esposo y no a la inversa como ocurrió en un principio. Aunque también es cierto que se está empezando a contemplar sus trayectorias separadamente, y más allá del morbo adherido a sus respectivas muertes o de la exagerada influencia que, según algunas fuentes, Juana Capdevielle ejerció sobre Francisco en algunos momentos críticos, por cierto nunca probada fuera de la intensa relación amorosa que los unió en la esfera íntima.

La memoria oficial e institucional, por su parte, se sumó de forma gradual, en los últimos años, a la memoria cultural y a la familiar en esta inquietud ética y moral -en el caso que hemos estudiado, con evidentes e incomprensibles dudas-, consciente de la oportunidad política subyacente a la coyuntura en que las sociedades actuales invocan a la memoria en los *Lieux de mémoire* (como afirma P. Nora), tiempo después de haberla abandonado, fenómeno relacionado circularmente con la vulnerabilidad del recién asumido *deber de memoria* a los cambios políticos y a las convulsiones sociales del momento.

En cualquier caso, una parte importante de las memorias individuales y colectivas traducidas en distintos niveles de percepción de la realidad histórica, y examinadas aquí para ofrecer este modesto esbozo de las razones que han llevado a recordar, silenciar u olvidar a Francisco Pérez Carballo, han redundado en una lectura de su pasado en

función de intereses y posiciones adoptados en distintos presentes históricos. Estas prácticas de memoria que a menudo consiguen gran influencia en el presente desde el que se generan, servirán como reto intelectual para el estudio biográfico planteado en los próximos capítulos, que, a partir de las premisas metodológicas de las ciencias sociales, deberá contrastarlas y, en su caso, depurarlas en el transcurso de una investigación enfocada a una figura y a un tiempo histórico fascinantes, complejos, necesitados de la mirada objetiva de la historiografía.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Entrevista a Luis Novo Bernedo. Villarín de Doncos, 28-05-2009. Como última referencia al olvido, señalamos que en el transcurso de la conversación con Novo Bernedo, el entrevistado nos relató como los vecinos del pueblo guardaban una memoria contradictoria, probablemente condicionada por factores ideológicos, respecto a Francisco Pérez Carballo, llegando incluso –este dato nos lo facilitó la familia del gobernador republicano— a referirse a la casa familiar del abogado madrileño, y último gobernador republicano de A Coruña como la de una “autoridad de Madrid”. Una buena imagen para expresar la esencia o, al menos, parte de lo tratado a lo largo de las páginas de este capítulo.



## **II. EL ESTUDIANTE Y LAS NUEVAS MULTITUDES.**

### **Madrid, distrito de *Universidad*.**

Francisco Pérez Carballo nació en Madrid el 8 de noviembre de 1910,<sup>150</sup> el mismo año en el que el abogado gallego José Canalejas, uno de los políticos más capaces salidos de las filas del Partido Liberal, el verdadero *alter ego* de Maura (condenado al olvido por no haber sido reivindicado ni por la memoria de la izquierda ni de la derecha), asumía el poder de forma imprevista, en detrimento de Segismundo Moret, jefe hasta entonces de los liberales y proclive a un acercamiento a los republicanos, hecho que empujó al rey Alfonso XIII a decantarse por Canalejas. Como es sabido, el nuevo presidente trató de implementar un proyecto democrático liberal de nacionalización de la monarquía, progresista e intervencionista en lo social, con el Estado como principal agente modernizador del país (Moreno Luzón, 2009; 384), destinado en primer lugar a fortalecer las prerrogativas del poder civil frente al asfixiante peso de la iglesia sobre el delgado equilibrio del sistema de la Restauración y a desarrollar una política de importantes reformas estructurales.

Ese mismo año, el gobierno español autorizaba el ingreso de las mujeres como estudiantes en las universidades (8 de marzo) y permitía la exhibición pública de signos externos de cultos distintos al de la religión oficial del Estado (10 de junio); se iniciaban las obras de construcción de la Gran Vía, que formaron parte del paisaje de la infancia y juventud de Pérez Carballo, y el 30 de octubre nacía en Orihuela Miguel Hernández, un poeta que tampoco sobreviviría a la tragedia desatada por la guerra civil. Más allá de las fronteras españolas, fallecía en New York el novelista Mark Twin (21 de abril) y, en el Palacio de Buckingham en Londres, el rey Eduardo VII (6 de mayo); estallaba la revolución portuguesa (5 de octubre) para deponer la monarquía de Manuel II y devenir en una República de incierto recorrido y, en México, Fernando Madero fijaba, en el denominado *Plan de San Luis Potosí*, la fecha del 20 de noviembre como el inicio del levantamiento armado contra el presidente reelecto Porfirio Díaz y, en consecuencia, preámbulo de la revolución mexicana. Así mismo, 1910 fue recordado por la visita del cometa Halley, cuyo regreso fue precedido de una expectación sin precedentes a nivel mundial, mezclándose el pánico y las profecías apocalípticas con el sarcasmo de los detractores de cualquier superstición. En Madrid, fue visible en la madrugada de insomnio colectivo del 19 de mayo, a escasas horas de la celebración de la romería de San Isidro.

Como José Canalejas, Francisco Pérez Carballo era gallego, aunque nacido en el madrileño barrio de Maravillas, como así se llamaba entonces, exactamente en la calle de las Minas número 3-5, muy cerca del Instituto Cardenal Cisneros y de la sede de la Universidad Central en San Bernardo. Ambas instituciones educativas fueron el escenario de la brillante carrera académica de un joven proveniente de una familia de emigrantes gallegos, establecidos en Madrid siendo apenas unos adolescentes.

---

<sup>150</sup> Registro civil de Madrid. Sección primera del libro 94-10, folio 55.

Su padre, Emilio Pérez Fernández, era en la fecha del nacimiento de su hijo un jornalero de la Estación del Norte,<sup>151</sup> entonces propiedad de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, en la que alcanzaría pasados los años la categoría de jefe de tren. Había nacido en el municipio lucense de As Nogais en agosto de 1881, concretamente en la aldea de Villarín de Doncos, y se había trasladado a Madrid en 1904, según consta en las hojas del padrón consultadas al efecto. La madre de Francisco, Ángela Sofía Carballo Coedo, nacida en mayo de 1881 en San Juan de Noceda,<sup>152</sup> parroquia del mismo municipio, tenía quince años cuando llegó a Madrid. Se dedicaba a las tareas del hogar, trabajo que durante un tiempo hizo compatible con las funciones de portera de una finca en la calle de las Minas número 3-5, donde residía la familia. Era una mujer muy religiosa, aunque con el correr de los años dejaría de asistir con regularidad a misa y los acontecimientos trágicos que llegaría a vivir, en especial la ejecución de su hijo Francisco en julio de 1936, remodelarían su conciencia.<sup>153</sup>

Ambos procedían de un entorno rural, campesino, caracterizado por la prevalencia de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que reunían en una misma vivienda familiar a individuos pertenecientes a varias generaciones y a ramas colaterales de la familia, en el contexto jurídico del mayorazgo como institución clave del derecho hereditario en la montaña lucense.

Los padres de Francisco se trasladaron a Madrid en una época en la que el campo gallego se enfrentaba a un fenómeno económico que implicaba una importante contradicción, ya que si por un lado experimentaba las consecuencias de la crisis agrícola finisecular (debida, fundamentalmente, a la llegada de productos ultramarinos, trigo y carne, más baratos que los producidos en Europa), por otro se iban sentando las bases para el desarrollo de la agricultura gallega, que inició, desde 1890 y hasta la guerra civil, un proceso de profundas transformaciones. Entre ellas, procesos de innovación tecnológica, de conversión de los campesinos en propietarios –redención de foros, liquidación del régimen foral–, de individualización de montes, todo ello en el contexto de las medidas proteccionistas gubernamentales y del desahogo demográfico generado por la emigración a América, proceso paralelo a la especialización pecuaria de toda la cornisa cantábrica o a la integración de la carne gallega en el fortalecido mercado nacional.<sup>154</sup>

Emilio Pérez Fernández, el padre de Francisco, fue criado por su madre en la casa de Pedro Fernández, la casa de su abuelo materno,<sup>155</sup> perteneciente a la aldea de Villarín de Doncos. Ni la casa ni la aldea se alejaban de la imagen que componía el modelo de vivienda, explotación agrícola y núcleo rural característicos de la montaña lucense a finales del siglo XIX. Tres o cuatro cabezas de ganado bovino, un telar para procurarse

<sup>151</sup> Se deduce que es la del Norte por cotejo con documentos posteriores, pues la anotación literal relativa a la profesión de Emilio Pérez Fernández es “jornalero en estaciones”. Archivo Histórico de la Villa. Tomo 530. Empadronamientos 1910. Universidad/ Minas/2.

<sup>152</sup> Registro civil de As Nogais (Lugo). Libro de nacimientos (1880-1885), asiento número 20.

<sup>153</sup> Entrevista a Alfredo Gironde Coedo. Madrid, 19-05-2008.

<sup>154</sup> R. Villares, *Historia de Galicia*, 2004. Más información en: X. Fernández Leiceaga y E. López Iglesias, *Estructura económica de Galicia*, 2000; L. Fernández Prieto (ed), *Terra e progreso*, Vigo, Xerais, 2000 y *A gran historia de Galicia*, Tomo XIII: *século XX una economía: dúas sociedades*, Vol I: *Dinamismo social e desenvolvemento económico*, Arrecife Edicións/ La Voz de Galicia, 2007.

<sup>155</sup> Registro civil de As Nogais (Lugo). Libro de nacimientos (1880- 1885), asiento número 60.

la ropa necesaria para soportar largos periodos invernales de continuas nevadas -y, si acaso, comerciar con los excedentes en las ferias más próximas- y pequeñas huertas donde cultivar patatas, legumbres y centeno, por ejemplo, constituían los elementos básicos de la economía familiar.<sup>156</sup> Por su parte, la casa de Sofía Carballo, en San Juan de Noceda, era una de las más prósperas de la parroquia, aunque dentro de los parámetros que imponían la estructura socioeconómica, la organización territorial y el fenómeno minifundista gallego.

Como emigrantes se acostumbrarían al desempeño de oficios que correspondían a la gente de clase más humilde –miembros del servicio doméstico, jornaleros, empleados-<sup>157</sup> y a la vida en habitaciones de modestas pensiones, pisos alquilados entre varias personas o cuartos habilitados para el servicio doméstico, donde coincidieron a menudo con hombres y mujeres llegados a Madrid desde As Nogais y otros municipios próximos, que les servirían de apoyo y les proporcionarían la información necesaria para dar los primeros pasos en la gran ciudad, además -es obvio- de estimularlos previamente con su ejemplo a abandonar un medio rural gallego, caracterizado, a finales del siglo XIX, por un elevado crecimiento demográfico.<sup>158</sup>

La corriente inmigratoria gallega seguía, pues, formando parte, junto a la procedente de la región central, la castellano-leonesa y la asturiana, del tradicional contingente de inmigrantes que constituiría, al menos durante las tres primeras décadas del siglo XX, el principal motor del crecimiento demográfico madrileño en el contexto del cambio producido en el modelo demográfico, ahora marcado por un crecimiento vegetativo basado fundamentalmente en el descenso acusado de la mortalidad. Se estima que fue éste el motivo del aumento de la población madrileña, que pasó de 539.832 habitantes a principios de siglo a 952.832 en 1930,<sup>159</sup> momento en el que sólo el 37% de la población empadronada en la capital de España declaraba haber nacido en Madrid.<sup>160</sup>

La primera noticia que se tiene de la familia ya constituida en Madrid procede del padrón de 1905.<sup>161</sup> En la hoja del padrón correspondiente consta la inscripción, con fecha 28-12-1908, de Emilio Pérez Fernández como vecino de la calle De las Minas, 3-5, en calidad de cabeza de familia, lo que sugiere que su matrimonio con Ángela Carballo se habría celebrado poco antes de insertar esa anotación. En el mismo documento se consignan las 225 pesetas que ganaban anualmente, desempeñando la profesión de jornaleros, tanto Emilio Pérez Fernández como Manuel Gironde López, primo suyo, militante de la UGT durante la huelga de 1917 en el agitado Monforte de Lemos, quien desde muy joven demostró una acusada conciencia social al significarse

<sup>156</sup>Entrevista a Alfredo Gironde Coedo. Madrid, 19-05-2008.

<sup>157</sup> Santos Juliá, David Ringrose y Cristina Segura, *Madrid. Historia de una capital*. Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 435.

<sup>158</sup> En este sentido, el primer domicilio de Emilio Pérez Fernández en Madrid es una habitación de un piso alquilado junto a otros emigrantes gallegos, dos de ellos del propio Villarín de Doncos, en la calle Valverde, número 15. Archivo de la Villa de Madrid. Tomo 101. Empadronamiento de 1905. Chamberí. Barrio Dos de Mayo.

<sup>159</sup>Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero Carvajal, "Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana", en J.P. Fusi (dir): *España: Autonomías*: Madrid, Espasa Calpe, 1989. Reproducido en <http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/indexleoc.htm>

<sup>160</sup> Santos Juliá, David Ringrose y Cristina Segura, op cit, p. 435.

<sup>161</sup> Archivo de la Villa de Madrid. Tomo 530. Empadronamiento de 1910. Universidad. Minas 2.

en la reivindicación de los derechos de los campesinos a utilizar los montes comunales de As Nogais, y en ese momento compartía piso con la familia.<sup>162</sup>

En este punto, conviene hacer una matización sobre el término *jornalero*, recurrente en la información aportada por las hojas del padrón y muy laxo y ambiguo a la hora de definir con precisión un ámbito profesional concreto. En palabras de Luis Enrique Otero Carbajal:

La caracterización de jornalero tanto podía referirse a la situación del jornalero recién llegado que transitaba sin solución de continuidad desde el mundo de la mendicidad al trabajo en las obras públicas municipales, en la recogida de la cosecha o las faenas agrícolas en los campos circundantes de las ciudades, pasando por el trabajo en la construcción, en las obras del ferrocarril o en el trabajo femenino a domicilio, en una auténtica lucha por la vida situada siempre en los límites de la subsistencia, en la que todos los miembros de la unidad familiar –hombres, mujeres y niños—estaban obligados a contribuir para sobrevivir, también era una expresión habitual para referir la forma de pago del trabajador cualificado del mundo de los oficios o del empleado.<sup>163</sup>

En el caso de Emilio Pérez Fernández, se hace constar su condición de *jornalero en la estación del Norte*, propiedad de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, lo que no excluye, como se deduce de lo expresado por este autor, que combinase varias actividades para el sustento de su familia.

No obstante la lógica cautela con la que se debe tomar la información aportada por las hojas del padrón –catastros, padrones y documentos de la misma naturaleza generan en la historia de España una respuesta social de desconfianza ante la acción fiscal y administrativa del aparato del estado y sus mecanismos de control--, las cifras pueden ser significativas si las comparamos con las declaradas por otros vecinos del mismo barrio del distrito de Universidad, independientemente de la calle o del inmueble de que se trate. Así por ejemplo, los sueldos de Emilio Pérez Fernández y su primo Manuel López Girondo eran netamente inferiores al de varios pensionistas (entre 550 y 600 pesetas), dependientes y camareros (en torno a las 1000 pesetas) y un agente de Vigilancia (2000 pesetas) y, por el contrario, estaban más cerca de los salarios de obreros, jornaleros y trabajadores menos cualificados del mundo de los oficios. Son datos evidentemente fragmentarios, con los que no se puede sacar mucho más que una impresión o una referencia puntual, pero nos pueden servir para fijar los parámetros en los que se movía la precaria economía familiar de los Pérez Carballo, expuesta a las estrecheces y dificultades que lastraban la educación de los hijos de las familias más humildes.

La calle de las Minas pertenecía al distrito de Universidad, caracterizado por ser lugar de asentamiento fundamentalmente proletario, al igual que Chamberí, Hospital, Inclusa y Latina. En estos distritos de Madrid se hacinaban las clases populares, empujadas a la marginalidad por la carestía de la vivienda, tanto en alquiler como en la

<sup>162</sup> Entrevista a Alfredo Girondo Coedo. Madrid, 28-05-2009.

En el transcurso de esta entrevista, Alfredo, el hijo de Manuel Girondo nos relató como su padre se inició en política con la lectura de libros de Eliseo Reclus, probablemente adquirida en una de las ferias que entonces salpicaban las comarcas del Bierzo y la montaña de Lugo.

<sup>163</sup> Luis Enrique Otero Carbajal, “Tradición y modernidad en la España urbana de la Restauración”, en Guadalupe Gómez Ferrer y Raquel Sánchez (eds), *Modernizar España: Proyectos de reforma y apertura internacional (1898-1914)*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 23.

inaccesible propiedad, agudizada si cabe en esos años por el parón acusado en el sector de la construcción. Sin embargo, hay que matizar que durante las primeras décadas del siglo XX en la sociedad madrileña aún prevalecía el modelo de segregación vertical frente al horizontal -manteniéndose vigente la reproducción de la estructura de pueblo que aquél representaba, bajo los códigos tradicionales que regían las relaciones humanas y sociales-, lo que explica que en un mismo inmueble convivieran familias de diferente estatus socioeconómico y profesional, aunque muy pocas superasen el umbral de la clase media acomodada.<sup>164</sup>

La condición de trabajador de la Compañía de ferrocarriles del Norte de Emilio de Emilio, el padre de Francisco, facilitaría el que la familia regresase en ocasiones -algunos veranos probablemente- a Villarín de Doncos. La memoria de los habitantes de esta aldea, perpetuada en algunos de los vecinos actuales, dibuja la personalidad de Francisco Pérez Carballo como la de un muchacho inquieto y travieso, unos rasgos lógicos y comunes a otros chicos de su edad, pero obviamente diferentes de los contenidos en la imagen futura del universitario maduro, esforzado y competente, un estudiante serio y totalmente entregado a los libros y al trabajo, decidido a emprender una carrera política y jurídica.

Francisco, desde niño, acompañaba a su madre a la capilla de Villarín de Doncos y, en paralelo,<sup>165</sup> ayudaba al párroco de Santiago de Doncos en los oficios religiosos, dado su precoz dominio de la lengua latina.<sup>166</sup> No en vano, empezó a impartir clases particulares de este idioma a los once años, siendo éste el medio utilizado, durante sus época de estudiante en el instituto y en la universidad, para procurarse unos escasos ingresos con los que atenuar, de forma moderada, las dificultades económicas de la familia. La precariedad y las dificultades cotidianas derivadas de la falta de recursos, aunque también el estímulo del afán de superación y el tesón en el estudio, modelaron su carácter y le obligaron a un constante sobreesfuerzo, traducido con los años en varias crisis de agotamiento nervioso, debidas seguramente a característica hiperactividad.<sup>167</sup>

---

<sup>164</sup> Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero Carbajal, *Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana*, en J. P. Fusi, op cit. Reproducido en <http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/indexleoc.htm>

<sup>165</sup> Entrevista a Luis Novo Bernedo. Villarín de Doncos, 28-05-2009.

<sup>166</sup> Entrevista a Juan Pérez- Carballo Veiga y Carmen Veiga de Bernardo. Madrid, 05-02-2008.

<sup>167</sup> En 1936, Francisco Pérez Carballo presentó a la Junta de Ampliación de Estudios, por segunda vez, una solicitud de pensión para la ampliación de estudios en Alemania e Inglaterra, concretamente en el área del derecho privado. Entre la documentación acreditativa que Francisco adjuntó a la instancia, se incluía una memoria explicativa en la que se expresaba, en el apartado reservado a las “notas personales sobre la carrera y la vida del solicitante”, la edad a la que comenzó a impartir clases particulares de latín (once años) y se hacía especial hincapié en las dificultades económicas que le afectaron, de manera continuada, durante buena parte de su vida y le empujaron a buscar por todos los medios un modo de pagarse sus estudios y de contribuir a la modesta economía familiar. Su situación económica mejoró, según se relata en el texto, cuando obtuvo por oposición una plaza de oficial letrado del Congreso de los Diputados, dotada con un sueldo suficiente como para que su penuria cesase “de momento”. Escribía también Francisco que desde ese precoz contacto con la enseñanza había arraigado en él un profundo interés en la docencia y las cuestiones que la rodeaban. Véase a este respecto, Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios custodiado en el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes, Expediente de Francisco Pérez Carballo. En adelante, se citará: AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

La vida de Francisco Pérez Carballo transcurrió paralela al importante desarrollo económico y social que experimentó su ciudad natal. Madrid inició por entonces una profunda transformación en medio de un contexto general de conflicto político y social, basada en su definitivo asentamiento como centro de comunicaciones y de servicios y “capital del capital español” -a partir de 1910, año de nacimiento de Francisco, la banca domiciliada en la capital supera en número a la radicada en ciudades como Barcelona y Bilbao-, en un importante despegue industrial y en una eclosión cultural que amplificaría su papel protagonista en la edad de plata de la cultura y la ciencia españolas. Una transformación que sentaría las bases sociales y económicas del desarrollo español a largo plazo.

Toda una metáfora, descriptiva, simbólica, expresión de una vida que encarna, a escala relacional, como tantas otras, la historia de un país que iniciaba un proceso de modernización económico y social durante la última fase de la Restauración, jalonado de fuertes turbulencias políticas, para desembocar en la ilusión republicana y la tragedia acontecida en julio de 1936. Parece una obviedad, pero desde la perspectiva del historiador (y del observador en general) es aún más cierto que los veinticinco años de duración de la vida de Francisco fueron indiscutiblemente unidos a la distancia que separa el dinamismo (que no esclerosis) de la vida política española en la Restauración, del declive marcado por la guerra civil y la dictadura de Franco.

El pequeño Francisco cursó los estudios de primera enseñanza en las Escuelas Pías de San Antón de Madrid, regidas por los padres escolapios, que tenían su sede en un antiguo hospital de leprosos situado en la calle Hortaleza de Madrid, muy cerca del domicilio familiar de los Pérez Carballo. Sus primeros pasos como estudiante atravesaron un tiempo en el que se empezaba a conceder a la educación y a la pedagogía (que en el primer tercio de siglo vivió una auténtica edad de oro) un papel esencial en la vertebración de la sociedad española, como resultado de un cambio de orientación político-institucional en el que tanto tuvieron que ver la energía vitalista de la ILE y los fantasmas despertados por los influjos *noventayochista* y *regeneracionista*.

El estado estaba asumiendo, de forma progresiva, un papel más importante en la implementación de importantes reformas educativas, contempladas evidentemente desde el punto de vista de la progresiva secularización del país -las diferentes posiciones mantenidas ante la cuestión religiosa marcaron, en los primeros compases del siglo XX, las diferencias entre los programas políticos de liberales y conservadores-, y sociales, muy directamente imbricadas en las anteriores (que, entre otros asuntos, trataban de regular el problema endémico del trabajo infantil, prohibido en 1900 por debajo de la edad de diez años y limitado hasta los catorce). Sin embargo, la inestabilidad política, la resistencia de la iglesia y sus aliados políticos a la “desclericalización” (asunción por parte del estado de competencias y funciones antes desarrolladas por la iglesia) y “desteologización” o “desconfesionalización” de la enseñanza, así como el retraso o negligencia en la aplicación de la obra legislativa acabada, continuaron lastrando la modernización real del país. En ese sentido, la Constitución de 1876, en su artículo 11, reconocía la religión católica como la oficial del Estado, pero afirmaba, al mismo tiempo, la libertad de cultos y de conciencia, reflejando la dualidad señalada.

Desde su particular óptica, el sector más reaccionario del catolicismo español mantenía que la confesionalidad del Estado implicaba el control ideológico de las escuelas; por el contrario, las tesis de los liberales más progresistas afirmaban que la tolerancia de cultos y la libertad de conciencia significaban la libertad de cátedra. La alternancia de los partidos del turno durante la Restauración hacía que la legislación educativa describiera un movimiento pendular en función de quien ostentase el poder, poniéndose en juego cuestiones tan importantes como las libertades de enseñanza, conciencia y cátedra.<sup>168</sup>

Como consecuencia directa de esta realidad, devino la imposibilidad de un proceso uniforme de implantación de la enseñanza primaria en todo el país, quedando ésta en muchos casos sujeta al control y capacidad de financiación de los municipios y, en definitiva, a la fortaleza de la demanda local de instrucción primaria.<sup>169</sup>

El rumbo incierto del sistema educativo español durante este periodo redundó, a pesar del empuje del influjo liberal y modernizador de la ILE, en contradicciones flagrantes. Por poner un ejemplo, algunos avances legislativos logrados en las primeras décadas del siglo XX, como la ampliación del periodo de la escolarización obligatoria, fruto de una paulatina voluntad de atajar un problema crónico, permitieron paradójicas reducciones temporales en los periodos de escolaridad exigidos a aquellos alumnos de primaria con una cierta antigüedad en la escuela, lo que en la práctica equivalía a considerar como inevitable el absentismo escolar en grandes áreas del país. Importante contradicción que revelaba, junto a tantos otros factores como, por ejemplo, las deficientes condiciones materiales, económicas y de formación padecidas por los maestros desde tiempos inmemoriales (aunque en esas fechas se empezaba a dar un cambio en esos aspectos), la naturaleza profunda del problema sobre el que operaría la vanguardia de la inteligencia republicana a partir del 14 de abril de 1931, para tratar así de acercar a España a la modernidad que simbolizaba la idea de Europa.<sup>170</sup>

El ingreso de Francisco Pérez Carballo como estudiante de primera enseñanza en las Escuelas Pías significó su inmersión en la cultura y la práctica de la religión católica, algo que no debió desagradar a su madre, Ángela, creyente y practicante de esta confesión en aquella época. Las exigencias calasancias de formación humana y cristiana del alumno se traducían en la enseñanza diaria del catecismo y su explicación, a través de conferencias o charlas sobre temas de formación, en la asistencia al oratorio festivo y al catecismo público y, sobre todo, en la obligación de seguir los sacramentos de la penitencia y la comunión.<sup>171</sup> Sin embargo, en el plano pedagógico las Escuelas Pías fueron más allá que el resto de las congregaciones dedicadas a la enseñanza, pues se dotaron con un importante volumen de literatura pedagógica editada por la misma orden de los Escolapios, constituida por publicaciones periódicas de carácter científico,

<sup>168</sup> F. Díaz Alcaraz y S. Moratalla Isasi, "La segunda enseñanza hasta la Dictadura de Primo de Rivera", *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, nº 23 (2008), p.255-282.

<sup>169</sup> Clara. E. Núñez, *La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea*, Madrid, Alianza, 1992, p. 286-287.

<sup>170</sup> Algunos de los jalones de este proceso, se encuentran en la Ley Moyano en 1857, donde se recogía la obligatoriedad de la enseñanza primaria entre los seis y los nueve años, en el RD de 26-X-1901, que ampliaba la escolaridad hasta los doce años y, finalmente, en el RD de 18-V-1923 para el establecimiento el periodo de escolarización obligatoria entre los tres y los catorce años.

<sup>171</sup> Véase, *Historia de la educación en España y América*, Madrid, Fundación Santa María, 1994, p. 721-725.

además de revistas de temática colegial, y una amplia producción de libros de texto de bastante calidad, especialmente diseñados para la enseñanza primaria. Esta biblioteca incluía numerosos manuales escolares anteriores y paralelos a la unificación de las materias en las enciclopedias de enseñanza primaria, publicados entre 1903 y 1930.<sup>172</sup> Al margen de la lógica acentuación del enfoque teológico de la educación y de la consideración final del rol del alumno en la sociedad, la educación primaria impartida en los centros regidos por las congregaciones religiosas no se diferenciaba en exceso de la pública, pues ambas adolecían de la prevalencia de la enseñanza a ultranza de la trilogía clásica “leer, escribir y contar”, el aprendizaje eminentemente memorístico y la insistencia en la instrucción más que en una verdadera educación integral.

Las calificaciones de Francisco en su etapa de estudiante de primaria en las Escuelas Pías de San Antón fueron excelentes, lo que le permitió encabezar su promoción, marcando muy pronto la línea que seguiría en el futuro, como relató su hermano Ángel años más tarde.<sup>173</sup>

Francisco Pérez Carballo, de cualquier modo, había tenido suerte en las primeras etapas de su vida y hasta más allá de su adolescencia, factor que, desafortunadamente, le abandonaría, más tarde, en los trances más decisivos de su vida. Como un muchacho aplicado y tenaz, con ganas y aptitud para aprender, había asistido a la escuela y seguiría asistiendo en el futuro con un aprovechamiento académico envidiable.

En principio, le habían ayudado la vocación de las Escuela Pías de San Antón de ofrecerle una primera oportunidad a los hijos de las clases desfavorecidas -la matrícula en este centro era gratuita-<sup>174</sup> y la buena disposición de la familia a facilitarle en lo posible una educación digna, o al menos a no entorpecer la proyección de un niño despierto y muy inquieto. Más tarde, a partir de su ingreso en el instituto Cardenal Cisneros para estudiar bachillerato, sólo su talento e incuestionable esfuerzo personal serían sus principales valedores.<sup>175</sup>

Unos meses antes del comienzo del curso académico 1920-21, el primero de su bachillerato, concretamente a finales de mayo de 1920, la familia Pérez Carballo había abandonado el piso de la calle de las Minas para trasladarse a la portería del número seis de la Plaza del Dos de Mayo. En ese momento, ya habían nacido los otros dos hijos del matrimonio, José Andrés (1917) y Ángel (1919) y se encontraba viviendo con ellos Marcial, hermano de Emilio Pérez Fernández. Como consta en la correspondiente hoja

---

<sup>172</sup> Ibid, p. 580.

<sup>173</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en Carlos Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, Tomo II. Sada (A Coruña). Edicións do Castro, 2007, p 685. Ángel Pérez Carballo nos da este dato, que no se pudo contrastar documentalmente en el Archivo Histórico Escolapio, donde se encuentran los libros de matrícula de las Escuelas Pías de San Antón.

<sup>174</sup> La fundación por San José de Calasanz de la primera Escuela Pía en el Trastevere, a comienzos del siglo XVII, con el objetivo de velar por la educación de los pobres y vagabundos que, por entonces, atestaban las calles romanas, supuso la creación efectiva de la primera escuela popular católica moderna. En concreto, su programa pedagógico, interesado tanto en las Humanidades como en las enseñanzas prácticas y útiles, e impulsor de las ciencias exactas, pretendía mejorar el ambiente social y moral, a la vez que extender la conciencia piadosa en honor a su lema constitutivo, a través del esfuerzo de sus sacerdotes-maestros. Véase a este respecto, Ruiz Berrio, Julio, *La educación en los tiempos modernos. Textos y documentos*, Madrid, Actas, 1996, p.64-68.

<sup>175</sup> Entrevista con Carmen Veiga de Bernardo. Madrid, 5-2-2008.



del padrón de 1915, la profesión del padre de familia seguía siendo la de “jornalero”, sin especificar la cuantía de sus ingresos ni el importe del contrato de alquiler de la vivienda.<sup>176</sup>

A punto de cumplir los diez años, el pequeño Francisco encaraba un periodo de formación decisivo en el desarrollo de los valores éticos y públicos por los que empezaría a luchar muy pronto, en el que, en buena lógica, cristalizarían de forma definitiva su personalidad y su fuerte vocación intelectual, bajo un contexto social afectado por cambios y dinámicas sociales volcados sobre el difícil equilibrio de un sistema político que, pese a unos tímidos y limitados guiños renovadores, no acertaba con la fórmula adecuada para adaptarse a un nuevo tiempo histórico, lleno de incertidumbres, entonces concebidas en clave de declive, caos y desorden.

Francisco se había criado a unos pasos de la calle de San Bernardo, donde se encontraba el edificio de la Universidad Central, que por entonces ya empezaba a revelarse insuficiente para albergar a todas las Facultades madrileñas, y del instituto donde cursaría los estudios de segunda enseñanza, por lo que la atmósfera de la vida estudiantil -y los múltiples rastros, en las calles adyacentes, de la presencia de los estudiantes en la calle-, a veces lúdica, a veces sumida en diversos grados de agitación, pero siempre cotidiana, le era ya muy familiar, tanto como el influjo del mítico centro republicano del distrito de Universidad, situado igualmente en la calle de San Bernardo, lugar donde se dieron cita históricamente eminentes líderes republicanos y un público ávido de reformas sociales y políticas democráticas.

A comienzos de la segunda década del siglo XX, la deriva política española había afrontado ya, como es sabido, la inercia de la ruptura de Antonio Maura con el sistema en 1913 y la senda hacia la disolución de la “vieja política”: tras el asesinato de Canalejas, los partidos Liberal y Conservador se hallaban divididos en facciones irreconciliables y se había roto la dinámica “natural” del turno. La sociedad española estaba cambiando frente a hechos políticos y sociales como la irrupción con fuerza del proletariado en partidos y sindicatos, el comienzo del reformismo alentado por una nueva generación de intelectuales y profesionales liberales -la fundación del Partido Reformista en 1912, la Liga de Educación Política de Ortega, o la aparición de las clases medias en la junta directiva del Ateneo ejemplificarían la renovación de la idea republicana de ciudadanía-, el estallido de la “triple revolución” de 1917 (la aparición de las Juntas, la civilizada desobediencia mesocrática y parlamentaria y la denominada huelga revolucionaria) o, en el plano internacional, el contradictorio impacto de la Gran Guerra, cuya repercusión positiva en la economía española no se tradujo en los avances sociales y políticos necesarios para crear verdaderos efectos estructurales.

Así, el importante *boom* económico generado por la neutralidad española en este conflicto, que si bien benefició a la economía vasca, la minería asturiana y la industria catalana (aunque no se pudo aprovechar la coyuntura para implementar verdaderas reformas estructurales, como las propuestas por el liberal Víctor Alba), no afectó de manera sustancial al modo de vida de las clases populares. Más bien, provocó una

---

<sup>176</sup> Archivo de la Villa de Madrid. Tomo 383. Empadronamiento de 1915. Distrito de Universidad/ Minas. 2.

intensa crisis inflacionista (de 1914 a 1919, los precios de los productos de primera necesidad se duplicaron), acompañada de una creciente conflictividad social y de un aumento sin precedentes de las huelgas, teniendo la huelga general de agosto de 1917 (lanzada por PSOE y UGT a partir de un conflicto nacido en la Compañía de ferrocarriles del Norte, en donde trabajaba Emilio Pérez Fernández) una mayor dimensión, al yuxtaponerse a los amagos de renovación mesocrática (Asamblea de Parlamentarios en Barcelona) y al preámbulo de un nuevo periodo de injerencia militar en el espacio propio del poder civil (aparición de las Juntas).

La prueba de ingreso en el instituto Cardenal Cisneros, consistente en una reválida comprehensiva de los conocimientos adquiridos durante el ciclo de educación primaria, se celebró el 18 de junio de 1920, como refleja el acta del examen que Francisco Pérez Carballo debió superar.<sup>177</sup> El bachillerato estaba entonces estructurado en seis cursos, según el plan de 6 de septiembre de 1903, nacido del intento de aligerar la carga lectiva impuesta por el plan de 17 de agosto de 1901.<sup>178</sup> En cuanto al procedimiento de ingreso en la universidad, el texto legal vigente estipulaba que, tras un examen de grado, relativo a todas las materias impartidas desde el primer curso, se abría la puerta de los estudios superiores.

Fundado en 1845, año en el que se aprueba el Plan de estudios *Pidal*, vinculado históricamente a la Universidad Central de Madrid, de la que dependió administrativamente hasta la aprobación de la *Ley Moyano* en 1857 (el plan de estudios de Nicomedes Pastor Díaz ya había separado los estudios de los institutos de la Facultad de Filosofía en 1847), y denominado hasta 1877 como *Instituto del Noviciado*, el instituto Cardenal Cisneros era uno de los más prestigiosos del país y entre sus alumnos y profesores se encontraba una parte importante de la élite política y cultural del país. Por ejemplo, durante el Sexenio Revolucionario Nicolás Salmerón y Francisco Giner de los Ríos se sumaron al claustro de profesores y, más tarde, de forma progresiva, ingresaron como alumnos personalidades como el Conde de Romanones, Eduardo Dato o el propio José Antonio Primo de Rivera. En una época en la que el número de establecimientos educativos de segunda enseñanza era muy limitado, uno por capital de provincia y sólo algunos más en ciudades como Madrid y Barcelona, la nómina de profesores del Cardenal Cisneros reunía -ya hemos avanzado algunos nombres- a reconocidos intelectuales, científicos, políticos, entre ellos varios ministros, y altos funcionarios de diversos cuerpos de la administración del Estado. Más adelante, nos detendremos en algunos de estas figuras políticas e intelectuales, incidiendo especialmente en aquéllos que impartieron clase a Francisco Pérez Carballo.

El filósofo Julián Marías, nacido en 1914, fue compañero de Francisco Pérez Carballo en el instituto Cardenal Cisneros. Aunque no hay constancia de que llegaran a conocerse, ni tampoco compartieron, por razones de edad, el mismo curso -Marías se examinó al mismo tiempo de ingreso y primer curso, pero era casi cuatro años más joven que Francisco-, la mirada retrospectiva del filósofo sobre sus años de estudiante

<sup>177</sup> Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Instituto Cardenal Cisneros. Libro de ingreso correspondiente al curso (1919-1920), p.9.

<sup>178</sup> *Historia de la educación en España*. Tomo III, *De la Restauración a la II República. Textos y documentos*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, p. 179.

en el instituto y su aguda percepción de ambientes y detalles deslumbrantes o, por el contrario, intrascendentes en apariencia, resulta muy útil para reconstruir la imagen perdida de un determinado espacio físico y humano, de un periodo que compartieron ambos desde distintas perspectivas cronológicas y sociales.

Su memoria cruza una parte del Madrid céntrico, próximo a la naciente Gran Vía, que separaba su casa de la calle Hortaleza y la de los Reyes, esquina a San Bernardo, donde se alzaba el edificio del Cardenal Cisneros, en un relato muy descriptivo y sugerente sobre una ciudad que ya no existe.

Entonces había todavía muchos animales: caballos, mulas, vacas, asnos, perros, gatos y pájaros. Extrañará que se hable de vacas: los jóvenes no sospechan que Madrid estaba lleno de vaquerías, en pleno centro; al pasar por una calle cualquiera, de repente se olía a vacas, y allí estaban, y se expendía o se repartía la leche ordeñada allí mismo (...) Los chicos, al salir del colegio, íbamos a veces a comprar bocadillos; los más baratos —una barra de pan pequeña con anchoas y un palillo con una aceituna costaban quince céntimos. En las farmacias se compraban pastillas de goma y azúcar cande.<sup>179</sup>

Prosigue Julián Marías, refiriéndose ahora, más concretamente, al instituto y su espacio en la realidad y en la memoria e insertando su imagen en la experiencia vivida en las calles de Madrid:

El instituto al que empecé a ir en octubre era el del Cardenal Cisneros, en la calle de los Reyes. En Madrid no había más que dos, o dos y medio. El mío, el de San Isidro y el Instituto-Escuela, de reciente creación, y que hoy se habría llamado “elitista”. Por lo pronto, el ir al Cisneros amplió para mí la ciudad. Salía de casa por la mañana, llegaba a la calle de las Infantas (sic), hasta Fuencarral, recorría la calle de San Onofre, cruzaba la de Valverde (...) seguía por la calle de la Puebla, hasta San Antonio de los Alemanes y la Corredera, continuaba por la calle del Pez y cruzaba la de San Bernardo, esquina a la universidad, para entrar en la calle de los Reyes. Este recorrido lo hacía de dos a cuatro veces al día, según tuviera o no clases por la tarde. Madrid, por aquellas fechas, a primera hora de la mañana, olía a pan caliente y a café tostado. Las tahonas eran muchas; por otra parte, los dependientes de las tiendas de comestibles —o ultramarinos— sacaban a la calle unos grandes bombos de hierro, con manivela, y tostaban café. Era una delicia.<sup>180</sup>

Siguiendo el relato de Julián Marías, nos adentramos un poco más en la captación de matices sociales y tipos humanos. Dentro del edificio del instituto.

Cuando llegaba al instituto, lo primero que veía era al portero solemne y bondadoso, un gallego algo viejo y con barba blanca, llamado Antonio Castiñeira. Después los bedeles. Recuerdo a uno afable y cortés, Carmona; otro llevaba gafas verdosas; uno, muy bajo y gordo, con grandes bigotes, se llamaba Felipe, por mal nombre “rompetechos” (...) El instituto era mixto, con chicos y chicas —la supresión de la coeducación fue una peligrosa cursilería de después de la guerra civil—. Fue un cambio importante, y absolutamente positivo. No éramos muy civilizados, pero la presencia de las muchachas era un freno a la barbarie.<sup>181</sup>

<sup>179</sup> Julián Marías, *Una vida presente. Memorias*, Madrid, Páginas de espuma, 2008, p. 42.

<sup>180</sup> Ibidem, p. 43.

<sup>181</sup> Ibidem, p. 44.

Francisco Pérez Carballo cursó primero de bachillerato en el curso 1920-1921. Se matriculó como alumno oficial, modalidad en la que continuaría durante todo su bachillerato y sus estudios universitarios, en *Lengua Castellana, Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría, Religión* (1º), *Caligrafía y Geografía general y de Europa*. En los años sucesivos se matriculó, también como alumno oficial, de las siguientes asignaturas de bachillerato:

--Segundo curso (1921-1922): *Lengua Latina* (1º), *Geografía especial de España, Aritmética, Religión* (2º) y *Gimnasia* (1º).

--Tercer curso (1922-1923): *Lengua Latina* (2º), *Historia de España, Lengua francesa* (1º), *Geometría, Gimnasia* (2º) y *Religión* (3º).

--Cuarto curso (1923-1924): *Preceptiva literaria y composición, Lengua francesa* (2º), *Historia universal, Álgebra y Trigonometría y Dibujo* (1º).

--Quinto curso (1924-1925): *Historia Literaria, Psicología y Lógica, Física, Fisiología e Higiene y Dibujo* (2º).

--Sexto curso (1925-1926): *Historia natural, Ética y Rudimentos de Derecho, Agricultura y técnica agrícola e industrial, Química general y Alemán*.

En absolutamente todas las asignaturas cursadas obtuvo la calificación de sobresaliente.<sup>182</sup> En otra fuente documental consultada, consta la calificación de sobresaliente *con premio* en todas las materias, excepto *Gimnasia* de segundo y tercer curso, lo que significaba, en la práctica, una matrícula de honor por cada materia.<sup>183</sup>

Fuera del programa oficial, cursó la asignatura de Taquigrafía, una de las incluidas en los renovados programas de enseñanzas y actividades complementarias del aprendizaje escolar, encuadrada concretamente en los denominados *estudios de aplicación* que se impartían en los institutos de la época (y, en especial, en el del Cardenal Cisneros, bien dotado de medios e infraestructuras complementarias como laboratorios, seminarios, un salón de esgrima y utillaje deportivo, máquinas de escribir, etc), con idéntico rendimiento académico. Una vez finalizado el último curso, se presentó con éxito a los exámenes de reválida que daban acceso al grado de bachiller y permitían el acceso a la universidad, obteniendo la calificación de *sobresaliente* en los dos ejercicios.<sup>184</sup>

<sup>182</sup> Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Instituto Cardenal Cisneros. Libros de actas de calificaciones por asignatura (1920-1926).

<sup>183</sup> Sin embargo, en la certificación académica personal de los cursos de bachillerato, solicitada por Pérez Carballo al Instituto Cardenal Cisneros en 1930, e incorporada años más tarde a la instancia elevada a la JAE para obtener una pensión de estudios en Alemania, aparece la calificación de “aprobado” como nota final de las dos asignaturas de Gimnasia, en lugar del *sobresaliente* reflejado en ambos casos por los libros de actas de calificaciones del instituto Cardenal Cisneros. De la misma forma, el certificado proporcionado por el instituto, no incluye datos relativos a la asignatura de *Alemán*, ni siquiera la menciona, que sí aparece en el plan de estudios y se recoge en los libros de actas de calificaciones, por lo que podría deducirse un error imputable a la secretaría administrativa del Cardenal Cisneros. Copia de la certificación académica citada, en AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>184</sup> Concretamente, las papeletas acreditativas fueron firmadas el 23 de junio de 1926. Archivo privado de la familia Pérez Carballo; AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

Asimismo, fue uno de los ocho alumnos de la sección de letras del Cisneros que ganó por oposición el premio extraordinario de bachillerato.<sup>185</sup>

En aquellas fechas, y según lo establecido por el Reglamento de Segunda Enseñanza, el curso académico comenzaba el 16 de septiembre en un acto solemne en el que el director leía la Memoria del curso anterior. Las lecciones comenzaban al día siguiente y concluían el 31 de mayo: se desarrollaban de lunes a sábado y en sesiones de mañana y tarde. Los alumnos estaban obligados a sentarse en las cátedras según el número que se establecía en su matrícula. Las clases duraban hora y media, excepto las de dibujo que duraban dos horas.

En la memoria del instituto Cardenal Cisneros correspondiente al curso 1925-1926, en el que Francisco Pérez Carballo terminó su bachillerato, figura el horario de sexto y último curso y los profesores que impartían las asignaturas, con lo que podemos hacernos una idea más gráfica del quehacer diario y académico de un alumno a punto de culminar el ciclo de estudios que le permitiría el ingreso en la universidad. Así pues, la asignatura de *Ética y Rudimentos de Derecho*, tal vez la más importante para Pérez Carballo, por motivos obvios, se impartía los lunes, miércoles y viernes de diez y media a once y media de la mañana, siendo el catedrático a cargo de la asignatura Eloy Luis André, una de las figuras intelectuales más relevantes entre los profesores de Francisco en el instituto. El resto de las asignaturas, esto es, *Historia Natural* (diaria, de nueve a diez de la mañana), *Agricultura y Técnica Agraria Industrial* (diaria, de doce a una de la tarde) y *Química general* (lunes, miércoles y viernes, de diez y media a una y media de la tarde) eran impartidas por los catedráticos Celso Arévalo, Miguel Adellac y Daniel Cortés, respectivamente. Por su lado, Miguel Manzanares era el catedrático de *Alemán*<sup>186</sup> (martes, jueves y sábado, de ocho a nueve de la mañana) y Eugenio Hernández de la Rosa, el de la asignatura de *Taquigrafía y mecanografía* (martes, jueves y sábado, de una a dos de la tarde), encuadradas ambas en los *Estudios de aplicación*.<sup>187</sup>

En materia de disciplina, ningún alumno podía hablar ni levantarse de su asiento sin permiso del profesor. Si deseaba preguntar o resolver alguna duda, lo hacía una vez terminada la clase. Si un alumno faltaba el respeto al profesor, era expulsado del aula en el acto y juzgado por el Consejo de disciplina del centro. Se penalizaban las faltas de asistencia a las lecciones y a las conferencias que se daban los sábados. Cuando eran

---

<sup>185</sup> Archivo del Instituto Cardenal Cisneros, “MEMORIA DEL ESTADO DEL INSTITUTO CARDENAL CISNEROS DURANTE EL CURSO DE 1925 a 1926 ESCRITA POR EL Catedrático y Secretario del Establecimiento Don Manuel Manzanares y Sampelayo”, p. 37. *Heraldo de Madrid*, 11-10-1926.

<sup>186</sup> Esta asignatura aparece en la memoria (tanto en la versión impresa, citada más arriba, como en la digital, citada a continuación) como perteneciente a los *Estudios de aplicación*, en concreto dirigida expresamente a los alumnos que quisieran cursar posteriormente la carrera de Medicina. Sin embargo, en el expediente de Francisco Pérez Carballo aparece como una de las asignaturas oficiales cursadas en sexto de bachillerato, mientras que *Taquigrafía y mecanografía*, a priori la otra materia de *aplicación* existente, no figura en el expediente académico citado, pero si se conserva la papeleta correspondiente a esta asignatura en el archivo privado de la familia Pérez Carballo. Indudablemente, alguno de estos documentos (o los dos, probablemente) presenta algunas inexactitudes.

<sup>187</sup> *Memoria acerca del estado del Instituto del Cardenal Cisneros durante el curso de 1925 a 1926*, p. 74-75, en Biblioteca Virtual del Patrimonio Histórico [http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados\\_busqueda.cmd?posicion=11&forma=ficha&id=271](http://bvpb.mcu.es/es/consulta/resultados_busqueda.cmd?posicion=11&forma=ficha&id=271)

excesivas, se perdía el curso. El artículo 56 de este Reglamento de 1867 advertía que “el profesor anotará diariamente las faltas de asistencia de los alumnos, pasando lista nominal o tomando nota de los asientos que estén desocupados. Asimismo anotará cómo hayan respondido a la lección y a las preguntas que se hicieran, y lo actos de inquietud y travesura que hayan cometido”.

Los institutos hacían público las asignaturas que se enseñaban, profesores que las impartían, libros de texto para su estudio, así como los locales, y horarios en que habían de darse las clases. Las calificaciones de las asignaturas se otorgaban por un tribunal y eran de *sobresaliente, notablemente aprovechado, bueno, mediano y suspenso*.

En septiembre, los alumnos que aspiraban a una calificación superior podían presentarse a los exámenes extraordinarios. Éstos eran públicos, se anunciaban con la anticipación oportuna los locales, días y horas en que se habían de celebrarse. Todos los años se daban premios a los alumnos que habían obtenido la calificación de sobresaliente en alguna asignatura, en los ejercicios de reválida o en los exámenes ordinarios y superasen una oposición, que era de carácter público.<sup>188</sup> Para un alumno disciplinado y absorbido por el estudio y sus muchas inquietudes intelectuales, como Francisco Pérez Carballo, esas “pruebas de honor” constituyeron un reto constante y no una excepción, como lo confirma la obtención, antes reseñada, del premio extraordinario de bachillerato en junio de 1926.

Entre los catedráticos y profesores del instituto había figuras de indudable talento, muy distinguidos en la esfera intelectual de la época. La figura del catedrático de instituto era por entonces muy prestigiosa (había muy pocos centros de enseñanza de bachillerato en España y este hecho era un factor añadido), por lo tanto, no era raro ver a eminentes intelectuales como docentes, hay numerosos ejemplos para ilustrarlo. El caso de Antonio Machado sería, pues, el paradigma de una generación brillante, generosa y sacrificada, de sólida vocación por la enseñanza en la mayoría de los casos. Así, por ejemplo, en el cuadro de profesores del instituto Cardenal Cisneros aparecen nombres como Eloy Luis André, Mario Méndez Bejarano, Francisco Morán, Manuel Manzanares, Vicente García de Diego, Pedro Archilla y Celso Arévalo, entre otros. Todos ellos fueron profesores de Francisco y merecen unas líneas en este trabajo.

De entre los citados, destaca especialmente el de Eloy Luis André, un verdadero humanista convencido de la bondad de la condición humana y del reflejo ético del acto de vivir, que había viajado por las mejores universidades de Europa y se había doctorado en Leipzig, donde fue discípulo de Wundt. Escritor prolífico (más de treinta libros e innumerables artículos en prensa), difícil de encuadrar debido a su voracidad intelectual (doctor en Derecho y Filosofía y Letras), escribió y enseñó sobre psicología, filosofía, literatura, derecho, economía y pedagogía, entre otras disciplinas. En concreto, fue profesor de Pérez Carballo en dos asignaturas muy importantes para un estudiante con una incipiente e inducida -hecho bastante común entonces- vocación por el derecho,<sup>189</sup> *Psicología y Lógica* (quinto curso de bachillerato) y *Ética y rudimentos de*

<sup>188</sup> F. Díaz Alcaraz y S. Moratalla Isasi, op cit, p. 19

<sup>189</sup> Entrevista a Juan Pérez-Carballo Veiga. Madrid, 24-06-09.

*derecho* (de sexto y último curso).<sup>190</sup> Años atrás, en 1910, había opositado a la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid, que perdió frente a Ortega.

Comprometido con un proyecto personal de regeneración de España desde una perspectiva racionalista, André concebía la filosofía y la ética como medios para transformar la sociedad, partiendo de la premisa de que la filosofía puramente teórica, pasiva a la hora de generar obras concretas que hagan mejor el mundo, no tenía sentido. La vertiente ética de sus obras, sin duda la más importante, se hallaba en la reclamación de aquellas realidades objetivas conformadoras de la verdadera ciudadanía (leyes, estado de derecho, política guiada por la razón).

Su pensamiento político se sustentó en tres ejes principales, a saber: republicanismo, europeísmo y galleguismo pragmático y científico, poco permeable a veleidades románticas. Ramón López Vázquez, analista de la obra de André, entronca estos tres elementos en la lógica de la forma de estado republicana:

Uns feitos tan senlleiros non poden por menos de xerar en Luis André a urxencia de mirar cara ás sociedades onde os ideais republicanos teñen carta de didadanía, e una vez máis, pór no ideal da solidariedade un postulado necesario para a europeización de España. O réxime republicano como forma de estado, a educación cívica para moldear-lo espírito colectivo, a democracia para harmoniza-las individualidades, a ética para reflexionar sobre a moral e darlle forza de convicción ás leis, son variables que executan a idea de ente colectivo nas sociedades saídas da Revolución Francesa.<sup>191</sup>

La idea de República, en palabras de Eloy Luis André, sonaba de esta manera:

As urxencias sociais, a ética, economía, dereito, industria, os intereses colectivos, teñen que sentirse de forma re-republicana, como cousa de todos, como ben común (...)o acontecemento republicano por excelencia radica na substitución dos vencellos tribais, patriarcais, endogámicos e de camarillas polos nacidos do asociacionismo cultural, das enerxías industriais, do beneficio social. A idea de interese nacional é algo que por tódolos lados puido comprobar nos comportamentos da Europa maioritariamente republicana; alí, os acompañamentos de todos coma un só home –tribo— foron substituídos polos de todos, sexa cal sexa o territorio de traballo ou o enfoque da súa elección, loitando poloos intereses nacionais e colectivos.<sup>192</sup>

En 1929, André editó un libro con el título *Rudimentos de derecho español o sea derecho usual patrio*, adaptado al cuestionario del bachillerato elemental oficial y a los programas de las escuelas normales de comercio. La obra estaba constituida por fragmentos de sus lecciones a lo largo de su dilatada experiencia como profesor de la disciplina del mismo nombre. El prólogo a la primera edición contiene toda una declaración de principios:

Tres fines se persiguen en esta obra: la formación del ciudadano, el desarrollo y orientación de su conciencia jurídica y la aspiración a cimentar sólidamente las bases de una reforma social y de un criterio económico, que responde al

<sup>190</sup> Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Libros de actas de calificaciones por asignaturas (1920-1926)..

<sup>191</sup> R. López Vázquez, *O pensamento rexeneracionista en Eloy Luis André (Do europeísmo o galleguismo)*, Xunta de Galicia, 1996, p. 88.

<sup>192</sup> R. López Vázquez, *ibid*, p. 89.

espíritu de la época, al momento histórico actual (...) Pero, además, este libro no aspira solamente a la formación de una conciencia jurídica, política y económica de la juventud. Tiene que salir forzosamente de las aulas (...) contribuyendo a organizar a la sociedad española y al estado nacional, al actuar sobre una masa caótica, informe y convulsa, para forjar en ella una conciencia política y privada que hoy no existe.<sup>193</sup>

Dejando al margen el natural énfasis regeneracionista en dibujar un retrato en negro de la realidad española y la orientación organicista que impregnaba algunos de sus tesis, elementos que remiten a un contexto ideológico y cultural muy determinado, la categoría intelectual de un hombre como Eloy Luis André, su independencia respecto de modas intelectuales, cenáculos e instituciones a priori más sensibles a su pensamiento (acabó distanciándose de los métodos de la ILE) y, fundamentalmente, su innegable compromiso ético (la ética con mayúsculas está en la base de su proyecto de pensamiento reformista), europeísta y republicano son razones de peso para pensar que pudo ejercer un cierto influjo intelectual sobre algunos de sus alumnos, como podríamos deducir de algunos textos y posiciones adoptadas por Francisco Pérez Carballo en el futuro. No es una simple conjetura, como veremos a lo largo de estas páginas.

El esfuerzo de André por conciliar saberes científicos y humanísticos, los abundantes viajes al extranjero que realizó, de estudio y en comisión de servicios, y una vocación poética no reprimida añadieron un evidente sello personal a su labor pedagógica, convirtiéndolo en un adelantado a su época en el contexto de los institutos en los que ejerció la docencia.

Otro intelectual de prestigio era Mario Méndez Bejarano, catedrático de literatura del instituto Cardenal Cisneros y profesor de Pérez Carballo en las asignaturas de *Lengua castellana* (primer curso de bachillerato), *Perceptiva literaria* (cuarto curso), e *Historia general de la literatura* (quinto curso). Méndez Bejarano se posesionó de la cátedra en marzo de 1900 y en sus años de docencia se reveló también como un innovador infatigable. Promovió la asistencia de los alumnos al cinematógrafo, la graduación de la vista, la reglamentación de la tipografía de los libros o los simulacros de evacuación de incendios. Por otra parte, fue autor de una renombrada *Historia de la filosofía española hasta el siglo XX* y, en el plano político, se afilió muy joven al partido republicano que acaudillaba Salmerón y, más tarde, en 1910, llegó a ser diputado por el Partido Liberal, en cuya facción más progresista, la comprometida con la política de José Canalejas Méndez, su primo, se encuadraría. Desempeñó igualmente el cargo de Delegado Regio de Primera Enseñanza de Madrid. Al producirse el asesinato de Canalejas, decidió abandonar definitivamente la vida política.<sup>194</sup>

Francisco Morán, catedrático de Geografía e Historia, era licenciado y doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Derecho. Fue profesor de Francisco en las asignaturas de *Geografía general y de Europa* (primer curso de bachillerato), *Geografía especial de España* (segundo curso) e *Historia universal* (cuarto curso). Uno de sus alumnos, Julián

<sup>193</sup> Eloy Luis André, *Rudimentos de derecho español o sea derecho usual patrio*, Madrid, Imp. Clásica. Española, 1929, prólogo a la primera edición, p. VII-VIII.

<sup>194</sup> <http://www.filosofia.org/ave/001/a010.htm>



Marías, nuestro guía a través de la historia del instituto Cardenal Cisneros, guardaba este recuerdo de él:

De Geografía e Historia era profesor D. Francisco Morán. “Para enseñar con afán, Morán” era un dicho entre los chicos. Y, en efecto, enseñaba con afán, con pasión, con entusiasmo contagioso, con un saber que me sorprende todavía. Era zamorano, tirando a viejo, enjuto, subido de color, irascible y de malas pulgas –debía tener úlcera de estómago, porque de vez en cuando tomaba bicarbonato. Cuando se jubiló, se dedicó a traducir por gusto, del griego, a algunos padres de la iglesia.<sup>195</sup>

Manuel Manzanares impartía la asignatura de *Alemán* en sexto curso de bachillerato y tuvo a Francisco Pérez Carballo como alumno en el curso oficial 1925-1926. La memoria de Julián Marías -recordemos, coetáneo de Francisco como compañero suyo de instituto, separados tan sólo por unos cursos- nos ayuda de nuevo a dibujar su retrato:

El Alemán correspondía a Manuel Manzanares, uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Había hecho el bachillerato en Alemania, y en su *Gymnasium* tenía el número uno en alemán. Los alumnos éramos muy pocos (otros elegían inglés o italiano); nos “metía en el alemán”, como solía decir, de una manera increíble. A dos cursos de Cisneros se reducen todos mis estudios de esa lengua; después, claro está, lecturas, traducciones, en su día conferencias.<sup>196</sup>

Del catedrático de *Latín*, Vicente García de Diego, encargado de la docencia en las dos asignaturas de lengua latina impartidas en los cursos segundo y tercero de bachillerato, este autor refería lo siguiente:

Algo parecido se podría decir de García de Diego; el latín se reducía a dos cursos (...) en el segundo, traducíamos la *Eneida* (recuerdo largas series de hexámetros de entonces), fragmentos de Horacio, Ovidio y los prosistas, y ejercicios fáciles de traducción inversa. Además, nos enseñaba no poco español.<sup>197</sup>

En las asignaturas de ciencias, Francisco Pérez Carballo tuvo profesores de la talla de Pedro Archilla y el biólogo Celso Arévalo. Pedro Archilla, doctor en ciencias físico-matemáticas, uno de los grandes fotógrafos españoles del siglo XX, impartía las asignaturas de *Nociones y ejercicios de aritmética y geometría* (primer curso), *Aritmética* (segundo curso), *Geometría* (tercero) y *Álgebra y trigonometría* (cuarto). Por su parte, el berciano Celso Arévalo, catedrático de Historia Natural en el instituto Cardenal Cisneros desde 1918, destacó por su intensa actividad científica, plasmada en numerosas publicaciones, tanto en el campo de la geología como en el de la botánica y la hidrobiología -sin olvidar su papel de historiador de la ciencia-, y en la implementación de varios laboratorios de investigación y de la sección de hidrobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales.<sup>198</sup> Fue su profesor en las asignaturas de *Fisiología e higiene*, de quinto curso, e *Historia Natural*, de sexto.

<sup>195</sup> Julián Marías, *Una vida presenta*, op cit, p. 45.

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> Francisco Teixidó Gómez, *Celso Arévalo Carretero (1885-1944)* en <http://citologica.org/fteixido/67/celso-arevalo-carretero-1885-1944/>

Entre los compañeros de Francisco en el instituto se encontraba un grupo de mujeres muy significativas en la lucha política por los derechos de la mujer. Entre ellas, se encontraban figuras como la de Clara Campoamor, unos años mayor que Francisco, matriculada en el *nocturno* junto a otras compañeras el mismo año que él empezó sus estudios de bachillerato, 1920; Victoria Kent, matriculada en el instituto Cardenal Cisneros para iniciar sus estudios de bachillerato en 1917 (recién llegada de Málaga, su ciudad natal) y Hildegart Rodríguez Carballeira, conocida como la “aurora roja”, asesinada a los diecinueve años por su madre, una socialista ferrolana que concebía la vida de su hija como una obra pedagógica basada en un “perfecto” guion de trazos paranoicos, cuando parecía decidida a huir del yugo materno y a aceptar una propuesta de trabajo que la había formulado el propio H.G. Wells. De la brillante y trágica Hildegart, escribía Julián Marias este descarnado pero sugestivo retrato:

Y hay un extraño episodio relacionado indirectamente con el instituto. En 2º curso apareció una alumna, creo que libre, algo mayor que las demás, bastante gruesa y poco agraciada. Lo curioso es que iba con su madre, una señora adusta, vestida de oscuro, con un sombrerito, que pidió permiso a los profesores para entrar en las clases. Entraba –la recuerdo muy bien en clase de García de Diego–, se sentaba en un banco apartado, desplegaba *El Sol* y leía todo el tiempo; luego salía con su hija y repetía lo mismo en la clase siguiente; nadie hablaba con la hija, guardada por la hosca madre, la verdad es que no sentíamos mayor deseo. Las perdí de vista. Un día apareció en los periódicos la noticia: Hildegart Rodríguez –así se llamaba la muchacha–, que llevaba algún tiempo dando conferencias y publicando escritos sobre cuestiones eróticas, había sido asesinada por su madre mientras dormía.<sup>199</sup>

La etapa de estudiante de bachillerato de un adolescente de familia humilde no debió ser fácil en aquellos años, al margen de las dificultades naturales inherentes al estudio y al aprendizaje de las reglas y convenciones que estructuran la vida social de cualquier individuo. Eso sí, siempre existieron los precarios, bastante opacos y mal reconocidos trabajos que los estudiantes procedentes de las capas más modestas de la sociedad debían hacer compatibles con sus horas de estudio y clase y los espacios lúdicos y de sociabilidad propios de un muchacho de su edad. En su caso, obtuvo algunos ingresos con las clases particulares de latín impartidas desde los inicios de su etapa en el instituto, entre otras probables formas de conseguir unas pesetas para afrontar los gastos derivados de sus estudios y, de paso, ayudar a la familia en lo que se pudiera, incluidas las oportunidades brindadas por los premios académicos que ya por entonces cosechaba y que el instituto Cardenal Cisneros traducía en las preceptivas matrículas de honor (gratuitas) y en unos nada desdeñables lotes de libros, con preferencia por los clásicos de la antigüedad y de la literatura española.

La etapa de Francisco Pérez Carballo como estudiante de bachillerato no sólo estuvo marcada por su excelente rendimiento académico, que luego refrendaría en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central en esta etapa, marcada por una creciente agitación social, especialmente el transcurrido entre sus dos últimos cursos de carrera (1929-1931) en la universidad madrileña, enmarcados por la agonía del Directorio Civil de Primo de Rivera y la parálisis del gobierno Berenguer (su sucesor, el almirante Juan Bautista Aznar, sólo pudo firmar el certificado de defunción de la

---

<sup>199</sup> Julián Mariás, *Una vida presente*, op cit, p.49.

monarquía), puesto que ya por esas fechas estaba comprometido con la idea de reforma de la cultura y de la vida social y política del país. Esta disposición a intervenir en la construcción del espacio público, no era ajena, seguramente, al estímulo intelectual proveniente de sus profesores y al contexto sociopolítico en que una dictadura trataba de consolidarse tras una previa y engañosa vocación de transitoriedad, teñida de un ambiguo barniz regeneracionista. Un interés por los asuntos públicos, por la lectura y la cultura en general, que en Francisco se traducían siempre en una postura activa y participativa, llevada más tarde, cuando hacía compatibles sus obligaciones profesionales y académicas con su compromiso como dirigente de la FUE madrileña y de las juventudes republicanas azañistas, al borde del agotamiento físico y mental, al que contribuían las continuas preocupaciones que le causaban las estrecheces por las que pasaba la economía familiar.

De ese modo, en mayo de 1925 participó en un homenaje que los estudiantes de literatura del Instituto del Cardenal Cisneros le tributaron al poeta y periodista jienense Bernardo López García (1838-1870), celebrado en los locales de la Unión Iberoamericana. El homenajeado, adscrito en lo político a la corriente republicano-federalista y en cierta manera al socialismo utópico, tomó parte activa en la vida política de su tiempo, en especial a partir de la *Gloriosa*, llegando a presentarse a las elecciones parlamentarias de 1869. Como poeta se le podría encuadrar dentro de la escuela romántica, aunque con matices debido a su postura crítica contra el tremendismo de algunos de sus exponentes, pues si en un principio se inspiró en poetas híbridos como Manuel Quintana o el último (y más autocrítico) de los románticos alemanes, Heinrich Heine, en su etapa de madurez no ocultó el poderoso influjo de José de Espronceda y Zorrilla sobre su obra. Tras una dilatada experiencia de publicista y creador en la prensa republicana, en 1866 publicó en el diario madrileño *El eco del país*, del que era redactor, su legendaria y patriótica *Oda al Dos de Mayo*, cuyo éxito a escala nacional le granjeó una aureola (llegó a ser denominado como “el cantor del Dos de Mayo”) que ensombreció el resto de su obra.

Así pues, el acto de homenaje a su figura se celebró el mismo 2 de mayo de 1925 y la elección de la fecha no respondió, lógicamente, a circunstancias azarosas.<sup>200</sup> En concreto, la dictadura de Primo de Rivera utilizó este aniversario como uno más de sus múltiples estímulos a la socialización del orgullo nacional, integrado en una amplia y genuina estrategia nacionalizadora, y celebró en Madrid, además de los incluidos en la ruta ceremonial que la tradición hacía finalizar frente al monumento a Daoiz y Velarde, un acto conmemorativo en memoria de Bernardo López García, consistente en la colocación de una placa en el domicilio del poeta en la calle del Portillo, del que la modesta velada poética protagonizada por los estudiantes del Cardenal Cisneros fue una más de sus pretendidas y no bien calibradas ramificaciones sociales.

Precisamente, fue Francisco Pérez Carballo el encargado de abrir el acto con un discurso de introducción en el que se glosaba la figura del poeta jienense, seguido de una sucinta aproximación biográfica, un estudio crítico y un recital poético a cargo de varios de sus compañeros, entre otras actividades desarrolladas por los alumnos de

---

<sup>200</sup> *La Voz* (Madrid), 2-5-1925.

literatura de este instituto.<sup>201</sup> Aunque no conviene aventurar hipótesis muy difíciles de contrastar dada la falta de datos concluyentes al respecto, no deja de sorprender la elección de este poeta por parte de los estudiantes del Cardenal Cisneros, puesto que, al margen de la obligada sintonía con la idea desplegada por el aparato del régimen y el Ayuntamiento de Madrid -lo más lógico sería pensar en que los alumnos por propia iniciativa, o el propio instituto por la suya, siguiesen o fuesen invitados a seguir la propuesta oficial-, pues López García era, de entre los numerosos intérpretes del sentimiento nacional español exaltados por la censurada prensa madrileña en aquellas fechas (Nicasio Gallego, Arriaga o Espronceda, entre otros), el más identificado en la memoria social española con el republicanismo histórico y el espíritu revolucionario antimonárquico, matiz ideológico ignorado por el comité organizador del homenaje oficial tributado por el régimen de Primo de Rivera.

Cabe señalar, igualmente, como circunstancia a tener en cuenta en esta elección, que el por entonces profesor de *Historia de la Literatura* del instituto Cardenal Cisneros, asignatura impartida en quinto curso de bachillerato (el que estaba a punto de finalizar Francisco en mayo de 1925), era Mario Méndez Bejarano, liberal inclasificable de vocación andalucista, maestro en el arte de la retórica y reputado promotor cultural, que se encargaría de dirigir o supervisar el diseño del acto programado. Por el contrario, la posible significación liberal o pro republicana de ese acto tendría su contrapunto en el hecho de que el director del Instituto del Cardenal Cisneros había sido hasta entonces Ignacio Suárez Somonte, catedrático de Matemáticas, quien fue promovido sólo unos meses antes por el dictador Primo de Rivera a la Dirección General de Primera Enseñanza. Como director de este órgano de la administración educativa española, Suárez Somonte apoyó decididamente la intervención de los religiosos en la educación, con el fin de “proteger a los jóvenes de las ideas perversas”,<sup>202</sup> posición que contrastaba de plano -ya que era la del máximo responsable del centro, figura dotada entonces de un poder y una autonomía considerables respecto del resto de los profesores y catedráticos- con la sostenida por algunos de sus antiguos compañeros de claustro en el Cardenal Cisneros, a la hora de afrontar el debate ideológico subyacente a la línea pedagógica y docente seguida por el centro.

Un ejemplo más nítido (por menos ambiguo) de un incipiente compromiso político y de una tendencia a poseer una voz propia con que ingresar y mezclarse en la vida política y social del país, a través de iniciativas surgidas de una célula asociativa estudiantil mínimamente organizada, fue la implicación de Francisco Pérez Carballo, casi un año después, en marzo de 1926, en los trabajos de la comisión de alumnos de los cursos quinto y sexto de bachillerato del mismo instituto (entonces cursaba sexto y último curso) que dirigió una nota reivindicativa al rey Alfonso XIII, reproducida en su integridad por *Heraldo de Madrid*. Las peticiones realizadas por este grupo de estudiantes fueron éstas:

---

<sup>201</sup> *El Sol*, 4-5-1925.

<sup>202</sup> *La Nación*.(Madrid) 12-6-1928. Citado por Shlomo Ben Amí en *La dictadura de Primo de Rivera*, Barcelona, Planeta, 1983, p.77.

Primero. La unificación de los servicios aéreos. La creación de un Almirantazgo del aire, en todo análogo, que al fin la Aviación es la Marina del porvenir, y para su establecimiento cuenta España con valores reconocidos: los comandantes Herrera y Franco. Al preparar la perseverancia del uno la inmensa obra que el valor y la pericia del otro habían de realizar han demostrado las inmejorables aptitudes que reúnen para desempeñar el Almirantazgo de los aires, que pudiera ser el premio merecido por la labor gigantesca que realizaron para el engrandecimiento de su patria

Segundo. Orientación de la Aviación en el sentido de la defensa del suelo nacional.

Tercero. El rápido establecimiento de la proyectada línea de dirigibles Sevilla Buenos Aires que con otra línea –Vigo, Nueva York, Cuba, Panamá, Lima, Valparaíso—aproximará las relaciones entre los pueblos hermanos de ambas orillas del Atlántico y del Oeste del Pacífico

Cuarto. La creación de un premio Rada para el que logre construir un hidroavión que pueda ir en un vuelo de Vigo a Nueva York (unos 5000 kilómetros).

Quinto. Un premio Franco para quien haga el viaje, en un vuelo, Vigo-Nueva York en el aparato que obtenga el premio Rada.

Sexto. Ambos premios han de ser en metálico y por suscripción popular.<sup>203</sup>

Un texto interesante que, por una parte, revelaba claramente el impacto del vuelo del *Plus Ultra*, culminada poco menos de un mes antes de la publicación en la prensa de la nota redactada por los estudiantes del Cardenal Cisneros, en la imaginación de unos jóvenes que en unos pocos años habían asistido a importantes cambios tecnológicos de todo orden, experimentados muchas veces en carne propia. En Madrid, por ejemplo, empezaba a funcionar el metro en 1919 y se inauguraba la primera estación de radio en 1924, mientras que a partir de 1925 creció extraordinariamente el número de automóviles en circulación por sus calles y las cada vez más numerosas salas de cinematógrafo proyectaban mágicos sueños sobre los ojos de un público necesitado de ellos.<sup>204</sup>

En concreto, la primera gesta de la aviación española y, a escala internacional, el primer gran vuelo sobre el Atlántico Sur con un solo aparato, puede leerse en el contexto de la aventura aeronáutica trasatlántica (C.Lindbergh, Scadura Cabral y Gago Coutinho...) que, con un indudable trasfondo político y económico, contribuyó a la conquista del espacio aéreo para uso civil y militar. El 10 de febrero de 1926, el hidroavión de canoa bimotor “Dornier Do Wal” tripulado por Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Pablo Rada amerizó a 120 km de Buenos Aires en medio de una expectación inaudita, después de haber cubierto 10.270 km en siete etapas desde su punto de origen en Palos de la Frontera. Por otra parte, la nota también reflejaba el espíritu regeneracionista que ánimo, sobre todo en un principio, los planes de la dictadura y se filtró a la sociedad a través de un discurso que ponía el énfasis en los grandes diseños de obras públicas, concentrados en la infraestructura hidráulica y eléctrica y en las redes de transporte y comunicaciones como uno de sus puntos esenciales. Pero lo que aquí convendría subrayar es que las propuestas formuladas por Francisco Pérez Carballo y sus compañeros (desde la creación de un *Almirantazgo del aire* al desarrollo de líneas de aviación comercial), además de entroncar tanto con el

---

<sup>203</sup> *Heraldo de Madrid*, 8-3-1925.

<sup>204</sup> La visita a Madrid de dos de las más grandes estrellas del Hollywood de la época, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, la denominada “novia de América”, tuvo una repercusión social asombrosa, gracias en buena parte a la pasión desplegada por multitudes de *fans* y curiosos, entre los que se hicieron visibles nutridos grupos de estudiantes, como refleja la prensa madrileña.

clima imperante de reformas administrativas, pretendidamente estructurales, como con la sugestiva irrupción de la aviación como medio de transporte y poderosa arma militar, expresaba una incipiente vocación política, por el momento posada sobre un interés demostrable en la participación en los asuntos públicos y conectada, en un plano más general, al proceso de maduración de los movimientos juveniles y estudiantiles iniciado en la década de los veinte. En este sentido, y tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria, los estudiantes, cada vez más numerosos y más vinculados a las clases medias y profesionales, tendrían que esperar hasta bien entrada la dictadura de Primo de Rivera para zambullirse con todas las consecuencias en la escena política y trascender, desde una perspectiva comprometida con la reforma en profundidad de la política y las instituciones españolas, todos los límites previsibles desde el aparato del régimen controlado por el dictador.

El fenómeno de la aparición de la juventud universitaria española como actor político de su propio papel y destino hundiría sus raíces, en el plano legal y técnico al menos, en la promulgación de los Reales Decretos auspiciados por el ministro de Instrucción Pública maurista César Silió. En concreto, el de 19 de mayo de 1919, que, en palabras de E. González Calleja, marcó un punto de inflexión en el desarrollo del asociacionismo escolar, ya que estableció la creación obligatoria de una asociación oficial de estudiantes en cada facultad o escuela universitaria, destinada a encauzar la participación de los alumnos en el gobierno de la Universidad de acuerdo con los estatutos, y el de 16 de septiembre de 1921, que propició el nacimiento de “asociaciones profesionales de estudiantiles” de tipo corporativo (en cada facultad se creó una Asociación Oficial de Estudiantes encuadrada en la liberal Unión Nacional de Estudiantes). La recién adquirida autonomía universitaria condujo a una pugna por la representatividad estudiantil entre las asociaciones católicas -la Asociación de Estudiantes Católicos, que en 1921 se transformaría en la Confederación de Estudiantes Católicos de España (CECE), bajo la tutela de la omnipresente ACNP- y la progresista UNE, creada ese mismo año, antecedente de la Federación Universitaria Escolar (FUE).<sup>205</sup> Ambas tendencias estudiantiles, católica y liberal, no podían significarse en asociaciones de carácter político o religioso de acuerdo a lo establecido por la nueva legislación, pero se hicieron visibles con frecuencia y se exacerbaban en el conflicto que enfrentó a la UNE y a la CECE, particularmente intenso durante el curso 1922-23, caracterizado por una especial conflictividad y agitación estudiantil, hasta el punto de que se llegaron a crear sindicatos de estudiantes “profesionales” y aconfesionales en los mismos institutos de segunda enseñanza. Entre ellos, por supuesto, estaban incluidos algunos grupos de estudiantes del Cardenal Cisneros, en la etapa en que Francisco se encontraba en el ecuador de su bachillerato. En cualquier caso, no debe obviarse el hecho de que estos grupos de estudiantes, decididos a impedir la creciente intromisión en la política educativa y universitaria de las asociaciones católicas mayoritarias, no madurarían plenamente, para convertirse en un instrumento, una vanguardia si se quiere,

---

<sup>205</sup>Para profundizar en este proceso de *aggiornamento* del movimiento estudiantil en España que va a desarrollarse a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, véase especialmente E. González Calleja, *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea*, Madrid, Alianza, 2009.

para democratizar y modernizar el país desde el “laboratorio social” de la universidad, hasta los últimos compases de la dictadura de Primo de Rivera, periodo hasta el cual actuarían, en cierta manera, a rebufo de los acontecimientos políticos y de la protesta popular que reflejaban y trataban de utilizar para articular sus respuestas ante el viejo orden impugnado.<sup>206</sup>

El regeneracionismo simplista de la dictadura, *la regeneración a través de Dios* (Ben Ami, 1983; 75), frase tan efectista como elocuente,<sup>207</sup> vinculado estrechamente a la aplicación de una asfixiante política intervencionista y corporativista, se adhirió, ciertamente, a los grandes planes de obras públicas que a partir de la constitución del Directorio Civil sustituyeron a la improvisación inicial. Planes y proyectos ambiciosos, sostenidos por una inversión estatal inédita hasta la fecha, pero un lastre futuro para el déficit público y la salud de la peseta, con perniciosos e inesperados efectos para la estabilidad del régimen que la inspiró.

El sesgo regeneracionista también impregnó importantes reformas sociales que cambiaron la naturaleza, funciones y estructura administrativa del Estado (Fusi, 1997; 243), dirigidas igualmente, como es sabido, a la creación de una nueva moral pública que desterrara la “vieja política” y el sistema caciquil, enraizado especialmente en el mundo rural, para lo que se implementaron, por ejemplo, el Estatuto Municipal y el Provincial, con resultados claramente infructuosos.

Con todo, el régimen que nació del golpe militar de septiembre de 1923, cuya naturaleza está perfectamente expresada bajo la ya clásica metáfora creada brillantemente por Raymond Carr para atribuirle al estamento militar español la responsabilidad histórica de confundir (y yugular más tarde) *a una criatura recién nacida con un cuerpo enfermo*, metáfora tan lúcida como cuestionada es en la actualidad la tesis que representa por algunos autores --nada proclives a reconocer algún síntoma de regeneración democrática en el interior del sistema político de la Restauración-, estaba iniciando un accidentado proceso de institucionalización cuando Pérez Carballo, entre muchos otros estudiantes, abandonaban el instituto para ingresar - en el caso de Francisco- en los dos centros de socialización política que marcarían su trayectoria, al Ateneo de Madrid y la Facultad de Derecho de la Universidad Central.

En este sentido, los estudiantes, como brazo activo de la sociedad española, experimentarían especial y directamente la creciente tendencia del nuevo Directorio Civil, desde su constitución en diciembre de 1925, de gobernar a golpe de decreto: la Ley Callejo, por ejemplo, formó parte de un programa amplio de nacionalización y homogeneización de la enseñanza. En este sentido, si el Directorio Militar presenció un intento de regeneracionismo liberal, el Civil propuso soluciones más autoritarias, aunque dentro de ciertos límites,<sup>208</sup> dirigidas a alcanzar una “normalidad política” construida a través de la institucionalización del régimen sobre una transformación económica y legal del país, en la que instituciones como la Unión Patriótica y la

<sup>206</sup> E. González Calleja, op. cit. p.95-98; E. González López, véase también, en general, *Memorias de un estudiante liberal*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1987.

<sup>207</sup> Shlomo Ben Ami denomina así a lo que él considera como el proceso de génesis del estado nacional-católico, en el que el gobierno de Primo de Rivera rompió con los preceptos del régimen liberal y se sirvió del oscurantismo clerical para orientar su política educativa y cultural.

<sup>208</sup> E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, Madrid, Alianza, 2005, p. 53.

Asamblea Nacional (con un proyecto de constitución finalmente abortado) desempeñarían un papel sobresaliente como ejes de una nueva legalidad, ya descartado el regreso a la constitución de 1876 y a los usos de la vieja política.

***Socio del Ateneo de Madrid. Una vocación intelectual y política hacia las primeras luces de la República.***

El Ateneo de Madrid fue fundado en 1835, bajo el influjo ilustrado del romanticismo liberal, por un grupo de intelectuales y políticos entre los que se encontraban figuras como la de Salustiano Olózaga o el Duque de Rivas. Recogía así el testigo del efímero Ateneo Español creado durante el Trienio Constitucional.

En el artículo segundo de sus estatutos de 1836 se establecía que “los socios reunidos en este Ateneo se proponen aumentar sus conocimientos, por medio de la discusión y de la lectura, y difundirlos por los de la enseñanza y la imprenta”.<sup>209</sup> Toda una declaración de principios que desde ese momento se tradujo, como es sabido, en la construcción de un espacio privilegiado de sociabilidad, de cultura, y, sobre todo, de forja de *política* en mayúsculas (desde la tertulia más o menos pública a la sala de conferencias, del juego de influencias al rito iniciático imprescindible). Un lugar difícil de clasificar donde los políticos respiraban literatura, al tiempo que los intelectuales se ceñían a los asuntos públicos, que sustituía en ocasiones a determinadas instituciones como el Parlamento, cuando no se transformaba en un conciliábulo en el que urdir conspiraciones o súbitos golpes de timón, por llamarlos de alguna manera: el comité revolucionario alumbrado por el pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930, tomó cuerpo en algunos de los despachos y seminarios del Ateneo de Madrid.

Desde la fundación del Ateneo y hasta la guerra civil, la vida política y cultural española no se podía entender, pues, sin la existencia de una institución donde se daban cita tendencias ideológicas enfrentadas y convergían también diversas escuelas literarias y científicas, proyectadas al público en las conferencias y abiertas al debate en las distintas secciones. En coherencia con los cambios experimentados por la sociedad española en el primer tercio de siglo, el Ateneo no había podido resistirse a la enérgica irrupción de los jóvenes intelectuales y estudiantes de las clases medias, que impugnaban la impronta oligárquica y elitista destilada por la presencia en sus salones de condes, marqueses y miembros de la *otra aristocracia*, la financiera e industrial, decididos a hacerse un nombre o a consolidar su influencia con un puesto en la junta directiva del Ateneo.

Y bajo este cambiante contexto social, marcado por la inercia política inducida por la dictadura de Primo de Rivera hacia la progresiva colisión con el mundo académico e intelectual, que afectó de forma severa, como veremos, a esta institución, Francisco Pérez Carballo dio un paso definitivo en el camino que, con el advenimiento de la II República, le convertiría en un reconocido dirigente estudiantil y político, al frente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho madrileña y como miembro de la

---

<sup>209</sup> Para la historia del Ateneo de Madrid, véase en especial A. Ruiz Salvador, *Ateneo, Dictadura y República*, Valencia, Fernando Torres Editor, 1976; J.L. Abellán, *El Ateneo de Madrid: historia, política, cultura, teosofía*, Madrid, La Librería, 2006 y, para entender el formidable vínculo que unía a Azaña con esta institución, Santos Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña. 1880-1940*, Madrid, Taurus, 2008.



directiva de las Juventudes de Acción Republicana. Primero se le vería en su excelente biblioteca y, más tarde, a partir de 1928 -pues desde la clausura del Ateneo decretada por el gobierno sólo era posible utilizar la biblioteca y las aulas donde se impartían clases de idiomas, al margen de las salas de exposiciones artísticas o la peluquería-, entre el numeroso y apasionado público asistente a las emblemáticas conferencias dictadas sobre los más diversos temas de actualidad e interés cultural, científico y político.

En concreto, Francisco Pérez Carballo se dio de alta como socio en el Ateneo el 15 de septiembre de 1926 y lo hizo en un momento especialmente delicado para la institución. Su ingreso se produjo dos meses y medio después del fracaso de la *Sanjuanada*, una conspiración cívico-militar destinada a *regresar* a la legalidad constitucional y parlamentaria anterior al golpe de Primo de Rivera, cuyo liderazgo y planificación asumieron figuras provenientes del gobierno de concentración liberal derrocado por la dictadura en septiembre de 1923 (Romanones y Melquiades Álvarez, secundados por un grupo de militares encabezado por Weyler o Aguilera), con el proceso de institucionalización del régimen a la vista, ya constituido el Directorio Civil en diciembre de 1925. En estas coordenadas, tan extrañas para el desarrollo normal de esta institución como para propiciar su clausura oficial -lo que significaba, de hecho, el cierre del salón de conferencias y la imposibilidad de los debates en las secciones hasta 1928-, Francisco Pérez Carballo firmaría su primer carnet de miembro del Ateneo de Madrid, con el número 11.618.<sup>210</sup> Salvo un breve paréntesis que tomó probablemente para ahorrarse un par de cuotas mensuales, en el verano de 1928 -se dio de baja en el periodo comprendido entre el cuatro de julio y el diecisiete de septiembre de ese año-, permaneció como socio hasta unas semanas después de ser nombrado gobernador de A Coruña, concretamente hasta el 4 de mayo de 1936.

En el momento de hacerse miembro del Ateneo, era todavía un adolescente de dieciséis años, edad en realidad muy temprana para ingresar en una institución de esas características, lo que resulta en realidad altamente significativo tanto de los intereses y actitud de un estudiante disciplinado como de la importancia del Ateneo como puerta de entrada a la política y a la conciencia de ciudadanía. Y es que aun cuando sus fines al rellenar la ficha de inscripción se ciñesen a un afán puramente intelectual -como era el caso de quienes se sentían atraídos por su biblioteca o los cursos y conferencias celebrados en sus cátedras, o necesitaban, por razones académicas o personales, reflejarse en el esplendor cultural de esta institución-, los socios de nuevo ingreso eran perfectamente conscientes de la atmósfera política que envolvía al Ateneo en aquellas fechas (y de los riesgos entrañados por esta circunstancia) y su estrecha vinculación a la defensa activa y a la práctica de la libertad de pensamiento.

El Ateneo de Madrid fue considerado, tanto por los directorios militar y civil de Primo de Rivera como por las derivaciones esclerotizadas de la dictadura expresadas en los gobiernos Berenguer y Aznar, un verdadero club revolucionario, un germen constante de provocación política y social

---

<sup>210</sup> Archivo del Ateneo de Madrid. Listado de socios anteriores a 1939 (elaborado por uno de los mismos durante los primeros años de la posguerra, momento en que muy probablemente desaparecería, a manos de Falange, la documentación histórica original que reflejaba más de cien años de historia).

Clausurado por la dictadura de Primo de Rivera en febrero de 1924 (al tiempo que comenzaba la venganza contra Unamuno y Rodrigo Soriano), tras las dimisiones de la juntas presididas por Ángel Osorio y Gallardo (que había rechazado de plano el nombramiento gubernamental de un delegado de la autoridad para vigilar cada uno de sus actos, al que respondió con un desafiante “lock out”) y Armando Palacio Valdés, fracasado en su intento de despolitizar la vida de la institución -y después de albergar los debates de la Memoria de Arantave acerca de las responsabilidades políticas derivadas del desastre de Annual, con Rodrigo Soriano, en la sección de Ciencias Morales y Políticas-, el Ateneo parecía varado en sus propias contradicciones.

Se diría, incluso, que su estado era agonizante si lo comparamos con otras etapas de deslumbrante vitalidad, afectado ahora por una crisis que todavía no había dado sus últimos coletazos cuando en junio de 1926 el gobierno decidía imponer una junta más afín a sus propósitos ideológicos (que, en realidad, insinuaban la progresiva disolución de la entidad), encabezada por el abogado de la UP José Soto Reguera, para sustituir a la dirigida por el doctor Marañón. Esta última había sido elegida en octubre de 1924 por aclamación y no por elección -la dictadura lo habría impedido-, tras la renuncia de Palacio Valdés, y su trayectoria se caracterizó por su hostilidad al régimen, convertida en franca rebeldía al conocer la suspensión y deportación de uno de sus miembros más destacados, el catedrático de Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa.

De modo que, en palabras de A. Ruiz Salvador, “la vida de este Ateneo “ocupado” se desarrollaba en la biblioteca, en la sala de exposiciones (Ernesto Menager, Santos Sanz Santos), y en la peluquería, su “Junta de gobierno” en el exilio no dejaba de resistir. Irónicamente, simbólicamente, todos los actos públicos en que la Junta intervenía “oficialmente” eran actos necrológicos”.<sup>211</sup>

En este Ateneo desnaturalizado en cierto modo, aunque siempre tan estimulante por otra parte, iniciaba el joven Pérez Carballo su andadura, probablemente ya atento al liderazgo natural y a la impronta humana, política e intelectual que Manuel Azaña representaba para muchos de los socios de esta institución, cuando no atraído por su palabra aguda e irónica. Azaña seguía manteniendo un peso específico en la vida ateneísta, aunque a un nivel más discreto tanto en lo relativo a significarse, por motivos obvios, en los órganos directivos y en las actividades del Ateneo, como en la frecuencia con la que visitaba sus instalaciones, acotadas ahora a unas cuantas dependencias bajo sospecha. Seguía siendo socio y seguía preocupándose por los asuntos del Ateneo en tertulias y cafés, en los círculos donde se gestaba su proyecto de acción política en AR o en la Alianza Republicana. Pero ya hacía dos años que Azaña, el hombre que encarnaría en un futuro la República democrática y liberal por la que Francisco dio la vida, y tal vez una de las influencias que resultarían más determinantes en la formación de un joven convencido de la importancia del derecho y la política para la vertebración de una sociedad libre y democrática -y, sin duda, la figura que más admiraría el futuro líder estudiantil en el terreno de la política nacional-, había abandonado la junta de gobierno del Ateneo, en la que como secretario permaneció durante seis años (1913-1919), embarcado en una meritoria labor de reforma de la institución y sumergido hasta tal

---

<sup>211</sup> A. Ruiz Salvador, *Ateneo, Dictadura y República...* op.cit, p. 34.

punto en la identidad ateneísta que, como afirma Santos Juliá, “Manuel Azaña resulta incomprensible sin el Ateneo”.<sup>212</sup>

Algo de esto, evidentemente a otra escala y con un ritmo más pausado, le podría haber sucedido a Francisco, que, si bien ingresó en un momento no tan luminoso en lo intelectual -prohibidas las conferencias en el salón de actos y los debates en las secciones, y hasta las tertulias de los pasillos se trasladaron a la peluquería o a la mítica cacharrería, como se ha dicho-, no tardó en disfrutar, sobre todo desde los años finales de la dictadura, de la experiencia deparada por la participación en una vida cultural y política intensa. Una trayectoria acelerada con el devenir de la República, que le llevaría a ocupar un puesto en la Junta de gobierno presidida por Unamuno (elección de vacantes del 28 de octubre de 1933, reelegido también como secretario tercero el 22 de abril de 1934) y en la sección de Ciencias morales y políticas (junio de 1933) y, en el plano personal, a conocer, probablemente en la misma biblioteca del Ateneo a Juana Capdevielle,<sup>213</sup> con la que andando el tiempo contraería matrimonio civil.

En la época de la que estamos hablando la vida interna de esta institución se regía por el reglamento de 1903, vigente hasta que en 1932 se aprobara un nuevo texto normativo, más acorde con los nuevos tiempos y con uno de los símbolos que mejor reflejaban el espíritu liberal y republicano, causa de su vulnerabilidad y exposición, a la agitación y a la violencia generadas, fundamentalmente, por elementos provocadores falangistas y de extrema derecha. En concreto, los dos primeros artículos del Reglamento de 1903 definían el carácter de la institución en estos términos:

ARTÍCULO 1.º El Ateneo es una Sociedad exclusivamente científica, literaria y artística.  
ART.2 Esta institución se propone:  
1.º Difundir las verdades de la ciencia y las bellezas del arte por todos los medios adecuados.  
2.º Favorecer dentro de su seno el desarrollo de Asociaciones que se propongan realizar la investigación científica y el cultivo del arte<sup>214</sup>.

En relación al proceso de admisión y a la tipología de los socios que constituían la columna vertebral del Ateneo, se especificaba lo siguiente.

ART. 4: El número de Socios del Ateneo, en sus varios conceptos de *número*, de *mérito*, *honorarios* y *transeuntes*, es limitado.

En su admisión se observarán las reglas siguientes:

- a. Los Socios de número ingresarán en la Sociedad mediante propuesta suscrita por tres individuos de la misma. En dicha propuesta se consignarán: el nombre y apellido del interesado, su domicilio, profesión y punto de su vecindad ó residencia habitual.  
La propuesta se expondrá en el cuadro de anuncios del Ateneo por espacio de ocho días, transcurridos los cuales, la Junta de gobierno, en la primera Junta general que se celebre, dará cuenta de ella, procediéndose en el acto á su votación. La Junta general aceptará o rechazará la propuesta sin debate, en votación ordinaria, ó por medio de bolas (con arreglo a lo que se establece en el art.31), siempre que lo pida alguno de los Socios. Si al hacerse el escrutinio no resultara mayoría, se tendría por rechazada la propuesta de admisión, que no podrá reproducirse sino con dos años de posterioridad. Aprobada la propuesta, la Secretaría de la Corporación comunicará al Socio electo el acuerdo de la Junta general á los fines que prescribe el reglamento remitiéndole para su conocimiento un ejemplar

<sup>212</sup> S. Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña...* op.cit, p.207.

<sup>213</sup> Entrevista a Juan Pérez Carballo-Veiga y Carmen Veiga de Bernardo, Madrid, 5-2-2008.

<sup>214</sup> *Reglamento del Ateneo científico, literario y artístico de Madrid*. Madrid, Est. Tip. “sucesores de Rivadeneyra”, 1903, p. 5.

del mismo. Cumplidos que estos sean, se le hará entrega de su respectiva tarjeta de Socio de número, autorizada con las firmas del Presidente y un Secretario.

- b. La calidad de Socio de mérito es una distinción que otorga la Sociedad á los Socios de número que hayan prestado servicios eminentes a la institución. La Junta general extraordinaria convocada al efecto acordará, á propuesta de la Junta de gobierno, si debe o no otorgarse esta recompensa. Atoda propuesta procederá una exposición de motivos en la que se harán constar los que la justifican. El acuerdo se adoptará en votación por bolas, y para que la propuesta sea aprobada, necesitará reunir las dos terceras partes de los votos que se depositen en la urna.
- c. Los Socios *transeuntes* ingresarán en la misma forma y por los mismos procedimientos que los socios de número. A los veinte meses de ser Socios transeúntes , y de haber satisfecho sin interrupción la uota mensual correspondiente, la Junta de gobierno les declarará Socios de *número*, y entrarán á disfrutar de todos los derechos que á los de esta clase otorga el Reglamento.  
Los Socios *transeúntes* no tendrán voz ni voto en las Juntas generales, ni voto en las Secciones.
- d. Podrán recibir el título de *Socio honorario* aquellas personas que, consideradas como eminentes en el concepto público, presten servicios extraordinarios al Ateneo.<sup>215</sup>

Del articulado de este Reglamento puede deducirse que en el caso hipotético de que Francisco Pérez Carballo hubiese ingresado en el Ateneo como socio *transeúnte*, es decir, sin los derechos políticos que dentro de la institución le permitirían participar en los procesos de toma de decisiones atribuidos tanto a la Junta general como a las propias secciones, habría podido convertirse, tras un periodo de veinte meses de permanencia en la institución, y una vez satisfechas las cuotas pertinentes, en socio de *número* antes de la reanudación plena de las actividades del Ateneo en 1928, con la apertura del salón de actos y la celebración de nuevas conferencias y debates públicos.

Según la misma letra de la norma, la estructura organizativa y la dirección del Ateneo se asentaban sobre un eje constituido, al menos en teoría, por la articulación de las juntas generales ordinaria (de carácter mensual) y extraordinaria (representativas de la totalidad de los socios y compuesta solamente por los de *número* y los de *mérito*), y la de *Gobierno* (compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes, dos Vocales, un Bibliotecario, un Contador, un Depositario y tres Secretarios), cuyos cargos eran elegidos por la Junta general entre los socios de *número* o de *mérito*, con más de un año de antigüedad en la institución, y se ocupaban durante dos años, renovándose anualmente por mitades.

La Junta de Gobierno impuesta por el Directorio Civil, a través de una R.O de 25 de junio del mismo año, afrontó desde el principio la firme oposición de los miembros de la Junta *saliente*, legitimada por representar a la mayoría de los socios --algunos de cuyos miembros corrieron la misma suerte que su presidente, Gregorio Maraón, y fueron finalmente detenidos el 7 de julio, al resistirse a entregar el poder- y de algunos grupos de socios dispuestos a impedir la obra de demolición de esta entidad emprendida por la dictadura. La estrategia gubernamental de acoso y derribo del Ateneo estuvo a punto de cristalizar a principios de 1928, cuando desde el poder se decidió impulsar seriamente la fusión del Ateneo y el Círculo de Bellas Artes madrileño, objetivo frustrado finalmente por la Junta general extraordinaria del Círculo al rechazar, tras una decisiva intervención de Manuel Azaña, una proposición en este sentido.

---

<sup>215</sup> Ibid. p.6-8.

Así pues, las primeras experiencias de Francisco Pérez Carballo como socio del Ateneo transcurrieron en el interior de un agitado y confuso escenario donde se entrecruzaban conflictos ideológicos enquistados y diferentes formas de entender y gestionar la entonces aislada república de la literatura, el arte y la ciencia. Se puede afirmar que durante buena parte de la dictadura de Primo de Rivera el Ateneo fue un lugar más propicio para estudiar o leer la prensa española y extranjera, en su bien nutrida biblioteca, que para hacer política, aunque no dejaría de ser un espacio abierto, sobre todo en los últimos años del régimen dictatorial, para que los distintos núcleos de la oposición a la dictadura definieran sus posiciones y se decantaran, de forma paulatina, hacia la opción republicana.

Basándose en la reflexión de un testigo de esta etapa, José María Salaverría, Antonio Ruiz Salvador sintetizaba la agonía circunstancial, temporal, del Ateneo de Madrid bajo una dictadura:

Sin conferencias, sin debates de memorias, sin juntas generales, sin diálogos en los pasillos ni tertulias en la cacharrería, el Ateneo estaba condenado a desaparecer por la sencilla razón de que en un espacio dictatorial no tienen cabida, ni salvación, las instituciones democráticas.<sup>216</sup>

Agonía, deterioro, decadencia en definitiva que también afectaba a la fisonomía de la institución, a su patrimonio material en sentido estricto:

“Aquellos sillones de antaño, poderoso esfuerzo de la tapicería madrileña, ahora no son más que miserables despojos (...); pero todo el Ateneo está así, en el mismo estado de acabamiento, de penuria y de ruina (...) Los cuadros se rajan en las paredes. Huele a ruina por todas partes”.<sup>217</sup>

Y entre los miembros más destacados de este renacido movimiento republicano forjado a fuego lento en sus salones, aparecía la imagen de Manuel Azaña, el funcionario resignado, el escritor, el lúcido historiador y, sobre todo, el político con ideas transformadoras, modernizadoras del país, que a pesar de haber salido de la Junta de gobierno ateneísta en 1919, como se ha recordado antes, no se desentendía de los asuntos que concernían al Ateneo. Azaña, por supuesto, no era condescendiente con la crisis de una institución ocupada e intervenida en sus órganos directivos por personajes afines a la dictadura, aunque en esta etapa sus esfuerzos estuviesen más centrados, con el aliento imprescindible de José Giral y Enrique Martí Jara, fundamentalmente, en la articulación de un grupo de “Acción Política”. Una aventura intelectual de arranque incierto que a lo largo de 1925, y tras un manifiesto fundacional publicado en mayo, iría cuajando lentamente en Acción Republicana, una formación no asimilable a un partido organizado al uso, sino más bien un grupo de intelectuales decidido a influir en política y aunar voluntades en el camino a la República, carente durante mucho tiempo de estructura, estatutos, afiliados o militantes en sentido estricto y, sobre todo, de conciencia de formar parte de un proyecto político vertebrado formalmente. De hecho, tuvo que afirmar su identidad, pretendidamente difusa desde el inicio, a partir de febrero de 1926 para justificar su representación en la Junta directiva de la recién creada Alianza Republicana (los actos del 11 de febrero, aniversario de la Primera República, y

<sup>216</sup> A. Ruiz Salvador, *Ateneo, Dictadura y República*, op. cit, p.41.

<sup>217</sup> J. M. Salaverría, *Instantes: Literatura. Política. Costumbres*, Madrid, 1927, p.35.

el inevitable manifiesto señalaron su punto de partida), plataforma que se arrogó la función de coordinar al conjunto de fuerzas y partidos republicanos como resultado de una transacción de equilibrios entre la capacidad de movilización del *lerrouxismo* y la legitimidad que aportaba el nuevo republicanismo de Azaña y los suyos, dado el desprestigio de los republicanos históricos, que no organizaría su primer congreso hasta 1930.<sup>218</sup>

Meses antes de ser admitido en el Ateneo, pues, Francisco ya había dado muestras de su interés en los asuntos públicos. Recordemos la nota escrita al rey por una comisión de alumnos de quinto y sexto curso de bachillerato, matriculados en el instituto Cardenal Cisneros, en demanda de algunas medidas para estimular el tráfico aeronáutico, que muy probablemente llevaba entre líneas un significado de incipiente reacción estudiantil, larvada en el plano de la percepción a base de conflictos cronificados en un orden social demasiado estrecho, ante un poder político grandilocuente pero esclerotizado, que no ofrecía garantías de un futuro encauzado por las vías de la democracia y la modernización.

En función de una perspectiva de análisis histórico comparativa y globalizadora, Tony Judt se ha referido al estado de desorientación y frustración generacional en el que está sumida la juventud actual (y no precisamente por falta de objetivos o ideales), transcurrida ya una década del siglo XXI, y ha recordado que “la última vez que una cohorte de jóvenes expresó una frustración comparable ante la vaciedad de sus vidas y la desalentadora falta de sentido de su mundo fue en la década de 1920: no es casual que los historiadores hablen de la “generación perdida”.<sup>219</sup>

Si en el caso que nos ocupa, una biografía que atraviesa distintas secuencias del periodo citado por Tony Judt, ese malestar y ese vacío existencial se combinaron donde la esfera del individuo se abre a la colectividad en un proceso de continua interacción --lo que no parecería, precisamente, una hipótesis descabellada--, la etapa de Francisco como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Central se convertiría en el estímulo definitivo para una vocación política, dado el papel que los universitarios desempeñaron en el abatimiento de un régimen inmerso en un pantanoso y, finalmente, fallido proceso de institucionalización.

### ***El estudiante de leyes y la universidad en el laberinto de una dictadura***

Francisco Pérez Carballo iniciaba sus estudios de Derecho en la Universidad Central en el curso 1926-27. Por entonces, la facultad de Derecho de esta universidad representaba la estrecha vinculación entre el ejercicio del poder político y la enseñanza superior jurídica. Bastantes de sus profesores ocuparían altos cargos de responsabilidad política tanto en la dictadura como durante la II República, tradición que se remontaba a los tiempos de la construcción del estado liberal, y como institución fue el eje sobre el que gravitaron las diferentes políticas universitarias del momento, y con ellas la demasiadas veces estéril fiebre reformista de los sucesivos gobiernos (civiles o militares) en materia educativa.

<sup>218</sup> Véase a este respecto, S. Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña*, op. cit.; J. Avilés Farré, *La izquierda burguesa y la tragedia de la II República*, Madrid, 2006.

<sup>219</sup> Tony Judt, *Algo va mal*, Madrid, Taurus, 2010, p.19.

Del mismo modo, era la segunda facultad, tras Medicina, en número de alumnos dentro de las que conformaban la Universidad Central: 1311 de ellos se habían matriculado en 1923, que se convertirían en 6328 en 1930 (en ese momento, el total de alumnos de Derecho a nivel nacional era de 12.882), año en que Francisco emprendería su quinto y último año de licenciatura. Estas cifras nos hablan de una masificación relativa en las aulas de esta facultad si comparamos el número de estudiantes de leyes matriculados en Madrid con el de los adscritos a otras facultades de derecho españolas u otros centros del distrito universitario madrileño. Este hecho estaba originando un creciente malestar entre los profesores y catedráticos de Derecho y obligaba a dividir algunas cátedras en varias secciones, medida adoptada, por ejemplo, por el catedrático de Derecho Político, Adolfo González Posada.<sup>220</sup>

La irrupción de los hijos de las emergentes clases medias en el sistema educativo español se había reflejado también, como estamos viendo, en el crecimiento extraordinario del número de alumnos matriculados en los doce centros universitarios españoles, incrementado en un promedio superior al 20% anual desde 1926, año del ingreso de Francisco en la facultad de Derecho de la Universidad Central. Se puede decir, para hacernos una idea más precisa de su verdadero peso específico, que la universidad madrileña englobaba al 30% del total de estudiantes universitarios matriculados en toda España y configuraba el distrito universitario más importante del país.<sup>221</sup>

Pérez Carballo llegaba a una universidad condenada a su secular idiosincrasia de paciente agónico aquejado de una salud de hierro, metáfora que se aplicó oportunamente para contradecir la *maldición* vislumbrada en el devenir sinuoso de la historia contemporánea española y que resulta muy apropiada para la representación narrativa en este caso. Convulsa, contradictoria, falta de una verdadera autonomía pedagógica y administrativa que la espiral de reformas iniciado por el ministro César Silió en 1919 no pudo consolidar, anquilosada en un insatisfactorio papel de expendedoría de títulos y refugio de profesores-funcionarios ahogados por la burocracia (profesores no precisamente carentes de talento y brillo intelectual, como es bien sabido), la universidad española estaba inmersa ya entonces en un proceso de gradual distanciamiento del poder representado por Primo, cuyo precedente estaría en la constitución en 1924 de la Unión Liberal de Estudiantes (ULE), inspirada por Graco Marsá, y en la polémica en torno al homenaje tributado a Ganivet en 1925.

En el plano estructural, la universidad española, y más concretamente la Central, se debatía entre las iniciales posiciones seguidistas de la política oficial y la necesidad de un cambio educativo y político más profundo, vislumbrada con rapidez por una nueva generación de estudiantes inconformistas que procedentes de las clases medias se iban a aglutinar en torno a la Federación Universitaria Escolar (FUE), creada a fines de 1926, que será objeto de nuestra atención en breve.

Así pues, el periodo de cinco años de licenciatura cursado por Francisco en la facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid (1926-1931) coincidió con el

---

<sup>220</sup> J. M. Puyol Montero, "El Plan de estudios de Derecho en la Universidad Central", en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 8 (2005), p. 285.

<sup>221</sup> E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, op.cit, p. 86-87.

despertar del movimiento universitario contra las políticas representativas del viejo orden social sostenido finalmente por la dictadura de Primo de Rivera, convertidas, en materia universitaria, en una verdadera encrucijada de planes de estudios derivados de diversas reformas tan efímeras como ilustradoras de fuertes polémicas en el seno de la universidad y la sociedad españolas.

En un país que a la altura de 1920 presentaba unas credenciales tan sonrojantes como para reflejar la cifra de un 52,35 % de analfabetos entre los inscritos en el Censo de ese año (lo que hizo de la reforma educativa una cuestión de Estado, pero sin reflejo en el aumento significativo del presupuesto dedicado a Educación) y que, además, no se planteaba ni el rescate de la enseñanza secundaria, impartida en gran medida por centros privados de naturaleza religiosa, ni tampoco el desarrollo de las escuelas técnicas profesionales, resultaba extraño el trato que dispensaba el poder político al estamento universitario, expresado en continuos cambios en los planes de estudios, más eficaces para provocar el mareo en los rectores y decanos que para encauzar definitivamente el rumbo de la universidad española. Como afirma J.M. Puyol para el caso concreto de la facultad de Derecho de la Universidad Central, de 1922 a 1931, en apenas nueve años, estuvieron vigentes seis planes de estudios distintos:

El de Silió, el anterior a Silió, el de Callejo, el de Tormo y nuevamente el anterior a Silió, a lo que añadimos el nuevo plan provisional de la República de septiembre de 1931.<sup>222</sup>

De hecho, hasta tres planes de estudios distintos estuvieron vigentes en un mismo curso académico en la facultad de Derecho de Madrid (1930-31). Francisco Pérez Carballo estaba matriculado entonces en quinto y, como se decidió que los estudiantes de los dos últimos cursos siguiesen adscritos al plan vigente antes de la aprobación de la Ley Callejo (cuya reforma de los estudios de Derecho tampoco le afectó), tuvo la suerte de terminar su carrera en el mismo plan de estudios en el que la empezó.

Este caos administrativo, inspirado desde la negligencia de las autoridades académicas del país, trajo nefastas y previsibles consecuencias, dada la dificultad de adaptar el engranaje administrativo y académico universitario a una realidad legal tan inestable.

En el caso concreto que nos ocupa, Pérez Carballo estudió, como se ha dicho antes, las asignaturas correspondientes al viejo plan de estudios de Derecho de 1900, vigente antes de la aprobación de la Ley Callejo (1928) y después de la derogación de la reforma universitaria debida al ministro César Silió y al controvertido Real Decreto de 21 de mayo de 1919, que fue anulado por el de 31 de julio de 1922 para restablecer la legalidad previa al ensayo de autonomía universitaria propugnado por el ministro maurista para contrarrestar el modelo centralista instaurado por la Ley Moyano.

El expediente académico de Francisco como estudiante de la facultad de Derecho de la U. Central brilló casi tanto como lo hizo el de su bachillerato en el instituto del Cardenal Cisneros, examinado anteriormente, a pesar de unos ciertos titubeos iniciales que debieron estar relacionados, probablemente, con las ocupaciones que desempeñaba para sacarse un dinero con el que pagarse sus estudios y ayudar, de paso, a la familia, o

---

<sup>222</sup> J.M. Puyol Montero, “El Plan de Estudios de Derecho en la Universidad Central (1923-1931)”, op. cit., p. 352.



tal vez a algún problema de salud, algo que no se puede descartar pues años después, como se refleja en varios documentos, sufrió *astenia nerviosa* debido al estrés producido por una intensa actividad intelectual que le llevaría a un agotamiento físico y psicológico.

En concreto, la escasa retribución obtenida a través de algunas ocupaciones eventuales, no compensaría, seguramente, el enorme esfuerzo que Francisco tuvo que realizar para hacer compatibles trabajo, estudios y actividad política a lo largo de su corta trayectoria vital. Estos primeros escarceos laborales, consistían en la impartición de clases particulares de latín y otras materias y en la realización de algunos trabajos administrativos (tendrían más que ver con las funciones de los entonces denominados *pasantes*) en alguna compañía o empresa sin especificar, algo muy común en la época incluso para los hijos de familias poseedoras de un estatus socioeconómico bastante superior al detentado por la familia Pérez Carballo, como se refleja en bastantes testimonios autobiográficos de intelectuales y políticos que estudiaron en aquella época.<sup>223</sup>

De ese modo, en su “irregular” y sorprendente primer curso de Derecho (irregular por haber aprobado solamente una asignatura), el denominado *curso preparatorio*, en el que se cursaban tres asignaturas impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras por profesores de este centro (debatido con fuerza en varios momentos fue eliminado por el plan de estudios de 1928, alumbrado por la Ley Callejo), se examinaría Pérez Carballo de dos asignaturas en la convocatoria de septiembre, *Lógica fundamental e Historia de España*, saldadas la primera con un *sobresaliente con derecho a matrícula de honor* y, la segunda, con un insólito *suspense*, el único en el conjunto de su carrera académica, mientras que *Lengua y literatura españolas*, la tercera en discordia, quedaría para la convocatoria extraordinaria de enero del siguiente año, al no presentarse el alumno a la convocatoria preceptiva.<sup>224</sup>

En el curso 1927-28, obtuvo tanto en la asignaturas pendientes de primero (recordemos, *Historia de España* y *Lengua y literatura españolas*) como en las otras tres pertenecientes a segundo (*Derecho Natural*, *Derecho Romano* y *Economía Política*) la misma y brillante calificación, *sobresaliente con derecho a matrícula de honor*.

---

<sup>223</sup> Tanto Carmen Veiga de Bernardo como su hijo Juan Pérez-Carballo Veiga recuerdan haber oído comentarios realizados por Ángel Pérez Carballo, hermano de Francisco, respecto de un puesto de trabajo desempeñado por este último en la compañía *Minas de Río Tinto*, pero su memoria no pudo precisar con seguridad este dato y tampoco se pudo comprobar documentalmente. En cualquier caso, se puede dar como cierto, aun si contemplamos los datos de los que disponemos con una cierta perspectiva, que estos empleos ocasionales precedieron a la obtención, por medio de oposición, de la plaza de oficial letrado del Congreso de los Diputados (1933), periodo del que hablaremos en el próximo capítulo. Entrevista a Carmen Veiga de Bernardo y a Juan Pérez-Carballo Veiga, Madrid, 5 de febrero de 2008. Entrevista a Juan Pérez-Carballo Veiga, Madrid, 3 de diciembre de 2010.

<sup>224</sup> Los datos relativos a las calificaciones de Francisco Pérez Carballo en sus estudios universitarios proceden de los certificados de notas y de otros documentos complementarios hallados en sus expedientes como alumno de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, depositados en el Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid y en el Archivo General de la Administración (fondo correspondiente al Ministerio de Instrucción Pública) y como peticionario de ayudas para estudiar derecho privado en Alemania a la Junta de Ampliación de Estudios (documento ya citado con anterioridad: AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo)

Los restantes cursos de su carrera se mantuvieron ya en esta línea de deslumbrantes resultados académicos que, sin perjuicio de la diferencia que se podría acusar entre el periodo formativo y el desempeño profesional (muy alta en España en el caso de un jurista recién graduado), auguraban una prometedora carrera profesional y docente - Pérez Carballo se matricularía en los cursos de doctorado a finales de 1931 y, tras algunos altibajos, prepararía oposiciones a cátedra más tarde-, a partir del ejercicio del derecho privado desde un despacho de abogados. De momento, su trayectoria académica seguía recibiendo distinciones y premios en metálico, como las becas que le fueron concedidas por la Fundación Ureña en noviembre de 1928, merced a que en su persona concurrían, según los rectores de esta institución, radicada en la misma facultad de Derecho, “las circunstancias de pobreza y aplicación exigidas por las cláusulas fundacionales”,<sup>225</sup> y, más tarde, en febrero de 1930, por la Fundación Montalbán, gestionada también por la propia facultad -la Junta de Facultad tomó el acuerdo de elegir al candidato Pérez Carballo por unanimidad-, dotada esta última con dos mil quinientas pesetas.<sup>226</sup> Ambas becas y los demás premios en metálico otorgados por las distintas facultades universitarias o por el Estado debían solicitarse por parte del alumno, que debía superar un concurso de méritos o una oposición al efecto, en realidad concretada en una prueba o examen sobre su especialidad.

En tercer curso (1928-1929), obtuvo la calificación de *sobresaliente con derecho a matrícula de honor* en las asignaturas de *Historia general del derecho*, *Derecho Canónico*, *Derecho Político*, *Hacienda Pública* y *Derecho Penal*, con lo que completaría el segundo pleno de los cuatro obtenidos en su carrera universitaria.<sup>227</sup> Sólo en el accidentado primer curso aparecerían, como ya se ha dicho, la sombra de una calificación por debajo de sobresaliente. Sus extraordinarias calificaciones de tercer curso le valieron de nuevo la concesión de un premio en metálico del estado y el que su nombre fuese pronunciado de nuevo —ya había obtenido el premio extraordinario de bachillerato, sección de letras, en 1926— entre el de los alumnos distinguidos citados, siguiendo el ritual acostumbrado de las menciones honoríficas, en el acto de inauguración del siguiente curso académico (1929-30) en la Universidad Central de Madrid.<sup>228</sup>

<sup>225</sup> Cita literal extraída del certificado correspondiente, basado en la información aportada por el libro de actas del Patronato de la Fundación Ureña. Véase AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>226</sup> Certificado alusivo (con fecha de 5 de febrero de 1935) que toma los datos del Libro de actas de Juntas de Facultad, en AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>227</sup> Aunque en *Derecho Penal* hay una discrepancia entre lo reflejado por los certificados de notas incluidos en el expedientes académicos custodiados por la Universidad Central y el Ministerio de Instrucción Pública y el certificado académico personal aparecido dentro del expediente de la JAE, ya que en este último no se consigna el “derecho a matrícula” para esta asignatura.

Véase: -Archivo General de la Administración (en adelante, A:G:A). Educación/ 31. Expediente de Francisco Pérez Carballo (Facultad de Derecho).

-Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, expediente académico de Francisco Pérez Carballo (en adelante: AG de la UCM, Exp acad. Francisco Pérez Carballo)

- AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>228</sup> *Heraldo de Madrid* y *La Voz* (Madrid) del uno de octubre de 1929. Estos diarios dan el nombre de Francisco Pérez Carballo como ganador de los premios en metálico del Estado asignados a las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de Madrid, probablemente un error de la agencia que proporcionó la noticia, cuando en realidad sólo obtuvo el de la de Derecho, carrera en la que estaba matriculado.

Con respecto a cuarto curso (1929-30) no parece haber ninguna duda fontal. Las cinco asignaturas cursadas por Francisco –las dos de *Derecho civil*, *Procedimientos judiciales*, *Derecho administrativo* y *Derecho internacional público*—fueron saldadas con otros tantos *sobresalientes con derecho a matrícula*. De este curso conocemos algunos datos sobre los horarios y la distribución de las clases gracias a la información proporcionada por el Anuario de la Universidad de Madrid correspondiente al curso 1929-30. Es, qué duda cabe, fascinante acercarse con detalle al engranaje de los estudios universitarios de la época, empezando por su mismo eje, la clase, el aula. Así por ejemplo, la asignatura de *Derecho civil español común y fiscal (segundo curso)*, a cargo de Felipe Clemente de Diego, se impartía diariamente y comenzaba a las diez de la mañana en el aula 14. *Procedimientos judiciales*, ceñida a los lunes, miércoles y viernes, tenía como hora de inicio la una y media en el *Salón de grados* y estaba a cargo de Francisco Becaña González. *Derecho internacional público* (martes, jueves y sábado, a las tres de la tarde, también en el aula 14) estaba a cargo del propio José de Yanguas Mesía. *Elementos de Hacienda Pública*, por su parte, se impartía en el aula 12 los martes, jueves y sábado a partir de las nueve de la mañana: José María Olózaga era el profesor encargado de una de las materias en apariencia más áridas de la carrera de leyes.

En quinto y último curso (1930-31), las fuentes documentales que estamos manejando vuelven a discrepar en el matiz del “derecho a la matrícula de honor” en las tres asignaturas consignadas. Mientras en el certificado académico de notas incluido en el expediente de Francisco Pérez Carballo como alumno de la facultad de Derecho de la U. Central de Madrid figuran tres *sobresalientes (Derecho internacional público, Práctica forense y Derecho mercantil)* sin especificarse nada más respecto a ello,<sup>229</sup> el expedido por la misma facultad con posterioridad, y adjunto a la instancia que el ya abogado y letrado del Congreso de los Diputados presentó, en febrero de 1935, ante la JAE –con la intención de solicitar una pensión de un año para estudiar derecho privado en Alemania–, reseña claramente que esos tres sobresalientes citados daban derecho a matrícula de honor.<sup>230</sup>

En cualquier caso, y al margen de los matices antes señalados –debidos en gran medida a la difícil interpretación de nomenclaturas y signos formales en alguno de los documentos o a los usos administrativos característicos de la universidad española en ciertas etapas–, interesa aquí sobremanera la huella de la vocación intelectual empeñada en sortear los evidentes obstáculos que se le presentaban a un joven procedente de una familia de clase trabajadora –Emilio, el padre, aparecía todavía como jornalero en el padrón municipal de 1930, ganando un salario de ocho pesetas al día–,<sup>231</sup> acuciada siempre por el lastre de una economía muy modesta y, en ciertas ocasiones, por un determinado origen inmigrante, la imagen social prevalente de los gallegos de extracción más humilde se traducían en su correspondiente estereotipo.

<sup>229</sup> Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Expediente académico de Francisco Pérez Carballo.

<sup>230</sup> AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>231</sup> Archivo de la Villa de Madrid. Empadronamiento de 1930. Tomo 155. Chamberí. Barrio Dos de Mayo.

Un dato a tener en cuenta también es que Pérez Carballo se matriculó en los cinco cursos de su carrera (y posteriormente también en el doctorado a partir del curso 1931-32)), como alumno oficial de la facultad de Derecho, hecho que, además de significar la asistencia regular del alumno a clase y el seguimiento de las explicaciones *in situ*, además del pago de unas tasas académicas en buena lógica más elevadas de las abonadas por los estudiantes acogidos a la modalidad no oficial o inscritos a finales de curso —por otra parte, las reducciones asignadas a las matrículas gratuita y de honor permitían la supervivencia como estudiantes universitarios de alumnos que nunca hubieran podido costearse una ordinaria—, implicaba un plus de compromiso con sus estudios universitarios y la profesión elegida para ejercer en un futuro más o menos cercano. Como ha quedado suficientemente reflejado en las páginas que anteceden, Francisco no tuvo apenas necesidad de solicitar a principios de curso la modalidad estricta de matrícula gratuita, indicado para estudiantes sin recursos, como era su caso —recuérdese que *ordinaria*, *gratuita* y *de honor* eran los tres tipos de matrícula establecidos en la Universidad Central de Madrid—, por haber aplicado matrículas de honor procedentes de las asignaturas de bachillerato en primer curso y, en los cursos sucesivos, por disfrutar en la mayoría de las asignaturas de los beneficios económicos inherentes a la colección de sobresalientes con derecho a matrícula de honor cosechada, complementada, finalmente, con las becas y premios en metálico obtenidos.<sup>232</sup>

En este sentido, es conveniente señalar, por contraste, el alto porcentaje de alumnos que se matriculaban en la enseñanza no oficial —una preocupación endémica para las autoridades académicas y educativas españolas— y recurrían, como alternativa para cubrir los trámites de los exámenes y facilitar la asimilación de contenidos, a academias privadas un tanto elitistas y caras o se limitaban a vivir del aprendizaje memorístico del correspondiente manual o —esto era menos gravoso— de los apuntes que circulaban de mano en mano desde tiempos inmemoriales, cuando no se los cedía un compañero de confianza con galones de alumno aplicado.

Aunque para una parte de los estudiantes que decidían matricularse por libre, la elección de ese turno estaba justificada por razones de compatibilidad con el trabajo o por residir lejos del centro de enseñanza universitaria, a lo que se añadía la falta de atractivo o la mala fama de una universidad que adolecía de modelos pedagógicos y docentes obsoletos —paradójicamente, esto sucedía en el mismo momento en que la Universidad Central contaba con un elenco de profesores de gran prestigio intelectual—, muchos alumnos demostraban, al optar por este tipo de matrícula, su falta de interés o de vocación ante la carrera académica libremente elegida, al menos en un principio.

Esta relación de desigualdad que, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, se establecía entre las matriculaciones oficiales y *libres*, sin olvidar las inscripciones a

---

<sup>232</sup> No se obtuvo la autorización legal correspondiente (y en algún caso, no se pudo deducir la ubicación exacta de determinadas fuentes documentales) para consultar los libros de calificaciones y las actas de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid en el periodo que interesa, documentación que, sin embargo, ha sido utilizada por otros autores, hecho del que hay constancia impresa. Por ello, la información obtenida en los expedientes académicos y otros documentos (anuarios, memorias estadísticas y libros del estudiante editados en su día por la Universidad Central de Madrid) citados en el texto, por otra parte bastante completa y más que suficiente para extraer las conclusiones expuestas, no cubre todos los aspectos que nos gustaría haber pulido o matizado debidamente.

finales de curso, se reflejaba nítidamente en las memorias estadísticas editadas por la Universidad Central. Por ejemplo, en el primer curso de Francisco Pérez Carballo en la Facultad de Derecho, curso 1926-27, 504 estudiantes (500 hombres por sólo cuatro mujeres) se matricularon en la modalidad de enseñanza oficial, mientras que 2055 (2039 hombres y 16 mujeres) optaron por la no oficial, es decir, se matricularon *por libre*, llegando estos últimos a cuadruplicar el número de los que, como Francisco, decidieron asistir a clase y seguir el ritmo de las explicaciones y las estrictas reglas fijadas en ocasiones por los profesores bajo una atmósfera de creciente agitación política. Las inscripciones a final de curso arrojaron una proporción casi idéntica: 1647 alumnos decidieron matricularse oficialmente y 6146 lo hicieron por libre.<sup>233</sup>

Sin embargo, este desequilibrio se redujo considerablemente en los años inmediatamente posteriores, aunque sin llegar a revertir la tendencia mayoritaria de los estudiantes universitarios a decantarse por la enseñanza no oficial, mantenida también durante los años de la República. Así, en el curso 1930-31, quinto y último año de carrera para Francisco Pérez Carballo, se matricularon en la enseñanza oficial 1039 alumnos (1028 hombres por 11 mujeres) y en la *libre* 2657 (2600 hombres y 57 mujeres), mientras que las inscripciones a final de curso (3328 matriculados en la enseñanza oficial por 7729 en la no oficial) reflejaban también la reducción proporcional del total de estudiantes matriculados en la enseñanza libre con respecto al número de alumnos oficiales, que ahora eran sólo la mitad de los que se examinaban por libre.<sup>234</sup>

Finalizados los cinco cursos de la carrera de Derecho, Pérez Carballo se presentó en diciembre de 1932 a los ejercicios del *Grado de licenciado* de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. En los dos primeros obtuvo la calificación de “admisible” (cada uno de estos ejercicios se calificaba como “admisible” o “no ha lugar”), mientras que en el tercero y definitivo, en el que tenía que desarrollar un tema propuesto por el tribunal, en este caso las *penas pecuniarias*,<sup>235</sup> volvió a la línea de los sobresalientes, teniendo en cuenta, además, que las calificaciones posibles para el último examen del grado eran las de “suspense”, “aprobado” o “sobresaliente”.<sup>236</sup>

En el curso 1931-32, concretamente el anterior al de la obtención del grado de licenciado, Pérez Carballo comenzó sus estudios de doctorado, entonces estructurados en tres cursos académicos, matriculándose como alumno oficial en las asignaturas de *Historia del derecho internacional*, *Política social*, *Derecho municipal e Instituciones superiores de derecho privado*. Este primer curso de doctorado, sin embargo, resultó para Francisco un tanto accidentado por diversas razones. Si el 28 de enero de 1932 solicitaba que le fuese anulada la matrícula de carácter oficial para examinarse por libre –alegando, eso sí, la incompatibilidad de sus recién iniciados deberes militares con la

<sup>233</sup> *Memoria estadística correspondiente al curso 1926-27*, Universidad de Madrid (redactada por la Secretaría General), conservada en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la UCM.

<sup>234</sup> *Memoria estadística correspondiente al curso 1930-31*...

<sup>235</sup> En el expediente académico de Francisco Pérez Carballo (Archivo General de la UCM) se conserva los ocho folios redactado por éste sobre esta cuestión, que incluyen varios fragmentos de escritura taquigráfica.

<sup>236</sup> Acta del Grado de Licenciado (Facultad de Derecho de la U. Central). AG de la UCM, Exp acad. Francisco Pérez Carballo.

asistencia a las clases de doctorado-,<sup>237</sup> en abril de ese año se le diagnosticó una astenia nerviosa, para cuyo tratamiento se le aconsejó dejar de trabajar intelectualmente durante una temporada. Esta afección nerviosa, síntoma generalmente de un trastorno de estrés (puede originarse también por causas orgánicas o psíquicas), caracterizado por una acusada sensación de fatiga, debilidad o agotamiento físico e intelectual, que se repetiría en el futuro en varias ocasiones, se justificaría, como ya se ha referido en varias ocasiones, por la intensa vida de un estudiante que apuraba el tiempo hasta caer literalmente exhausto para hacer compatibles tareas académicas, profesionales y políticas. Aunque, por otra parte, no se podría descartar tampoco que los certificados médicos se utilizasen en alguna ocasión para justificar ausencias o inacciones ante la administración estatal, costumbre favorecida por la laxitud con que se expedían estos documentos en la época.<sup>238</sup>

Por otra parte, el hecho de que por esas fechas Francisco comenzase a prestar el servicio militar en el parque de Artillería nº 1 de Madrid,<sup>239</sup> debió constituir un foco importante de inestabilidad temporal en sus planes acerca de su futuro profesional y político, lo que, sin duda, acentuaría cualquier estado de debilidad con el estrés añadido de su ingreso en una institución con las características e idiosincrasia del ejército español de entonces, a los ojos de un joven imbuido por las ideas del republicanismo reformista de izquierda.

Pérez Carballo no se matriculó en ningún curso de doctorado en el curso 1932-33, alegando motivos de salud nuevamente, aunque la realidad es que continuó –no se sabe si con una cierta discontinuidad- al frente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho y como directivo de las Juventudes de Acción Republicana, al margen de preparar y aprobar una oposición de oficial letrado del Congreso de Diputados. En cualquier caso, en junio de 1933 elevaba otra instancia al Decano de la Facultad de Derecho, Adolfo González Posada, insistiendo en que se le aplicasen las matrículas de honor obtenidas en el quinto y último curso de su carrera (1930-31) –que no se hicieron efectivas antes por determinados defectos formales y por las circunstancias antes detalladas-, en los cursos de doctorado donde pensaba matricularse para el curso 1933-34, solicitud resuelta favorablemente por las autoridades académicas competentes en el caso.<sup>240</sup> De esa forma, Francisco Pérez Carballo, inmerso de nuevo en una actividad frenética que, al mismo tiempo, le acercaba cada vez más a la política y le alejaba de la mera representación estudiantil, se matriculó en un nuevo curso de doctorado, compuesto de las asignaturas de *Filosofía del derecho*, *Estudios superiores de ciencia política*, *Derecho municipal comparado* y *Estudios superiores de derecho privado*, impartidas por los profesores Luis Recaséns, Fernando de los Ríos, Francisco Ayala y

---

<sup>237</sup> Instancia elevada por Francisco Pérez Carballo al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid (28-1-1932), AG de la UCM, Exp académico de. Francisco Pérez Carballo.

<sup>238</sup> Certificado médico oficial, expedido por el Colegio de Madrid. AG de la UCM, Exp acad. Francisco Pérez Carballo.

<sup>239</sup> Copia de un documento de la Caja de Recluta nº 2 de Madrid (sin fechar) donde consta el destino asignado a Francisco Pérez Carballo, conservado en el archivo privado de la familia Pérez Carballo.

<sup>240</sup> Instancia elevada a la Junta de Facultad (Derecho), con fecha de 8 de junio de 1933. AG de la UCM, Exp acad. Francisco Pérez Carballo.

Jerónimo González, respectivamente.<sup>241</sup> No hay información suficiente para profundizar en la evolución de sus estudios de doctorado desde el curso 1933-34 en adelante, aunque su fuerte vocación privatista —uno de los cursos de doctorado versaba sobre esa materia jurídica—, su trabajo como profesor ayudante de clases prácticas de Derecho Romano desde el curso académico 1933-34,<sup>242</sup> en la cátedra dirigida por José Castillejo, y la decisión del joven abogado madrileño de oponer a esa misma cátedra “cuando la preparación que adquiriera y su formación se lo consientan”,<sup>243</sup> podrían haber prolongado, siguiendo esta lógica, su vinculación como alumno a los estudios superiores jurídicos en la Universidad Central de Madrid.

El estudiante recién llegado a la universidad mediados los años veinte se encontraba con un mundo difícilmente clasificable, excesivamente rígido, casi petrificado hasta que la dictadura de Primo de Rivera cometió los errores imprescindibles para movilizar a alumnos y profesores con la introducción del Plan Callejo y la torpe represión de los conatos de agitación estudiantil.

Los rituales de iniciación seguidos por un alumno de matrícula de honor en el instituto a la hora de ingresar en el primer curso de facultad, pasaban, entre otras cosas, por el privilegio de sentarse en la primera fila en clase. Toda la élite del alumnado madrileño de bachillerato, procedente de los institutos del Cardenal Cisneros, del de San Isidro y del recién creado Instituto Escuela (1918), o de centros privados religiosos como las prestigiosas Escuelas Pías de San Antón (adscritas al Instituto del Cardenal Cisneros a efectos académicos), se agrupaba en esas primeras filas, cara a cara con el profesor de la asignatura. La mayoría de esos alumnos provenían de familias acomodadas y estaban orgullosos de su más o menos añejo linaje social. Cada vez más, y de forma más notoria, eran las clases medias profesionales quienes enviaban a sus vástagos a estudiar derecho, medicina o alguna de las enseñanzas técnicas englobadas dentro de las denominadas *especiales*, que ahora empezaban a emerger con fuerza, como la arquitectura o la ingeniería en sus diferentes especialidades.

La facultad de Derecho, situada entonces en el mismo edificio de la calle San Bernardo, compartiendo el mismo espacio donde se hallaban las demás facultades de la Universidad Central, estaba en el epicentro de un barrio atestado de pensiones, bares y restaurantes baratos accesibles para los estudiantes con posibles pero no tanto para un estudiante criado en una familia humilde, que de cualquier forma no tendría tiempo (ni dinero suficiente) para disfrutar plenamente del ocio y debería centrarse en sus clases y en la obligación constante de procurarse una fuente de recursos para salir del paso. Recursos económicos que, por otra parte, eran necesarios para que un estudiante pudiera adquirir libros de estudio y obras literarias y de ensayo en español y otros idiomas —esto

---

<sup>241</sup> *Libro del estudiante (Anuario de la Universidad de Madrid) de 1935*, conservado en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”.

<sup>242</sup> Como reconoce la propia Facultad de Derecho expidiendo un certificado de su nombramiento a petición del interesado, documento fechado el tres de octubre de 1933. Incluido en AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

<sup>243</sup> Como expresa de forma literal el propio Pérez Carballo en la memoria expositiva presentada a la JAE (p.2), incluida en la documentación anexa a su solicitud de pensión para ampliación de estudios de derecho privado en Alemania, AJAE, Exp. Pérez Carballo. Véase también a este respecto, “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-1936”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia*, (tomo II), op. cit, p. 685.

último más excepcionalmente-, al margen de las colecciones de clásicos publicadas por Espasa Calpe al precio de 25 o 30 céntimos el ejemplar. Esta literatura especializada, culta, derramada en ocasiones incluso en los manuales o textos universitarios más áridos, no tenía nada que ver, en relación a su coste, con los relatos frívolos o de folletín que inundaban los quioscos y librerías madrileñas, cuyos compradores “eran de esa gente con dinero fácil que bullía por Madrid, aquel Madrid artificial y pretendidamente cosmopolita, mientras que el público de la literatura sería carecía de recursos para adquirir lo que se consideraba artículos de lujo o cuanto menos no de primera necesidad: libros”.<sup>244</sup> Los anuarios y libros del estudiante publicados por la Universidad Central durante los años veinte y treinta del pasado siglo contenían anuncios publicitarios de las librerías que suministraban literatura científica o de ficción a los estudiantes universitarios de la época. Éstos frecuentarían lugares, algunos realmente de culto, como la *Librería General Victoriano Suárez* (Preciados, 48), *Librería y casa editorial Hernando* (Arenal, 11), *Librería Internacional de Romo* (Alcalá, 5), *García Rico y Cia* (Desengaño, 29) y la *Papelería de la Universidad* (San Bernardo, 58), entre otras muchas, incluida *Fuentetaja*, situada frente a la misma universidad.

En cualquier caso, no hay que olvidar que, por razones obvias, las bibliotecas universitarias eran la fuente principal de lectura para un alumno universitario. Bien dotada en general y reorganizada en una estructura más moderna y racional bajo la dirección de Javier Laso de la Vega (ya en el periodo republicano), la biblioteca de la Universidad Central de Madrid era entonces la segunda más importante de España, sólo superada por la Biblioteca Nacional. En 1935, año en el que Francisco desempeñaba la plaza de profesor ayudante de prácticas en la cátedra de Derecho Romano dirigida por José Castillejo -Pérez Carballo sustituiría temporalmente a Castillejo desde noviembre de 1935, al causar baja médica el catedrático manchego, y seguiría impartiendo clases con regularidad unos meses más-, la biblioteca de la Universidad de Madrid contaba con 567.461 volúmenes, una cifra nada desdeñable. De esa cifra, 103.886 correspondían a la biblioteca de Derecho, segunda biblioteca de facultad en cuanto a la extensión de sus fondos, por detrás de la de Filosofía y Letras, que alcanzaba los 125.188 ejemplares registrados.<sup>245</sup> La biblioteca de Derecho disponía de un catálogo de autores y materias ordenados alfabéticamente, estando este último, a excepción de la parte jurídica, organizado en sistema de diccionario. La memoria de la biblioteca de la Universidad de Madrid correspondiente al año 1934 señala, por su parte, que la materia más consultada en sus lecturas por los estudiantes de Derecho en la biblioteca de la facultad era Derecho Romano, seguida de Civil, Penal, Político y Administrativo, datos revelados por las respuestas de los facultativos bibliotecarios madrileños a un cuestionario planteado para estudiar el uso que los estudiantes universitarios hacían de las bibliotecas a su disposición.<sup>246</sup>

<sup>244</sup> F. Ayala, *Recuerdos y olvidos...*, p.69.

<sup>245</sup> Véase, *Libro del estudiante (Anuario de la Universidad de Madrid ) de 1935* (conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla).

<sup>246</sup> “Biblioteca de la Universidad de Madrid. Memoria correspondiente al año 1934”, en *Anales de la Universidad de Madrid. Letras*, T IV, 1935 (conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla), p.99.



El claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Central reunía, en el tiempo en que Francisco Pérez Carballo cursaba sus estudios universitarios de leyes, a varias de las figuras más representativas de la docencia y la práctica jurídica de la época, constituida la prestigiosa universidad madrileña en estación de término para el docente y establecida, por lo tanto, una clara línea de continuidad entre los titulares de las asignaturas durante más de una década, salvo situaciones de enfermedad o causa de jubilación. De ese modo, ilustres juristas y activos opositores a la dictadura de Primo como Luis Jiménez de Asúa (Penal), socialista moderado convertido en vicepresidente de las cortes republicanas tras las elecciones de febrero de 1936 y, ya en el destierro, en presidente de la República española en el exilio (1962-70); Felipe Sánchez Román (Civil, primer curso), quien después de su paso por la Agrupación al Servicio de la República se convirtió en el líder del centrista PNR durante la II República y, en julio de 1936, horas después de haber estallado la rebelión militar, en ministro sin cartera del gobierno *non nato* de Martínez Barrio, y José Castillejo (Romano), intelectual liberal y humanista vinculado a la JAE y a ambiciosos proyectos pedagógicos y de reforma educativa –quizá eran ellos los profesores de la carrera que más influjo ejercieron sobre la mayoría de los estudiantes liberales y republicanos y legado un mayor brío intelectual a los estudios jurídicos- compartían claustro con otros profesores no menos brillantes pero de marcada ideología antiliberal. Entre estos últimos, destacaban el mejor economista español de la época, Antonio Flores de Lemus (Economía Política), quien ocupó puestos administrativos de responsabilidad en el ministerio de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera y presidió la comisión ministerial que recomendó la implantación gradual del patrón oro en 1929 (bajo la premisa del equilibrio presupuestario y de balanza de pagos); José Yanguas Messía (Derecho Internacional), ministro de Estado con Primo de Rivera y embajador en el Vaticano tras la guerra civil; José Gascón y Marín (Derecho Administrativo), ministro de Instrucción Pública en el breve gobierno del almirante Juan Bautista Aznar entre febrero y abril de 1931 o Laureano Díaz Canseco (Historia del Derecho), reconocida y celebrada figura de la bohemia en la que afloró, con el tiempo, una sensibilidad política marcadamente conservadora, recompensada con un puesto en la Asamblea Nacional Consultiva en 1927.

Otros catedráticos que ejercían su docencia en la facultad de Derecho de la Universidad Central durante este periodo (1926-1931), la mayor parte caracterizados también por su perfil conservador en lo ideológico, eran el mismo Decano de la facultad, el krauso-positivista Adolfo González Posada (Derecho Político), ligado políticamente a Melquiades Álvarez (y al proyecto alternativo del Partido Reformista) y gran amigo de Leopoldo Alas Clarín; Miguel Cueva Palacio (Derecho Canónico); Montejo y Rica (Procedimientos judiciales-Práctica Forense), conservador, ministro de Instrucción Pública con Dato y Sánchez Guerra entre 1920 y 1922; el militar retirado Fernando Pérez y Bueno (Derecho Natural), un profesor extravagante en extremo; Clemente De Diego (Derecho Civil, segundo curso); J. M. Olózaga (Hacienda Pública), Francisco Beceña (Procesal y Procedimientos judiciales), asesinado en Asturias por un grupo de mineros al principio de la guerra civil, y el prolífico ensayista jurídico Lorenzo de Benito y Endara (Derecho Mercantil). En referencia al curso preparatorio, que

aunque impartido en la Facultad de Filosofía y Letras, concretamente en un viejo edificio de la calle San Mateo, conformaba el primer curso de la carrera de Derecho, tenemos que buscar referencias en los profesores de Emilio González López (el penalista, historiador y diputado de IR se detiene en algunos de sus nombres en la primera parte de sus memorias), casi con toda probabilidad los mismos, dado el carácter excepcional de los cambios en el profesorado de la Universidad Central, que solamente unos años más tarde tendrían como alumno a Francisco Pérez Carballo. Así pues, éstos serían el catedrático de Lógica Julián Besteiro, admirado profundamente por sus alumnos tanto por su capacidad docente e intelectual como por sus exquisitas maneras de *gentleman*, el historiador Antonio Ballesteros y Juan Hurtado, titular de Lengua y literatura españolas.<sup>247</sup>

El magisterio de José Castillejo, quien en octubre de 1933 nombró profesor ayudante de prácticas a Francisco Pérez Carballo, fue fundamental en la corta pero prometedora carrera académica y docente del abogado y líder estudiantil. Secretario de la Junta de Ampliación de Estudios desde sus inicios, institución vinculada a la ILE pero sin dependencia orgánica de esta institución, José Castillejo gestionó la concesión de becas de estudio (pensiones) para que profesores y estudiantes españoles pudieran ampliar su formación en las mejores universidades europeas.<sup>248</sup> Desde la JAE, en la que permaneció como secretario hasta 1934, se constituyó en el verdadero cerebro de la institución, guiado por su asombrosa capacidad para la negociación y el pacto –prefirió la secretaría de la institución a la presidencia para poder desarrollar su labor sin interferencias de ninguna clase–, se promovió la creación de la Residencia de Estudiantes del Centro de Estudios Históricos (1910) y del Instituto-Escuela (1918), entre otras instituciones, y se trató de evitar la intromisión de la política en la vida interna de la institución, al margen de las necesidades presupuestarias que había de cubrir. El profesor Castillejo, por otra parte, fue el principal artífice de la Escuela Internacional, de la que fue profesor el poeta José Antonio Muñoz Rojas, compañero de Francisco Pérez Carballo tanto en el instituto Cardenal Cisneros como en la facultad de Derecho en la Universidad Central.

Muñoz Rojas, poeta de lo cotidiano, minimalista, incluido por los especialistas en la denominada generación del 36, guardó siempre un inmejorable recuerdo del catedrático de Derecho Romano de la Central, el mismo que con su habitual capacidad de seducción le convenció para embarcarse en su enésimo proyecto pedagógico. Refiriéndose al segundo curso de su carrera, en el que se incluía la asignatura de Derecho Romano, reflexionaba en sus memorias de esta manera:

---

<sup>247</sup> Para una visión sintética de ambientes académicos, en el contexto de los acontecimientos de orden político y social inscritos en el tiempo histórico que aquí se trata de reflejar, véase E. González López, *Memorias de un estudiante liberal*, Sada (A Coruña), Edicións do Castro, 1987 y, del mismo autor, *El espíritu universitario*, Madrid, Javier Morata Editor, 1931; F. Ayala, *Recuerdos y olvidos*, op. cit; J. A. Muñoz Rojas, *La gran musaraña: memorias*, Valencia, Pre-Textos, 1994; Irene Claremont de Castillejo, *Respaldada por el viento*, Madrid, Ed.Castalia, 1995 y, como colofón, J. López Rey, *Los estudiantes frente a la dictadura*, Madrid, Morata Editor, 1930, entre otras.

<sup>248</sup> Para profundizar en la historia de la JAE, véase en especial, J. M. Sánchez Ron (ed), *100 JAE: la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario*, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2010.

Pasé el curso siguiente (...) de la angosta y triste calle de San Mateo [el edificio donde se cursaba el Preparatorio común con Filosofía y Letras se situaba idel lado que mira a la calle de Fuencarral] a la ancha y ascendente de San Bernardo donde residía la facultad de Derecho, lindera del Instituto del Cardenal Cisneros de mis años bachilleres. Tres personajes muy distintos y notables enseñaban aquel curso. Don José Castillejo, don Antonio Flores de Lemus y el señor Pérez Bueno, Derecho Romano, Economía Política y Derecho Natural, tres personajes muy distintos y un solo profesor verdadero, don José Castillejo, que hizo una delicia para mí inolvidable, de la enseñanza del Derecho Romano, presentándonos las instituciones jurídicas como si fueran personas (...) y convertía el nacimiento y desarrollo de aquellas instituciones en un cuento maravilloso. Era un gran fabulador, con aquel estilo pragmático de no serlo, con aquel bigote lacio, sus gafas de miope, su calva de fraile, su verde gabán y su bicicleta, caso insólito en un profesor de aquellos años, lo que hacía más extraña y atractiva su figura. Fue gracias a sus increíbles y mágicas dotes de maestro a las que debí entrar en el estudio del Romano, sin fatiga y con deleite, único caso en toda la carrera. Años adelante tuve el privilegio de tratarle personalmente y aprender de él muchas lecciones humanas y civiles que nada tenían que ver con el Derecho y que contaré llegada la hora. Uno de los señalados encuentros de mi vida.<sup>249</sup>

Una vida que, a pesar del influjo del profesor Castillejo –definido por Muñoz Rojas como un hombre desbordante de sentido común y de un especial quijotismo-<sup>250</sup> no se decantó en realidad por la vocación del derecho, por el estudio y la práctica de las leyes, caso opuesto al de Pérez Carballo (en este aspecto, su auténtico contrapunto), sino más bien por una elección pragmática destinada a procurarle “una llave prodigiosa que abría todas las puertas”, perfecta imagen evocada por el poeta andaluz en un fragmento muy revelador, lleno de profundo escepticismo, en el que su memoria se aproximaba a sus primeros pasos como universitario:

Empezaba el curso. Recuerdo que era uno de esos días madrileños de cielo bajo y gris que acrecentaban el desmayado aspecto de aquellos lugares. Apenas unos meses de la salida del colegio y andar de pantalán largo, enfrentándonos una vez más con lo desconocido, decidida la elección de estado. Más que elección, aceptación sin más de la carrera de Derecho porque con ella, se llegaba a ser abogado y siendo abogado se podía ser casi todo, se obtenía una llave prodigiosa que abría todas las puertas y aunque dudábamos si muchas de aquellas puertas daban a recintos de nuestro gusto, ni nos veíamos desempeñando los oficios que tan prodigiosamente podían proporcionarnos. Sin embargo, ser abogado y hacer unas oposiciones, era algo que entraba en el debido orden de las cosas, que aunque perdiendo inercia, conservaba la suficiente para desechar cualquier otra opción. Seríamos pues, abogados, algo definido, en realidad algo indefinido, no sabíamos de verdad lo que seríamos, nunca lo hemos sabido, seguimos sin saberlo, ni lo que somos. Lo de menos es que el Derecho nos gustara o no, el caso es que podía proporcionarnos múltiples salidas. De los abogados salían los registradores de la propiedad, los notarios, los jueces y todas esas carreras estaban a nuestro alcance con sólo el título, aparte los que sin necesidad de oposiciones, abrían bufete propio y se hacían famosos.<sup>251</sup>

<sup>249</sup> J. A. Muñoz Rojas, *La gran musaraña: memorias*, op. cit, p.98

<sup>250</sup> Muñoz Rojas recuerda, así mismo, que, gracias a José Castillejo, “culpable” de su ingreso en la Escuela Internacional, pudo conocer a la profesora de gimnasia rítmica de este centro: “un goce de criatura con el que viví una aventura de libertad y delicia en un inesperado paréntesis de evasión”. Encuentro que devino en algo más: “nos movíamos por islas de encanto, ligera y sin ataduras como iba por el mundo, saltando sobre las cosas y los días, sin que la existencia le rozara. Se sentía feliz, aunque no poseída de su pleno cuerpo, vivía con poco y nada parecía pesarle, nos escapábamos a las viejas ciudades o nos perdíamos en los encinares, donde se convertía en una joven Diana, libre y desprendida. Criatura del aire, vivía en completa posesión del instante. Era la libertad misma, transeúnte, alígera e ingravida. Daba gloria verla saltar por los días colmándolos de hermosura”, *ibid*, p. 125.

<sup>251</sup> *Ibid*, p.95-96.

Más lejos o más cerca de este escepticismo –aunque a veces se haga difícil discernir determinadas posturas o poses–, la mayoría de los estudiantes de Castillejo no dudaron en ensalzar la figura del catedrático manchego. Tómese el ejemplo de Francisco Ayala:

En la facultad de Derecho enseñaba el Romano don José Castillejo, maestro excelente, que a lo mejor nos ponía como caso imaginario: “Curcio, patricio romano, deja su bicicleta junto al predio...” (el mismo, Castillejo, acudía a la universidad en bicicleta, cosa que por entonces parecía extravagante). Este don José Castillejo fue uno de los hombres que más eficaz y abnegadamente contribuyeron a la “europeización” de España, pensionando como secretario y factotum de la junta para Ampliación de Estudios en el Extranjero a generaciones sucesivas de graduados. En su calidad de profesor era muy exigente con los alumnos; pero empezaba por exigirse a sí mismo, y de ese modo su actividad docente resultaba irreprochable.<sup>252</sup>

Emilio González López confirmaba esta visión del romanista José Castillejo como pedagogo consciente e innovador de una manera un poco más gráfica

Los catedráticos del primer año de la facultad de Derecho eran de muy desigual valor y categoría. Don José Castillejo (...) era un excelente profesor, que sabía presentar la nada entretenida materia de su curso con amenidad e ingenio; pues, a veces, sus ejemplos, para ser más comprensibles para los jóvenes estudiantes, parecían referirse a cosas de la vida actual y veíamos aparecer los romanos montados en bicicletas o andando en tren o en tranvía, unidos a la voz un tanto aguda y aflautada del profesor, risas y cuchufletas de los estudiantes.<sup>253</sup>

Irene Claremont, la esposa británica de José Castillejo, cierra por el momento el retrato del catedrático manchego con trazos de fina ironía que resultan también bastante reveladoras de su figura docente y humana:

Tras la primera sorpresa de verme casada con un granjero, comencé a enterarme de otras actividades que ejercía mi marido. Empezaba su día a la hora inaudita de las 8:30 de la mañana con una conferencia en la Universidad de Madrid donde era catedrático de Derecho Romano (...) Llegar a la universidad en bicicleta en plena ciudad,, donde apenas se conocía la bicicleta, y tan temprano, era una de las pequeñas excentricidades que le hacían famoso entre los estudiantes.

Era, además, uno de los conferenciantes más populares. Actor nato, hasta del Derecho Romano sacaba dramatismo y humor. Invariablemente empezaba el curso anunciando a una multitud de estudiantes que no tenían obligación de asistir a sus clases a pesar de que era asignatura obligatoria. Prometía no pasar nunca lista y que, en todo caso, aprenderían más quedándose en casa a leer por su cuenta (...) Únicamente rogaba silencio en caso de asistencia.. Resulto, claro, que permanecían solamente los más entusiastas con los que alcanzaría un nivel mucho más elevado de lo que hubiera sido posible de no ser así.

En este país extraordinario no había fecha fija para fin de curso. Empezaban las vacaciones cuando se hartaban los estudiantes de asistir a las conferencias. La popularidad de José quedaría demostrada al seguir asistiendo los estudiantes a sus clases cuando ya habían abandonado a los demás conferenciantes, popularidad que pagó caro quedándose con vacaciones más cortas que el resto del profesorado.<sup>254</sup>

<sup>252</sup> F. Ayala, *Recuerdos y olvidos*, op. cit, p. 108-109.

<sup>253</sup> E. González López, *Memorias de un estudiante liberal (1903-1931)*, op. cit, p.105. En el mismo sentido laudatorio hacia la figura humana y docente de Castillejo, se manifiesta otro intelectual gallego, el escritor Francisco Fernández del Riego, nacido en 1913 y alumno también de Castillejo en la Central, así como del profesor auxiliar de la asignatura, Enrique Ramos. véase F. Fernández del Riego, *O río do tempo: unha historia vivida*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1994, p. 32-33.

<sup>254</sup> I. Claremont de Castillejo, *Respaldada por el viento*, op. cit, p..63-64.

Y con respecto a la fama de austero de Castillejo como secretario de la JAE, Irene Claremont matizaba una creencia casi generalizada mediante un argumento tan pragmático como razonable en un contexto de cronificación sin remedio de la escasez de recursos, nacido de la larga experiencia de su marido como gestor de becas y pensiones de estudio en el extranjero:

Se quejaban los estudiantes de que estas becas eran mezquinas; algunos acusaban a Castillejo de injustificada tacañería puesto que hubiera, sin duda, sido factible conseguir fondos más generosos. En mi opinión, la razón era otra. He aquí becas para el extranjero casi a pedir de boca. ¡Qué fácil y delicioso pasarse un año en el extranjero a costa del gobierno. La única forma de impedir tal abuso era hacerlas poco atractivas. Salir al extranjero con una beca de la Junta suponía una vida rigurosa que sólo un espíritu entusiasta y sincero podría soportar. Estos eran los estudiantes que José buscaba: hombres y mujeres sedientos de cultura y conocimiento para traerlo a España.<sup>255</sup>

Francisco Pérez Carballo fue uno más de esos solicitantes de pensiones en el extranjero. Presentó su candidatura para estudiar derecho privado en Alemania e Inglaterra en 1935 y 1936, sin éxito alguno. Entre los expedientes de los peticionarios de ayudas para estudiar en el extranjero que se conservan en el archivo de la JAE se encuentra, como se ha dicho, el de Francisco. En la memoria explicativa presentada junto a una serie de documentos adjuntos, el ya abogado y directivo de las juventudes republicanas de Azaña refería como prueba de su afición casuística -pasión intelectual ahogada años después en la paradoja de la muerte bajo la ausencia de cualquier garantía jurídica para los supuestos procesados, legado criminal de la rebelión militar de julio del 36- el haber resuelto todos los casos propuestos por el catedrático de Derecho Procesal, Francisco Becuña, profesor también de la asignatura de *Procedimientos judiciales y práctica forense*, en una clase en la que sólo se pedía que se resolvieran la décima parte de ellos.<sup>256</sup> En los años en que Pérez Carballo presentó su solicitud (1935 y 1936) para obtener la correspondiente pensión de estudios en el extranjero —ostentaba entonces la categoría de profesor ayudante de prácticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central—, el catedrático José Castillejo, uno de los docentes que estimuló y guio la prometedora carrera académica de Francisco, ya había abandonado hacía años la secretaría de la JAE (octubre de 1934).

Una última cuestión relativa al perfil académico de Francisco Pérez Carballo se infiere del documento incluido en la memoria que acompañaba las solicitudes presentada por el abogado madrileño para obtener una beca o pensión de la JAE en 1935 y 1936. Se trata de una certificación académica personal expedida por la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central en la que consta que Francisco Pérez Carballo obtuvo en septiembre de 1927 un premio de investigación histórica convocado por esta facultad por la redacción del trabajo titulado “La influencia de los estudios realizados por la Casa de Contratación de Indias de Sevilla en la mentalidad y la cultura europeas”, presentado bajo plica y con el significativo lema *Referendum*, en cuya preparación se utilizaron abundantes fuentes archivísticas, como afirma el propio Pérez Carballo. Paradójicamente, este trabajo de investigación fue

---

<sup>255</sup> Ibid, p. 68.

<sup>256</sup> Véase AJAE, Exp. Francisco Pérez Carballo.

extraviado por la secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, hecho del que se lamentaba el afectado en el texto de la citada memoria explicativa.<sup>257</sup> En esta misma certificación se hace mención al premio en metálico del Estado obtenido por Francisco en la Facultad de Filosofía y Letras en el inicio del curso 1929-30.<sup>258</sup> Aunque, basándonos tanto en la distinción lograda por su trabajo de investigación histórica referido más arriba como en este último, es difícil discernir si cursó asignaturas sueltas de esta carrera, la simultaneaba de alguna manera con los estudios de Derecho o si, en realidad, optó a los mismos como alumno de otra facultad –en cualquier caso, en el primer curso de Derecho o *preparatorio* se cursaban asignaturas de Filosofía y Letras, lo que vinculaba los alumnos de leyes con la mítica facultad de Letras-, pues los expedientes académicos y la documentación relativa a este periodo se perdió en su mayor parte durante la guerra, al constituir la nueva facultad de Filosofía y Letras una de las líneas más avanzadas de las fuerzas republicanas en el frente de la Ciudad Universitaria. En definitiva, no existen pruebas de que obtuviese también la licenciatura en Filosofía y Letras, uno de esos títulos utilizados por abogados y profesionales liberales de la época para, entre otras cosas, ornamentar las paredes de sus despachos con símbolos acreditativos de un estatus cultural de erudición muy conveniente a sus pretensiones de ascenso social.

Debemos detenernos ahora, para finalizar este capítulo, en la encrucijada abierta frente al *aggiornamento* del movimiento estudiantil después de la Gran Guerra, dentro de una universidad que acusaba ostensiblemente el continuo aumento del alumnado durante la dictadura (literalmente, se duplicó de 1923 a 1930). Y este punto es importante puesto que, detrás de estas cifras, aparecen miles de jóvenes procedentes de las clases medias urbanas y de la pequeña burguesía emergente, dispuestos a impugnar desde las aulas el orden de los valores morales e intelectuales heredado de la “vieja política” (y de su colofón dictatorial) y, en consecuencia, a impulsar, a través de la acción política más o menos consciente –en la que progresivamente se irá vislumbrando un fuerte vínculo con el mito republicano–, urgentes procesos de modernización cultural y educativa que llevaban implícito un profundo cambio social y político. En este punto, no conviene olvidarse de los importantes acontecimientos que se sucedieron en la Universidad Central y, significativamente, en torno a su emblemática facultad de Derecho, como reacción a la obstinación del marqués de Estella y de su gobierno en convertir la política universitaria en una pieza más de su estrategia de desmovilización (o movilización controlada) del país.

Es cierto que la reacción inicial de los intelectuales (aquí contemplados en su doble papel de creadores y de potentes referentes sociales, en especial a ojos de los estudiantes) y, en general, de amplias capas de la sociedad española ante el golpe de estado de septiembre de 1923 y la posterior prolongación *sine die* de su “interinidad”, pasó en contados casos los límites de la indiferencia o de un grado de aceptación

---

<sup>257</sup> Incluida en JAE, exp. Pérez Carballo.

<sup>258</sup> Ibid.

Por su parte, *Heraldo de Madrid* de 1 de octubre de 1929 daba el nombre de Francisco Pérez Carballo como ganador de los premios en metálico del Estado concedidos por las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad Central.

directamente proporcional a las expectativas levantadas por el espíritu pretendidamente regeneracionista que envolvió, al menos en un principio, el confuso y disperso programa político de la dictadura de Primo de Rivera. Así, inicialmente sólo Unamuno (desterrado en 1924 a Fuerteventura y exiliado en París poco más tarde) y Azaña,<sup>259</sup> éste desde una perspectiva intelectual, teórica y crítica más nítida, pusieron realmente objeciones y mostraron su oposición, sin matices, a la quimera del dictador y su diseño impreciso y personalísimo del futuro político del país. Mientras tanto, el resto de los intelectuales oscilaron entre las dudas y los malos presentimientos de Gregorio Marañón (rápidamente resueltas en una firme oposición al dictador) y una condescendencia temporal con la idea de un remedio urgente (y efectista más que eficaz) de los males inoculados en el tejido social español por la casta política de la Restauración, caso de Ortega y otros muchos, actitud coherente, por otra parte, con la libertad de pensamiento que, sin duda, distaba de la adscripción personal inmutable a una única fórmula política..<sup>260</sup> Y esta tibieza mostrada por los intelectuales durante los compases iniciales de la dictadura de Primo de Rivera fue secundada, en buena lógica, por los estudiantes universitarios españoles, primero expectantes ante el espíritu regeneracionista que impregnaba la retórica y algunas de las políticas iniciales de la dictadura -el propio Primo les invitó en 1924 a participar en el diseño de la reforma universitaria proyectada, tratando al mismo tiempo de integrarlos colectiva o individualmente en las Juventudes de Unión Patriótica-. más tarde decididos adversarios de un poder en acelerada descomposición.

Las sanciones impuestas a Unamuno, especialmente la pérdida de su cátedra salmantina, constituyeron el primero de los jalones de un proceso progresivo de distanciamiento entre la dictadura y el mundo universitario, cada vez más expuesto no sólo a la energía renovada del movimiento estudiantil, sino a la acción de los profesores y catedráticos, que tras el atropello sufrido por el insigne escritor vasco empezaron a cuestionarse seriamente la situación política del país en la voz o en la pluma de Jiménez de Asúa (junto a Unamuno, el otro maestro invocado por José López Rey en su paradigmática obra),<sup>261</sup> Fernando de los Ríos, Marañón, Américo Castro y Eugenio d'Ors, entre otros, inspiración de la algarada callejera de los estudiantes, que despidieron a Unamuno a la salida de la estación de Atocha hacia su confinamiento y posterior exilio.

El homenaje a Ángel Ganivet, celebrado a las doce de la mañana del 28 de marzo de 1925 en el Paraninfo de la Universidad Central (escala en el traslado de los restos del escritor a su ciudad natal, Granada), se convirtió en un acto político de reivindicación de la libertad intelectual y del magisterio de Unamuno como referente para una generación activa de españoles. En las palabras de los intelectuales intervinientes -en especial, en la de algunos de los citados más arriba como Gregorio Marañón, Asúa y Castro-, se

<sup>259</sup> Una buena aproximación a la figura humana e intelectual de Unamuno en Colette y Jean-Claude Rabaté, *Miguel de Unamuno Biografía*, Madrid, Santillana, 2009.

<sup>260</sup> Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, G. García Queipo de Llano, *Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera*, Madrid, Alianza, 1988; A. López Vega, *Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal*, Madrid, Taurus, 2011.

<sup>261</sup> J. López Rey, *Los estudiantes frente a la dictadura*, op.cit, p.10.

relacionó la herencia de Ganivet con el pensamiento de Unamuno<sup>262</sup> y se trató de vincular su figura y su obra al legado intelectual de Ganivet, haciendo una interpretación actualizada y simbólica del pensamiento del escritor y filósofo granadino. Pero su intención iba más allá de la mera loa a uno y otro. El homenaje a Ganivet fue un pretexto utilizado por un grupo de intelectuales para mostrar, tal vez por primera vez de forma coordinada, su oposición a la dictadura, reforzando la imagen del símbolo por antonomasia de la resistencia contra la dictadura de Primo de Ribera (Unamuno) con una visión liberal del legado de Ganivet, en disputa por parte de medios intelectuales y de prensa de ideología conservadora o liberal. Horas antes de dar comienzo al homenaje, representantes de los estudiantes y de algunos profesores negociaron con el rector Rodríguez Carracido la lectura pública durante el acto de una extensa carta escrita por Unamuno como tributo a su viejo amigo Ganivet, pero la autoridad universitaria, consciente de la tensión generada en torno a un acontecimiento de esas características, se negó finalmente. Para justificar esa postura, se adujo el peligro de exacerbar los ánimos, ya de por sí bastante excitados desde hacía días.

El público que atestaba el lugar (más de dos mil personas esperaban fuera del Paraninfo, estando el interior atestado) fue testigo de una verdadera lluvia de octavillas donde se reproducía la carta en cuestión, impresas apresuradamente la noche previa al acto en un número cercano a las 5.000. Los autores de esa lúdica y tradicional maniobra de sabotaje, grupos de estudiantes que ya habían protagonizado varios incidentes con las fuerzas del orden en el trayecto del féretro desde la Estación del Norte al recinto universitario, se habían repartido las hojas clandestinas entre ellos, guardándolas en los bolsillos de los abrigos, y habían pactado que hacia el final de la intervención del rector comenzaría el alboroto, momento en que un antiguo estudiante de Jiménez de Asúa, Ivan Ibran, se encargaría de leer la carta a viva voz.

El alboroto llegó, efectivamente, entre un profuso vocerío donde se reivindicaba la lectura de la carta de Unamuno -su figura como símbolo de la libertad- y se lanzaban gritos en contra de la dictadura y a favor de la República y los defenestrados Unamuno y Blasco Ibáñez, pero el estudiante elegido para la lectura de la carta resultó ser un confidente de la policía y no se pudo consumir la estratagema. A consecuencia de los disturbios provocados por los estudiantes en la interrupción del discurso del rector Carracido, el acto fue suspendido y los asistentes desalojados del Paraninfo y sus alrededores. Un poco más tarde, a la salida de los restos de Ganivet desde la Estación de Mediodía hacia Granada, los estudiantes repitieron casi la misma operación, siendo reprimidos esta vez por la fuerza pública, lo que les forzó a improvisar por la noche una lectura pública de un texto que ya se habían aprendido muchos de ellos de memoria y que corría por las calles de Madrid como la pólvora.<sup>263</sup> No es difícil imaginarse a Francisco Pérez Carballo entre ellos, entonces un estudiante de quinto de bachillerato

<sup>262</sup> Colette y Jean Claude Rabaté, *Miguel de Unamuno. Biografía*, op. cit, p.494.

<sup>263</sup> Sobre la significación y el desarrollo del acto de homenaje a Ganivet y las circunstancias que lo rodearon, véase, J. Lopez Rey, *Los estudiantes frente a la dictadura...* op.cit, p. 20-25; E. González López, *El espíritu universitario*, Madrid, Javier Morata, 1931, p.82-85 y *Memorias de un diputado liberal*, op.cit, p. 130-132; G. García Queipo de Llano, *Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera*, op.cit, p.184-200; A. López Vega, *Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal*, op.cit, p.155-156.



que, como hemos visto en páginas anteriores, participaría pocos meses después, como alumno del instituto cardenal Cisneros, en varias iniciativas culturales y políticas de tipo reivindicativo, de las que hemos hablado con anterioridad.

En este punto, parece difícil que un estudiante de bachillerato de la época como él, activo ya fuera de las aulas en algo más que la práctica del deporte o el flirteo con las chicas, pudiera o quisiera abstraerse del ambiente de efervescencia que envolvía, o mejor dicho, empezaba a envolver la ciudad por aquellas fechas y, en especial, sus centros de enseñanza superior, incluidos los institutos de segunda enseñanza -cuyos alumnos integrarían por grupos, de forma progresiva, las distintas asociaciones de estudiantes que se iban creando desde la ULE hasta la FUE-, circunstancia nada desdeñable para el caso de Francisco si se utiliza cierta perspectiva, a falta de datos concretos que verifiquen una hipótesis bastante probable.

El homenaje a Ganivet fue para muchos el punto de inflexión del cambio de actitud de los intelectuales, y de la universidad en general junto a ellos, hacia el discurso paternalista de Primo de Rivera y su cada vez más previsible intención de institucionalizar un régimen político nacido de la improvisación y destinado a reinstaurar el privilegio de las viejas castas en detrimento, supuestamente, de la “vieja política”. A partir de ese momento, la tensión aumentó paulatinamente en la calle, en las páginas de los periódicos, en las notas oficiosas gubernamentales, en las diferentes tribunas y escenarios imaginables y las posiciones respectivas, tanto la del dictador como las de los grupos de intelectuales y estudiantes, se fueron afianzando las unas en contra de las otras.

Algunos autores, como es el caso de García Queipo de Llano,<sup>264</sup> afirman que el homenaje a Ganivet provocó una escisión en el seno del movimiento estudiantil entre las asociaciones católicas y las liberales, afirmación difícil de asumir si contemplamos el conflicto ya entablado desde hacía tiempo dentro de la universidad por la hegemonía en las funciones de representatividad del conjunto de los estudiantes, exacerbado por las organizaciones católicas en su empeño de anular a las asociaciones profesionales de estudiantes, nacidas del Decreto Silió de septiembre de 1921 (traducido en una marco importante de autonomía universitaria) y, en principio, neutrales políticamente.

En cualquier caso, no parece haber dudas de que el conflicto entre los estudiantes católicos y los liberales o republicanos se había fraguado en realidad años antes de la creación de la Unión Liberal de Estudiantes (ULE), antecedente directo de la FUE.

El nacimiento de esta organización se produjo en abril de 1925,<sup>265</sup> inmediatamente después del homenaje a Ganivet -aunque hay autores y testigos que consideran el homenaje a Ganivet como su bautismo de fuego,<sup>266</sup> lo que no supondría más que adelantar unas pocas semanas la fecha de aparición en escena de la ULE-, cuando un grupo de estudiantes encabezado por Emilio González López (que, años más tarde, en noviembre de 1931, le daría la alternativa a Francisco Pérez Carballo en la presidencia de la APED/ FUE) entendió que, para sacar las luchas políticas intestinas de las aulas

<sup>264</sup> G. García Queipo de Llano, *Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera*, op. cit, p.196.

<sup>265</sup> E. González López, *El espíritu universitario*, op. cit, p.82 y *Memorias de un estudiante liberal*, op. cit, p.137.

<sup>266</sup> J. López Rey, *Los estudiantes y la dictadura*, op. cit, p. 20-21.

universitarias, y liberar de paso a las asociaciones oficiales de estudiantes del asedio al que eran sometidas por parte de las católicas, decididas a monopolizar la representación estudiantil en aras de esquemas pedagógicos muy conservadores, se debía constituir una asociación de ideología y carácter liberal para contrarrestar, siempre fuera de las aulas, la finalidad claramente política de los grupos de estudiantes católicos.<sup>267</sup>

Si convenimos en que a principios de la década de los veinte, la causa del conflicto y la polarización características de la vida universitaria española se centraba en la cuestión de la representatividad estudiantil, agravado en el curso 1922-23 con una lucha abierta entre organizaciones católicas y sindicatos profesionales que incluso afectó a los institutos de segunda enseñanza, donde se organizaron grupos de estudiantes de bachillerato,<sup>268</sup> también debe contemplarse el hecho de que las organizaciones estudiantiles católicas -en sí, la ACNP y la CECE (Confederación Española de Estudiantes Católicos)- estaban logrando por entonces un efecto paradójico e imprevisible para sus intereses, pues, como afirma E. González López, “el clericalismo, adentrándose en la Universidad, sería el revulsivo que despertara las conciencias dormidas de los estudiantes, empujándolos a una actuación seria”.<sup>269</sup> Palabras reveladoras de claves relativas, entre otras cosas, a los usos políticos del anticlericalismo (y a su raíz antropológica), que trascendían la inercia del movimiento estudiantil para nutrir el lenguaje político y la dialéctica de los partidos republicanos y de izquierda en España durante buena parte del siglo XX.

Por otra parte, García Queipo de Llano subraya dos cuestiones que resultan de especial trascendencia para este trabajo. Una de ellas sería el fortalecimiento, a partir de la primavera de 1925, del vínculo entre los intelectuales y la creciente protesta estudiantil, que pronto pasará de la reivindicación tradicional de cuestiones puramente académicas o profesionales (calificadas por muchos autores como apolíticas, aunque sólo lo fueran en apariencia) a una verdadera oposición política, donde los estudiantes se unirían a militares, intelectuales y otros grupos sociales en el deseo de derribar la dictadura de Primo de Rivera. La otra, sin duda aún más relevante para el futuro político próximo del país, sería la coincidencia de este ambiente de efervescencia (política y estudiantil) y el momento de la creación de la “Acción Política” o “Acción Republicana” de Azaña,<sup>270</sup> cuyo manifiesto fundacional se gestó en el laboratorio de la farmacia de Giral. Este grupo de intelectuales, que se constituía en una plataforma política y “pretendía ejercer, desde una esfera autónoma, un influjo moral en la dirección de aunar voluntades para la instauración de la República”, atrajo a numerosos estudiantes, sobre todo en los meses previos a la proclamación de la II República.<sup>271</sup>

Coincidencia, o mejor, convergencia desde casi un mismo punto de partida temporal de dos vectores esenciales en la vida de un joven estudiante de bachillerato que en un año ingresaría en la universidad para estudiar Derecho: por un lado el republicanismo de Azaña, cuyo brillo intelectual deslumbraba sobre todo en los círculos académicos; por

<sup>267</sup> E. González López, *Memorias de un estudiante libera (1903-1931)*, op.cit, p. 133-136.

<sup>268</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas...* op. cit, p.93-98.

<sup>269</sup> E. González López, *El espíritu universitario*, op. cit, p.42.

<sup>270</sup> G. García Queipo de Llano, *Los intelectuales...* op.cit, p. 197.

<sup>271</sup> S. Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940*, Madrid, Taurus, 2008, p.237.

otro, la nueva dinámica del movimiento estudiantil hacia y desde la constitución de la FUE, que marcarán con su evolución la trayectoria política de Francisco Pérez Carballo, especialmente durante la II República.

Pero volviendo al tiempo de las recién iniciadas protestas estudiantiles contra la dictadura, a partir del homenaje a Ganivet se inició un proceso un tanto caótico pero irreversible que fue dando forma a una decidida oposición política contra el dictador y sus proyectos de institucionalización del régimen, que también incluían polémicas reformas educativas. De ese modo, surgió un mayor compromiso político de los jóvenes “desde propuestas marcadamente radicales vinculadas con un mito republicano renovado, especialmente de los universitarios”,<sup>272</sup> que hasta entonces ostentaban casi la exclusividad de la representación juvenil, junto a determinadas secciones encuadradas en sus respectivos partidos como meros apéndices, en una sociedad de castas, desestructurada, hostil al asociacionismo ciudadano. La propuesta estudiantil de la época puede interpretarse, desde esta perspectiva, como un conflicto generacional que enfrentó a la tradicional élite del poder con los recién llegados a la vida política, y a éstos los vinculó con cierta parte de una generación intermedia (los intelectuales, no los conspiradores *profesionales* del pasado) en un mismo rumbo transformador.<sup>273</sup>

Este proceso de toma de conciencia que condujo a los estudiantes universitarios de la estricta reivindicación académica y profesional a la propuesta política en contra del dictador vivió un nuevo episodio en los incidentes acontecidos entre del dictador Primo de Rivera y Antonio María Sbert, presidente entonces de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, producidos el 15 de mayo de ese mismo año (1925) en la inauguración de un nuevo pabellón de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, preámbulo del sainete traducido en una serie de contraproducentes sanciones a Sbert, que sólo alentaron la acción subversiva de los estudiantes.

Los estudiantes se revelaron como verdaderos maestros en la impresión y distribución de hojas y folletos clandestinos, en el sabotaje o en la apropiación para sus fines de actos públicos (oposiciones en la U. Central a la cátedra de Unamuno, declarada vacante por el dictador, reinauguración del monumento a Ramón y Cajal en el Retiro, ambos actos en abril de 1926) y en la utilización del mítico nitrato de plata para adornar emblemáticos edificios o palacios con ingeniosas leyendas.<sup>274</sup> En su cada vez más intensa acción agitadora y reivindicativa, los estudiantes fueron amparados por eminentes profesores universitarios, sensibles a las nuevas corrientes científicas o pedagógicas y conscientes de la necesidad de modernizar las estructuras sociales y políticas del país para adaptarlas a una nueva generación que veía en la universidad el primer instrumento para emprender la democratización del país. No pocos de ellos fueron objeto de sanciones: por ejemplo, Jiménez de Asúa fue confinado en las islas Chafarinas (no sería ni la primera ni la última de las sanciones que sufriría hasta renunciar temporalmente a su cátedra en 1929) y Gregorio Marañón fue acusado de

<sup>272</sup> E. González Calleja y Sandra Souto Kustrín, “De la dictadura a la República. Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España”, en *Hispania (Revista española de Historia)*, 2007, vol LXVII, num 225 (enero-abril), p.81.

<sup>273</sup> Ibidem.

<sup>274</sup> Véase en general, J. López Rey, *Los estudiantes...* op. cit.

haber participado en la conspiración cívico-militar que alumbró la *Sanjuanada* en 1926, por lo que se le condenó a un mes de prisión en la Cárcel Modelo de Madrid y a 100,000 pesetas de multa.<sup>275</sup>

Sin embargo, la ULE acusaba las limitaciones impuestas por el hecho de ver reducida sus funciones a la acción clandestina, ya que la organización nunca fue legalizada por las autoridades. De hecho, encontró siempre numerosas dificultades para hacer llegar su mensaje a los estudiantes de las distintas facultades y escuelas universitarias, circunstancia que obligó a sus dirigentes a desactivarla paulatinamente y a enfocarse en el fortalecimiento de las asociaciones oficiales de estudiantes, denominadas más tarde, en el momento de su inscripción en el registro de la Dirección General de Seguridad para ser legalizadas -proceso farragoso e irregular en varios aspectos, pues hasta entonces sólo habían sido reconocidas por las propias universidades-, con el nombre de *asociaciones profesionales de estudiantes*.

En este contexto, sería la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho la que adquiriría un protagonismo creciente en el movimiento estudiantil en la universidad de Madrid —esta organización será presidida por Pérez Carballo a partir de noviembre de 1931-, debido a la naturaleza de los estudios jurídicos y a la responsabilidad vinculada de luchar con argumentos más sólidos en favor de los derechos y libertades cívicas ignorados por la dictadura. Así pues, los antiguos promotores de la ULE y muy pronto fundadores de la FUE, liderados de nuevo por el abogado e historiador Emilio González López, ganarían las elecciones internas en la asociación para optar a puestos directivos. A consecuencia de los resultados, Antonio Garrigues cesó como presidente de esta organización, mientras que Justino de Azcárate fue sustituido al frente del Ateneo Jurídico por el propio González López.

Para toda una generación de estudiantes liberales y republicanos la creación de la FUE, en enero de 1927,<sup>276</sup> fue el verdadero punto de inflexión del movimiento estudiantil español en el periodo de entreguerras, entendida la categoría de generación en un contexto donde, en efecto, las diferencias generacionales son históricamente importantes y la conducta colectiva o la relación entre los diferentes “grupos de edad” —los estudiantes liberales (republicanos por convicción o asimilación) en lucha por el cambio social, la generación intermedia fracasada en la duda sobre el retorno a la normalidad constitucional y, por último, la cohorte que detenta el poder dentro de una dictadura- contribuyen a explicar mejor un determinado tiempo histórico, considerando

<sup>275</sup> A. López Vega, *Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal*, op. cit, p. 164-165.

<sup>276</sup> El diario *El Sol* de 27 de enero de 1927 daba la noticia de la constitución, el día anterior, de la Junta de la FUE. Aproximadamente desde esas fechas, este periódico publicaría una sección fija, denominada *El estudiante en acción*, dedicada a informar sobre la vida universitaria a nivel nacional o, en otras palabras, a hacer un seguimiento de la trayectoria ascendente de la(s) FUE(s). A cargo de la misma, se encontraba uno de los fundadores de la FUE, Antolín Alonso Casares, una de las figuras principales de la “primera generación” de estudiantes que se forjó en la lucha de esta organización por las libertades civiles y políticas durante la dictadura de Primo de Rivera

la posición generacional, en el sentido de posición de edad, como uno más de los emplazamientos sociales analizados.<sup>277</sup>

Una generación de estudiantes decidida a apartarse del modelo clásico de estudiante liberal, forjado en la calle y no en la universidad, que, en efecto, experimentaba los temblores provocados por los movimientos sociales y políticos desatados en cada momento, pero que nunca hasta entonces había tomado la iniciativa de subvertir el orden social existente para pugnar por la democracia desde el mismo territorio moral, humanista y científico de la universidad.

El proyecto de creación de la FUE se venía gestando desde finales del curso 1925-26. Sus entusiastas arquitectos fueron Antolín Alonso Casares, Emilio González López, José López Rey, Carmen Caamaño y Arturo Soria, valedores de una organización que se declaró aconfesional y apolítica desde un principio, para plantear de una manera más aséptica sus demandas académicas –y protegerse así de los embates de las organizaciones estudiantiles católicas–, pero que defendió sin ambages en su actuación su ideología liberal de tendencia izquierdista, tornada con el tiempo, tras una primera fase táctica de condescendencia con la institución monárquica (por mera contraposición visceral al Directorio Civil), en un activo y sincero republicanismo.

Este ideal republicano creció en paralelo a la transformación de las iniciales reivindicaciones académicas y profesionales (donde la sombra de las organizaciones católicas adquiriría su verdadera dimensión) en una protesta política articulada contra un régimen opresivo y sumido en un particular caos, radicalizada especialmente durante el último trienio de la dictadura,<sup>278</sup> en espacial a partir de que Dámaso Berenguer asumiera el poder.

En este último tramo político, de poco más de un año (febrero de 1930-marzo de 1931), Francisco Pérez Carballo se iniciaría en el movimiento estudiantil, de momento como uno más de los estudiantes que asistía a manifestaciones, protestas y asambleas, entre otros actos, sin que su nombre apareciera, después de haber integrado la comisión que representaba a los estudiantes de su instituto en 1926, en los cuadros directivos de ninguna organización estudiantil hasta finales de 1931.<sup>279</sup>

Así pues, a partir de enero de 1927, fecha apuntada por López Rey como su origen –paradójicamente, el año central de la dictadura en su objetivo de perpetuarse en un nuevo diseño institucional, que arrancó con la convocatoria de una Asamblea Nacional–, la FUE comenzó su trayecto hacia la República con Antonio María Sbert como presidente, Alonso Casares como vicepresidente y Emilio González López como secretario general. Siguiendo el ejemplo de la FUE madrileña, y reorganizando o constituyendo las asociaciones profesionales de estudiantes (APE), base sobre la que se sustentó todo su diseño radial, se constituyeron las de Murcia, Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Granada, Zaragoza y Valencia, mientras que las restantes fueron apareciendo a lo largo de los cursos 1927-28 y 1928-29, gracias al impulso del Comité

<sup>277</sup> S. Souto Kustrín, “Generaciones y grupos de edad, uso, mal uso y abuso de un concepto”, en J. A. Martínez Martín, E. González Calleja, S. Souto Kustrín y J. A. Blanco Rodríguez (coord), *El valor de la historia. Homenaje al profesor Julio Aróstegui*, Madrid, Ed. Complutense, 2009, p.317.

<sup>278</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas*, op. cit, p.108.

<sup>279</sup> Entrevista a Juan Pérez-Carballo Veiga, Madrid, 3 de diciembre de 2010.

pro UFEH, creado en 1928 bajo la presidencia también de Sbert, hasta crear la red provincial que extendería la organización por todo el país.

La UFEH englobaba a las Federaciones Universitarias y Escolares (FUE) de las capitales de distrito universitario y éstas, a su vez, estaban formadas, cada una de ellas, por las distintas asociaciones profesionales de estudiantes (APE) que se estaban constituyendo legalmente por entonces en cada instituto de enseñanza media, facultad o escuela especial (Bellas Artes, Magisterio, ingenierías, peritos, etc) de su distrito universitario. Con frecuencia, estas APE eran denominadas también FUE (s) tanto en prensa como coloquialmente –la memoria de muchos testigos puede dar fé de ello- pero, como afirma M<sup>a</sup> Fernanda Mancebo, el nombre correcto es APE y su actuación correspondía a esas siglas: “habían nacido para reivindicar sus derechos como universitarios y escolares, para que los universitarios ocuparan el lugar que les correspondía en el campo de la enseñanza y la cultura”.<sup>280</sup>

En el programa del movimiento universitario representado por la UFEH se plasmaba una estrategia dirigida a tres esferas de actuación: social (definida en términos de lucha contra el individualismo, solidaridad mutua y ruptura del tradicional aislamiento del movimiento estudiantil), económica (centrada en que el acceso a la enseñanza superior fuese independiente del estatus económico del estudiante) y, por último, cultural (que incluía la edición de revistas “técnicas y sociales”).<sup>281</sup> Del mismo modo, en el programa inicial de la FUE figuraban puntos relativos al trabajo profesional, a la cultura general de los estudiantes, al deporte, a la música, a la intervención en la enseñanza y a la política que expresaban un espíritu de “nueva generación que estaba en el trasfondo de todas las páginas de los estatutos y que da título a una biblioteca Universitaria “Nueva generación” editada por Morata y a otra publicación de Asúa”.<sup>282</sup>

En los estatutos de la UFEH, visados por la Dirección General de Seguridad el 23 de abril de 1930, se insistía en lo que venimos diciendo sobre la neutralidad política y la naturaleza aconfesional de esta plataforma organizativa de estudiantes en sus distintos niveles, como queda de manifiesto en su artículo tercero:

La Unión Federal de Estudiantes Hispanos desarrollará su actividad circunscrita a los siguientes preceptos constitucionales: 1º.-Representar con carácter excluyente de cualquier otra organización, a los estudiantes organizados corporativamente en las entidades que forman parte de esta Unión, en las manifestaciones de su vida colectiva, sin carácter religioso ni político, por cuanto una representación integral no debe excluir a ninguna idea ni mantener exclusivamente ningún programa de partido, ostentando dicha representación así en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que interese por el carácter general o internacional de los actos en que haya de manifestarse. 2º.- Establecerá, mantendrá y promoverá las relaciones con entidades análogas extranjeras y culturales en general, cuyo espíritu no ataque a los principios de libertad de los pueblos y del hombre reconocidos, siquiera doctrinalmente, por todos los países que integran el Estado por la soberanía nacional, principios que consideramos necesarios para la extensión y desarrollo de la cultura en sus tres grados y que

<sup>280</sup> M<sup>a</sup> Fernanda Mancebo, “Una élite estudiantil: Los primeros Congresos de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U.F.E.H)”, en *Las élites espagnoles á la Espagne contemporaine*, Pau, 1982, p. 362-393, p.364-365.

<sup>281</sup> M<sup>a</sup> Fernanda Mancebo, *La universidad de Valencia. De la monarquía a la República(1919-1939)*, Universidad de Valencia, 1994, p.88-90.

<sup>282</sup> M<sup>a</sup>.Dolores. Gómez Molleda, “Juventud y política en la España contemporánea”, en *Studia Histórica* (Salamanca), vol V, n° 4 (1987), p. 7-20, p. 19. La obra de Jiménez de Asúa en cuestión es *Al servicio de la nueva generación*, Madrid, Javier Morata, 1930.

constituyen con la justicia el gui3n de las fundamentales aspiraciones de los estudiantes que suscriben.<sup>283</sup>

A lo largo de 1927, acontecieron en el seno de la universidad madrileña varios episodios que preludiaban el estado de continua agitaci3n de los a1os posteriores, como la dimisi3n del rector de la Universidad Central despu3s de que los estudiantes cat3licos celebrasen una asamblea en el campus con la presencia del rey o el intento fallido, ante la oposici3n de un destacado grupo de profesores universitarios, de nombrar a este doctor *honoris causa* por su patronazgo del campus de la Ciudad Universitaria.<sup>284</sup>

En mayo de 1928, la FUE convoc3 su primera huelga general estudiantil, en protesta contra la aprobaci3n del art3culo 53 de la Ley Callejo, que preve3a que en los centros privados de ense1anza superior de El Escorial (agustinos y jer3nimos) y Deusto (jesuitas) los ex3menes fuesen realizados por dos profesores de los respectivos claustros y por un catedr3tico de universidad, lo que supon3a un reconocimiento de hecho de las universidades cat3licas y un agravio para los estudiantes liberales y la izquierda, firmes defensores de la ense1anza p3blica.

Los meses anteriores hab3an tra3do la absurda sanc3n contra Jim3nez de As3a (por hablar de eugenesia en una conferencia impartida en la Universidad de Murcia), por lo que los 3nimos estaban realmente caldeados desde antes de que el decreto del ministro de Instrucci3n P3blica Callejo fuese publicado por la *Gaceta de Madrid* del d3a 19 de mayo de 1928. El hecho de que la huelga fuese convocada casi a finales de las clases, a punto de clausurarse el curso, debilit3 la protesta estudiantil y la redujo a una toma de postura reivindicativa de un grupo numeroso de profesores en las reuniones de los claustros universitarios, secundada con inmediatez por las distintas asociaciones profesionales de estudiantes a lo largo del mes de junio de ese a1o.<sup>285</sup>

Durante el curso siguiente, 1928-29, fue la APED la que tom3 la iniciativa contra la reforma planteada por Callejo, pues los privilegios concedidos a las universidades privadas cat3licas concern3an, fundamentalmente, a la Facultad de Derecho. En este sentido, debe sealarse que la carrera de leyes constitu3a el n3cleo de los estudios impartidos en los centros de El Escorial y Deusto. As3 las cosas, y despu3s de buscar, en febrero de 1929, la mediaci3n del rector en el conflicto entablado con el Ministerio de Instrucci3n P3blica (acuerdo tomado en la asamblea del 21 de febrero), la APED de Madrid convoc3 a los estudiantes a una asamblea abierta para el 27 del mismo mes en la sede de la Federaci3n Universitaria Hispano Americana, en cuyo transcurso se fijar3a la fecha del 7 de marzo como inicio de la huelga y fin del plazo de ocho d3as concedido al ministro para que declarase la nulidad de los tribunales mixtos establecidos, para los centros privados de ense1anza superior, por el decreto de 19 de mayo de 1928.<sup>286</sup> La huelga se concret3 finalmente para el d3a sealado, a pesar de las reticencias mostradas por algunos l3deres estudiantiles encabezados por Sbert, quien dudando seriamente de la eficacia de una estrategia encauzada por organizaciones no maduras a1n para afrontar

<sup>283</sup> *Estatuto de la Uni3n Federal de Estudiantes Hispanos*, en Centro Documental de la Memoria Hist3rica. P.S. Madrid. 523/32.

<sup>284</sup> J.M. Puyol, "El plan de estudios de Derecho en la Universidad Central (1923-1930)", op. cit, p.315.

<sup>285</sup> E. Gonz3lez L3pez, *Memorias de un diputado liberal (1903-1931)*, op. cit, p.225.

<sup>286</sup> J. L3pez Rey, *Los estudiantes frente a la dictadura*, op. cit, p. 31-54.

una situación de esa naturaleza, preferían aplazarla hasta después de Semana Santa. Postura contraria a la de un grupo de estudiantes que procedía de la Liga de Educación Social -surgida de la conexión entre intelectuales y profesores universitarios con estudiantes universitarios y de la necesidad de preservar la neutralidad política de la FUE-, entre los que se incluía el propio López Rey, partidarios de una acción urgente que se anticipase a una previsible actuación disuasoria o represiva por parte de las autoridades gubernativas, conocedoras de las intenciones de los estudiantes.

El mismo día 7, festividad de Santo Tomás de Aquino, con las aulas vacías de estudiantes católicos, ocupados con las celebraciones de esa festividad, Sbert, recién llegado a Madrid, Francisco Giral y otros estudiantes visitaron al rector para comunicarle que la huelga daría comienzo al día siguiente,<sup>287</sup> como efectivamente ocurrió en medio de una oleada de disturbios y expresiones de violencia que a partir de la toma de las facultades, la destrucción de efigies del rey y el intento de asalto del rectorado (abortado finalmente por la intervención disuasoria de Jiménez de Asúa y de varios miembros de la APED) se extendieron por las calles de Madrid, convirtiendo las arterias centrales de la ciudad en un verdadero campo de batalla. En la calle de Alcalá y en la Puerta del Sol se vivieron con frecuencia, durante doce días, violentos choques entre estudiantes y policías, en la Castellana se levantaron barricadas, en San Bernardo se izó la bandera roja de la FUE.

Estos incidentes fueron contestados por el gobierno con el envío de la fuerza pública a los recintos universitarios para garantizar la continuación de las clases, de donde no saldrían, virtualmente, hasta después de abril de 1931. Esta respuesta se sumaba a otras decisiones adoptadas, con mayor o menor automatismo, por el aparato represivo del régimen para intentar acabar con la huelga y amedrentar, de paso, a los estudiantes de cara al futuro. Entre ellas, resultan especialmente significativas la detención del carismático Sbert la misma noche del día 7 de marzo (permanecería un mes en prisión incomunicada y sería expulsado de todas las universidades del país) y la de la junta de gobierno de la FUE madrileña unos días después (Prudencio Sayagués era entonces su presidente), que sería reemplazada temporalmente por un comité de huelga dirigido por Emilio González López;<sup>288</sup> el cese de todos los decanos de las facultades madrileñas y del rector de la universidad de Madrid, el día 9, sustituidos por una Comisaría Regia (de la que formaban parte los catedráticos de Derecho Díaz Canseco y De Diego, entre otros); la ocupación militar de las facultades (entre ellas la de Derecho); la pérdida de matrícula de todos los huelguistas que no asistiesen a clase, el día 11 y, finalmente, la clausura (16 de marzo) de la Universidad Central de Madrid hasta el 1 de octubre de 1930. Esta medida obligaba a los alumnos madrileños a examinarse en universidades de fuera de Madrid, aunque en poco tiempo quedaría derogada junto a la mayoría de las sanciones adoptadas. El cierre de la Universidad Central fue seguido de los de las universidades de Murcia, Sevilla, Salamanca, Oviedo, Santiago y Valladolid, que a

---

<sup>287</sup> Ibid.

<sup>288</sup> Aunque sobre este punto hay ciertas discrepancias entre los relatos de dos autores que detentan la condición de historiador, protagonista y testigo de los hechos, como son José López Rey y Emilio González López, véase E. González López, *Memorias de un estudiante liberal (1903-1931)*, op.cit, p.229 y J. López Rey, *Los estudiantes...* op.cit, p.117-118.



partir del 13 de marzo se habían ido sumando a la estrategia de los estudiantes madrileños.

A finales de marzo de 1929, ciento veinte catedráticos se solidarizaron con las protestas de los estudiantes –dándole así al movimiento estudiantil un sello de respetabilidad necesario-<sup>289</sup> y escribieron un escrito de protesta contra la política represiva con la que el dictador, artífice principal, cuando no ideólogo o inspirador, de las medidas de fuerza adoptadas por su gobierno, trataba de sojuzgar a los estudiantes. Entre ellos, una impresionante colección de brillantes científicos e intelectuales, se encontraban José Castillejo, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa y Felipe Sánchez Román, que ejercían la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, así como Ortega, Marañón, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Besteiro o el doctor Negrín. Por su parte, los profesores presentes en la Asamblea Nacional veían en los disturbios estudiantiles el principio del fin del régimen y trataron de advertir al dictador de la gravedad real de la situación.

Así las cosas, y con el movimiento estudiantil reforzado por el apoyo de profesores universitarios e intelectuales (1929 fue el año de la definitiva ruptura de los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera) y reestructurado, ante el encarcelamiento de la Junta de gobierno de la FUE, en una heterogénea pero activa Junta Central del Movimiento Escolar (a partir del primer comité de huelga),<sup>290</sup> Primo de Rivera, después de arbitrar fallidas soluciones intermedias -y presionado por la necesidad de ofrecer una mejor imagen de cara a la reunión en Madrid del Consejo de la Sociedad de Naciones y a las Exposiciones de Barcelona y Sevilla-, decretó la reapertura de las universidades y la reanudación oficial de las clases, la suspensión de las comisarías regias y la reintegración de las autoridades académicas a sus cargos. Del mismo modo, el gobierno permitió la regulación de las matrículas afectadas por las sanciones decretadas, la concesión de recompensas a los alumnos que hubieran observado un comportamiento “correcto” y la celebración de los exámenes bajo la normativa anterior a la reforma Callejo de 1928.<sup>291</sup> De hecho, éstos se convocaron oficialmente del 25 de mayo al 10 de junio, optando la mayoría de los profesores o por no realizarlos o por mostrarse excesivamente benévolo en las correcciones. Seguramente en clave premonitoria, en los días previos a la reanudación de las clases, fue derribada y completamente deshecha la estatua de Alfonso XIII, obra de Mariano Benllure.<sup>292</sup>

La vuelta a la normalidad no fue más que una apariencia, pero ofreció de ese modo algo de aire al Directorio Civil. La mayoría de los alumnos volvieron a las aulas, en efecto, aunque una parte lo había hecho ya a finales de abril, cuando las sanciones se empezaron a suavizar un tanto. A pesar de que la FUE aceptó de mal grado las concesiones de la dictadura, sólo unos pocos estudiantes decidieron no examinarse como acto simbólico de rechazo del orden reinstituído y perdieron sus respectivos

<sup>289</sup> G. García Queipo de Llano, *Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera*, op. cit, p. 536. La lista completa en E. González López, *Memorias de un estudiante liberal...*, op. cit, p.234-235.

<sup>290</sup> J. López Rey, *Los estudiantes...* p. 117.121

<sup>291</sup> E. González Calleja, *La España de Primo de Rivera*, op. cit, p.92-93.

<sup>292</sup> F. Caudet, “Antecedentes de la generación del 98. Estudiantes y profesores frente a la dictadura”, en *Tiempo de historia* (Cadiz) nº8 (julio de 1975), p.13.

cursos.<sup>293</sup> Así mismo, la inmensa mayoría de los profesores universitarios regresaron a sus puestos docentes, a excepción de Luis Jiménez de Asúa y Felipe Sánchez Román en la facultad de Derecho, Ortega en la de Filosofía y Letras de Madrid y A. García Valdecasas y Fernando de los Ríos en la de Derecho de Granada, decididos a guardar una línea de coherencia con sus actuaciones anteriores (o sus renacidas expectativas políticas) y renunciaron a sus cátedras.

Francisco Pérez Carballo, alumno en ese momento de tercer curso de Derecho en la Universidad Central, fue uno más de los estudiantes de leyes afectados por el cierre de las aulas universitarias y la pérdida colectiva de matrículas (en su facultad, todos los estudiantes la perdieron) que, finalmente, decidió presentarse a los exámenes de junio. Desde esta perspectiva, su participación en la huelga y las subsiguientes acciones de protesta emprendidas por el movimiento estudiantil es más que probable, sobre todo a partir de 1930 y frente a la negligente y premiosa conducta del gobierno Berenguer,<sup>294</sup> sin que figure su nombre, como ya se ha dicho, en ninguno de los cuadros directivos de las organizaciones estudiantiles implicadas en la lucha contra la dictadura y sus epígonos o sucedáneos (gobiernos Berenguer y Aznar). Sin embargo, no se ha podido acreditar documentalmente su presencia en las filas de la FUE hasta noviembre de 1931 (precisamente en el momento en que la FUE inicia su proceso de *institucionalización*). Algunas referencias familiares lo sitúan ya como miembro activo del movimiento estudiantil en la etapa Berenguer –recogidas en las entrevistas realizadas-, tesis apoyada por E. González López (uno de los fundadores de la FUE y antecesor, aunque no directo,, de Pérez Carballo en la presidencia de la APED de Madrid, se refería a éste como su *antiguo discípulo*, relación que trascendería el estricto ámbito académico) y por una no demasiada precisa información periodística aparecida en la revista *Estampa* en 1936. En ella, uno de los milicianos entrevistados (el reportaje se dedica al recién constituido Batallón Pérez Carballo) señalaba que la capacidad dialéctica de Francisco Pérez Carballo había impresionado a los representantes de la UFEH que asistían a una asamblea de estudiantes donde, siendo éste *aún casi un niño*, pronunció un discurso de contestación al de un ministro que había intervenido previamente.<sup>295</sup>

La información de *Estampa* no aclara nada en relación a la fecha concreta del acto ni aporta ningún otro detalle relevante que permitiese reconocer el verdadero significado contextual de la intervención del abogado madrileño, tan deslumbrante como irreverente al parecer. Se podría tratar de una aparición en público de Pérez Carballo tanto en calidad de estudiante universitario -sería lo más coherente, puesto que la FUE y la UFEH fueron creadas después de ingresar Francisco en la facultad de Derecho- como de alumno de bachillerato (de ser así, no se entendería la mención a la UFEH, que por

<sup>293</sup> Entre ellos, el propio José López Rey, quien afirma que “fuimos contadísimos los que no acudimos a los tribunales de examen”. Véase de este autor, *Los estudiantes...* p.227.

<sup>294</sup> Entrevista a Juan Pérez Carballo- Veiga, Madrid, 3 de diciembre de 2010.

<sup>295</sup> La cita textual aparecida en la revista es la siguiente: “Si no hubiera acabado tan pronto habría tenido España la más alta figura de todos los tiempos. Aún casi niño pronunció un discurso, contestando al de un ministro en una Asamblea, que le ganó la admiración incondicional de la U.F.E.H. Él era directivo de la Unión Federal de Estudiantes Españoles. Nosotros teníamos un batallón y le pusimos su nombre...”, en “Los estudiantes del Pérez Carballo”, en *Estampa* (Madrid), nº 463 (5-12-1936), p. 16.

La cita de E. González López, en *Memorias de un diputado republicano en la guerra civil española...* op. cit, p.17.

entonces aún no se había creado, y si parecería más coherente la alusión a la juventud del orador como un mérito valorable). En cualquier caso, tampoco está de más incidir en que si bien parece probable la imagen de un Francisco Pérez Carballo como estudiante universitario involucrado en asambleas semi-clandestinas o empujado a las calles en medio de manifestaciones de protesta o actos de propaganda contra los prohombres de la dictadura de Primo (y sus absurdos intentos de preservar un orden social y político segmentado), sólo existen pruebas documentales de su participación en algunos actos culturales y de reivindicación política como estudiante del instituto Cardenal Cisneros (por entonces ni la UFEH ni la FUE habían sido creadas todavía), como ha quedado reflejado con anterioridad.

Estas inquietudes políticas esbozadas por un estudiante de bachillerato podrían sugerir el arranque de una línea de continuidad que llevaría a Francisco a continuar ligado a la lucha por las reivindicaciones de los estudiantes liberales una vez terminado el bachillerato e iniciado sus estudios universitarios. A este respecto, debe considerarse además que sus cinco años de carrera (1926-1931) coincidieron con la fase crítica que condujo al país desde la dictadura a la República y con el periodo de gestación y madurez del movimiento estudiantil encabezado por la FUE, que tratamos de sintetizar en estas páginas.

Parece lógico y coherente, por lo tanto, si contemplamos su trayectoria en perspectiva y contrastamos su teórico papel de estudiante anónimo bajo una dictadura gris con su línea de pensamiento político y su función como dirigente de la FUE y de las Juventudes de AR y, más tarde, de IR -que se hacen transparentes, como se ha afirmado anteriormente, a partir del otoño de 1931-, el ubicar a Francisco entre los estudiantes políticamente activos durante la huelga de 1929 (y en los acontecimientos que la precedieron y continuaron en la intrahistoria del movimiento estudiantil), con mayor o menor grado de implicación en cada contexto y forma de actuación, y aducir sus crónicos problemas económicos (seguía impartiendo clases particulares de latín, alternadas con trabajos esporádicos para pagarse sus estudios y ayudar en casa) como una de las razones que le harían tomar la decisión de volver a las clases y de presentarse a los exámenes, decisión que, por otra parte, adoptó la mayoría de sus compañeros sin darle el significado de claudicación ante las injusticias cometidas por la dictadura.<sup>296</sup>

Se hace difícil, pues, aceptar que un estudiante con una trayectoria como la suya durante la II República (de dirigente estudiantil a directivo de las juventudes de los partidos liderados por Azaña), no se involucrara o comprometiera de algún modo en la huelga y las protestas que sembraron, en las calles de Madrid y de muchas ciudades españolas, un estado de agitación destinado, de forma progresiva, a poner a la dictadura contra las cuerdas.

Tal vez, en su estilo concienzudo y prudente, pero no exento de esa energía tan característica de su personalidad, se enfrentaría a la brutalidad de los *romanones* (los agentes del Cuerpo de Seguridad), con la certeza de la inminente llegada de la República, dada la dificultad que para cualquier estudiante de la época representaba el

---

<sup>296</sup> El uno de julio de 1930 aparecen en prensa los resultados del primer ejercicio de la oposición a auxiliares de Hacienda, en la que Francisco Pérez Carballo figura como uno de los aprobados. *El Sol*, 1-7-1930.

permanecer neutral o alejado, a modo de observador, de unos acontecimientos que llenaban las facultades de policía, interrumpían durante largos periodos el ritmo de las clases y extendían en las calles el murmullo de continuas algaradas, protestas y choques violentos entre adversarios ideológicos o contra las fuerzas del orden.

Protestas, algaradas, reuniones y asambleas que, desde la particular épica de la confección y distribución de hojas y folletos informativos clandestinos -muy demandados por los estudiantes y el conjunto de los madrileños para conocer los acontecimientos de última hora e impresas en condiciones muy precarias-, a las reuniones interminables en míticos cafés del Madrid pre-republicano como el *Spiedum*, *La Granja-El Henar* o la chocolatería de San Ginés, desde la eficacia maligna del nitrato de plata -utilizado por los denominados “pictógrafos” para escribir la leyenda *Se alquila* en las paredes del Palacio Real- a la utilización de los tinteros como verdaderos proyectiles para arrojar contra los agentes del Cuerpo de Seguridad, los estudiantes (y no la insurrección civil o el golpe militar) convirtieron al movimiento estudiantil en el verdadero ariete de las clases medias para la consecución de un profundo cambio político.<sup>297</sup>

Uno de los cafés más frecuentado por los directivos de las diferentes organizaciones estudiantiles en los últimos compases de la dictadura (y especialmente en los momentos más críticos y turbulentos), el de *La Granja- El Henar*, situado en la calle Alcalá, en el lugar que ocupa actualmente el Ministerio de Educación, era el santuario, por cierto, del grupo de escritores, científicos y políticos, futuros prohombres de la República, que se aglutinaba en torno a Azaña, AR y la Alianza Republicana. Un buen lugar, por otra parte, para la divulgación e intercambio de ideas y la cooptación de nuevos valores procedentes, por ejemplo, del movimiento estudiantil, o el cultivo de relaciones personales que bien pudieran augurar, en el concepto de la época, un legítimo padrinazgo político por parte de los líderes republicanos emergentes. Allí celebraban su tertulia política muchos republicanos liberales y de izquierda, mientras que otros grupos de intelectuales se inclinaban por las patrocinadas por Ortega o Valle-Inclán, también abiertas, como es sabido, al debate y a la participación en los acontecimientos políticos y sociales del momento.

Durante el curso 1929-30, y a pesar de que la derogación del artículo 53 de la Ley Callejo se hizo efectiva en septiembre de 1929, los estudiantes de la FUE no cesaron en sus reivindicaciones, centradas en el reconocimiento de todas las organizaciones estudiantiles aún no legalizadas, la rehabilitación de Sbert y de los profesores universitarios que aún continuaban excluidos de la universidad por la dictadura de Primo de Rivera a consecuencia de su vinculación a las protestas universitarias, y la derogación de una disposición que exigía a los doctores recién titulados tres años de cadencia para presentarse a la oposición de cátedra.<sup>298</sup> Estas fueron las motivaciones de la segunda huelga convocada por la FUE, junto a una de las últimas decisiones tomadas por Primo de Rivera, como fue la “disolución” de esta organización: una nota oficiosa

<sup>297</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas*, op. cit, p. 120.

<sup>298</sup> J. Lopez Rey, *Los estudiantes...* op. cit, p. 274-275.

de 21 de enero de 1930 declaraba que la FUE no existía legalmente, por lo tanto se ahorra su ilegalización.

La huelga comenzó exactamente el 22 de enero en Madrid y pronto se extendió a otras provincias. Significó un nuevo reto para la FUE, que para emprenderla debió superar de nuevo las divisiones internas surgidas en el movimiento estudiantil acerca de su eficacia real, alentadas por las nuevas dudas de Sbert al respecto. Finalmente, los dirigentes de la FUE se decantaron por convocarla, entregando su dirección a la Junta Central del Movimiento Escolar, con González López y P. Sayagués a la cabeza. Desde ese momento, los estudiantes se enfrentaron al asedio de una cada vez más numerosa presencia policial (el cerco se estrechó desde la sede de la FUE, en la calle de la Magdalena, hasta las distintas facultades madrileñas) y a la renuencia de la Junta de gobierno de la universidad, cuyo rector era Elías Tormo, a apoyar sus demandas.

La Junta cambió de postura finalmente y la universidad madrileña hizo suyas las peticiones de los estudiantes, hecho que, sin duda, coadyuvó al éxito de la protesta, celebrado de madrugada por los estudiantes madrileños con la quema de un quiosco de *El Debate*, el diario que los hostigaba continuamente, situado en la calle Alcalá. Éxito que pocos días más tarde se vería coronado con la caída del dictador, a quien los estudiantes habían combatido incesantemente en el último año de su extemporánea travesía política por el poder.

En definitiva, en el momento de la dimisión de Primo de Rivera y en medio de la agonía monárquica, abandonado el dictador también por sus antiguos defensores – realizó una consulta a los capitanes generales buscando un respaldo a su gestión que no obtuvo- y lastrado por su torpeza en la resolución de las cuestiones artillera y estudiantil -factores unidos a los efectos de una costosísima política de gasto público y a su fracaso en la institucionalización de un régimen en permanente interinidad-, el movimiento estudiantil completaba su tránsito desde la reivindicación profesional y académica a la protesta política, más cohesionada (en especial desde la huelga de marzo de 1929), violenta (incluía toma de edificios, destrozos en lugares públicos, sabotajes y enfrentamientos durísimos con la fuerza pública) y cada vez más teñida de sentimiento antidinástico y republicano. De hecho, la caída de Primo de Rivera abrió a la UFEH la puerta de la participación política plena, que se radicalizaría en el plano ideológico durante el periodo Berenguer. En este sentido, hay que señalar que entre febrero y marzo de 1930 muchos estudiantes de la FUE se inscribieron en la Asociación de Estudiantes Republicanos, integrante de la Alianza Republicana,<sup>299</sup> o, en algunos casos, sirvieron de enlace entre esta plataforma política y partidos de izquierda y sindicatos,<sup>300</sup> llegando a involucrarse en conspiraciones cívico-militares y confusos *putsch* contra la

<sup>299</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas*, op. cit, p.119.

<sup>300</sup> Caso de Antolín Alonso Casares o del propio Emilio González López, según la versión del abogado e historiador gallego. Después de los contactos iniciados por el primero durante su estancia en Barcelona con el fin de coordinar al huelga estudiantil de 1929 en aquella ciudad, ambos visitaron a Ángel Pestaña y J. Ayguadé en Barcelona y consiguieron la adhesión de éstos, en representación de la CNT y los nacionalistas catalanes, respectivamente, a la Alianza Republicana, como muestra de la buena disposición de estas fuerzas políticas a un pacto de coordinación entre todas las fuerzas revolucionarias y sindicales españolas. Y González López, por otro lado, en compañía de Jiménez de Asúa, recibió la negativa del socialista Saborit ante idénticos planteamientos. Véase, E. González López, *Memorias de un estudiante liberal...* op. cit, p. 254-256.

dictadura: la encabezada previamente por Sánchez Guerra en 1929, el episodio protagonizado en el aeródromo de *Cuatro Vientos* por Queipo, Hidalgo de Cisneros y R. Franco,, en la que este último trató de bombardear el Palacio Real y, fundamentalmente, la accidentada sublevación de Jaca.

De ese modo, se fortalecía poco a poco el nuevo vínculo establecido entre el estudiante, transformado en un ciudadano cautivado por la modernidad y en demanda de un cambio político urgente, y el sueño republicano, ahora más real y, por lo tanto, aún más preñado de incertidumbre.

La liberación de los estudiantes detenidos a consecuencia de los altercados producidos hasta entonces, la reposición de los cinco catedráticos que estaban separados de la universidad (febrero de 1930) y el regreso a Madrid del deseado Sbert (a quien Primo de Rivera había proscrito de manera absurda y contraproducente), todo ello en los primeros meses del gobierno del general Dámaso Berenguer, parecieron aliviar la tensión, al menos por un tiempo.

La UFEH, por su parte, celebró del 21 al 27 de abril de 1930, bajo la presidencia de Antonio María Sbert, su congreso constituyente en el Schollarum (el local de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Madrid), ante una gran expectación que se reflejó en la prensa de esos días y en la celebración de actos culturales y conferencias previas. Las cuatro grandes secciones (luego ampliadas a una quinta) en que se dividió el congreso fueron dedicadas a la reforma de la enseñanza, la inter-ayuda universitaria, la intervención del estudiante en el régimen universitario y la organización federal. Las conclusiones a las que llegaron los estudiantes de la UFEH (agrupados en 70 asociaciones, de las cuales 10 eran federaciones universitarias, representando a un total de 15,882 asociados),<sup>301</sup> reflejaron claramente el deseo de abordar una reforma absoluta de la enseñanza, desde la escuela a la universidad, y, sobre todo, la intención de que el movimiento estudiantil participase como protagonista de la misma.

José Orbaneja, presidente de la FUE madrileña y, durante el congreso constituyente de la UFEH, responsable de la primera sección (Reforma de la enseñanza), le escribió una carta al presidente de la JAE, fechada a principios de ese mes, semanas antes de que el congreso se iniciase, en la que le manifestaba la voluntad firme de los estudiantes de la FUE de protagonizar, junto a los profesores, la ansiada reforma universitaria para que ésta se hiciese al fin realidad, en espacial “ahora que la federación tiene una gran fuerza”, y le advertía de las consecuencias que tendría la tentación de “dirigir a la juventud, por ajenos a ella”.<sup>302</sup>

Este muestra de confianza en sus propias fuerzas que Orbaneja expresaba con claridad, hablaba tanto del estado de ánimo de los estudiantes después de haber visto caer al dictador, en un momento en que sus reivindicaciones políticas ya englobaban a las demandas de tipo académico, profesional o corporativo, como del hecho de que esta organización ya asistía normalmente, a través del Comité pro UFEH, a los congresos de la CIE (Confédération Internationale de Étudiants) y le disputaba la representación

<sup>301</sup> M<sup>a</sup> Fernanda Mancebo, “Una élite estudiantil. Los primeros congresos de la Unión Federal de estudiantes Hispanos (U.F.E.H), op. cit, p. 370.

<sup>302</sup> Carta de J. Orbaneja al presidente de la JAE, Madrid, 1 de abril de 1930, en Residencia de Estudiantes. Archivo de la Edad de Plata. FUE.

internacional de los estudiantes españoles a organizaciones católicas como la CECE,<sup>303</sup> que la obtuvo en exclusiva, pero en régimen de interinidad, en el congreso de Budapest de 1929.

En este momento de efervescencia del movimiento estudiantil, resulta muy revelador el discurso pronunciado por Antonio María Sbert en el transcurso de un banquete que le ofrecieron como homenaje Gabriel Alomar y representantes de diferentes instituciones académicas en el Gran Hotel de Mallorca, pocos días después de la caída del dictador y antes del apoteósico regreso a Madrid del estudiante mallorquín, según se deduce de la lectura del texto y su contextualización:

Acabamos de echar a un diablo de nuestro cuerpo. Y echaremos cualquier día a los otros por arte de magia o por cirugía (...) no debo ocultar que me preocupan menos los diablos que el cuerpo nacional, porque yo creo que estos diablos nos entraron en el cuerpo porque el cuerpo está gravemente enfermo(...) ¡Revolución desde arriba! ¡Si lo que está más podrido está arriba! Entonces, ¿revolución desde abajo? ¿Y si abajo no hay quien valga para estar arriba? Porque, abajo hay descontento y sed de justicia y fe en los milagros laicos o beatería milagreira...Palabras y gemidos, blasfemias y oraciones...En las aulas una juventud ansiosa de renovar la vida pública. En los partidos revolucionarios, una juventud combatiente...Pero, cuando mis compañeros dejan las aulas -y las han dejado desde 1920 hasta ahora, en diez años, diez promociones-, sus deseos de renovación suelen trocarse en afanes de lucha profesional o en ambiciones que se adaptan al medio corrompido (...) Cayó Primo de Rivera. En el destierro el poder que nos sojuzgó. España está desterrada todavía y olvidada de los suyos. La España auténtica de los cuatro cetros y de las cuatro lenguas y de los dos mares y de una sola faz; la común empresa fracasada en lo mejor de su tarea federadora.

F.U.E., Federación de Universidades y Escuelas. U.D. E.H., Unión federal de Estudiantes Hispanos, y no españoles, hispanos de Portugal y de América, bienvenidos a nuestra auténtica España como nuestros iguales y no como libertos. Un pensamiento renovador, una acción disciplinada, una fe común: rehacer España desde la Universidad y para el pueblo, con el pueblo y por la Libertad. Rehacerla como es y no como quisieron hacerla: con sus cuatro lenguas, en una comunidad de naciones y hombres libres y solidarios. Esto es la F.U.E o no es más que un deporte. Para ella nuestros aplausos y mi emoción y amor preñada de amor de mallorquín.<sup>304</sup>

Una cita textual bastante elocuente, desde las metáforas hasta la exhortación a seguir la lucha para liberar al país de la vieja casta política que lo subyugaba y a no conformarse con la caída del dictador, teñida de ese barniz revolucionario que impregnaba el lenguaje de los oradores e ideólogos republicanos de la época. Palabras que condensaban, en definitiva, un cambio social y político impulsado desde la universidad y, sobre todo, un estado de ánimo general en el movimiento estudiantil, que desde la huelga de 1929 había compartido su lucha con obreros socialistas y anarquistas, con profesionales liberales, profesores e intelectuales republicanos, enfrentándose al nervio de los sables de los agentes de Seguridad y de la Guardia Civil. Un cambio político que ganaba pujanza día a día, atravesando barricadas y tumultos en las calles, en donde los estudiantes de la FUE se enfrentaban a los católicos de la CECE, por una parte, y a grupos de extrema derecha –los “legionarios de España”, seguidores del PNE de Albiñana, y los distintos grupos de las Juventudes Monárquicas-, que

<sup>303</sup>En concreto, el Comité pro UFEH había asistido hasta entonces a los congresos de la CIE en París, Dresde, Chartreuse y Budapest, véase *El Sol*, 22-4-1930.

<sup>304</sup>Palabras de Antonio María Sbert en su *Discurso en el Gran Hotel de Palma de Mallorca en ocasión del banquete ofrecido por Gabriel Alomar y representantes de todas las instituciones académicas*, s. f (1930), en Archivo de la Fundación Universitaria Española. Fondo Antonio María Sbert /1.5.1.

trataban de reventar los actos convocados por sus adversarios ideológicos para intentar frenar el imparable ascenso de los fueistas, por otra. La vuelta de Unamuno a Madrid, procedente de su simbólico autoexilio, el 1 de mayo de 1930, desató una ola de incidentes donde la violencia adquiriría mayor protagonismo que la reivindicación primaria, a través de provocaciones y respuestas mutuas, que ocasionaron varias decenas de heridos y un muerto (frente a la facultad de Medicina en Atocha). El ruido de las pistolas ya no asustaba a los estudiantes que ahora las portaban fuera de las aulas. Durante la II República, algunos las introducirían, sin ningún rubor, en la misma Universidad.

Unamuno aceptó la recomendación de las autoridades y abandonó Madrid para no servir como pretexto indirecto a más incidentes. El comienzo del curso 1930-31 abrió otro debate sobre la cuestión de la representatividad estudiantil, con un baile confuso de decretos y rectificaciones, durante el cual la FUE se vio “reconocida” nuevamente por la universidad para ser, más tarde, y junto a las organizaciones católicas, reintegrada a su nebuloso estatus legal.

En noviembre, con motivo del entierro de los cuatro albañiles muertos en el derrumbe de un inmueble situado en la calle Alonso Cano, la comitiva fúnebre que trataba de desviarse hacia la Puerta del Sol por la Carrera de San Jerónimo, compuesta por decenas de miles de personas, entre ellas muchos obreros y estudiantes, se encontró con el formidable despliegue efectuado por las fuerzas del orden en torno al centro de Madrid. Mientras pasaban del duelo a la protesta contra el gobierno Berenguer, los manifestantes protagonizaron un inevitable enfrentamiento, que arrojó finalmente la cifra de 48 heridos y 2 muertos. La respuesta de la UGT fue convocar un paro en Madrid que se transformó en una huelga de 48 horas a la que se adhirió la FUE. Para Santos Juliá, este incidente “marcó en Madrid el comienzo de la movilización contra la Monarquía que no cesará ya hasta que los obreros puedan volver a la Puerta del Sol para proclamar allí la República”.<sup>305</sup>

La implicación de miembros de la FUE en la conspiración militar de Jaca fue también un hecho indiscutible y relacionado con la formación de grupos armados para defender el Ateneo de los frecuentes ataques sufridos por parte de elementos del PNE de Albiñana. Con muchachos pertenecientes a esta fuerza de escoltas, encabezados por el poeta malagueño Moreno Villa,<sup>306</sup> un buen número de los miembros de la sección deportiva de la FUE (denominada FUDE), dirigida por Miguel Morayta, quien a la sazón también era secretario del Ateneo, y otros grupos paramilitares dirigidos por L. Benjumea, Mateo y Sousa y Domínguez de Castro se organizó una especie de milicia republicana que viajó a Jaca para sumarse al levantamiento o trató, días más tarde, de “requisar” armas largas en el Cuartel de la Montaña. Acciones en las que los estudiantes de la FUE se solapaban con militantes de la izquierda obrera organizados para erosionar el orden público y precipitar el fin de la monarquía, dentro de la estrategia que debía

---

<sup>305</sup> S. Juliá, “De cómo Madrid se volvió republicano”, en J. L. García Delgado (ed), *Los orígenes culturales de la II República, IX coloquio de historia de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara*, Madrid, Siglo XXI, 1993 p.337-357, citado por E. González Calleja, *Rebelión...* p.126.

<sup>306</sup> E. González López. *Memorias de un estudiante liberal...* op. cit, p.292.



converger en un movimiento revolucionario organizado en toda España, cuyo eje se rompería en la descoordinada sublevación de Jaca.<sup>307</sup>

Las huelgas, protestas y manifestaciones convocadas por la FUE entre diciembre y marzo de 1931, destinadas tanto a protestar contra las medidas represivas adoptadas por las autoridades gubernativas -ante el creciente deterioro del orden público y social, con y tras los sucesos de Jaca, y el declive inevitable del gobierno y la monarquía, se llegó a declarar el estado de guerra en enero de 1931-, y las continuas provocaciones de los grupos de extrema derecha (en pleno éxtasis maximalista frente a la deriva radical de una parte importante de la FUE), como a pedir la liberación del gobierno provisional de la República y coadyuvar de ese modo al cambio de régimen, pusieron a la FUE en una senda revolucionaria que trascendió las expectativas de los republicanos (maestros en utilizar la energía desatada de los estudiantes) y acercó al movimiento estudiantil de raíces liberales al borde de la revolución social, en los prolegómenos de las elecciones municipales de abril de 1931.

La refriega librada en las inmediaciones del Hospital de San Carlos (donde se encontraba la facultad de Medicina de Madrid), durante el mes de marzo de 1931, con la FUE levantando la bandera de la amnistía a favor del capitán Sediles y otros oficiales republicanos implicados en los hechos de Jaca,<sup>308</sup> o, en sentido contrario, la creación por parte de la FUE de la Universidad Libre (con la participación de intelectuales como Ortega, Besteiro, Asúa, Sánchez Román y C. Sánchez Albornoz) durante el mes de febrero, aprovechando un nuevo cierre de la universidad decretado por el gobierno Berenguer, simbolizaron la doble cara de esta organización estudiantil, retratada tantas veces sólo en blanco y negro, pero capaz de tomar la iniciativa y jugar un papel social y político relevante fuera del estricto ámbito académico.

A partir de la proclamación de la II República, el influjo de la tan temida oficialización de la FUE dentro del engranaje político y educativo republicano, el ascenso de nuevos cuadros directivos, que alternaban su compromiso estudiantil con la militancia política entre los socialistas o los republicanos de izquierda (los viejos líderes estudiantiles procedentes de las clases medias pasarían a segundo plano, y no sólo por la edad) y se decantaban más por las reivindicaciones académicas y profesionales que por la participación política plena –desde ahora ésta fluiría por unos cauces más normalizados-, y la aparición a derecha e izquierda de la FUE de organizaciones estudiantiles y juveniles, vinculadas a partidos e ideologías más radicales, cambiaron las coordenadas sociales y políticas del movimiento universitario e influyeron, de forma tangible, en el ascenso de estudiantes como Francisco Pérez Carballo desde el anonimato “activo” a la dirección de la APED de Madrid en noviembre de 1931.

---

<sup>307</sup> Ibid. p.126-127.

<sup>308</sup> Un relato muy descriptivo de estos acontecimientos, escrito por uno de los estudiantes que los vivió en primera persona, en A. Gascón, *Los estudiantes*, Madrid, Castro, s.f (¿1931?), p. 99-113.

### **III. UNIVERSIDAD VERSUS POLÍTICA EN LA ENCRUCIJADA DE LA VIDA PROFESIONAL.**

**Presidente de la APED de la Universidad Central y directivo de la FUE de Madrid.**

La caída de la dictadura trajo consigo el fin de la monarquía de Alfonso XIII, arrastrada ésta por la fuerza del vínculo forjado entre la pasividad de un rey cómplice y la voluntad de la dictadura de transgredir la constitución, expresada desde su mismo inicio en septiembre de 1923 y hasta el último de los pasos perdidos, -o mejor dicho, de la inacción dilatada e inconsciente- de los gobiernos Berenguer y Aznar, fracasados ambos, en especial el primero, como es sabido, en su obsesión por regresar a la normalidad constitucional anterior al golpe de Primo de Rivera.

Algunos autores han especulado con la posibilidad de que, tras la dimisión del dictador en enero de 1930, una hipotética transición hacia formas más democráticas (que contemplaría, en primer lugar, la práctica disolución de los partidos del turno, fragmentados tras un crítico periodo de ostracismo), basada en medidas como la convocatoria de Cortes Constituyentes y la abdicación del rey en su heredero, hubiera evitado la caída del régimen monárquico, ejercicio intelectual legítimo pero poco ajustado a la realidad en este caso.

Al margen de que, en estas páginas, tampoco haya lugar para explicaciones ancladas en un desnortado determinismo histórico que, de una forma muy sesgada, ha contemplado la llegada de la República y el estallido de la guerra civil como los últimos jalones de una tragedia nacional inevitable, parece difícil negar el valor simbólico de la República como referente del anhelo social de democracia y modernización y del rechazo de amplios sectores de la sociedad española a la “vieja política”.

Anhelo social vinculado a la eclosión de las nuevas clases medias y a la reactivada clase obrera -bajo unas cláusulas no escritas pero no por ello menos estrictas- y refrendado por el Pacto de San Sebastián -firmado en agosto de 1930 por una amalgama de fuerzas republicanas y nacionalistas catalanes y gallegos, con los socialistas en un papel de observadores- y su accidentado “impulso revolucionario”, traducido en primera instancia en la formación del denominado comité revolucionario, germen del futuro gobierno provisional de la república.

En cualquier caso, devino una República que trataría de asentarse sobre los principios fundamentales de la democracia parlamentaria liberal, la supremacía del poder civil, la separación efectiva de la Iglesia y del Estado y la reforma social que aliviase las cada vez más profundas contradicciones generadas por una sociedad enfrentada a procesos de modernización complejos. Una República que era, en el ámbito de las ideas, el fruto de una determinada concepción de la política (y de la realidad por extensión) guiada por la razón para implantar en el país la democracia, el estado de derecho en toda su plenitud, un sistema educativo laico compatible con la noción de ciudadanía y un modelo de justicia social inexistente hasta entonces.

Ideas, principios, conceptos que, hundiendo sus raíces en la versión radical del liberalismo ilustrado que alumbró la Revolución Francesa -cuyos ejes serían la firme creencia en la racionalidad humana, la armonía social espontánea y la creación de un

orden político verdaderamente representativo de la voluntad popular-, encontrarían serios obstáculos al emerger de la pura abstracción y colisionar contra la estructura socioeconómica del país y la fuerte resistencia hallada en los sectores más conservadores de la sociedad española, agravados por la aplicación en un periodo tan breve de un ciclo intensivo de reformas.<sup>309</sup> Esta reacción hostil fue menoscabada por los políticos republicanos –Azaña es sólo un ejemplo- aun en sus extremos y momentos más evidentes, deslumbrados probablemente por la “facilidad misma con que se instauró la República”.<sup>310</sup>

En esas coordenadas, republicanos *nuevos* e *históricos* coincidieron junto a algunos ministros socialistas en un gobierno provisional heterogéneo que, refrendado en primera instancia por las Cortes Constituyentes, se condujo por el intrincado debate constitucional que culminó en diciembre de 1931, cuando ya era presidido por Azaña desde mediados de octubre de ese año. Los diferentes partidos republicanos y los socialistas, imbuidos en cierta manera por la mística del republicanismo que maduró en la Restauración, iniciarían su particular revolución a golpe de leyes y decretos para transformar de raíz el país y adaptarlo al modelo de sociedad política republicana elegido, que se constituiría, como es sabido, a través de un nuevo orden constitucional, la reorganización territorial del estado, la separación del estado y de la sociedad civil de la influencia política de la iglesia, las reformas agraria, educativa y militar, la mejora de las condiciones laborales y el equilibrio de la justicia social. Revolución que obedecía a un espíritu revolucionario concebido por Manuel Azaña, el auténtico referente político y moral de Pérez Carballo en el terreno de los asuntos públicos, como la más alta forma del civismo y que, consecuentemente, era expresión democrática de obra de gobierno, de cambio y reforma social, al margen de determinadas concepciones utópicas que emanaban de fuerzas políticas irremediabilmente “accidentalistas”.<sup>311</sup>

La universidad española se estaba preparando para aprovechar, en el momento en que Pérez Carballo comenzaba su etapa de dirigente del movimiento estudiantil liderado por la FUE, este impulso transformador derivado de la misma idea republicana, expresado también en el despliegue de nuevas estrategias por parte de los estudiantes fueístas, decididos ahora a disociar (o a conciliar sin confundir) su identidad académica y profesional de su compromiso ideológico, inducido en cierto modo por la intromisión de las organizaciones juveniles de los partidos políticos en la vida estudiantil, hecho indisociable del escenario inestable donde se asentaría la arquitectura política de la Segunda República. El disciplinado estudiante fueista aprendió a deslindar su papel

---

<sup>309</sup> Resistencia derivada también de la carencia de una sólida conciencia republicana asentada en una base social que trascendiese la esfera de los partidos netamente republicanos, pues, como afirma Julián Casanova, “la República no fue la conquista de un movimiento republicano con raíces sociales profundas, sino el resultado de una movilización popular contra la monarquía, que recogió sus frutos en el momento en que a la Monarquía le fallaron todos sus apoyos sociales e institucionales”, véase J. Casanova, *República y guerra civil*, en J. Fontana y R. Villares (dir), *Historia de España* (Vol 8), Madrid,, Crítica/Marcial Pons, 2007, p.31.

<sup>310</sup> S. Juliá, *Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940)*, op. cit, p.329.

<sup>311</sup> “Acción republicana ante la Revolución y ante las Cortes. Discurso en el banquete ofrecido por el partido a sus candidatos a diputados, el 17 de julio de 1931”, en S. Juliá (ed) *Manuel Azaña, Obras completas. Abril 1931-septiembre 1932* (Vol 3), Madrid, Taurus /C.E.P.C, 2007, p.36.

ciudadano de su rol escolar y a plantear reivindicaciones al margen de sus intereses como universitario.

Pero frente al modelo de estudiante que estamos describiendo, empeñado en no confundir ambos roles (el político y el profesional) en el ámbito interno de la universidad, y reacio, al menos en un principio, a hacer alarde de su condición universitaria *extramuros* del espacio e intereses académicos, se erigió el “contra-modelo” del estudiante conservador o confesional que trataba de resucitar la identidad de casta, de élite estudiantil, sin prescindir de elementos simbólicos (insignias, trajes, ritos...). Desde esta perspectiva, se observa más nítidamente el contraste entre las estrategias de los estudiantes de izquierda, dirigidas a proyectar la universidad hacia afuera al abrir sus puertas a ideologías y a las formaciones juveniles de los partidos, y de los estudiantes confesionales, empeñados en recuperar una universidad elitista y corporativa, “muy al estilo renacentista de estos últimos”.<sup>312</sup>

La movilización estudiantil en el periodo comprendido entre 1929 y 1936 se caracterizó por la desaparición de la variante tumultuaria de los conflictos, el predominio de un tipo de protesta basado en la convocatoria de huelgas, las asambleas y la distribución de propaganda más o menos elaborada entre los universitarios. Estos conflictos no brotaban o finalizaban espontáneamente -tiempo atrás se subordinaban a fechas señaladas en el calendario escolar o a la rigidez sancionadora de las autoridades académicas-, sino que la protesta estudiantil “se hizo “política” e incluso “revolucionaria”, y se intentó coordinar a nivel nacional a través de concienzudos estudios y debates por parte de la vanguardia más activista de los grupos escolares”.<sup>313</sup> Las causas de estas nuevas formas de rebelión estudiantil se vincularon a los problemas políticos que se le plantearon a los diferentes gobiernos republicanos -la legislación secularizadora, la desigualdad económica y social, el estatuto catalán o las activas maniobras antirrepublicanas emprendidas también desde la propia universidad- o con temas estrictamente universitarios, como la “representación escolar, las reformas en los planes de estudio, la autonomía universitaria o la gestión de los centros”.<sup>314</sup>

Como veremos, en el caso concreto de la UFEH –integrada, recordemos, por las distintas FUE(s) de distrito universitario, que aglutinaban, a su vez, a las asociaciones profesionales de estudiantes de cada facultad- la proclamación de la República se tradujo inmediatamente en la institucionalización de su recién adquirido -y, desde un principio, muy cuestionado por parte de las organizaciones estudiantiles católicas- monopolio de la representación estudiantil. Desde su particular atalaya, los líderes estudiantiles de esta organización, en su mayoría republicanos de izquierda y socialistas, trataron de ceñirse a las reivindicaciones de tipo profesional, alejándose en lo posible, por razones de pura estrategia política en realidad –dada la estrecha relación mantenida entre la cúpula de la FUE y los gobiernos republicanos del gobierno azañista, por ejemplo-, de la tentación de trasladar a la esfera de la universidad la conflictiva atmósfera social que se vivía entonces en el país.

---

<sup>312</sup> I. Varela, *La universidad de Santiago 1900-1936. Reforma universitaria y conflicto estudiantil*, Sada (A Coruña), Ed do Castro, 1989, p. 352.

<sup>313</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas...*, op.cit, p.140.

<sup>314</sup> Ibid.

El proceso de oficialización de la FUE cristalizó en términos legales en las órdenes ministeriales emitidas el 3 de junio y el 28 de septiembre de 1931, que permitieron a los estudiantes obtener una representación, también con voz y voto, en Juntas de Facultad y Claustros Generales (un alumno por curso en Derecho, Medicina y Farmacia, y dos por sección en Ciencias y Filosofía) y Juntas de Gobierno (un alumno por facultad), estableciéndose en la segunda que la representación con voz y voto de los profesores auxiliares fuese de tres por cada facultad en los Claustros Generales y uno por cada centro en las juntas de Gobierno.<sup>315</sup> Ambas medidas obedecían al reconocimiento implícito del papel de la FUE en la erosión y desmembramiento de la dictadura de Primo de Rivera y contrastarían, paradójicamente, con la progresiva deslegitimación de la acción sindical de esta organización estudiantil que comenzaría en breve, mediado el bienio azañista, tras un primer curso republicano esplendoroso donde se recogerían los frutos de años de lucha y reivindicación estudiantil. En este caso, el proceso de oficialización de la FUE como nexo entre los estudiantes y las autoridades educativas y académicas republicanas, tuvo un efecto contrario al pretendido tanto por esta misma organización como por los gobiernos republicanos que la permitieron o alentaron.

En el contexto en que la FUE vivía su particular momento de esplendor y era objeto de un importante reconocimiento social encauzado desde el gobierno y las instituciones republicanas, conscientes del papel que jugaron los estudiantes contra la dictadura de Primo de Rivera, Francisco Pérez Carballo fue elegido presidente de la A.P.E.D de Madrid y, consecuentemente, pasó a formar parte de la Junta de gobierno y de la Cámara Federal de la FUE del distrito universitario madrileño, integrada por los presidentes de cada asociación profesional de estudiantes. Así, en la junta general de la A.P.E.D, celebrada en la tarde del 5 de noviembre de 1931 para designar la nueva directiva de esta asociación, y después de que la junta directiva anterior hubiese presentado la dimisión al cumplirse su mandato de un año -los órganos directivos de la UFEH, FUE y las distintas asociaciones profesionales se renovaban anualmente para evitar la retención de los mismos por parte de grupos o personas determinadas-, la candidatura encabezada por Pérez Carballo obtuvo la mayoría de los votos de sus compañeros. La lista electa se componía de los siguientes nombres: Francisco Pérez Carballo (presidente); Juan Mayoral (vicepresidente); Alfonso Sánchez Maspou (secretario); Rey Cobeña (vicesecretario); Botijo (tesorero); Mora (bibliotecario); J.L. Álvarez (presidente del Ateneo Jurídico); De la Torre (deportes); Pérez Carballo (representante de la APED en la Junta de gobierno de la FUE); Mayoral, Álvarez y Pérez Carballo (voces de esta organización en la Cámara Federal).<sup>316</sup>

En la misma sesión, Francisco Pérez Carballo fue designado miembro de la delegación de la APED que asistiría días después al Congreso extraordinario para la reforma de la enseñanza, junto a Luis Rupilanchas, Alfredo Rodríguez, González Quijano y Santeiro, cumpliendo así un acuerdo alcanzado en la junta general anterior, al tiempo que se aprobaba en asamblea una resolución de la junta directiva saliente para el

---

<sup>315</sup> I. Varela, *La universidad de Santiago 1900-1936. Reforma universitaria y conflicto estudiantil*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1989, p. 252; M. Pérez Galán, *La enseñanza en la Segunda República Española*, Madrid, Ed. Cuadernos para el diálogo, 1977, p.136-137.

<sup>316</sup> *El Sol*. 6 de noviembre de 1931.

nombramiento de representantes de la APED en el Claustro universitario, en la Junta de Facultad, en la Junta de gobierno de la Universidad Central y en el Patronato de la Fundación García-Eguren. De esta manera, la FUE estaba copando la representación estudiantil en los distintos órganos de gobierno de la universidad, convirtiéndose en uno más de los eslabones de la política universitaria republicana a partir de los decretos gubernamentales aprobados en junio y septiembre –comentados anteriormente–, que virtualmente le conferían un estatus oficial de poder a partir de una interpretación excesivamente optimista de la capacidad fueista para canalizar sin excesivos traumas las distintas expectativas profesionales y posiciones ideológicas que cohabitaban en el colectivo estudiantil. Conciliación difícil, que ya desde el mismo inicio de su actuación como representante estudiantil tuvo que afrontar Pérez Carballo, presidente de la APED y vocal de la Junta de gobierno y de la Cámara Federal de la FUE de Madrid. En este sentido, el mismo día de su nombramiento, 5 de noviembre, la Junta de gobierno de la FUE salía al paso de las reclamaciones de algunos grupos de estudiantes recién ingresados en la facultad de Derecho de la Universidad Central, que propugnaban la supresión del curso preparatorio y la reforma de los planes de estudio de esta facultad,<sup>317</sup> y entregaba a la prensa una nota puntualizando algunas cuestiones al respecto:

El ministro de Instrucción Pública estableció los planes actuales de acuerdo a las propuestas de las respectivas facultades y previo informe del Consejo de Instrucción Pública, y aun así con carácter provisional, a reserva de lo que el Parlamento legisle. Es lógico, por tanto, que toda reclamación relacionada con los mismos sea llevada de modo desapasionado a las Juntas de Facultad por la representación escolar (...) En las Asociaciones profesionales de cada Facultad o Escuela es donde se tienen en cuenta Intereses menos personales por hallarse representados todos los cursos. La U.F.E.H tiene convocado en el presente mes un Congreso para la reforma de la enseñanza. Es allí donde se ha de concretar el sentir de los universitarios; entretanto, si algunos estudiantes se sienten lastimados en sus derechos, tienen camino para hacer valer sus aspiraciones, caso de ser justas, mediante su representación profesional en Juntas de facultad y Claustros. La Junta de gobierno de la FUE de Madrid, en nombre de los escolares que representa, se opone, pues, a esta actitud, y esperan de ellos comprendan lo injustificado de ella.<sup>318</sup>

De esta nota, bastante significativa por otra parte, se infiere tanto la buena relación existente en aquel momento, principios de noviembre de 1931, entre el Ministerio de Instrucción Pública y la FUE como, paralelamente, la decidida apuesta de esta organización para encauzar, desde su posición de virtual monopolio de la representación estudiantil, todas las aspiraciones y reivindicaciones de los estudiantes a través de la presencia cualificada de las Asociaciones Profesionales en los órganos de gobierno de la universidad. Del mismo modo, parece evidente que la inminente celebración del Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza, con el apoyo que la complicidad gubernamental le había proporcionado, aparecía a ojos de los estudiantes

---

<sup>317</sup> Una nota de prensa del Ministerio de Instrucción Pública salía al paso de la supuesta malinterpretación que originó la reacción de estos grupos de estudiantes, asegurando que “por las disposiciones últimas se ha otorgado a los estudiantes libertad para no cursar este año los estudios de preparatorio, dejando en suspenso esos estudios, y, por tanto, los complementarios de los viejos planes, hasta que las Cortes Constituyentes discutan y aprueben la ley de Instrucción pública, actualmente pendiente del dictamen del Consejo”, reproducida por *La Libertad* de 6 de noviembre de 1931.

<sup>318</sup> *Crisol*. 6 de noviembre de 1931.

de la FUE como el punto de inflexión para la auténtica reforma de la educación y la universidad españolas.

Por otra parte, la Junta de gobierno de la FUE de Madrid que firmaba esta nota estaba compuesta por estudiantes universitarios pertenecientes a la nueva generación que se aprestaba a remplazar a la de los que habían dirigido esta organización estudiantil durante la dictadura de Primo de Rivera (los Sbert, López Rey, González López, Arturo Soria Espinosa, Antolín Alonso Casares, Prudencio Sayagués, Carmen Caamaño, L. Rofilanchas...) que, concluidos sus estudios, buscaban su lugar en el engranaje político-v administrativo articulado por el gobierno republicano. Eso no significaba que algunos de ellos abandonasen necesariamente las respectivas juntas de gobierno de la FUE(s) o de la propia UFEH, pues estaban invitados a permanecer en ellas, tanto en calidad de asesores o consejeros –se les denomina “miembros de honor”–, de acuerdo a lo establecido por el reglamento de estas organizaciones,<sup>319</sup> como en funciones directivas, caso, por ejemplo, de Prudencio Sayagués o del abogado socialista Luis Rofilanchas, amigo personal de Francisco Pérez Carballo. Entre los miembros de la nueva Junta de gobierno de la FUE de Madrid, figuraban Mariano Bascones (Farmacia) –presidente–; Luis Lomo (Medicina); Francisco Pérez Carballo (Derecho); Bravo (Ciencias); Arturo S. Calzada (Arquitectura) –vinculado muy estrechamente a la Residencia de Estudiantes, actor de la compañía La Barraca y presidente de la UFEH desde la clausura del Congreso de la UFEH en noviembre de este año–; J. Orbaneja (Industriales); Eusebio. G Sicilia (Agrónomos); J. Díaz Ruano (Superior Magisterio); Manuel Hernández (Normal Magisterio); Juan Balás (Bellas Artes); José J. Cisneros (Veterinaria); Miguel Nistal (Comercio); Jesús F. Cortés (Odontología) y, como secretario, José García y García (Filosofía y Letras).<sup>320</sup>

El tan ansiado Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza, que aunque contemplaría el sistema educativo en todos sus niveles, se centraría en el problema universitario, se inauguró el domingo 8 de noviembre de 1931 en el Paraninfo de la Universidad Central, tras sufrir un retraso debido a algunos problemas de organización, pues en principio se había fijado el mes de octubre para su celebración. De hecho, cuando su fecha de finalización se fijó para el 19 de noviembre, el Congreso, ya transformado en ordinario, continuó prácticamente hasta principios de diciembre de ese mismo año. Al solemne acto de inauguración, celebrado en un auditorio repleto de profesores y estudiantes (representantes de organizaciones escolares, entidades culturales y colegios y asociaciones profesionales adheridos al Congreso) asistieron Miguel de Unamuno y José Giral, ministro entonces de Marina, acompañando a las autoridades académicas encabezadas por el rector interino, León Cardenal, y por

---

<sup>319</sup> Emilio González López cita el reglamento de la FUE de forma genérica, sin revelar más datos al respecto, para justificar la presencia en los órganos directivos de esta organización de estudiantes ya licenciados o doctorados y de antiguos dirigentes. De hecho, González López era catedrático interino de Derecho Penal de la Universidad Central cuando fue designado –seguía perteneciendo a la Junta de gobierno de la FUE de Madrid, como ex secretario general- miembro de la *Junta central del movimiento escolar* que coordinó la segunda huelga general estudiantil contra la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930. Y no es el único ejemplo de permanencia en activo dentro de los órganos directivos de la FUE o de la UFEH de ex dirigentes, considerados como “miembros de honor “. Véase, E. González López, *Memorias de un estudiante liberal*, op. cit, p.219 en adelante.

<sup>320</sup> *La Voz*, 6 de noviembre de 1931.

profesores como Luis de Zulueta (nombrado ministro de Estado al mes siguiente), C. Sánchez Albornoz, L. Jiménez de Asúa o Luis Recasens, entre muchos otros. Antonio María Sbert ejercería las funciones de presidente del Congreso (lo era a la sazón de la UFEH), mientras que Carmen Caamaño y Prudencio Sayagués se encargarían de la secretaría general y adjunta, respectivamente, para dar cauce a un acontecimiento que había levantado grandes expectativas dentro y fuera del mundo académico y universitario, si nos atenemos al encendido debate sostenido en las páginas de la prensa madrileña desde semanas antes del inicio del Congreso que iba a significar la consagración oficial de la UFEH y, por lo tanto, de la FUE.<sup>321</sup> Expectativas que, en el ámbito de actuación de esta organización estudiantil, ya se habían reflejado en el discurso pronunciado por José García García, presidente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Filosofía y Letras, en representación de la FUE de Madrid, durante el acto de inauguración del curso 1931-32 en la Universidad Central, a poco más de un mes de iniciarse el Congreso Extraordinario de la Enseñanza. En sí, de las palabras de este dirigente de la FUE se deducían tanto la percepción de los dirigentes de esta organización de la capacidad de influencia de su propio proyecto sobre las decisiones gubernamentales como el anhelo sincero de una verdadera transformación de la universidad y la enseñanza españolas. Es más, José García llegaba a advertir al gobierno que no bastaba con una reforma de planes al uso. Todo lo contrario, en los planes de la FUE sólo se contemplaba “un auténtico plan de planes” dirigido en su impulso transformador “a la médula misma de la enseñanza”, y, en consecuencia, nunca se aceptaría la reanudación de la política universitaria esgrimida por los gobiernos de la monarquía contra el movimiento estudiantil. En otras palabras, si el gobierno republicano respondía con indiferencia o, directamente, defraudaba las esperanzas depositadas en él por los estudiantes, tendrían a éstos de inmediato en su contra, o al menos eso era lo que se esperaba en teoría.<sup>322</sup>

En este clima de efervescencia que envolvía tanto a los estudiantes y autoridades educativas republicanas como a la prensa afín, que resaltaría el hecho de que el número de congresistas inscritos ascendiera a la cifra mágica de 500,<sup>323</sup> arrancarían un Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza que distribuiría sus labores entre las doce comisiones establecidas, cuyas funciones respectivas eran reseñadas de forma sintética por el diario *El Sol*:

Sección primera.-Reforma de la enseñanza.

Comisión primera: Estudios de enseñanza primaria y secundaria.

Comisión segunda: Estudios de enseñanza universitaria (cinco subcomisiones).

Comisión tercera: Estudios de enseñanza técnica (tantas Subcomisiones como la Comisión acuerde).

Comisión cuarta: Estudios mercantiles.

Comisión quinta: Estudios de veterinaria.

Comisión sexta: Estudios de bellas artes.

Sección segunda. –Régimen universitario.

<sup>321</sup> M.F. Mancebo, “Una élite estudiantil: los primeros Congresos de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U.F.E.H)”, op. cit, p. 374.

<sup>322</sup> *Disertación sobre el tema del momento universitario, leída por el alumno José García y García, presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras (FUE) con motivo de la apertura del curso académico de 1931 a 1932*, Madrid, Universidad de Madrid, p. 17-18.

<sup>323</sup> *El Liberal*. 10 de noviembre de 1931.



Comisión séptima: Intercambios y estudios postescolares.

Comisión octava: Organización y gobierno de las universidades.

Comisión novena: Acción social universitaria.

Sección tercera. –Función social de la universidad.

Comisión décima: La universidad y la cultura.

Comisión undécima: La universidad y la investigación.

Comisión duodécima: La universidad y la formación profesional.<sup>324</sup>

Una mirada preliminar a los temas a tratar por el Congreso nos permitiría deducir, además de la orientación de las líneas maestras de una reforma que ya había sido esbozada en el Congreso de la UFEH de 1930, el peso simbólico de uno de los grandes objetivos de la FUE desde su fundación, acentuado si cabe durante el periodo republicano: la reforma profunda de la universidad (y del sistema educativo y de enseñanza en general). Una reforma enfocada a la apertura de la institución universitaria a la sociedad, en un proceso de continua interacción entre una y otra, que modernizase su estructura académica y docente mediante la atribución de una importante *función social* (temática de la Sección tercera), provista de un contenido real adaptado al sueño liberal de una República de la cultura y de la ciencia y, en definitiva, a los nuevos tiempos. Cuestión íntima y tradicionalmente relacionada con el conflictivo intento de eliminación del obsoleto “feudo de señoritos” que los estudiantes republicanos veían perpetuarse en la universidad, adolecida de su carácter de casta y elitista en el sentido del control y la utilización de sus recursos para proteger el estatus socioeconómico de privilegio en favor de una clase dominante y enfrentados a la modernidad, léase la clásica referencia de los estudiantes republicanos a los estudiantes confesionales, tradicionalistas o conservadores, pronto reforzados o absorbidos por la corriente falangista emergente.

El Palacio de Comunicaciones, el Senado o el Schollarum, junto a otras sedes situadas en diversos centros docentes, fueron los escenarios escogidos para los intensos debates que se sucedieron durante el transcurso de un Congreso en el que se había inscrito, como miembros colaboradores para participar en los debates, algunos de los más brillantes exponentes de la inteligencia republicana –aunque, como veremos, Pérez Carballo, matizaría en especial el valor del compromiso de los profesores universitarios con la reforma en cuestión-, como eran (además de los ya citados C. Sánchez Albornoz, Luis de Zulueta, Recaséns y Jiménez de Asúa) los Castillejo, Ramón Carande, Ortega, Marañón, Blas Cabrera, Lorenzo Luzuriaga, Demófilo de Buen, B. Giner de los Ríos, Pío del Río Horta o Enrique Ramos, entre otros.<sup>325</sup>

La prensa de aquellos días recogía casi diariamente el desarrollo de sesiones intensivas desarrolladas a lo largo de un Congreso que incluso recibió, la tarde del sábado 14 de noviembre, el saludo del gobierno y las Cortes de la República, trasladado al Palacio del Senado por los ministros de Instrucción Pública, Justicia y Marina y por una comisión de diez diputados encabezada por Salvador de Madariaga. Tanto éste último como el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, pronunciaron sus discursos entre ovaciones, como reseñarían los diarios del día siguiente. En concreto, el titular de la noticia del acto aparecida en *El Liberal* bastaría por sí sólo para expresar a

<sup>324</sup> *El Sol*. 1 de noviembre de 1931.

<sup>325</sup> *Crisol*. 10 de noviembre de 1931.

partes iguales, más allá de los imperativos de la narrativa periodística, tanto la solemnidad del reconocimiento oficial del Congreso y, en consecuencia, de la FUE, por parte de las instituciones republicanas, como la euforia justificada de los estudiantes ante la lectura de un texto que reflejaba a la perfección su particular (y efímero) momento de gloria: *Las Cortes y el Gobierno rinden homenaje a la clase estudiantil*.<sup>326</sup>

Las sesiones de la sección tercera y última del Congreso, celebradas el lunes 16 de noviembre, revelan un especial interés para el objeto que nos ocupa en este trabajo, fundamentalmente porque en algunas de ellas participó Francisco Pérez Carballo y, aunque no se pueda identificar la comisión concreta, si parece significativo el que su intervención se produjese en las reuniones de la sección dedicada a la *Función social de la universidad*, estructurada en tres comisiones, recordemos: la décima (*La universidad y la cultura*), undécima (*La universidad y la investigación*) y duodécima (*La universidad y la formación profesional*).

En concreto, el dato que permite deducir la presencia de Pérez Carballo como interviniente en los debates o conferencias de esta sección lo proporcionaba *Crisol*, diario que, en coherencia con la impresionante nómina de colaboradores con que contaba (Ortega, su inspirador, Azorín, Luis Bello, A. Castro, Madariaga, Pérez de Ayala, Gónez de la Serna, Fernando de los Ríos, Espla...) –no en vano era el portavoz de la Agrupación para el Servicio de la República–, prestaba habitualmente una atención preferente al mundo de la cultura y de la universidad, en este caso traducida en una amplia cobertura del Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza.

*Crisol* complementaba sus informaciones sobre el Congreso con caricaturas de los rostros de los intervinientes en las sesiones y, de ese modo, el día 17 publicó las de los oradores del día anterior, sin especificar más datos que su afiliación sindical o profesional, apareciendo los “retratos” de Waldo Merino (Jefe de la delegación de la FUE de Valladolid), Jorge Maragall (delegado de la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras de Barcelona), Martínez Iborra (presidente de la FUE de Valencia) y Francisco Pérez Carballo (presidente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho de Madrid). Pocos días más tarde, el abogado madrileño y Luis Rupilanchas dejarían de pertenecer a la delegación de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho de Madrid en el Congreso al convertirse éste en ordinario, mientras que Santeiro, Quijano y Rodríguez continuaron en él como delegados de la APED hasta el final del mismo.<sup>327</sup>

El pleno de la citada sección tercera, en el que intervendría Francisco Pérez Carballo, se constituyó a las cuatro de esa misma tarde –por la mañana se habían celebrado las sesiones deliberativas de cada comisión– para hacer públicas, tras un encendido y prolongado debate, los resultados alcanzados durante la jornada. Literalmente:

*Conclusiones de la sección tercera. La universidad y la cultura.*–“La universidad debe ser el órgano central de la cultura de un país, y para ello organizará cursos superiores, dados por especialistas, catedráticos y auxiliares. Estos serán para universitarios de cualquier clase y no universitarios a partir de los diecisiete años.

La universidad debe extender todos sus conocimientos y todas sus actividades fuera de ella, principalmente todo aquello que está unido a la cultura española por una tradición.

<sup>326</sup> *El Liberal*. 15 de noviembre de 1931.

<sup>327</sup> *Heraldo de Madrid*. 23 de noviembre de 1931.

a/ Se crearon academias, escuelas, Comisiones de Arqueología, Historia, Geografía, Ciencias Naturales en Atenas, Roma, Lisboa, París y diversos puntos de Iberoamérica.

b/ Creación de institutos de segunda enseñanza en ciudades donde exista una gran colonia española.

c/ Creación en España de altos centros de investigación.

“La universidad es el total, la cultura, la técnica, la investigación y la profesión. La universidad estará constituida por las Facultades y por los demás centros y escuelas técnicas y profesionales, en cuanto participen de la parte teórica de las Facultades, sin la cual no tendrían razón de existencia. La universidad ha de cumplir la misión de formar a todos los profesionales y especialistas de manera que sea nuclear en esta formación la cultura, en su más amplio sentido de interpretación de los fenómenos de la vida, según el repertorio de ideas de nuestro tiempo.

La misión educadora de la universidad no cabe en el estudiante, debe difundirse al pueblo, y es preciso que el mismo estudiante sea quien comprenda esta necesidad y propague la cultura que de ella recibió”.

*La universidad y la investigación.* Acerca de este tema se aprobó lo siguiente:

“La universidad debe tener como misión primordial todos los órdenes del saber humano constituyendo la tribuna del pensamiento constantemente renovado. La universidad perseguirá el desarrollo de la cultura integral, fomentando la investigación desinteresada por medio de Seminarios e Institutos. De la Politécnica y de las Facultades se podrá pasar a los Institutos y centros superiores de investigación.”

*La universidad y la formación profesional* –Sobre la universidad y la formación profesional se aprobó lo siguiente:

“Entre los fines de la Universidad figurará la enseñanza profesional. Los estudios universitarios serán: Estudios preparatorios, licenciatura, doctorado y estudios postescolares. Los estudios dependerán totalmente del carácter especial que tenga la enseñanza en cada Facultad.

Habrà:

1.º Absoluta separación de grados de licenciatura y doctorado.

2.º Para cursar el doctorado se requerirá, previamente, la licenciatura.

3.º. Cada Facultad o Escuela, dentro del margen de autonomía que le marque el Estado, podrá establecer un mínimo de escolaridad.

Doctorado: El estudio del doctorado será íntegramente universitario. El doctorado se vinculará a la especialización posterior a la licenciatura.

Estudios postescolares: Todas las facultades deberán organizar estudios postescolares, con la finalidad de formar pedagogos y especialistas; tendrá carácter experimental y de investigación. La universidad debe de dar al profesional un complejo educativo armónico y equilibrado, constituido por los siguientes factores:

a/ Formación científica y técnica.

b/ Formación cultural.

c/ Formación moral.

El Estado establecerá cuáles y cómo serán las enseñanzas profesionales. El Estado comprobará con no docentes la aptitud de los futuros profesionales. Controlará las profesiones liberales, seleccionando y aceptando solamente a los capaces.

Creación de escuelas de ciencias económicas, donde por su situación geográfica o por la importancia comercial de la región sean necesarias. Estas escuelas otorgarán los títulos de licenciado o de doctor y comprenderán una sección de especialidad actuarial. El ingreso en las mismas seguirá idénticas normas a las determinadas a las otras Escuelas facultativas universitarias.”<sup>328</sup>

El concepto de universidad como órgano central de la cultura (“tribuna del pensamiento constantemente renovado”), eje de la formación profesional y depositaria de una misión educativa que tenía también como objeto al pueblo –la educación y la universidad popular constituyeron una de las obsesiones de la FUE– entroncaba aquí con la necesidad de modernizar los estudios universitarios potenciando la investigación y dignificando los estudios de doctorado, claves de modernización de una universidad

<sup>328</sup> *Crisol*. 17 de noviembre de 1931.

que, una vez inserta en el tejido social del país, avanzaría en paralelo a la República de la cultura anhelada.

Tanto del texto de las conclusiones acordadas por el pleno de la sección tercera de este Congreso Extraordinario, como también de los acuerdos alcanzados en las demás comisiones y secciones del mismo –implementación del teatro universitario (La Barraca), de una universidad popular, de escuelas universitarias de Ciencias Económicas o de un bachillerato de siete años de carácter humanista-<sup>329</sup> se deduce en especial la importancia que revestía para los estudiantes de la FUE el problema de la centralidad del Estado en el proceso de vertebración del sistema educativo español, en sintonía con una perspectiva socialdemócrata de igualdad de oportunidades. En este sentido, el preámbulo del documento editado por la FUE con las conclusiones del Congreso Extraordinario sobre la reforma de la enseñanza no dejaba lugar a dudas:

El Congreso estima que el servicio de la cultura es deber inexcusable del estado, que su sostenimiento directo ha de ser obligatorio para todos los ciudadanos, y que su disfrute no podrá estar condicionado ni favorecido para ningún español sino por su capacidad intelectual.<sup>330</sup>

Es evidente que el papel directriz del Estado, en cuyo aparato educativo estaba ahora integrada la FUE, garantizaba, a ojos de los estudiantes republicanos –que también eran deudores, a su modo, de la orteguiana *Misión de la universidad*- la demolición de la idea de la *Academia* como propiedad de una élite social diferente a la del mérito intelectual. Una noción de Estado, por otra parte, vinculada en el lenguaje fueista tanto al protagonismo de la ciudadanía que la nucleaba, para cuya educación política y cívica había reservado el gobierno republicano la mayor de sus energías, como al modelo de “estado inteligente” que en los años treinta se había impuesto en numerosos países, incluidos Estados Unidos y la URSS de Stalin.

Entre las conclusiones, se especificaba con claridad las normas a las que se debía ajustar la organización social de la enseñanza, enfocadas hacia el proceso de democratización de la cultura y la educación iniciado en España con el advenimiento de la segunda República, y condensadas en un lenguaje a veces demasiado drástico, como se puede observar en los términos empleados en la cláusula segunda:

- I-Gratuidad absoluta de todos los grados.
- II- Eliminación de cuantos no posean dotes para proseguir los grados secundario o superior.
- III-Establecimiento de residencias gratuitas, subsidios en metálico y trabajos compatibles con las labores universitarias, para los estudiantes necesitados.<sup>331</sup>

La nueva afirmación de la élite de los capaces recogida en el párrafo anterior se intentaría encajar, como hemos visto antes, en un modelo de universidad concebido como antítesis del conocido hasta ese momento:

- 49/ La universidad debe tender a la formación completa del estudiante, proporcionándole un complejo educativo armónico y equilibrado, constituido por los siguientes factores:
  - a/ Formación científica y técnica.
  - b/ Formación cultural.
  - c/ Formación social.

<sup>329</sup> *El Sol*. 24 de noviembre de 1931.

<sup>330</sup> *Conclusiones del Congreso Extraordinario para la Reforma de la Enseñanza. Unión Federal de Estudiantes Hispanos*, Madrid, Imp. Murillo, 1932.

<sup>331</sup> *Ibid.*

50/ Cumplirá la función de formar a todos los profesionales especialistas de manera que sea nuclear en esta formación la cultura,, en su más amplio sentido de interpretación de los fenómenos de la vida (...)

51/ La función social completará las anteriores humanizándolas. A la edad en que el universitario comienza sus estudios, inicia también su función social. Esta tiene un doble aspecto. 1º Defensa del profesional para con la sociedad, o formación social profesional. En este punto, es interesantísimo conseguir una perfecta formación moral del estudiante y hacerle salir del error de que la carrera tiene como fin único crearse una posición, y que comprenda que la carrera le liga a una acción social profesional. 2º Formación esencialmente social. La universidad debe preocuparse de formar socialmente al estudiante, lo que puede conseguirse con una exposición, mediante las conferencias doctrinales, de las diferentes teorías sociales, a cargo de Catedráticos o personalidades de reconocida orientación social, de modo que los alumnos conozcan todas las doctrinas sociales desde el punto de vista objetivo e imparcial que a la universidad corresponde, excluyéndose de modo terminante las luchas y actuaciones de carácter político dentro de la misma.<sup>332</sup>

La omnipresente función social de la universidad alcanzaba, lógicamente, al estudiante, su protagonista principal, que ya no se representaba como antaño aislado dentro de una esfera universitaria independiente, desconectada de la evolución de la sociedad, sino que se preparaba para insertarse en ésta y enfrentarse a sus problemas específicos, sin que ello significase que la UFEH/ FUE abriese la puerta de la universidad a la lucha de partidos, sindicatos e ideologías. En realidad, no se invitaba al estudiante de la FUE, al menos el vinculado a la línea oficialista de esta organización, a adentrarse en la reivindicación de cuestiones políticas (reforma agraria, estatuto catalán...) o estrictamente sociales -aunque muchos de ellos, incluido Pérez Carballo, alternaban su actividad académica y profesional con la militancia y la responsabilidad pública-, como si harían los que auspiciarían la irrupción de los partidos políticos en las aulas o las asociaciones estudiantiles confesionales y falangistas. Todo lo contrario, el discurso oficial de la FUE, en consonancia con la relación de complicidad que mantenía con las autoridades republicanas, abogaba claramente por la teoría del profesionalismo, que llevaba implícito un compromiso social y político no invasivo de los códigos asépticos buscados para el ámbito estricto de la universidad.

En referencia a lo tratado en el Congreso sobre los estudios de Derecho, la subcomisión específica de esta disciplina, incluida dentro de la sección primera, llegaba a las siguientes conclusiones:

La subcomisión mantiene en principio el criterio de la supresión total del preparatorio, si bien condiciona la aplicación práctica de este principio a la organización que se dé a la segunda enseñanza y a la Facultad de Cultura. Deben admitirse los grados en la enseñanza universitaria del Derecho. Para obtener el grado de Doctor será preciso e indispensable estar en posesión del de Licenciado.

La Licenciatura debe orientarse en:

a/ Disciplinas del pensamiento jurídico.

b/ Orientación doctrinal y enseñanza en el manejo de la literatura jurídica.

c/ Práctica de textos legales. Los estudios de Derecho serán considerados como universitarios. La subcomisión propugna para la supresión total de los exámenes. Debe declararse voluntario el estudio del Derecho Canónico.<sup>333</sup>

Sin duda, nada quedaría tan “atado” o, dicho de otro modo, nada sería tan previsible en el texto del documento editado por la FUE con las conclusiones de este Congreso

---

<sup>332</sup> Ibid.

<sup>333</sup> Ibid.

Extraordinario para la reforma de la enseñanza como el tratamiento de la cuestión de la representatividad estudiantil, que el gobierno ya le había otorgado casi en exclusiva a esta organización. Así, en el epígrafe dedicado al *gobierno y régimen de la universidad*, se redactaba un artículo, el número noventa, que no admitía matices, más allá de la luz verde concedida en este sentido por el gobierno meses atrás, y refrendada en el transcurso del Congreso con el acto de reconocimiento ofrecido por las instituciones republicanas a los estudiantes de la FUE -mencionado con anterioridad- o de la intensificación de la campaña anti-fueista que se produciría pocos meses después y que conectaría con la ofensiva antirrepublicana dirigida al debilitamiento del gobierno azañista, prólogo de la derrota electoral de noviembre de 1933.

90/ La Universidad se relacionará con las colectividades estudiantiles exclusivamente profesionales y de la Federación en que se agrupen estas tendencias de la UFEH, a las cuales facilitará la Universidad locales en su recinto<sup>334</sup>

Las señas de identidad de esta organización, su razón de ser *profesional* y no ideológica, su estrecha relación con las autoridades republicanas, mantenida al menos hasta bien entrado el curso 1932-33, se ponía de manifiesto en artículos como éste, en donde además se reflejaba el idealismo subyacente a la táctica política adoptada por los estudiantes republicanos (¿la versión universitaria del voluntarismo republicano?), traducido en una evaluación defectuosa tanto de las posibilidades reales de una reforma universitaria mal contextualizada –y, por ende, de la capacidad o la voluntad gubernamental de cumplir compromisos o seguir ritmos regulares-, como de la resistencia que se iba a encontrar entre las asociaciones y organizaciones estudiantiles hostiles a su monopolio representativo. Sin duda, perfiles borrosos de un momento de gloria particular indisociable de la ilusión y las expectativas despertadas por el nuevo régimen republicano en amplias capas de la sociedad española.

La participación de Francisco Pérez Carballo en el Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza en noviembre de 1931 se produjo, como ya se ha señalado antes, tan sólo unos días después de que el abogado madrileño -había concluido de forma brillante su carrera en junio de ese mismo año- fuese elegido presidente de la APED de Madrid y, en paralelo, a su nombramiento como secretario del subsecretario de la Presidencia del gobierno presidido por Azaña, Enrique Ramos Ramos, compañero suyo en Acción Republicana y, por entonces, profesor auxiliar de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, en cuyo claustro de profesores ingresaría Francisco a principios del curso 1933-34 como profesor ayudante de prácticas de la misma asignatura. Además, en la dimensión más política de su experiencia vital, formaba ya parte del Consejo Nacional de las Juventudes de Acción Republicana (JAR), hecho que, como veremos más adelante, está lógicamente vinculado a su nombramiento como secretario del subsecretario de la Presidencia, clave también para ingresar en el estrecho círculo de colaboradores del presidente del gobierno y auténtico líder del partido de Acción Republicana.

A la altura de noviembre de 1931, Francisco Pérez Carballo afrontaba, sin duda, un momento importante en su carrera, tanto en el plano político como profesional o

---

<sup>334</sup> Ibid.

académico. El muchacho humilde, hijo de modestos emigrantes gallegos empezaba a despuntar como algo más que un estudiante aplicado y riguroso.

Pero vayamos por partes, puesto que si él mismo abogaba por la diferenciación y neta separación entre su compromiso político y su actividad representativa como líder estudiantil, en aras de un estricto profesionalismo, definido en sus propias palabras, su estudio biográfico seguirá esa misma línea en el sentido de analizar ambos campos por separado para extraer más tarde las oportunas conclusiones. En los dos epígrafes restantes de este tercer capítulo, profundizaremos en su pensamiento y actuación como líder estudiantil entre congresos y *meetings* estudiantiles celebrados en un clima de creciente agitación social, para abordar su papel como dirigente de las juventudes de AR y, más tarde, de IR en el próximo capítulo, que se centrará ya en la parte más política de su biografía.

### **Un discurso, un ideal, una frontera imprecisa.**

Para definir su pensamiento y contrastar su actuación como líder estudiantil, presidente de la APED de Derecho de Madrid/ FUE en puridad, con la evolución de los acontecimientos, problemas y cuestiones relevantes que afectaban al movimiento universitario en el periodo republicano, disponemos de un documento fundamental y realmente esclarecedor si se sabe contextualizar: el texto del discurso de Francisco Pérez Carballo, como representante de la FUE de Madrid, en el acto de inauguración del curso académico 1933-34, celebrado el domingo 1 de octubre de 1933 en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid.<sup>335</sup> Presidido por los vicerrectores de la Universidad Central, León Cardenal y Joaquín Garrigues, que fueron secundados por los decanos de Filosofía y Letras (García Morente), Derecho (Luis Recaséns), Farmacia (Obdulio Fernández), Ciencias (Pedro Carrasco), Medicina (José Sánchez Covisa) y el presidente del Consejo Superior de Cultura, Teófilo Hernando, el acto en sí constó de la intervención de Francisco Pérez Carballo y, a continuación, de la del doctor Eduardo García del Rosal, que dictó la conferencia titulada “Algunos médicos y cirujanos notables de los siglos XIII y XIV”, ambas acogidas con ovaciones por un público entusiasta, y tuvo un final un tanto deslucido a causa de algunos incidentes de poca importancia acontecidos al término de la alocución de García del Rosal.<sup>336</sup>

El discurso pronunciado por Francisco en este acto, titulado *Estampa de universidad*, se reveló de gran importancia, tanto por el momento político en que aconteció, sólo abordable desde una claridad expositiva y conceptual indudable, como por la distinción recibida al ser propuesto como orador en una ocasión tan solemne. El texto de su disertación constituye, sin duda, la herramienta perfecta para el discernimiento de la postura profesional y política de un estudiante que, a pesar de ostentar de forma paralela un puesto directivo en la Juventud de Acción Republicana, creía en la reivindicación profesional libre de determinismos políticos, aunque en realidad frente a aquella

---

<sup>335</sup> El texto de este discurso fue publicado en Madrid casi inmediatamente: *Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1933 a 1934*, Madrid, Imp. Colonial, 1933.

<sup>336</sup> *El Sol*, 3 de octubre de 1933; *Heraldo de Madrid*, 2 de octubre de 1933.

realidad histórica tan turbadora parecía poco menos que una utopía escapar –y era perfectamente consciente de ello- a las contradicciones planteadas por la agitación de la vida universitaria y social de la época. El análisis detallado de las partes más importantes de este documento nos servirá como eje narrativo para acercarnos al papel de Francisco Pérez Carballo como miembro o directivo del movimiento estudiantil durante el periodo en que estuvo vinculado directamente a la FUE, esto es, hasta mediados de 1934, precisamente el año en que esta organización perdería su carácter profesional debido al peso creciente adquirido en sus órganos directivos por la infiltración de estudiantes socialistas y comunistas, agrupados primeramente en el Bloque Escolar de Oposición Revolucionaria (BEOR) y, más tarde, en la Unión de Estudiantes Antifascistas, como se verá más adelante.

En el discurso pronunciado por Francisco Pérez Carballo en octubre de 1933, se expresaba a la perfección la visión del papel del estudiante universitario en relación con la nueva universidad que propugnaban los republicanos de izquierda y los socialistas de la facción más liberal. En un texto bien estructurado y apoyado en citas textuales de autores como los filósofos Flexner o Spranger, el sociólogo Max Weber, el jurista alemán Gustav Radbruch o el historiador británico H. Thomas Buckle -autor de la inconclusa *History of civilization in England*-, Pérez Carballo enlazaba, en la primera parte del texto, la historia de la Universidad española desde sus inicios medievales (*Estampa vieja*) con la de las etapas liberal y contemporánea (*Estampa posterior*). Para ello, se basaba tanto en las premisas de la diferencia sustancial existente entre la universidad española del pasado y la que se estaba construyendo en aquel momento -aunque esa diferencia no era todavía considerada como suficiente-,<sup>337</sup> como en la importancia que en los procesos de organización y reforma de la universidad se le debía conceder al elemento personal, es decir, al esfuerzo combinado de profesores y alumnos que implicaría una ineludible *exigencia de personas*.<sup>338</sup> Nos interesa en especial la parte última del texto del discurso, la verdaderamente sustancial, redactada bajo el epígrafe *Estampa de hoy*, que es donde Francisco Pérez Carballo debatía sobre la naturaleza del movimiento estudiantil representado por la FUE y los problemas abordados por este nuevo modelo de asociacionismo escolar, cuyo origen derivó –desde su perspectiva de observador activo- de una toma de conciencia colectiva de la necesidad de modernizar la universidad a través de una profunda reforma que abarcase “tanto como las fórmulas las personas”.<sup>339</sup>

Comenzaba Pérez Carballo esta *Estampa de hoy* -tercera y última de las retratadas en el texto de su discurso- refiriéndose a un documento para él fundamental, el folleto que contenía los estatutos de la Federación Universitaria Escolar. Haciendo especial hincapié en los de la FUE de Madrid, basados en idénticos principios a los que vertebraban la estructura, objetivos y funciones de las demás FUE(s) del país, citaba literalmente algunos de sus artículos:

<sup>337</sup> *Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1933 a 1934*, Madrid, Imp. Colonial, 1933, p. 11.

<sup>338</sup> Ibid, p. 26.

<sup>339</sup> Ibid, p.27.



Constituirán la Federación Escolar de Madrid todas las Asociaciones de estudiantes legalmente constituidas en Madrid, sin carácter confesional, religioso ni político que pertenezcan a la enseñanza civil facultativa del estado y deseen integrarla como federados. Las Asociaciones, también legalmente constituidas, sin confesionalidad, domiciliadas en Madrid o en su distrito universitario, cuya finalidad sea escolar, podrán adherirse a la Federación y manifestarse en sus organismos con voz y sin voto, según establezcan los presentes Estatutos y sus reglamentos. Los fines de la Federación serán los siguientes: a/ Coordinar la actividad profesional de las Asociaciones que la forman. b/ Crear, mantener y promover servicios mutuales de asistencia y protección a los estudiantes, para mejorar su condición social y material, recabando, si fuera conveniente, el apoyo de los Poderes públicos y Corporaciones que puedan contribuir a tales fines. c/ Laborar por la reforma de la enseñanza del Estado y defender el prestigio y la intangibilidad de éste en la capacitación facultativa. f/ Ostentar la representación genuina de los estudiantes organizados en colectividad en todos aquellos actos o relaciones en que deban manifestarse...<sup>340</sup>

En este punto, resulta conveniente subrayar el hecho de que aunque el monopolio representativo atribuido a las distintas Federaciones Universitarias Escolares en sus respectivas demarcaciones, emanaba de los poderes conferidos por la UFEH –a la que, recordemos, pertenecían todas las FUE(s) de los respectivos distritos universitarios, que a su vez englobaban a las distintas Asociaciones Profesionales de Estudiantes-<sup>341</sup> encargada de centralizar y coordinar los diferentes niveles de representación escolar articulados desde la facción liberal-republicana del movimiento estudiantil, cada asociación profesional adscrita, cada FUE de distrito universitario mantenía un grado de autonomía relacionado con sus intereses estrictamente profesionales:

Artículo 2º La Unión Federal de Estudiantes Hispanos no podrá ser obstáculo para el libre desarrollo de los fines especiales de cada una de las entidades adscritas, en cuanto no se opongan al interés general de los estudiantes y de la Enseñanza, a juicio del Congreso que rige la Unión según los presentes Estatutos.<sup>342</sup>

Los párrafos de los artículos de los estatutos de la FUE de Madrid citados por el abogado madrileño contendrían, desde su perspectiva, los principios y las normas esenciales de este movimiento estudiantil, la explicación de lo ya hecho y de la ingente tarea a realizar en el futuro:

De aquí nace nuestra solidaridad, el profesionalismo, la defensa de la representación escolar, la unidad de asociación, nuestras demandas sobre mejora de la enseñanza y del profesorado<sup>343</sup>.

Y en este punto llegan dos explicaciones esenciales sobre las que en realidad se vertebraba más fácilmente el discurso de Pérez Carballo, la del concepto de *profesionalismo* y la del imperativo de *unicidad de asociación*, claves a un tiempo en la irresistible ascensión de la FUE bajo unas condiciones políticas favorables y, no mucho más tarde, en su casi inmediato declive, víctima de sus propias contradicciones y de su inútil resistencia a aceptar la irrupción de la política en las aulas, transformada, la más de las veces, en maniobras de agitación y en actos violentos de distinto signo:

<sup>340</sup> Ibid, p. 27-28.

<sup>341</sup> La FUE se dirigía, según Isaura Varela -que se ha estudiado la estructura de la de Santiago, que puede ser una referencia muy útil para extrapolar al resto de España- por medio de una Cámara Federal y una Junta de Gobierno, cuyos acuerdos se tomaban por mayoría, siempre que se alcanzase un quorum de al menos el ochenta por ciento del total de las delegaciones, con un voto por asociación en cuestiones estatutarias y por asociado cuando se tratasen otros asuntos. Véase de esta autora, *La universidad de Santiago. 1900-1936*, op. cit, p. 240.

<sup>342</sup> Centro Documental de la Memoria Histórica. Político/ Social. Madrid 523/32. *Estatutos de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos*.

<sup>343</sup> *Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo...*, op. cit, p. 28.

*Profesionalismo.* -Por un lado es exclusión de lo confesional, religioso o político, como se subraya en nuestros Estatutos: por otro, profesionalismo quiere decir “estado” de estudiante.

Hay dos clases de estudiante en la Universidad: el que paga su matrícula, asiste a clase, estudia (o...no estudia), se examina y pasa, y el que, además de todo eso, compulsa el ambiente, ve las direcciones y los defectos, el ideal y el camino para la reforma, tiene conciencia de su profesionalismo.

*Unidad de asociación.* -No hay más que una asociación que no es exclusiva. Como consecuencia de su propio contenido, por la virtualidad expansiva del principio profesional, no puede haber en el mismo ámbito dos asociaciones profesionales de Derecho, o dos de Medicina o Farmacia, como no existen a la vez en el mismo espacio dos cosas impenetrables. Y en cuanto a las Asociaciones no profesionales de estudiantes, su propio significado las deja fuera de la universidad y el de ésta las excluye de su recinto. Es decir, que por imperativo de la lógica, la Asociación profesional de estudiantes es la única Asociación de estudiantes que puede contar para la Universidad. En cuanto a la representación escolar hemos de decir que la FUE quiere que la tengan todos los estudiantes. ¿Qué más halagüeño para nosotros que ver despertada en todos los compañeros la idea de su escolaridad y la voluntad de trabajo y mejora?;. Que pueda ser pronto un hecho ese despertar para que tengamos la satisfacción de verlos con nosotros dentro de la Asociación profesional, que es el modo de demostrar que sienten la escolaridad y desean ser representados. Si de veras sienten este deseo, emprenden el fácil camino de inscribirse en el organismo que lo permite: la F.U.E es amplia y cabrán en ella (...) Ahora, si se pretende alguna vez hacer una Asociación general obligatoria de estudiantes, para acabar con mentidos conflictos universitarios, no podrá tener vida real si no se crea a la vez un espíritu progresivo y responsable en todos los estudiantes. Se parecería esto un poco a aquel precepto de nuestra candorosa Constitución política de 1812, “los españoles serán justos y benéficos”. Tampoco en el caso de esa pretendida Asociación estudiantil podría generalizarse ese espíritu por decreto (...).<sup>344</sup>

Si, por un lado, resulta evidente la fé ciega tanto en las propias fuerzas como en que la legitimidad de los objetivos esenciales perseguidos por la FUE –a saber, liberar la universidad española de su carácter de feudo de casta privilegiada para abrirla a una aristocracia intelectual concebida en el sentido orteguiano y formada por individuos de distinta procedencia social-, por otro, parece extraño (y arriesgado) esa apariencia de lenguaje autocomplaciente, y un tanto ingenuo, que no ve en la justificación del monopolio de la representatividad estudiantil, entregado por las autoridades republicanas a esta organización, nada más que la culminación de cuatro años de lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Pero es sólo una apariencia, pues tras el significado de las palabras de Pérez Carballo, cuya línea de pensamiento y actuación como presidente de la APED de Madrid era coherente en lo fundamental con la lógica del discurso oficial de la FUE “republicana” –con los matices que se observan-, subyacía una apelación trascendental al elemento personal como base fundamental de la reforma universitaria, la certeza de que para crear una “asociación general obligatoria” se necesitaría un “espíritu progresivo y responsable en todos los estudiantes”, como se lee en el último de los párrafos citados de su alocución. Y en el otoño de 1933, que es cuando se pronuncia el discurso que estamos analizando, la mirada necesariamente retrospectiva de Francisco Pérez Carballo se detenía en esta importante contradicción implícita en su función representativa. Contradicción derivada de confrontar el mensaje propagandístico machaconamente repetido por los dirigentes y miembros de la línea oficialista de la FUE –a la que él pertenecía-, todavía vigente a pesar del acoso al que a esas alturas era sometida la organización desde todos los flancos para intentar frenar su poder e influencia en el Ministerio de Instrucción Pública y en los claustros y juntas de

---

<sup>344</sup> Ibid, p. 28-30.

gobierno universitarias, con la realidad que dictaba (y a veces filtraba al texto) la experiencia y la reflexión lúcida sobre la complejidad de los acontecimientos sucedidos en los dos últimos años.

Pero vayamos por partes, en la tarea de contextualizar los puntos esenciales del discurso pronunciado por Francisco Pérez Carballo en el acto de inauguración del curso académico de 1933 a 1934. Repasaba también Francisco en el texto la labor desarrollada por la FUE hasta ese momento, tan amplia en perspectivas como, en ocasiones, restringida a la organización o al fomento de actividades culturales o deportivas, perdido en cierto modo el afán reivindicativo de antaño al coincidir en lo esencial con la política educativa del gobierno de Azaña, por lo menos hasta el comienzo del crítico año de 1933, momento en que se empezó a criticar con severidad la lentitud y los titubeos observados en la aplicación de las reformas proyectadas. Estudiantes de la FUE desarrollaron una impresionante sección deportiva (equipos y competiciones de fútbol, rugby, hockey, baloncesto...), participaron en las Misiones Pedagógicas -“creación del Ministerio de instrucción pública, pero que están plenamente dentro de nuestro espíritu de extensión universitaria”-,<sup>345</sup> e implementaron un interesante proyecto de universidad popular, el Cine Club y La Barraca (puntal del teatro universitario junto al proyecto poético y popular de Alejandro Casona). También, cómo no, impulsaron la edición de revistas de “espíritu FUE” -*Compluto*, *Gaceta Universitaria*, *F.U.E.* (Valencia), *Universitarios* (Santiago de Compostela- y multiplicaron las bibliotecas circulantes (muchas de las asociaciones adscritas a la FUE de Madrid y esta misma disponían de una, como también de un departamento de prensa); organizaron conferencias, cursillos y exposiciones en las diversas asociaciones profesionales -así como excursiones y estancias organizadas, visitas e intercambios culturales- o apoyaron la construcción de albergues, comedores y pabellones para estudiantes tuberculosos (de la implementación de un servicio médico universitario no se dan detalles). El desarrollo de una Librería Editorial y un innovador cine universitario eran proyectos que en noviembre de 1933 estaban siendo ultimados.

En el plano institucional, la tarea de la FUE se había centrado, como afirmaba el abogado y presidente de la APED de Madrid, en las relaciones con la Residencia de Estudiantes, la Junta de Ampliación de Estudios y el Ministerio de Instrucción Pública, fundamentalmente para la concesión de becas, designación de representantes en los tribunales de oposición a cátedras y establecimiento de vínculos con instituciones culturales y universitarias extranjeras. La actuación de la FUE en los organismos estudiantiles internacionales mereció también una mención importante, aunque tal vez demasiado breve, dada la participación no precisamente irrelevante de Francisco en varios congresos estudiantiles internacionales, en el texto del discurso. En concreto, la Confederation Ibero-Americana de Estudiantes, la *Confederation Internationale des Etudiants*, el *International Students Service*, la *Inter Ayuda* acogieron durante estos años el trabajo y las iniciativas de los estudiantes de la UFEH.

En relación a su actividad específica como presidente de la APED de Madrid, no se limitó a organizar o presidir ciclos de conferencias, como las dictadas por Ortega, De

---

<sup>345</sup> Ibid, p. 31.

los Ríos o Jiménez de Asúa,<sup>346</sup> a intervenir en vibrantes mítines estudiantiles, en especial el celebrado el domingo 3 de noviembre de 1932,<sup>347</sup> y a solicitar la organización de un campamento de verano para estudiantes en la Sierra del Guadarrama y la instalación de un sanatorio universitario.<sup>348</sup> También tuvo que afrontar los problemas legales y administrativos derivados de la coexistencia de varios planes de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, al recibir, por ejemplo, una reclamación de los estudiantes del pan antiguo –en este caso, el Plan Callejo–, al parecer aún vigente en este centro, interesados en cursar las dos asignaturas que les restaban para terminar su carrera, entre ellas Derecho Procesal, por el mismo programa con el que la habían comenzado, con el fin de evitar la absorción de sus expedientes académicos por el plan provisional de estudios de Derecho establecido por el decreto de 11 de septiembre de 1931.<sup>349</sup> Este decreto complementaba al de 13 de mayo del mismo año, que supuso la derogación de todos los planes de segunda enseñanza y estudios universitarios aprobados durante la dictadura de Primo de Rivera.<sup>350</sup>

Tras esbozar el conjunto de realizaciones y actividades que habían trazado el camino de la FUE hasta ese momento, y labrado su ahora declinante prestigio, proseguía Francisco Pérez Carballo en su discurso durante el acto de inauguración del curso académico 1933-34, analizando los problemas que a su juicio afectaban a la FUE. En primer lugar, se refería a los de dentro de la universidad, y no era ninguna coincidencia el que comenzase por el intrusismo profesional, concebido en puridad como la invasión del campo específico de la universidad por partidos e ideologías empeñados en extender la lucha política al medio universitario, uno de los espacios propios de la juventud que estaba adquiriendo cada vez más protagonismo social en la discusión de los asuntos públicos:

Pero no sólo tenemos realizaciones; tenemos también *Problemas*. De dentro de la profesión, de dentro de la Federación Universitaria y de dentro de la Universidad. *De dentro de la profesión*: El exceso de licenciados y el intrusismo; este último, tanto como intrusismo *de la profesión de la vida*, problema que nos asaltará al salir de la Universidad, es intrusismo dentro *de la profesión de estudiantes*. Traer la profesión a la universidad es ser intruso. Las asociaciones profesionales no pueden ser comunistas, ni fascistas, ni republicanas de un color determinado. Estas denominaciones no tienen sentido dentro de la Universidad. En la Universidad sólo cabe subrayar el sentido de la estudiantina con la declaración de estudiante profesional.<sup>351</sup>

Y la elevación de este imaginario muro de palabras, por parte de Francisco y sus correligionarios del ala republicano-socialista de la FUE –contradictoria negación de la política por razones tácticas, de disciplina o por una pretensión un tanto utópica de

<sup>346</sup>Esta última, organizada por la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho de Madrid (APED) fue celebrada el 13 de enero de 1932 en el Paraninfo de la Universidad Central. La presentación corrió a cargo del propio Pérez Carballo quien hizo previamente un balance de los cursos de conferencias organizadas por su asociación, según informa el diario *El Sol* al día siguiente.

<sup>347</sup> *El Sol*. 5 de noviembre de 1932.

<sup>348</sup> *El Sol*. 29 de abril de 1932, sobre la celebración el día anterior de una junta general de la APED.

<sup>349</sup> Archivo General de la UCM. Expediente de Francisco Pérez Carballo. Carta de Pérez Carballo, en calidad de presidente de la APED madrileña, al ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, intercediendo en favor de estos estudiantes. Madrid 22 de diciembre de 1931.

<sup>350</sup> Véase a este respecto, J.M. Puyol, “El plan republicano en la Facultad de Derecho de Madrid (1931-1934)”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 7 (2004), p.197-234.

<sup>351</sup> *Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo...*, op. cit, p. 33.

neutralidad-, frente a la irrupción de la política en la universidad respondía no sólo a razones de puro pragmatismo en relación al control de la representación estudiantil, sino a la percepción, casi obvia, de que esas ideas o corrientes políticas sobrevenidas tendrían su inmediato reflejo en la aparición de divisiones internas y, en consecuencia, en la formación de facciones o bloques dentro de la compleja estructura fueista, que iría en detrimento de una mayor eficacia en la acción. Así lo expresaba Francisco un poco más adelante, buscando entre los problemas internos de la Federación:

*De dentro de la Federación universitaria:* También tenemos problemas aquí, queridos compañeros. Dentro de nosotros hay núcleos que tienen nuestra simpatía en cuanto concilian con otras ideas de que después hablaremos un indudable fervor por la F.U.E y un probado deseo de trabajo. Pero cuantos conglomerados o bloques se formen para actuar en la FUE, y defenderla cuando haga falta no pueden ser aceptados más que desde el punto y hora que demos que son necesarios. Y a este respecto quiero haceros a todos, compañeros, una consideración sencilla: ¿Creéis de veras que la F.U.E no es marco suficiente para actuar en todos los sentidos necesarios?. Si empieza por tener a los muchachos que querían conglomerarse, ¿no es mejor que no haya nada, ni el canto de una idea, que pueda separarlos de sus demás camaradas profesionales?.

¿Qué tenéis unos cuantos, ocho o diez, o la mayoría, puntos comunes especiales de vista?. Manifestadlos en las Asociaciones Profesionales, cuyo espíritu es tan amplio que basta estar en ellas. De ellas procede la F.U.E: la vida de esta organización es más de aquellas que de ésta. De la Federación vienen a veces normas de conjunto; de las Asociaciones, la vida que origina la Asociación y la llena.<sup>352</sup>

No pasaremos por alto esta última afirmación de Francisco resaltando el papel de las distintas asociaciones profesionales de estudiantes como generadoras y vertebradoras de la vida real de la federaciones de distrito universitario (FUEs) y de la nacional (U.F.E.H) -a la que unas y otras estaban adheridas escalonadamente-, cuya actividad estaba limitada a la coordinación en juntas generales y congresos y a la elaboración de normas, propuestas o demasiado abstractas o enfocadas principalmente al debate político y legal con las autoridades educativas del país, mientras que los estudiantes tenían un contacto y una interlocución más estrecha, por lógica, con la asociación a la que estaban adscritos por razones académicas y profesionales. Por ello, ésta era la verdadera representante de los intereses de los alumnos de cada carrera universitaria y conocía en profundidad sus necesidades y problemas específicos. Pero la cercanía de las asociaciones profesionales respectivas a los estudiantes no parecía ser la única razón del elogio vertido por el presidente de la de Derecho de Madrid, pues de una lectura atenta de sus palabras podría deducirse que la cohesión estructural desde la célula más básica, frente a una dispersión en paralelo o en vertical de los núcleos y asociaciones integradas bajo unas mismas siglas, era concebida como la única forma de convertir a la FUE en una isla inaccesible al influjo incesante de partidos, sindicatos e ideologías encontradas y, por lo tanto, como objetivo prioritario de la estrategia estudiantil de filtrar el estímulo político e ideológico procedente del exterior.

Pero volvamos al relato de Pérez Carballo sobre el problema del faccionalismo dentro de los distintos niveles de esta organización estudiantil. Este problema estaba directamente relacionado con lo ocurrido en el Congreso de la UFEH celebrado en Valencia en febrero de 1933, al que Francisco no acudió debido a que por esas fechas estaba preparando la fase de oposición al puesto de oficial letrado de las Cortes –

---

<sup>352</sup> Ibid, p. 34.

tomaría posesión como funcionario de esa categoría en marzo,<sup>353</sup> circunstancia añadida al hecho de que su mandato como presidente de la APED de Madrid había finalizado en noviembre de 1932. Su cese obligado de la presidencia de esta asociación –los cargos de las APE y de las FUE (s) se renovaban anualmente- no significó, por supuesto, su desvinculación de la obra emprendida por la FUE, como lo prueba su intervención en el propio acto de inauguración del curso académico 1933-34 en la Universidad Central – con la lectura del discurso que estamos analizando-, en el XV Congreso de la Confederación Internacional de Estudiantes (C.I.E), celebrado en Venecia a finales de agosto de 1933, y en la Conferencia Franco-española de Inter-Ayuda Universitaria (Madrid, abril de 1934), a los que pronto se hará referencia.

El III Congreso de la UFEH celebrado en Valencia en febrero de 1933 discutió, entre otras cuestiones, la conveniencia de mantener la representación de la FUE en Claustros y Juntas de gobierno de las universidades españolas, dilema resuelto de manera afirmativa tras un complejo proceso de deliberación que no consiguió alterar las directrices marcadas por el sector “oficialista”. Además, significó una amenaza directa a la cohesión interna de esta organización, pues en el transcurso de sus reuniones y debates se acusó la escisión entre la línea apolítica, aconfesional y estrictamente profesional –a la que se adscribía Pérez Caballo, ausente en la cita de Valencia-, que se impuso en los Congresos de la UFEH de Valencia y Sevilla (1934), a pesar de una explícita declaración dual de antifascismo,<sup>354</sup> y la defendida por el Bloque Escolar de Oposición Revolucionaria (BEOR), muy próximo a las Juventudes Comunistas.

Esta facción fue liderada por el dirigente de las Juventudes Comunistas Fernando Claudín, secundado por M. Tuñón de Lara, Tagüeña, Carrillo, Cazorla y otros. Era evidente que el rechazo manifestado por Pérez Carballo en su discurso contra la invasión de la universidad por la política y el faccionalismo se dirigía fundamentalmente a la infiltración comunista y socialista que acabaría controlando la FUE en los años posteriores. Si es cierto que en Valencia se discutió la conveniencia o no de mantener la representación escolar dentro de los Claustros y Juntas de gobierno de la universidad, lo es también que acabó aprobándose la propuesta de intentar aumentarla, a propuesta de la FUHA (Federación Universitaria Hispanoamericana), y prevaleciendo la postura continuista defendida por la línea profesional y apolítica, determinaciones no excluyentes de una llamada de atención al gobierno en aras de una reforma urgente de la enseñanza. La oposición del abogado madrileño a la formación de banderías o bloques internos dentro de la FUE constituía, así mismo, una exhortación a sus compañeros para lograr la cohesión interna de esta organización en un momento en que ya no se cuestionaba simplemente su liderazgo, sino que estaba en juego su propia existencia (octubre de 1933), crisis larvada mientras desaparecían de forma progresiva las huellas del periodo de efervescencia constreñido al glorioso año de 1931 y empezaban a fallar algunas piezas esenciales del engranaje fueista. Uno de los primeros

<sup>353</sup> Acudieron, por la APED de Madrid, Luis Álvarez, M. Pastor Florit, Alfonso Jorquera, Pedro Herranz y Octavia Fernández, véase *FUE. Órgano de la Federación Universitaria Escolar* (Valencia), nº 7 (1-4-1933).

<sup>354</sup> J.L. de la Granja (coord), *Manuel Tuñón de Lara, maestro de historiadores* (catálogo de la exposición biográfica y bibliográfica), Madrid, 1994, p. 32. Véase también, M. Tagüeña, *Testimonio de dos guerras*, Madrid Planeta, 2005.

jalones de esta crisis se hallaría en la escisión de la FUE barcelonesa, en marzo de 1932, como reacción a la implicación de dirigentes nacionales de la UFEH en la campaña contra el estatuto, un reflejo más de la influencia de los acontecimientos políticos del país en la vida universitaria, fenómeno muy acusado durante la corta vida de la República española. Esta maniobra segregacionista urdida en el núcleo de la Cámara Federal catalana fue interpretada por el órgano de prensa de la FUE de Madrid como el resultado de una trampa tendida a los estudiantes catalanes –algunos de cuyos grupos estaban intentando regresar al seno de la UFEH- por significados elementos católicos que habían conseguido infiltrarse en esta federación,<sup>355</sup> cuando en realidad era más la manifestación de la fragilidad de la FUE fuera del distrito universitario madrileño, su principal punto de apoyo.

Otras claves de esta crisis interna revelaban el impacto y la dimensión de la amenaza procedente del exterior de la organización, agravada al resquebrajarse el apoyo gubernamental –Azaña dejaba la presidencia del gobierno en septiembre de 1933- y acentuarse la presión y hostilidad de las organizaciones estudiantiles católicas (CECE), tradicionalistas (AET) y fascistas (J.O.N.S) contra la posición privilegiada y progubernamental de la FUE –percibida sin matices-, a la que en realidad negaban cualquier tipo de legitimidad para existir. Esta “contraofensiva” estudiantil antirrepublicana entró en ebullición en el curso 1932-33, espoleados los estudiantes reaccionarios por el debate en las Cortes del estatuto catalán, y se aceleró aún más durante 1933 para alumbrar el nacimiento del SEU a finales de ese año.<sup>356</sup>

Finalizaba Francisco Pérez Carballo su discurso en el acto de inauguración del curso académico 1933-34 en la Universidad Central, refiriéndose a dos de los problemas fundamentales con los que la FUE se había enfrentado desde su fundación, esto es, la reforma de la enseñanza (de nuevo) y la revisión del profesorado. Una reforma de la enseñanza que, en la esfera de los estudios universitarios, se definiría en la dirección apuntada por Ortega en su *Misión de la Universidad*, es decir, una reforma de raíz, profunda, que pusiera el foco sobre el verdadero objetivo y pilar de la misma, el alumno y sus posibilidades de aprendizaje, para, de ese modo, orientar después la función docente. Una reforma desde arriba, con normas, que se ocupase también de las personas y los hábitos, del profesor y del alumno.

La reforma de la enseñanza nos interesa. La enseñanza es para los alumnos y debemos señalar sus defectos y orientaciones de mejora. La revisión del profesorado nos interesa también, y nosotros mismos hemos empezado hace ya tiempo nuestra propia revisión. ¿Qué otra cosa es la fundación y vida de la F.U.E, sino una revisión del modo de formarse y proceder el estudiante, y sólo una revisión?. ¿Si somos profesionales, como no pedir que lo sean los maestros?.<sup>357</sup>

Y profundizando en los factores contextuales que condicionarían o propiciarían esta reforma, asoma un análisis retrospectivo de la labor desempeñada por los distintos congresos de la UFEH al respecto, proyectado en un tono más crítico del empleado en la parte anterior del texto de este discurso, en especial cuando se refiere a la actitud de los profesores:

<sup>355</sup> *Gaceta Universitaria* (Madrid) 2 de marzo de 1933.

<sup>356</sup> Testimonio de un estudiante falangista que protagonizó el ascenso de las organizaciones estudiantiles fascistas, en D. Jato, *La rebelión de los estudiantes*, Madrid, 1968.

<sup>357</sup> *Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo...* op. cit, p.36.

Nuestra Federación tiene ya la reforma de la enseñanza entre sus principios fundacionales. Dedicó después un Congreso extraordinario en 1931 a dicha reforma, y antes y después de este Congreso, en el Congreso anterior y en el posterior al de 1931, y en su actuación, también de antes y después, no hace más que o preparar o desarrollar las cuestiones de reforma universitaria directamente abordadas en el citado Congreso extraordinario. Este Congreso, que se anunció como de profesores y estudiantes, por abstención de los profesores, sin duda por sus muchas ocupaciones, fue sólo de estudiantes, con las simpáticas excepciones de maestros que vinieron a trabajar con nosotros. El conjunto de las conclusiones de este Congreso es un amplio plan de reforma, grande por el esfuerzo y el entusiasmo, pequeño y modesto, si queréis por su significado, pero algo.<sup>358</sup>

¿Y cómo se definiría el papel de la juventud, de los estudiantes, en este proceso congresual?. En otras palabras, ¿hasta dónde habría llegado, en pos de la reforma, la ambición legítima del movimiento estudiantil representado por la FUE durante todo este tiempo?:

Estamos muy lejos de pretender ser el único elemento en la vida de la Universidad; tienen también una parte indudable los profesores y otra los Poderes públicos; pero lo que no podemos hacer sin desertar de nuestra condición de jóvenes es dejar de exponer nuestros meditados puntos de vista para defenderlos después enérgicamente. No perdemos la esperanza de que los profesores, por ejemplo, se decidan a exponer sus puntos de vista como Cuerpo para la reforma de la Universidad; confiamos también en que los proyectos legislativos puedan ser sometidos a una reforma flexible que los haga más acordes con lo que necesita la enseñanza española; pero hoy por hoy el único esfuerzo serio y de cierta eficacia universitaria lo hemos hecho nosotros, los estudiantes profesionales. En el Congreso constituyente de la Unión Federal de 1930, expresamos nuestra discrepancia con el espíritu de la Universidad actual y nos manifestamos por la revisión de la dirección oficial, del profesorado y de los métodos. En el Congreso extraordinario de 1931, las orientaciones apuntadas en 1930 fundan la estructura del plan de reforma en una labor concreta, que creemos demuestra una cierta capacitación. En esto nos distinguimos de los otros dos elementos cuya aptitud para el problema que debatimos se supone; nosotros hemos ido un poquito más allá y la hemos demostrado. En el Congreso de 1933 se ha empezado a perder las esperanzas en la rápida consecución normal de una reforma conveniente y hemos tenido que señalar orientaciones de eficacia.<sup>359</sup>

La referencia al Congreso de Valencia marca un punto de inflexión en el discurso de Francisco Pérez Carballo y también, como veremos, en la actitud de los estudiantes republicanos y socialistas que ocupaban o habían ocupado puestos directivos en la FUE, pues expresaba un grado de disenso (de forma diplomática, eso sí) con la marcha y los ritmos de la política educativa del gobierno republicano -además, cuando Francisco presentaba este documento Azaña ya no era presidente del gobierno- y cuestionaba el argumento de la vocación pro gubernamental de esta asociación (considerada, desde algunos sectores, como un mero apéndice del poder político), que los adversarios de la FUE esgrimían machaconamente en su contra.

Porque, además, los proyectos de ley presentados por el gobierno en las Cortes para dar satisfacción a la necesidad de la reforma de la enseñanza, en especial el prometedor pero finalmente estéril borrador -por lo accidentado de su tramitación y la dificultad del contexto político que lo envolvió hasta paralizarlo- para la reforma universitaria presentado, en forma de decreto, por el ministro Fernando de los Ríos el 16 de marzo de 1933, no convencieron finalmente a nadie, además de revelarse bastante turbios:

En este estado las cosas, aparecen los proyectos de ley para la reorganización de la primera y segunda enseñanza (17 de noviembre de 1932) y para la reorganización de estudios en las Universidades (16 de marzo de 1933). Para el ciudadano pacífico corriente, no enterado de nuestras luchas y nuestras urgencias, fueron sucesos legislativos ordinarios.. Para nosotros,

<sup>358</sup> Ibid, p.37-38.

<sup>359</sup> Ibid, p.38-39.



colmaban todo un periodo de nuestra actuación profesional y deseábamos vivamente que respondieran a su momento y a su necesidad. Y tenemos que declarar que no responden.<sup>360</sup>

Después de explicitar la insuficiencia final de estos textos legislativos, matizaba convenientemente esta declaración final con el cálculo bastante equilibrado de *pros* y *contras* referido, fundamentalmente, al proyecto de reforma de los estudios universitarios, al que imputaba, entre otros olvidos, la falta de regulación de la enseñanza técnica y la marginación absoluta de la universidad popular,<sup>361</sup> en su opinión “la única cosa que ha hecho la Universidad por la sociedad desposeída, y la hemos hecho *solos* los estudiantes”.<sup>362</sup> Ejemplos de desregulación percibidos como opuestos al celo regulador exhibido por el legislador respecto a cuestiones eminentemente técnicas. En este punto, parecía oportuna hacer una pregunta incómoda, no tanto por las respuestas que le corresponderían como por la dosis de autocrítica que implicaría el cambio de postura ante la aparente inacción gubernamental:

Pero, aparte de los antedichos motivos de oposición serena, ¿por qué se ha pasado del proyecto de ley a la labor parlamentaria?. ¿O es que se creía en una pugna personal de los estudiantes con el titular de la cartera, pugna que con la presentación del proyecto quedaba automáticamente eliminada? (Nosotros no peleamos sino con las ideas; con las personas, cuando son insensibles para aquellas). Incluso tratándose de algo que ha de despertar menos molestias personales que la revisión del profesorado, por ejemplo, ¿por qué no se acometen las medidas generales de reforma de la enseñanza. La revisión del profesorado ha tenido realización defectuosa, pero realizaciones al fin. En reforma de la enseñanza se dio el proyecto del ministro..., y ahí está; hasta hoy, y qué sabemos nosotros hasta cuándo. Esto no puede ser. Volviendo la vista y el recuerdo sobre nuestra inútil espera y esperanza, hallaremos hoy energía para reclamar la próxima resolución del problema. Como la atención del público se dispersa con facilidad explicable, iniciaremos una campaña decidida, presentaremos contraproyectos, daremos conferencias, requeriremos la colaboración de parlamentarios que se hayan manifestado a favor de una enseñanza digna, trabajaremos en la prensa... y durante la campaña y al final de ella, allí estará la F.U.E para llegar serenamente hasta el final. Llegamos un día a la incompatibilidad con un régimen porque, cuando no nos atacaba en nuestra condición de personas y de intelectuales, desconocía sistemáticamente los problemas de la Universidad. Ahora, las cosas han cambiado un poco, porque se ha empezado a considerar esos problemas; pero no se nos resuelven: el problema de los hombres sigue en pie. Necesitamos que los hombres que ligan su responsabilidad política a la dirección de la Universidad en España actúen de una vez. Asistidos por nuestro entusiasmo y por la fe en nuestra reforma, los estudiantes de la Federación Universitaria Escolar llegaremos hasta donde sea necesario. Maestros: No os desencantéis de nosotros. La F.U.E, vosotros lo sabéis, no es intransigente, sino laboriosa. No somos los niños terribles que apuramos, contra vosotros, las consecuencias. Si hay alguna vez en nuestra actuación profesional algo que personalmente os hiere, pensad que nos mueve un deber, y el deber no se renuncia. Prestadnos vuestro calor y os lo devolveremos en Universidad.

Compañeros estudiantes: Manteneos en vuestra labor por la Universidad, trabajad, trabajad, mientras quede el entusiasmo de un solo estudiante profesional, y podremos decir mañana, teniendo ante los ojos una Universidad mejor: Esta es la estampa de la Universidad de hoy, auténtica, alegre y rebelde, que nosotros los muchachos hemos contribuido a formar.<sup>363</sup>

<sup>360</sup> *Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo...* op. cit, p.39

<sup>361</sup> Impulsar las universidades populares era uno de los objetivos prioritarios del movimiento estudiantil vertebrado por la FUE, al punto de que la creación de una universidad popular por cada Federación universitaria fue considerada una de las decisiones más importantes salidas del III Congreso de la UFEH, celebrado en Valencia en febrero de 1933. Véase, por ejemplo, el editorial de *FUE. Órgano de la Federación Universitaria Escolar* (Valencia), nº7, de 1 de abril de 1933.

<sup>362</sup> *Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo...* op. cit, p.41.

<sup>363</sup> *Ibid*, op. cit, p. 41-43.

Con estas palabras finalizaba Francisco su discurso en la ceremonia de apertura del curso académico 1933-34, que hemos analizado en las páginas precedentes e intentado entroncar con los acontecimientos que marcaron el rumbo de la actuación de la FUE durante el periodo del gobierno de Azaña, finalizado semanas antes de que el abogado madrileño compareciese en el Paraninfo de la Universidad Central para intervenir en el citado acto. El significado de estos últimos párrafos extractados no es baladí, pues no constituyen el ejercicio de retórica al uso en un trance oficial y solemne donde se trataría, sobre todo, de cumplir el expediente ante la plana mayor de la Universidad y, en especial, ante sus compañeros. Más bien, se insertarían en el cambio de estrategia que la FUE venía meditando desde hace tiempo, pero que no había adoptado decididamente porque aún confiaba en la labor del Ministerio de Instrucción Pública y, en particular, en Fernando de los Ríos, su titular. Al catedrático de Derecho Político de la Universidad Central, educado en los principios de la ILE y del socialismo humanista neokantiano, se le reconocía la buena voluntad de sus iniciativas políticas y algunos logros como la multiplicación de escuelas y centros de segunda enseñanza o la limitación de la enseñanza religiosa.

Avances insuficientes, desde el punto de vista de los estudiantes fueistas, si de lo que en realidad se trataba era de implementar una reforma profunda de la enseñanza en todos los niveles educativos y no sólo en el universitario, piénsese, por ejemplo, en el proyecto de 16 de marzo de 1933 que, además, no trascendió la fase de debate en las Cortes. Y esta relativa transigencia de la FUE con la obra del gobierno tampoco era ajena, por una parte, a la sintonía ideológica existente entre los dirigentes de la FUE – que, como Francisco, gravitaban mayoritariamente hasta 1934 en la órbita del republicanismo de izquierda o del ala liberal del PSOE (Luis Rufilanchas, Prudencio Sayagués)- y, por otra, a su pretendida declaración (y vocación) de apoliticismo, que impedía que la organización adoptase decididamente un punto de vista político que trascendiese el interés profesional, argumento esgrimido con frecuencia por los representantes de la FUE cuando arreciaban las críticas sobre su docilidad ante determinadas políticas del gobierno de la República. Pero esta actitud “transigente” parecía haberse agotado en el otoño de 1933, precisamente en un contexto político muy difícil para los republicanos de Azaña y ante la inminencia de las elecciones que podrían cambiar sustancialmente la composición de las Cortes de la República, como en efecto lo harían.

En cualquier caso, los problemas que afectaban al gobierno de la República en los últimos meses del gobierno azañista (Casas Viejas, la presión de la derecha rearmada en la CEDA, la actitud obstruccionista del Partido Radical, la indefinición socialista, los fracasos electorales de abril y septiembre) dificultaron el desarrollo a fondo de una legislación que librase a España de su estado secular de atraso educativo y cultural, objetivo considerado por los republicanos como el pilar fundamental del proceso de modernización del país. Sin olvidar el factor *tiempo*, que entrañaba una especial dificultad al concentrar tantas y tan ambiciosas medidas de reforma en tan poco espacio de tiempo. Por ejemplo, en el primer semestre de 1933, antes de la dimisión de Fernando de los Ríos como ministro de Instrucción Pública, las Cortes sacaron adelante un número muy elevado de leyes (entre ellas, la muy debatida ley de *Confesiones* y

*Congregaciones Religiosas*) que impidieron la discusión de su proyecto de reforma universitaria, leído en el mes de marzo en sede parlamentaria.

Por lo tanto, parecía que en el otoño agitado y transicional de 1933 -y en realidad desde el inicio de ese año- los dirigentes de la F.U.E se planteaban muy seriamente, no sin un encendido debate interno abierto a distintos matices, la vuelta de esta organización a sus orígenes reivindicativos, a un nuevo-viejo estilo, a riesgo de vulnerar su defensa del apoliticismo, pero esta vez más “civilizado”, en el sentido de reconocer la “buena voluntad” y legítimas aspiraciones de la obra de gobierno realizada hasta entonces. Sin embargo, una mirada retrospectiva dirigida desde este punto hacia el periodo precedente (1931-33) arroja otra luz al problema y revela una actitud no tan complaciente –al menos, no evidencia una relación de subordinación- con la política gubernamental como la denunciada por la prensa y las organizaciones estudiantiles antirreplicanas. Así, por ejemplo, el 6 de marzo de 1932 la junta de gobierno de la FUE de Madrid, a la que Pérez Carballo pertenecía como vocal (pues era presidente de la APED), difundió una nota de prensa en la que denunciaba los incidentes que perturbaban la vida normal de la universidad, protagonizados por “elementos político confesionales” que seguían una estrategia premeditada y agravados por la actitud invasiva de los Guardias de Asalto, al tiempo que exigía medidas inmediatas para contrarrestar esta situación. Del mismo modo, deslizaba una velada amenaza:

1º. La F.U.E, que siempre ha defendido el fuero universitario, estima necesaria una satisfacción del gobierno ante el atropello a dicho fuero por parte de los guardias de asalto.

2º. La F.U.E espera que antes del martes vera satisfechas sus justas aspiraciones, pues de lo contrario, recurrirá a la actitud que siempre mantuvo ante los ataques a la Universidad.<sup>364</sup>

El domingo 3 de abril de 1932, Francisco Pérez Carballo participó en un acto de propaganda de la FUE de Madrid, junto a Ricardo Mohedano, presidente de esta organización, el biólogo y cineasta Carlos Velo, en representación de la UFEH, y Alfredo Roderó Girón, celebrado en el Teatro del Conservatorio de Madrid ante abundante público, “en el que se destacaban muchas señoritas”, rezaba la reseña del acto publicada en el diario *El Sol* del martes siguiente, que también reparaba en las colgaduras y banderines rojos con el nombre de la FUE desplegados en los palcos del teatro. La intervención de Francisco, que cerró el acto, fue extractada (y destacada sobremanera) por este diario en el estilo directo del reporterismo de la época, avezado en reflejar con agilidad tanto el lenguaje del orador, como, incluso, rasgos de su propio carácter. Por eso, y porque entre líneas vamos a ver un vibrante alegato a favor de una FUE –y de sus principios rectores: profesionalismo, definido en términos de neutralidad política y aconfesionalismo, y unicidad en la representación escolar- cada vez más acosada por organizaciones derechistas y filo-fascistas, que a lo largo de este año se fortalecerían en número e intensificarían su labor obstruccionista, y una velada advertencia ante el significado de los elogios dirigidos a la FUE por los “amigos” de esta asociación -¿entre ellos, tal vez, el ministro De los Ríos o es mucho imaginar?-, traemos aquí los fragmentos más importantes de lo publicado a este respecto por *El Sol*:

Por último, el presidente de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho, D. Francisco Pérez Carballo, da principio a su elocuente discurso diciendo:

---

<sup>364</sup> *El Sol*. 6 de marzo de 1932.

“Muchachos de la F.U.E.: Salud y fortaleza. La Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho, a la que pertenezco, se honra en saludaros. No es preciso que os ofrezca mi agradecimiento por vuestra asistencia como en cualquier junta de fines benéficos. Tendréis sólo la satisfacción de vuestra propia conciencia. La España nueva os saluda. No hay por qué hablar –añade- de momentos de amargura, como se ha dicho. En todos los casos, el peligro más grave es crear el fantasma. Venimos de la serenidad íntima de unos estudios y deseamos hablar. Y no sólo para mostrarnos a aquellas gentes que es increíble nos desconocen, sino también porque ha habido contra nosotros una campaña artera y mentirosa. Estudiante es algo más que ahincar el corazón y la mente sobre los libros. Si hay una función social de la universidad, existe claramente una misión universitaria de la F.U.E. La F.U. E ha tenido ciertamente dificultades: el individualismo de la masa, la excesiva alabanza de nuestros amigos y la propia naturaleza transitoria de la condición de estudiantes. Cuando se piensa que haya uno de levantarse en un tablado a defender el aconfesionalismo en la enseñanza se siente uno escéptico del país en que hacer esto es todavía necesario (Aplausos) Dignidad es oponerse a ese absurdo bicefalismo de los que pretenden ser dentro de la universidad algo más que estudiantes profesionales. Cultura es defender la liberación de la conciencia frente al obscurantismo y la reacción, que no pudiendo atacarnos de frente se han vestido de máscara para combatirnos con nuestros argumentos. Frente a la libertad de asociación han creado sus asociaciones contra la libertad y han desnaturalizado la enseñanza.

Entre una formidable ovación asegura que a la F.U.E no la destruirán los que la pretenden.

Son nuestros principios el profesionalismo, la representación escolar, la actividad cooperativa (...) Haciendo la salvedad de que habla, no como directivo, sino como asociado a secas, manifiesta su parecer de que es imposible desprenderse del derecho a la representación. Estudiar es algo más que reunirse en una iglesia a estudiar el Derecho romano en las Pamdectas con música coral de órgano. Ser estudiante es también algo más que pedir incongruentemente la libertad de asociación de los estudiantes independientes, que es tanto como decir que dejen asociarse a los señores que no se asocian (...) Para la Universidad no puede haber más que una asociación, y los estudiantes se dividen entre votantes en ella y los que se quedan fuera. Útilmente, el representante elegido así representa a todos los estudiantes. Somos apolíticos, y no serán parte a negarlo circunstancias de todos conocidas, en la que la decencia nacional imprime un rumbo a toda la vida española, de la que hubiera sido absurdo considerarnos extraños. No tenemos monopolios ni exclusivas de favor oficial; tenemos, sí, en cambio, la pequeña ventaja de que hay una cosa que nos favorece: eso que llaman lógica.

Hace una ojeada de la labor de la F.U.E “frente a la nada de nuestros enemigos, de nuestra historia frente a la suya, de nuestros principios frente a sus absurdos”. Hace un llamamiento: “Venid con nosotros los hasta hoy indiferentes y subrayaréis el sentido de vuestra estudiantina. Pensad sobre nosotros, enemigos nuestros; sobre lo que somos y representamos. Ved, amigos y compañeros, que la juventud da la tónica de la vida del presente. Vamos hacia una nueva vida española. La Universidad será lo que nosotros queramos que sea. ¡A construirla mejor y más fuerte!”.<sup>365</sup>

Si no sorprende su referencia al escepticismo que le invadía al reflexionar sobre la realidad de un país donde todavía era necesario defender el carácter laico de la enseñanza, propósito traducido, a lo largo de la II República, en un intento fallido de reformar estructuras de poder y mentalidades colectivas que todavía hoy siguen vigentes, si lo hace, por otra parte, la negación del supuesto monopolio de la representación escolar concedido a la FUE por el gobierno republicano, que implicaba, paradójicamente, una ventaja cualitativa favorecida “por eso que llaman lógica”, reconocimiento tácito tanto de la relación estrecha mantenida con las autoridades republicanas en función de determinadas bases ideológicas –republicanos de izquierda eran también bastantes de los dirigentes de la FUE-, o de principios de neutralidad manejados por estudiantes verdaderamente caracterizados por su apoliticismo, como de un posible distanciamiento del gobierno si los naipes de la política jugaban en contra de

<sup>365</sup> *El Sol*, martes 5 de abril de 1932.

esta relación de mutua conveniencia. También informaba *Luz* –diario nacido como continuación de *Crisol* y futuro integrante del fracasado *trust* de la prensa azañista– sobre el acto y recogía una frase muy significativa pronunciada por Pérez Carballo –en la crónica se comete una errata al escribir su nombre de pila– en relación a la situación especial atravesado por la FUE en aquellos momentos, “un periodo constructivo de actividad silenciosa, que contrasta con la continua agitación de los días de lucha y esto ha hecho creer a sus enemigos que es debilidad”,<sup>366</sup> destinado a agotarse en la medida en que las expectativas de sus dirigentes no se vieran reducidas a una espera infructuosa, dificultando así el delgado equilibrio sostenido sobre una base ideológica compartida.

Como dato a tener en cuenta, los ataques a la FUE mencionados por Francisco en su alegato, que alcanzarían en el futuro una violencia inusitada a manos de los pistoleros fascistas,<sup>367</sup> vivieron escasas horas más tarde una nueva expresión física a la salida de este acto, cuando en los alrededores de la Puerta del Sol un grupo de estudiantes de la FUE fue objeto de provocaciones por parte de algunos sujetos, que, según el citado relato de *El Sol*, aparentaban ser alborotadores profesionales. Este incidente desembocó en un confuso enfrentamiento con los guardias de asalto que causó dos heridos, un suboficial del Cuerpo de Seguridad y un niño, víctima de un atropello.<sup>368</sup>

Más clara y directa fue la llamada de atención dirigida al Ministerio de Instrucción Pública por la junta general de la APED de Madrid que presidía Francisco Pérez Carballo, reunida la tarde del 28 de abril de 1932. Uno de los acuerdos tomados por ésta urgía al Comité de la UFEH para que, de forma inmediata, elevase al Ministerio de Instrucción Pública las conclusiones del Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza celebrado en noviembre del año anterior,<sup>369</sup> señal de creciente impaciencia respecto a los pasos indecisos de la política gubernamental al gestionar la reforma de la educación en España, enfocada entonces, principalmente, en reducir el peso de la iglesia católica en la enseñanza para despojarla definitivamente de su carácter confesional.

A partir de este momento, la postura asumida por Francisco, como presidente de la APED de Madrid, a favor de una reforma de la enseñanza sin ambages –aspiración máxima de la UFEH desde su fundación, como demuestran sus congresos hasta 1934– le convertiría, después de abandonar en noviembre de 1932 la presidencia de esta asociación,<sup>370</sup> en uno de los ex dirigentes *fueistas* más activos en la reivindicación de los

---

<sup>366</sup> *Luz*, lunes 4 de abril de 1932.

<sup>367</sup> Publicaciones como *Universitarios*, el órgano de prensa de la FUE de Santiago de Compostela, o *Compluto*, ídem de la FUE de Filosofía y Letras de Madrid, publicaciones de indiscutible vocación cultural, no fueron inmunes a esta campaña de desprestigio dirigida contra la FUE por sus adversarios y a lo largo de 1932 se hicieron eco de la misma. *Universitarios*, por ejemplo, publicaba en su primer número (marzo de 1932, p. 5-7) un artículo bajo el título “La representación escolar en los Claustros” en el que se argumentaba en contra de la “atmósfera de malignidad y encono” creada para contrarrestar el papel asumido por esta organización desde la proclamación de la República.

<sup>368</sup> *El Imparcial*, *La Vanguardia* y *El Sol* de 5 de abril de 1932.

<sup>369</sup> *El Sol*. 29 de noviembre de 1932.

<sup>370</sup> Según *Heraldo de Madrid* de 5 de noviembre de 1932, la junta general de la APED celebrada el día anterior procedió a la renovación de su directiva. De esta manera, Francisco Pérez Carballo dejó la presidencia de esta organización y, consecuentemente, su puesto de vocal en la FUE madrileña, al cumplirse su mandato reglamentario de un año, tras exhortar a todos “a la unión dentro de la

valores añejos de la auténtica Federación Universitaria Escolar, en los que el ideal de la transformación radical de la educación y la universidad españolas se vinculaba a los principios del profesionalismo apolítico y laico, aun en los tiempos más difíciles para la organización, llegados durante el bienio radical-cedista en medio de graves tensiones internas y de la espiral de violencia iniciada por pistoleros falangistas.

En la línea de matización de la idea de una FUE reducida al mero rol de apéndice de las políticas e instituciones republicanas, visión fomentada por sus adversarios dentro y fuera de la universidad, aparecían en otoño de 1932 indicios suficientes de que la confianza de la FUE en la política educativa y universitaria del gobierno Azaña -en el hecho de que ésta incorporase las conclusiones del Congreso Extraordinario para la reforma de la enseñanza, de noviembre de 1931- se podía resquebrajar en breve, poniendo así en peligro la colaboración de la Federación, o al menos propiciando su desvinculación de los ritmos y prioridades marcadas por el Ministerio de Instrucción Pública, centrado en la universalización de la educación primaria y en el proceso de secularización de la enseñanza. Veamos, por ejemplo, la advertencia lanzada por Prudencio Sayagués, secretario técnico (administrativo) de la UFEH por entonces, en el interior de un artículo titulado, de forma significativa, “Comencemos de nuevo”, publicado por el órgano de prensa de la F.U.E valenciana en octubre de 1932:

Pronto tendrá lugar el II Congreso Extraordinario de la F.U.E. Un año hace que termino sus tareas el Extraordinario de Profesores y Estudiantes. Un año hace que la esperanza animó a nuestras organizaciones: confianza a encontrar más comprensión en los Poderes públicos, confianza a una transformación; confianza que ya comienza a desmayar, confianza que retardó protestas y actuaciones, confianza que retardó un poquito el espíritu vivo de la F.U.E, confianza que al desaparecer marcará nuevas etapas de luchas escolares, constructivas, leales, dirigidas a lograr, por la acción, lo que a nuestra propuesta no supo o quiso realizar el Ministerio de Instrucción Pública. Concebimos un sueño romántico, una nueva Universidad; meditamos sus posibilidades de realización; estructuramos las bases que podrían cimentarla en su organización y definimos el nuevo y fundamental tipo de estudiante. De todo aquello ha quedado bien poco externamente; mucho para nuestras futuras actuaciones. De todo aquello, los hombres que se llaman revolucionarios, que declaman con énfasis su obra esbozada en el mitin y la conferencia, utilizan en juegos de oratoria y convierten en tópicos los puntos fundamentales de nuestra obra, hurtando al espectador la sinceridad de declarar que cuanto afirman es el programa de una juventud, y olvidando con temeraria imprudencia que, como programa joven, tiene un plazo, y que sus animadores, si ven continuado ese hosco vacío gubernamental a sus aspiraciones, llegarán a acordarse de la llamada que un hombre de Gobierno les ha hecho en diversas ocasiones, al decirles: “Estudiantes, si veis que la antorcha del Poder se debilita en nuestras manos, tomadla de ellas (...) y continuad la obra (Marcelino Domingo, discurso a los estudiantes de Murcia, 6-III-932,. Zaragoza, 12-10-932.)”<sup>371</sup>

La claridad meridiana de estos párrafos escritos por Sayagués –que, prácticamente, no requerirían comentario alguno-, nada complaciente con el rumbo tomado por los responsables del Ministerio de Instrucción Pública –ni con la retórica de los gobernantes republicanos en general, esos “hombres que se llaman revolucionarios”-, hacia un alejamiento o falta de sensibilidad respecto de las pretensiones estudiantiles, se reflejaría en los meses siguientes con mayor o menor acento crítico, pero siempre revelando la adopción de una táctica más activa y crítica -que ya no incluía la acción tumultuaria como opción reivindicativa-, en otras voces autorizadas dentro del

---

universidad”. Se trataron, además, cuestiones relacionadas con las actividades deportivas de la FUE, la representación de esta asociación en la Junta de gobierno de la Universidad y el Patronato de Estudiantes.

<sup>371</sup> *F.U.E órgano de la federación universitaria escolar* (Valencia) nº 3 (octubre de 1932).

movimiento estudiantil fueista, como la de Pedro Nicandro Martín González, miembro destacado de la APED de Madrid<sup>372</sup> o de los responsables de la FUE de Valencia, a quienes se debe atribuir este contundente mensaje:

No tenemos más remedio que estampar en nuestro editorial la frase compendio de esperanza: año nuevo, vida nueva. ¿Será ello cierto en la transformación urgentísima que necesita la actual enseñanza española?. O, por el contrario, ¿continuará el fracaso estrepitoso de la actual política universitaria?. Por repetido que sea el decirlo, la clase escolar no está satisfecha de la orientación que respecto a enseñanza sigue el gobierno republicano. No puede estarlo. En primer lugar, todo el esfuerzo del Ministerio de Instrucción se ha dirigido a un solo camino: creación de escuelas. Pero no se ha interesado en lo más mínimo por la segunda enseñanza y por la universitaria. Todo continúa igual, o quizá peor, que en tiempos de monarquía. Las Universidades continúan siendo las mismas expendedoras de títulos y certificados caros y nulos (...) Todas las actitudes que se adopten para hacer comprender a quien corresponda que tal indiferencia por los problemas universitarios no puede ni podrá tolerarse, nos parecen buenas. Otro caso sería chillar mujerilmente. Y este método reivindicativo no sirve ya. Quede para algunos zánganos prehistóricos la bulla ineficaz y algarera. La clase escolar, auténticamente escolar, necesita desarrollar su programa con una firmeza que ni consiste en los gritos ni en la desviación de su propio sentido social.<sup>373</sup>

A los que se uniría, entre otros, el propio Luis Rupilanchas, tras la celebración en febrero de 1933 del III Congreso de la UFEH en Valencia, en el que fue elegido comisario general de esta organización. En el artículo que publicó, precisamente bajo el título “Después del Congreso de Valencia”, en el órgano de prensa de la FUE de esta ciudad, resumía las “cuentas pendientes” del gobierno azañista respecto de ese irrenunciable “espíritu de reforma” auspiciado por los estudiantes de la FUE, causa de su progresiva desconfianza en la voluntad real de las autoridades educativas republicanas de aplicar el programa que resolvería el problema de la enseñanza en España, desde las pautas marcadas por los sucesivos congresos de la UFEH:

Es pertinente en este momento señalar que insidiosamente han pretendido ciertas gentes presentar a la U.F.E.H en una situación de gubernamentalismo que no le corresponde, ni existe. Precisamente por su esencia profesional no puede la U.F.E.H colocarse por iniciativa propia frente al poder político; hace falta que sea éste quien ahogue o dificulte el cumplimiento de los fines que a los estudiantes de la F.U.E agrupan para que la protesta aparezca pujante. Y es a consecuencia de o anteriormente expuesto por lo que en los momentos actuales tanto el Congreso como el Comité Ejecutivo han estimado que se precisa romper la pasividad e indolencia que caracteriza la conducta presente del Ministerio de Instrucción Pública. Existen problemas palpitantes cuya solución no puede ser retrasada más tiempo. En su virtud, el Comité Ejecutivo requerirá la cooperación de las Asociaciones que integran la U.F.E.H para determinar al Ministerio a la realización de los puntos siguientes: 1º. Valoración de los títulos profesionales (...) evitándose así el agudo intrusismo que todos los estudiantes lamentan. 2º. Próxima revisión del profesorado (...) 3º. Auténtica e inmediata reforma de las enseñanzas universitarias y técnicas, bajo las directrices generales marcadas en el Congreso Extraordinario de la U.F.E.H. 4º. Representación de los estudiantes profesionales en los organismos que intervienen, principalísimamente, en el desarrollo de la vida docente, tales como Consejo Nacional de Cultura, Junta para ampliación de Estudios, Patronatos de Estudiantes, etc.<sup>374</sup>

Consideraba Luis Rupilanchas que el gobierno ya había traspasado, por su indiferencia y pasividad ante las propuestas de los estudiantes, los límites trazados para una particular interpretación del principio de apoliticismo que la FUE utilizaba, hasta

<sup>372</sup> *Discurso leído por el alumno Pedro Nicandro Martín González, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1932 a 1933*, p. 12-18.

<sup>373</sup> *FUE. órgano de la federación universitaria escolar*, (Valencia), nº 5. Fragmentos del editorial que llevaba por título “Año nuevo”, fechado el 1 de enero de 1933.

<sup>374</sup> *F.U.E órgano de la federación universitaria escolar* (Valencia), nº 7 (1-4-1933).

entonces, como justificación de su actitud contemplativa (y del crédito político concedido casi a ciegas) ante la inacción de las autoridades republicanas apuntada anteriormente y, como portavoz del Comité Ejecutivo de la UFEH, proponía una estrategia dirigida, fundamentalmente, a reforzar la coordinación de todas las FUEs y asociaciones profesionales integrantes de la estructura federal, para evitar así los inútiles “escarceos aislados” de los últimos tiempos, y a “convencer” al Ministerio de Instrucción Pública de que la necesidad de la reforma profunda de la educación en España no era un pretexto estético, pura retórica, sino un objetivo por el que se iba a luchar denodadamente.<sup>375</sup>

Este replanteamiento no significaría en ningún caso, como es lógico, una incitación a la revuelta contra el gobierno, articulada a través de huelgas, algaradas y provocaciones violentas en muchos casos, táctica empleada desde hacía tiempo por las organizaciones confesionales y filo-fascistas para socavar la preeminencia de la FUE –también por algunas asociaciones profesionales integrantes de esta última como respuesta a agresiones sufridas o a motivaciones puntuales de carácter académico-, pero si implicaría, en cambio, la puesta en marcha de medidas de presión que mostraran el descontento de los estudiantes a priori más vinculados ideológicamente al gobierno, por más que su sincera vocación profesional actuase de contrapeso. Así, la falta de respuesta del Ministerio de Instrucción Pública ante las demandas presentadas, en febrero de 1933, por el Comité Ejecutivo de la UFEH en el recién finalizado Congreso de Valencia –resumidas en los cuatro puntos de los que se ocupa el artículo de Luis Rupilanchas citado más arriba-, motivó la convocatoria de una huelga general universitaria por parte de la FUE para los días 10 y 11 de marzo, cuyas razones se explicaron a sus afiliados en un mitin informativo celebrado el 9 de marzo en el teatro María Guerrero de Madrid.

En este acto, participaron, junto al comisario general de la FUE, Luis Rupilanchas, que presidió el mismo, Alfredo Roderó Girón, Gabizón, Genovés y Francisco Pérez Carballo. De la intervención de Francisco, convocado en esta ocasión en calidad de antiguo afiliado por designación de la FUE de Madrid, sólo se reseñaba el éxito de su vibrante discurso, muy aplaudido por la concurrencia, aunque no resulta nada descabellado pensar que el sentido de sus palabras –su mera presencia en el acto era ya una forma de pronunciarse, dado el debate interno desatado en el interior de la FUE acerca de la conveniencia o no de determinados actos de presión- no se apartaría de la justificación de la huelga dada por Santiago Gabizón, que no veía en ella ni una amenaza ni una forma de intimidar al gobierno, sino “una muestra de que la F.U.E se cansa de esperar, pues nada se ha hecho en este tiempo”.<sup>376</sup> Paradójicamente, la huelga fue desconvocada al día siguiente (10 de marzo), después de que el ministro Fernando de los Ríos anunciase el envío al Parlamento de los proyectos de Ley de Reforma de la Enseñanza Universitaria y de Revisión del Profesorado, circunstancia que pasó desapercibida para una buena parte de los estudiantes, inmersos para entonces en un contexto donde la proliferación de incidentes entre estudiantes republicanos, por un lado, y católicos y fascistas, por el otro –iniciados ahora en la Universidad Central y

---

<sup>375</sup> Ibidem.

<sup>376</sup> *El Sol*. 10 de marzo de 1933.



extendidos al resto de los distritos universitarios del país- . era percibida como un hecho inevitable.

La radicalización parcial de la estrategia de la FUE, expresión de insatisfacción general ante la supuesta inacción gubernamental pero ejemplo, por el momento, de moderación en los medios de protesta y presión utilizados, generaba necesariamente un debate en el seno de la UFEH /FUE, como vamos viendo, acerca de los objetivos e instrumentos más adecuados para desarrollar la proyectada reforma educativa con la implicación efectiva del ejecutivo de Azaña, cuyos protagonistas se reflejarían nítidamente, en ese mes de marzo de 1933, en las páginas del semanario *Gaceta Universitaria*, órgano de la FUE de Madrid. Así, en el número del 2 de marzo un representante de la generación que fundó la FUE y se curtió en la lucha emprendida por esta organización contra la dictadura de Primo de Rivera –admitiendo que fue proyectada, fundamentalmente, para la erosión de la dictadura, considerada en aquel tiempo una utopía la reforma de universidad bajo la égida del dictador- escribía un artículo, firmado con las iniciales “F.G”, contra el empleo abusivo de la huelga como arma indiscriminada de presión contra el gobierno, que en su opinión se estaba produciendo entonces por parte de los estudiantes, aun cuando juzgaba legítima la desilusión ante la “escasa y torpe” actuación del Ministerio de Instrucción Pública. Abuso de la huelga que, en su opinión, ponía en peligro a la universidad, resignada desde hacía casi una década a alteraciones constantes del calendario docente. Culminaba este articulista su alegato contra la protesta estudiantil, situándose más allá de la mera postura progubernamental –explicable en función de afinidades ideológicas o a partir del ingreso de algunos estudiantes, graduados o no, en el aparato político-administrativo del nuevo régimen republicano- y aduciendo ante una de las demandas presentadas por la UFEH al gobierno a finales de febrero (en concreto, la erradicación del intrusismo profesional), que “un profesional bien formado no debe temer intrusismo”.<sup>377</sup> Este artículo fue publicado en primera página, inserto en una sección titulada significativamente “La universidad en peligro”, lo que hablaba con claridad del enfoque que esta publicación le daba al problema. Un texto en cursiva informaba, a modo de editorial introductorio, sobre el gran prestigio del autor del artículo, en el contexto del movimiento estudiantil liderado por la FUE, y se mostraba discrepante sólo con la “interpretación de las causas” y con la exposición del problema de fondo en cuestión.

La respuesta al polémico texto llegó por partida doble. Primero, en la *Gaceta Universitaria* de la semana siguiente, concretamente en el número del 9 de marzo, también en portada e incluido en la citada sección, un editorial incidía de igual manera en la inoperancia de las autoridades educativas republicanas, dedicadas únicamente a una oscilante política de mecenazgo, pero achacaba la responsabilidad del exceso de huelgas que se habían producido durante los últimos tiempos a la inoperancia del Ministerio de Instrucción Pública. En este sentido, marcaba una cierta distancia con los políticos republicanos encerrados en una burbuja de autocomplacencia. Y lo hacía, primeramente, respecto de la idea difundida por éstos sobre el papel trascendental

---

<sup>377</sup> *Gaceta Universitaria*. 2 de marzo de 1933.

jugado por los estudiantes en la demolición del absurdo representado por la dictadura de Primo de Rivera. Recordaba, pues, que los estudiantes se levantaron en inicio contra la monarquía porque veían desatendidas sus expectativas y en serio peligro el propio futuro de la universidad, nunca como “la avanzadilla de sus más lentas huestes”, en alusión a los hombres que trajeron la República. Y, más tarde, subrayaba el criterio desacertado mostrado por el gobierno republicano en el tratamiento de los problemas educativo y universitario, al que juzgaba favorecido por la actitud benevolente mostrada hasta entonces por los estudiantes de la FUE, alejados momentáneamente de la crítica pública por lealtad a las instituciones republicanas en sí, en evitación de que éstas se vieran perjudicadas por el desgaste de sus gobernantes:

Los estudiantes, pues, se han visto desatendidos, cuando menos, por la Institución republicana. En ella tenían gran fe los jóvenes universitarios. Resistíame, por ello, a un enjuiciamiento que, aunque se refiriese sólo a sus gobernantes, pudiera herir a aquélla. Por obsequio a la República no publicaron su descontento, al que dieron expresiones momentáneas: esas parciales huelgas, de invisible motivación, a que hemos aludido. Ahora, la suma de esos descontentos parciales es un trazo firme, bajo el que se agrupan los muchachos de la F.U.E, así como la suma de todos los desaciertos ministeriales es un rotundo trazo expresivo de la ineptitud ministerial. Parece inminente una huelga que, si los dirigentes de la F.U.E hacen proceder de la propaganda de sus motivos de agravio, prenderá fuertemente.<sup>378</sup>

Del mismo modo, en la tercera página de este número se incluía otro texto, éste firmado con una “Z” por un autor o un grupo de autores más críticos con la táctica seguida por las asociaciones estudiantiles coordinadas por la FUE en los últimos años, se entiende que desde la proclamación de la Segunda República en España. La línea de pensamiento expresada en este artículo hacía gala de un apoliticismo más coherente que el subyacente a la vocación profesional pregonada por la mayoría de los dirigentes de la FUE y apuntaba directamente contra la impronta republicana de la que o no pretendían o no podían huir organizaciones como la FUE:

Nunca debemos preocuparnos los estudiantes de asuntos que se salgan del ámbito universitario, porque si así lo hacemos no se harán esperar las consecuencias, como ahora nos ocurre. El error se cometió cuando nuestras agrupaciones se manifestaron a favor de un determinado credo político. Los que hacen un panegírico de las huelgas llevadas a cabo en las postrimerías del pasado régimen y abominan de las que hemos hecho o podemos hacer en los momentos actuales son, indudablemente, unos ilusos. ¿Es que nuestra pretensión era y es apoyar un determinado régimen, o hacer la universidad que necesitamos? (...) No hemos podido ser más comedidos en nuestra actitud con respecto a los gobiernos de la República, y también podemos decir que es imposible que se nos conteste y trate con más indiferencia que ahora.<sup>379</sup>

Este interesante y significativo debate entablado en el seno de la FUE ante la huelga convocada para los días 10 y 11 de marzo de 1933 –que, como hemos visto, se desconvocaría ante la aceleración de las medidas de reforma prometida por el ministro Fernando de los Ríos–, como muestra evidente de la pluralidad de sensibilidades atrapadas en un casi utópico pero sincero ideal universitario, apolítico y profesional, serviría para desmentir, una vez más, ese pretendido idilio mantenido por la FUE y el gobierno republicano, al que le hemos dedicado estas últimas páginas. En otras palabras, la FUE no podía actuar frente al gobierno republicano, frente a la República

<sup>378</sup> *Gaceta Universitaria*. 9 de marzo de 1933, p. 1.

<sup>379</sup> *Ibid.* 9 de marzo de 1933, p.3.

como institución o forma de estado, como lo hizo contra la dictadura de Primo de Rivera, eso era obvio, y debía modular la energía de su discurso.

Y tampoco la mayoría de los dirigentes fueístas, incluido Francisco Pérez Carballo, ignoraba las dificultades con que se encontraba el gobierno de Azaña en su obra de gobierno, obstáculos formidables más relacionados con las desmesuradas expectativas creadas entre amplios sectores sociales, pronto ahogadas en el fuego cruzado de los maximalismos, que con el pretendido sectarismo o la falta de experiencia política del gobierno republicano. Por todo ello mantuvieron en general su confianza en el ejecutivo, y en el Ministerio de Instrucción Pública en concreto, hasta que no les quedó otra alternativa que amagar con, tras agotar otras medidas de menor carga simbólica, el recurso a la huelga como última opción. Un modelo de huelga, eso sí, donde pudieran controlar tiempos, métodos y objetivos. En este sentido, siempre trataron de evitar en lo posible, al menos hasta la caída del gobierno de Azaña, un ataque directo que descalificara en su globalidad al gobierno, a los ministros considerados individualmente o a la misma filosofía política inspiradora de programas y medidas adoptadas, concentrándose en acontecimientos o cadencias puntuales, bajo un lenguaje y una retórica generalmente descafeinados.

De este modo, se pretendía -en sus propias palabras- no causarle heridas a la República en medio de una tempestad política como la vivida en aquellas fechas, ni tampoco infligir daños de envergadura a sus gobiernos. En sí, su ideal de apoliticismo tenía una doble cara, no sólo expresaba el anhelo de una reforma profundísima de la educación y la universidad españolas, sino que, ciertamente, obedecía a un interés por impedir que la universidad fuese un nuevo espacio -y una nueva daga afilada- desde donde atentar contra el ideal y las organizaciones fueístas y el equilibrio inestable que sostenía el futuro de la República, concebida como forma de estado y premisa democrática y ética, verdadera columna vertebral de una idea progresista de ciudadanía. Ésa era, además, otra razón para explicar el que una buena parte de la FUE, como es el caso del propio Francisco Pérez Carballo, intentaran separar, con mayor o menor decisión, su compromiso social y político con partidos e ideologías de la izquierda republicana y liberal, de su identidad profesional y académica, objetivo que en ese contexto histórico podría parecer un tanto retórico, por no decir verdaderamente inviable.

La FUE sufriría una verdadera persecución durante el denominado “bienio rectificador”, que acabaría por desnaturalizarla. A partir de octubre de 1934 perdería, además, su impronta profesional y apolítica y sería impelida a su izquierda por la inercia frentista impulsada por la infiltración del BEOR (y su sucesora, la UEA) en sus órganos directivos.<sup>380</sup> Los factores citados acabarían, a no tardar demasiado tiempo, por neutralizar su influencia dentro de la universidad. El punto de inflexión de este proceso

---

<sup>380</sup> Manuel Azcárate, por entonces estudiante comunista en la Facultad de Derecho y miembro del comité ejecutivo de la UFEH por iniciativa de Manuel Tuñón de Lara, refiere en sus memorias como este órgano fue presionado brutalmente por los socialistas para que dedicasen la asignación económica recibida del gobierno para financiar La Barraca a la compra de pistolas para defenderse de la violencia falangista, en un momento en que, consumada ya la fusión de las juventudes socialistas y comunistas en la JSU, continuaban las tensiones entre los estudiantes de ambas tendencias. Véase de este autor, *Derrotas y esperanzas. La República, la Guerra Civil y la Resistencia*, Barcelona, Tusquets, 1994, p. 103.

de desmantelamiento funcional lo marcó el ministro Villalobos al anular en octubre de 1934 los decretos que la habían permitido estar representada en los Claustros y Juntas de gobierno y de facultad de los establecimientos docentes españoles. Por otra parte, en esta carrera de fondo (iniciada desde casi la fundación de esta organización por controlar y utilizar, neutralizar o destruir la FUE) irrumpiría con fuerza el cada vez más poderoso SEU, dispuesto a absorber a todas las asociaciones estudiantiles conservadoras y confesionales y a actuar en realidad como la organización juvenil de Falange, que en un momento determinado llegó incluso a plantearse una fusión con aquella.<sup>381</sup> Así, en la FUE, previamente se habrían infiltrado como asociados no pocos falangistas, favorecidos en este último caso por el carácter apolítico que la FUE –el ala de la organización que aún no había sido cooptado por socialistas y comunistas- trató de conservar aun después de la revolución de octubre de 1934 en Asturias.

### **Del XV Congreso de la CIE en Venecia a la Conferencia Franco-Española de Inter-Ayuda Universitaria.**

Para concluir este capítulo, en el que estamos analizando la figura de Francisco Pérez Carballo como directivo de la FUE, en el contexto político y cultural de una República envuelta en un proyecto reformista mal interpretado por la parte de la sociedad española más conservadora, y tal vez demasiado ambicioso considerados los obstáculos estructurales existentes, nos detendremos en la dimensión internacional de la actividad profesional y académica de Francisco como representante de la UFEH en dos acontecimientos relevantes para el movimiento estudiantil internacional.

En primer lugar, nos centraremos en su presencia en el XV Congreso de la CIE celebrado en Venecia del 19 de agosto al 5 de septiembre de 1933, que precedió en unos días al sexto Congreso internacional de estudiantes de Derecho y al de la Prensa universitaria, organizados de forma simultánea en la misma ciudad. A todos ellos asistió Pérez Carballo como miembro de la delegación española constituida al efecto. A renglón seguido, se analizará su activa participación en la Conferencia franco-española organizada por el comité español de la Inter-Ayuda Internacional Universitaria (I.S.S), en abril de 1934.

La Confederation Internationale de Etudiants (C.I.E) fue la denominación adoptada en 1919 por la *Réunion des étudiants alliés* y englobó, en una primera fase, a estudiantes británicos, franceses, belgas y holandeses interesados en coordinar actividades e intercambiar información sobre sus respectivas esferas de actuación nacionales.<sup>382</sup> En años sucesivos la CIE admitió a bastantes uniones nacionales de estudiantes europeas y latinoamericanas -entre estas últimas, destacaron por su extraordinaria actividad la mexicana y la brasileña-, incluida la representación española, que participó en el primer congreso de esta organización en 1921. La tradicional lucha entre estudiantes liberales y católicos se reflejó también en la necesidad de ostentar la representación española en los sucesivos congresos de la CIE, controlada por la UNE hasta 1928, por los católicos en el congreso de Budapest de 1929 y por la UFEH a partir

<sup>381</sup> E. González Calleja, *Rebelión en las aulas...* op. cit, p. 179.

<sup>382</sup> J. Gallenca, "The Confederation Internationale de Etudiants", *The Student*, nº. 10 (1957).

del celebrado en Bruselas en 1930. En el artículo primero de los estatutos de la CIE se señalaban sus objetivos fundamentales: crear lazos de estima y amistad entre los estudiantes e intelectuales de todos los países; establecer una relación permanente entre las organizaciones estudiantiles de todos los países, coordinando sus actividades en el ámbito universitario y estudiar los problemas internacionales relativos a la enseñanza superior y a la vida intelectual y material de los estudiantes, acción que debía ser independiente de condicionamientos políticos o religiosos.<sup>383</sup> Así pues, la forja de un vínculo entre la juventud universitaria internacional, el intercambio cultural y la mejora de la universidad y la vida académica –con especial hincapié en la coordinación de proyectos intelectuales, viajes culturales y actividades deportivas, así como en el desarrollo de la prensa estudiantil- fueron las señas distintivas de esta organización, constituida desde una perspectiva que concebía al estudiante como protagonista real de la vida universitaria y no como actor pasivo de una rutina social más. Este principio se expresaba a la perfección en el término “student as such” –convertido en uno de los lemas más importantes del movimiento estudiantil internacional después de la segunda guerra mundial-, cuyo significado, en palabras de Philip G. Albach, revelaba que la CIE “was interested primarily in matters concerning students as students, and not as members of a broader society”, orientación que, como hemos visto, no difería en lo sustancial de la seguida por la UFEH en España.<sup>384</sup>

En 1937, en un momento en el que englobaba a cuarenta y dos uniones nacionales. la CIE fue reconocida por la Sociedad de Naciones como la organización internacional de estudiantes oficial. Aunque, en realidad, pesó más el papel que jugó de cara a la Sociedad de Naciones que la influencia ejercida sobre los propios estudiantes –en cualquier caso, el movimiento estudiantil internacional no se desarrollaría plenamente hasta después de la segunda guerra mundial-, su activa labor continuó hasta 1940, año que los alemanes ocuparon su sede central de Bruselas y destruyeron la mayoría de sus archivos y oficinas.

En el III Congreso ordinario de la UFEH celebrado en Valencia, en febrero de 1933, se habían fijado las directrices que la delegación de esta organización debería seguir en el Congreso de Venecia de la Confédération Internationale de Etudiants (C.I.E), prevista para mediados de agosto de ese año. La consolidación de la neutralidad religiosa y política del movimiento estudiantil internacional –amenazadas por la actitud de las delegaciones rumana e italiana-, la rápida implantación del carnet de identidad escolar, el problema de la interlocución con las distintas minorías nacionales (y con la semita en particular) y el *cinema científico* serían los principales preocupaciones de la delegación española de la UFEH de cara al Congreso de la CIE en Venecia, cuyos integrantes, según el acuerdo adoptado por la UFEH en Valencia, debían ser miembros del comité ejecutivo de esta organización (o antiguos miembros del mismo) u ocupar un puesto en la estructura orgánica de la CIE. En función de estos parámetros, Francisco

---

<sup>383</sup> Enunciados en el texto de una ponencia que Carmen Castro presentó en el Congreso de la UFEH de Valencia, bajo el título “La U.F.E.H en la F.U.E”, publicada por *FUE órgano de la federación universitaria escolar* (Valencia), nº. 7 (abril de 1933).

<sup>384</sup> P. G. Albach, “The international student movement”, en *Journal of Contemporary History*, Vol. 5, nº 1 (1970), p. 159-61.

Pérez Carballo acudiría al Congreso de la CIE en Venecia –y a los subsidiarios de Estudiantes de Derecho y de la Prensa universitaria- como antiguo miembro de la junta de gobierno de la FUE de Madrid, formando parte de una delegación que integraban, así mismo, José López Rey y Luis Rupilanchas,<sup>385</sup> elegido comisario general de la UFEH meses atrás. En la memoria explicativa que presentaría a la JAE en 1935 y 1936 para optar a una pensión de estudios en Alemania con el fin de formarse en la disciplina del derecho privado -solicitud que no prosperó, por distintas razones, en ninguna de las dos convocatorias-, Francisco decía haber realizado una serie de viajes por Europa que incluirían estancias en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Es muy probable que la mayoría de ellos estuvieran relacionados -su presencia en Venecia no sería una excepción-, con su vinculación al movimiento estudiantil internacional y a la representación de la UFEH en el mismo.<sup>386</sup>

La prensa madrileña informaba, unos días antes de la apertura del Congreso de Venecia, del libramiento, por parte del gobierno republicano, de la cantidad de 4,000 pesetas para que tanto José López Rey como Francisco Pérez Carballo pudieran desplazarse a Venecia, sin que se mencionase, como beneficiario de esta cantidad, el nombre de Luis Rupilanchas, que finalmente viajaría a la ciudad italiana y, de hecho, lideraría la actuación de la delegación española en función del cargo que ostentaba dentro de la UFEH.<sup>387</sup>

El martes 22 de agosto, con las primeras sesiones del congreso ya en marcha, partieron de Madrid hacia Venecia dos de los tres delegados designados por el comité ejecutivo de la UFEH, Luis Rupilanchas y Francisco Pérez Carballo, omitiéndose tanto en esta información, como en las posteriores publicadas por la prensa española acerca de este evento, cualquier referencia a López Rey, quien probablemente no llegó a viajar a la ciudad italiana por razones desconocidas. En una entrevista concedida por Rupilanchas al diario *El Sol* antes de emprender su viaje, se ponía de manifiesto la principal preocupación que inspiraría la posición de los delegados españoles en los debates y reuniones del congreso, en coherencia con la filosofía defendida por la UFEH/ FUE desde su fundación: el mantenimiento del estricto compromiso profesional y académico del movimiento estudiantil, libre de las injerencias políticas y confesionales que ya habían sido denunciadas en el Congreso de la CIE de Riga.

Así, insistiría Rupilanchas en la demanda de la UFEH en relación al cumplimiento estricto del artículo quinto de los estatutos de la CIE, que establecía la neutralidad política y religiosa de esta organización, y en denunciar la *fascistización* de las asociaciones estudiantiles italianas y la militancia religiosa cristiana de las rumanas, decididas todas ellas a utilizar los foros estudiantiles para hacer propaganda de sus ideas. Por otra parte, el comisario general de la UFEH subrayaba la importancia del cine educativo y la necesidad de coordinar la acción de los tres ministerios que se encargaban de su regulación y desarrollo en España (Agricultura, Trabajo e Instrucción

<sup>385</sup> La noticia de la designación, por parte del comité ejecutivo de la UFEH, de Rupilanchas, López Rey y Pérez Carballo como delegados de esta organización en el Congreso de la CIE de Venecia en *El Sol* de 6 de julio de 1933.

<sup>386</sup> JAE. Exp. Pérez Carballo.

<sup>387</sup> *Heraldo de Madrid*. 15 de agosto de 1933.

Pública) y se refería de nuevo a la polémica actitud de los estudiantes italianos, esta vez opuestos a la decisión de la CIE de encomendar a la UFEH la organización internacional del cine universitario.<sup>388</sup>

Una vez hubo finalizado el Congreso de Venecia, Pérez Carballo y el comisario general de la UFEH, Luis Rupilanchas, concedían a *El Sol* una entrevista –en realidad, enviaron una nota firmada conjuntamente– en la que sintetizarían su labor en el XV Congreso de la Confederación Internationale des Etudiants. De sus declaraciones, se deducía el énfasis puesto en la reivindicación del carácter apolítico y aconfesional de la CIE, que la delegación española puso sobre la mesa del pleno del Congreso, una estrategia destinada a la defensa de una identidad abierta, claramente expresada en el artículo quinto de los estatutos de esta organización, y a afirmar, con igual rotundidad, la absoluta prevalencia de la discusión de los problemas técnicos universitarios en todos los foros de debate dependientes de esta organización. De hecho, ya antes de dar este paso, la delegación española había protestado por el hecho de que el Congreso hubiese sido organizado por grupos de estudiantes fascistas italianos, maniobra que provocó una airada reacción de la prensa de este país.<sup>389</sup> Para ambos delegados, que habían viajado a Venecia con instrucciones muy claras en el sentido de plantear, incluso, en caso de ver desatendidas sus propuestas en pro de la neutralidad y del profesionalismo –auténticas divisas de la organización española, como se deduce de las conclusiones adoptadas por el Congreso de la UFEH celebrado en Valencia meses atrás–, la posible separación de la UFEH de la estructura de la CIE, fórmula a la que no se recurrió debido al respaldo moral obtenido por las posiciones españolas en Venecia.

El hecho de que el comité ejecutivo de la CIE no se reuniera finalmente y, por consiguiente, no se llegase a ningún acuerdo oficial que refrendase la postura neutralista española no supuso ninguna decepción. Y esto fue así porque, según su propio relato, sus tesis a favor de una interpretación rígida de los conceptos de neutralidad política y confesional fueron aceptadas por la mayoría de las delegaciones de los países participantes en las reuniones oficiosas sostenidas en el transcurso del Congreso para tratar este asunto, recibiendo un apoyo especial de las delegaciones suiza, checa, belga y británica, que abarcó casi la totalidad de las propuestas realizadas por la delegación española. En conclusión, expresaban su satisfacción ante el cambio de rumbo emprendido en Venecia por la CIE para tratar de frenar la irrupción de ideologías de cualquier naturaleza en el espacio acotado de la universidad, a diferencia de los sucedido en congresos anteriores, como el de Bruselas, en el que, en opinión de Rupilanchas y Pérez Carballo, se perdió el tiempo en este aspecto, “como se pierde hoy por los estudiantes en todos lados, hablando de política”.<sup>390</sup> No era un desprecio estudiado a la acción política, sino que se trataba de otra respuesta defensiva ante la

---

<sup>388</sup> *El Sol*. 23 de agosto de 1933.

<sup>389</sup> Entrevista a Alfredo Gironde Coedo. Madrid, 19 de mayo de 2008. El entrevistado recuerda que en los años cincuenta pudo leer, en la casa familiar de los padres de Francisco Pérez Carballo en Madrid, recortes de periódicos italianos relativos a la actuación de los delegados españoles en el Congreso de Venecia, en los que se reflejaba su polémica actuación, contemplada como un verdadero alegato contra el régimen fascista.

<sup>390</sup> *El Sol*. 22 de octubre de 1933.

presión ejercida contra los estudiantes progresistas por las organizaciones universitarias de signo católico o fascista, que ponía en jaque a la UFEH/FUE tanto en Europa como en España.

Por otra parte, los delegados españoles consiguieron que el idioma castellano fuese aceptado como una de las lenguas oficiales del congreso y, pese a la oposición italiana, la coordinación del cine educativo producido por las distintas organizaciones nacionales integrantes de la CIE.

También en Venecia, y por las mismas fechas, se celebró el sexto Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho, al que asistieron los mismos delegados que habían participado en el de la CIE, Luis Rupilanchas y Francisco Pérez Carballo, que también tomarían parte, aunque esta vez de forma puramente testimonial, en el de la Prensa Universitaria, celebrado simultáneamente a los dos anteriores.

Como había sucedido en el Congreso de la CIE tan sólo unos días antes, en el que la delegación española protestó porque la organización de este evento le hubiese correspondido a grupos universitarios fascistas italianos, los dos delegados españoles intervinieron para poner de manifiesto determinadas irregularidades concernientes a la parte organizativa del congreso. De ese modo, impugnaron la designación del nuevo comité ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Derecho por estimar que se había producido de manera irregular, dándose la circunstancia de que la denuncia de esta maniobra se hizo efectiva a pesar de que a la UFEH se le había reservado un puesto en este órgano, probablemente para atenuar la previsible reacción adversa de la delegación española, conocida la política de la UFEH de velar especialmente por la base legal de toda su actuación. La postura adoptada por Luis Rupilanchas y Pérez Carballo a este respecto fue clave para la anulación del nombramiento del primer comité y su sustitución por uno alternativo, elegido por cauces consensuados por el conjunto de las delegaciones nacionales presentes en este congreso.

Pero fue en la parte técnica del Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho donde la participación de Francisco Pérez Carballo adquirió un especial protagonismo, no en vano el asunto a tratar en las reuniones de su comisión científica fue “El derecho romano y su situación actual”, hecho que, por sí sólo, podría justificar su viaje a Venecia, para cuya realización debió haber obtenido un permiso de la Secretaría del Congreso de los Diputados, donde prestaba sus servicios como oficial letrado con destino en biblioteca desde marzo de 1933.

En la sesión de la comisión científica, Pérez Carballo fue el primero en intervenir. De su alocución, la prensa madrileña destacó varios pasajes que revelaban de forma significativa la forma de entender el mundo subyacente a los sólidos conocimientos demostrados por un abogado con verdadera vocación de jurista, que pretendía compaginar su compromiso social y político con la investigación académica en el campo del derecho romano.<sup>391</sup> En uno ellos, Pérez Carballo se refería a la diferencia existente entre el valor del término jurídico romano y el del término jurídico moderno,

---

<sup>391</sup> Véase la crónica publicada por *El Sol* sobre el desarrollo del Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho del domingo 12 de noviembre de 1933.



“según el sentido de éste, por su transformación en el tiempo”. Divergencia basada en la afirmación, desde la perspectiva comparativa empleada por Pérez Carballo, de la inexistencia de un verdadero derecho público romano, debido a su fundamento en la inmovilización de la sociedad. “El derecho romano –resumió– constituye, artística y técnicamente, un monumento, pero completamente antiprogresista, antisocial e inhumano”.<sup>392</sup> La ponencia del abogado madrileño originó un animado debate que dio paso a las intervenciones de un delegado checoslovaco, que incidió en la relación entre el derecho romano y el germánico, y de Roberto Volpe, representante del grupo universitario fascista de Salerno, autor de un vibrante y previsible alegato en defensa del derecho romano. Para finalizar, esta comisión abordó los problemas de la “sobreproducción de juristas”, contemplando también su estrecha vinculación al del intrusismo profesional, y propuso un conjunto de soluciones que incluían la potenciación del papel del “estado inteligente” en la regulación de estas cuestiones.

La participación de Pérez Carballo en los congresos estudiantiles celebrados en Venecia, como miembro de la delegación de la UFEH enviada a la ciudad italiana, contribuyó al contraste y consolidación, en un ámbito más amplio, de los principios fundamentales que habían definido el programa de la UFEH hasta entonces –neutralidad política y confesional– y, en el plano profesional y académico, significó una nueva aportación a una perspectiva renovadora en el estudio del derecho romano desde una concepción progresista y avanzada del derecho. La romanística española despuntaría a nivel internacional a mediados del siglo XX, con el eminente profesor Álvaro d’Ors a la cabeza –facilitando de esta manera la adopción del español como una de las lenguas científicas de esta disciplina–, otra oportunidad perdida para el malogrado Pérez Carballo, cuyos prometedora figura como jurista era muy valorada por prestigiosos profesionales del derecho bastantes años después de su muerte.<sup>393</sup>

El 3 de abril de 1934, se inauguró en la Asociación de Estudiantes Internacionales de Madrid la Conferencia franco-española de Inter-Ayuda Universitaria, organizada por el comité nacional español de la International Student Service (ISS), institución nacida, al igual que la CIE, tras la conclusión de la primera guerra mundial. En un principio, sus fines eran puramente filantrópicos, centrados en atender las necesidades materiales urgentes de intelectuales y universitarios europeos afectados por la crítica situación de postguerra, objetivo plasmado en la distribución hasta 1926 de comestibles, ropa de abrigo o carbón a lo largo de 93 ciudades, correspondientes a 17 países, beneficiando a cerca de 105,000 universitarios.<sup>394</sup>

La I.S.S tenía cuatro misiones fundamentales que cumplir, que incluían, además de la aportación de ayuda material y moral a estudiantes de todos los países con independencia de condicionantes políticos, religiosos o raciales el refuerzo de la vida colectiva de éstos, el acercamiento intelectual de universitarios de diferentes razas, grupos y clases sociales y el desarrollo de los centros de enseñanza superior para

---

<sup>392</sup> Ibid.

<sup>393</sup> Entrevista a Carmen Veiga de Bernardo y Juan Pérez-Carballo Veiga. Madrid. 5 de febrero de 2008.

<sup>394</sup> Ponencia de Carmen Castro, a la sazón vicepresidenta de la Mesa de la Conferencia francoespañola de Inter Ayuda, titulada “La U.F.E.H en la International Student Service”, en *FUE órgano de la federación universitaria escolar* (Valencia), n.º. 7 (abril de 1933).

convertirlos en "verdaderos centros de la cultura nacional, en íntimo contacto con la realidades internacionales, económicas y sociales del mundo moderno".<sup>395</sup> Las propuestas para alcanzar estos objetivos oscilaban desde la realización de estudios y encuestas sobre problemas acuciantes para el movimiento estudiantil internacional, hasta la celebración de congresos, conferencias, viajes de estudios, etc. La Secretaría de la ISS estaba en Ginebra y para desarrollar sus funciones se apoyaba en los distintos comités nacionales, entre los que se incluían los de EEUU, Canadá, África del Sur o Nueva Zelanda, junto a los de un buen número de países europeos. A lo largo de 1933 se constituiría el comité nacional español y se produciría su plena integración en el movimiento internacional de Inter-ayuda universitaria. Las primeras tareas que emprendería el comité español se centrarían en la creación de residencias, campos de trabajo y comedores de estudiantes –el intento de articular un servicio de auto-ayuda entre los estudiantes necesitados parecía, en principio, más dificultoso- y en la celebración de una conferencia franco-española, prevista inicialmente para octubre de 1933, para, en una segunda fase, prestar su colaboración en la preparación de un encuentro franco-germano. Las conferencias organizadas por la ISS solían ser bilaterales o trilaterales y a ellas asistían estudiantes y representantes de todos los movimientos y organizaciones juveniles existentes en cada país (comunistas, socialistas, fascistas, judíos, católicos...), para discutir libremente durante una semana sobre cuestiones de actualidad.<sup>396</sup>

La primera jornada de la Conferencia franco-española se celebró el tres de abril, como decíamos, bajo la presidencia del subsecretario de Instrucción Pública, Prieto Bances, acompañado por el rector de la Universidad Central, León Cardenal y el decano de Derecho, Adolfo Posada, entre otras autoridades académicas. En sus sesiones, distribuidas a lo largo del día, acogió discursos del mencionado Prieto Bances, Sbert, presidente de la Sociedad española de Inter-Ayuda Universitaria y también de la Mesa de la Conferencia –Carmen Castro ocupó una de las vicepresidencias-, Rufilanchas (UFEH), Pradera (CECE), M. Mantoux presidente del Comité de Inter-Ayuda Universitaria Internacional, y de representantes de la delegación francesa, la mayoría de ellos centrados en el análisis de la vida universitaria en ambos países, destacando en la intervención de Pradera, portavoz de los estudiantes católicos, los elogios dirigidos a la objetividad demostrada por Sbert, el omnipresente estudiante liberal, en su exposición, dedicada a glosar la historia de la universidad española.<sup>397</sup>

Francisco Pérez Carballo participó como ponente en la sesión matutina del día siguiente, miércoles 4 de abril, dedicada a debatir los problemas sociales y económicos de la universidad, junto al delegado francés Lackembach. Comenzaba Pérez Carballo su disertación definiendo la condición de estudiante universitario y vinculándola a "un estado que informa toda la vida y que hace preocuparse por todos los problemas de la universidad, así como por la formación del hombre", añadiendo un poco más adelante que "todo estudiante o universitario debe reflejarlo en su misión social",<sup>398</sup>

---

<sup>395</sup> Ibid.

<sup>396</sup> Ibid.

<sup>397</sup> *El Sol*. 4 de abril de 1934.

<sup>398</sup> *El Sol*. 5 de abril de 1934.

afirmaciones que guardaban una especial coherencia con el tan manido principio de neutralidad política y religiosa que debía guiar al estudiante en el desarrollo de su papel dentro del espacio estricto de la universidad y, ya en el plano político, añadían una proyección del espíritu universitario en el compromiso social con la idea republicana de ciudadanía. Después de esbozar el concepto de profesionalismo –y de proponer medidas como la homologación internacional de títulos universitarios–, subrayó la importancia de las conferencias y la cooperación intelectual para favorecer el conocimiento entre los pueblos –en este caso, España y Francia–, y puso el acento sobre la necesidad de que las relaciones internacionales se impregnasen de un pacifismo sincero, basado en un desarme moral que se vinculase a cada realidad nacional, de apariencia tan idealista como abstracta. Pero también se detuvo en los problemas económicos que afectaban a la universidad, preguntándose por el impacto que provocaría la aparición de un “proletariado universitario”, consecuencia de una universidad masificada –así se veía entonces a esta institución en Europa– y no reservada a los más capaces, en el contexto de una crisis económica fuerte y generalizada. En relación al problema del paro, entonces una verdadera epidemia en países como España, Pérez Carballo hizo distinciones entre el paro originado por la superproducción y el causado por la crisis y entre el paro obrero y el intelectual, preguntándose a continuación si estas dos últimas tipologías podrían neutralizarse aplicando una misma solución. En relación a las fórmulas manejadas hasta entonces para abordar el problema del “paro intelectual” enunciaba las siguientes:

El fondo común o solidaridad, la vuelta a la Universidad y los nacionalismos. Es decir, vías de solución distintas al paro, que han pretendido el trabajo obligatorio del estudiante, el prolongar la vida escolar, allegar socorros o fondos y, por último, las soluciones de la interayuda universitaria.<sup>399</sup>

Por último, y tras hacer hincapié en el asunto de la superproducción de juristas, llegaba a las siguientes conclusiones, contextualizadas en un enfoque dirigido al nuevo modelo de juventud surgido tras la finalización de la primera guerra mundial:

(...)la universidad no suele dar más que el tono, pero no cultura general, ni experiencia ni especialización, a cuyos fines ha de atender el estudiante por {el} antes de atender a su misión social. Si es verdad que hay un predominio juvenil en nuestra época, el joven es un nuevo tipo de joven y de universitario: el universitario activo de la posguerra, la interayuda universitaria para hacer posible el estudio a los más pudientes es un hecho nuevo. Los problemas económicos y sociales existen en cualquier clase o grupo. Además existen en la sociedad. Es un hecho general hoy.<sup>400</sup>

Tras ser interpelado por Lackembacher, el ponente francés, acerca de la idea de pacifismo expuesta en su ponencia y asistir a las intervenciones de éste –centrada exclusivamente en aspectos técnicos de la realidad universitaria–, Schmid, Herrero, Diamante, Thomas, Semprún, Barón Castro y Rofilanchas, Pérez Carballo habló de nuevo para replicar a algunos de ellos y puntualizar algunas cuestiones. En respuesta a lo expresado por Lackembacher, afirmó que la orientación profesional podía hacerse dentro de la Universidad, detalló las nuevas concepciones sobre la segunda enseñanza aparecidas en España y se decantó por el sistema de “préstamos sobre el honor” antes que por las bolsas (becas), un debate aún abierto en la actualidad. Para finalizar, y entre

---

<sup>399</sup> Ibid.

<sup>400</sup> Ibid.

otras observaciones realizadas a los intervinientes citados anteriormente, respondía a Schmid sentenciando que “aunque es preferible una evolución efectiva a una revolución, esta puede hacerse también desde los ministerios”,<sup>401</sup> frase que aun descontextualizada –la crónica periodística de *El Sol* no aportaba los datos necesarios para concretar la cuestión exacta que la había suscitado- podía revelar en abstracto una determinada filosofía política y, lo que es más importante, una fidelidad a la misma, encarnada por la reforma desde el poder emprendida, por ejemplo, por Azaña en España.

El viernes 6 de abril se celebraron las reuniones más “políticas” de la Conferencia, sin que exista constancia de la presencia o participación de Francisco Pérez Carballo en las mismas. El ponente español de la sesión que abordó las tendencias políticas de las nuevas generaciones fue el profesor Luis Recaséns, mientras que Fernando de los Ríos expuso sus puntos de vista en la dedicada al papel de la juventud en las relaciones internacionales. En los debates posteriores, intervinieron, entre otros, Semprún y María Zambrano, que rechazó los conceptos de revolución y contrarrevolución alumbrados por el lenguaje político y cultural de la época.<sup>402</sup> La jornada finalizó con una representación nocturna de *La Barraca* en el teatro María Guerrero, a la que estaba invitado el presidente de la República española.

La Conferencia franco-española pudo ser el último jalón de la trayectoria como activista y líder estudiantil de Francisco Pérez Carballo, tanto a nivel nacional como internacional. Representar a la UFEH en foros internacionales de debate articulados por el movimiento estudiantil encabezado por organizaciones como la CIE o la ISS no constituía una mera anécdota. Además, con toda probabilidad, su presencia en el Congreso de Venecia de la CIE y en la Conferencia franco-española de Inter-ayuda Universitaria celebrada en Madrid no puede considerarse un hecho aislado, pues las citadas no fueron las únicas citas internacionales a las que acudió en representación de la UFEH. Aunque no haya quedado prueba fehaciente de ninguna otra participación en este tipo de reuniones, congresos o conferencias internacionales, los viajes que reconoció haber hecho por Francia, Inglaterra, Alemania e Italia –sin aportar más datos sobre los mismos-, su dominio de varias lenguas extranjeras (francés, inglés y alemán), el prestigio conseguido entre sus compañeros, incluidos los que profesaban ideologías muy diferentes a la suya como los falangistas, y su asombrosa capacidad de trabajo avalarían una hipótesis en el sentido apuntado.

A la altura de abril de 1934, su vida profesional se había estabilizado, al menos en lo económico, ya que su puesto de funcionario como oficial letrado del Congreso terminaría con años de preocupaciones constantes y de muchas privaciones, y su carrera política pronto se orientaría hacia mayores responsabilidades dentro de la recién nacida Izquierda Republicana de Azaña, derivadas de una transición asumida individual y colectivamente entre sus cargos en las directivas de las juventudes de AR y de IR. En esas condiciones, su fidelidad inquebrantable a la idea de una universidad apolítica y aconfesional, neutral ideológicamente, como base de la cultura nacional y del progreso

---

<sup>401</sup> Ibid.

<sup>402</sup> *Heraldo de Madrid*. 6 de abril de 1934.

científico de la República –un blindaje para contrarrestar tanto los intentos monopolizadores de las organizaciones estudiantiles católicas y falangistas, como la tentación incómoda de volverse contra las autoridades republicanas-, no haría sino distanciarle si cabe un poco más de una FUE que en los meses posteriores –tomamos como referencia la primavera de 1934- perdería sus tradicionales señas de identidad a manos de las organizaciones juveniles socialistas y comunistas, decididas a convertir el movimiento estudiantil en una pieza más de una estrategia frentista destinada a desalojar del poder a las derechas y a conjurar el inminente peligro fascista.

#### **IV. EL MERITORIO Y LA ESCENA.**

##### **Acción Republicana en el espejo de su organización juvenil.**

Francisco Pérez Carballo formó parte de la última directiva de la Juventud de Izquierda Republicana (JAR), elegida a finales de noviembre de 1933 en medio de un cambio de ciclo político y social que también afectaría (y muy directamente) al partido de Azaña. La prensa del miércoles 29 de noviembre daba la noticia oportuna sobre la votación celebrada para elegir a la nueva Junta directiva de la JAR, en la que ingresaría Pérez Carballo como vicepresidente segundo. Entre sus compañeros electos, figuraban Gerardo Saura (presidente) –miembro años después, durante la guerra civil, de la Junta de Defensa Nacional presidida por el general Miaja-, Emilio Amador (vicepresidente primero), Francisco García Muñoz (secretario general), Ángel Izquierdo (secretario de actas), Antonio Martín (tesorero), Eduardo Torné (contador) y, como vocales, González Botija, Joaquín Lloréns, Antonio Muñoz y José Serrano.<sup>403</sup> No se sabe con exactitud la fecha de ingreso como afiliado de Pérez Carballo en Acción Republicana, aunque es probable que ya militase en el partido dos años atrás, desde antes de noviembre de 1931, momento en que fue nombrado secretario del subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Enrique Ramos, profesor auxiliar de la misma cátedra de Derecho Romano – desde donde saltaría a la escena política como diputado de AR e IR y, tras el triunfo del Frente Popular, ministro de varios gobiernos de la República en nombre de este último partido-, un semillero brillante de romanistas dirigido por José Castillejo, en la que Francisco ejercería como ayudante de prácticas desde, prácticamente, el momento de la lectura de su discurso en la ceremonia de inauguración del curso académico 1933-34 en el Paraninfo de la Universidad Central. En cualquier caso, y debido a su vinculación a la FUE, estaba exento, en virtud de la política seguida por AR de privilegiar a los que acreditasen haber pertenecido a esa organización estudiantil, de los periodos de cadencia de seis meses establecidos para que los nuevos afiliados (los ingresados a partir del 14 de abril de 1931) votasen las decisiones adoptadas por los distintos órganos del partido, y de dos años para ejercer cargos públicos o representativos, como barrera para frenar a los posibles advenedizos en sus expectativas de medrar bajo el paraguas del poder gubernamental, una prueba más para corroborar el vínculo forjado entre la FUE y el grupo político de Azaña en los últimos compases de la dictadura de Primo de Rivera. Por otra parte, cabe señalar que casi dos meses antes de ingresar en la directiva de JAR y dos días después del acto inaugural del curso académico, el martes 3 de octubre de 1933, se hizo oficial su designación como profesor ayudante de prácticas en la facultad de Derecho de la U. Central,<sup>404</sup> lo que no dejaba de ser significativo puesto que a esas alturas de su vida, a punto de cumplir los veintitrés años, y antes de volcarse en la política, ya había dado los pasos fundamentales para encauzar su vida profesional -había empezado a ejercer como abogado nada más terminar la carrera, utilizando como despacho una habitación del domicilio familiar y, más recientemente, en marzo de 1933,

<sup>403</sup> *Heraldo de Madrid*, 29 de noviembre de 1933.

<sup>404</sup> Comunicación del decano de la Facultad de Derecho, Adolfo Posada, dirigida a Francisco Pérez Carballo informando a éste de su nombramiento como profesor ayudante de prácticas de la asignatura de Instituciones del Derecho Romano, a propuesta de José Castillejo, catedrático titular de la misma, en JAE, Exp. Pérez Carballo.

había aprobado la oposición de oficial letrado del Congreso- y seguía, en paralelo, con sus planes de abrirse camino en el mundo académico con el objetivo de alcanzar una cátedra universitaria. En el plano político se le iban abriendo otras puertas, aunque caminaba sin demasiada prisa –por paradójico que parezca-, pues a medida que se desvinculaba de la FUE, a la que ahora sólo representaba en algunos congresos o encuentros internacionales de estudiantes, como era preceptivo en los casos de estudiantes ya licenciados (“veteranos” se decía), iría encontrando un espacio personal para dedicarle más tiempo a su compromiso político, proyectado también en el Ateneo al presentarse a unas elecciones para ocupar vacantes en su Junta directiva y salir elegido como secretario tercero (también en octubre de 1933)<sup>405</sup> y desprendiéndose, por obvias razones, de la necesidad de ser fiel a la identidad estrictamente neutral y profesional del auténtico dirigente estudiantil, que defendió en tiempos con gran energía –difícilmente conciliable sin caer en inevitables contradicciones-, una razón más para apoyar de forma más directa, y por lo tanto más expuesta, el proyecto republicano sostenido por Azaña.

En este punto parece pertinente preguntarse si su primera aparición como miembro de un órgano ejecutivo de un partido como AR significaba en realidad una apuesta abierta por labrarse una carrera política, esto es, el resultado de una elección personal consciente para coadyuvar a un cambio social o si, por el contrario, se podía interpretar como un gesto oportunista, de esos tan comunes en los periodos de transición política o cambio de régimen o gobierno. La respuesta no es fácil, pero hay indicios que apuntan a una decisión coherente con unos valores y principios sinceros y, de todos modos, su etapa en la FUE, que comenzó en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, cuando el futuro era todavía una incertidumbre, ya implicaba en sí un acto político consciente, aunque hubiera que negar su valor real para proteger a esta organización estudiantil, y a la universidad, de la polarización pretendida por grupos católicos y cripto-fascistas.

Y para centrar un poco más esta cuestión debemos considerar que desde la perspectiva de un joven republicano de la época, licenciado universitario lleno de inquietudes intelectuales y políticas, la situación sociopolítica por la que atravesaba el país, convulsa, agitada, si se quiere, pero en la que aún prevalecía la arquitectura legal del sueño republicano –por más retórica que parezca esta expresión-, planteaba un horizonte mucho menos oscuro que el proyectado por los esquemas deterministas esgrimidos por algunos historiadores para definir la guerra civil como el destino inevitable de la experiencia republicana, aunque no dejaba de presentar serios riesgos para la expectativa de una existencia cómoda y segura, razones posibles para torcer o borrar cualquier vocación mínimamente dudosa. Y, ciertamente, para el comprometido e infatigable Francisco Pérez Carballo, la República, como idea al menos, desprendía una luz especial y eso implicaba un grado más de implicación, un matiz más de energía e ilusión. En sí, para un muchacho con aptitudes para el deporte pero sin apenas tiempo para acompañar a sus hermanos Ángel y José Andrés a sus excursiones a la sierra madrileña, o para compartir con el primero su afición futbolística (Ángel llegaría a

---

<sup>405</sup> *El Sol*, 28 de octubre de 1933.

militar en las categorías inferiores del Madrid F.C), su trabajo como abogado en el despacho improvisado en una de las doce habitaciones del piso familiar, situado en la Plaza de Dos de Mayo, número 5, primero izquierda<sup>406</sup>-figuraba en las guías preceptivas como “abogado de carrera”, con número de teléfono 27003- era perfectamente compatible, en su interpretación de la “normalidad” -aunque no necesariamente coincidentes en el tiempo-, con los de secretario del subsecretario de la Presidencia del gobierno o de oficial letrado del Congreso, que le situaba siempre a orillas de un sólido compromiso político. Como también serían conciliables, un poco más tarde eso sí, sus funciones dentro de la FUE (nunca abandonadas del todo, en virtud de un compromiso no escrito) y su tardía pero decidida irrupción en la directiva de JAR.

En otras palabras, para un activista republicano consciente de su papel, la política en realidad no sólo lo abarcaba todo, sino que lo era todo, se reconociera o no de una forma transparente cuando el argumento del profesionalismo o la neutralidad exigía ciertos sacrificios dentro del ámbito universitario. La política fluía por sus venas tanto en términos de responsabilidad social y ética como en el diseño de un proyecto personal de construcción de un futuro estimulante en las esferas pública y privada, en consonancia con la idea de transformación, de renovación, de “revolución” que desde hacía menos de una década empezaba a alumbrar (y a impregnar gradualmente) el pensamiento y la acción de toda una generación de jóvenes españoles.

Para un joven concienciado y comprometido muy directamente con la obra de la República, capaz de comprender la naturaleza y gradación de la acción política representativa, se abría una vía de acceso a los asuntos públicos –convertidos, por fin, en un proyecto colectivo, con importantes lagunas en su diseño, derivadas de un enfoque excesivamente dogmático, eso sí-, en los que aplicaría una energía especial, canalizada en el plano colectivo a través de las organizaciones juveniles de los partidos para tratar de activar o radicalizar programas, estrategias y actuaciones de éstos –fenómeno acontecido tanto en el seno de las fuerzas políticas republicanas y de izquierda como en las distintas facciones del centro y la derecha, relacionado a menudo con espejismos totalitarios-, y, por qué no, también de ascenso social, con o sin adscripción clientelar.

Asuntos públicos que a los ojos de un intelectual brotaban por todas partes, afectaban a todas las esferas de la vida, proyectándose hasta el ámbito estricto de la privacidad, reflejo también de la ley y de los valores sociales latentes. Y Francisco era en esencia un intelectual -aunque no ejerciera de ello por pudor, edad, o sentido de la humildad, que esa era otra cuestión-, si nos atenemos a la acepción moderna de este concepto, acuñada a partir del caso *Dreyfus* –el intelectual como oráculo en la reflexión crítica sobre la realidad y la transmisión de ideas concluyentes a la sociedad con la intención de influir en ella y en el devenir histórico-, y no parece necesario insistir en la naturaleza del

---

<sup>406</sup> En mayo de 1920 la familia se había trasladado desde la calle de las Minas al número 6 de la Plaza de Dos de Mayo y, en fechas anteriores a 1930, al portal número 5 de la misma plaza, donde Francisco se instalaría de forma definitiva hasta su matrimonio con Juana Capdevielle y su nombramiento como gobernador de La Coruña Véase Archivo de la Villa de Madrid, Empadronamientos de 1920 (Tomo 130-II, Chamberí, Dos de Mayo), 1924 (Tomo 181-II, Chamberí, Dos de Mayo) y 1930 (Tomo 155, Chamberí, Dos de Mayo)



discurso que pronunció en el acto de inauguración del curso académico 1933-34, a su pasión por el derecho romano –hecho que es ya significativo por sí mismo- o a su incursión en la investigación historiográfica a través del estudio que realizó sobre la Casa de Contratación de Indias y su influjo en la cultura y mentalidad europeas, ya referido en su momento, para refrendar esta afirmación.

Antes de ingresar en Acción Republicana, y antes de que el grupo de Azaña existiese siquiera, Pérez Carballo había iniciado ya el viaje que exige el compromiso político y social –recordemos, por ejemplo, sus coqueteos con la política en el instituto o su ingreso en el Ateneo-, proceso transcurrido, por razones de puro pragmatismo, en paralelo a su actividad como dirigente estudiantil. Proceso que en él, a diferencia de tantos jóvenes escritores, artistas e intelectuales (adscritos a la estética vanguardista o la novela social, indistintamente), decididos desde finales de los años veinte, principios de los treinta, a ingresar aceleradamente, de la mano de Ortega, en el laberinto público de las ideas políticas para poner su pluma al servicio de un ideal,<sup>407</sup> no tuvo en la casi exaltación del apoliticismo un origen o premisa fundamental, quizá por no estar investido del aura del genuino “creador”, pudiéndosele encuadrar, si eso fuera posible o clarificador, en la categoría intelectual del profesor universitario, del investigador o, tal vez, del ensayista político.

Pero volviendo al eje del relato, en el momento en el que Francisco pasaba a formar parte de la directiva de JAR, a finales de noviembre de 1933, Acción Republicana ya no era tan sólo aquel grupo amorfo de intelectuales, deliberadamente desorganizado, casi intangible en su estructura pero esencial durante un tiempo en el apoyo al Partido Radical de Lerroux dentro de la Alianza Republicana, encabezado por Azaña, Giral, Martí Jara y otros durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera.

Habían cambiado bastantes cosas, algunas también en lo relativo a la estructura interna del partido, en pleno proceso de modernización, como correspondía, como era de ley, en el caso de una formación constituida, fundamentalmente, por intelectuales y profesionales liberales. La primera y fundamental huella de este cambio, es obvio, era la transformación de AR, con el advenimiento de la República y sus primeros pasos, en una fuerza capaz de constituir, gracias al liderazgo de Azaña, y a pesar de ser un partido relativamente pequeño, la columna vertebral de un proyecto reformista republicano muy ambicioso, legítimo: afirmación de la supremacía del poder civil frente a los poderes militar y eclesiástico bajo un marco constitucional democrático, reformas educativa, agraria y territorial.

Un proyecto basado en la alianza entre la burguesía liberal y la clase obrera, preconizada con especial énfasis por Azaña, y resuelto de forma desigual al colisionar contra un contexto de recesión económica sobre el que operaron las dinámicas movilizadoras inspiradas por los grupos sociales que detentaban el poder real en el país y se aprestaban a sacar un importante rédito de la inexperiencia de los nuevos gobernantes republicanos. Pero aun constituyéndose en la pieza esencial de una arquitectura política diseñada desde el Estado y sus élites a golpe de decreto, bajo los

---

<sup>407</sup> S. Juliá, “Ser intelectual, y ser joven, en Madrid, hacia 1930”, en *Historia Contemporánea*, nº 27 (2003), p. 768.

principios de una cultura “revolucionaria” legalista –expresada, de forma un tanto ingenua, en la invocación de la ley como instrumento esencial, unívoco, para desactivar los casi invulnerables centros de poder tradicionales-, AR adolecía como partido, sin embargo, de la falta del peso político necesario –traducido en términos de una estructura consolidada, cuadros preparados y medios de propaganda y contrainteligencia política eficaz frente a mistificaciones reaccionarias, esto es, prensa propia- para jugar el papel integrador, aglutinante, vertebrador, que le tocó jugar en apoyo de la intuición histórica implícita en la perspectiva política de Azaña. Papel aceptado –bisagra esencial entre socialistas y radicales, arquitecto de posibles mayorías-, bajo cierto vértigo colectivo, frente a adversarios tan formidables como los alentados por las fuerzas “antirrepublicanas” y por los errores de cálculo cometidos en la creencia de que la revolución cívica emprendida (entendida, retóricamente, como conjunto de reformas estructurales fundamentales) había sobrevenido de forma natural.

Por otra parte, a finales de 1933, AR también se convulsionaba por dentro a causa, precisamente, y entre otras razones inherentes a la lógica de la crisis implícita en una derrota electoral, del proceso de radicalización experimentado por JAR en ese trance, un punto que merece especial atención y no sólo por ser un fenómeno generalizado que afectaba a partidos de distintas tendencias.

En este punto, hay que incidir necesariamente en la falta de articulación de AR como verdadero partido político hasta 1931 –en realidad, se puede decir que se constituyó, en un primer momento, para dotar de contenido a su representación en la Alianza Republicana, en torno a un abstracta pero firme noción republicana-, pues obligó a una reorganización apresurada durante el primer bienio republicano que exacerbó un tanto las tensiones lógicas en este tipo de procesos. Un perfil de partido en crecimiento, en transición –y pese a todo, un tanto difuminado-, siempre influido o, sencillamente, eclipsado por la abrumadora personalidad política de Azaña (lo que condicionó su trayectoria), premioso a la hora de sistematizar y definir su programa e ideología, quizá debido al poco interés demostrado por el político alcalaíno en los asuntos internos y en la burocracia partidaria, delegando casi siempre esas responsabilidades en gentes como Martí Jara (hasta su temprana muerte) o José Giral.

La cuestión programática fue encauzada parcialmente hacia las posiciones intelectuales de la izquierda burguesa y liberal tras la celebración de su primera Asamblea Nacional el 26 y el 27 de mayo de 1931, con las elecciones constituyentes a la vista. El programa ideológico aprobado entonces trazaba las líneas de un proyecto democrático reformista de carácter socialdemócrata,<sup>408</sup> que iba a ser sostenido por un partido pequeño, abocado decididamente a un costoso proceso de modernización –muchas de sus organizaciones locales preexistían a la creación de AR, por lo que estaban más contaminadas de lo debido del modelo de cuadros imperante en la vieja política- y algo distante, ya en el punto más álgido de su evolución estructural y organizativa, de la imagen de gran partido republicano de izquierda ensayado con algo más de fortuna a partir del nacimiento de IR en 1934, que bien podría ser interpretado como el objeto de una fase ulterior en el desarrollo de la matriz AR.

---

<sup>408</sup>“Asamblea nacional del Partido de Acción Republicana”, en *El Liberal* de 29 de mayo de 1931.

En cierto modo, AR, o más propiamente, sus líderes (su gran líder) no acertaron, sobre todo al comienzo, a comprender la importancia o la urgencia de la movilización de masas -estrategia ligada, en realidad, a la previa articulación de una fuerza o frente político republicano y no tanto a la perfección de un único partido- como arma fundamental para afrontar los retos de la modernización política, defecto común a la mayoría de los partidos republicanos y de izquierda españoles, inmersos todavía, de forma parcial eso sí, en la cultura política de la Restauración, lo que en ningún caso significo, como es sabido, un estrategia para asegurar la supervivencia, al margen de algunos destellos puntuales, del modelo de partido decimonónico.<sup>409</sup>

El dato de los escasos treinta diputados obtenidos en las elecciones de junio de 1931 ni impidió que AR se convirtiera en el eje del gobierno de coalición republicano-socialista -lo que, indudablemente, fue un elemento que contribuyó al crecimiento del partido, en especial de la afiliación al mismo- ni, esto es obvio, significó un hecho a favor de la cristalización de ese gran partido republicano que hubiese sustentado con más garantías la inmensa obra transformadora emprendida, aunque en este punto influiría más el tiempo perdido por Azaña -absorbido por tantas urgencias- antes de concienciarse de la necesidad de construir un gran frente republicano, siempre anhelado y realmente nunca alcanzado en pureza, asunto que le hubiera ahorrado la asfixia obstruccionista y los efectos de las crisis de gobierno afrontadas.

De otro modo, esta aparente debilidad estructural serviría para iluminar un poco más la estela de su gran líder, Azaña, quien, en cualquier caso, no necesitaba ninguna ayuda suplementaria, por más azarosa que fuera, para exhibir su innegable y deslumbrante capacidad intelectual y oratoria.<sup>410</sup> Pero, desde otra perspectiva, esos modestos resultados electorales, agravados en las elecciones de noviembre de 1933, nos dan un sugestivo pretexto para plantearnos algunos interrogantes acerca de la decisión de Francisco Pérez Carballo de ingresar, en algún momento situado en la franja temporal correspondiente (o inmediatamente anterior) al primer bienio republicano, en un partido de "élites" como AR, entendido este último concepto en un contexto social de especial significado para los movimientos juveniles que estaban madurando en España.

En este sentido, en un principio parece apropiado preguntarse cómo un joven de extracción social humilde podría verse atraído por una opción tan inequívocamente "burguesa" y evocadora, en cierto modo, de una conciencia política elitista como la representada en buena medida por AR, que aunque expresada en una estructura incipiente de partido de masas, al menos esa era su nueva o tardía vocación -conviene aclarar que la dimensión de un partido "pequeño" en expansión como AR no implicaría, a priori, una organización y un funcionamiento análogo al de los antiguos partidos de cuadros-,<sup>411</sup> estaba impregnada, y tal vez lastrada, de una retórica y una escenografía

---

<sup>409</sup> La estructura organizativa de AR es diseccionada por E. Espín, *Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana*, Madrid, C.I.S., 1980; y el problema de la prevalencia de la cultura política decimonónica en el seno de los partidos republicanos y de la izquierda española en general, con su correlato de desconfianza ante la movilización popular, en H. Graham, *La República española en guerra 1936-1939*, Barcelona, Debate, 2006.

<sup>410</sup> Otro testimonio bastante ilustrativo del "efecto Azaña" en M. Ansó, *Yo fui ministro de Negrín*, Barcelona, Planeta, 1976, p.41 (en especial)..

<sup>411</sup> E. Espín, *Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana*, op. cit, p. 236.

excesivamente intelectualizada. Atributos poco atractivos a priori para estimular a estudiantes universitarios y jóvenes interesados en la participación política a ingresar en él, más vulnerables a las grandes narrativas políticas que, por entonces, seducían a las masas, proclives a aceptar el juego de luces y sombras que implicaba la lógica de la movilización en una época agitada, llena de incertidumbre. En cualquier caso, y aunque la valoración de factores como su vinculación precoz, adolescente, al Ateneo de Madrid –con todo lo que ello implicaba-, su cercanía a Enrique Ramos Ramos, el subsecretario de la Presidencia del gobierno con Azaña –del que fue designado, como se ha dicho, secretario personal en noviembre de 1931- o su adscripción académica, que también le vincularía al político malagueño (profesor auxiliar de Derecho Romano en la Universidad Central), podrían constituir pasos decisivos en la dirección apuntada, no parece descabellado pensar que debía haber alguna razón más poderosa para explicar con más claridad su elección.

Y ese “algo más” podría definirse en el ámbito de las ideas, de la ideología y del cambio social razonable al que jóvenes como Francisco aspiraban. Un factor esencial para tomar esta decisión estaría relacionado, muy probablemente, con la identificación que un azañista declarado como Francisco mostraría con el programa socialdemócrata –la modernización política y social llevaría a la igualdad de oportunidades- defendido por AR desde su concreción en 1931, inspirado en la forma y en el fondo, cómo no, en el pensamiento y la ideología de Azaña. Un programa que encajaba perfectamente con la mentalidad de un estudiante de derecho que no sólo se había dedicado a obtener buenas calificaciones, y creía, sin dudar un ápice –y lo demostraba en la práctica, recordemos su etapa de dirigente estudiantil-, en la ley como principal instrumento del cambio social, de esa “revolución” vertebrada desde la esencia de la democracia parlamentaria liberal, secularizada, diseñada desde la premisa de la supremacía del poder civil, abierta a reformas sociales, económicas y territoriales que reforzasen definitivamente la estructura del estado e integraran en el sistema al proletariado emergente y al conjunto de las capas sociales excluidas de la “vieja política”. Esa identificación ideológica, real, poderosa, con la línea política del partido de Azaña –que era la que el político alcalaíno inspiraba-, sería razón suficiente para atenuar la decepción generalizada ante el horizonte político abierto tras las elecciones de noviembre de 1933 entre muchos militantes o simpatizantes de AR, entre ellos él mismo, que, además, gravitaban en torno a un partido atrapado en la encrucijada esencial afrontada en el intento (y obligación) de consolidar una alternativa republicana de centro-izquierda entre las dos grandes opciones que empezaban a polarizar el espectro político español, el partido católico alumbrado por la CEDA y el Partido Socialista.

Un partido, AR, que, debido a la ruptura de la coalición de izquierdas gobernante durante el primer bienio, había sufrido especialmente la severidad de la derrota –se quedó en 5 diputados, con Azaña como azaroso diputado por Bilbao- y que hasta entonces, durante los tres gobiernos presididos por el gran líder en ese periodo, como factor a añadir a esta ecuación de inestabilidad, había albergado en su interior una facción más conservadora, en un principio liderada por el propio Giral, opuesta a la presencia de los socialistas en el gobierno y más proclive a un entendimiento con Lerroux y los radicales. En otras palabras, la imagen de AR como agente moderador, el

valor instrumental de su intermediación durante una parte importante del primer bienio republicano, y, en especial, en el transcurso de los debates previos a la aprobación de la constitución de 1931 –en los que AR y el Partido Radical votaron muchas veces en sintonía, mientras que PSOE y PRRS seguían una línea maximalista-, podían contemplarse, a los ojos de una posible mayoría de militantes y votantes del republicanismo de izquierda representado por el partido de Azaña, como una muestra de debilidad o de falta de una verdadera vocación “revolucionaria”, constreñida a un espíritu reformista teñido, en principio, de un realismo poco convincente.

Este recelo general, fomentado en especial por los socialistas, ante el republicanismo histórico lerrouxista y su vínculo con la “vieja política” –estrecha relación con prácticas caciquiles y propensión a las corruptelas, tendencia a los pactos secretos, *affaire* Juan March, insistencia ante Alcalá Zamora para obtener un anhelado decreto de disolución-, supuso a la larga un lastre para el futuro de la República, puesto que, como ha puesto de manifiesto Nigel Townson, alejar a los radicales del poder, aislarlos y estigmatizarlos al mismo tiempo, privó al régimen republicano de la consolidación de una opción conservadora integradora y pactista –habituada al pacto como moneda común en medio de prácticas políticas nada transparentes, por otra parte-, comprometida con las instituciones republicanas para ensanchar la base social de los partidos republicanos incorporando a amplios sectores de las clases medias.<sup>412</sup>

Es evidente, y perfectamente comprensible si nos atenemos a los condicionantes de aquella coyuntura política, que algunos militantes o simpatizantes republicanos, como sería el caso de Francisco, no habían entendido fácilmente el dilema que residía en la elección del camino más corto para la consolidación de la República –decidir que era más urgente, si la integración del proletariado en el sistema o la captación del apoyo de la mayor parte de las clases medias- y consideraban cualquier guiño o acuerdo con los radicales como una especie de “traición burguesa”, llegando en bastantes casos a descartar la opción representada por AR en favor de otras formaciones más decididamente izquierdistas, al menos en apariencia. Aunque, para una buena parte de ellos, las dudas al respecto pudieran disiparse, en su caso, ante el magnetismo ejercido por la capacidad intelectual y el instinto político de Azaña, cuyo influjo había obstaculizado la organización de los sectores más conservadores de su partido en corrientes internas estructuradas.

Y, como venimos diciendo, es precisamente el propio Azaña –al que Francisco ya conocía desde su precoz ingreso como socio del Ateneo- su influjo, su ideología y su liderazgo, su invocación de la Ley como patria constitucional e instrumento esencial de la revolución transformadora, la razón de que el abogado en ciernes, Pérez Carballo, se situase en la órbita de AR si no como militante, si al menos como simpatizante o alguien muy vinculado a algunos prohombres del partido y, además, proveniente de la FUE, organización que trasvasó bastantes de sus efectivos a AR. La entrada en la directiva de la JAR prueba su militancia a finales de 1933, no necesariamente antes, aunque es casi seguro que su nombramiento como secretario particular del subsecretario de la Presidencia del gobierno en noviembre de 1931 no fuese fruto solamente de su

---

<sup>412</sup> Véase en general, N. Townson, *La república que no pudo ser*, Madrid, Taurus, 2002.

relación académica y personal con el subsecretario Enrique Ramos (o, incluso, de sus contactos con Azaña) o, al menos, no se circunscribiera a ella. Es exactamente el día 7 de noviembre de ese año cuando la prensa publicaba la noticia de su nombramiento como secretario particular del subsecretario Ramos, mientras que a su amigo Juan José Domenchina –el “poeta de las sombras” le llegaría a dedicar uno de sus libros- le correspondería desempeñar esa misma función con Azaña.<sup>413</sup> La del día anterior había relatado su elección como presidente de la APED de Madrid, cuestión tratada en el capítulo anterior, lo que nos habla con claridad del inicio de una de sus etapas más intensas –ni la primera, ni la última, pero preñada de nuevos y coincidentes desempeños-, seguida en otoño de 1933 por un periodo con responsabilidades cruzadas en el Ateneo, la Universidad y en la directiva de la Juventud de AR, por no hablar de su trabajo como oficial letrado del Congreso de Diputados, iniciado en marzo de ese mismo año.

Su trabajo en Presidencia del Gobierno le brindaría, sin duda, la oportunidad de aproximarse un poco más, tanto física como intelectualmente, a la figura del gran intelectual, su innegable referencia, el corazón de la República. De esa manera, tendría la oportunidad de estar cerca de Azaña, Enrique Ramos y otros eminentes políticos republicanos en situaciones tan críticas, y al mismo tiempo tan aleccionadoras, como, por ejemplo, la acontecida durante la noche del 10 de agosto de 1932, en las horas previas y durante la *Sanjurjada*, o de hacer importantes contactos en los círculos sociales y políticos más relevantes del país.

La vicepresidencia segunda de la directiva de JAR que ocupó desde finales de noviembre de 1933 y hasta la disolución de AR y su organización juvenil en el nuevo proyecto de reconstrucción republicana que alumbró IR, significó para Francisco el ingreso efectivo en la política de partido dentro de una formación (AR) que desde la proclamación de la República intentaba desarrollar una vida interna activa –intención expresada con altibajos, debido a la aún inmadura maquinaria del partido, pero firme-, signo del interés por superar viejos modelos o rectificar su primera versión de cenáculo a expensas de un liderazgo abrumador.

Tendencia divergente de los especiales ritmos internos de los antiguos partidos de cuadros -aunque no en la primacía de la minoría parlamentaria sobre los órganos directivos del partido, ni en la supervivencias de ciertos personalismos o de algunas prácticas oligárquicas- para entroncar en un modelo progresivo de perfil y vocación modernizadora, traducida en una creciente democratización interna, que no se detenía en los obstáculos propios del proceso de transición acometido. Pensemos, por un lado, en la convocatoria de cinco asambleas nacionales durante sus casi tres años de vida a partir del 14 de abril de 1931 y, por otro, en la importancia concedida a la autonomía de los consejos y asambleas locales y provinciales –dependientes eso sí los unos de las otras en cada nivel de representación hasta llegar a la Asamblea Nacional, máximo órgano del partido-,<sup>414</sup> concebidas las asambleas provinciales no sólo como foros de

<sup>413</sup> *Heraldo de Madrid*. 7 de noviembre de 1931.

<sup>414</sup> El reglamento de la Agrupación Provincial de AR de Madrid, que sirvió como referencia al de numerosas agrupaciones del resto de España, en *Boletín de información bibliográfica y parlamentaria*, nº 6, p. 994.

discusión de las políticas territoriales específicas, al conferírseles atribuciones análogas a la de la Asamblea Nacional como la capacidad de diseñar las líneas generales de las mismas. En paralelo a este proceso de modernización matizada por las circunstancias expuestas, en el interior del partido de Azaña, que adolecía de una percepción defectuosa del peligro que entrañaba la tardanza en convertirse en un verdadero partido de masas –objetivo sólo priorizado, como es sabido, tras la constitución del frente republicano cristalizado en IR en abril de 1934–, se estaba desarrollando una identidad colectiva que se nutría de las expectativas de sus militantes más jóvenes y comenzaba a aglutinarlos en el anhelo de una política más audaz y progresista.

Una política, un objetivo que trascendería el logro de un mayor grado de democracia interna, que se iba conquistando de manera progresiva: afiliados encuadrados en agrupaciones locales, votaciones secretas, cargos electos asambleariamente y renovables de forma periódica, regularidad en las reuniones de los diferentes órganos del partido, financiación por cuotas de socios, captación de un electorado interclasista en contraste con la impronta intelectual, burguesa y profesional de los primeros tiempos. Y bajo o sobre esa identidad estaba emergiendo una organización juvenil, la JAR, que pronto contribuiría a empujar al partido hacia posiciones más definidas de izquierda. La Juventud de Acción Republicana, acerca de la que nada se dice en los estatutos de AR, constituyó su organización local madrileña el martes 28 de junio de 1932, verdadera piedra angular de su estructura a nivel nacional, que en realidad, ejerció funciones representativas de ejecutiva nacional, con carácter provisional, hasta la disolución del partido en IR en abril de 1934.

El comité de ponentes elegidos para redactar las bases reglamentarias del grupo estaba formado por Ángel Sanz-Cantos, Vicente Marqués, Alfonso Ayensa, Francisco Rodríguez Antonio Cabezas, Vicente Torres y Enrique Peinador.<sup>415</sup> Su primera junta directiva fue presidida por Alfonso Ayensa, secundado por Ubaldo Martínez Maraño, Vicente Márquez (vicepresidentes), Ángel Sanz Cantos (secretario general) y, entre los vocales, Antonio Ruiz Rey, uno de los líderes de la facción más izquierdista de JAR y futuro presidente de esta organización.<sup>416</sup>

Siguiendo el ejemplo de la JAR de Madrid, fueron surgiendo otras organizaciones locales y provinciales a lo largo del país en un proceso lento e irregular, que alcanzaría fundamentalmente a algunas capitales de provincia como Salamanca, Murcia, Valladolid, Sevilla, Cartagena y Bilbao (1932) o Barcelona, Alicante y Guadalajara (1933), que en la mayoría de los casos representaron más el papel de secciones juveniles de las diferentes agrupaciones locales y provinciales de AR, con la consiguiente merma en la autonomía de cada grupo, que el de células de la Juventud de un partido político coordinadas en torno a un programa unificador.<sup>417</sup> Hecho, por otra parte, debido seguramente a la imposibilidad material de constituir la tan deseada y aplazada Federación Nacional de Juventudes de AR (JAR), objetivo que intentó acelerarse tras la

---

<sup>415</sup> Luz, 29 de junio de 1932.

<sup>416</sup> *Heraldo de Madrid*. 3 de septiembre de 1932.

<sup>417</sup> E.Espín, *Azaña en el poder...* op. cit, p. 253-254.

caída del gobierno Azaña y la derrota electoral de noviembre de 1933, ya en forma de un frente de juventudes republicanas.<sup>418</sup>

Desde su fundación, entre los objetivos de la organización madrileña de JAR como pionera dentro de la estructura juvenil de AR, destacaba, obviamente, la creación de agrupaciones juveniles (secciones) locales o provinciales a lo largo del territorio nacional, una prioridad que, en paralelo a la pretensión de lograr una representación de JAR en el Consejo Nacional de AR -con el fin de alcanzar un mayor grado de autonomía a través de la afirmación de su personalidad-<sup>419</sup> serviría de inmediato para sustentar un proyecto de afirmación izquierdista del programa y la acción política de AR. Pero este protagonismo esencial dentro del proceso de construcción del esqueleto nacional de JAR, atribuido a la juventud madrileña, no sólo era la consecuencia lógica de la asimilación de un principio de centralidad inevitable, también de un cálculo político ortodoxo, sino que era reclamado por los diferentes grupos de jóvenes militantes de AR interesados en constituir organizaciones locales de la Juventud del partido de Azaña a lo largo del país. Para satisfacer ambos retos, la JAR de Madrid difundió una circular, redactada probablemente a principios de 1933, para establecer las pautas de organización y funcionamiento de los diferentes grupos juveniles que empezaban a surgir a nivel local y provincial:

La Juventud de Acción Republicana, organismo integrante de este partido, aspira a ser la fuente más vigorosa y eficaz, si no numéricamente, por lo menos en atención a su fervor en la defensa de las instituciones democráticas, en la propagación del programa del partido, difundíendole entre las muchedumbres, y en el celo y en el desinterés con el que se propone intervenir en la vida pública.

Con el fin de lograr la máxima eficacia para sus planes, el grupo juvenil de Madrid se dirige a sus correligionarios de toda España manifestándoles que es absolutamente precisa la organización de la Juventud de Acción Republicana en cuantas capitales y pueblos importantes alberguen núcleos de afiliados a nuestro partido que sean menores de treinta años de edad.

Para la constitución de la Juventud se observarán las siguientes reglas:

- 1º.- Aquellos elementos juveniles que están identificados con la doctrina de Acción Republicana, deberán solicitar el ingreso en el partido {-] grupo local correspondiente-si no pertenecieran a él.
- 2º.- Una vez aue se encuentren en condiciones y con derechos de afiliado activo, constituirán los jóvenes un comité provincial, previa autorización del consejo local del partido. Este comité provisional, procederá a efectuar la propaganda conveniente para la captación de afiliados.
- 3º.- Cuando el número de afiliados sea no menor de treinta, la juventud procederá, de acuerdo con el consejo local, a la convocatoria de una asamblea de la Juventud y en ello se designará por vocación la Junta Directiva, previa la aprobación del reglamento.<sup>420</sup>

Las instrucciones que recibían los promotores de las Juventudes locales y provinciales de AR, al margen de afectar a los aspectos puramente técnicos, también

<sup>418</sup> En medios como *Jar* y otras publicaciones de la época, así como en la correspondencia de la Juventud de AR de Bilbao (Centro Documental de la Memoria Histórica. P.S. Bilbao. 164) se encuentran con frecuencia expresiones de esta necesidad, concretada en un proyecto que no llegó a cuajar por las consabidas razones de tiempo.

<sup>419</sup> Copia de la minuta en que se incluye la propuesta, enviada en junio de 1933 por la Juventud de AR de Madrid a la Asamblea Nacional, en la que se solicitaban dos puestos en el Consejo Nacional y otros tantos en cada consejo provincial del partido, en Centro Documental de la Memoria Histórica. P.S. Bilbao. 164.

<sup>420</sup> Circular encabezada con el lema “Juventud de Acción Republicana de Madrid”, enviada a la JAR de Bilbao, en Centro Documental de la Memoria Histórica. P.S. Bilbao. 164.



orientaban sobre las reglas básicas a seguir en el campo de la acción política, tratando de dotarlas con un mínimo de estructura y coherencia:

#### ORIENTACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN

La Juventud, en el momento de la designación de su Directiva se puede decir que ha entrado de lleno en su legalidad para actuar como tal y sin perder su carácter de filial del grupo local del partido, sometándose a las deliberaciones de la asamblea general y con subordinación política respecto del Consejo Local.

La Juventud debe dividirse en diferentes secciones bajo la dirección y control de la Directiva:

Sección de Propaganda.

Sección de Formación política.

Sección de Acción política.

Sección cultural.

La sección de propaganda se encargará de organizar actos de la Juventud en los diversos pueblos próximos a la localidad de que dependa, exponiéndolo antes a la consideración del Consejo Provincial del Partido con el fin de unificar la labor de los dos organismos. Organizará igualmente actos de propaganda en los barrios extremos de la capital o pueblo donde esté situada, para llevar a las masas populares su orientación. Así mismo realizará cuantos actos, mítines y conferencias le sugieran las necesidades políticas de actualidad, dentro de la disciplina del grupo.

La Sección de Formación Política consistirá en la organización de un círculo de estudios políticos y sociales en el cual los afiliados expondrán puntos de vista políticos sobre problemas concretos y se mantendrá la controversia a que haya lugar, como medio para el adiestramiento de oradores. También se celebrarán conferencias y actos de tipo científico.

La Sección de Propaganda y la de Formación Política conjuntamente puede estudiar la fórmula más adecuada para la publicación de un periódico.

La Sección de Acción Política estará constituida por grupos de jóvenes que bajo el control directo de la Junta Directiva se ocupará de todas aquellas funciones propias de la Juventud y encaminadas a cumplir todos los fines de propaganda y de acción cívica que le son propios.

La Sección Cultural formará una biblioteca política y social y organizará reuniones encaminadas a ejercitar en la crítica literaria y filosófica a los jóvenes que la integran. Organizará también de acuerdo con la de Formación Política conferencias de carácter científico, sin matiz político determinado.<sup>421</sup>

Al margen de tratar aspectos tan vinculados a la idiosincrasia de las juventudes políticas de los partidos republicanos en los años treinta, como esa marcada preocupación pedagógica expresada en el énfasis puesto en la formación política de los jóvenes militantes –la idea de que Acción Republicana debería constituirse en una escuela de estudios políticos para preparar a la gente para la gobernación del estado era compartida por el *establishment* de los partidos-,<sup>422</sup> esta circular también muestra el peso específico de la dependencia estructural de JAR respecto de los órganos internos de AR, en especial de los Consejos Locales. Reconocimiento implícito de una realidad ciertamente no deseada que no impediría el que esta organización juvenil comenzase a distanciarse en su discurso, aunque de forma matizada por la dialéctica entre sus distintas facciones, de la línea política mantenida por el Consejo Nacional y la minoría parlamentaria del partido de Azaña. AR, por entonces, estaba inmersa en las intrincadas funciones de gobierno y de desarrollo de la legislación complementaria del texto

<sup>421</sup> Ibid.

<sup>422</sup> Idea latente entre los máximos dirigentes de AR para definir el papel de AR tras la consolidación de la República, que expresaba también la autoconciencia de la importancia del partido en el diseño y construcción de la nueva arquitectura política emprendida. Expresada, por ejemplo, de manera explícita, en un conferencia dictada por M. Ruiz Funes, precisamente en la inauguración del Círculo de Estudios Políticos de la JAR de Madrid. *Luz*, 20 de enero de 1933.

constitucional, frente a los adversarios de las reformas emprendidas -la derecha católica, los detractores de la colaboración socialista y los nostálgicos de los usos de la vieja política, en especial Lerroux y su añoranza de los efectos del decreto de disolución- y a los persistentes anarquistas.

Así pues, durante el año crítico de 1933, algunas de las agrupaciones de JAR constituidas hasta entonces, y en especial la de Madrid, reclamaron una mayor autonomía respecto de la dirección del partido e hicieron gestos inequívocos en favor de la entente con los socialistas y en contra de un posible acuerdo de gobierno con los radicales y, ya en el plano del asociacionismo juvenil, se comprometieron con el proyecto de un frente republicano integrador de todas las juventudes de los partidos de izquierda, destinado a proteger la obra y la idea de la República desde una base social más sólida, que contemplase a la juventud como uno de los actores principales de la escena política republicana.

Las reivindicaciones de una de las corrientes más importantes de JAR en favor de un giro izquierdista de la política de AR en los términos apuntados, se acentuaron en septiembre de 1933, justo en el momento en que Lerroux fracasaba en su discutido intento de consolidar en el Parlamento un gobierno de concentración republicano con el apoyo inicial de Azaña, que incluía al diputado de AR, Claudio Sánchez Albornoz, como ministro de Estado. La colaboración de AR con el efímero gobierno de Lerroux (cuya duración no excedió los veinte días) fue interpretada por la facción entonces hegemónica en JAR no sólo como una claudicación ante la derecha encubierta representada por Lerroux, sino como una nueva y contraproducente expresión del uso que los partidos políticos, entre ellos AR, hacían de sus respectivas juventudes, a las que sí, por un lado, alentaban y apoyaban en su organización y consolidación para beneficiarse de su dinámico e innovador activismo político, por otro procuraban controlarla estrechamente, reduciendo su autonomía y limitando su participación en los procesos de toma de decisiones políticas. Esta situación, agravada si cabe en AR por la omnipresencia del pensamiento y la propia figura de su líder, Azaña -cuyo carisma entre los miembros de JAR era evidente e incuestionable-, hacía que la frustración que experimentaban muchos de los jóvenes militantes del partido se proyectara, traducida en un creciente actitud crítica, contra los desajustes estructurales y organizativos y una parte de los dirigentes de AR, de forma un poco más intensa si cabe.

Y este hecho se revelaba de suma importancia en un contexto en el que la juventud ya no era un actor secundario en política, sino que debido a factores como la revalorización de su particular universo contestatario en la Europa de posguerra,<sup>423</sup> el éxito de la movilización juvenil contra la dictadura de Primo de Rivera y la crisis económica que se cernía sobre la España republicana<sup>424</sup> -de efectos especialmente sensibles en la juventud española, entre otros sectores sociales-, representaba ya un papel de claro agente desestabilizador, en medio de un proceso de radicalización que

<sup>423</sup> En relación a esta cuestión, véase un testimonio interesante sobre el cambio de conciencia operado en la juventud española a través de la huella generacional dejada por dos acontecimientos fundamentales, la Gran Guerra y la Revolución Rusa, en “El deber de las Juventudes en los momentos actuales”, en *Jar*, num 11, 9 de diciembre de 1933.

<sup>424</sup> E. González Calleja y Sandra Souto Kustrin, “De la dictadura a la república. Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España”, en *Hispania*, 2007, vol LXVII, nº 225, enero-abril, p. 87-88.

preocupaba a los dirigentes de sus respectivos partidos, como era el caso de una JAR situada en la vanguardia de un partido de masas a medio construir, que ese era otro aspecto a considerar.

Ante la formación del gobierno Lerroux en septiembre de 1933, no tardaron en producirse las primeras reacciones en el seno de la organización juvenil del partido de Azaña, en el sentido apuntado de creciente radicalización de las posiciones sostenidas a lo largo de ese año. Veamos, pues, algunos fragmentos esclarecedores del texto de la proposición que la Junta directiva de la agrupación madrileña de JAR presentó para su aprobación en su Junta general del día 12 de septiembre –recordemos, la misma fecha en que Lerroux formaba gobierno tras la dimisión de Azaña-, base de la ponencia presentada en la Asamblea extraordinaria celebrada tres días más tarde, publicada en el recién creado órgano de prensa de esta organización, el semanario *Jar*:

Los afiliados que suscriben, proponen a la Asamblea general que la Juventud de Acción Republicana, que tiene siempre como norte el posibilitar la verdadera revolución, declare solemnemente que por encima de todas las maniobras de vieja política, hará prevalecer en nuestro partido el verdadero criterio democrático y para ello se propone luchar hasta el fin, diciendo a la opinión pública que esta juventud hará que nuestro partido sea nuevamente el firme puntal de la revolución española:

1º Que se concede un amplio voto de confianza a la Junta directiva para que continúe la idea revolucionaria que ha comenzado con el manifiesto que hoy ha aparecido en la prensa.

2º Que esta juventud espera las explicaciones que sobre el acuerdo de colaboración nos dé el Consejo Nacional y la minoría parlamentaria, para una vez oídas y a tenor de las circunstancias, pedir se sancionen a todo aquel afiliado cuya conducta en el trámite y solución de la crisis no se haya ajustado al ideario normas y orientaciones del partido o al mejor servicio y conveniencia de la República y las directrices de la revolución.

3º Que de triunfar un criterio impunista que consagre viejos procedimientos del vergonzoso régimen monárquico, la juventud se separe de la disciplina del partido, y

4.º Que esta actitud expectante quede subordinada a que no ocurran hechos con la anuencia del partido, que repugnen la conciencia ética y revolucionaria de los que por encima de todo han colocado la integridad moral y la exquisita espiritualidad que ha de ser siempre norma de la República.<sup>425</sup>

De este modo, la JAR madrileña, cuyas directrices políticas determinaban, cuando no imponían, la posición de las diferentes grupos provinciales y locales de esta organización juvenil a lo largo del país, amenazaba con separarse de AR y, esto de una forma más velada, trataba de frenar las disensiones que estaban surgiendo entre algunos de sus militantes más significados, personalizadas en el desacuerdo existente entre los puntos de vista de Alfonso Ayensa y Antonio Ruiz Rey, presidentes sucesivos de la agrupación madrileña. Y esta amenaza estaba supeditada a la capacidad del partido de desactivar de forma definitiva las tendencias más conservadoras o conciliadoras con la “vieja política” personificada por Lerroux, interpretadas por una buena parte de los jóvenes de JAR como expresiones de un contrapoder que empujaba al partido en dirección contraria al proyecto revolucionario emprendido durante el primer bienio republicano.

En este sentido, en la Asamblea extraordinaria del grupo local madrileño de JAR, celebrada el día 15 de ese mismo mes para analizar la situación política creada, se aprobaban dos proposiciones que concretaban lo aprobado en la Junta general extraordinaria anterior. En la primera de ellas, se elevaba a la Asamblea Nacional de AR

<sup>425</sup> “Información política”, en *Jar*, nº 1, 30 de septiembre de 1933.

una propuesta que, ante el disgusto generalizado provocado por la falta de asistencia de los diputados de la minoría parlamentaria de AR a las sesiones de Cortes, sugería el establecimiento de un riguroso procedimiento sancionador de los diputados reincidentes en este punto. En la segunda, por el contrario, se iba bastante más lejos, tanto en el nivel de concreción como en el alcance político, al rechazar esta vez de forma muy transparente, la colaboración de AR con el gabinete formado por Lerroux:

- 1.º Considerar el acuerdo adoptado por el Consejo Nacional y la Minoría de colaborar con el gobierno Lerroux, como atentatorio al curso izquierdista de nuestro partido y, por ello, solicitar del Consejo Nacional y de la Minoría las explicaciones por los medios adecuados.
- 2.º En el caso de que estas explicaciones no sean satisfactorias o se nos negasen, la Asamblea Local propondrá al congreso Nacional las sanciones debidas.
- 3.º La Asamblea Local acuerda así mismo mostrar de una manera resuelta su oposición al actual gobierno y no considerar que el Partido de Acción Republicana está representado en él.
- 4.º La Asamblea acuerda así mismo solicitar del Consejo Nacional que se retire la colaboración, lo más pronto posible, al nuevo gabinete.<sup>426</sup>

En todo caso, al albur de este proceso de radicalización de la línea política defendida por JAR, percibido con más intensidad a partir de la caída del gobierno Azaña, no existía dentro de esta organización juvenil un consenso real sobre el grado y la profundidad del “giro izquierdista” que estaba ensayando la junta directiva encabezada por Antonio Ruiz Rey. Y esa falta de consenso iba generando -a medida que JAR se extendía por toda España (proceso expansionista acelerado durante el segundo semestre de 1932 y gran parte de 1933), trataba de estructurarse internamente e intentaba conseguir un grado mayor de autonomía respecto del aparato del partido, así como una representación estable en el Consejo Nacional de AR- determinadas tensiones internas de sesgo cada vez más ideológico, visibles sobre todo a partir de la dimisión en julio de 1933 de la junta directiva de JAR, presidida por Alfonso Ayensa. Para argumentar su decisión, el grupo de Ayensa entregó a la prensa una nota en la que alegaba que había trabajado, fundamentalmente, para la formación política y doctrinal de las nuevas generaciones –organizado círculos de estudios políticos, conferencias y más de treinta mítines, con atención preferente a los barrios periféricos de Madrid, y constituido 21 Juventudes del partido-, además de cooperar en la consecución de la unidad de todas las fuerzas juveniles republicanas “que no fuesen de derechas” y en la orientación de la opinión pública sobre los objetivos del partido, principios excluyentes de una acción más intensa y violenta en la calle, estrategia alimentada por la facción más radical de la JAR, con la que disentía tanto en términos de actuación política como de organización interna del partido.<sup>427</sup>

Dos meses más tarde, y ante el agravamiento de la situación política con la elección de Lerroux como presidente del gobierno, que repercutía directamente en el conflicto interno abierto en el seno de JAR, Ayensa volvía a aparecer en público para clarificar un poco más su postura:

Con motivo de la formación del actual gobierno –integrado por representantes de los partidos implicados en el anterior, con excepción de socialistas y federales- determinado sector de las Juventudes de algunas fracciones políticas ha emprendido una campaña de violencias y amenazas extemporánea, inhábil y peligrosa. No podemos de ninguna manera compartir la

---

<sup>426</sup> Ibid.

<sup>427</sup> *La libertad*. 7 de julio de 1933.

responsabilidad gravísima en la que incurren, faltando a elementales deberes de disciplina política y con infracción, a nuestro juicio, de normas esenciales en toda democracia. Desde estas mismas columnas los directivos de las Juventudes de Acción Republicana y Radical Socialista postularon por una inteligencia estrecha entre todas las fuerzas juveniles republicanas como medio adecuado para que el régimen lograra su consolidación definitiva. Se habló de guardar a los socialistas el máximo respeto, la lealtad más rigurosa hacia los principios legislativos de orden social obtenidos durante su colaboración, y se [reconoció], como ellos mismos proclaman y reconocen, que había llegado el instante de que se retiraran a sus actividades oposicionistas para realizar desde ellas su política típica, evitando estancamientos (...) Hay, pues, una contradicción evidente entre lo proclamado entonces y la actitud adoptada ahora por los jóvenes republicanos.

Se nos dirá que para muchos los socialistas son republicanos de izquierda y que como a tales se les confería un derecho a actuar en el gobierno formando parte de la conjunción republicana; pero no conviene olvidar las manifestaciones formuladas por dignísimos y autorizados dirigentes del partido obrero, según las cuales (...) la República no ofrece el menor interés si no tiene un contenido socialista. Los republicanos de izquierda no somos socialistas, aun cuando veamos con simpatía el desenvolvimiento y pujanza de esta organización en España.

Hemos sentido muchas veces la imperiosa necesidad de llegar a una comprensión, a una corriente de armonía que enlazara a todas las fuerzas republicanas izquierdistas. Si los representantes parlamentarios de los partidos republicanos estimaron oportuno el momento de la reciente crisis para establecer esa entente frente a una reacción nociva que amenaza a la República fue tal vez basándose en la corriente favorable a esa unión.<sup>428</sup>

Y a un argumento favorable a la ruptura de la alianza de republicanos y socialistas, por lo demás ya concretada en la fecha de publicación de esta nota, con lo que se le hacía más fácil a los militantes de AR que recelaban del lenguaje político de los socialistas desvelar su opinión al respecto, añadía Alfonso Ayensa un signo de transigencia (en cierto modo, un tímido voto de confianza) ante el breve gobierno encabezado por Lerroux:

¿Cuál debería ser la posición juvenil ante los hechos consumados?. ¿Cuál la conducta a seguir respecto al Ministerio Lerroux?. ¿De colaboración?. ¿De oposición apasionada?. Sencillamente: la misión de una Juventud consciente, serena, capacitada, con sentido revolucionario, pero responsable, es, a mi entender, la de fiscalizar, la de observar con todo cuidado el desarrollo de la política del gobierno. Si esa política no responde a los dictados de un espíritu republicano, si no se inspira en los móviles democráticos y liberales, boicotearla. Lo que hay que hacer es saber esperar, seguros de que nuestro ánimo no ha de sentir desfallecimientos.

No es democrática una postura de rebeldía “a priori” ni es tampoco gallarda. ¿Saben los jóvenes que se han colocado frente a sus representantes políticos en el Parlamento y en el Gobierno como piensan sus correligionarios de provincias?. ¿O es que un partido se nutre y se orienta solamente por la opinión de sus afiliados de Madrid?. Por eso creo que se ha faltado a un inexcusable deber de disciplina interna. Y, aparte de ello, con su conducta ponen en riesgo notorio al Parlamento, por cuya rápida disolución propugna el enemigo común. ¿No atacaron al Partido radical cuando la obstrucción?. ¿Van ellos a obstruccionar ahora el Parlamento desde fuera?. Por esa política torpe, de violencias y de confusionismos, dimití hace meses la presidencia de la Juventud de Acción Republicana y por el buen nombre del partido —en el que hay un creciente núcleo que tiene nuestro mismo criterio— estoy dispuesto a luchar con energía hasta restablecer en toda su pureza los principios de la democracia auténtica, un poco quebrantados en nombre de un espíritu revolucionario e izquierdista que ni sienten ni comprenden muchos que a grandes voces lo pregonan.<sup>429</sup>

La invectiva que lanzaba Alfonso Ayensa, reflejo de la voz de parte de la cúpula del partido de Azaña, contra la JAR de Madrid, inmersa en una espiral maximalista trazada más en función de una estrategia movilizadora que de una amenaza real de separación

<sup>428</sup> *Heraldo de Madrid*. 26 de septiembre de 1933.

<sup>429</sup> *Ibid.*

del tronco del partido –peligro latente en la coordinación política de las juventudes de AR del resto de España-, evidenciaba el estrecho vínculo existente entre la facción más moderada de JAR y el aparato de Acción Republicana y, de ese modo, le daba la razón a quienes denunciaban, desde dentro de la organización juvenil de AR, la falta de autonomía de ésta respecto de la actuación y la doctrina del partido, problema acentuado en el contexto de la crisis gubernamental de septiembre. Y ambas voces superpuestas, la de Ayensa y la de los órganos directivos de AR, fueron contestadas por el nuevo presidente de JAR desde julio de 1933, Antonio Ruiz Rey, cuya junta directiva daría paso, a finales de noviembre de ese año, a la encabezada por Gerardo Saura, E. Amador y Francisco Pérez Carballo, entre otros, constituida en una clara línea continuista con el rumbo izquierdista marcado por aquél:

Dice el señor Ayensa que “determinado sector de las Juventudes de algunas fracciones políticas ha promovido una campaña de violencias y amenazas extemporánea, inhábil y peligrosa”. Toda la prensa ha publicado los acuerdos de nuestras asambleas, que fueron tomados por unanimidad. Por lo tanto, no existe un determinado “sector”. Quizá nuestra campaña sea extemporánea y peligrosa, como asegura el correligionario; mas no nos detuvimos a meditar en si resultaría hábil o inhábil. He de hacer constar también que en nuestras asambleas no concurren ahora, como sucedía antes, catorce personas.

En efecto, desde las columnas del Heraldo, nosotros postulamos por una inteligencia estrecha entre todas las fuerzas republicanas. El señor Ayensa, con su habilidad característica, se ha dejado en el tintero dos palabras que completarían perfectamente no sólo aquello por lo que nosotros propugnamos, sino por lo que continuamos propugnando luego, hasta ver nuestros esfuerzos coronados por el éxito. Estas dos palabras son las siguientes: “de izquierdas” (...) Nosotros no reconocimos nunca que “había llegado el instante de que los socialistas se retirasen a las actividades oposicionistas”. Es una cuestión que ni enjuiciamos entonces ni entramos a enjuiciar ahora (...) “Los republicanos de izquierda no somos socialistas.” Ciertamente, señor Ayensa. ¿Pero somos por ventura radicales? (...) ¿Quiere decirnos el señor Ayensa por qué no dictó normas en las asambleas de la Juventud y del partido?. ¿No habla de democracia?. Lo democrático, lo normal hubiera sido expresar su pensamiento allí, y no aquí, en las columnas de un periódico (...) “Y, aparte de ello –añade el señor Ayensa-, con su conducta ponen en riesgo notorio al Parlamento, por cuya rápida disolución propugna el enemigo común.” El enemigo común, ¿quién es? ¿será por acaso un partido que intentó formar gobierno él solo, que infringe la ley de Incompatibilidades, que reduce espontáneamente su base parlamentaria, que prepara, en suma, la muerte del Parlamento. La táctica del señor Ayensa, o de quien sea, es verdaderamente genial. Pretende que nuestro enemigo, más fuerte en la hora de ahora, nos lleve cogidos de la mano y nos haga solidarios de su *política*, responsables de ella. Sinceramente, señor Ayensa, ¿no le parece que es demasiada habilidad?.”<sup>430</sup>

Esta contundente réplica a lo argumentado dos días antes por su antecesor en la presidencia de la Juventud de AR, traslucía, por encima de diferencias personales o de interpretación de cuestiones puramente técnicas u organizativas, la centralidad de los problemas políticos que afectaban al conjunto de los partidos republicanos, y al partido de Azaña, en particular, frente al debate interno abierto en el seno de JAR: la astucia y/o la impunidad de la táctica lerrouxista (su impugnado carácter izquierdista, el aura de su política *antirrevolucionaria*) y, en sentido contrario, la continuidad de la inteligencia con los socialistas, la sospecha o la certeza de otro tipo de revolución. Dilemas, más bien sombras, que, traducidos a la escala de la política juvenil denotaban, en cierto modo, la dependencia estructural, la falta de autonomía en la toma de decisiones trascendentales, por encima de la retórica de su argumentación, de la que adolecían la estrategia y la acción de JAR. Por otra parte, y para añadirle un mayor grado de

<sup>430</sup> *Heraldo de Madrid*. 29 de septiembre de 1933.

complejidad al asunto, los dos dirigentes citados, al frente de grupos o facciones de difícil definición y, en realidad, distinción, por causa de la utilización de estrategias demasiado maleables, no diferían en la conciencia de la necesidad de buscar una inteligencia entre las juventudes republicanas de izquierda, aunque sí lo hicieran en la identidad de sus posibles integrantes.

En otras palabras, si tanto el partido como su Juventud habían visto surgir en su interior dos tendencias, una partidaria de lograr la unidad de todas las fuerzas estrictamente republicanas, sin incluir a los socialistas, y otra más izquierdista que perseguía renovar una alianza con éstos, inmersa esta última en un proceso de radicalización impulsado por la evolución política experimentada por JAR, este hecho no significaba que, en puridad, la estructura o la política de AR se vieran realmente condicionadas o desafiadas por un peligro real de escisión, como estaba ocurriendo en otras fuerzas políticas de izquierda, al estar las distintas corrientes en pugna adheridas o arraigadas ideológicamente al símbolo representado por la figura de Azaña..

En este sentido, la elección a finales de noviembre de 1933 de una nueva junta directiva que incluiría a Francisco Pérez Carballo como vicepresidente segundo, la tercera en cuatro meses tras las presididas por Ayensa y Ruiz Rey –protagonistas de una de las polémicas citadas-, significó la continuidad y, muy pronto, el reforzamiento progresivo de la orientación izquierdista marcada por Ruiz Rey, así como un nuevo paso en la confrontación buscada con la dirección de AR, proceso ambivalente marcado, en esencia, por una coyuntura política en el que se veía inminente y absolutamente necesario la formación de un frente o partido aglutinador de todas las fuerzas republicanas de izquierda, proyecto cumplido en cierto modo con la constitución de IR en abril de 1934.

Y estas disensiones internas cupieron sin excesivos traumas dentro de un partido dirigido por una personalidad política como la de Azaña –su liderazgo tapaba todas las grietas posibles, y el nuevo papel de AR en la oposición iría reconduciendo la mayoría de las dudas por vías más seguras-, a quien se reverenciaba también de forma especial en JAR, como quedaba patente en los editoriales de su órgano de prensa:

Terminada la asamblea de Acción Republicana, ¿qué ha quedado?: un discurso, el formidable, el maravilloso discurso de Azaña. De la alta valoración alcanzada por Azaña como estadista y parlamentario, de la doctrina de éste, se nutre así el partido que resulta así un poco parasitario. En la reciente Asamblea Nacional –como en las anteriores- Acción Republicana no ha afirmado, con el perfil agudo que fuera deseable, su personalidad. La cautela y la timidez han sido los exponentes del espíritu mayoritario de la Asamblea y por ello se ha perdido una ocasión que quizá no se le vuelva a presentar a Acción Republicana de afirmar su personalidad de partido de izquierda, vigoroso, pleno de fé en su destino y con [empujo] y audacia para cumplirlo.<sup>431</sup>

Azaña, el mito o la referencia máxima, mucho más que un simple árbitro político, alejado un tanto de la postura ambigua y evasiva adoptada por la IV Asamblea Nacional de AR, inaugurada el 13 de octubre de 1933, ante la proposición presentada por la delegación de Madrid –las agrupaciones madrileñas de AR y de JAR lideraban, como ya sabemos, el ala izquierdista de este partido, en pugna con la mayoría de las provinciales, más abiertas al diálogo con los radicales y recelosas ante el aura revolucionaria socialista- que excluía de posibles pactos electorales a aquellas fuerzas políticas que no

<sup>431</sup> “Ha quedado un discurso”, en *Jar*, nº 4. 21 de octubre de 1933.

hubieran sustentado la coalición gobernante durante el primer bienio republicano, aviso para navegantes que pretendía alejar a AR de la estrategia radical. Azaña o la República que personificaba, también a ojos de los militantes más jóvenes de su partido:

El nombre de Azaña –figura gigante lo mismo en la derrota que en el triunfo- pasará a la Historia unido consustancialmente a la República. Ni Azaña concíbese sin la República, ni la República sin Azaña. Su ejecutoria de grandeza espiritual, de honestidad, de ponderación, de justicia, de elegancia, de moderno estilo, a Azaña débela. Mientras él gobernó, hubo institución republicana, Estado de derecho, justicia social...<sup>432</sup>

Esta personificación de la República en la figura del líder de AR sirvió, como venimos diciendo, como freno para contener, en cierto manera, el empuje de la corriente extremista de JAR -algunos de cuyos integrantes no descartaban la escisión del partido en última instancia-, especialmente activa desde la derrota electoral sufrida por los republicanos de izquierda en las elecciones de noviembre de 1933 -la refundación del partido en la primavera del año siguiente significaría otra barrera, más relacionada, por otra parte, con el factor tiempo- y focalizada sobre el objetivo de deslegitimar tanto la formación de un gobierno radical presidido por Lerroux como la “pérdida” de la República a manos de cualquier fuerza política que pudiera gobernarla sin hacer explícita su fidelidad al régimen.

El líder radical, como ya sabemos, no era del agrado del órgano de prensa de la Juventud de AR, en el que se le retrataba con frecuencia como un traidor dispuesto a entregar la República a los monárquicos,<sup>433</sup> la verdadera antítesis del buen gobernante, mientras se despreciaba la propia victoria de las “derechas” que propició su ascenso al poder, traducida en clave *jarista* casi más en los 102 diputados obtenidos por PR que en los 115 cosechados por la CEDA. Una victoria conservadora subsidiaria de una supuesta movilización de determinados actores sociales:

Frailes, monjas, damas alegres, damas cristeras, tullidos y enfermos asilados, han rendido en las ciudades el máximo contingente a las candidaturas de derechas. En los pueblos, los atropellos, sobornos y coacciones han llegado a límites inconcebibles (...)<sup>434</sup>

Y, al margen de la alusión subrepticia y alevosa al efecto negativo causado a las izquierdas por el recién inaugurado voto femenino, que era costumbre acompañar con descalificaciones y caricaturas muy poco edificantes -la mujer acudió a las urnas por primera vez en noviembre de 1933, hecho interpretado entonces desde una perspectiva incompatible con el espíritu y los principios democráticos intemporales tantas veces invocados-<sup>435</sup> todas esas “anomalías sociales”, todos esos actores confabulados en una misma trama, incidían o se constituían en causas directas de un verdadero dislate:

(...) el resultado electoral ha sido de tal forma ficticia y dista tanto de la verdadera realidad española, que es bien seguro que las derechas, pese a la alharaca de su victoria, no se atreverán a presentarse en muchos de los pueblos en que dicen haber triunfado, si no es custodiados por la fuerza pública.

<sup>432</sup> “Azaña y la República”, en *Jar*, nº 9. 25 de noviembre de 1933.

<sup>433</sup> En este sentido, un sugestivo titular para un editorial de portada, “Lerroux sinvergüenza y tonto”, *ibidem*.

<sup>434</sup> “La farsa del día 19”, en *Jar*, nº 10. 2 de diciembre de 1933.

<sup>435</sup> Son muy significativos en este sentido los artículos publicados por *Jar*, con el título de “Para la mujer” y firmados por *Hector*, en los números 12 (16-12-1933), 13 (23-12-1933) y 14 (30-12-1933).



Y ante este alevoso atraco a la convivencia del país, ¿podemos los republicanos de izquierda, los que luchamos por una transformación total de la sociedad española, aceptar pasivamente un resultado a todas luces inicuo y falso?. ¿Es que se nos podrá invocar ahora también la famosa juridicidad en cuyo nombre se yuguló todo el empuje revolucionario de abril del 31?.

Momentos son éstos de la máxima responsabilidad para los dirigentes del republicanismo de izquierda; si éstos (...) desoyen en esta hora histórica el latir revolucionario del pueblo español, serán desbordados por el empuje arrollador de las juventudes, que no están dispuestas a dejarse detener por ninguna especie de varones prudentes.

Los republicanos que, ante la inminente amenaza reaccionaria, hacen llamamiento a la prudencia, recuerdan a aquellos pacíficos sabinos (...) que, ante el rapto de sus mujerex por los romanos, vengaron el ultraje leyendo a éstos densos capítulos de códigos que consignaban la ilicitud del rapto.

Las Juventudes no están dispuestas a tolerar mansamente que se trate de corromper o derribar, mediante el fraude y la traición, la República por cuya instauración lucharon.<sup>436</sup>

La impugnación absoluta del proceso electoral que había llevado a Lerroux a la presidencia del gobierno, que desbordaba las páginas de *Jar* -fuente esencial para ayudarnos a descifrar el pensamiento y la acción política de la Juventud del partido de Azaña, aun a falta de documentación suficiente para contrastar más a fondo determinadas posiciones, debates o ambigüedades-, explicaría en parte la relativa fractura que separaba a los afiliados de JAR -o más concretamente a los integrantes de su junta directiva, cuya orientación política le incumbía ahora también a Francisco Pérez Carballo, en calidad de vicepresidente segundo- de la fidelidad plena a la idea democrática que exige, antes que nada, respetar el veredicto de las urnas. O tal vez todo se resuma en una apariencia traducida en un lenguaje cada vez más encendido frente a un contexto político cambiante, en frecuentes alusiones a un teórico e intrincado derecho de rebelión.

En todo caso, se puede decir que estaba en duda el respeto formal a las reglas –o al menos se quería adoptar una pose “revolucionaria” como medio de inspirar determinadas decisiones-, exigible aun cuando la derecha emergente, representada ahora por la CEDA (cuyas Juventudes se habían dejado seducir por la iconografía y la ideología fascista), exhibiera una postura “accidentalista”, que trascendía la cuestión de la forma de estado, para enfocar más nítidamente la conquista de un nuevo régimen político y social, que a los republicanos y a la izquierda obrera les evocaban amenazas involucionistas como la ensayada en la fallida *Sanjurjada*:

Las nuevas Cortes, hijas de la corrupción y de la apostasía, además de ingobernables, de inoperantes, son facciosas y, por tanto, carecen de autoridad legítima para gobernar y para legislar y para obligar. Este Parlamento está deshonorado antes de nacer. No puede normar; y ante él, ante sus decisiones infractoras de la Constitución, conculcadoras de la verdadera ley, asiste al pueblo el sacrosanto derecho de insurrección; el derecho de reaccionar violenta, revolucionariamente, contra los que osen perpetrar el crimen de subvertir el régimen. No. Los republicanos y los socialistas no consentiremos que España torne a ser feudo de la plutocracia, del pretorianismo y de los hijos de Loyola, y eso ocurriría de llevarse a afecto el criminal propósito de entregar la República al conglomerado derechista, hipócrita y artero. Aunque iconoclastas, hay un hombre en quien tenemos fe, porque conocemos su austero y leal republicanismo: Azaña; y le decimos que de él esperamos la salvación de la República, como en aquel memorable 10 de agosto. Pero que si nuestra esperanza en él nos resultara fallida, nos quedaría el recurso heroico de la revolución, que no nos arredra.<sup>437</sup>

<sup>436</sup> “La farsa del día 19”, *Jar*...

<sup>437</sup> “¿Se pretende entregar la República al enemigo?”, en *Jar*. 2 de diciembre de 1933.

Incluso el magisterio de Azaña, menos sensible que sus jóvenes seguidores a la evolución de la política internacional (el auge del fascismo en Europa, la traición a la democracia desde dentro del sistema acontecida en Austria y Alemania), su influjo, su pretendida infalibilidad -imagen empleada para vertebrar estructuras organizativas e ideológicas en construcción-, no sería un obstáculo difícil de trascender para adoptar estrategias más contundentes llegado el caso, según lo que se deduce de las palabras de este articulista, aunque fuese solamente a través de la radicalización del lenguaje y la gestualidad política de los responsables de JAR, cuando no en determinados actos de movilización (siempre dentro de ciertos límites). A finales de 1933 se estaban cambiando las coordenadas políticas con los republicanos en la oposición y AR –con la JAR en vanguardia- se aprestaba a rectificar el rumbo y centrar con nitidez sus objetivos, sobre la base de una acción intensa en la calle, para dirigirse, en primer lugar, a la creación de un verdadero partido republicano que recogiese a todas las facciones izquierdistas, socialdemócratas o federales dispersas en las diferentes formaciones estrictamente (nominalmente) republicanas, que habían concurrido a los comicios de 1931 y 1933 de forma separada. En ese contexto, la nueva junta directiva de JAR a la que pertenecía Pérez Carballo debía gestionar el proceso de unificación de las organizaciones juveniles de los partidos republicanos, sin perder de vista la referencia permanente de las juventudes socialistas, a veces traducida en una presión que marcaba pautas extremistas, y el deseo de no renunciar a la idea de una República social.

Sin embargo, en este punto surge la duda de si esta inercia izquierdista que se había apoderado de JAR no sería el correlato –por la lógica de un liderazgo abrumador- de una lectura obligada de la malinterpretada intransigencia de un Azaña “echado al monte”, subrayada por algunos testigos de la época y autores actuales, contra el gobierno resultante de la victoria electoral de los radicales, sustentado en la mayoría prestada por Gil Robles, líder de la CEDA, como primer paso de una estrategia más ambiciosa. Esta supuesta actitud de Azaña, que, desde las visiones más críticas de su figura y trayectoria política en este periodo, iluminaba las posibles lagunas de sus convicciones democráticas, fue también tratada por Martínez Barrio en sus memorias al reflejar un episodio en el que el recién dimitido presidente del gobierno intentaría coaccionarle -el político sevillano era entonces el presidente del gobierno provisional que había presidido los comicios de noviembre- para que formase un gobierno de concentración de todas las fuerzas de izquierda y convocase unas nuevas elecciones que desbloqueasen la situación política creada tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre.<sup>438</sup> Según esta versión, que Santos Julia refuta aludiendo al rigor táctico demostrado por Azaña en unas declaraciones publicadas por la prensa el 6 de diciembre,<sup>439</sup> Azaña, el día posterior a la carta firmada conjuntamente con Casares y Domingo para pedirle a Martínez Barrio la formación de un gobierno que no pervirtiese la República –no sugiriendo o insinuando nunca la sombra de un golpe de estado-<sup>440</sup>, no

<sup>438</sup> D. Martínez Barrio, *Memorias*, Barcelona, 1983, p. 221.

<sup>439</sup> *El Socialista*, 6 de diciembre de 1933.

<sup>440</sup> Este asunto es desgranado por S. Julia en *Vida y tiempo de Manuel Azaña*, op. cit., p.346-347. Una interpretación diferente de este episodio, considerado una muestra más de la falta de respeto de Azaña y sus correligionarios, republicanos de izquierda, hacia las reglas de la democracia parlamentaria, en G.

habría tenido escrúpulos en violar las reglas democráticas para evitar perder las riendas de la República. Algo bastante improbable, en nuestra modesta opinión, pues se inscribe o envuelve en un rumor que queda aún más descontextualizado si se analizan los discursos e intervenciones públicas de Azaña entre la derrota electoral y la formación de IR, en especial los pronunciados en la plaza de toros de Barcelona en enero de 1934 y en el cine Pardiñas de Madrid en febrero del mismo año.

En esas apariciones, y en alguna otra más, apeló constantemente al espíritu revolucionario como fuente máxima de legitimidad -al emanar de la soberanía popular y de la ley- para la República y su obra transformadora, sin revelar ninguna tentación de subvertir el orden democrático impuesto por las urnas, el marco legal republicano. Ante los que atentaban contra la libertad y la democracia, es decir, contra la República, Azaña oponía en Barcelona la razón democrática (mitin de la plaza de toros, siete de enero),<sup>441</sup> en su sentido de movilización y revitalización de un movimiento republicano anquilosado todavía en el ritual político de los casinos, también útil para renovar o restaurar la estructura y el propio concepto de partido en una sociedad agitada por profundos cambios. Y en el peor de los casos, esto es, aceptando con matices la falta de cultura democrática acusada por muchos republicanos, incluido el propio Azaña – educados o influidos por el complejo tiempo histórico de la Restauración-, la postura excesiva, beligerante, desmesurada que éstos adoptaron ante la política de los sucesivos gobiernos radicales quedaría descontextualizada, como ya se ha dicho, sin reflejarla en el espejo de la durísima, explícita y bien meditada campaña emprendida por los sectores más reaccionarios de la sociedad española contra la misma naturaleza del régimen republicano desde su nacimiento en abril de 1931.

Y el fulgor de algunas palabras o expresiones menos conciliadoras, tanto en boca del gran líder como de los muchachos de JAR, habría que contemplarlo después de advertir sus sospechas ante la creciente supeditación de los radicales a la táctica silente de la CEDA –afectada por estímulos y realidades autoritarias y posibilistas-, hecho que a los jóvenes militantes de AR les hacía intuir, en especial, un futuro nada halagüeño de no producirse cambios significativos en el panorama político nacional.

Aunque sí es cierto, por otra parte, que esta retórica tan brillante, la de Azaña, no exenta de imágenes muy potentes entre el denso rumor de la política en bruto, esta apología de la revolución amenazada y necesitada de una nueva vitalidad, podría ser traducida a una escala más dilatada o peligrosa por un amplio sector de las juventudes de su partido, que podría interpretarla como una licencia no sólo oratoria para pasar a una acción política y propagandística más *directa*. En cualquier caso, no parece descabellado pensar que los ocasionales excesos en la oratoria de Azaña –adaptada ahora a una situación política crítica, de cambios obligados en la estrategia y estructura de los partidos republicanos de izquierda- y la efervescencia interna que experimentaba JAR, tentada en cierto modo por las ideas de una democracia y una república social, eran

---

Ranzato, “La izquierda republicana y la defensa de la democracia”, en M. Álvarez Tardío y F. del Rey Reguillo, *El laberinto republicano. La izquierda republicana y sus enemigos (1931-1936)*, Barcelona, RBA, 2012, p. 135-159.

<sup>441</sup> Véase el texto de su discurso en S. Juliá (ed), *Manuel Azaña. Obras completas*, Vol V, Madrid, C.E.P.C / Taurus, 2008, p. 40-49.

fenómenos inevitablemente paralelos, cuyos ritmos y perfiles exactos fueron determinados por el rumbo de los acontecimientos políticos, lo que eclipsaba en parte el papel de vanguardia atribuido a JAR y cuestionaba su orientación hacia las posiciones de la izquierda obrera.

En sí, es difícil discernir si la radicalización del mensaje político emitido por la corriente dominante de JAR –encuadrada en la agrupación madrileña y enfrentada, cada vez con más éxito, a las otras sensibilidades políticas subyacentes a esta organización juvenil- era más causa o consecuencia de un proyecto de autonomía ensayado respecto de la estructura del partido o se nutría esencialmente de la energía del discurso de Azaña, abocado a un complejo proceso de asimilación de su nuevo estatus de opositor.

Volviendo a los ángulos más visibles de ese espíritu revolucionario reivindicado por Azaña entonces, contemplemos uno de sus reflejos –uno más- en el principio invocado por la hiperactiva agrupación madrileña de JAR en uno de sus manifiestos, dirigido a la opinión pública y divulgado a principios de diciembre de 1933:

La misión que los partidos republicanos de izquierda tienen dentro del régimen es edificar una verdadera democracia, es facilitar al trabajador el mejoramiento de su posición social, sin que tenga que recurrir a actuaciones de violencia; es defender los intereses de los técnicos, de los intelectuales, de todos los que constituyen la clase media, sin excluir al pequeño industrial y al comerciante que persigan un beneficio justo a sus trabajos, y es también destruir sin descanso, sin compasión, los privilegios de los que, ocultos en la sombra, manejan a su antojo la economía nacional (...) para lucir su vanidad de ricos hacendados, haciendo sus combinaciones financieras muchas veces al margen de las leyes escritas, y casi siempre fuera de las leyes humanas (...) Y dentro de esta labor general de los partidos de izquierda (que afortunadamente pronto serán uno sólo) la Juventud de Acción Republicana tiene unos objetivos que cumplir, que justifican el lanzamiento de este manifiesto. Seremos revolucionarios contra los que abusan del poder que les presta su dinero; seremos revolucionarios contra los que traicionan el espíritu de avance social de la República; seremos revolucionarios contra esa Iglesia católica que con impudicia de rufianes defiende su dinero y sus jerarquías sin conservar ni en mínimo grado el amor a los humildes que predicó Cristo; seremos revolucionarios contra un partido y un Gobierno que ha entregado la República en manos de todos los intereses bastardos; seremos revolucionarios contra los que, con una máscara de falso españolismo, intentan destrozar a la patria en una guerra civil; seremos revolucionarios contra los arribistas y mangoneadores de la política; seremos revolucionarios contra los que, a falta de razones, aducen en contra nuestra calumnias y mentiras.

Y seremos revolucionarios activos y, sin las juventudes de izquierda han de dar su sangre y su vida por la pureza del régimen, la daremos sin reparos, pero devolviendo ciento por uno, implacables con los que se pongan enfrente de la justicia de nuestra rebeldía.<sup>442</sup>

Otra muestra más del salto cualitativo hacia un cierto tremendismo, medido inicialmente en la exacerbación del lenguaje, que incluía una táctica orientada a la convergencia con los socialistas, en especial con sus juventudes, la FJS -situadas un paso por delante tanto en aspectos organizativos y estructurales, como en su ideología revolucionaria y capacidad de movilización y acción política-, un paso a dar en la conciencia de que “sólo en el pueblo republicano y socialista está la defensa de la República democrática”, pues “lo ocurrido hasta hoy no es más que el prólogo del drama histórico que va a tener por escenario nuestro país”.<sup>443</sup> Frases de un editorial que, escrito con la contundencia e irreflexión que partiría de la propia conciencia de vulnerabilidad, es decir, situadas en la línea apuntada de aceptación de lo inevitable

<sup>442</sup> “Manifiesto a la opinión pública”, firmado por la Juventud de “Acción Republicana” de Madrid, *Jar*, nº 10. 2 de diciembre de 1933.

<sup>443</sup> “Las Juventudes, alerta”, en *Jar*, nº 11. 9 de diciembre de 1933.

como estrategia de movilización ciertamente intimidatoria, nos informan con nitidez de la perspectiva de futuro que empezaba a cuajar en los cálculos de los dirigentes de JAR: se estaba gestando un “drama histórico” y había que prepararse para la ocasión. Preparación necesitada de una acción no restringida a la descalificación de los radicales, considerados émulos del canciller austriaco Dolifuss, o de los electores que le habían abierto las puertas del gobierno al emergente centro-derecha.

Había que conectar con la conciencia obrera y proletaria, y eso iba a intentar el ala más izquierdista de JAR, que ahora dominaba su junta directiva. En este sentido, por ejemplo, se orientaron críticas ahora dirigidas, incluso, contra el gobierno provisional de la República (sustentado, fundamentalmente, por la figura política de Azaña). De igual modo, se expresaba la necesidad de operar un cambio en la mentalidad de la clases medias, como reflejaban las palabras de destacados miembros de JAR, entre ellos Alfonso de Gorostiza, uno de los oradores intervinientes, a principios de diciembre de 1933, en un acto organizado por esta Juventud en el centro que la misma había abierto meses atrás en el barrio de Pacífico en Madrid. En concreto, Gorostiza afirmaba que la “poca capacidad revolucionaria del Gobierno provisional de la República, es lo que ha creado las situaciones más difíciles al régimen” y advertía que los jóvenes republicanos tenían la obligación “que une al proletariado” de “votar la candidatura socialista, pues el abstenerse es suicida, y todo el que se siente obrero tiene que proceder de esta manera”, deber compartido, siguiendo la lógica de este argumento, por la clase media y no siempre aceptado a causa de lo que Gorostiza denominaba “un enorme desarrollo en ella del instinto simiesco de copia a la aristocracia”. En un tono parecido se enmarcaban las palabras pronunciadas por su compañero Enrique Peinador -abogado que, junto a Serrano Batanero y Victoria Kent se hicieron cargo al inicio de la guerra civil del Colegio de Abogados de Madrid, en nombre de un colectivo de abogados antifascista-, quien introdujo un matiz importante al hablar del papel desempeñado por las juventudes republicanas hasta entonces. Además hacía una interesante observación sobre su naturaleza, composición y comportamiento político, al afirmar que éstas -y las JAR no eran una excepción-, se habían forjado “en la lucha por el pueblo y en contacto con él, aunque en una gran parte estaban formadas por elementos estudiosos”, de lo que se deduciría un hecho esclarecedor: “las Juventudes, fraguadas únicamente en los gabinetes de estudio, transportan el lastre de la juventud que tanto ha perjudicado a la República”.<sup>444</sup>

Este acto no constituía, como estamos viendo, tan sólo una manifestación aislada de una tendencia a la radicalización del mensaje y la táctica política en aras de un mayor grado de movilización de los propios frente a un gobierno cada vez más inclinado hacia la derecha, ni tampoco un nuevo mensaje dirigido a la corriente más moderada de JAR, representada por buena parte de las organizaciones provinciales de esta organización o una advertencia, ya no tan velada, a la dirección del partido para que no cesase en el empeño de reconstruir la coalición con los socialistas. Era también, en realidad, -y esto para nuestro trabajo revela un especial interés-, un reconocimiento indirecto del peso específico que había cobrado dentro de la estructura de JAR un nutrido grupo de

---

<sup>444</sup> La crónica de este acto celebrado por JAR en Madrid, en *Jar*, nº 11. 9 de diciembre de 1933.

estudiantes (afiliados y militantes, provenientes de la FUE), mayoritario sobre todo al principio, bien conectado con la dirección del partido y ahora abocado a adaptarse a un nuevo contexto político y a una dialéctica delicada, a veces contradictoria.

De esta manera, los militantes de JAR que procedían de la FUE debían asumir como suyo, a partir de entonces, un arsenal simbólico menos complaciente con la impronta burguesa e intelectual que caracterizaba hasta cierto punto, mezclado con los rasgos de un sincero espíritu de rebeldía juvenil, a la mayor parte de sus componentes.

En este punto, cabe preguntarse cuál sería la posición de Francisco Pérez Carballo, un dirigente de JAR que había brillado como dirigente de la FUE –pero más “burgués” en su imagen de estudiante culto, de jurista, de intelectual en realidad, que en lo traslucido por su origen social- ante la orientación y el lenguaje maximalista adoptado por los principales dirigentes de JAR con el fin de forzar a la dirección de AR a abandonar las posiciones pactistas, y a alejarse de los republicanos “traidores” de Lerroux, para colaborar así en la construcción de un frente amplio que agrupase a todas las fuerzas de izquierda. La respuesta no sorprenderá, seguramente, ni al lector ni al propio autor de este texto. Si bien es cierto que Pérez Carballo era el vicepresidente segundo de la junta directiva que pilotaba la transformación de JAR en un esbozo de organización juvenil de clase, siguiendo la estela de las Juventudes Socialistas –y a juzgar por el papel que Francisco jugará más tarde en el congreso fundacional de IR y en la nueva Juventud de este partido, su presencia en la junta directiva de JAR no sería sólo testimonial-, también lo es que su fidelidad a la figura de Azaña, o su cercanía a Casares Quiroga, así como su reconocida identidad de hombre de leyes consciente de la magistratura simbólica derivada de esa condición, lo situaba más en la línea de esos jóvenes “estudiosos” que lastraban la acción de JAR mientras se preparaban para un ocupar su lugar en la arquitectura política y jurídica de la República. Era a ellos, precisamente, como hemos visto, a quienes su compañero Enrique Peinador se dirigía en realidad en su intervención en el centro de JAR en el barrio de Pacífico, relatada con anterioridad.

En todo caso, el proceso cristalizado en la fundación de IR en abril de 1934, la nueva estética y estrategia alumbradas durante el mismo, y la definitiva apuesta de Francisco Pérez Carballo por la política, siempre en la órbita de Azaña e integrando ese colectivo de jóvenes republicanos llamados a desempeñar importantes funciones dentro del aparato administrativo y político del Estado republicano, impedirían que el abogado madrileño y muchos de sus compañeros trascendiesen la línea oficial marcada por la dirección de AR y, más tarde, por Izquierda Republicana, al margen de equilibrios políticos contextuales, que no jugarían siempre a su favor.

En todo caso, y como venimos diciendo, la junta directiva de JAR encaró los últimos meses de existencia de AR, antes de disolverse para constituir IR, con la decidida intención de alcanzar dos objetivos prioritarios, urgentes. Por un lado, impulsar la constitución de un gran partido republicano, por otro, luchar contra lo que se interpretaba como la traición a la República por parte del republicanismo histórico, al que se acusaba de entregarse a las derechas y de transigir con los excesos cometidos cada vez con más frecuencia por extremistas monárquicos y fascistas.

Ese gran partido republicano se contemplaba entre los miembros de las juventudes del partido de Azaña desde dos sensibilidades o perspectivas reflejadas en las páginas de su órgano de prensa, como ya podemos intuir por lo dicho hasta el momento, hecho que proyectaba una imagen de JAR como una organización más plural de la manejada por algunos autores, que la conciben casi en exclusividad como un vector que empujaba al partido hacia las posiciones largocaballeristas.<sup>445</sup> Desde la corriente hegemónica en esa coyuntura en la cúpula de JAR, representada por la mayor parte de los integrantes de la agrupación madrileña de esta organización juvenil, se llegó a proponer para el nuevo partido -que se estaba gestando entre la facción izquierdista del PRRS, Azaña y los republicanos gallegos-, el sugestivo y significativo nombre de “Izquierda republicana y social”, en la inteligencia de que “un republicanismo avanzado no es nada sino es socialista”,<sup>446</sup> mensaje matizado inmediatamente por un miembro de la agrupación almeriense, miembro de la facción más “moderada” de JAR, Luis Abad, quien escribía las siguientes líneas al respecto:

Nos hallamos situados entre izquierdas y derechas rabiosas. Y yo me digo que no hay otra solución para librarse de estas fuerzas que presionan a los republicanos españoles, que formar un gran partido republicano de izquierdas, sin dejar por ello de ir de la mano con los socialistas pero realizando una política republicana de izquierdas en la cual se encaucen las aspiraciones de la clase media y de la clase trabajadora, y con la mira puesta en librar al Estado español de tantos males como se ciernen sobre él actualmente. Quizá estemos en el momento de la conquista de la República. Si así es, no encuentro otro camino para conseguirlo que la formación de ese partido republicano de izquierdas, sobre bases totalmente distintas de las tradicionales. De no hacerse en tal forma no veo en España otra solución que la impuesta por grandes movimientos de fuerzas.<sup>447</sup>

Luis Abad, un intelectual que podría encarnar el arquetipo del militante de AR en su primera etapa, regresaba al compromiso del partido con la clase media, los grupos de profesionales liberales, intelectuales y pequeños comerciantes que habían apoyado la idea constitutiva de Acción Republicana, la democracia liberal parlamentaria simbolizada por la República y su intrínseca misión transformadora.<sup>448</sup> Del mismo modo, reconocía la conveniencia de pactar con los socialistas una senda común: la táctica de gobernar también pensando en la izquierda obrera para impedir que su hipotética exclusión, a causa de un probable proceso involutivo del sistema político, la volviese en contra de la República.

Una postura que, además de evidenciar que en las páginas de este periódico cabía, aunque con matices, el debate interno, suscribiría perfectamente Francisco Pérez Carballo aun formando parte de la radicalizada junta directiva de JAR, en manos de los miembros más destacados de la agrupación madrileña de esta organización, porque implicaba el reconocimiento de la importancia de una identidad intelectual republicana de izquierdas compatible con la invocación de un pacto entre fuerzas que actuasen desde la ley y para consolidar la democracia, en un tiempo en que corría el peligro de diluirse entre las grandes ideologías de masas.

<sup>445</sup> Véase, por ejemplo, J. Avilés Farré, *La izquierda burguesa y la tragedia de la II República*, op. cit., p.295.

<sup>446</sup> “La táctica de las izquierdas republicanas”, en *Jar*, n° 12. 16 de diciembre de 1933.

<sup>447</sup> “Amnesia y miedos colectivos”, en *Jar*, n° 15. 6 de enero de 1934.

<sup>448</sup> Poco más tarde, ganaría la cátedra del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, ciudad en la que presidiría la agrupación local de IR hasta 1936, exiliado en Tánger, Orán y México, profesor de Psicología en la UNAM

En cuanto al desafío al régimen planteado por los enemigos de la República, percibido como la oportunidad de frenar la estrategia y el ascenso del fascismo en España, para evitar así los dramas políticos y sociales que estaban comenzando por entonces en países como Alemania o Austria, la otra gran preocupación de la junta directiva de JAR en los últimos meses de existencia de AR, ni se articuló un discurso ambiguo, ni se escatimaron adjetivos. De este modo, se recurrió al código dialéctico que exigía la percepción, en este caso también compartida por el propio Azaña -que así lo reconocía, involucrado ya en la gestación de un gran partido republicano, en entrevista concedida a *Jar*, transcritos en mayúsculas los párrafos considerados esenciales por la redacción-, de que a partir de entonces (son palabras del gran líder del republicanismo español) “LA REPÚBLICA ESTARÁ EN LA CALLE, EN LA OPINIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE ESPAÑOLES, DONDE USTED QUIERA MENOS EN ESTAS CORTES”. Una República amenazada, pues, demandaba un compromiso personal y colectivo que Azaña definía a preguntas del redactor de *Jar* con una contundencia medida, aunque un tanto distorsionada por la licencia tipográfica adoptada por este periódico:

Yo soy republicano, demócrata, constitucional, enemigo por reflexión y experiencia de las recetas catastróficas, PARA DEFENDER LA CONSTITUCIÓN, SU VIGENCIA Y TODO LO QUE ES ESENCIAL EN LA REPÚBLICA, ESTOY DISPUESTO A TODO. Una inteligencia política entre todos los que hemos votado la Constitución, me parece inexorable. Yo quise rehacer eso en diciembre del 31 y en junio del 33. No lo conseguí; pero no me importará que otros lo intentasen, y celebrare que lo consigan. Les ayudaré con todo fervor si nuestro Partido lo encuentra bien.<sup>449</sup>

Otra muestra más de la dialéctica paternalista, no exenta de la lógica reacción de rebeldía filial, establecida entre Azaña y la Juventud de su partido, de la que ya hemos hablado ampliamente, en este caso utilizada por JAR, a través de su órgano de prensa, para avalar con las palabras del líder del partido una metáfora, más que real, conquista de la República en la calle. Una calle tomada por elementos extremistas de derecha, monárquicos y falangistas, especialmente activos en su hostilidad hacia la República, situación frente a la que JAR declaraba estar alerta, literalmente “en pie de guerra”, para evitar así caer en los errores cometidos por los republicanos y socialistas alemanes ante el ascenso del nazismo, derivados de la adopción de una estrategia pasiva o excesivamente contemplativa:

¿No se nos hace caso?. Pues no queriendo ser cazados como conejos, como en Alemania, preferimos morir como hombres, y a ser posible convertirnos en cazadores en vez de ser cazados (...) En pie de guerra republicanos, obreros y estudiantes. Todos contra el fascio. El gobierno puede evitar una guerra civil. ¿Qué no lo quiere hacer? Allá él con su responsabilidad. Pudiera ser que entre los restos y escombros de un día de lucha aparezca la cabeza de un viejo león: el Capitán Metralla.<sup>450</sup>

Bravata final que le iba bien al tono agresivo del editorial de dónde se ha extraído esta cita. Se trataba allí de concienciar a los jóvenes republicanos del peligro de una derecha desbocada, espoleada también por las declaraciones de Gil Robles tras su regreso de Nuremberg, partidario ahora de la conquista de un nuevo estado de costuras

<sup>449</sup> “Azaña ante el momento político”, en *Jar*, nº 13. 23 de diciembre de 1933.

<sup>450</sup> “En pie de guerra”, en *Jar*, nº 16. 13 de enero de 1934.



bastante oscuras, táctica apoyada desde la lucha callejera por una facción juvenil extremista de vocación y maneras fascistas -cuyos agentes callejeros alteraban impunemente el orden público-, y realmente capaz de “hurgar en el avispero anarquista” para empujar al movimiento libertario contra los socialistas, lo que las hacía “tan anarquistas como la FAI.”<sup>451</sup>

Sin embargo, si bien los estallidos de violencia protagonizados por los anarquistas, verdadero quebradero de cabeza para los gobiernos republicanos con independencia de su color político, también eran contemplados desde la línea editorial de *Jar* -y, por lo tanto, desde la dirección de la Juventud de AR- como hechos dolorosos y condenables, no dejaban de interpretarse, en cambio, en clave de una coherente pero peligrosa justificación, como “la prueba ciega, desorbitada, de un pueblo paupérrimo e inculto contra los que lo redujeron a tan triste situación”.<sup>452</sup>

En conclusión, se puede decir que la nueva junta directiva de JAR, encabezada por Gerardo Saura, Emilio Amador y Francisco Pérez Carballo había interiorizado la urgencia de pasar a la acción para devolver a la República a la senda de la *revolución*, esto es, del ambicioso programa reformista abordado durante el primer bienio, lo que, de hecho, significaba revisar en cierto modo su propio concepto de democracia y discutir más abiertamente -y pronto a impugnar en un modo más contundente- la legitimidad del gobierno radical y de la mayoría de centro-derecha en el Parlamento:

(...) Por desgracia no tratamos con árabes, tratamos con cristianos, y de éstos con católicos, quienes prefieren, viendo al enemigo sentado, pasar -y repasar- por delante, pero vivos. No podemos, pues, confiar mucho en la democracia clásica. Las derechas no cederán fácilmente las posiciones que merced a un concepto anticuado y candoroso de los principios democráticos pudieron conquistar. Estimamos la democracia en su calidad de instrumento de justicia social; pero de ninguna manera estamos dispuestos a adorarla como una diosa inmutable. ¿Acaso no hemos visto, atónitos, que la democracia devoró a sus hijos (...)?<sup>453</sup>

Y, en definitiva, este giro emprendido por la Juventud del partido de Azaña ya hacía casi un año -coincidiendo, en realidad, sus inicios con el acoso abierto al que la oposición parlamentaria sometió al gobierno azañista desde Casas Viejas en adelante-, que también alcanzaba la crítica de los principios de derecho político vertebradores de la República como una democracia parlamentaria y liberal, le permitiría a la dirección de JAR meditar seriamente una táctica pactista que desembocase con inmediatez -superando prejuicios legalistas e, incluso, de clase- en la articulación de un frente aglutinador de todas las juventudes de los partidos de izquierda españoles, la cuestión frentista latente con especial fuerza a partir de la derrota de las izquierdas en noviembre de 1933:

Tenemos necesidad permanente, la tiene nuestro común pensamiento revolucionario, de que todos los jóvenes, desde los republicanos de izquierda hasta los comunistas, pasando por socialistas y sindicalistas, de frente en frente único que será la barrera infranqueable, el valladar fortísimo a los embates del porvenir fascista que se avecina. Se dirá, acaso por algunos, que no puede unirse a jóvenes de calidad burguesa y a jóvenes proletarios, que sus ideales son distintos, y esto no es cierto, la juventud no tiene distinguos ni de burguesía ni de proletariado, un pensamiento común les une con cadena de eslabones de acero.<sup>454</sup>

<sup>451</sup> “La rebeldía esteril”, en *Jar*, nº 12. 16 de diciembre de 1933.

<sup>452</sup> Ibidem.

<sup>453</sup> “Hay que cambiar las posiciones”, en *Jar*, nº 13. 16 de enero de 1934.

<sup>454</sup> “Ideales de Juventud”, en *Jar*, nº 18. 27 de enero de 1934.

Por su parte, Francisco Pérez Carballo, que en febrero de 1934 había participado en un acto pacifista organizado por la Liga pro paz mundial en representación de JAR,<sup>455</sup> viviría también la última etapa de AR, hasta la constitución de IR, como una oportunidad para hacerse un nombre dentro del movimiento político republicano liderado por Azaña. Todo parece indicar que ya había tomado conciencia de sus verdaderas prioridades tanto en política como en su vida profesional y se estaba posicionando –y preparando– para desempeñar un papel más visible e importante dentro de la Juventud del gran partido republicano que se estaba gestando en los primeros meses de 1934, un hecho que muy probablemente no le habría pasado desapercibido ni a Azaña ni a Casares Quiroga. Papel que adquiriría ya cierta relevancia desde el mismo momento de la elección de los miembros del Consejo Nacional de IR en el congreso fundacional de este partido, celebrado en abril de ese mismo año, proceso en que el nombre de Francisco Pérez Carballo fue uno de los incluidos entre la élite de los militantes de la antigua AR, llamada a integrar la candidatura oficial presentada para formar parte del órgano directivo del nuevo partido y, más tarde, elegida por la totalidad de los delegados de los diferentes partidos involucrados en la fusión –Acción Republicana, Partido Radical Socialista Independiente y la ORGA–, designados como electores al efecto.

### **La Juventud de Izquierda Republicana y el reverso de la política.**

Francisco Pérez Carballo fue elegido vocal del Consejo Nacional de IR, en representación de Acción Republicana, en la jornada de clausura de la asamblea constituyente de este partido, celebrada la tarde del 2 de abril de 1934 en el salón de actos de la sede madrileña del PRSI de Marcelino Domingo.

Su elección fue refrendada por los votos de la totalidad de los 81 delegados asistentes a la misma, que, sin embargo, no votaron de forma unánime los nombres de todos los integrantes de la candidatura oficial confeccionada por la comisión organizadora del acto, en la que estaba incluido el abogado madrileño, dada la libertad de la que disfrutaban, según el reglamento acordado para la ocasión, para modificar la lista encabezada por Azaña y Marcelino Domingo. Junto a Pérez Carballo, obtuvieron la totalidad de los ochenta y un votos posibles –además de un puesto en la dirección del partido–, Manuel Azaña (presidente), Casares Quiroga, Salvador Quemades, Ruiz Funes, Díaz y Díaz Villamil, Gabriel Franco y Manuel Muñoz (estos últimos elegidos también como vocales). Como contraste a estos datos, Marcelino Domingo (vicepresidente) o José Salmerón (secretario general) consiguieron menos sufragios que Pérez Carballo (79 y 78, respectivamente), cifras muy superiores, por ejemplo, a los ocho votos cosechados por Mariano Joven –un hombre curtido en la política republicana como gobernador civil–, propuesto por los electores, que estaban facultados, como se ha dicho, para incluir o rechazar nombres en la candidatura propuesta desde la dirección del nuevo partido de IR.<sup>456</sup> Hay que resaltar el hecho de que su ingreso en el Consejo Nacional precedió a su inmediata elección como directivo de la recién nacida Juventud

<sup>455</sup> *La Libertad*. 9 de febrero de 1934.

<sup>456</sup> *El Sol* –con error tipográfico incluido al citar a Pérez Carballo como “Pérez Calvario” entre los miembros electos del Consejo Nacional de IR– y *La Libertad*. 3 de abril de 1934.

de IR –la ratificación de su cargo como representante de esta organización juvenil en la cúpula del partido de Azaña devino con posterioridad, probablemente en el contexto del primer congreso de esta Juventud, celebrado a finales de junio de ese año-, hecho que aun respondiendo, de forma obvia, a la lógica impuesta por razones cronológicas, procedimentales y jerárquicas, no deja de ser significativo, como se verá en las páginas siguientes.

La asamblea finalizó con el vibrante discurso pronunciado a continuación por Azaña, decidido a establecer una sólida relación causal entre la constitución de un partido republicano fuerte y la fundación de una verdadera democracia republicana, en la creencia de que la fortaleza o debilidad de los regímenes políticos dependía, fundamentalmente, de los hombres que los tenían en sus manos.<sup>457</sup> Un discurso que sirvió como epílogo de una declaración política previa que, leída por Mariano Ruiz Funes, revelaba con claridad la desazón de los verdaderos republicanos respecto de los gobiernos radicales que estaban desnaturalizando la idea institucional y la política republicana desarrolladas durante el primer bienio y, en razón de todo ello, mostraba la disposición de IR a colaborar con todas las fuerzas republicanas, incluidos los socialistas, en la labor de rescate de la República democrática y laica.<sup>458</sup>

El proyecto de reunificación de la izquierda que intentaría encabezar IR a lo largo de casi dos años, y bajo el que también subyacía la pérdida de su espacio natural como partido de élites (al menos en su composición sociológica), el Parlamento -donde ahora se veía reducido a un papel secundario, menor, destinado a perdurar durante la recién inaugurada legislatura de mayoría centro-derechista-, demandaba un nuevo rumbo basado en estrategias políticas modernas, conducentes a la utilización de la calle, las masas y los nuevos medios de propaganda y movilización, en cuyo desarrollo y ejecución su organización juvenil tendría la posibilidad de asumir un papel más relevante, pero no siempre bien medido o dotado de la suficiente autonomía organizativa.

En relación a la asignatura pendiente de la modernización completa de una estructura capaz de adaptarse mejor a los planteamientos de los grupos de jóvenes militantes republicanos organizados, cuestión latente durante la corta pero intensa vida de AR, la asamblea constituyente de IR acordó que la Juventud madrileña del nuevo partido asumiría la representación de las organizaciones juveniles de los tres partidos fusionados –AR, PRSI y ORGA. Con esta decisión se refrendaba el pacto alcanzado previamente entre las juventudes nacionales de estas fuerzas políticas y se entregaba este proyecto a la agrupación más capacitada para desarrollarlo, tomando como referencia su propio modelo organizativo y su contrastada lucha por conseguir un grado mínimo de autonomía desde los tiempos de su precursora, JAR. De este modo, la presidencia de la organización juvenil madrileña de IR (JIR) le correspondería a Francisco Pérez Carballo -y, a modo transitorio o testimonial, también la de las juventudes nacionales de IR durante el periodo inicial de constitución de las mismas-, quien en algún momento entre la concreción de la asamblea constituyente de IR y el

<sup>457</sup> El discurso pronunciado por Azaña en el acto de clausura de la asamblea fundacional de IR, en S. Juliá (ed), *Manuel Azaña. Obras completas. Noviembre 1933/julio 1936* (Vol V), op. cit, p. 88-97.

<sup>458</sup> *El Liberal*. 3 de abril de 1934.

acto celebrado el 16 de abril en el cine Pardiñas, convocado por la propia Juventud de IR, -habían transcurrido tan sólo un par de semanas desde la puesta en marcha definitiva del tan anhelado partido republicano de izquierdas-, habría sido elegido para ostentar tal responsabilidad (la de la presidencia de la Juventud madrileña en puridad).

Así pues, a Francisco Pérez Carballo se le citaba en las crónicas de la prensa madrileña sobre el mitin del cine Pardiñas -destaca la precisión en los términos empleada por *El Liberal* y *Heraldo de Madrid*, diarios, por esas fechas, afines a la causa de la reconquista de la República invocada por los fundadores del nuevo partido de IR-<sup>459</sup> como presidente de la Juventud de IR de Madrid y se le ubicaba en el centro de la mesa presidencial, flanqueado en ella por Azaña, sentado a su derecha, Casares Quiroga y M. Domingo, estos últimos situados a su izquierda. En el escenario, frente a ellos, una maqueta del monumento que se pensaba erigir a los homenajeados capitanes Galán y García Hernández, héroes simbólicos de la memoria republicana -durante el acto se repartirían ejemplares de un manifiesto que exhortaba a la ciudadanía a colaborar en la construcción del mismo y copias del discurso de Azaña en la asamblea de constitución de IR-, le confería un grado especial de emoción y solemnidad al acto.

Francisco Pérez Carballo fue el encargado de las obligadas presentaciones, de informar sobre las numerosas adhesiones recibidas, de advertir del comienzo de la activa campaña de propaganda proyectada por la izquierda republicana y de pronunciar un breve discurso introductorio, en el que, además de señalar que “la fusión de los partidos de izquierda había dado a la juventud una nueva moral”, se reafirmó en la idea, ya casi convertida en un eslogan por los dirigentes de su partido, de la necesidad de “reconquistar o recuperar la República de los verdaderos republicanos”.<sup>460</sup>

En sus palabras, también se traslucía la tácita aceptación de la filosofía política y la estrategia inspirada por los líderes de su partido, sintonía proyectada más allá del papel de anfitrión que, como representante de la Juventud de IR de Madrid, le tocaba jugar en esta ocasión. De este modo, “las Juventudes de izquierda esperaban ansiosas las lecciones de los dirigentes del partido”,<sup>461</sup> según afirmaba el abogado madrileño en la parte más enjundiosa de su breve alocución, frase impactante que podía reflejar tanto el grado de diplomacia en la expresión exigido por la ocasión como la conciencia de un activista republicano que, durante su corto periodo como miembro de la junta directiva de JAR, había navegado entre dos rumbos paralelos hasta cierto punto en el sentido, pero no tanto en la intensidad y graduación. Uno, el marcado por la dirección del partido, es decir por el propio Azaña, en una coyuntura que exigía una renovación en el lenguaje y la estrategia; el otro, el trazado desde la izquierda obrera, interpretado y exacerbado desde la vanguardia de las Juventudes Socialistas, factor de atracción para una parte de los dirigentes y militantes de JAR.

Por ese motivo, las palabras de Francisco Pérez Carballo -ahora como presidente de la Juventud madrileña de IR-, aunque no pueden considerarse una prueba contundente por su brevedad y dependencia del contexto en que fueron pronunciadas, sí revelaban algo más profundo y no tan banal como unas frases de mera y obligada adulación o

<sup>459</sup> *Luz* y *Heraldo de Madrid*, 16 de abril de 1934; *El Sol* y *El Liberal*, 17 de abril de 1934.

<sup>460</sup> *Luz*, 16 de abril de 1934.

<sup>461</sup> *El Liberal*, 17 de abril de 1934.

cortesía. Traducían la posición de un republicano que admiraba sinceramente a Azaña y compartía, en paralelo, en su función como dirigente de las juventudes republicanas de izquierda en los dos partidos sucesivos constituidos por aquél, el punto de vista del líder del partido acerca de la necesaria alianza con el proletariado, defendiendo al mismo tiempo, desde esta perspectiva, el argumento de la ley como instrumento de transformación al dictado de los principios de la democracia parlamentaria. Hecho que guardaba una especial coherencia con la trayectoria global -mirando al pasado tanto como al futuro- de un joven intelectual devorado por el destino, como tantos otros aprendices de político en la tragedia de una guerra civil. Esta hipótesis explicaría mejor –y encajaría mejor, reconozcámoslo así. en una relación causal establecida entre distintos episodios separados por algunas zonas de sombra- la presencia de Pérez Carballo en la última directiva de JAR como vicepresidente segundo, un tanto alejado en sí del discurso de la cúpula de esta organización juvenil –aunque este hecho podría también haber respondido a otras razones más personales que políticas-, y su posterior nombramiento como presidente de la Juventud madrileña de IR, en un momento en el que ésta asumía la representación de la Juventud nacional en el periodo constituyente o de estructuración de este partido.

Los líderes de IR que intervinieron a continuación en el escenario del cine Pardiñas (Casares, Domingo y Azaña), en medio del entusiasmo del público que abarrotaba el recinto, abundaron en la doble idea de la parálisis de la República, consecuencia directa del ascenso de los radicales al poder, y de la necesidad de que las riendas de ésta deberían estar en manos de los republicanos sinceros, los verdaderamente comprometidos con la esencia del régimen.

Como era de esperar, fue Azaña el que, al margen de apelar a la jerarquía del omnipresente “espíritu republicano”, basado en los valores cívicos de la justicia -que contemplaría la República por encima de la Constitución y la Revolución, en el sentido tantas veces apuntado, como una prioridad ante ambas-, y centrado en la tarea de reconstrucción de la República que se avecinaba, se dirigió de forma más directa a la juventud republicana. Lo hizo, como en él era costumbre a la hora de referirse y dirigirse a los jóvenes, de una forma genérica, es decir, no restringiendo su interpelación a los afiliados a la Juventud de IR: como es sabido, los aspectos estructurales y organizativos de las fuerzas políticas en que se integró no constituyeron nunca su principal preocupación, por lo que aquí las etiquetas sobraban. En otras palabras, trascendió en cierto modo la letra de la teoría generacional al perfilar el análisis histórico de rigor, siempre presente en sus discursos, de forma que se afianzase entre sus oyentes la idea de proyecto colectivo, común, intergeneracional en el sentido de afirmar la existencia de una sola generación a la hora de abordar las empresas históricas cruciales. De ese modo, le recordó a la juventud republicana la importancia de la misión para la que había sido designada:

(...) y a vosotros, jóvenes, dentro de esta formación de la conciencia ciudadana y cívica, respondiendo del porvenir de la República y de España, os está encomendada una misión que yo estimo capital. La República, la patria republicana española necesita, ¿cómo lo diremos?, cuadros de mando, gestores, administradores, capataces? No sé, como queráis. Necesita esta formación de sus cuadros, no basta que pongáis al frente del Estado y del Gobierno gentes más o menos ilustres, más o menos talentudas, más o menos elocuentes; eso no basta, y, a veces, la desesperación viene de ahí, de que uno empeña palancas de mando y no sabe qué resorte va a

funcionar en la otra parte de la máquina (...) Vosotros los jóvenes republicanos sois los llamados a preparar esos cuadros de mando, esas filas de administradores, de gestores; si no los formamos, no habrá República en España; habrá unos membretes en papel oficial, pero no habrá un Estado fecundado por la idea y por la moral republicanas; si no los formamos no se podrá gobernar en España o se gobernará y se regirá el país despóticamente, sustituyendo esa disciplina interna fundada en la capacidad, en el trabajo y en la autoridad personal del que sabe hacer las cosas, por un despotismo, o se arrojará en bandazos de anarquía y de desprestigio nacional, corriéndose de acá para allá como las dunas movibles a placer de los huracanes, dejando al descubierto la rosa estéril.<sup>462</sup>

La República, el partido de Izquierda Republicana y Azaña necesitaban a la juventud republicana para asegurar la arquitectura política e institucional del nuevo régimen, parte de la cual -nos estamos refiriendo a sus elementos más valiosos o más comprometidos- serían designados, un tanto precipitadamente, para ocupar puestos de responsabilidad en la administración a partir de la victoria del Frente Popular, entre ellos el voluntarioso y enérgico Pérez Carballo.

Pero esa necesidad, esa confianza a depositar en los jóvenes republicanos no respondía únicamente a razones de obvio pragmatismo, inducido por el imperativo del tiempo cronológico, sino que derivaba también del temor de Azaña —expresado con claridad en numerosas ocasiones, por ejemplo en la clausura de la asamblea de AR en octubre de 1933- a que la función revolucionaria desempeñada durante el primer bienio por sus gobiernos quedase en suspenso o reducida, desde una perspectiva histórica, a la metáfora de ese “islote” de esperanza que había surcado en ocasiones la política española durante el siglo XIX, hasta verse rodeado “por el oleaje de las bajas pasiones, de las miserias nacionales y de la decadencia pública”. En otras palabras, para Azaña la juventud significaría y atesoraría, en esencia, el verdadero futuro de la República, sujeto primordial que no era en realidad “la juventud organizada de este o del otro partido”, sino ésta en el “ancho cauce del porvenir español”.<sup>463</sup>

En cualquier caso, la vida de la Juventud de IR continuaría al margen de la pose ensayada por el Azaña intelectual —en su relativo desapego por la vida interna del partido y su intrínseca liturgia burocrática- a la hora de adentrarse en el terreno de la abstracción para definir problemas políticos cotidianos, acuciantes, en términos difícilmente traducibles a un lenguaje adaptado a un público menos culto o instruido que el habitual en los actos políticos organizados antes por AR y ahora por el nuevo partido de Izquierda Republicana.

Así, el 28 de junio daba comienzo en el local social de IR, situado en el número seis de la calle Mayor, el primer congreso nacional de la Juventud de Izquierda Republicana (JIR), en el que Francisco Pérez Carballo actuaría como representante de esta organización juvenil en el Consejo Nacional del partido de Azaña. Su elección para este cargo, o si se prefiere el momento en que se le atribuyó esta función, aconteció tal vez en el transcurso del congreso, muy probablemente en sus prolegómenos, sin que se

<sup>462</sup> Discurso de Manuel Azaña a los jóvenes republicanos, pronunciado en el Coliseo Pardiñas de Madrid, el 16 de abril de 1934, en S. Juliá (ed), *Manuel Azaña. Obras completas*, op. cit, Vol V, p. 101.

<sup>463</sup> “Pasado y porvenir de la política de Acción Republicana. El régimen español y la situación del mundo. Crisis de la razón del individuo al Estado. El caso de España”. Discurso pronunciado en Madrid, el 16 de abril de 1933, en la clausura de la Asamblea del partido de Acción Republicana, en S. Juliá (ed), *Manuel Azaña. Obras completas*, op. cit, Vol. IV, p. 511.

pueda precisar tampoco si ahora seguía ocupando la presidencia de la Juventud madrileña de IR, cargo desempeñado, eso sí, en un principio, tras la Asamblea Constituyente de este partido, y traducido entonces, por la equivalencia establecida entonces, y de forma temporal o transitoria, en la categoría de máximo responsable de la JIR. Lo evidente, en este momento, ya deslindadas ambas responsabilidades, era que Prudencio Sayagués acudía a este congreso como presidente de JIR, ignorándose quién ostentaría en ese momento la presidencia de la madrileña.

De algún modo, todo este periodo de reconstrucción de la Juventud de IR, desde el preámbulo de JAR hasta el ambicioso proyecto de engarce y fusión de distintas organizaciones juveniles republicanas en IR, nos presentaría la imagen de un Francisco Pérez Carballo representando más al Consejo Nacional en la Juventud de IR que a ésta en aquél, hecho que obedecería a posibles razones como su distanciamiento del ala más izquierdista de JAR o a su propia decisión de abrirse paso en la política y, en consecuencia, de no separarse demasiado de la dirección nacional de IR, o tal vez a una combinación fluctuante de ambos factores. En cualquier caso, lo cierto es que apenas tres meses después de la constitución de la Juventud de IR, y del propio partido, Prudencio Sayagués volvía a coincidir con Francisco Pérez Carballo –se conocían desde los tiempos de la FUE y de AR- tomando, en este caso, las riendas de la nueva organización, instalado Francisco en una posición nada deshonrosa, más bien todo lo contrario, pues se encontraba cara a cara, con cierta frecuencia, con los dirigentes de su partido y ejercía como correa de transmisión entre ambas organizaciones. En definitiva, el lugar que ocupaba se encontraba en la misma estructura donde se filtraría muy pronto el flujo de poder que ya había contemplado, aunque de una forma más subordinada, menos activa, cuando fue designado secretario particular del subsecretario de Presidencia, Enrique Ramos, durante los gobiernos de Azaña.

Pérez Carballo ocuparía, pues, la presidencia del comité organizador del primer congreso de la JIR<sup>464</sup> -mientras que Alfonso Ayensa, significativamente, ejercería como delegado de la Juventud madrileña de IR- y sería, además, el encargado de defender la ponencia económica, que junto a la titulada “Actitud de las Juventudes de Izquierda Republicana ante los problemas bélicos del mundo”, una propuesta relativa a la acción cultural universitaria, en relación a los problemas de la enseñanza en España, y una declaración política de autoafirmación ideológica y programática constituían la base argumental para el debate político previsto. Las cuestiones a tratar en la ponencia económica que iba a defender Pérez Carballo se habían fijado con antelación y abarcaban los márgenes de las políticas social, agraria, comercial, industrial, fiscal, financiera, administrativa y de obras públicas, entre otras, con los que aquélla necesariamente intersectaba. A las diez y media de la mañana del 29 de junio comenzó el debate de la ponencia económica, ante una mesa de discusión constituida por delegados de los grupos locales y provinciales de Manzanares, Valdepeñas, Vitoria, Salamanca y Madrid. Francisco Pérez Carballo inició su intervención advirtiendo que su defensa de la ponencia económica presentada por la comisión organizadora, en nombre de las Juventudes de IR, no se iba a ceñir a la exposición de argumentos

---

<sup>464</sup> *Heraldo de Madrid*. 29 de junio de 1934.

estrictamente económicos, sino que su intención era tratar cuestiones de política social vinculadas de forma estrecha a la situación económica y, además, merecedoras de un especial interés por parte del partido, como, por ejemplo, la del paro obrero, “que es exponente del desarrollo económico de un pueblo por ser signo revelador de una crisis; pero que al mismo tiempo es un dato para acometer el remedio de ella”.<sup>465</sup> Paralelamente, subrayó la necesidad de tomar medidas preventivas que ayudasen a preservar la política social realizada por la República en el primer bienio de posibles ataques, fin para el que juzgo imprescindible el cumplimiento de los artículos de la Constitución republicana que dictaban normas en este sentido.

En cuanto a la tan debatida reforma agraria, expresó su convicción de que lo hecho hasta ese momento no era sino el preámbulo de una obra que la República estaba obligada a continuar, profundizando al mismo tiempo en los términos de una verdadera política municipal que combatiese con eficacia el fenómeno del caciquismo.

Para terminar, y después de pasar revista a los puntos de la ponencia relativos a las políticas comercial, industrial, fiscal –en este apartado, señaló la urgencia de frenar la evasión de capitales- y de obras públicas, se aprestó a “dar la batalla a esos economistas antirrepublicanos que achacan al régimen todos los males de nuestra economía”.<sup>466</sup>

La sesión de la mañana finalizó con la discusión de la ponencia antibélica, defendida por la delegación barcelonesa, que, tras el debate suscitado en torno a ella, se vio reforzada en su vocación de apoyo a una campaña internacional en contra de la guerra y el fascismo, secundada también por todas las juventudes revolucionarias de España. Esa misma tarde, viernes 29, Pérez Carballo volvía a intervenir en el congreso de las Juventudes de IR pronunciando un discurso muy significativo, por su alto contenido político -y, también, por la claridad con la que definía su posición personal-, esta vez en calidad de representante de esta organización juvenil en el Consejo Nacional del partido y miembro del comité organizador de este congreso. De su alocución, la prensa del día siguiente destacaba algunos párrafos:

Nuestras palabras tienen un valor amplio y fuerte, un valor que queremos que llegue a donde debe llegar, al ámbito nacional, en donde resuenan la política de los republicanos de izquierda, aparentemente apartados de la lucha por la avalancha que han preparado las fuerzas caóticas del republicanismo histórico. Vamos a la reconquista de la República con toda la fuerza de nuestro entusiasmo, para evitar que caiga en manos que la falseen por completo y que están esperando el momento oportuno de apoderarse de ella para hacerla virar del significado izquierdista que tuvo al nacer. Este es el significado del primer Congreso, dentro del terrible momento en que nos reunimos. Nosotros tenemos primero un pleito, el de nuestra casa, que hemos de resolver, consistente en nuestra organización nacional. Creemos los jóvenes de los distintos grupos republicanos de España que nuestra acción no era suficientemente eficaz, que no tenía la pujanza que deseábamos. La unión hace la fuerza. Nuestro partido la ha buscado uniéndose en una sola disciplina: los jóvenes de Izquierda Republicana han creído también que para lograr esa mayor eficacia, esa mayor disciplina, deben reintegrarse a un cuadro único, y por eso, después de la celebración del Congreso general del partido, los jóvenes de las distintas agrupaciones de izquierda de España han trabajado por la formación de este organismo nacional. Este pleito, que es de nuestra casa, tiene ante todo el valor cuantitativo que, además de reunir el número y dar el total de los componentes reviste una función moral, obedece a un generoso impulso, que nosotros debemos recoger para dotar de eficacia a la tarea que se nos ha señalado. Nosotros hemos actuado unas veces dentro del partido, otras en organismos anteriores a él, y hemos actuado siempre con un amplio sentido renovador.

<sup>465</sup> *El Liberal*. 30 de junio de 1934.

<sup>466</sup> *Ibid.*



Los artífices del bienio que llaman nefasto –quienes de sobra saben que los nefastos son ellos– han sido nuestros hombres, las personas que dirigen nuestra política. Si nosotros dirigimos la mirada al ambiente republicano veremos que en realidad lo poco que se ha hecho lo hemos hecho nosotros. El sentido del 11 de abril no quiere decir el chinchín ni la marcha alegre de los republicanos, no. El 14 de abril es la huida de los monárquicos, bien avenidos entonces con pasar inadvertidos, que levantan hoy, cínicos y desvergonzados, su voz para zaherir y combatir a la República.<sup>467</sup>

Terminaba su intervención el abogado madrileño refiriéndose a la relación entablada por su organización con las juventudes de diferentes partidos políticos españoles y dando varias vivas a la República, palabras y gestos que fueron correspondidas por los aplausos y vítores del público asistente a la reunión. La idea que subyacía en sus palabras, el mensaje que Francisco quería transmitir a los afiliados a la Juventud de IR, era ahora, sin duda –además de la reafirmación del objetivo irrenunciable de reconquistar la República y reanudar de ese modo la tarea revolucionaria, transformadora, impuesta–, la certeza de que dentro del nuevo partido no se iban a cometer los errores políticos y organizativos que habían lastrado el desarrollo de la organización juvenil de AR, de la que, como sabemos, él había formado parte tanto a nivel de militante como de miembro de su última junta directiva. En paralelo a la defensa de la obra y el verdadero espíritu de la República en la que estaba comprometido sinceramente, la principal preocupación del abogado Pérez Carballo era dotar de una estructura y unas reglas de funcionamiento a la organización juvenil de IR para convertirla en un brazo importante del partido y en un elemento de interlocución en la toma de decisiones políticas por parte del Consejo Nacional de IR, a cuyas reuniones asistiría, en principio, y según lo contemplado en los estatutos de IR, cuando en ellas se trataran asuntos relacionados con las Juventudes de este partido.<sup>468</sup> Una estructura que, además, debía contribuir a la unificación efectiva de todas las células juveniles del partido dispersas por España y redundaría en la eficacia de la acción política y reivindicativa promovida por los jóvenes republicanos. Una preocupación vertebradora que era reflejo del nuevo papel que le correspondía asumir, al menos en teoría, a la juventud en primera línea de la acción política y social durante el periodo republicano, que Pérez Carballo ya había asumido –recordemos– un par de años atrás como dirigente de la FUE de Madrid.

Esta postura guardaba coherencia con su presencia en el máximo órgano de IR, el Consejo Nacional –previa, en puridad, a su adscripción a la directiva de la Juventud del nuevo partido, que se constituyó forzosamente a continuación–, en representación de sus juventudes políticas y, del mismo modo, con su identificación con el liderazgo y el rumbo que Azaña le había impuesto al partido.

La declaración política difundida por la Juventud de IR en el transcurso de este primer congreso, momento de su constitución oficial como agrupación nacional, iría en consonancia con la moderación ideológica –el lenguaje empleado es otra cuestión que ligaba grados de enfatización con lecturas meramente coyunturales– que caracterizaba las apariciones y posicionamientos públicos de Pérez Carballo tanto en su etapa como

<sup>467</sup> *El Liberal*. 30 de junio de 1934.

<sup>468</sup> ARG. Fondo Casares Quiroga, *Proyecto de estatutos del partido "Izquierda Republicana"*, artículo 45.

líder estudiantil como en sus recientes responsabilidades políticas, inspiradas en una línea de pensamiento marcada por la impronta de la FUE, organización de procedencia de una parte de los militantes y simpatizantes de las Juventudes de AR y, más tarde, de IR.

Por ello, y más allá de las habituales equilibrios semánticos, no mostraría los signos del genuino radicalismo que impregnaba el discurso y la actuación de organizaciones como las Juventudes Socialistas -por poner un ejemplo-, decididas a emprender el camino, al menos en el plano retórico, de la subversión del orden burgués y no sólo a rectificar el rumbo de una República desnaturalizada por la tendencia reaccionaria apuntada por los gobiernos radicales, o a defenderse de los ataques de los grupos fascistas y de extrema derecha decididos a controlar la calle. En este sentido, la referencia de la Juventud de IR en su declaración política a la defectuosa interpretación del liberalismo que llevó a la izquierda a una peligrosa confusión de su propia identidad, era en el fondo expresión de un anhelo difícil de confesar en determinados momentos: el de la renovación del liberalismo, ideología a la que no se renunciaba en absoluto siempre que se afirmarse o proyectarse en una identidad izquierdista permeable, contemplada perfectamente compatible con una orientación socialdemócrata del pensamiento liberal.

Por otra parte, si parecía verosímil que la decepción por la marcha de una República atrapada en una encrucijada demasiado previsible -que estaba a punto de quebrar, bajo el peso del republicanismo histórico representado por Lerroux, en la vía trazada por la derecha accidentalista- pudiera traducirse, llegado el caso, en un cambio de estrategia que no se llegaba a definir con claridad, más allá de una advertencia difusa de rebeldía, por la falta de convicción en la utilización de la agitación indiscriminada o la violencia callejera como instrumentos normalizados de acción política:

La Juventud de Izquierda Republicana, al constituirse como Agrupación nacional, afirma su deber de luchar para conquistar justicia política y social digna de nuestro tiempo. Estimamos que es inaplazable restituir a la República su sentido republicano desarrollando una intensa labor proselitista y una decidida labor en todos los terrenos para dar a la reacción y al conformismo la batalla definitiva.

Propugnamos el ataque implacable a las derechas fascistas y monárquicas y a los republicanos ineptos y desleales que han abierto a las derechas el camino. Preferible que la República no hubiera venido a haberla sentido enfriarse y a haberla visto corromperse. La República deja de serlo cuando olvida su origen revolucionario o descuida su vida moral.

Queremos ser izquierdistas, demócratas, parlamentaristas: por este orden. El error de la izquierda ha sido confundir su vida con la del liberalismo. Nosotros queremos, ante todo, soluciones de izquierda. Deseamos poder desarrollar a la vez la labor armónica liberal con un liberalismo renovado; pero no llevando este deseo hasta acarreamos nuestra propia muerte política. Si de nuestras posiciones nos desalojan, aceptamos la batalla en otro terreno, al que nos habrá llevado la agresión del adversario.<sup>469</sup>

Amenazas veladas, con algo de bravatas, las recibidas, proferidas o insinuadas por los propios militantes de la Juventud de IR, que no impedían el que éstos, representados en una buena parte por la voz de uno de los miembros del comité organizador del congreso de la Juventud de IR, cuya identidad no se revelaba -sus declaraciones a *Heraldo de Madrid* eran anónimas-, considerasen que “la democracia puede ser aún

---

<sup>469</sup> *El Liberal*. 29 de junio de 1934

procedimiento de gobierno haciendo desaparecer previamente todos los defectos de candor e indefensión que a ella han estado vinculados hasta hoy.<sup>470</sup>

Vemos en estos últimos fragmentos tanto la reacción, un tanto tibia eso sí, ante el acoso sufrido por la República y por esta organización juvenil a manos de agentes involucionistas, como la disonancia entre el lenguaje, determinado en este caso por la coyuntura política, y los límites previsibles de un salto cualitativo hacia un tipo de “acción directa”, que se fijarían en función de una hipotética ofensiva abierta del adversario, temida más que se deseaba. En sí, el discurso de la Juventud de IR respondía al mismo reto afrontado de inmediato por el líder del partido, Azaña, quien, como es sabido, no se comprometió con el proceso revolucionario en los acontecimientos de octubre de 1934 –pero sujeto a cierta inercia revolucionaria, y a razones estratégicas y de táctica política, no mostró un rechazo categórico de la lucha extraparlamentaria-, y se limitó a aconsejar, a las fuerzas de la izquierda más decididas a frenar el posible desmantelamiento de la República a manos de la CEDA y los debilitados radicales, que desistieran de la utilización de medios subversivos o violentos.

De hecho, en su intervención con motivo del acto de clausura del primer congreso de la Juventud de IR, pronunciado en el Ateneo de Madrid –el resto de las sesiones se habían celebrado en el local social de IR-, Azaña retrataría esta sintonía, esta comunidad intergeneracional de intereses o de destinos (señalados por el inmovilismo social y político característico de la realidad española), que hacía entroncar el discurso de los jóvenes militantes de su partido, entre ellos Pérez Carballo, con el emanado de la dirección de IR, cuya línea ideológica –de mayor compromiso teórico con las posiciones de la izquierda que la sustentada por la antigua AR- compartían de una forma más natural, más allá del hecho de que ahora, en IR, disfrutaban de una mayor autonomía orgánica:

Los hombres de mi tiempo y de mi generación tenemos hoy planteado en nuestro espíritu el mismo problema político de nuestros veinte años. Exactamente igual, podemos acercarnos a los jóvenes de hoy llevando en el alma, no lo que se suele llamar el brío juvenil, sino el mismo trágico problema de iniciación en la vida que nos despertó en los albores de este siglo y que no hemos conseguido resolver (...)

Por eso entre vosotros y nosotros hay una identidad de pensamiento, de sensibilidad, y una identidad de fines que borran dentro del partido la distinción, puramente externa, de jóvenes y viejos. Izquierda Republicana es la juventud política española puesta en pie dispuesta a defender...<sup>471</sup>

En otras palabras, Azaña, no interesado en demasía, como es sabido, en la vida interna del partido –tampoco le concedía gran importancia a la cuestión de las identidades grupales dentro del esquema organizativo y estructural de su partido, entre ellas la de la JIR-, trascendía a voluntad el plano *doméstico*, el de la vida política institucional, convencional. Y lo hacía para establecer una identificación generacional que implicaba la percepción clara y compartida de la prevalencia de los verdaderos problemas estructurales del país y, en especial, de las ideas para contrarrestarlos (es decir, del plano conceptual), sobre los debates considerados de política menor,

<sup>470</sup> *Heraldo de Madrid*. 29 de junio de 1934.

<sup>471</sup> S. Juliá (ed), *Azaña. Obras completas*, op. cit, Vol V, p. 143.

sometidos, desde su perspectiva, a necesidades de modernización de la acción política, que malinterpretaba al concebirlos muchas veces en clave personalista.

En otro orden de cosas y desde el punto de vista de la vida interna del partido, la pertenencia de Francisco Pérez Carballo al Consejo Nacional de IR le iba a granjear algunas enemistades políticas, cómo no. Nos estamos refiriendo a la difícil relación que mantuvo con los máximos dirigentes de la Juventud de IR -en la que se podría discernir un importante componente personal-, a saber, el presidente de esta organización, Prudencio Sayagués, y el secretario general de la misma, Antonio García Lorencés, en especial.

Problemas que si no atañían en esencia al plano ideológico, sí tenían relación con la absorción de funciones que Pérez Carballo le reprocharía a García Lorencés, encargado desde febrero de 1935 -al principio de forma interina tras la dimisión de Ángel Izquierdo Pita- de la secretaría general de esta organización juvenil, responsabilidad que haría compatible con la derivada de su cargo al frente de la secretaría administrativa. Esta absorción de funciones denunciada por el abogado madrileño le afectaría a él de manera muy especial, pues su labor en el Consejo Nacional de IR como representante de la Juventud era interferida, o directamente suplantada en algunas ocasiones, por los responsables de la Juventud de IR, hecho que, entre otras cosas, podía perjudicar su incipiente carrera política al distorsionar, en cierto modo, su imagen justo delante de la cúpula del partido.

Pero vayamos por partes, como detonante de un problema interno -mezcla de desavenencias personales y políticas- que se estaba gestando, con toda probabilidad, desde los tiempos de la desaparecida JAR, y en la reunión mantenida por la Ejecutiva nacional de la Juventud de IR el 30 de junio de 1935,<sup>472</sup> a la que no asistieron ni Pérez Carballo ni Manuel Muñoz ni tampoco el defenestrado Ángel Izquierdo Pita, se hizo público el malestar del resto de sus componentes, y, fundamentalmente, del presidente Prudencio Sayagués y del nuevo secretario general, Antonio García Lorencés, acerca de las ausencias de los citados, por estimar que éstas “perjudican de modo indudable la unanimidad de criterio en la Ejecutiva Nacional”.<sup>473</sup>

Ausencias que, a ojos de la cúpula de JIR, llevarían aparejado tanto una falta de precisión en el debate político propuesto, como un retraso en el trámite de los informes que a los ausentes les competía entregar con urgencia para ser analizados y distribuidos inmediatamente al conjunto de los miembros de la Directiva nacional de la Juventud de IR, de cara a la inminente reunión de este órgano, prevista para el 14 de julio de ese mismo año. En realidad, Sayagués y Lorencés tenían sus razones, pues si bien es cierto que Francisco Pérez Carballo había solicitado, previendo su ausencia a la reunión, y como se reconocía en el propio acta, los informes que iba a debatir la Ejecutiva,

---

<sup>472</sup> Contrástese un acta de la Ejecutiva Nacional de la Juventud de IR. celebrada muy probablemente, como se dijo más arriba, el 30 de junio, aunque la fecha que se consignó, debido a una descoordinación interna y un posterior “arreglo”, reconocidos por los redactores de la misma, fuese la del 4 de julio (sin especificar el año), con el documento titulado “Acta de la reunión de la Ejecutiva Nacional de la Juventud de Izquierda Republicana, celebrada en Bilbao el día catorce de julio de 1935”, en Centro Documental de la Memoria Histórica. P.S. Bilbao 126/3

<sup>473</sup> Acta sin fechar de una reunión de la Ejecutiva Nacional de la Juventud de IR, (¿29 de junio de 1935?), *ibidem*.

devolviéndolos en tiempo revisados y con algunas acotaciones y correcciones de estilo al margen -que expresaban su opinión respecto de distintos puntos a tratar-, parece lógico pensar que esto no satisficiera plenamente a los dirigentes de esta organización juvenil por considerar necesaria su presencia para aclarar convenientemente sus posiciones. Malestar que se entendería mejor al constatar la falta del informe que Pérez Carballo debía haber presentado en esa reunión como representante de la Juventud de IR en el Consejo Nacional, que éste tardaría en enviar a la Ejecutiva casi dos semanas.

En esta reunión de la Ejecutiva se analizaron los informes de Secretaría (General y de Propaganda) y de Presidencia, en los que se trataron cuestiones como el funcionamiento de las organizaciones locales y provinciales (con especial atención al problema desatado en la organización murciana); la evolución del antifascismo; la convocatoria de un congreso nacional en el que la Presidencia haría efectiva su intención de dimitir -no concretada hasta el momento por falta de un sustituto reconocido de forma reglamentaria-; la posible reanudación de la revista juvenil *Creación*, desaparecida tras la aparición de *Política* -y repensada ahora, en función de una posible concentración de partidos de izquierda, como portavoz de todas sus organizaciones juveniles- y la solución de problemas disciplinarios, uno de ellos el de la falta de asistencia a las sesiones de la Ejecutiva o Directiva nacional, ya citado anteriormente, que se planeaba resolver considerando dimisionarios a quienes se ausentasen sin causa justificada a tres reuniones consecutivas.

No se pudo leer, obviamente, el informe de Pérez Carballo como representante que era de esta Juventud en el Consejo Nacional de IR -donde se debía detallar el desarrollo de la última sesión del Consejo Nacional del partido, celebrada el día anterior, sábado 29 de junio, y su actuación personal en ella-, pues el abogado madrileño no lo redactaría hasta el jueves 11 de julio, según una nota marginal añadida al final del documento. Esta tardanza, tras la que, a ojos de Sayagués y García Lorencés, se escondía la desidia de algunos directivos de la Juventud de IR, entre ellos Pérez Carballo, por los asuntos concernientes a esta organización, que en el caso del ex secretario general Izquierdo Pita se cronificaría ostensiblemente -percepción plasmada en la redacción del acta-, no hizo sino avivar el clima de tensión que ya por entonces se había escenificado en el seno de la Ejecutiva y de la Directiva nacional de la Juventud de IR. De algún modo, se había creado un conflicto entre el presidente y el secretario de esta organización juvenil, por una parte, y Francisco Pérez Carballo, a la cabeza de una pequeña facción de contestatarios, por la otra.

El hecho de que las relaciones personales y políticas entre el abogado madrileño y los dos máximos dirigentes de la Juventud de IR se hubiesen enturbiado -si es que alguna vez fueron en verdad cordiales o colaborativas-, no tardaría en traducirse en un incidente de mayor envergadura, el enfrentamiento verbal ocurrido entre García Lorencés y Pérez Carballo la mañana del 14 de julio de 1935, dos semanas después de celebrarse la sesión de la Ejecutiva nacional de la Juventud de IR, mencionado con anterioridad. Sucedió en el transcurso de una turbulenta reunión de la Directiva Nacional de esta organización juvenil celebrada en Bilbao -que se hizo coincidir con el mitin que Azaña iba a dar en esta ciudad por aquellas fechas-, y fue recogido en el acta

de la misma.<sup>474</sup> A dicha cita asistieron además de García Lorencés y Pérez Carballo, el presidente Sayagués, Apraiz, Laviada y el presidente de la Juventud bilbaína Manuel Carabias. El incidente, acontecido poco tiempo después de dar comienzo la sesión a las once y media de la mañana, se produjo, según se consignó en el acta, cuando Pérez Carballo cuestionó aspectos relacionados con el reglamento de lectura en público de las actas de la Ejecutiva y de la Directiva Nacional, llegando a calificar de ilegal la última de las actas de la Ejecutiva que se le habían remitido, precisamente la fechada el 4 de julio.

Del mismo modo, le aclaró al secretario García Lorencés que el retraso del informe sobre su actuación en el Consejo Nacional del partido se debió a que éste, incumpliendo sus funciones como secretario general, no le había remitido los informes solicitados sobre reuniones anteriores de la Ejecutiva de esta organización juvenil, documentos que Pérez Carballo consideraba absolutamente necesarios para completarlo –y que, en realidad, estaban en poder del antiguo secretario general, el también cuestionado Ángel Izquierdo Pita-, motivo, pues, de verse obligado, finalmente, a la relectura de las propias actas del Consejo Nacional de IR para contrastar algunos datos. Esta revelación invitaba, sin embargo, a dudar sobre las intenciones de Pérez Carballo al agitar este asunto, pues en teoría no debería tener excesivas dificultades para recordar y sintetizar, de forma apropiada, las gestiones y funciones desempeñadas durante los últimos meses. En cambio, sí parece lógico el que el abogado madrileño (y futuro gobernador civil de A Coruña) se retrasase un tanto en informar sobre su papel en la sesión celebrada por el Consejo Nacional de IR el 29 de junio, es decir, un día antes de la reunión de la Ejecutiva de la Juventud, a causa de la falta de tiempo sufrida por alguien que debía hacer compatibles asuntos profesionales de diversa índole y compromisos de carácter político, cultural (Ateneo) y académico. Por su parte, el secretario García Lorencés, interpelado de nuevo por Pérez Carballo en el mismo sentido, tuvo que admitir que él también se había demorado en sus funciones tiempo atrás, sin especificar ni situaciones ni motivos.

Pero lo sustancial de la oposición manifestada por Francisco Pérez Carballo a algunos puntos fundamentales de la gestión del presidente Prudencio Sayagués y del secretario general García Lorencés –esta última recibiría las críticas más ácidas por su parte-, que en realidad ayudaría a explicar la acalorada discusión mantenida en ese contexto, se concentró en las acusaciones vertidas por el abogado madrileño vertió contra la impunidad con que la Secretaría General de la JIR absorbía funciones de otras secretarías, incluidas las suyas propias, derivadas del cargo desempeñado dentro del Consejo Nacional de IR.

En realidad, en la base argumental de las invectivas esgrimidas contra los dos máximos dirigentes de JIR, Pérez Carballo señalaba directamente la decisión adoptada por el secretario Lorencés de enviar una serie de cartas al Consejo Nacional del Partido sin consultarle previamente, ni avisarle con antelación de sus razones e intenciones. En concreto, la más relevante de las mismas informaba sobre la rectificación pública que

---

<sup>474</sup> “Acta de la reunión de la Directiva Nacional de la Juventud de Izquierda Republicana celebrada en Bilbao del día 14 de julio de 1935”, en Centro Documental de la Memoria Histórica. P. S. Bilbao. 126/3.

García Lorencés hizo respecto de una información publicada por el diario vespertino madrileño *La Voz*, en la que se hablaba de un posible acuerdo entre la Juventud de IR y otras organizaciones juveniles, entre ellas la de Unión Republicana, convocante de la reunión donde se habría producido ese acercamiento de posturas. Una rectificación que negaba de forma tajante que la JIR hubiese suscrito una alianza patrocinada por las juventudes del partido de Martínez Barrio y Gordón Ordás, recordándole tanto a *La Voz* como a los otros periódicos contactados que los delegados de la Juventud del partido de Azaña se habían limitado a asistir a la reunión en calidad de observadores. Esta maniobra para “puentearle” le había contrariado tanto como la pretendida intención del Secretario nacional de la JIR, que veía reflejada en el texto del informe emitido por la propia Secretaría General, de atribuirse el éxito cosechado por esta Juventud al incrementar el número de las agrupaciones locales y provinciales constituidas, ignorando la verdadera razón con la que Pérez Carballo explicaría este crecimiento, la reacción de izquierdas que bullía en aquellos momentos en el seno de la sociedad española.<sup>475</sup>

Las diferencias que, tanto en el fondo (proyecto, gestión, desavenencias personales) como en la forma (se llegó, según Laviada, quien se manifestó al respecto, a desbordar los límites del debate político), separaban cada vez más a Pérez Carballo y Antonio Muñoz García (secretario de Propaganda al que Francisco representaría, por estar aquél ausente en la reunión de Bilbao) de la cúpula de la Juventud de IR, representada por su presidente, Prudencio Sayagués, y el secretario general, Antonio García Lorencés.

El clima de tensión creado entre ambas partes, que en esta reunión de Bilbao alcanzó un punto muy peligroso para esta organización, propició el que Pérez Carballo comunicase la dimisión de su compañero Muñoz García como secretario de Propaganda –había sido autorizado por éste para actuar en su nombre- y su intención de presentar de inmediato la renuncia a su puesto como representante de la Juventud de IR en el CN del partido, decisión probablemente bien meditada que posponía hasta el próximo “Congreso de Juventudes”. La razón aducida para no hacerla efectiva hasta entonces estribaba en que su elección como representante de la JIR en el CN de IR se había producido en el “Congreso del Partido” –aquí la transcripción de sus argumentos puede arrojar algo de confusión con respecto al mecanismo y el órgano que sancionó su nombramiento-,<sup>476</sup> un argumento técnico complejo y no demasiado convincente, pues podía albergar un cálculo político de mayor calado.

Hasta que el correspondiente congreso de IR, cuya fecha estaba entonces por concretar, aceptase su dimisión, Pérez Carballo seguiría asistiendo a las Ejecutivas de la Juventud para informar de su actividad ante el CN y, en consecuencia, no rompería totalmente sus vínculos con la Directiva Nacional de la Juventud de IR.

Ambas decisiones, ya adoptadas antes de que Pérez Carballo viajase a Bilbao y con signos de no haber sido improvisadas –en especial la de este último-, fueron anunciadas como irrevocables, a pesar de que la mayoría de los asistentes a la reunión insistieron en que tanto Muñoz García como el abogado madrileño reconsiderasen sus respectivas

<sup>475</sup> “Acta de la reunión de la Directiva Nacional de la Juventud de Izquierda Republicana celebrada en Bilbao el día catorce de julio de 1935”, Centro Documental de la Memoria Histórica. PS. Bilbao. 126/3

<sup>476</sup> Ibid.

posturas. Pero lo más importante del caso, obviamente, es la explicación de las decisiones tomadas por Muñoz García y Pérez Carballo, y ésta estaba basada, según las propias palabras de este último, en que ambos se declaraban incompatibles “para figurar en Directiva con los correligionarios Sayagués y Lorencés”.<sup>477</sup>

Incompatibilidad declarada que, en teoría, obedecería más a problemas personales, organizativos y estructurales, o discrepancias a la hora de concebir la acción política que a diferencias ideológicas sustanciales, que de existir serían matizadas por la debida obediencia a los dictados de la dirección del partido y del propio Azaña. Tanto es así que en el último informe de Antonio Muñoz García como secretario de Propaganda, presentado en Bilbao ese mismo día 14 de julio, se especificaba que el celo de la dirección de IR, es decir de su Consejo Nacional, por preservar el ideario del partido y por controlar la orientación y el comportamiento político de sus miembros, le llevaban a intentar el control de los “juicios que sobre los hechos políticos pudieran formularse”. Una tendencia centralizadora, controladora de la actividad de los distintos órganos del partido, y en especial de su Juventud, que, según esta versión, desmentía un tanto el grado de autonomía que a la organización juvenil de IR le conferían los estatutos del partido y haría posible una forma particular de censura, ejercida por una especie de “policía interna”, hecho ante el que Antonio Muñoz García no se mostraba indiferente:

Es tan acusada esta orientación en las altas esferas del Partido, que solamente bajo autorización pueden tomar parte en actos públicos los compañeros de la Juventud. Sin entrar a discutir estas medidas de policía interior, es conveniente señalarlas, para comprender bien a las claras que en estas condiciones el papel de la Juventud en cuanto a la dirección de la propaganda entre los jóvenes no puede ser muy brillante y más aun si tenemos en cuenta la escasez de medios económicos a la que antes hacía mención. No obstante, se ha intentado (con éxito la mas de las veces) expresar el criterio político de las Juventudes por todos los medios a nuestro alcance, como lo demuestran los actos públicos celebrados por varias de nuestras Juventudes, por cierto coronados por el éxito más lisonjero, y la intervención de un orador joven como mínimo en todos los actos hasta el presente celebrados por Izquierda Republicana. Lo demuestran también todas las notas de prensa que han podido librarse de la censura que venimos padeciendo, las actuaciones de los compañeros de la Juventud en periódicos que como “Política” prestan obsequiosamente una sección a nuestra expresión juvenil, etc.<sup>478</sup>

Las palabras y hechos vertidos por Antonio García Muñoz en su informe destilaban una crítica, una mirada nada complaciente hacia la tutela que la jerarquía del partido venía ejerciendo sobre su organización juvenil, que, seguramente, Francisco Pérez Carballo no compartiría en su totalidad como miembro del Consejo Nacional de IR -en el que, no se olvide, representaba además a la Juventud de este partido- y hombre muy próximo a Azaña. Pero, de cualquier manera, sus quejas, todas ellas bastante razonables y lógicas, no trascendían el plano doméstico, las dimensiones organizativa y estructural internas, y se centraban en reivindicar un mayor grado de autonomía para la acción propagandística de la JIR al servicio del partido, que en su opinión debía ser más receptivo a las iniciativas políticas provenientes de su Juventud,

No obstante, el secretario de Propaganda, Antonio Muñoz García, era también, en realidad, otro muchacho disciplinado y cumplía, de cara al exterior, el guion fijado por la cúpula directiva de la izquierda burguesa española cuando representaba a la JIR en

<sup>477</sup> Ibid.

<sup>478</sup> “Informe de la Secretaría de Propaganda”, anexo al acta de la reunión de la Directiva Nacional de la Juventud de IR celebrada en Bilbao el 14 de julio de 1935, en CDMH. 126/3.



organizaciones como el Frente Juvenil Antifascista –donde no se integró la organización juvenil del PSOE (FJS), alineada por entonces con las juventudes de los partidos comunistas disidentes, BOC y ICE- o en la Concentración Popular, surgida en julio de 1935 como uno de los intentos del líder comunista José Díaz de ensayar, a escala española, el camino frentista trazado por el VII Congreso de la Internacional Comunista, reflejado también, poco más tarde, en las conclusiones del VI Congreso de la Internacional Juvenil Comunista. Como decíamos, la actuación de Muñoz García en los comités de estas organizaciones, donde prestó una valiosa colaboración –llegando a formar parte del Comité Nacional de la Concentración Popular-, encarnó la línea más ortodoxa del pensamiento y la acción política que caracterizaba a Izquierda Republicana, opuesta a la pretensión comunista de imponer su hegemonía al resto de las fuerzas republicanas de izquierda que la integraban.<sup>479</sup>

Por su parte, García Lorencés presentó también en Bilbao su informe de Secretaría General, en el que tampoco se mostró excesivamente complaciente con la situación interna y la marcha de la organización en general –aunque sin dirigirse, al menos de forma directa, al CN del partido- y, por ende, quiso reflejar, entre otras cosas, la actitud díscola, negligente o pasiva de la mayoría de las agrupaciones locales o provinciales de JIR, cada vez más numerosas e indisciplinadas, enraizada, desde su punto de vista, en la crisis sufrida por la JIR tras la revolución de octubre y sus perniciosos efectos, que la sumergieron en una trayectoria entre sombras intensas de represión política y policial, traducidas en numerosas detenciones y requisas de documentos y archivos y en una actividad casi letárgica en práctica clandestinidad.<sup>480</sup>

En conclusión, con su virtual y un tanto efectista dimisión de su cargo en la directiva de la Juventud de IR, que nunca se haría efectiva pues el congreso del partido donde se debía verificar no llegaría a celebrarse debido al inicio de la guerra civil, Francisco Pérez Carballo asumía que su vinculación a la JIR pasaba a ser meramente testimonial. Es decir, manteniendo las formas debidas, informaría de su participación en las reuniones del CN del partido en las preceptivas ejecutivas de la JIR y participaría en algunos mítines o actos públicos de propaganda representándola como su voz en el CN del partido.<sup>481</sup> Adoptaría, pues, una postura protocolaria y, sobre todo, disciplinada, a la espera de formalizar, estatutos en mano, su desvinculación de la organización juvenil de IR y de enfocarse definitivamente hacia objetivos políticos más ambiciosos. Una

---

<sup>479</sup> Sin embargo, sería *Renovación*, órgano de la FJS, el que dirigiría los ataques más ácidos a los considerados cachorros del republicanismo burgués, el más susceptible de entre las fuerzas de izquierda de ser contaminado por el proceso de radicalización de la derecha española.

<sup>480</sup> “Informe de Secretaría General”, anexo al acta de la reunión de la Directiva Nacional de la Juventud de IR celebrada en Bilbao el 14 de julio de 1935...

<sup>481</sup> Por ejemplo, el 7 de septiembre de 1935 se leen unas cuartillas escritas por él en un acto celebrado en el domicilio social de IR en Madrid, en el que la Juventud Federal le entregó una bandera a la JIR como desagravio por la que fue destruida por la fuerza pública hacía año y medio, el 16 de abril de 1934, a la salida del teatro Pardiñas, por orden del Ministerio de Gobernación, véase *El Sol*, 8-9-1935. Meses después, el domingo 22 de diciembre de 1935, Pérez Carballo participó -esta vez sí estuvo físicamente allí-, junto a otros oradores como Victoria Kent y Augusto Barcia, en el mitin organizado por la Agrupación de IR de Chamartín de la Rosa, en el que pronunció un discurso en nombre de la Juventud de su partido, véase *Heraldo de Madrid* y *La Libertad* de 24 de diciembre de 1935.

postura, por otra parte, de conveniencia dadas las expectativas forjadas ante el resurgimiento de la izquierda republicana.

En realidad, Pérez Carballo estaba perdiendo poder en JIR para, de ese modo, jugar sus bazas en el Consejo Nacional de cara a ocupar un puesto en primera línea política en un futuro próximo, a la vuelta de unas elecciones que devolviesen el poder a la izquierda burguesa con el apoyo de partidos y sindicatos obreros. Su papel en la Juventud de IR había sido muy delicado, vulnerable por la misma función de enlace representada (y por los réditos que podía procurar), no en vano era el encargado de llevar las iniciativas de la Juventud a la mesa del CN y de transmitir los acuerdos e instrucciones de éste a los órganos directivos de aquélla. Y, como el propio secretario general de la JIR, García Lorencés reconocería de forma indirecta en su informe de Secretaría, presentado en la reunión de la Directiva Nacional de esta organización juvenil en Bilbao, al asumir que le había enviado una carta al CN para explicar el problema provocado por la información de *La Voz* –asunto que hemos desgranado anteriormente-, las funciones de Pérez Carballo habían sido puenteadas en realidad o, directamente, absorbidas casi por inercia. Este hecho, que muy probablemente se uniría a otros anteriores (Pérez Carballo los insinuaría, sin detallarlos), sugeriría que cuando la secretaría o la presidencia lo estimaban oportuno vaciaban de significado el papel del representante de esta Juventud en la cúpula del partido.

Esta afirmación no supone una defensa cerrada del comportamiento o las decisiones adoptadas por Francisco Pérez Carballo en su pugna con García Lorencés y Prudencio Sayagués, todo lo contrario, pues faltan las apoyaturas documentales suficientes para definir en profundidad la situación y el problema existente entre las facciones, grupos de poder o individuos que dirigían la JIR. No obstante lo anterior, parece razonable pensar que Francisco Pérez Carballo desempeñaba una función –la representación de JIR delante del Consejo Nacional-, que podía percibirse como un peligro para la posición política de Prudencio Sayagués y García Lorencés de cara a una hipotética vuelta de IR al poder. Peligro o amenaza latente acentuada, si cabe, por el hecho de que las tensiones en las relaciones personales o las diferencias políticas marcaban de por sí una distancia sino insalvable si claramente significativa, esto es, una declarada incompatibilidad funcional, encriptada, tal vez, en ciertos códigos manejados por redes y usos clientelares. Lo cierto es que al año siguiente, y como era previsible, Azaña y Casares Quiroga no se olvidarían de los cuadros más cualificados de la JIR a la hora de cubrir altos puestos políticos o administrativos, de acuerdo a lo afirmado por el primero de ellos a lo largo del tiempo, sin propiciar eso sí la presencia de éstos entre los candidatos de IR a integrar las listas del Frente Popular.

Sin embargo, y abundando un poco más en la hipótesis que pone el acento en las razones personales para explicar esta rivalidad, habría que tener en cuenta que la trayectoria de Prudencio Sayagués y la de Pérez Carballo, en particular, se habían cruzado tal vez en demasiadas ocasiones desde los últimos tiempos de la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Primero, como dirigentes de la FUE –Sayagués era, no en vano, uno de los “históricos” de esta organización- y, más tarde, como miembros de las Juventudes de los dos partidos liderados por Azaña, lo que podría haber generado una tensión “competitiva” creciente, un problema de personalismos y no tanto de

ideologías, criterios o métodos, que habría estallado al compartir un puesto en la Directiva Nacional de JIR. Una rivalidad, una pugna legítima pero peligrosa que se habría acentuado cara a las elecciones de febrero del 36 y que se decantaría, en principio, a favor de Sayagués, quien sí pudo participar –aunque no resultase finalmente electo– en la ante-votación para elegir a los representantes de IR en la candidatura del Frente Popular, y convertiría a su compañero Pérez Carballo en un *outsider* temporal, errado al calcular sus posibilidades reales de obtener un acta de diputado en aquella coyuntura.

De hecho, tanto Ángel Izquierdo –el ex secretario general de la JIR, reemplazado por García Lorencés y acusado desde la presidencia y la secretaría general de no devolverle a la organización parte del archivo documental que custodiaba en virtud de su cargo– como el propio Antonio Muñoz García –el dimitido secretario de Propaganda al que, en su ausencia, Francisco representó en la mencionada reunión de la directiva de la JIR en Bilbao– habían entrado junto al abogado madrileño en la última junta de AR, circunstancia que sugeriría determinadas fidelidades o lealtades personales entre todos ellos frente al nuevo y, dada la coyuntura preelectoral sobrevenida, peligroso binomio representado por Prudencio Sayagués y García Lorencés dentro de la JIR.

En cualquier caso, y de cara al convulso y apasionante periodo que, desde el punto de vista político, se abrió tras el verano de 1935, incluso la prensa más afín al partido de Azaña se hacía eco del clima “enrarecido” creado dentro de JIR, en especial en el seno de su emblemática agrupación madrileña, verdadero punto neurálgico de la organización juvenil del partido de Azaña,<sup>482</sup> situación que determinaría (y prolongaría, de paso) la línea divisoria trazada por las posturas contendientes en la tensa reunión de Bilbao y la consecuente renuncia de Pérez Carballo a continuar en la directiva de esta organización juvenil.

Una JIR que, en definitiva, si bien no representó dentro de IR el mismo papel de vanguardia que la FJS asumió en el PSOE, en sintonía con las tesis defendidas por el sector largocaballerista –como se pudo comprobar en octubre de 1934, por ejemplo, en Madrid, ciudad en la que fue el eje de la movilización socialista a través de las Milicias Socialistas–,<sup>483</sup> sí había crecido lo suficiente para que su voz se escuchase en las altas esferas del partido y pugnase por burlar el control y los límites políticos impuestos por la dirección del mismo a la participación de representantes de sus miembros en los mítines organizados por la propia IR. Si bien en un principio se había querido controlar la presencia de elementos de la JIR en los mítines o actos públicos organizados por IR, siguiendo las pautas de control que regían la proyección pública de la antigua JAR, exigiendo que se regulase bajo autorización previa y expresa del partido, ésta aumentó considerablemente a medida que la campaña movilizadora de la izquierda burguesa y obrera se intensificaba en contra de los gobiernos que representaron la agonía del bienio negro o rectificador, debido también en parte a los llamamientos que desde la dirección de JIR se le hacía a sus jóvenes militantes para que se involucrasen en labores de

<sup>482</sup> *Política*. 3 de octubre de 1935.

<sup>483</sup> S. Souto Kustrín, *Y¿ Madrid?, ¿qué hace Madrid?. Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936)*, Madrid, Siglo XXI Edit, 2004. De esta misma autora, “Políticas gubernamentales y organizaciones juveniles en la Segunda República”, en *Ayer*, nº 59/ 2005 (3), p.97-122.

propaganda.<sup>484</sup> Por otra parte, la necesidad de la directiva de JIR de estimular la participación de sus afiliados en los actos de propaganda organizados por el partido, cuestionaba, por su significado contradictorio, el papel creciente de la JIR en la estrategia movilizadora del partido y ponía en peligro su posición en el contexto de desplazamiento de la acción política del parlamento a la actuación o movilización de masas y a la calle, concebida esta última como tribuna pública.

A este respecto, el papel de Francisco Pérez Carballo no cobraría una especial significación, pues si, a los ojos un tanto velados de la prensa, intervino en varias ocasiones bajo una aparente doble condición de miembro de consejero nacional del partido y afiliado a la JIR –a esto ayudaría el que la edad máxima de pertenencia a la JIR era de 30 años, y el rondaba los veinticinco-, no lo hizo ni con la frecuencia de otros dirigentes de esta Juventud, como el mismo Prudencio Sayagués, quien se prodigó en este tipo de actos como máximo representante de JIR, ni representando en realidad a esta Juventud, pues ya estaría actuando más como miembro integrante del Consejo Nacional, es decir, como un directivo del partido con el que se podía contar para cubrir determinados puestos políticos o administrativos de responsabilidad.

Una J.I.R., en definitiva, detentadora de un mayor grado de autonomía que su predecesora en AR (JAR), pero, por momentos (y casi en paralelo), errática o demasiado sujeta a la disciplina y a la línea ideológica del partido, dependencia, en el plano ideológico, nunca impugnada seriamente por los dirigentes de esta organización juvenil –a pesar de determinados juegos de artificio verbal que llegaron hasta nosotros de forma fragmentada-, al permanecer éstos muy permeables tanto al influjo intelectual de Azaña como a la percepción del partido como medio legítimo de ocupar puestos de responsabilidad política en el caso previsible de recuperar el poder emanado de las urnas.

En el plano estrictamente electoral, se puede afirmar que en el diseño y composición de las candidaturas del Frente Popular presentadas a las elecciones de febrero de 1936, el papel de la mayoría de las organizaciones juveniles republicanas y de izquierda fue mínimo, incluido el de las que tenían más peso político y estructural que la JIR, como es el caso de la JSU, nacida en la primavera de 1936 de la fusión de la FJS y la UJC y promotora poco después del Frente de la Juventud, al que atrajo a las juventudes de los partidos republicanos y a la propia FUE.<sup>485</sup>

Aunque algunos de los responsables de las juventudes de los partidos de izquierda obrera y republicana formaron parte de las listas electorales del Frente Popular – Prudencio Sayagués, presidente de la JIR, no superaría la ante-votación organizada por IR y no ocuparía, por lo tanto, ninguna de las cuatro plazas que le corresponderían al partido de Azaña en la candidatura madrileña de esta coalición-, la mayoría de los cuadros de peso en estas juventudes fueron ignoraos en este proceso electoral a la hora del reconocimiento de su abnegado esfuerzo en las tareas de propaganda, antes y durante la campaña electoral, en algo más que palabras de agradecimiento o directrices

<sup>484</sup> Por ejemplo, el que recoge *Política*, de 20-12-1935.

<sup>485</sup> E. González Calleja y S. Souto Kustrín, “De la dictadura a la República. Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España”, en *Hispania. Revista española de Historia*. (2007), Vol LXVII, nº 225, enero-abril, p. 97.

para funciones posteriores en la “trinchera” de la política. Labores, funciones que en muchos casos, como por ejemplo en el de la JIR, aportó la energía suficiente como para contrarrestar el clima adverso de agitación y violencia callejera que habían propiciado las organizaciones juveniles de derecha y falangistas. Distinto es el caso que se le presentó a IR después de su regreso al poder cuando tuvo que completar la arquitectura política y administrativa del Estado republicano, coyuntura en que, en cierta manera, la dirección del partido se vio obligada a expurgar los cuadros del partido en busca de los candidatos más idóneos para ocupar puestos de responsabilidad, como se verá en el siguiente capítulo.

De esta manera, Francisco Pérez Carballo, ya desligado de la JIR –su desvinculación progresiva de esta organización se iniciaría en julio de 1935, limitándose desde entonces a informar, cuando se le requiriera para ello, de sus intervenciones en el CN del partido y a representar a aquélla en algunos actos públicos o de propaganda-, no se significaría en el proceso de convergencia de todas las juventudes republicanas de izquierda impulsado por la JSU. Tras la revolución de octubre, el acercamiento progresivo entre la FJS y la UJCE, favorecido por la intensidad de la represión sufrida por ambas organizaciones, cristalizó en la formación de la JSU en marzo de 1936 y, más tarde, en la constitución del Frente de la Juventud, base de la política de alianzas de esta última organización a partir de la guerra civil. Una hipotética responsabilidad, la de cooperar o intervenir de forma efectiva en el proyecto articulado por la JSU, que, de cualquier modo, no hubiera podido contraer, dado su nombramiento como gobernador civil de La Coruña en abril de 1936.

Paralelamente a sus responsabilidades académicas (como profesor ayudante de prácticas en la Cátedra de Derecho Romano que dirigía José Castillejo y, en cierto modo, como ex dirigente de la FUE), políticas (como directivo de JAR y, más tarde de la JIR) o a las responsabilidades profesionales derivadas de su recién adquirida condición de oficial letrado de las Cortes (como abogado, seguía atendiendo algunos casos en el despacho improvisado en el domicilio paterno), Francisco Pérez Carballo también figuraría en la Junta directiva del Ateneo de Madrid y en la de la Sección de Ciencias Morales y Políticas, a partir de mediados de 1933.

Como ya se ha dicho en estas páginas, Pérez Carballo había ingresado en el Ateneo de Madrid en 1926, con tan sólo dieciséis años, edad inferior a la permitida por el reglamento de esta institución entonces vigente. A nadie extrañaría el hecho de que su elección como miembro de la Junta de gobierno del Ateneo de Madrid, presidida en esos momentos por Miguel de Unamuno, en calidad de secretario tercero –junto a él se unieron a la Junta, Julio Noguera, como depositario, Manuel Pedregal y Alejandro Raimúndez, elegidos secretarios primero y segundo, respectivamente-,<sup>486</sup> se concretase justo a finales de octubre de 1933, tan sólo unas semanas después de haber leído, como representante de la FUE madrileña, su celebrado y brillante discurso de apertura del curso académico 1933-34 en la Universidad Central. Ya desde el 23 de junio de ese mismo año, y como prueba de la vinculación que el abogado madrileño mantuvo de forma constante con el Ateneo madrileño, ocupaba Francisco un puesto en la Sección de

---

<sup>486</sup> *Luz*, 28 de octubre de 1933.

Ciencias Morales y Políticas de esta institución, también en calidad de secretario tercero, al ser elegido como miembro de la candidatura encabezada por la escritora María Martínez Sierra.<sup>487</sup>

Esta sección del Ateneo estaba dominada por los republicanos de izquierda, quienes influían en su organización interna, composición de la Junta y configuración del programa de actividades y conferencias previstas. En su seno, y en el contexto general del Ateneo, pues, gozarían de una mayor autonomía en la medida en que su papel como opositores al gobierno se acrecentaba frente a la progresiva decadencia de los gobiernos radical-cedistas.

Aunque ya hemos hablado con anterioridad de la significación y el funcionamiento de esta sociedad o élite alternativa, abierta tanto al brillo de la cultura como a la oratoria desenfundada que no distorsionaba el discurso de los círculos políticos en los que se fraguaban conspiraciones o se ensayaban gobiernos o parlamentos en la sombra, no estaría de más recordar que en el momento en que Pérez Carballo se hacía con la vacante de la secretaría tercera del Ateneo de Madrid, esta institución estaba intentando recuperar su *aura* revolucionaria, debido, fundamentalmente, al regreso de Azaña a sus preocupaciones o actividades ateneístas, tras su dimisión de la jefatura del gobierno que había presidido durante casi dos años.

Bien como integrante de los órganos directivos o de alguna de las secciones del Ateneo, bien como socio involucrado en los asuntos políticos “privados” o públicos que se despachaban en los distintos salones del Ateneo, Pérez Carballo sería testigo, en la etapa que se abrió bajo la batuta de los gobiernos radicales, de la vuelta de la política al interior del edificio de la calle Prado, número 21, de Madrid, convertido de nuevo en parlamento lleno de ideas y agitados debates y conferencias. Parlamento entre el papel y la palabra que también reflejaría paulatinamente, cómo no, la escalada de tensión que, desde 1934, provocarían entre sus reactivados sectores izquierdistas las medidas políticas rectificadoras, represivas, proyectadas por los gobiernos inspirados en la deriva autoritaria impuesta por el partido de Lerroux. Atmósfera agitada que generó una reacción decidida a combatir, desde el terreno del pensamiento liberal y republicano - estimulado también por la energía iconoclasta de los jóvenes de la izquierda radical-, las concesiones gubernamentales a la derecha ansiosa de reequilibrar el marco legislativo en su favor.

Así, la Sección de Ciencias Morales y Políticas, en la que Francisco Pérez Carballo había ingresado en junio de 1933, organizaría actos y ciclos de conferencias contra el proyecto de restablecimiento de la pena de muerte alumbrado por el gobierno Lerroux (abril de 1934), para celebrar el aniversario de la constitución de 1931, en defensa de la libertad de prensa, amenazada por la legislación radical-cedista o como contribución al análisis de la situación política internacional (estos últimos a lo largo de 1935).<sup>488</sup>

Una actividad muy intensa y comprometida, secundada en general por todas las demás, que no pasó desapercibida para el Ministerio de Gobernación (en especial, durante la etapa Salazar Alonso), desde el que se aplicó una política de fuerte presión

<sup>487</sup> *La Libertad*. 24 de junio de 1933.

<sup>488</sup> Véase la recopilación de actos, conferencias y exposiciones celebrados por el Ateneo en este periodo, contenida en A. Ruiz Salvador, *Ateneo, dictadura y república*, op. cit.

sobre el Ateneo madrileño. Una estrategia oscilante entre la censura –el encarcelamiento del socio ateneísta Antonio Espina por escribir un artículo sobre Adolf Hitler en *El Liberal* de Bilbao, que el fiscal consideró injurioso, atañía también al significado del Ateneo como idea e institución- y la presión policial, destinada a limitar el indudable poder de oposición que podía encarnar este poderoso foco cultural, ni para los grupos de falangistas que atentaban en varias ocasiones contra su sede de la calle Prado, como ocurrió en agosto de 1934 teniendo como víctima la exposición organizada por la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios.

Francisco Pérez Carballo abandonó la Junta de gobierno del Ateneo como miembro de la saliente, presidida por Unamuno, reemplazada el día 30 de mayo de 1934 por la de Fernando de los Ríos, que iba a regir la vida de esta institución hasta la guerra civil, pero no hay noticia alguna de que se desligase de su puesto como secretario de la Sección de Ciencias Morales y Políticas. En todo caso, su continua vinculación desde 1926 a esta institución hace pensar que la vida ateneísta ocupaba un lugar importante en su ya apretada agenda profesional y política. Una sección que desde noviembre de 1934 volvería a presidir Azaña (nombrado, además, socio de mérito un año después), y este hecho pudo significar para Pérez Carballo una nueva oportunidad para estrechar su relación, o al menos afirmarla de una forma más directa y desprovista de la oficialidad y el protocolo de las reuniones de partido o ministeriales -teniendo en cuenta la naturaleza del Ateneo como espacio de debate de ideas, pero también de ágora para escritores, artistas, científicos, políticos y “meritorios”-, con los prohombres del partido y, en especial, con su referente político e intelectual, Manuel Azaña, al que veía algunas veces en las reuniones del Consejo Nacional de IR (cuando acudía a ellas como representante de la JIR) y había tratado durante años en Presidencia de Gobierno, como secretario particular del subsecretario Enrique Ramos.

De la actividad concreta de Francisco en el Ateneo quedan dos pruebas fontales, al margen de las crónicas de prensa relativas a su inclusión en la Junta de gobierno y en la Sección de Ciencias Morales y Políticas, citadas anteriormente, que revelaban una implicación notable en los asuntos de la institución. Una de ellas da fe de su participación como moderador o presentador, junto a Victoriano García Martí, en una conferencia organizada en la primavera de 1934 por la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo bajo el título “La nueva sociología en la enseñanza”, en la que, no faltaba más, se hacía también hincapié en problemas que afectaban a la universidad y al campo específico del conocimiento académico.<sup>489</sup> La otra remite a su involucración, como abogado y secretario tercero de la Junta de gobierno del Ateneo, en el proceso judicial abierto sobre un delito de desfalco cometido por un empleado de esta institución, asunto del que se desconoce el desenlace<sup>490</sup>

A nivel formativo, en el plano específico del desarrollo personal, es evidente la importancia que los jóvenes republicanos como Francisco, estimulados por inquietudes

<sup>489</sup> *La Libertad*. 3 de mayo de 1934.

<sup>490</sup> Agradecemos a Clara Herrera Tejada la información que nos ha facilitado sobre la actividad de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle en el Ateneo, incluida una carta suelta, sin signar, relativa al seguimiento por parte de Francisco, como letrado que representaría ocasionalmente al Ateneo, de un caso de robo cometido en esas dependencias.

propias de ciudadanos cultos y críticos frente a sociedades en proceso de modernización, conferían a la experiencia cultural que buscaban y encontraban tanto en organizaciones políticas juveniles (las secciones de Arte y Literatura o el provocativo cine-club de JIR) o estudiantiles (la FUE y sus múltiples secciones, incluidas las deportivas), por ellos creadas, como a sus horas de Ateneo, distribuidas entre sus salones o en el silencio de su atestada biblioteca.

Sin embargo, y sin menoscabo del valor de la actividad cultural de esas organizaciones juveniles, hay que repetir lo obvio, esto es, que su meritoria labor no alcanzaba el grado de excelencia que ofrecía el Ateneo de forma asidua, incluso en los tiempos más agitados, o, justamente, con más intensidad y energía en ellos.

Por ejemplo, en los meses de mayo y junio de 1936, esta institución deslumbró con las conferencias pronunciadas por los intelectuales del Frente Popular Jean Cassou, Jean Richard Bloch o el propio Andre Mairaux. Y relacionado con lo antedicho, no debemos soslayar el hecho de que Pérez Carballo también utilizaría su magnífica biblioteca para estudiar durante su ciclo formativo de estudiante y opositor, al tiempo que se sumergía a conciencia en la vida política y cultural ateneísta. Y si este dato, el del lugar elegido para el estudio, podría reducirse a la categoría de anécdota si se enunciase de forma aislada o descontextualizada, basta decir que fue, posiblemente, en el Ateneo —o gracias a ella, pues su etapa como secretario tercero de la Junta de gobierno y de la Sección de Ciencias Morales y Políticas, o su destino paralelo en la biblioteca del Congreso, en el inicio de su carrera como oficial letrado de las Cortes, encajarían bien en esta hipótesis— donde Francisco conoció a Juana Capdevielle, responsable de la biblioteca del Ateneo, desde mediados de 1933, con la que contraería matrimonio el 23 de marzo de 1936. Juana, licenciada en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad Central (1928), había obtenido una plaza por oposición en el Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos (1930), siendo destinada en primer lugar a la Biblioteca Nacional y, en 1931, a la biblioteca de la facultad de Filosofía y Letras, de la que era también directora (“Jefa”, en la jerga administrativa de la época) a la altura de 1933.

Las tareas de catalogación y el desarrollo de la clasificación decimal, el traslado de los fondos de la Facultad de Filosofía y Letras de la U. Central desde su antigua ubicación al nuevo edificio de esta facultad en la recién construida Ciudad Universitaria, o la implementación de un servicio de lectura ambulante, dirigido a los enfermos de hospitales, entre otros proyectos, tuvieron en Juana Capdevielle a una de sus principales valedores, tareas que compaginó con una incipiente vocación de articulista y ensayista. Vocación expresada también en su participación en las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas (Madrid, mayo de 1933) y, como miembro que era del Seminario de Biblioteconomía de la U. Central y de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España, en el segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, organizado por esta última entidad en varias ciudades españolas en mayo de 1935.<sup>491</sup>

---

<sup>491</sup> Véase, en general, C. Gállego Rubio, *Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad Central*, op. cit.



El testimonio de Luis. G. Cándamo (hijo de Bernardo. G. de Cándamo, bibliotecario del Ateneo durante décadas), recogido por Clara Herrera, avalaría la teoría de su encuentro en el entorno de esta institución, probablemente en el mismo espacio físico de la biblioteca. Según esta autora, Luis G. Cándamo conoció a *Juanita* y de ella recordaba el hecho de que se había casado con un chico que frecuentaba el Ateneo y preparaba oposiciones, como otros muchos, labor que –recordemos– era sólo una parte de la actividad ateneísta de Francisco. En el citado testimonio se afirmaba que:

(...) Juanita se casó con un chico que hacía oposiciones en el Ateneo, porque entonces estaba todo lleno de opositores (...) los dos eran izquierdistas, y a él le hicieron gobernador civil de La Coruña. Fue un éxito, claro, no te digo nada. ¡Juanita Capdevielle mujer de un gobernador. Se fue a La Coruña y los fusilaron. Fue al principio de la guerra, una cosa terrible...<sup>492</sup>

Así pues, dos jóvenes izquierdistas –aunque Juana en su estricta actividad profesional nunca dejó rastro de compromiso ideológico, hecho un tanto extraño si éste hubiese existido realmente, considerando además la temperatura política del momento-<sup>493</sup> que se conocieron en el Ateneo hallarán la muerte en los primeros compases de la tragedia civil iniciada en julio de 1936.

Pero antes de relatar su tragedia, nos adentraremos en el próximo capítulo en el proceso político que condujo a Francisco Pérez Carballo (y a su esposa Juanita Capdevielle) al gobierno civil de La Coruña y a tres duros meses de duro trabajo en un ciudad, una provincia y una región complejas y llenas de variables que suponían una dificultad añadida para un hombre de talante conciliador, deseoso de demostrar sus indudables capacidades en un escenario lleno de desequilibrios y turbulencias políticas, que, a priori, le acecharían en el feudo del movimiento anarquista gallego o de sectores manifiestamente reaccionarios coordinados con la cúpula de la VIII División y del VI Tercio de la Guardia Civil (o de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña). En tierra de nadie se hallaba un sustrato formado por unas fuerzas republicanas muy divididas tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Factores regionales, locales, que se harían visibles en un escenario político muy complejo a escala nacional.

---

<sup>492</sup> C. Herrera Tejada, “Juana Capdevielle, bibliotecaria del Ateneo de Madrid (1933-36)”, comunicación presentada en la *Jornada sobre Juana Capdevielle San Martín, bibliotecaria de la Universidad Central*, Universidad Complutense de Madrid. 15 de junio de 2010.

<sup>493</sup> Agradecemos a Cristina Gállego Rubio, su biógrafa, la aportación de esta reveladora información, basada en la consulta de fuentes documentales que acreditan esta afirmación.

## **V. EN EL CORAZÓN DE UNA REPÚBLICA AMENAZADA.**

### **Entre Azaña y Casares: ¿el gobernador civil frente a la lógica de un sistema?**

La intensa campaña emprendida por los republicanos de izquierda en el otoño e invierno de 1935 obligó a los dirigentes de IR a desplegar toda su energía en la consecución del objetivo de desalojar a la coalición gobernante del poder, ya en franco declive tras los escándalos de corrupción que afectaron tanto a la imagen como a las expectativas políticas de los radicales.

En un momento en el que el conjunto de las fuerzas de centro izquierda veía en la convocatoria de elecciones la única solución factible, además de inminente, para revertir la situación política del país y retomar el ambicioso programa reformista emprendido en el primer bienio, intervino Francisco Pérez Carballo en un mitin organizado por la Agrupación de IR de Chamartín de la Rosa, celebrado la mañana del domingo 22 de diciembre de 1935 en el Salón Guerrero de la calle Bravo Murillo, junto a Victoria Kent y el entonces jefe de la minoría parlamentaria del partido, Augusto Barcia Trelles. Fue precisamente el abogado madrileño el encargado de abrir el acto con una apelación al deber de los verdaderos republicanos de involucrarse en la defensa de la República, acompañada de duras críticas a la política seguida por los últimos gobiernos radical-cedistas, a los que culpabilizó de la difícil situación del país. No pasó por alto, por cierto, el hecho de que se le hubiesen entregado 200 millones de pesetas a las compañías ferroviarias, mientras al obrero del sector se le dejaba morir de hambre, asunto para él bien conocido, al ser hijo de un trabajador ferroviario. Concretamente, las palabras más ácidas que Pérez Carballo pronunció esa mañana tuvieron como destinataria a la CEDA, a quien acusó de haber entrado en la República “por el procedimiento del clavito del jesuita, primero contemporizando con Lerroux, después asociándose con Lerroux y luego eliminando a Lerroux; pero le faltó el último escalón y se ha quedado sin el poder”.<sup>494</sup> Después de calificar como funesta la actuación política global de la CEDA durante ese periodo, se reiteró en varias de las reivindicaciones que habían hecho suyas las JIR desde el principio, como eran la formación de un ejército nacional y la definitiva consecución de un sistema educativo laico y de una Justicia verdaderamente republicana.<sup>495</sup> Hay que resaltar el hecho de que en su intervención se declarasen principios y objetivos defendidos por la JIR, con reconocimiento expreso de su actuación en calidad de portavoz de la misma –y en ningún caso de su vínculo, ya roto, con la directiva de esta Juventud-, sin que esto significase un cambio en su propósito de desvincularse totalmente de la organización juvenil del partido de Azaña, aplazada hasta la celebración del siguiente congreso de juventudes del partido, decisión que había tomado hacía ya meses.

Por su parte, su compañera Victoria Kent se centró en el problema del rol político de la mujer, caracterizado en sus palabras como falta de la suficiente autonomía como para afianzar una conciencia liberada del yugo religioso, después de cargar si cabe con más virulencia contra la obra de los gobiernos que se sucedieron durante el bienio radical-

---

<sup>494</sup> *La Libertad*. 24 de diciembre de 1935.

<sup>495</sup> *Ibid.*

cedista, en medio de un proceso de continuo recorte de libertades. Para filanizar, Augusto Barcia lamentó la desunión que llevó a las izquierdas a la derrota en las elecciones de noviembre de 1933 y apeló a los valores de referencia para la República y los republicanos, que empezaban en la honestidad y se prolongaban hacia la conquista de una verdadera justicia social.

Tan sólo dos semanas más tarde, Pérez Carballo viajaba a Medina de Rioseco para participar, en el teatro principal de esta localidad vallisoletana, en un mitin de su partido junto a Fermín Solozabal, Ernesto Benítez o el ateneísta Isidoro Vergara. Los temas tratados en este acto fueron eminentemente económicos, pues se examinaron cuestiones como la reforma agraria, la ley de arrendamientos o el cronificado problema del trigo, según reflejaba la prensa del día siguiente.<sup>496</sup> Más difícil de entender y, sobre todo, de contextualizar parece el incidente que tuvo como protagonistas tanto al abogado madrileño como a su compañero Rubio Coloma, quienes se ausentarían, sin dar ninguna explicación, de un acto electoral celebrado en el teatro Calderón de Valladolid en febrero de 1936, a tan sólo unos días del día fijado para las elecciones que ganaría el Frente Popular, para el que habían sido designados como oradores. Ovidio Salcedo, encargado de abrir el acto, comenzó su intervención advirtiéndolo, en un tono airado, al auditorio del incumplimiento del compromiso adquirido con el partido en que Pérez Carballo y Rubio Coloma habían incurrido al no presentarse en Valladolid y, fundamentalmente, al no haber justificado su ausencia, falta considerada como muy grave y ante la que, en palabras de Salcedo, se les exigirían las “debidas responsabilidades”.<sup>497</sup>

En todo caso, la presumible espantada del abogado madrileño, justificada o no, podría guardar una cierta coherencia con su progresivo alejamiento de la cúpula directiva de la organización juvenil del partido, pero no existen elementos suficientes para avanzar más en esta dirección, al margen del hecho de que su “adversario” (Sayagués) si participase –sin éxito, eso sí– en la ante-votación organizada por IR para elegir a sus representantes en la candidatura del Frente Popular.

Y, para emborronar un poco más las cosas, si tenemos en cuenta que, en ese momento, Pérez Carballo formaba parte del CN de IR representando a la JIR, aunque sólo fuese de forma transitoria, ante cuya directiva se limitaría a informar de su actuación en el seno del Consejo Nacional del partido y de los acuerdos adoptados por este órgano, podríamos interpretar su decisión en sentido contrario, esto es, como un acto de indisciplina o un gesto de rebeldía frente a la propia dirección de IR y no sólo como una manifestación de desacuerdo con la forma en que Prudencio Sayagués, y sus colaboradores más cercanos, dirigían la JIR. En este sentido, la actitud de Pérez Carballo podría obedecer también a la frustración que le habría ocasionado el no figurar entre los candidatos presentados por IR para ser incluidos en la candidatura del Frente Popular, que fueron elegidos en la ante-votación citada con anterioridad, publicitada a conciencia en la prensa afín a finales de enero de 1936 y resuelta en los primeros días de febrero del mismo año.

---

<sup>496</sup> *Heraldo de Madrid*. 7 de enero de 1936.

<sup>497</sup> *El Sol*. 11 de febrero de 1936.

Juan Pérez Carballo-Veiga y Carmen Veiga de Bernardo, familiares directos de Francisco, como es sabido, han sugerido la tesis, basada en la complejidad de la memoria familiar, de que la dirección de IR había pensado en Francisco Pérez Carballo como en uno de los candidatos del partido a figurar en las listas del Frente Popular por Madrid -denominada nuevamente, en el lenguaje republicano-burgués, coalición republicano-socialista-, idea que finalmente no cristalizó a posteriori por haberse producido un cambio de última de hora en el diseño de esta candidatura, del que se desconocen más detalles.<sup>498</sup> Tesis sustentada en recuerdos un tanto difusos que se enfrentaría a una dificultad mayúscula para su verificación, pues quien pretendiese figurar entre los candidatos elegibles en la ante-votación a celebrar por IR el domingo 2 de febrero de 1936, en el Círculo de Izquierda Republicana, para decidir los nombres de los miembros de este partido que lo representarían en la candidatura del Frente Popular por Madrid, debía haber presentado 25 firmas de afiliados setenta y dos horas antes de la fecha indicada.<sup>499</sup> Hecho que, en este caso, cuestionaría una posible intervención directa de la cúpula de IR en contra de los intereses políticos de Pérez Carballo o cualquier otro factor que coadyuvase a una modificación previa o postrera de una lista preelectoral o provisional, decidida desde arriba en un sentido u otro, pues en teoría el proceso de elección era democrático, lo que en puridad tampoco excluiría del todo la toma de decisiones entre bambalinas.

Y esto es así porque, el abogado madrileño, profesor universitario, oficial letrado en Cortes y muy pronto gobernador civil de A Coruña no presentó las 25 firmas preceptivas -tal vez ni lo intentó, aunque su ambición política sería razón suficiente para pensar lo contrario, a no ser que intuyera o viera pocas posibilidades de conseguir su objetivo- para optar, en la ante-votación del domingo 2 de febrero, a una de las cuatro plazas previstas para representantes de IR en la candidatura definitiva del Frente Popular por Madrid a las elecciones de febrero.<sup>500</sup>

En conclusión, su nombre no se encontraba entre los candidatos de IR a ocupar un puesto en la candidatura del Frente Popular, que debían ser elegidos por los afiliados a este partido en la ante-votación del domingo, encabezados por Azaña, Domingo, Casares Quiroga (que luego se retiraría de la candidatura de Madrid para aceptar un puesto en la de A Coruña), Salmerón, Francisco Barnés, Barcia, Carreño, Régulo Martínez, Castrovido, José Escudero, Ruiz Funes, Antonio de Lezama, Enrique Ramos Ramos, Pérez Urría, Agustín Viñuales, Antonio Velao, Adolfo Vázquez Humasqué y Prudencio Sayagués.<sup>501</sup> El resultado final fue la elección de Azaña (2580 votos), Leandro Pérez Urría (1313), Enrique Ramos Ramos (1068) y Antonio Velao (1056) como los miembros de IR que se integrarían en la candidatura del Frente Popular de Madrid, junto a representantes del PSOE, UR y PCE.<sup>502</sup> Esto no quiere decir que la

---

<sup>498</sup> Entrevista a Juan Pérez Carballo-Veiga y Carmen Veiga de Bernardo. Madrid. 5 de febrero de 2008.

<sup>499</sup> *Política*. 30 de enero de 1936.

<sup>500</sup> En la primera vuelta, I obtuvo 79 diputados, situándose como la tercera fuerza parlamentaria y la primera en crecimiento relativo, véase J.Tusell, *Las elecciones del Frente Popular en España*, Madrid, Edicusa, 1971, p.83-84.

<sup>501</sup> *Política*. 1 de febrero de 1936.

<sup>502</sup> *Política*. 4 de febrero de 1936.

decisión de Pérez Carballo, y de su colega Rubio Coloma, de no asistir al acto de Valladolid, y de no presentar justificación alguna por ello –que es el elemento más sugestivo de esta noticia- respondiese, o estuviera relacionada necesariamente, con una muestra de abierta disconformidad con respecto a su posible marginación de la carrera hacia el Parlamento, pues sólo en el caso de que los testimonios de familiares del abogado madrileño fuesen certeros en este punto –recordemos la insinuación de la anulación a última hora de una posible designación como candidato al Congreso de Diputados- cabría formular una hipótesis en este sentido. En su lugar, podría pensarse en una explicación circunstancial, aunque, como venimos diciendo, el silencio de Pérez Carballo, por respuesta o justificación ante una falta grave contra la imagen del partido, no encajaría bien en el carácter del laborioso y cumplidor joven e iría también en menoscabo del propio compromiso político personal, en un momento de efervescencia electoral como es el umbral de unas elecciones. Más enigmático resultaría el papel de su compañero Rubio Coloma en este acto de rebeldía o indisciplina, que, por otra parte, hace más difícil buscarle a este episodio una causa azarosa.

Al margen de su compleja situación dentro del partido, un análisis rápido de los nombres de los candidatos de IR que iban en las listas del FP, o de los que finalmente obtendrían un acta de diputado, nos permite concluir, a modo siempre provisional, que la mayoría de ellos podría exhibir, tanto en la edad como en la experiencia política y profesional demostrada hasta ese momento, un peso político superior al que podrían poseer entonces jóvenes como Pérez Carballo o el mismo Prudencio Sayagués, presidente de la JIR. Este último si pudo entrar –recordemos- en la ante-votación organizada por el partido, pero salió de la misma, sin embargo, con la certeza de que los miembros de las juventudes de la izquierda burguesa –al igual que los de la izquierda obrera en general- no entraban en los cálculos inmediatos de la dirección de IR a la hora de componer un primer escenario de poder en el gobierno y el Parlamento.

Pero la oportunidad para Francisco Pérez Carballo llegaría pronto, casi dos meses después de que Azaña formase el primer gobierno del Frente Popular, aunque fuese en la segunda línea de la política y la primera de la administración del Estado –se podría decir así-, con su nombramiento como gobernador civil de A Coruña.

Mientras tanto, y durante ese periodo comprendido entre las elecciones de febrero de 1936 y su marcha a la ciudad gallega, Pérez Carballo seguiría trabajando en la biblioteca del Congreso de Diputados, destino provisional en la carrera ascendente de un oficial letrado de las Cortes, a la vez que el lugar justo para simultanear su actividad laboral con sus inquietudes políticas y sindicales. Inquietudes, objetivos derivados de su visión legalista de la sociedad política (estructurada en términos jurídicos), ahora latente en una forma evolucionada, adaptada a un ámbito reformista global, y de la idea de *profesionalismo* universitario, que tanto contribuyó a difundir. Y, por otra parte, estaba su tarea de profesor ayudante de prácticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, punto inicial de una carrera prometedora, que ahora se había ampliado al encargársele la sustitución, de forma regular, de José Castillejo, enfermo desde noviembre del año anterior, en la impartición de clases teóricas de Derecho Romano en

dicho centro universitario.<sup>503</sup> Del mismo modo, también tendría fuerzas para atender como abogado algún caso en el improvisado despacho jurídico instalado en el domicilio familiar, situado en la Plaza de Dos de Mayo nº 5, donde residiría hasta contraer matrimonio civil con Juana Capdevielle el 23 de marzo de 1936.<sup>504</sup> Mucho trabajo pero también mucha energía para afrontarlo. La República podía ser un proyecto colectivo hecho a medida para un joven como él, de origen muy modesto, que habiéndose formado académicamente durante la dictadura de Primo de Rivera, gracias tanto a un sólido talento intelectual como a una inagotable capacidad de trabajo, luchaba ahora por un ideal de igualdad de oportunidades, de cariz socialdemócrata, que le había inspirado desde el comienzo del periodo republicano y ahora lo proyectaba hacia la primera línea de la política nacional. Idealismo innegable que no excluía, por otra parte, la proyección de una ambición personal y profesional por integrar, entre otros objetivos, esa vanguardia social destinada a protagonizar una revolución democrática urgente – recordemos las palabras de Francisco Ayala en este sentido-,<sup>505</sup> satisfecha ahora con su designación como gobernador civil de A Coruña.

Si los tiempos electorales, y con ellas unas frustradas expectativas inmediatas de acceso al Congreso como diputado -espacio para él muy familiar, por ser su lugar de trabajo como oficial letrado destinado a su vetusta biblioteca-, habían dejado una huella un tanto contradictoria, si esa sanción por indisciplina se aplicó finalmente o bien quedó en una anécdota sin demasiada relevancia, ahora ya no importaba en realidad. Casi dos meses después de la victoria del Frente Popular se le abría la puerta de las oportunidades que brindaba un servicio importante dentro de la estructura del estado, una cuota de representatividad y poder para Francisco Pérez Carballo, con su designación como gobernador civil de A Coruña. El Consejo de Ministros del día 9 de abril adoptó la decisión de su nombramiento, hecha oficial al día siguiente, junto a la aceptación de la dimisión del predecesor de Francisco en su cargo, José Sánchez Gacio.<sup>506</sup> La llegada de Francisco Pérez Carballo a A Coruña se retrasó un día, por tener el abogado madrileño que resolver varios asuntos personales antes de viajar a Galicia, y se concretó el domingo 12 de abril de 1936.

En la estación de ferrocarril, un comité de bienvenida, formado por el alcalde de la ciudad, Alfredo Suárez Ferrín, varios diputados provinciales a Cortes y una nutrida representación de Izquierda Republicana, esperaban para recibirle a él, a su esposa, Juana Capdevielle, y a su hermano José Andrés, estudiante de derecho también en la Universidad Central, llegados a A Coruña en un tren expreso procedente de Madrid. Conducidos a continuación al edificio del Gobierno Civil, donde Pérez Carballo tomaría posesión acto seguido, el nuevo gobernador civil pronunció, con este motivo, unas breves

---

<sup>503</sup> JAE. Exp. Pérez Carballo.

<sup>504</sup> En el padrón de 1935 aparece una anotación relativa a la actividad de un bufete de abogado en el piso donde residía la familia, el primero derecha del número cinco de la Plaza del Dos de Mayo (Archivo de la Villa de Madrid. Empadronamiento de 1935. Tomo 65. Distrito Chamberí/Barrio Dos de Mayo), cuya actividad comenzaría al menos dos años antes, como prueba el hecho de que a comienzos de noviembre de 1933 Francisco Pérez Carballo presentase una declaración de alta en el impuesto de la Contribución Industrial (copia del documento acreditativo de la misma, en Archivo de la familia Pérez Carballo)..

<sup>505</sup> R. Iriart, *Conversaciones con Francisco Ayala*, op. cit., p. 60-61.

<sup>506</sup> *Gaceta de Madrid*, nº 101, 10 de abril de 1936.

palabras ante la comitiva de recepción que le había acompañado hasta su residencia oficial, en las que hizo votos para que su gestión al frente de la máxima magistratura provincial respondiese a lo esperado de un servidor gubernamental comprometido con su misión política y social, Vitorino Veiga, diputado de IR, le ofrecería en su respuesta toda la colaboración del partido en la nueva responsabilidad afrontada. Al día siguiente, lunes 13 de abril, el nuevo gobernador civil recibiría en su despacho al teniente general Salcedo Molinuevo, responsable de la VIII Región Militar, a los presidentes de la Diputación (López Bouza) y de la Audiencia Provincial, a los mandos de los cuerpos policiales y de la Guardia Civil destinados en la provincia, a los diputados de IR Somoza, Guzmán y E. González López y a una representación de *Exploradores de España*.<sup>507</sup> Una actividad intensa desde el inicio, lógico preámbulo del reto asumido en una ciudad compleja, pero también una buena oportunidad para que un “amigo político” de Azaña demostrase las cualidades ya apuntadas en su prometedora carrera política.

Una etiqueta, cuando no una categoría, la de “amigo político del jefe del gobierno”- como así le calificaba un diario conservador local-, que le granjeaba, desde esa perspectiva (la conservadora o antirrepublicana) un matiz extra de subordinación al gran líder: por ser éste Azaña, por ser él un gobernador civil, pieza fácil de desechar o reemplazar, según los usos políticos de la administración española heredados de la Restauración.<sup>508</sup>

Y esa etiqueta o bien no significaría nada (un bulo, obsequio de la prensa adversaria) o, tal vez, podría hablarnos muy probablemente de la decisión sobre su nombramiento, inscrita, a priori, en los usuales procesos de elección de cargos políticos o de la alta administración del Estado desarrollados por los partidos políticos de la época. Procesos o, más bien, estigmas de la vieja política de la Restauración, que los republicanos de izquierda no pudieron revertir por falta de tiempo, cuadros preparados y voluntad de erradicar personalismos, en los que tampoco era infrecuente el nombramiento de los literalmente disponibles, al faltar o no ser detectados los más idóneos. En esta búsqueda, las conexiones personales de cada cual, traducidas también en el grado de conocimiento real que la dirección del partido tuviera de las capacidades del candidato -no lo olvidemos-, pesarían aquí tanto como el propio talento. Por todo ello, no parece descabellado afirmar que su relación con Azaña, al que Francisco conoció en el Ateneo cuando contaba dieciséis años de edad, y al que siempre idolatró, no sería precisamente un obstáculo para obtener finalmente un destino político de importancia como el de gobernador civil de A Coruña. Aunque de ahí a suponer que esa u otra influencia fuese el único factor a tener en cuenta para determinar su ascenso al considerado tercer nivel de la política, por encima del prestigio o la capacidad personal, había una cierta distancia.

Por tanto, con independencia del peso político y el carisma personal que pudiera tener la figura de Casares Quiroga (su significado para la ciudad de A Coruña), como argumento a favor de la influencia del político coruñés en el nombramiento del gobernador de “su provincia” o, en paralelo, de la relación personal que mantuviera con

<sup>507</sup> *La Voz de Galicia*. 14 de abril de 1936.

<sup>508</sup> *El Ideal Gallego*. 9 de abril de 1936.

Francisco Pérez Carballo -Emilio González López, predecesor del abogado madrileño en la APED de Madrid, podría haberla propiciado-,<sup>509</sup> no parece adecuado desdeñar el vínculo entre Azaña y Pérez Carballo como un elemento a favor del despegue de la carrera política de este último. Y tampoco podríamos soslayar la responsabilidad asumida por Azaña en el nombramiento de altos cargos en la estructura política y administrativa del Estado republicano, reconocida por él mismo, bajo la legitimidad derivada de una función política ejecutiva (y casi simbólica), en la escritura de sus diarios, por poner un ejemplo clarificador.

Pérez Carballo proyectó en actos e ideas, o hizo transparente a menudo, su vinculación intelectual al pensamiento y la obra de Azaña -reconocida por su hermano Ángel en términos de idolatría por el político alcalaíno-,<sup>510</sup> al que por demás admiraba profundamente, en coherencia con una cercanía espacial, física y política mantenida y renovada en el tiempo.<sup>511</sup> Así, Pérez Carballo había sido secretario particular del subsecretario de la Presidencia de los primeros gobiernos de Azaña, el profesor auxiliar de Derecho Romano, Enrique Ramos Ramos, hombre muy próximo a Azaña<sup>512</sup>—compañero de Francisco, asimismo, en el departamento romanista de la facultad de Derecho de la Universidad Central- y, como sabemos, coincidía con Azaña en el Ateneo y en el Consejo Nacional de IR desde hacía algunos años.

Por su parte, en términos estratégicos, a Casares Quiroga, quien también, como Francisco Pérez Carballo, había conocido a Azaña en el Ateneo, le convenía contar con un hombre de su entera confianza en un gobierno civil tan importante como el de A Coruña. Sobre todo en un momento en que su partido, IR, estaba buscando, a la altura de abril de 1936, un equilibrio de fuerzas más favorable a sus intereses dentro de la coalición de partidos y organizaciones aglutinadas en el Frente Popular.

Casares Quiroga era el líder de la ORGA desde su fundación (1929) como voz del anhelo colectivo de la verificación de un proyecto republicano federal, en el que se viera reconocida la personalidad política de Galicia.<sup>513</sup> Dirigente del Frente Republicano

<sup>509</sup> De hecho, en octubre de 1934, con motivo de los sucesos revolucionarios que agitaron la vida nacional, y para evitar la presión de la policía madrileña, Casares Quiroga estuvo escondido durante unas horas, según recordaba Cipriano de Rivas Cherif, en una de las casas de la Plaza de Dos de Mayo, que bien pudiera ser la de Francisco Pérez Carballo. Tesis por la que se inclinaría, por ejemplo, Isabelo Herreros –periodista, escritor y ex presidente de la refundada IR- para evidenciar la estrecha relación –al menos, la oportunidad surgida para cimentarla, si esta fuera meramente superficial- que existiría entre Pérez Carballo y el político coruñés. Véase C. de Rivas Cherif, *Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña.*, Madrid, Grijalbo, 1981, p. 295.

<sup>510</sup> Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, Gobernador Civil de La Coruña fusilado el 24-7-1936”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, op. Cit, p.686.

<sup>511</sup> Un político, un símbolo retratado en su inequívoca ambición intelectual, en J. P. Fusi, “La trágica grandeza de Azaña”, en *Claves de razón práctica*, nº 186 (2008)

<sup>512</sup> Sería nombrado ministro de Trabajo con Azaña en febrero de 1936 y de Hacienda en el posterior gobierno de Casares Quiroga, aunque la decisión habría partido del ya presidente de la República, véase E. González López, *Memorias de un diputado de las Cortes de la República*, Sada (ACoruña), Ed. Do Castro, 1988, p. 35.

<sup>513</sup> Aunque sus inquietudes galleguistas, siempre alejadas de la reivindicación identitaria y la formulación explícita propias del nacionalismo como ideología o sensibilidad, no fueron nunca una prioridad y siempre se subordinaron a la idea de consolidar la República como forma de estado, parece un tanto exagerado afirmar que careciera de “auténtica conciencia política gallega”, no sintiera “la responsabilidad de ser el jefe de un partido político, la ORGA, que aspiraba a ser el partido republicano por excelencia de



Gallego (ratificado en Lestrove, mayo de 1930) y, desde el pacto de San Sebastián (agosto de 1930), verdadero “cordón umbilical de la República ente Galicia y Madrid”,<sup>514</sup> se había convertido en el intermediario de los intereses de los republicanos de izquierda gallegos en el exterior. Al principio, por sus conexiones con los dirigentes de la oposición a la monarquía en el conjunto del Estado, después merced a sus distintas responsabilidades gubernamentales.

En sentido opuesto, desde fuera de Galicia también se le contemplaba como el encargado de los asuntos gallegos ante el poder central y las élites del republicanismo español, garante en cierta forma del control político de un territorio especialmente complejo. Casares Quiroga actuaba, pues, como un verdadero factótum, cuyo indiscutible carisma personal y social –la tradición familiar librepensadora, encarnada por su padre, Santiago Casares Paz y su hermano Arturo, no era incompatible con ese halo de señoritismo burgués tan propio de la alta burguesía coruñesa-, dominio de *tempos* y capacidad como estrategia político, muy superior a su bagaje intelectual, le permitieron emerger de la vida política local a la nacional. Ascenso emprendido desde sus inicios como concejal en el ayuntamiento coruñés, socio del Casino Republicano o militante de *Solidaridad Gallega* y el PRA, espacio político el de partida en el que empezó a extender una densa y productiva red clientelar y a comprender los beneficios de una posible interacción entre culturas y proyectos políticos republicanos y obreros, después de haber dado pasos importantes en la vía del puro pragmatismo político a través de su acercamiento al galleguismo. Su temprano encuentro con Azaña en el Ateneo debió reafirmarlo en esta idea (la de una alianza estratégica con la clase obrera, con los socialistas en particular), aunque ninguno de ellos discutiese la primacía de la perspectiva burguesa en esta peligrosa simbiosis.

En este punto, no hay que olvidar la prevalencia histórica de las culturas políticas republicana y anarcosindicalista en la ciudad de A Coruña desde finales del siglo XIX, y la cercanía ideológica entre ambas en función de reflejos federalistas y anticlericales.<sup>515</sup> En otras palabras, la formación del mito y la figura política de Casares Quiroga estaba vinculado a la fundación de una fuerza política, la ORGA (pronto integrada en la FRG (Lestrove) y, más tarde, denominada PRG), caracterizada más por estructurarse en torno

---

Galicia”, y desconociera “tanto la Geografía como la Historia de Galicia “, juicios de valor vertidos sobre su figura por el abogado, historiador y profesor universitario Emilio González López, un autentica daga en el corazón de Casares Quiroga desde las páginas meditadas en su exilio neoyorquino. A tal punto llegaría su particular “ajuste de cuentas” con la figura del socio político de Azaña –una nota reiteradamente discordante en su siempre fluida y aguda narrativa-, que no dudaría en escribir lo siguiente: “Nunca le escuché a Casares, en su conversación, en los años que estuve con él en el Ministerio de la Gobernación, referencia alguna a los problemas de Galicia históricos o actuales”, véase a este respecto E. González López, *Memorias de un diputado de las Cortes de la República (1931-1936)*, op. cit, p. 30-38. Algo más matizado parece, como suele suceder, el análisis de Carlos Fernández Santander, para quien Casares “concebía un republicanismo más unitario que no se perdiese en reivindicaciones regionales y, sobre todo, en el cultivo de un idioma y una cultura que a él le era indiferente o, cuando menos, accesorio. A Casares nunca se le oyó, por ejemplo, hablar en lengua gallega, aunque bien es cierto que tampoco se hablaba mucho en la capital coruñesa”, en C. Fernández Santander, *Casares Quiroga, una pasión republicana*, Sada (A Coruña), Ed. Do Castro, 2000, p.30.

<sup>514</sup> Emilio Grandío Seoane, “El casarismo: de la ORGA a Izquierda Republicana”, en E. Grandío Seoane y Joaquín Rodero (eds), *Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder*, Madrid, Eneida, 2011, p. 73.

<sup>515</sup> E. Fernández Fernández, “Casares Quiroga, el movimiento obrero y la cuestión del orden público”, en E. Grandío y J. Rodero (eds), *Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder*, op. cit, p.88.

a un contundente plan de liderazgo personal que por sus logros en el plano de la institucionalización, lo que en breve le ocasionaría serios problemas en el seno de esta organización.

Problemas inherentes a un tipo de fuerza o partido de comités que reflejaban la idiosincrasia de cada feudo de poder local gallego heredado de la Restauración por los *casaristas* (concebido ahora bajo la forma de un proyecto modernizador), que se estaban produciendo desde 1932 a través de un progresivo debilitamiento de lo que podríamos denominar las conexiones neuronales de la organización, traducidos en una mayor demanda de autonomía desde los órganos locales. Por todo ello, Casares, una vez producido en triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero ya no podía intentar recomponer la situación aplicando su fórmula magistral, la utilización de la minoría parlamentaria (segundo nivel de influencia del partido), pues el PRG se había integrado en IR y ya no controlaba a sus diputados como antes. Entre otras cosas, ahora había otro patrón a considerar, Azaña, aunque menos interesado que él en el funcionamiento de la maquinaria interna del partido. Pero sí podía recurrir, según esta hipótesis, al nombramiento de gobernadores civiles de su entera confianza para controlar el espacio político provincial gallego, pues éstos disponían a nivel provincial, entre otras, de importantes atribuciones, concedidas por la desastrosa normativa de administración local, y veían reforzado su papel al alumbrar la nueva ley electoral republicana el marco de la circunscripción provincial, cuestiones importantes a considerar.

Estrategia que el líder coruñés debía ahora desplegar con cautela si quería recuperar, ahora de nuevo en el gobierno y liderando al tiempo la sección gallega de IR –cuya base era el PRG–, el crédito perdido ante la clase obrera, movilizada contra él desde su controvertida etapa en el ministerio de Gobernación durante el primer bienio republicano, periodo en el que se apoyó en los célebres *gobernadores gallegos de Casares* –una especie de élite urbana, de absoluta confianza del ministro, que iniciaba el *cursus honorum* de la política desde el rango proporcionado por los gobiernos civiles– y ganársela como pieza sobre un tablero de ajedrez.<sup>516</sup>

Y en este punto, si Casares realmente apostó fuerte por Francisco Pérez Carballo, hipótesis que podría encajar perfectamente en una coyuntura y en un estilo de hacer política muy determinados, lo pudo hacer para intentar, desde esta perspectiva, reforzar el papel de IR dentro del difícil equilibrio de fuerzas que el Frente Popular coruñés mantuvo desde las elecciones de febrero. Esta tesis es defendida por Emilio Grandío, que la basaría, entre otros factores, en las difíciles relaciones mantenidas por Pérez Carballo con el alcalde de A Coruña, Suárez Ferrín, y el de Santiago Anxo Casal, forzado a la dimisión días antes del golpe de estado.<sup>517</sup> Pero también cabe pensar que

<sup>516</sup> Refiere E. Grandío el dato de que a la asamblea fundacional del PRG, celebrada en octubre de 1932, asistieron los gobernadores civiles de Alicante, Granada, Cáceres, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Murcia y Sevilla, todos ellos miembros de la organización e, incluso, de su Comité Ejecutivo. Así, cruzando el primer puente entre los gobiernos civiles y los cargos políticos de la administración del Estado, o alternando en las dos orillas, nos encontramos al citado Emilio González López (Director general de Administración local con Casares en Gobernación), Bibiano Fernández Osorio-Tafall, José Calviño, Varela Radío, López Bouza, José Antonio Fernández Vega, etc. Véase, E. Grandío (Ed), *Casares Quiroga Discursos parlamentarios (1931-1936)*, Sada (A Coruña) Ed. do Castro, 2006, p.36-40.

<sup>517</sup> E. Grandío, *Anos de odio. Golpe, represión e guerra civil na provincia da Coruña (1936-1939)*, op. cit, p.22.

esta maniobra se pergeñó desde otras instancias de IR para darle en rigor una oportunidad al abogado madrileño, profesor universitario y oficial letrado de las Cortes. Precario o costoso equilibrio de fuerzas, o mejor dicho, situación inestable en el seno de las fuerzas políticas que habían concurrido juntas a las elecciones de febrero en la provincia, aglutinadas todavía bajo una estructura unitaria bastante consolidada –que, en el marco del problemático régimen local republicano, controlaba si se nombraban o no nuevas gestoras municipales a instancias de los respectivos comités locales del FP-,<sup>518</sup> reflejada, con notable animosidad, por la prensa conservadora coruñesa, en especial por *El ideal gallego*. Este diario publicaba en portada a principios de abril, escasas horas antes del anuncio de la suspensión de las elecciones municipales previstas para el 12 de abril de 1936, una noticia sobre la *ruptura del Frente Popular*, titular avalado, según se decía, por la posible exclusión del alcalde Suárez Ferrín de la lista de UR –proyectada por sus propios correligionarios- y por la nota difundida por el Partido Sindicalista coruñés para justificar su abandono de la coalición de izquierda.

Los responsables del PS alegaban no estar de acuerdo con la escasa representación obtenida ni con los criterios de proporcionalidad aplicados: de los veintidós candidatos a concejales acordados –de manera que se fortalecía la tendencia oligárquica de “grupos y partidos”-, ocho pertenecerían a IR, seis a UR, tres al PSOE, dos al PCE y otros tantos a la citada formación, que así rompería un pacto que en principio había suscrito.<sup>519</sup>

Y este síntoma del debate entre bastidores que podría estar afectando al futuro de la coalición del Frente Popular coruñés –subrayado por la prensa conservadora, sin embargo, delataría algo más que una intencionalidad política tendenciosa-, nos pondría en la pista de la necesidad que tendría tanto la dirección nacional de IR (Azaña), como la facción *casarista*, de designar para el gobierno civil de A Coruña a un hombre capaz de pisar un terreno político inestable. Por otra parte, costaría pensar en un puesto político cuyo desempeño, en la primavera de 1936, no revistiera de una especial dificultad, y no nos estamos refiriendo solamente a la tan debatida cuestión del orden público.

Y para darle una vuelta de tuerca más a este asunto, la hipotética influencia del factor *Azaña* en la elección del gobernador civil de A Coruña, que implicaría un papel importante para el núcleo *madrileño* del partido en el nombramiento de Pérez Carballo, no podría sortear, en cualquier caso, una posible influencia del entonces ministro de Obras Públicas, que se movería por razones distintas, más de interés prioritario del partido y dependientes no sólo de una estrategia personalista. Como es sabido, la imagen de Casares entre los republicanos de izquierda gallegos era equivalente a la de Azaña en su partido –liderazgos reforzados con las elecciones de febrero en el horizonte- y no hubiera sido prudente tomar una decisión importante para su feudo político sin contar con su aquiescencia. Ambas hipótesis, como hemos visto, no son excluyentes y, al margen de la dificultad de apoyar o descartar documentalmente cualquiera de ellas de forma taxativa, parecería más lógico y prudente decantarse por una combinación de ambas, y nunca por la versión simplificadora que en la memoria

---

<sup>518</sup> Ibid.

<sup>519</sup> *El ideal gallego*. 3 de abril de 1936.

franquista situaba a Pérez Carballo como mero delfín o marioneta de Casares Quiroga. O tal vez todo se resuma en una elección regida únicamente por la ley no escrita que regulaba las relaciones clientelares, sea quien fuese el patrón más decidido a empeñar su palabra, vinculada en este caso a la falta de cuadros suficientemente experimentados para afrontar destinos políticos y administrativos complejos. Factor que obligaría a la dirección de IR a decantarse, de forma casi mecánica, por hombres más o menos preparados, en ocasiones firmes promesas de la política, como era el caso de Francisco Pérez Carballo –en otros, bastantes por cierto, a militantes relevantes convertidos en recursos de última hora o a periodistas afines-, pero inexpertos todavía en el arte de la política que forja la personalidad apropiada para afrontar situaciones muy conflictivas y críticas. Y ese tipo de retos no iban a faltar en una plaza como A Coruña y en un tiempo histórico como el vivido en la primavera de 1936.

La falta de cuadros de valía entroncaba, por otra parte, con la escasa importancia o valor concedido por los *meritorios* –y por los versados en política en general- a la figura del gobernador civil, lo que les hacía menospreciar la posibilidad o la oportunidad de ser nombrado para este cargo. A este respecto, la causticidad de Azaña, excesiva, lúcida, y en este caso muy ilustrativa, nos resume bien la cuestión o el problema que estamos analizando –al margen de que nos muestra a un líder no tan indiferente a la dimensión burocrática del partido y de los entresijos de la obra de gobierno-, que deben ser interpretados como una contradicción lógica dado el contexto abordado por el gobierno de Azaña justo después de la victoria electoral del Frente Popular, momento (día 20 de febrero) en que el político alcalaíno se sinceraba en la escritura de su diario:

He colocado a la mejor gente del partido, en el que hay un personal de segunda fila muy lúcido y capaz, y muy honesto. De él podría salir un buen puñado de gobernantes, si nos dan tiempo para que hagan el aprendizaje y se formen. Éste es uno de los mayores obstáculos: la falta de gente apta para gobernar. No existe el centenar de personas que se necesita para los puestos de mando. Así ha salido eso de los gobernadores. La talla ha bajado tanto, que hombres muy modestos se ofenden si se les ofrece un Gobierno civil. Así hoy Lezama, subdirector de *La Libertad*. Marcelino Domingo ha propuesto en Consejo que le hiciéramos gobernador de Valladolid; se le consultó por teléfono y rehusó, haciendo saber al intermediario que la oferta le molestaba como una vejación. Aspiraría a una embajada, como todo periodista que se respete.<sup>520</sup>

No sería este último el caso de Francisco Pérez Carballo, pues el abogado madrileño aceptaría, en efecto, su destino como lo que era, una oportunidad para iniciar su particular *cursus honorum*. Por otra parte, ni Azaña ni su partido, sin olvidar a UR, aceptarían sin más –esto es, sin intentar modificarla- esa especie de fatalidad política que afectaba a los gobiernos civiles y a sus titulares, debido a la importantísima función a desempeñar por estas instancias de poder en la perspectiva de unos meses cruciales para la consolidación del proyecto republicano, amenazado por todos sus flancos. Y no sólo no lo aceptaría, sino que en realidad no actuó bajo ese prisma, a pesar de la urgencia de controlar una situación delicada como era la creada los días y semanas posteriores a las elecciones del 16 de febrero, y más allá del sarcasmo o la agudeza proverbiales en Azaña.

---

<sup>520</sup> S. Juliá (ed), *Manuel Azaña. Obras Completas*, Vol. V (noviembre de 1933/julio de 1936), op. cit, p. 634.

El recién nombrado presidente del gobierno escribió las palabras citadas en una situación nada aconsejable, condicionado por la fractura en el proceso de transición de poderes provocado por la salida en estampida de Portela y de la mayoría de los gobernadores nombrados por éste a última hora. No en vano, en los meses de gobierno del Frente Popular tanto Azaña como Casares nombraron, según los datos que hemos obtenido rastreando la *Gaceta de Madrid*, a veintiocho gobernadores que habían desempeñado este puesto durante el primer bienio -y alguno durante el segundo, bajo la tutela de los radicales-, y sobre los que ahora recaerían 38 de los 84 nombramientos realizados desde el 19 de febrero al 17 de julio de 1936, habida cuenta de que varios de ellos cambiarían de destino en estos meses.<sup>521</sup> Este elenco de gobernadores “irreductibles”, llamados de nuevo a la magistratura de la máxima autoridad provincial, en su inmensa mayoría militantes de IR (fundamentalmente) y UR, ya conocían, por lo tanto, las responsabilidades del cargo y, sobre todo, las dificultades derivadas del contexto político español que iban a afrontar de nuevo a escala provincial y, se deduce, no le hicieron ascos,<sup>522</sup> más bien todo lo contrario, a la propuesta de dirigir un nuevo Gobierno Civil en la legislatura del Frente Popular.<sup>523</sup>

Ello no significa que el gobierno republicano dispusiese de suficientes cuadros con la cualificación exigida por un Estado moderno como para asegurarse el control de provincias convertidas, en demasiadas ocasiones en feudos locales o bombas de relojería social. Esa es, desde luego, otra cuestión. La estabilidad del régimen estaba en juego y, por ello, cobraba tanta importancia la actuación eficaz de una pieza tan importante como los gobiernos civiles en la vertebración de la estrategia política y técnica que debía operar sobre serios problemas de orden público o enfrentarse a las tramas conspiratorias dirigidas contra el corazón del régimen republicano. Sin embargo,

---

<sup>521</sup> La *Gaceta de Madrid* nos sirve como fuente privilegiada para recabar los nombres de los gobernadores “repetidores” –aquellos que, como decíamos en el cuerpo del texto, lo habían sido en legislaturas anteriores-, algunos de ellos también con experiencia como alcaldes o diputados: Manuel María González López, Manuel Pomares Monleón, Francisco Valdés Casas, Antonio Espina, Francisco Carreras Reura, Vicente Costales Martínez, Jesús Artola Goicoechea, Gonzalo Acosta Pan, Miguel Canales González, Manuel Ciges Aparicio, Miguel Granados Ruiz, Isidro Liarte Lausín, Francisco Puig Espert, Antonio Rodríguez de León, César Torres Martínez, Miguel Benavides Shelly, Rafael Bosque Albiac, Francisco Rubio Callejón, José Antonio Fernández Vega, Adolfo Silván Figueroa, Mariano Menor Poblador, Antonio Cepas López, José María Varela Rendueles, Ángel Vera Carbonell, Braulio Solsona Ronda, Mariano Campos Torregorsa y Luis Lausín Gautier

<sup>522</sup> Juan Ruiz-Peinado Vallejo, nombrado gobernador civil de Almería en febrero de 1936, que si bien no había ocupado este puesto con anterioridad si tenía experiencia en la vida política municipal, confesaba en sus memorias –fue uno de los pocos gobernadores civiles que dejaron o pudieron dejar huella escrita de su labor al frente de un Gobierno civil en el periodo republicano-, el escaso entusiasmo que demostró al conocer la noticia de su nombramiento, avalado por uno de sus amigos políticos, el recién nombrado Ministro de Trabajo en el primer gobierno de Azaña. Esta reacción se justificaba en razones de índole profesional y no precisamente bajo ningún prejuicio contra ese cargo en cuestión. De todos modos, queda la duda de si Ruiz-Peinado y algunos otros hubieran reaccionado de la misma manera si se les hubiera anunciado un destino político de mayor envergadura, por ejemplo, un ministerio. Véase en este sentido, J. Ruiz-Peinado Vallejo, *Cuando la muerte no quiere*, México: La impresora Azteca, 1967, p.97-98.

<sup>523</sup> De hecho, Joan Serrallonga afirma que después de las elecciones legislativas de febrero de 1936, “la recomposición del aparato provincial se hará con los mismos mimbres o con unos semejantes que en el primer bienio y sin mediar otras consideraciones en una situación que ya se presumía como compleja y de difícil recomposición”. Véase de este autor, “El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939”, en *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 7 (2007), p.145.

hay que matizar las afirmaciones o primeras impresiones que Azaña reflejó en su diario el día 20 de febrero, pues si el mismo reconocía disponer de un personal de segunda fila muy lúcido, capaz y honesto, aunque falto de experiencia, no parecería tan difícil cubrir los 46 nombramientos restantes, hasta completar las 54 designaciones realizadas durante este periodo, con gente que para madurar necesitaba rodarse en puestos de esa naturaleza y responsabilidad, que seguramente no estaba incluida en la categoría de los condenados a bajar la *talla* del perfil político del gobernante republicano. En las palabras escritas por Azaña el 20 de febrero en su diario, subyacería más la intuición o la certidumbre de que la realidad política y social del país era más compleja que lo admitido por el discurso oficial del gobierno y sus partidarios, y este hecho, unido a las ínfulas o reticencias de algunos, distorsionaría la percepción de los recursos humanos disponibles para nutrir la estructura y la administración estatal.

Esa gente relativamente inexperta pero capaz de, al menos, interpretar con disciplina las directrices del gobierno y unirse al núcleo de gobernadores que habían desempeñado el cargo antes de la victoria del Frente Popular —como se ha dicho más arriba, veintiocho nombres para 38 designaciones—, no conduciría al país a ningún desastre, por más que se insistiera en ese sentido. Si es cierto que para un gobernador civil el margen de autonomía personal necesario para adoptar decisiones en situación de necesidad (parálisis gubernamental, fallo de comunicaciones, coordinación defectuosa) se amplía, como es lógico, con el conocimiento de todas las claves del puesto, también lo es que éste dependería, así mismo, de otros factores relacionados con la coyuntura política local o la propia valía o personalidad de cada gobernador.

Y aquí cabría preguntarse si no se sobredimensionó, tanto por parte de los protagonistas de la época como ahora por los especialistas, el papel individual de los gobernadores a la hora de sostener la estructura del Estado, o la estabilidad del poder civil ante un proceso de involución, cuando, probablemente, la piedra angular de la respuesta sistémica del gobierno frente a una agresión interior sería, en primer lugar, su capacidad de evaluar correctamente los peligros sociales y políticos que acechaban a la República, para después articular una forma eficaz de neutralizarlos.

De todos modos, debe señalarse, en puridad, la inexperiencia política o la falta de preparación o adaptación al puesto en cuestión de algunos gobernadores como uno de los condicionantes de la respuesta institucional republicana al golpe de estado militar, nunca el único y sólo en ocasiones el principal. La mayoría de los gobernadores sufrieron, en el trance del golpe de julio, la propia naturaleza de la insurrección, que implicó la sedición de las fuerzas militares o policiales en las que debía asentarse el poder coercitivo imprescindible en la labor de un gobernador civil firmemente decidido a defender la legalidad y la democracia republicanas. Hay, en este sentido, numerosos ejemplos de hombres muy valiosos y experimentados que, al frente de distintas responsabilidades políticas, institucionales, militares o policiales, se encontraron desbordados por los acontecimientos y el caos derivado de la brutal y repentina fractura social provocada, *ex profeso*, por conspiradores y golpistas.

No obstante lo anterior, los gobernadores civiles constituyeron uno de los principales chivos expiatorios de la primera derrota del Estado republicano ante la facción golpista del ejército y las fuerzas de orden público en julio de 1936, hecho que Azaña no podía

prever, al menos en su exacta dimensión, cuando reflexionaba al calor de la escritura de su diario en febrero de ese mismo año.

Volviendo un poco atrás y como contrapunto a este proceso intencional sobre qué líder de IR inspiró el nombramiento de Francisco Pérez Carballo como gobernador civil de A Coruña, más allá de la disección de una estrategia condicionada por los personalismos característicos de la vieja política, cabría afirmar que no es cierto que el nuevo gobernador de A Coruña formase parte de la clásica cohorte o élite de *clientes políticos* de Casares. Un Casares que, a pesar de haber sido nombrado ministro de Obras Públicas en el primer gobierno del Frente Popular, se las arreglaría para que su figura sobrevolase la cartera de Gobernación hasta mediados de mayo, momento en que accedió a la presidencia del gobierno. Oriundo de Galicia y muy vinculado a esta tierra, no hay pruebas, sin embargo, de que Pérez Carballo estuviese incluido en ese proyecto de *cantera* política casarista, ahora más difuminado dentro de la maquinaria interna de IR, ni aún menos de una subordinación clientelar al político coruñés, reflejada machaconamente por los propagandistas franquistas de primera hora y recogida por numerosas fuentes y voces posteriores, unas más autorizadas que otras, en un proceso de memoria parcial y tendencioso.

Hemos hablado de redes clientelares y de usos de la vieja política en contradicción, dentro de una misma coyuntura histórica, con los nuevos aires de modernización imperantes en el discurso ideológico y la praxis política del republicanismo burgués de izquierda, porque no podíamos minusvalorar, esto es obvio, la mecánica interna de estos partidos, contemplada en un juego de equilibrios para compensar personalismos o intereses de facciones. Pero este análisis realizado, sometido a las limitaciones fontales reseñadas, no soslaya el hecho de que la estrategia seguida por los sucesivos gobiernos de Azaña para reactivar los gobiernos civiles, tras la accidentada transición de febrero y el desconcierto consecuente a la hora de tomar decisiones en esta materia, obedecería, desde una perspectiva más global, matizada en el tiempo y no circunscrita a la observación de un marco espacial tan concreto, a la necesidad de recuperar un criterio de estabilidad administrativa y funcional que había desaparecido durante el bienio negro o rectificador.

Durante este periodo, las funciones de los gobiernos civiles se subordinaron a la represiva, en una serie interminable de relevos de sus titulares, situación modificada ante la magnitud y la dificultad de las reformas que se proponía retomar el nuevo proyecto del Frente Popular. La transición entre ambos modos de interpretar la organización del poder local fue muy accidentada, como es sabido, y forzó al gobierno del Frente Popular a nombrar gobernadores sin el tiempo de reflexión necesario para afinar en nombres y lugares. Esta precipitación obligada no implicaría en absoluto la incapacidad de la coalición gobernante republicana de enfrentarse a un reto estructural de suma importancia para la gobernación del país. En palabras de Juan Ruiz-Peinado Vallejo, gobernador civil de Almería de febrero a octubre de 1936:

El presidente de la República, Alcalá Zamora, designó ante esta situación, a don Manuel Azaña para formar gobierno de forma apremiante. Y en la reunión que éste tuvo, al tenerse que improvisar muchas cosas (que en tiempos normales hubieran sido estudiadas más despacio) se le pidió a cada uno de los ministros que designara el nombre de 4 o 5 personas idóneas para el cargo de gobernador, y así, de esta forma, fuimos designados los nuevos gobernadores. Entre los

cuatro o cinco nombres que facilitó mi amigo, dio el mío. Me di cuenta del disgusto que le producía la falta de entusiasmo por mi nombramiento. Por otra parte, su gesto había sido de gran amigo. Reaccionó y le di un gran abrazo.

Todavía él me dijo: -Me voy a atrever a darle un consejo. Se le van a presentar oportunidades para dimitir; pues bien, cuando dimita, hágalo de forma que caiga usted bien (¡Cuántas veces me iba a acordar después de esta recomendación!).

Por otra parte, Casares Quiroga, Ministro de la Gobernación me dijo:

-Hubiera deseado otra provincia para usted. Allí hay una enemiga fuerte contra Barcia. Con estos antecedentes, fui a Almería, donde llegué el 28 de febrero de 1936.<sup>524</sup>

Una descripción tan gráfica del proceso de designación de los gobernadores civiles del primer gobierno del Frente Popular presidido por Azaña, reafirmaría, además de proporcionarnos una imagen completa de cómo se hacía la verdadera política entre bambalinas (la nueva-vieja política), la percepción de que en un contexto político distinto al de las elecciones de febrero -esto es, no mediando amenazas o presiones como las recibidas por Portela Valladares-, los nombramientos de altos cargos por parte de los gobiernos republicanos encabezados por Azaña o Casares ("que en tiempos normales hubiesen sido estudiadas más despacio"), responderían a un plan más elaborado. Y, por tanto, las designaciones no dependerían tanto (o no dependerían únicamente, al menos en primera instancia) de la intuición mecánica de Casares, Azaña y sus ministros o altos cargos, pues, como nos cuenta el astuto y diligente gobernador civil de Almería en sus memorias, cada ministro proponía y avalaba cuatro o cinco nombres de candidatos a gobernadores civiles.

Esta relativa inercia a la improvisación, a la falta de una oportuna y debida reflexión política, no condicionaría, sin embargo, la segunda tanda de nombramientos de gobernadores civiles abordada por el ejecutivo de Azaña entre finales de marzo y mayo de 1936 -Pérez Carballo fue uno de ellos-, encontrándose el gobierno Casares, a dos meses del golpe de estado, cerca de un buen punto de partida para lograr cierta estabilidad institucional en el mapa político de los gobiernos civiles a lo largo del territorio nacional. Por otra parte, ese amigo político "benefactor" que invocaba Ruiz-Peinado, que no era otro que Enrique Ramos Ramos, ministro de Trabajo de febrero a mayo de 1936, era un íntimo amigo de Azaña y un compañero de Francisco Pérez Carballo en la cátedra de Derecho Romano de la Universidad Central, de la que el jurista malagueño era profesor auxiliar, bajo la dirección del catedrático José Castillejo. En este sentido, y sin establecer una relación de causalidad, no sería descartable el que Ramos obrase de igual forma con el nombre de Francisco Pérez Carballo -cuyas conexiones personales no eran, como sabemos, nada desdeñables, aunque en ningún caso resultasen definitorias- para el gobierno civil de A Coruña, guiado por la estrecha relación que le unía a ambos.

Si bien es cierto que los gobiernos republicanos no se apartaron demasiado de la línea seguida por los de la Restauración a la hora de diseñar el mapa de los gobiernos civiles -los gobernadores civiles no dejarían de ser contemplados como peones de ajedrez en el tablero de la política provincial-, si permitieron e impulsaron el hecho de que éstos desarrollasen una política diferente en la realización de actos específicos, bajo un estilo procedimental más ortodoxo, y en la aplicación de la legislación vigente.

<sup>524</sup> J. Ruiz-Peinado Vallejo, *Cuando la muerte no quiere*, op. cit, p. 98-99.



Del mismo modo, se pensaba que los gobernadores civiles debían ser designados de otra manera o con otros criterios diferentes a los seguidos antes del advenimiento de la República –la tardanza en aplicar nuevas fórmulas de elección de cargos era asunto diferente-, más acordes con la modernidad política pretendida, cambio en todo caso lento y de alcance y ritmos irregulares, como ya se ha dicho. La realidad dice también que durante el bienio Azañista, y tras un carrusel de nombramientos realizado con la urgencia del momento por el gobierno provisional de la República presidido por Alcalá Zamora, se trató de lograr una cierta estabilidad y coherencia institucional con las designaciones de los mismos, tendencia seguida por los gobiernos del Frente Popular y en la que se inscribe también el nombramiento y la breve estancia de Pérez Carballo al frente del gobierno civil de A Coruña, junto a otras razones específicas que analizaremos en breve.

Las funciones tradicionales asignadas al gobernador civil, que se revelaban cruciales para entender la importancia de su gestión dentro de la maquinaria política y administrativa del poder central, empezaban en el control de los procesos electorales y del orden público. En este último campo, la legislación republicana había transferido las competencias sobre seguridad interior a las autoridades civiles competentes y cambiado la adscripción de la Guardia Civil del Ministerio de la Guerra al de Gobernación.<sup>525</sup> Las prerrogativas en materia de administración local eran una fuente continua de conflictos provocados por la interferencia de los gobiernos civiles en la vida política municipal en favor de sus respectivos amigos políticos o correligionarios, huellas de un modelo político heredado de la Restauración que no fue erradicado durante el periodo republicano. Además de las atribuciones mencionadas, y en un relativo segundo plano, al gobernador civil también le correspondían funciones de regulación de la beneficencia, vigilancia de la prostitución y los espectáculos, protección de la infancia, elaboración de un importante número y tipología de estadísticas, supervisión de contribuciones e impuestos gestionados por el Ministerio de Hacienda y de proyectos emprendidos por el Ministerio de Fomento, etc.

En materia de seguridad ciudadana, la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 establecía de forma genérica las funciones y atribuciones del Gobierno Civil a este respecto y delimitaba su espacio específico de actuación entre el nivel gubernamental (ministerio de Gobernación) y las instancias de poder regional o municipal. El capítulo II de esta Ley, compuesto de cuatro artículos, abordaba esta cuestión de forma muy directa:

Artículo 6º. Todas las Autoridades de la República, tanto las pertenecientes al poder estatal como a las Regiones, Provincias y Municipios, velarán por la conservación del orden público, cuyo mantenimiento y defensa competirá especial y directamente, en todo el territorio nacional, al Ministerio de la Gobernación, y subordinadamente, dentro de cada provincia, al respectivo Gobernador civil, y de cada municipio, al correspondiente Alcalde.

---

<sup>525</sup> La Ley de Defensa de la República (octubre de 1931) y la nueva Ley de Orden público (28 de julio de 1933) irían en detrimento de la jurisdicción e interferencia de los militares en materia de orden público y el decreto de 16 de agosto de 1932 excluiría a la Guardia Civil del organigrama del Ministerio de la Guerra y haría depender funcionalmente a esta institución del Ministerio de Gobernación, en un intento de asegurar su control por parte de las autoridades civiles, véase VV.AA, *El gobernador civil en la política y en la Administración de la España contemporánea*, Ministerio del Interior, 1997, p.420-24

En cuanto a las regiones autónomas, se estará a lo que dispongan sus respectivos Estatutos. La subordinación de los alcaldes al Ministerio de la Gobernación y a los gobernadores civiles se entiende exclusivamente referida a las cuestiones de orden público, sin que en ningún momento pueda limitar las iniciativas que se deriva de la plena autonomía municipal. Los alcaldes, en el ejercicio de sus funciones delegadas del gobierno, dispondrán de la fuerza pública dentro del término municipal del Ayuntamiento que presiden.<sup>526</sup>

Esta articulación por escalas –nacional, provincial, local- de la responsabilidad estatal sobre el orden público presentaba un difícil entronque entre las respectivas esferas del Gobierno Civil y los ayuntamientos, pues, como veremos también en el caso de A Coruña, los conflictos entre el Gobierno Civil y algunas alcaldías amenazaban la autonomía de éstas, más allá de su obligada subordinación a la máxima autoridad provincial en todo lo relativo a la seguridad ciudadana. El siguiente artículo profundizaba en la potestad de los gobernadores civiles de nombrar, en determinados casos, delegados de orden público dentro de sus respectivas demarcaciones, y hacía referencia a funciones de cooperación y coordinación entre distintos gobiernos civiles en escenarios que así lo justificasen, siempre bajo el conocimiento o la supervisión del Ministerio de la Gobernación:

Artículo 7º. Los Gobernadores civiles, a los efectos de esta ley, asumirán el ejercicio de la autoridad gubernativa en todo el territorio de sus respectivas provincias, correspondiéndoles la disposición, distribución y dirección de los Agentes y fuerzas pertenecientes a los Institutos destinados a guardar el orden y seguridad públicos dentro de los preceptuado en los Reglamentos de dichos Institutos y sin perjuicio de su disciplina.

El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá nombrar, por el tiempo que estime preciso, Gobernadores civiles generales, especialmente encargados de asegurar el orden público, con jurisdicción sobre el territorio de varias provincias o de parte de ellas y con las facultades que el propio Gobierno determine, las cuales, sin embargo, no podrán exceder en ningún caso de las definidas en esta Ley.

Los Gobernadores civiles podrán, a su vez, nombrar, para zonas y casos determinados, dentro del territorio de sus respectivas jurisdicciones, delegados de su autoridad, que la representen en el mantenimiento del orden público. El nombramiento de estos delegados habrá de recaer necesariamente en funcionarios públicos (...) Cuando las alteraciones de orden público acaecieren en lugares pertenecientes a provincias distintas o afectaren a la paz pública en varias de ellos, los Gobernadores civiles podrán concertarse y auxiliarse entre sí, dando inmediata cuenta de las medidas que tomaren al Ministerio de Gobernación.<sup>527</sup>

Y en un nuevo intento de perfilar definitivamente las prerrogativas de los alcaldes en relación al mantenimiento del orden público, definiéndolas en términos de subsidiaridad y dependencia orgánica respecto de los gobiernos civiles, van los dos últimos artículos (octavo y noveno) del capítulo II del título primero de la Ley de Orden Público republicana, subyaciendo en el último de los artículos citados una velada advertencia contra cualquier tipo de autoridad que pudiera cuestionar la jurisdicción de los gobiernos civiles (y con ello, se entiende, la del propio Ministerio de Gobernación) en el proceso de información, vigilancia y control de todo aquello que pudiera afectar a la seguridad del Estado:

Artículo 8º. Los Alcaldes, bajo la autoridad y dirección del Gobernador civil correspondiente, coadyuvarán a la conservación del orden público, dentro de sus respectivos términos municipales. En los municipios que no sean capitales de provincia, los Alcaldes, a los efectos de esta Ley y en las condiciones expresadas en el párrafo anterior, ejercerán la autoridad gubernativa, siempre que el respectivo Gobernador civil no la asuma por sí o por un delegado especial suyo.

<sup>526</sup> *Ley de orden público*, de 28 de julio de 1933, en *Gaceta de Madrid* (30-07-1933)

<sup>527</sup> *Ibidem*

Los alcaldes que ejercieren autoridad gubernativa en circunstancias que impidiesen pedir o recibir instrucciones, obrarán por propia iniciativa y responsabilidad, dando cuenta lo más rápido posible e sus actos al Gobierno civil.

Artículo 9º. Toda autoridad que por sí misma o por sus agentes, tuviere conocimiento de un hecho que afectase al orden público o pudiese causar perturbación en él sin perjuicio de su propia jurisdicción, que ejercerá cuando proceda, lo comunicará al Gobernador civil correspondiente. El incumplimiento de esta disposición será considerado como denegación de auxilio.

Sólo a requerimiento de la Autoridad podrán los que carecen de ella intervenir en las perturbaciones del orden público.<sup>528</sup>

Esta Ley, aprobada por las Cortes republicanas casi en el verano de 1933, complementaba y corregía algunos aspectos de la *Ley de defensa de la República* (octubre de 1931), el texto legal republicano que dio el primer paso para que las fuerzas de seguridad pasasen a depender de los respectivos gobiernos civiles, en aras de la pretendida desmilitarización de la administración y de los cuerpos policiales con jurisdicción en el interior del país –objetivo político iniciado con la aprobación del decreto de 16 de junio de 1931, que suponía la desaparición de las capitanías generales y los gobernadores militares-,<sup>529</sup> constituye un elemento importante para cuestionar el “paradigma de la militarización” con el que se trata de explicar el fracaso de las autoridades republicanas en la modernización de los cuerpos policiales, cuya mentalidad, determinada por su impronta militar, favorecería un uso excesivo de la violencia. Este *fracaso* se explicaría por la falta de mecanismos de control eficientes por parte del poder civil y por la inercia inherente a una legislación considerada como poco flexible o, sencillamente, autoritaria.<sup>530</sup>

Ésta sería la base jurídica sobre la que el gobierno del Frente Popular le concedería a los gobernadores civiles las competencias sobre orden público en exclusiva, meses antes del estallido de la guerra civil. Fue este mismo gobierno quien, a finales de marzo de

---

<sup>528</sup> Ibidem.

<sup>529</sup> M. López Corral, “El gobernador civil y la Guardia Civil”, en VV.AA, *El gobernador civil en la política y en la administración de la España Contemporánea*, op. cit, p. 421.

<sup>530</sup> G. Blaney, “En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana 1931-1936”, en *Ayer*, 88/ 2012 (4), p. 114.

La tesis del fracaso de los sucesivos gobiernos republicanos en desmilitarizar los cuerpos policiales y la gestión del orden público -desde este punto de vista éstos habrían desarrollado políticas y leyes autoritarias siguiendo la línea trazada en la Restauración-, en M. Balbé, *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, Alianza, 1984, p.317-396. En contra de esta teoría, Gerald Blaney argumenta que los gobiernos republicano, en especial los del primer bienio –los del Frente Popular se enfrentaron a la obra revisionista emprendida por la coalición radical-cedista que, en materia de orden público, había revertido la situación al punto de partida-, actuaron en el mismo sentido que lo hacían las principales democracias europeas por aquellas fechas (tanto los “añejas” británica o francesa, como las “nuevas” polaca o checa), esto es, de un modo pragmático, no destinado a perdurar en el tiempo y con el fin de proteger la democracia de los peligros que la acechaban. Así, por ejemplo, durante el periodo republicano se logró la eliminación de Capitanías Generales y Gobiernos Militares y se dotó a las autoridades civiles, para evitar interferencias militares o la propia declaración del estado de guerra, de importantes atribuciones a la hora de controlar disturbios y conflictos merced a la Ley de Orden Público (LOP), sin que se utilizase ninguna clase de poder especial para neutralizar a las fuerzas de la oposición parlamentaria, y las prerrogativas excepcionales contenidas en la Ley de Defensa de la República o en la LOP no se diferenciaban demasiado de las otorgadas por la *Emergency Powers Law* en Gran Bretaña durante el periodo de entreguerras, llegándose en este país al punto de que de los 50 *Chief Constable* (una especie de jefes de policía provinciales) nombrados por las autoridades británicas, 35 eran de procedencia militar.

1936, se empezaba a ocupar, en relación a la tan debatida cuestión del orden público, de la organización de los servicios encargados de su mantenimiento, actitud -o interpretación forzada de una necesidad política- bien acogidas en algunos medios policiales, en los que se congratulaban del cambio operado en el enfoque del problema, a pesar de subrayar su tardanza y seguir denunciando la intromisión de la política en el funcionamiento de los servicios de orden público. Prestemos atención, por ejemplo, a un editorial de *¡Presente..!*, revista que hacía las veces de portavoz de los agentes del Cuerpo de Seguridad:

En uno de los últimos Consejos de Ministros, que tan largo espacio de tiempo dedicó al examen del orden público, se han ocupado por fin de la organización (...) Decimos “por fin”, extrañados del acontecimiento, porque no hay término tan traído y llevado dentro del Estado que el orden público ni que esté más desasistida su organización de nuestros hombres públicos. Interpelaciones en la Cámara de Diputados para juzgar tal o cual aspecto relacionado con el orden público, las hemos visto a millares; disposiciones encaminadas a estudiar y reglamentar eficazmente el órgano más importante del Estado ni una sola recordamos (...) Para nosotros se apoya el fracaso del orden público en la conducta que siguen los gobernadores o en su falta de personalidad, como si se atribuye el sistema de organización; nos es exactamente lo mismo, porque ambos motivos son igualmente condenables. El órgano, casi siempre acéfalo, fue hasta ahora al parecer un instrumento de fácil manejo para cuantos tienen facultad de moverlo, sin querer ver que sus múltiples y secretas facetas, lo convierten en arma peligrosa en las manos de un niño. Gobernadores jóvenes, algunos ayunos de toda experiencia, para quien los guardias han sido soldaditos de plomo. Gracias a la disciplina de estos Cuerpos y a lo desacreditado del sistema se puede ir tirando; pero el gobierno hace bien en ponerle urgente remedio (...) nos acercamos al criterio del gobierno, en cuanto a las necesidades de eliminar de las funciones de mantener el orden público a determinadas autoridades, precisamente para evitar que algunas, por razón de parcialidad, como militantes de una organización política, sacrifiquen el interés general por el de partido. El órgano de orden público ha de ser apolítico y no de tan pobre estructura que caiga deshecho al primer soplo de sus numerosos enemigos. El candidato que no logró acta, el gobernador al que no secundó en un chanchullo electoral, el profesional del desorden y de la delincuencia, el industrial denunciado, el pacífico transeúnte al que se le manda circular o levantar los brazos para cachearlo, todos se juntan en un momento dado para la censura. En cuanto sea débil y tenga que defenderlo el mismo que tomó partido en su contra, adiós órgano y vuelta a empezar, con el teje y desteje que nos enseña su historia.<sup>531</sup>

Y en este cambio de orientación que se vislumbraba a partir de la atención dedicada a los aspectos organizativos de la gestión y el mantenimiento del orden público –sin duda, las alteraciones y turbulencias de febrero y marzo habían dejado huella, aunque la percepción de estas anomalías se magnificase-, que el editorial citado sitúa en uno de los últimos Consejos de Ministros celebrados en marzo, coincidiría o más bien se traslucía, de algún modo, al entroncar con los nuevos nombramientos de gobernadores realizados en la primera quincena de abril, entre ellos el de Francisco Pérez Carballo, concretado el 10 de abril de 1936. En este sentido, Pérez Carballo debería esquivar con su actuación la categoría comprensiva de esos “gobernadores jóvenes”, que “ayunos de toda experiencia” considerarían a los agentes policiales, los consabidos “guardias”, como “soldaditos de plomo” –según hemos leído en el texto anteriormente aludido-, pero no se puede obviar aquí el hecho de que en la dimisión de su antecesor en el cargo, el también militante de IR, José Sánchez Gacio, había influido la tensa atmósfera social creada en A Coruña desde el triunfo del Frente Popular, que, debido especialmente a las maniobras clandestinas de los militares –que actuaban o se movían, con más o menos

<sup>531</sup> *¡Presente..!*. Revista gráfica quincenal: Órgano defensor del Cuerpo de Seguridad y de Asalto. Nº 37 (1 de abril de 1936).

sigilo, en paralelo a las alteraciones de orden público o a los rumores de cambio político difundidos-, acabaría por desbordarle. Esto no significaría necesariamente un fracaso total en el control de los conflictos laborales o de orden público por parte del gobierno civil de A Coruña (o que éstos fuesen directamente inmanejables) y, por ende, del central –aunque el manejo del “factor militar” es ya otra cuestión-, sino más bien una muestra de incapacidad de las autoridades republicanas para construir esa imagen necesaria de dominio de la situación. Incapacidad enfocada, conforme a sus intereses, por la prensa políticamente adversa, o no demasiado afín –léase el matiz como se quiera-, encargada del preceptivo y rígido escrutinio y desafiante frente a la censura cuando correspondía, como lo prueba la despedida –un reproche global a una supuesta falta de valor para afrontar la convulsa situación social en la ciudad- con que se obsequiaba desde *El Ideal Gallego* al ya ex gobernador civil de A Coruña, información complementada con el anuncio de la llegada de su sustituto, el también militante de IR Pérez Carballo.<sup>532</sup>

Despedida en la que, por descontado, nada se hablaba de la actitud e intenciones de los mandos militares y de la Guardia Civil destinados en la provincia respecto del gobernador civil y del gobierno de la República, factor esencial –debe insistirse en este punto- para explicar la defección de Sánchez Gacio, quien ya tenía noticias de las reuniones mantenidas por oficiales de la Guardia Civil y oficiales del ejército antes y después de la victoria del Frente Popular, considerándolas potencialmente más peligrosas que cualquier erosión de la paz social acontecida por aquellas fechas.

### **A Coruña: bajo el foco que proyecta sombras. La trama conspirativa de abril de 1936.**

Es cierto que A Coruña constituía una plaza difícil para un gobernador civil, y no sólo debido a la dificultad intrínseca al manejo de los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana o de los aún incipientes mecanismos de la verdadera democracia electoral en el nivel provincial. Según los datos extraídos del censo de 1930, la provincia de A Coruña tenía 767.608 habitantes (la sexta más poblada de España y la que albergaba tres de las siete ciudades más importantes de Galicia),<sup>533</sup> mientras que la ciudad (74. 1321)<sup>534</sup> ocupaba la decimoséptima posición entre las capitales de provincia con mayor número de habitantes, aunque a muy poca distancia de algunas de sus predecesoras en este ranking -Oviedo (75. 463), Cádiz (75.769) y San Sebastián (78.

<sup>532</sup> *El Ideal Gallego*. 9 de abril de 1936.

<sup>533</sup> Del Censo oficial de 1930, fuente principal de los datos demográficos recogidos en el *Anuario estadístico español* de 1936, se infiere que las provincias españolas con mayor número de habitantes eran, por este orden, Barcelona, 1. 800. 638; Madrid, 1.383. 951; Valencia, 1.042. 154; Sevilla, 805. 202; Oviedo, 791.855 y A Coruña, con la cifra citada más arriba, en sexta posición. Estos datos están sujetos, lógicamente, a modificaciones transcurridos seis años desde su recogida, relacionadas en el caso de A Coruña con una tendencia al alza demográfica que se manifestó durante los años de la República, aunque las cifras reales no deberían diferir sustancialmente de las tomadas como referencia en los documentos estadísticos citados.

<sup>534</sup> C. Fernández Santander sitúa la cifra de habitantes de la ciudad de A Coruña en los momentos previos al golpe de estado en torno a los 95.000, véase de este autor, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, Vol I, p. 69.

432).<sup>535</sup> El estatus de A Coruña como sede orgánica de la VIII Región Militar y de las otras ciudades de la provincia –Ferrol y su Departamento Marítimo; Santiago de Compostela, sede de la única universidad gallega, futura capital de Galicia según el texto del Estatuto plebiscitado en junio y gran símbolo del mundo católico-, hablaban claramente de la importancia del destino asignado a Francisco Pérez Carballo.

Ciudad y provincia, por demás, de obligada referencia, tanto en términos políticos como administrativos, para el conjunto de la sociedad gallega y, al tiempo, en sentido estratégico, para los conspiradores y futuros golpistas conjurados contra el poder democrático legalmente constituido en abril de 1931. Una provincia, así mismo, A Coruña, feudo del republicanismo desde hacía décadas –la mayoría republicana en su consistorio se remontaba a más de treinta años-, que vio como una parte importante de sus élites políticas hacía sin complejos el tránsito de la monarquía a la novísima República para contrarrestar de ese modo la pujanza de una burguesía conservadora refractaria tanto de las reformas propuestas por la izquierda burguesa y obrera, como de las sensibilidades galleguista o nacionalista. La formación que dirigía Casares Quiroga llegó durante la II República a dominar el setenta por ciento de los ayuntamientos de A Coruña, no bajando del treinta por ciento ni durante el sombrío bienio negro o rectificador,<sup>536</sup> y sus representantes en los diferentes consistorios de la provincia ocuparon en algún momento la mitad del total de los puestos de concejal existentes.<sup>537</sup>

Otra cuestión sería el análisis de la especial idiosincrasia del republicanismo coruñés y del gallego en general, tan cerca del posibilismo camaleónico y clientelar como de un proyecto democrático en ciernes. Emilio Grandío pone el acento en la importancia concedida tanto por los líderes de la trama conspiratoria en A Coruña, como por los planificadores y ejecutores de la represión desencadenada tras el golpe militar, al esquema de la división interna en el contexto provincial, no reflejada en un marco administrativo concreto, entre tres zonas de influencia determinadas, a un nivel referencial, por el triángulo A Coruña-Santiago-Ferrol, donde la primera ciudad representaría el papel crucial de espejo de la situación política a nivel regional y estatal. Ello es debido a que al importante peso económico y político representado *per se*, se le sumaban connotaciones estratégicas, fundamentales, ya referidas y perfectamente aprovechables desde la lógica del terror y en aras de una mayor eficacia operativa, como sede de la VIII División orgánica y del Gobierno Civil de la provincia.<sup>538</sup>

---

<sup>535</sup> Las restantes capitales de provincia gallegas eran ciudades relativamente pequeñas: Lugo (31. 137), Ourense (21. 579) y Pontevedra (30. 821). Como dato a tener también en cuenta, los otros dos núcleos urbanos de la provincia coruñesa, Ferrol (35.563) y Santiago de Compostela (38. 270), superaban las cifras de habitantes de las restantes capitales de provincia gallegas, existiendo además en la provincia de A Coruña municipios de cierta envergadura en términos cuantitativos y de peso político específico desde el feudo local de las *villas*, más allá del factor de la dispersión del hábitat característico de Galicia, como es el caso de Ortigueira (21. 579), Carballo (15. 127), Narón (12.278), Noia (10. 975), Boiro (10.505), Muros (10.282), Outes (10. 028). Véase a estos efectos, el *Censo de población de 1930*, Tomo III. Volúmenes regionales. Cuaderno IX, Galicia, A Coruña, que se puede consultar en <http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=92538&tns=108202#108202>

<sup>536</sup> E. Grandío Seoane, “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña: ¿Qué pasa con Coruña?”, en Jesús de Juana y Julio Prada (coords), *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Madrid, Crítica, 2006, p.21.

<sup>537</sup> R. Villares, *Historia de Galicia*, Vigo, Galaxia, 2004, p. 340.

<sup>538</sup> E. Grandío Seoane, “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña...”, op. cit, p. 20.

Volviendo a la dimisión de Sánchez Gacio a principios de abril de 1936, y en función de los datos de los que disponemos, podríamos subrayar el hecho de que en el corto periodo en el que estuvo al frente del Gobierno Civil de A Coruña las cotas de violencia política y social alcanzados por esta provincia guardan coherencia con lo sucedido en el territorio nacional desde las elecciones de febrero de 1936.

Esto significa que, como en casi toda España, los índices de violencia política y común se elevaron apreciablemente, en medio de la euforia desatada las semanas posteriores al triunfo de las izquierdas en las elecciones de febrero. De hecho, se pueden encontrar entre las causas instruidas por la Audiencia de A Coruña varias relativas a intentos de incendio, estragos y robos perpetrados en varios establecimientos religiosos ocurridos entre el 19 y el 21 de febrero de 1936, que si bien no son sucesos acaecidos con Sánchez Gacio al frente del gobierno Civil (fue nombrado el día 26, tan sólo unos días después de los hechos y cesaría en abril, para ser relevado por Pérez Carballo), si determinarían, por otra parte, buena parte de sus primeras gestiones al frente del mismo. Así, sus primeros pasos en el Gobierno Civil coruñés le sirvieron para calibrar de forma exacta la atmósfera hostil a la República que se había creado entre los mandos del ejército y de la Guardia Civil destinados en la provincia. En lo referente a la naturaleza de los episodios violentos registrados, se tiene constancia de varios incendios producidos bajo diferentes circunstancias y con distinto alcance, tanto en la intencionalidad como en los daños ocasionados: uno acompañado de robo en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la noche del 19 al 20,<sup>539</sup> otro provocado a las veinticuatro horas del 20 de febrero en el local de los Padres Redentoristas,<sup>540</sup> y un tercero, éste en grado de tentativa, abortado a tiempo en la capilla de San Roque de Afuera, acontecido también durante la noche del 20 al 21 del mismo mes.<sup>541</sup>

En cualquier caso, los estudios publicados hasta el momento sobre la evolución y la naturaleza de la violencia política experimentada, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, por la sociedad española en el periodo comprendido entre la victoria del Frente Popular y el estallido del golpe de estado, no revelarían una especial conflictividad en esta provincia, a pesar de la raigambre anarquista que la caracterizaba. La presencia anarcosindicalista se hacía más patente en la propia ciudad de A Coruña, que se movería en niveles intermedios si estableciésemos un hipotético ranking comparativo a escala nacional, aunque los parámetros y enfoques utilizados por los especialistas en este campo difieran de forma sustancial y faltan fuentes y herramientas metodológicas más convincentes. Esta afirmación de la relativa estabilidad del orden público en la provincia coruñesa durante el gobierno del Frente Popular y su estructura político-administrativa estaría avalada por dos de los estudios más significativos realizados sobre esta cuestión, que destacan junto a los firmados por S Payne o E. Malefakis en su día.<sup>542</sup> El primero al que nos referimos es el dedicado por Ramiro Cibrián a la evolución de la violencia política en el primer semestre de 1936, que

<sup>539</sup> ARG, Fondo Audiencia Territorial de A Coruña, 02464-31.

<sup>540</sup> ARG, Fondo Audiencia Territorial de A Coruña, 02463-31.

<sup>541</sup> ARG, Fondo Audiencia Territorial de A Coruña, 02464-33.

<sup>542</sup> E. Malefakis, *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1971; S. G. Payne, *The spanish revolution*, New York, 1970 y "Political violence during the spanish second republic", en *Journal of contemporary history*, vol XXV, 2-3 (1990).

situaría al distrito electoral de A Coruña en niveles ligeramente por encima de la media nacional, pues si por un lado superaría con claridad las cotas alcanzadas por el resto de los gallegos y, como dato a tener en cuenta, a todos los catalanes, se encontraría todavía lejos o muy lejos de los registros de los enclaves considerados aquí como los más conflictivos: Madrid (capital), Sevilla (capital y provincia) Málaga (capital), Ávila, Cádiz, Logroño o Ceuta.<sup>543</sup> El segundo se debe a Eduardo González Calleja –este mucho más reciente–,<sup>544</sup> que, en cambio, y focalizando el número de víctimas mortales producido entre el 16 de febrero y el 17 de julio de 1936, ofrece datos que nos permitirían conceptuar, desde una perspectiva comparativa, como los niveles de violencia política identificados en la provincia coruñesa se revelaron inferiores a la media española en términos cuantitativos, consignando un total de tres fallecidos, uno de ellos contabilizado en la propia capital.

En otras palabras, según este último autor, 14 provincias presentarían niveles inferiores y siete, entre ellas Valencia, se moverían en registros similares al marcado por A Coruña –con distinta interrelación, eso sí, entre las cifras arrojadas por la capital y el resto de la provincia–, de lo que se inferiría una distancia apreciable entre las cotas de violencia política y social alcanzadas por A Coruña con respecto a las exhibidas por los puntos calientes de la geografía nacional (el “escaparate” madrileño y sus 50 víctimas mortales, las 22 de Albacete, las 21 de Sevilla...).

Esto es así, otra cuestión sería analizar en profundidad la percepción psicológica ciudadana de la violencia extrema o moderada –de su gradación, proximidad o lejanía– y, en consecuencia, asumir el hecho de que tanto el número de incidentes en los que no se produjeron víctimas mortales pero sí heridos, estragos materiales u otro tipo de alteraciones significativas del orden público, como la valoración del criterio proporcional de población resulten asignaturas pendientes para la investigación historiográfica. Por no hablar de la dificultad intrínseca al efecto de la manipulación de los sucesos o episodios violentos por parte de la prensa derechista, que extrapolaba los registros de Madrid y los superponía, de forma metafórica, a los correspondientes a distintas partes de la geografía española.

Más contundentes, aunque no relacionados de forma directa con el fenómeno de la violencia política, al menos a priori, serían los datos aportados por el *Boletín Oficial de la Guardia Civil*. Al margen de la necesidad de ser analizados desde el punto de vista de la restricción de las funciones policiales de este cuerpo al ámbito rural, aunque no se ciñesen a él en exclusiva –pues incluyen desde las requisitorias a la vigilancia de montes y caminos forestales, la persecución de delitos de abusos en el pastoreo o las infracciones de las leyes de Pesca y Caza y en materia de armas prohibidas–, estos registros revelarían que en el mes de febrero descendería el número de personas

---

<sup>543</sup> R. Cibrián, “Violencia política y crisis democrática: España en 1936, en *Revista de estudios políticos*, nº 6 (noviembre-diciembre de 1978), p. 81-115. Esta autor mide la violencia política en circunscripciones provinciales o electorales cruzando distintos parámetros, en concreto los índices de incidentes, víctimas mortales y violencia global producidos en el periodo citado –este último indicador pesaría cada incidente según el mayor o menor grado de violencia que implicase.

<sup>544</sup> E. González Calleja, “La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, en *La España del Frente Popular. L’Espagne du Front Populaire*, Madrid, Melanges de la Casa de Velázquez, Tomo 41-1 (2011), p. 37-60.



detenidas por la Guardia Civil en la provincia de A Coruña con respecto a los meses de diciembre y enero -89 en diciembre, 90 en enero, 53 en febrero-, niveles que repuntarían y rebasarían los valores citados en los meses de marzo (84), abril (108) y mayo (111).<sup>545</sup> No obstante, como ya se ha dicho, estos últimos delitos no responderían o no tendrían relación directa con la propagación de la violencia política *sensu stricto*, su aumento o disminución si que podría aportar alguna luz acerca de transgresiones de la ley o desafíos del orden vigente asociados a estados o tendencias colectivas de especial agitación o, por otra parte, referirse al desbordamiento de las fuerzas policiales competentes en cada caso.

Como apunte transversal a estos datos, cabría subrayar la oportuna desmitificación realizada por González Calleja tanto del pretendido carácter metropolitano de la violencia política de la denominada primavera “trágica” –un 60 por ciento de las víctimas se habrían producido en las pequeñas localidades o en las denominadas agro-ciudades, espacio esencial en el que se había dirimido el cambio de régimen- como de los desequilibrios en su localización geográfica, pues según esta tesis afectaría a todo el territorio nacional de forma más homogénea de lo pensado hasta el momento.<sup>546</sup>

Es por todo ello, por lo que se deduciría que al antecesor de Pérez Carballo en el Gobierno Civil de A Coruña, José Sánchez Gacio, no le desbordarían en sí las manifestaciones de ese primer pico de violencia política acontecido tras las elecciones del Frente Popular,<sup>547</sup> o cualquier otra razón de política “cotidiana” –las dimisiones de los gobernadores durante la República fueron frecuentes, aunque menos numerosas que en otras épocas-, o al menos no tanto como la certeza de una trama conspiratoria vislumbrada ya a escala local bajo el tentáculo correspondiente de estrategias involucionistas vertebradas a lo largo del país por parte de la cúpula y de la oficialidad militar. Este ruido de sables comenzaría a desarrollarse entre cuarteles, cuartelillos, salones de café y domicilios particulares ya antes de celebrarse las elecciones del 16 de febrero para conjurar un presunto, y un poco más tarde real, triunfo electoral de las izquierdas.

La inicial traducción de la amenaza del ejército en el espacio o demarcación territorial, política y militar de A Coruña, evolucionaria desde planteamientos teóricos nada originales, muy adheridos a la retórica militar tradicional, hacia la intensificación de movimientos de piezas y enlaces tras la victoria del Frente Popular. A veces vinculado sospechosamente a caóticos y ambivalentes actos de agitación falangista e

---

<sup>545</sup> Datos extraídos del *BOGC* de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1936, que contienen, respectivamente, los datos estadísticos de los servicios realizados por los distintos tercios y comandancias de la Guardia Civil en el segundo mes anterior a la publicación de cada uno de los Boletines. Fuente consultada en el Archivo General de la Guardia Civil. Servicio de Estudios Históricos.

<sup>546</sup> E. González Calleja, “La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la España de 1936”, op. cit, p.44-47.

<sup>547</sup> Las siguientes cotas o puntas de intensidad en la evolución de la violencia política en la larga primavera de 1936 se situarían, según los especialistas en esta cuestión, e incluyendo no sólo las acciones con resultado de lesión o fallecimiento de alguno de los implicados: a mediados de marzo (en torno a la ilegalización de Falange) y abril (V Aniversario de la proclamación de la República), principios y finales de mayo (de las celebraciones obreras del Primero de mayo y el bulo de los “caramelos envenenados” a la masacre de Yeste), declinando desde entonces la intensidad de la misma hasta la semana previa al golpe de estado, con los asesinatos ya bien conocidos por todos.

incluso anarquista, preámbulo en marzo de una conspiración planificada por la Guardia Civil y abandonada finalmente por el ejército -ambos actores siempre en sintonía con los vientos que llegaban de Madrid-, el primer coletazo de esta actividad conspirativa militar, más allá de los conciliábulos habituales de los cuartos de banderas, tardaría en concretarse casi dos meses. Lo haría a través de un confuso episodio que bien pudo costarle la vida al nuevo gobernador civil de la provincia, Francisco Pérez Carballo, posesionado de su cargo tan sólo una semana antes de los hechos, y que parece estar conectado de alguna manera con el golpe previsto para el 19 o 20 de abril, abortado a pocas horas de la fecha prevista para su realización por decisión del general Rodríguez del Barrio. Este militar, inspector general del Ejército, estaba vinculado a una de las tramas conspirativas activas contra la República desde enero de 1936, la de la Junta de Generales, precisamente la que acabó por absorber los otros núcleos sediciosos militares y civiles, decididos a acabar con el régimen republicano, y condujo a una parte importante del ejército y a elementos destacados de la sociedad civil al golpe de Estado que provocó la guerra civil.

Según Fernando Puell, las cinco grandes estrategias conspirativas desarrolladas por sectores del Ejército contra la República a lo largo de más de un lustro, prolongación de los enredos iniciales focalizados en torno a las figuras de Goded o Sanjurjo - involucrados de forma activa en una secuencia continua de “amagos” o “quasi golpes de estado”-, hasta el estallido del ensayo definitivo del 18 de julio, serían las siguientes:

-La trama “monárquico-alfonsina”, encabezada por los generales Barrera, Orgaz, Ponte y Miguel de la Herrán e inspiradora de intento fallido de la *Sanjurjada*.

-La “monárquico-tradicionalista”, que contó con la presencia relevante del general José Enrique Varela.

-La “constitucionalista”, liderada por Melquiades Álvarez y Manuel de Burgos y secundada por militares como Goded y Cabanellas o políticos como Lerroux, trama que en 1932 intentó apartar a Azaña del poder, sin llegar a participar en la *Sanjurjada* a causa del relevo de Goded de la jefatura del Estado Mayor Central.

-La organizada por la UME a instancias, sobre todo, del teniente coronel Valentín Galarza y del capitán Bartolomé Barba, apoyados por el núcleo directivo coordinado por el fundador de la misma, el teniente Coronel Emilio Rodríguez Tarduchy, dedicado a tareas de captación y propaganda, en el intento de construir una red de contactos que extendiese el mensaje de sedición y otras visiones de un particular apocalipsis a lo largo de los establecimientos militares del país, sin pretender a corto plazo ningún protagonismo operativo.

-La de la Junta de Generales, que a la postre conseguiría planificar y encauzar el golpe de estado de julio.<sup>548</sup>

---

<sup>548</sup> F. Puell de la Villa, “La trama militar de la conspiración”, en F. Sánchez Pérez (coord.), *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013, p.67-69. Un magnífico retrato de uno de los ángulos más retorcidos en la gestación del golpe definitivo de julio, que contiene un análisis centrado en el papel jugado por Franco en el origen de la sublevación, en A. Viñas, *La conspiración del general Franco u otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada*, Barcelona, Crítica, 2011. Una visión sintética de la sublevación en marcha, en J. Carlos Losada, “La sublevación militar de julio de 1936”, en A. Viñas (ed), *En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil y el franquismo*, Barcelona, Pasado y Presente, 2012, p. 189-206.

La conspiración de la Junta de Generales empezó a gestarse después de que el gobierno de Azaña desbaratase la intentona de Sanjurjo en agosto de 1932 y, tras hibernar sospechosamente durante el bienio rectificador, se reactivó en enero de 1936 ante la previsión de una victoria izquierdista en las urnas, con un abortado proyecto de golpe para el día 19 de febrero, al que no debían ser ajenos ni Franco ni Goded cuando presionaban a Portela Valladares para obligarle a declarar el estado de guerra, horas después de consumarse la victoria al Frente Popular. La significativa reunión del 8 de marzo, verificada en el domicilio del diputado cedista José Delgado, dio la oportunidad a un amplio abanico de militares, ya decididamente antirrepublicanos (Mola, Franco, Goded, Kindelán, Orgaz, Ponte, Saliquet, Fanjul, Villegas Galarza...), de constituir la Junta como tal y entregarle su mando a Sanjurjo, que delegó en Rodríguez del Barrio las nuevas funciones asumidas en aras de coordinar un golpe centrífugo de contornos por definir. Poco más de un mes después, y espoleados los integrantes de esta trama por los sucesos acaecidos en Madrid el 14 de abril, una nueva reunión de éstos, ahora en el domicilio de González Carrasco, orquestó otra improvisada maniobra golpista para la mañana del lunes 20 de abril, intentona suspendida a última hora a instancias de Rodríguez del Barrio. La decisión de este general de abortar el golpe del día 20 pudo deberse a la grave enfermedad que le aquejaba,<sup>549</sup> mientras que otros autores, por el contrario, inciden en otros factores para explicar su cambio de postura, centrados en sus dudas sobre la planificación y ejecución de un plan endeble y poco meditado.

Este proyecto se truncaría finalmente a causa de la propia defección del general Rodríguez del Barrio, el comportamiento vacilante de buena parte de los implicados en el complot, la falta de apoyos suficientes para llevarlo a cabo, la estrecha vigilancia policial sobre los militares complicados en la trama, las medidas punitivas adoptadas por el gobierno y, en última instancia, la movilización de determinadas fuerzas obreras alertadas ante la dimensión que podría adquirir este asunto.<sup>550</sup>

En cualquier caso, el plan acordado el día 17 de abril con la idea de ser ejecutado, como decíamos, el día 20, aunque hay fuentes que barajaban otras fechas entre el 12 y el día citado –con lo que no se podrían descartar tampoco ensayos “paralelos” o “derivaciones” más o menos inconexas-, tendría su eje de actuación en Madrid, ciudad donde se sublevaría Rodríguez del Barrio con el auxilio de Varela. Sin embargo, serían la IV División (González Carrasco en Barcelona) y VI División (Mola en Navarra y Fanjul en Burgos) las encargadas de iniciar la insurrección, mientras que las divisiones II y III se limitarían a secundar a las anteriores y la VIII (La Coruña) actuaría de modo defensivo.<sup>551</sup>

<sup>549</sup> J. Aróstegui, *¿Por qué el 18 de julio?...Y después*, Madrid, Flor del Viento, 2006, p. 139.

<sup>550</sup> J. M. Martínez Bande, *República, conspiración, revolución y alzamiento*, Madrid, Encuentro, 2007; E. González Calleja, *Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República*, Madrid, Alianza, 2011, p. 344; F. Beltrán Guëll, *Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional*, Valladolid, Librería Santarén, 1939, p. 125-26; F. Alía Miranda, *Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República*, Barcelona, Crítica, 2011, p. 80.

<sup>551</sup> E. González Calleja, *Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República...* op. cit, p. 343.

Este es y no otro el contexto en el que se perpetró (más que se proyectó) el intento de asesinato del gobernador Pérez Carballo en el transcurso del intervalo de días referido, y más concretamente entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de abril de 1936. Esta acción, o episodio de un intento sedicioso, surgió de forma espontánea en el marco de una operación a escala nacional cuya ramificación abarcaría el territorio de la VIII División Orgánica (La Coruña) como un movimiento tangencial más en los imaginarios tableros de ajedrez de los golpes de estado diseñados para derrocar al gobierno del Frente Popular, esta vez bajo el paraguas de la Junta de Generales y la dirección del delegado *ex profeso* de Sanjurjo hasta entonces, el general José Rodríguez del Barrio. Esta intentona fue abortada por su propia fragilidad pero constituyó un excelente banco de pruebas para un futuro, más si cabe para el caso de la región militar noroeste debido, como veremos, a la impunidad que, tras los hechos y bajo la jurisdicción del Ejército, se le ofreció a los implicados en la trama ensayada.

Es complejo dilucidar la estructura y composición exacta de la ramificación coruñesa del plan encabezado por el general Rodríguez del Barrio, pero hay suficiente información como para obtener un retrato panorámico de esta. Conectada necesariamente a las células militares que venían operando, o más bien agitándose con especial virulencia, en las distintas guarniciones de la provincia desde el mes de febrero –en este mes se celebró una significativa reunión de oficiales de la Guardia Civil, en la que participaría uno de los colaboradores más controvertidos del gobernador Pérez Carballo, el capitán de la Guardia Civil José Álvarez Ríos-, tendría, al menos en un principio, al capitán de la Guardia Civil José Rañal como inicial valedor. Este oficial fue capaz de ir aglutinando a compañeros de distintas armas en la necesidad de dar un giro por la fuerza a la situación política y social de la provincia y del país, contemplada en términos maniqueos y bastante simplistas.

Antes de seguir el relato de la trama militar coruñesa y sus distintos correlatos o derivaciones, merece la pena detenerse en la traducción de los espejismos reduccionistas enraizados en la mentalidad corporativa de militares y agentes de orden público que conspiraban contra la República, reflejados por un clima de agitación social marcado por la interacción de distintas culturas políticas, que para el caso de A Coruña podemos identificar fácilmente como la primera inquietud y responsabilidad de un gobernador joven, debutante en la magistratura de la máxima autoridad civil de una provincia de alto valor estratégico en la estructura político-administrativa del país.

De hecho, esta visión apocalíptica de la realidad política y social del momento, y de la tensión que se palpaba en las calles de A Coruña en particular, seguida de un abanico de exigencias que el ejército le presentaba al poder político representado por el Gobierno Civil de A Coruña, le fue transmitida al gobernador Pérez Carballo en la tarde del domingo 12 de abril, precisamente el día de su llegada en tren a la ciudad procedente de Madrid. En concreto, el general jefe de la VIII División le llamó por teléfono para informarle del supuesto plan preparado por las fuerzas extremistas de izquierda para teñir de sangre el desfile y las celebraciones organizadas con motivo del quinto aniversario de la proclamación de la República. Salcedo había recibido información reservada, proporcionada por el teniente coronel Tovar y los comandantes Gutiérrez de Soto y Judel, sobre los propósitos de elementos de extrema izquierda que

planeaban un atentado con una camioneta cargada de explosivos y dinamita, que, incluso, contemplaría la inmolación de sus ocupantes. El plan era estrellar el vehículo contra la línea de tropas que iba a desfilar en los Cantones como parte de las celebraciones conmemorativas del 14 de abril, misión suicida que comenzaría con el desplazamiento de aquél por una de las calles perpendiculares a esta importante vía coruñesa. Esta sangrienta acción suicida sería complementada con otras operaciones paralelas o sustitutivas: la colocación de una bomba debajo de la tribuna de autoridades, un desfile paralelo de las denominadas “milicias rojas”, que aprovecharían la confusión reinante para enarbolar la bandera de la anarquía, y, finalmente –y no sabemos si situada a la misma *escala de terror* que las iniciativas precedentes-, la participación de parte del público con el fin de silbar o abuchear el paso de las tropas. Dejando al margen la obviedad y hasta el sarcasmo de que la única de las acciones concretadas al final resultó ser la más factible y, por tanto, la menos cruenta o compleja –una tibia protesta popular contra el ejército durante una fase del desfile-, por no hablar tanto de las escasas posibilidades de llevar a cabo en aquellas circunstancias una operación tan difícil de articular –fuera de una guerra civil soterrada o declarada-, lo cierto es que el general Salcedo adoptó una serie de medidas preventivas, algunas de ellas sugeridas por el influyente Estado Mayor de la VIII División.

La primera, y más importante, la constituyó la visita que Salcedo le hizo al gobernador la noche del domingo 12 de abril,<sup>552</sup> desde luego algo más que un mero gesto de cortesía, a escasas cuarenta y ocho horas del quinto aniversario de la proclamación de la segunda República. En la conversación telefónica previa, mantenida por los máximos representantes del poder militar y civil en la provincia (citada con anterioridad), se acordó celebrar una entrevista personal a las nueve de esa noche, que sirviera al tiempo como primera toma de contacto entre ambos. El general se había ofrecido para visitarle entre las cuatro y las seis de la tarde, pero Pérez Carballo había contraído ya algunos compromisos para entonces.

Salcedo acudió puntual a la cita y durante una hora y cuarto departió amistosamente con el gobernador, espacio de tiempo en el que le expuso la visión del ejército sobre la situación social y política de la provincia y le habló del peligro inminente de graves atentados contra las instituciones y el orden público reflejado en las informaciones obtenidas por sus subordinados de sus respectivos confidentes. El gobernador civil le tranquilizó y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar la calma social en la ciudad en el sentido demandado por el general de la VIII División. Antes de abandonar el edificio del Gobierno Civil, Salcedo tuvo la oportunidad de conocer a la esposa del gobernador, Juana Capdevielle, y de departir de forma distendida con ella cerca de un cuarto de hora.

Al día siguiente, esta vez por teléfono, instaría de nuevo al gobernador a tomar las medidas acordadas, advirtiéndole de que en caso de no hacerlo, él se encargaría en persona de evitar cualquier tipo de incidente con sus tropas y de proceder, si se producía un hipotético ataque armado que causase bajas entre las fuerzas formadas, “con la mayor energía y violencia, repeliendo con el fuego las agresiones”. Una amenaza o, en

---

<sup>552</sup> Archivo del Tribunal Militar de la Región Noroeste (ATMRN), Causa 413/36, fol 104 (v).

realidad, un intento de intimidación en toda regla, más que una advertencia o sugerencia compartida en un plano estrictamente profesional con la autoridad civil correspondiente –aunque debe contextualizarse como el reflejo en la memoria de un reo enfrentado a las acusaciones de sus futuros verdugos, durante la instrucción de la causa militar que se llevaría por delante al general de la VIII División, del relato acerca de un perfecto chivo expiatorio: el gobernador “rebelde”-, que también se podría concretar en el caso de que las milicias socialistas desfilasen a continuación de la guarnición. De concretarse este último supuesto, el general Salcedo “lo impediría a toda costa incluso con la violencia y empleando la acción de las tropas a mi mando”.<sup>553</sup>

Finalmente, el desfile de la mañana del 14 de abril se celebró con cierta normalidad, como reflejaba la prensa del día siguiente,<sup>554</sup> y tanto Salcedo como el gobernador y el alcalde de A Coruña pudieron pasar revista, en automóvil eso sí, a las fuerzas que iban a participar en el desfile, instantes antes de ocupar sus respectivos puestos en la tribuna de autoridades. Así pues, todo aconteció de una forma muy diferente a la prevista en un escenario de violencia y sangre generado por un atentado que nunca sucedió, supuestamente proyectado por extremistas de izquierda. En cambio, si se produjeron algunos silbidos, consecuencia del ambiente enrarecido y agitado que se respiraba en la ciudad por entonces, y la consecuente y exagerada reacción de algunos oficiales situados al pie de la tribuna de autoridades desde la que presenciaban el desfile Salcedo y los representantes del poder civil. Uno de ellos, un capitán de Artillería, desenfundó el sable y le pidió autorización con la mirada al general para intervenir contra los revoltosos, acción desautorizada por Salcedo, circunstancia que fue interpretada como un gesto más de la pulsión antirrepublicana que animaba a la oficialidad asistente al acto. Un poder civil, representado en la figura del nuevo titular del Gobierno Civil, Pérez Carballo, que pudo verificar hasta qué punto podían llegar las presiones del ejército, algo dentro de la normalidad incluso al abrigo del proyecto reformista republicano. Un gobernador recién llegado, que tuvo una recepción áspera por parte del exigido general de la VIII División, Enrique Salcedo, y una parte importante de la oficialidad más cercana a éste, acorde tanto con las maneras rudas de una buena parte de los militares como con los perfiles de la tensa situación social que se vivía en la ciudad.

En cualquier caso, y para enfocar con algo más de perspectiva el relato de la conspiración de abril en la sede de la VIII División, se debe recalcar el hecho de que está se fraguó en los contactos o reuniones acontecidas durante los meses de marzo y abril. A principios de este mes, se llegó incluso a redactar, con la participación del teniente coronel González Vallés –había sido destinado a Madrid recientemente, pero viajó a A Coruña con motivo de la Semana Santa-, un *Plan de defensa de la plaza de La Coruña en caso de alteración del orden público*, que confería un papel protagonista a la Guardia Civil planteada una situación de emergencia social.<sup>555</sup> En éste y anteriores encuentros, y siempre con un ojo puesto en los círculos militares y políticos madrileños

<sup>553</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 105.

<sup>554</sup> *El Ideal Gallego* y *La Voz de Galicia*, 15 de abril de 1936. Como dato significativo, reseñar que *La Voz de Galicia* llevó la noticia a su portada, mientras que el diario conservador prefirió abrió con una oportuna crónica sobre los incidentes ocurridos en el desfile madrileño, que, recordemos, ocasionaron la muerte del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes.

<sup>555</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 440.

más extremistas y decididos a yugular la experiencia republicana, se cambiaban impresiones sobre la marcha de los acontecimientos políticos y se iba definiendo la estrategia a seguir en función de las directrices que emanaban de los diferentes proyectos *operativos* a escala nacional.

En A Coruña, participaron activamente en estos encuentros semi-clandestinos –desde el Gobierno Civil no se era ajeno a las mismas–, entre otros, y bajo el liderazgo inicial del capitán de la Guardia Civil José Rañal (secundado por su compañero de armas y graduación, Gumersindo Varela), los enlaces elegidos por cada cuerpo o unidad involucrados en estos proyectos subversivos: capitanes Ojeda, Castro Caruncho y Ozores (Artillería), Garicano (Jurídico), Román (Ingenieros), Balaca (Asalto) y Garicano (Cuerpo Jurídico) y el comandante de Estado Mayor Fermín Gutiérrez de Soto. A éstos nombres habría que sumar los de los tenientes coroneles de la Guardia Civil Florentino González Vallés y Benito de Haro, mandos verdaderamente comprometidos con las ideas involucionistas. Aunque estos últimos, a causa de su traslado a Madrid, el primero, y de la cautela del segundo ante la presencia en su entorno de los agentes pro gubernamentales –en especial, del comandante del mismo cuerpo Fernando Monasterio–, permanecerían, al igual que otros muchos mandos de la guarnición de A Coruña, en la sombra, aunque alentando decisivamente las veleidades golpistas de sus hombres.<sup>556</sup> La trama fue activada y lastrada al mismo tiempo por la precipitación de algunos oficiales de la Guardia Civil, ante la pasividad y desconfianza mostrada por los mandos del Ejército en la Plaza.

A pesar de que hubo algunos movimientos de tropas durante la noche del 18, combinados con algunos transportes realizados por la Guardia Civil, y la madrugada del 19 de abril, las unidades militares no llegarían a salir a la calle, pues sus mandos esperaban una orden de Madrid que nunca llegaría. Esta orden debía partir de la Junta de Generales (y a su cabeza, el general Rodríguez del Barrio), y transmitirse a través de la cúpula de la VIII División, factor clave en la explicación del fracaso parcial de un episodio que, sin embargo, preludiaría la ofensiva final de julio de ese mismo año.

En síntesis, los hechos se precipitarían cuando el sábado 18 de abril –a finales del mes anterior se había frustrado un intento de sedición por razones no suficientemente claras–, se desplazó a la capital herculina un enlace de Madrid que pidió entrevistarse de forma urgente (el golpe estaba previsto para el día siguiente, domingo 19 de abril), con el capitán de Artillería Eduardo Ozores Arraiz, uno de los elementos más activos en la gestación de este nuevo *putsch* antigubernamental. Este oficial artillero lo convocó e inmediato a una reunión en la Biblioteca del edificio donde tenía la sede la VIII División (edificio de Capitanía), a la que también asistieron bastantes de los enlaces

---

<sup>556</sup> ATMRN, Causa 413/36, (fol.53 y 174 v); “Testimonio del general honorífico de Artillería Eduardo Ozores Arraiz”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T. II, p. 677-79. Es necesario apuntar que tanto Gutiérrez de Soto como Florentino González Vallés no citan el nombre de Ozores al confeccionar la lista de los nombres de los conjurados en estos primeros amagos de golpe de estado. Sin embargo, del relato múltiple de este teatrillo de conspiradores y conspiraciones, sus testimonios y los de otros testigos e implicados, y la propia lógica de los hechos –como se deduce de la propia y “célebre” visita nocturna de los “artilleros” a Salcedo la noche del 19 de abril para rendir cuentas ante el general de la División a instancias del coronel Torrado y del general Iglesias– acaben por situar a Ozores como uno de los protagonistas principales de la militarada de abril.

citados. Trasladada la reunión al propio domicilio del capitán Ozores al detectarse la presencia policial –las autoridades gubernativas, con el gobernador a la cabeza, como veremos a continuación, tenían ya conocimiento de los hechos-, ésta fue interrumpida de nuevo por una llamada en la que el Coronel Jefe del Regimiento de Artillería nº 16, Pedro Torrado, le exigía de forma airada a Ozores que abandonase la misma y acudiera a su presencia de inmediato. Tras cumplir la orden de su jefe, ser interrogado sobre el particular y recibir una primera amonestación, Ozores acompañó hacia las diez y media de esa noche a Torrado y a otros altos mandos artilleros –el entonces comandante Judel y al general Iglesias, éste último de paso en la ciudad- a informar de lo tratado en la reunión al general de la División, Enrique Salcedo Molinuevo.<sup>557</sup>

Sin embargo, parece evidente, tras el examen de las fuentes y testimonios consultados, que Salcedo estaba informado de los pasos dados en la sombra por la oficialidad a su cargo –y no tanto de la totalidad de los nombres de los implicados-, pues ya le había reprochado en varias ocasiones a algunos de sus subordinados su involucración en las reuniones y conciliábulos que se reiteraron desde febrero de ese año, como atestigua el relato del capitán de Artillería Judel, quien afirmó en su declaración, refiriéndose a la actitud del general Salcedo durante la reunión mantenida con Torrado, Iglesias y él mismo, que “el general acabó por perdonar como última vez a los capitanes y haciéndonos responsables a los Jefes de Cuerpo de que ello no se repitiese”.<sup>558</sup> A Salcedo la información le venía, entre otras fuentes, tanto del propio coronel Torrado –al igual que su superior, mantuvo una posición de lealtad medida hacia la República, a la expectativa de las oscilaciones de la balanza hasta los primeros momentos del golpe de julio-, como del comandante de Estado Mayor, Fermín Gutiérrez de Soto, cuyos testimonios en las causas analizadas resultan clarificadores por ser uno de los conspiradores más decididos y capaz de influir en las decisiones de Salcedo. Entre el 18 y 19 de abril, el general decretaría, en función de los análisis realizados por sus hombres de confianza, una serie de medidas de protección de los establecimientos militares de la guarnición coruñesa y de acuartelamiento de una parte de la oficialidad, que fueron inspiradas (y firmadas) por el Jefe de estado Mayor de la División, el teniente Coronel Tovar.<sup>559</sup>

Paralelamente, y en estrecha conexión con los acontecimientos narrados más arriba, muchas de los oficiales de los cuerpos militares y policiales provinciales involucrados en la trama –Ejército, Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad (incluida la sección de Asalto, capitán Balaca)-, esperaban una llamada de Madrid que sobre la una de la madrugada transmitiera la orden de “echarse a la calle” a las diferentes unidades implicadas, señal que, finalmente, no se produjo, pues el único aviso telefónico sobre este particular llegó desde Capitanía y ordenó el aplazamiento *sine die* del plan previsto.<sup>560</sup> La conexión de la trama coruñesa con el núcleo conspirador madrileño, aglutinado en torno a la Junta de Generales y al general Rodríguez del Barrio, es claro –

<sup>557</sup> ATMRN. Causa 413/36, fol. 41-42.

<sup>558</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol 162.

<sup>559</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 72.

<sup>560</sup> AtMRN, Causas 613/37, fol. 177; y 1169/37, fol 80 v.



a propuesta del general Varela, en la reunión celebrada en marzo en el domicilio del diputado cedista José Delgado, recordemos, se había apostado por un plan centrífugo-<sup>561</sup> y los enlaces que transmitían noticias de Madrid determinaban los pasos a seguir y marcaban la pauta de los organizadores de la sublevación en A Coruña.<sup>562</sup>

Aplazada, pues, la sublevación desde el punto de vista del ejército, un grupo de oficiales de la Guardia Civil, liderados por el capitán Rañal, decidió seguir adelante con el plan a su modo y manera. Y este proyecto inacabado, por otra parte, faltó de la suficiente concreción, tendría como eje primordial la toma del Gobierno Civil y la neutralización –o el asesinato, según se mire- de la máxima autoridad civil de la provincia.

Así pues, algunos oficiales de la Guardia Civil trataron de cumplir con la parte del plan que les concernía, sin esperar a la señal convenida que, desde Madrid, pondría en marcha al conjunto de la guarnición coruñesa y a las fuerzas de orden público.

El *Plan de defensa de la ciudad de La Coruña en caso de alteración de orden público*, mencionado anteriormente, especificaba que la Guardia Civil sería la encargada de iniciar el operativo mediante la toma de edificios estratégicos de la ciudad como la Fábrica de luz –incluyendo los distintos transformadores de corriente eléctrica-, Depósito de la Compañía de agua, los edificios de la Telefónica, Correos y Telégrafos y el propio Gobierno Civil, mientras que los Carabineros veían restringida su función a la custodia de la Delegación Provincial de Hacienda y los bancos de la ciudad.

No parece haber duda de que su objetivo fundamental –y el primero en el orden de ejecución- sería el de ocupar por la fuerza el Gobierno Civil, eliminando en el acto al gobernador Pérez Carballo, esquema que se repetiría en julio con éxito y mayor contundencia si cabe. El hecho de que la estratagema empleada fuese improvisada –y francamente chapucera, permítasenos la expresión a pesar de la significación dramática de este nuevo episodio de insubordinación frente al poder civil-, no en vano el mismo guardia Albino Torre confesó que antes de pisar el cuartel, no sabía nada de la conspiración de la que empezaría desde entonces a formar parte, nos habla de un error claro de precipitación. Por no hablar de la descoordinación latente entre los distintos actores corporativos implicados y la tendencia al automatismo de algunos de los mandos de la Guardia Civil. Mandos que se impacientaron y decidieron actuar por su cuenta y ejecutar la parte del plan que les correspondería sobre el papel, basándose en los impulsos del capitán Rañal, trascendiendo cualquier análisis o cálculo de probabilidades mínimamente racional al prescindir de sus hipotéticos socios militares en el plan trazado para hacerse con la plaza de A Coruña.

La ocasión se la brindaría la presencia accidental en la Comandancia de este cuerpo en la ciudad de A Coruña del guardia Albino Torre, ordenanza del Gobierno Civil, quien a las diez y media de la noche del sábado 18 de abril había sido requerido en su domicilio por el secretario del Pérez Carballo, quien lo llamó por teléfono para ordenarle que trasladase al citado edificio un oficio firmado por el gobernador civil. Personado en la Comandancia de este Cuerpo, fue interceptado en los pasillos por el

<sup>561</sup> F. Puell de la Villa, “La trama militar de la conspiración”, en A. Viñas (Ed), *Los mitos del 18 de julio*, op. cit, p. 71.

<sup>562</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 70.

capitán Rañal, que actuaba en compañía del teniente Aranguren, y llevado a un despacho para mayor privacidad. En ese punto, Rañal le informó de que esa noche se iba a dar un golpe de estado y le habló sobre la función primordial de la Guardia Civil en su desarrollo -sería la encargada de ocupar el Gobierno Civil-, dándole a continuación órdenes tajantes para que se presentase con urgencia en su puesto y se mantuviese vigilante, a la espera de la ocasión propicia -en este caso, el ruido provocado por la irrupción de los asaltantes en el edificio- para “cargarse” a Pérez Carballo. En una segunda declaración, el guardia Torre afirmaría que, a instancias del teniente Aranguren, el capitán Rañal habría rectificado su primera orden (la que le impelía a eliminar físicamente a Pérez Carballo por su propia mano), para pedirle, en su lugar, que encañonase al gobernador y a los presentes en su despacho y esperase a que la fuerza ocupante se encargasen del asunto.<sup>563</sup>

De la misma forma, obtuvo del atribulado guardia datos sobre el personal de seguridad que estaba de guardia o se encontraba esa noche en el Gobierno Civil, preguntando con especial interés si entre ellos figuraba el capitán de Asalto Patiño, quien junto a su superior, el comandante Aizpuru -los problemas en el seno del Cuerpo de Seguridad enfrentaban a las compañías dirigidas por los capitanes Balaca y Patiño-,<sup>564</sup> y el mando de la Guardia Civil Fernando Monasterio, se revelaban como los militares más leales a la República de cuantos integraban las plantillas de los distintos cuerpos policiales en A Coruña.

Esta iniciativa golpista estaba condenada al fracaso por su defectuosa planificación o su ejecución asimétrica y parcial y, por lo tanto, no fructificó. Además, el guardia Albino Torre, en lugar de dirigirse al Gobierno Civil corrió despavorido en busca de su familia y, horas más tarde, fingió o sufrió realmente un ataque de nervios que, regresado al cuartel, no le libró de una estancia de tan sólo unas horas en los calabozos, culpado por el capitán Rañal de ser el causante del fracaso de la conspiración en la ciudad Herculina.

Así pues, las fuerzas de la Guardia Civil no llegaron a salir a la calle, a excepción de algunas salidas puntuales y bastante sospechosas de algunos vehículos del cuerpo, permaneciendo acuarteladas, eso sí, desde la orden dada por el teniente coronel Benito de Haro Lumbreras, primer jefe de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, durante la tarde del sábado 18. Haro, en su declaración en la causa instruida al efecto, recalcó que, debido al estado de alarma constante vivido en aquellos días, dictaba órdenes de acuartelamiento casi todos los días. En el mismo lugar, esto en aras de justificar su actuación personal, alegó que el lunes 13 de abril le había pedido autorización al gobernador civil para establecer controles a la entrada de la ciudad en previsión del ataque con explosivos que se temía iba a ocurrir en el desfile del día siguiente, solicitud denegada por Pérez Carballo, partidario del establecimiento de patrullas en las calles adyacentes al lugar indicado y nada proclive a “producir alarmas por exhibición de fuerzas”, con lo que se aferró al argumento de una acción preventiva contra una acción revolucionaria izquierdista destinada a estallar la noche en cuestión.

<sup>563</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 16 y 100.

<sup>564</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 56.

Posiblemente para compensar la balanza, y en función de un cálculo político muy conveniente para sus intereses, también aludió a su preocupación por la agitación de elementos “fascistas” tras las últimas detenciones de algunos de sus correligionarios, ordenadas por el gobernador Pérez Carballo, para explicar su adhesión al intento de golpe de estado.<sup>565</sup>

Por su parte, el capitán de la Guardia Civil Rañal, algo más que la mano derecha del teniente coronel Haro en este sainete, y por idénticas razones que su jefe, citó los nombres de los mandos de Asalto Patiño y Aizpuru, y como no al comandante de la Guardia Civil Monasterio, como los promotores de ese pretendido movimiento comunista que esa noche trataría de apoderarse del Gobierno Civil, plan del que, según el capitán de Ingenieros Román, tenía conocimiento la prensa portuguesa.<sup>566</sup> Movimiento extremista, comunista, marxista o revolucionario -cualquiera de estas denominaciones les era válida o familiar a los conspiradores- que la noche del 18 de abril se granjearía la *colaboración* del propio gobernador civil de A Coruña, pues Pérez Carballo habría ordenado la instalación de ametralladoras procedentes del grupo de Asalto en el Gobierno Civil y alejado al capitán Balaca, también de Asalto, de la plaza, enviándolo a Ferrol en misión especial, si nos atenemos a la particular versión de los hechos aportada a la causa 413/36 por el comandante de Estado Mayor Fermín Gutiérrez de Soto. Naturalmente, estas acusaciones vertidas contra el gobernador para resaltar su supuesta connivencia con una acechante revolución marxista traducían una consigna acordada para enturbiar los hechos y, de paso, manchar el nombre de la autoridad civil de la provincia.<sup>567</sup>

En este punto, debemos subrayar que en la misma declaración del teniente coronel Haro se afirmaba que en los días previos y durante el fracasado intento del 19 de abril, no informó al gobernador civil de las decisiones operativas adoptadas porque éste no tenía derecho a conocer, atendiendo al reglamento del Cuerpo, las “interioridades” del funcionamiento interno de la Guardia Civil y señalaba que la tarde de ese mismo día Pérez Carballo le llamó para hablarle de una conducción de falangistas detenidos que debía realizar la Guardia Civil.<sup>568</sup>

Así pues, nada ocurrió en realidad la madrugada del domingo 19 de abril ni en A Coruña ni en el resto del país, debido, fundamentalmente, a que el núcleo conspirativo dirigido por el General Rodríguez del Barrio en Madrid abortó la operación por las razones explicadas anteriormente, de entre las cuales la más plausible parece ser la conciencia que los conjurados tenían, a través de sus infiltraciones en Presidencia y en la Dirección General de Seguridad, del conocimiento de sus planes de actuación por parte del gobierno republicano y sus servicios de información.<sup>569</sup>

<sup>565</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 5, 20 v, 21.

<sup>566</sup> Ibid. fol. 6 v (declaraciones del capitán Rañal) y 32 (Ezequiel Román, capitán de Ingenieros, cita la noticia aparecida en un periódico portugués, que afirma pudo contrastar con la confidencia de un obrero, informando a continuación de todo ello al propio Rañal).

<sup>567</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 70 v.

<sup>568</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 21.

<sup>569</sup> J. Simeón Vidarte, *Todos fuimos culpables*, México, FCE, 1973, p. 99. Este autor recuerda que el golpe se iba a dar “hacia el 20 de abril”.

En el caso coruñés, y por extensión, en el de la globalidad del territorio abarcado por la jurisdicción militar de la VIII División, existe cierta unanimidad en que la actuación del comandante de la Guardia Civil, Fernando Monasterio, fue clave para conjurar la conspiración urdida por militares, guardias civiles y agentes de la Sección de Asalto del Cuerpo de Seguridad.<sup>570</sup> Lo que resulta menos verosímil es que la información que Monasterio poseía procediese del testimonio de Albino Torre, por una cuestión de tiempos, fundamentalmente, pues todo parece indicar que, de ser así las cosas, el contacto entre Monasterio y Albino Torre fue posterior a los hechos y a la práctica de las primeras diligencias en la instrucción de la causa, y muy probablemente se verificó por personas interpuestas.

Este guardia, además, no conocía ningún detalle del plan que le acabaría involucrando: el secretario del gobernador civil le había llamado por teléfono a su domicilio para pedirle que cumpliera un encargo, por lo que la razón de su presencia en la Comandancia de la Guardia Civil fue, en puridad, azarosa. De no haberse producido ésta comunicación telefónica, se habría ahorrado un serio contratiempo, por no hablar de la dificultad que entrañaba una elección meditada de su nombre en cualquiera de los sentidos, debido a sus antecedentes de inestabilidad nerviosa.

Sin embargo, sí parece derivarse de la estrecha relación de Monasterio con la Inspección General de la Guardia Civil –en breve marcharía a Madrid destinado a una de las vacantes de este órgano, dirigida entonces por el general Pozas–, una decidida intervención del comandante en el proceso de investigación de los hechos acontecidos en la noche del 18 al 19 de abril (conoció también desde muy cerca, e informó de ello en tiempo real, parte de la secuencia anterior a su desencadenamiento), siempre a favor de las autoridades gubernamentales. Y el gobernador civil también tuvo conocimiento de diversos aspectos organizativos de esta trama por esa fuente, desde luego, aunque para enfrentarse al complot con el que le había recibido la guarnición militar y la Guardia Civil de A Coruña tenía, asimismo, otras armas o recursos de información, pues lo seguro es que sabía bastante de la agitación cuartelaria que presagiaba un movimiento de carácter fascista, como le manifestó al comandante de la Guardia Civil, Álvarez Rios, estrecho colaborador suyo ya por aquellas fechas.<sup>571</sup> Pérez Carballo conocía los movimientos de los golpistas, tenía sus propias fuentes y recursos y, debido a ello, confiaba en la neutralización, de una u otra forma, de un confuso y descoordinado intento de golpe que en A Coruña reflejaba las debilidades del proyecto subversivo articulado por la Junta de Generales desde Madrid.

El propio gobernador civil de La Coruña, Francisco Pérez Carballo, nos dejó su percepción de los hechos en la declaración que prestó ante el Juzgado Especial Militar de la VIII División el 23 de abril de 1936, escasamente tres días después de los hechos, como testigo y una de las posibles víctimas de esta trama. Preguntado por las noticias que tenía para basar la denuncia que el mismo presentó tras el incidente, objeto de la causa 66/36, contestaba lo siguiente, demostrando tanto la posesión de información

---

<sup>570</sup> E. Grandio, *Anos de odio*, op. cit, p. 34; y “Golpe de estado y represión franquista en la provincia de A Coruña... op. cit, p. 28. C Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia*...op. cit, T I, p. 70

<sup>571</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 33.

relevante sobre las intenciones de los militares como su disposición a utilizarla, desde un principio, para desactivar la conspiración en ciernes:

Que venía recibiendo, por razón de mi cargo, referencias de que determinados elementos que se suponían militares celebraban reuniones en circunstancias de lugar y momento que parecían indicar el propósito de pasar inadvertidos para la población y para este gobierno que tiene el deber de velar por el orden constituido.- Según información obtenida del Comandante de la Guardia Civil D. Fernando Monasterio Bustos de la Comandancia de La Coruña, en el cuartel de la Guardia Civil se recibieron en los días anteriores al sábado y domingo numerosas visitas injustificadas de militares. -El viernes por la tarde (se alude al día diecisiete del actual) me llegaron insistentes noticias de que estaba realizándose una de estas reuniones en un lugar tan inusitado y propicio a despertar recelos legítimos como la Granja Avícola, situada fuera del casco de la Ciudad, concurriendo la circunstancia de que por lo intempestivo del día no se comprende bien que tuvieran que hacer en ella un nutrido grupo de personas de la calidad mencionada. Requerí al Sr Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe a mis órdenes de la Comandancia para que hiciera practicar un reconocimiento y comprobase la veracidad de la información por mí recibida. El Teniente Coronel me comunicó pasadas unas horas que sus fuerzas no habían encontrado en la Granja nada anormal.<sup>572</sup>

El comandante Fernando Monasterio, pues, seguía de cerca la marcha de los acontecimientos e informaba de ello tanto al gobernador civil como al gobierno de Madrid, a través de los canales establecidos para ello por la Inspección General de la Guardia Civil, por lo que el relato del guardia Albino Torre sólo hizo que complementar la escena y el desenlace del golpe frustrado con detalles muy concretos, y todo ello a posteriori del fracasado *putsch*. Pero, junto a Monasterio y a Caridad Pita, quien también pasó por la sede de la VIII División la noche del 18 al 19 de abril con claras intenciones indagatorias y, en este caso, probablemente siguiendo instrucciones del gobernador civil, o al menos actuando de acuerdo con esta autoridad –las visitas de Caridad Pita a los cuarteles, bien fuesen éstas diurnas o nocturnas, se efectuarían, durante aquellos meses críticos, también bajo el conocimiento del general de la VIII División, Enrique Salcedo-, había otro informante al que Pérez Carballo conocía bien desde hacía ya un tiempo:

En la madrugada de ese día al siguiente [recordemos, del 18 al 19 de abril] obtenía yo por otro conducto, Presidente de la Juventud Socialista de La Coruña, Don France García [uno de los denominados “hermanos de la lejía”, jóvenes socialistas muy activos en los meses y días anteriores al estallido de la guerra civil] (...) confirmación de la reunión celebrada, y se me reiteró por otras personas a la mañana siguiente. -El sábado durante todo el día me llegaron rumores de que se preparaba un complot de tipo militar. En su mañana el sargento de la Guardia Civil D. Manuel Santos Otero, estuvo en la Secretaría judicial del Sr. Santamaría hablando con los Oficiales para tratar de adquirir pistolas.<sup>573</sup>

Desde luego, no resultaba extraño el hecho de que un gobernador civil con un pasado muy reciente en las Juventudes de AR e IR y en la FUE, acostumbrado además a viajar por Galicia, y en concreto por la provincia de A Coruña –cuando sus responsabilidades profesionales en Madrid se lo permitían-, requiriera o contara con la colaboración estrecha del presidente de la Juventud Socialista de A Coruña y de otros de sus miembros, como Enrique Pena. France García era uno de los denominados *hermanos de la lejía* e integraba una red de informantes que constituiría una especie de

<sup>572</sup> Ibid, fol. 36.

<sup>573</sup> Ibid.

servicio de información paralelo para proteger los intereses de las organizaciones de izquierda coruñesas, en un momento en que, además, las agrupaciones juveniles de los partidos obreros nacionales viraban hacia un frente de convergencia. Cuestión distinta sería sopesar el valor de la información obtenida de fuentes directas cuando no se disponía de mecanismos o recursos suficientes para interpretar, contrastar debidamente y utilizar grandes volúmenes de datos cruzados (de *ruido* difícil de clasificar), o éstos, si existían, estaban pervertidos.

Por otra parte, la visita a la citada secretaría judicial de Santos Otero, el sargento –su hermano, Rodrigo, era teniente del mismo cuerpo y también estaba destinado en la misma Comandancia-, todo un ejemplo de indiscreción y deslealtad, ya apuntaba el estado de ansiedad en el que se traslucen algunas clases y parte de la oficialidad de la Guardia Civil, manifestado horas más tarde en el súbito y forzoso reclutamiento del guardia Albino Torre para el frustrado intento de asesinato del gobernador civil. Continúa el gobernador en su declaración:

–La noche del sábado los rumores parecieron concretarse por cuanto en toda ella se observó movimiento de camiones que transportaban oficiales soldados y paisanos. A las once y media de esa noche D France García (domicilio mencionado) y Don Juan Martínez Fontenla (...), vieron llegar dos camiones a la Plaza de Pontevedra, pertenecientes, uno a Intendencia, y otro, a Artillería; uno de ellos recogió paisanos en dicha plaza; tomaron dichos camiones camino distinto: fue uno hacia las “fortificaciones” y otro hacia el Monte de San Pedro. Tratando de confirmar la noticia envié al Agente de Investigación Don Fernando Freire, y al también Agente Don José Nieto de la plantilla de esta Capital, quienes de una a una y media de la madrugada vieron atravesar de la calle de Rubine a la Plaza de Pontevedra (...) una camioneta de Artillería del segundo de Costa con ocho o diez soldados dentro, armados de mosquetón Esta noticia me fue confirmada así mismo por Don Manuel Vázquez González (...) A las tres de la madrugada se vio por otra persona (...) un coche con Oficiales de la Guardia Civil, bajándose uno de ellos al que advirtieron sus compañeros en alta voz que le esperaban. –De todo este movimiento de tropas no se me dio noticia oficial Tampoco se me dio del acuartelamiento de la Guardia Civil, que sin duda existió, por ningún jefe de ella como era su obligación y como venía teniéndose por costumbre; dicho acuartelamiento se realizó sin conocimiento del Sr. Coronel ni del Sr. Monasterio, Comandante, que así me lo manifiestan (...) el capitán retirado de la Guardia Civil (...) Sr. Penelas (...) recibió esos días visitas numerosas de oficiales y guardias civiles. A las cuatro tuve información de que había cesado el movimiento de automóviles que transportaban militares y me retiré a descansar.

El domingo, al pasar de mi despacho a mi domicilio a las diez y media de la tarde el conserje de servicio me advirtió de la presencia de un número de la Guardia Civil diferente del que ordinariamente prestaba servicio en este gobierno, Albino Torre. Dicho número, llamado Tomás, de la sección de caballería (...) manifestó que Albino estaba enfermo y que el sargento Santos, Comandante del puesto de La Coruña, le había mandado venir a él.<sup>574</sup>

Las quejas del gobernador sobre la actuación de la Guardia Civil se inscribían en la situación de aislamiento en que la mayoría de las autoridades civiles provinciales se encontraban, al tener que lidiar con reglamentos y culturas corporativas obsoletas y muy peligrosas en contextos políticos inestables en los que, además, se trataba de operar cambios legislativos tendentes a la modernización de las fuerzas de orden público.

Las disposiciones de marzo de 1936 que les conferían a los gobernadores civiles competencias exclusivas en materia de orden público redundaron con frecuencia, sin embargo, en perjuicio de éstos. Y el caso de Pérez Carballo no sería distinto, pues trataría de desarrollar ese nuevo rol adquirido frente a la hostilidad de los mandos de la

<sup>574</sup> ATMRN, Causa, 66/36, fol. 36 y 36 v.

Guardia Civil, que no aceptaban de buen grado la dependencia orgánica respecto del poder civil, cuestión en la que se insistirá en breve. Asunto distinto, por su dimensión personal, entre otras cosas, es el que aparece en la segunda parte de la declaración de Pérez Carballo y se refiere a la colaboración que requirió de su propia esposa, Juana Capdevielle, para llevar a cabo una gestión con el fin de esclarecer determinados aspectos de esta nebulosa historia conspirativa:

Pregunté por Albino el domingo por la tarde, enviando a uno de los porteros del gobierno para que se interesara por él. El lunes por la mañana fue mi mujer quien le visitó. Llegó al domicilio de Albino (...) al preguntar por él la mujer de Albino la llevó a la habitación de éste. Manifestó quién era y que iba de parte del Gobernador para saber cómo se encontraba Albino (...) En vista de su estado de postración, no insistió y salió a una habitación contigua con la mujer del enfermo a la que preguntó allí si sabía algo de la causa de la enfermedad de su marido. Habiendo respondido esta mujer que podía preguntar a su marido, volvió mi esposa a entrar en la habitación del enfermo. Advirtiolo Albino y se alteró extraordinariamente. Manifestó entonces mi mujer a la del guardia que antes que excitarle con algún doloroso recuerdo que parecía ser la causa de su alteración renunciaba a saber nada. Ante esta declaración, la mujer de Albino se mostró dispuesta a referir lo siguiente: El sábado por la noche, a las once aproximadamente, llegó Albino a su casa muy preocupado, y ante las insistentes preguntas de su mujer y su suegro acabo por decir que “el capitán le había mandado que amenazase aquella noche al Sr. Gobernador y que él no lo haría, estando dispuesto a dejarse matar antes que hacerlo”. La mujer y el suegro le animaron en esta actitud y decidieron todos que se metiera en la cama y se diera por enfermo para no ir al cuartel. Hacia las dos de la madrugada, vino un coche de la Comandancia en varios guardias civiles que llamaron desde abajo. Contestó el suegro diciendo que Albino estaba enfermo. Hicieron ademán de marcharse, pero volvió uno y subió, habló con el guardia Albino, ignorando la familia la conversación, y acabaron por marcharse sin él, Media hora más tarde volvió el coche, esta vez con varios guardias y un sargento quien rudamente ordenó se abriera la puerta, subiendo a la habitación de Albino cuya puerta cerraron. Al través de los cristales, la familia pudo ver que el sargento daba empujones al muchacho para hacerle salir del lecho. Le hicieron vestirse (...) metieron a Albino en el coche y se lo llevaron. La mujer no sabía más. Al día siguiente por la tarde, habían traído a su marido en el estao de excitación en que mi esposa le encontraba.

Pero la colaboración de la esposa del gobernador civil en este turbio asunto no acababa ahí. Juana Capdevielle hizo el martes 21 de abril una segunda visita al domicilio del guardia Albino Torre que denotaba, más que un interés por solapar, entrometerse o interferir en los asuntos o responsabilidades propias del cargo que desempeñaba Pérez Carballo, la posición vulnerable, rodeada de incertidumbre, de éste ante la presión ejercida por el importante núcleo sedicente incrustado entre las fuerzas del orden y el ejército radicadas en la provincia de A Coruña, que iba a sobrevivir casi intacto, sobre todo sus enlaces, tras los sucesos de abril. Su aislamiento -percibido con nitidez desde las filas de los conspiradores, que en los días críticos de julio reforzaron su conciencia de las discrepancias entre Salcedo y el gobernador civil y de los escasos apoyos en que éste podía confiar, reducidos a algunos guardias de Asalto, como escribía Silva Ferreiro-,<sup>575</sup> comprensible, en cierto modo, desde el punto de vista de su accidentado y reciente estreno al frente del Gobierno Civil, le forzaba a actuar con sigilo y la desconfianza lógica de las horas inmediatamente posteriores al movimiento frustrado en la madrugada del 19 de abril. En su esposa, desde luego, podía confiar para desviar la atención de los conspiradores, que estaba enfocada sobre su persona y cargo:

---

<sup>575</sup>Véase la valiosa información aportada por un partidario de la sublevación y propagandista de primera hora, en M, Silva Ferreiro, *Galicia y el movimiento nacional*, op. cit, p.39-55.

En una visita posterior que ha hecho mi esposa el martes por la noche, encontró en casa de Albino a los hermanos de éste, Brigada de la Guardia Civil, Don Latino Torre, y número del mismo cuerpo Don Ramiro, y al suegro de Albino, obteniendo de ellos mayores detalles. El Brigada refirió que al llegar el lunes al cuartel se enteró que su hermano estaba en el calabozo y enfermo y tuvo por un guardia una idea de lo que se había intentado hacer la víspera. Hablando entonces con los otros dos brigadas del mismo cuartel les conminó a que en ningún caso consintieran salir a la calle en formación sin enterarse antes de adonde los llevaban. Los deseos del hermano de Albino de que viniera el Médico tropezaron con la oposición (...) de los oficiales, que le impusieron un Médico amigo de ellos hasta que por fin, ante la insistencia y amenaza del hermano de Albino de dar inmediatamente cuenta puntual de todo lo sucedido al Gobernador, accedieron a que Albino fuera a su casa adonde lo llevaron a la hora referida. También tuve ocasión de saber al través de mi esposa que el teniente de la Guardia Civil, Sr. Aranguren estaba presente cuando el capitán Rañal dijo a Albino: “Va a haber un golpe de Estado y eres tú el que tiene que cargarse al Gobernador”. Se concretan así por boca del mismo Albino directamente a su mujer las vagas primeras noticias obtenidas al través de su esposa según las cuales la orden era amenazar al Gobernador. Supo también mi mujer en una cita posterior que cuando el capitán Rañal reprochaba a Albino por no querer hacerlo llamándole traidor y cobarde y le decía que por su culpa había fracasado el golpe en La Coruña, estaban presentes Aranguren y el capitán Ayudante del Coronel, Sr. Duarte, quien se acercó a Rañal y le dijo que no gritara tanto porque se iba a enterar todo el mundo. También dijeron a Albino en relación con el golpe que si ofrecía resistencia el Gobierno Civil la Artillería del Ejército estaba prevenida para cañonearlo. En relación con esta aseveración de Albino están mis noticias de las relaciones entre elementos de la Guardia Civil y militares. Concretamente sé, por Don José Quintas (...) que el Teniente Coronel D. Osvaldo Nevado, del Regimiento nº 8 de Infantería descendió de uno de los camiones que transportaban fuerza y paisanos la noche del sábado, ante su domicilio en la calle de San Andrés. Una última declaración de Albino nos habla de otro tipo de relaciones, a saber: habiendo aludido en el cuartel de la Guardia Civil alguien a la dificultad de que, por haber de ir Albino enseguida de cenar al Gobierno en cumplimiento de orden recibida del Gobernador, precedería a los jefes de la Guardia Civil que pensaban presentarse después, con lo que, encontrándose éstos solos ante la puerta, no se la franquearían las fuerzas de Seguridad, de guardia en el Gobierno, hubo quien tranquilizó al que exponía la dificultad diciendo que “llevarían uno de Asalto”.

Por el conductor del coche de la Guardia Civil Francisco Piñeiro, que expresó a mi mujer su pena por el trato que habría recibido Albino, supo ésta que dicho conductor (...) había sido quien fue a buscar a Albino cuando lo recogieron en su domicilio.

Las manifestaciones de mi esposa después de su primera visita que confirmaban al detalle los fundados indicios que yo ya tenía, y quedan anteriormente relatados, me deidieron a dar conocimiento al Gobierno y a los Comandantes de la Guardia Civil Sres Álvarez Ríos y Monasterio que se encontraban en la Capital y a participarlo a Pontevedra donde se encontraba el Coronel del Tercio para hacerle venir.

En cuanto a la tercera pregunta que se me hace [se le requiere, de una forma un tanto retórica, para que “diga cuanto directamente sepa sobre el particular”] he de advertir que por las especiales condiciones de trabajo del Gobernador, realizados siempre desde su despacho oficial, no he tenido ni podía tener más conocimiento directo que el del cambio del Guardia Civil que presta servicio a mis órdenes. Más noticias directas las hubiera tenido desgraciadamente en el triste caso de haberse realizado la intentona. Las demás noticias son siempre de tipo informativo, por lo que tiene gran importancia la evacuación de las citas personales que se contienen en esta certificación sino estuvieran ya suficientemente probadas por otros caminos a juicio del Juzgado Especial.

Lo que pongo en conocimiento de V. S, al efecto de la evacuación de las preguntas contenidas en el pliego de posiciones que se me ha remitido.

La Coruña, 23 de abril de 1936.

El Gobernador civil.<sup>576</sup>

<sup>576</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol 36 v-37.

Las tres preguntas que se le formularon a Pérez Carballo y que son origen del escrito remitido por el gobernador civil al Juez instructor de esta causa, en ATMRN, Causa 66/36. fol. 35.



El conjunto de la declaración prestada por el gobernador civil de A Coruña ante el juez especial encargado de instruir la causa abierta contra los conspiradores en A Coruña –y este último fragmento resulta especialmente significativo–, corrobora nuestra hipótesis sobre las razones del fracaso del golpe en A Coruña. En síntesis, éstas no derivarían únicamente de la importancia y eficacia de una fuente de información, sino de una combinación entre el conocimiento que de los hechos tenía el gobernador civil de A Coruña –le llegaron noticias, a nivel local, del comandante Monasterio y del presidente de la Juventud Socialista coruñesa, France García, entre otros, y también desde Madrid, pues gobierno y Junta de generales se controlaban mutuamente– y la precipitación de los mandos de la Guardia Civil involucrados en este asalto a las instituciones republicanas. Éstos no comprendían las excesivas precauciones, dudas y dilaciones manifestadas por las unidades del ejército acantonadas en la ciudad herculina, a la expectativa de una señal que nunca llegaría desde el núcleo vertebrador de la trama en Madrid. En este punto, también es posible que la falta de comunicación entre el Ejército y la Guardia Civil, problema que derivaría tanto de la debilidad del proyecto golpista como de la desconfianza mutua observada entre enlaces y algunos mandos de ambos cuerpos, hiciese el resto para neutralizar la intentona *ab initio*.

Por otra parte, se puede contemplar la hipótesis de E. Grandío en el sentido de considerar A Coruña como la capital de provincia citada por el general Mola en sus reflexiones sobre el fracasado plan de abril –se deduce–, plasmadas en su *Informe Reservado* del 1 de julio, para ejemplificar, de forma bastante críptica, los problemas y dificultades operativas observadas por el núcleo ejecutivo de la conspiración en el desarrollo y desenlace de aquél. En ellas señala, de forma críptica, un lugar donde la actuación de una sola persona, *opuesta a nuestros ideales* –escribía el general golpista– había bastado para conjurar los esfuerzos de *todos los que se hallaban de acuerdo para salvar a la patria*, y cambiar radicalmente la situación prevista a favor de los insurgentes. Y prueba también, desde esta óptica, de que *el ideal no estaba arraigado y que el entusiasmo demostrado era ficticio, caso que no es el único*, o signo de la necesidad, cara al futuro, de *recomendar paciencia a los más exaltados de los agentes conspirativos y detectar con prontitud a los traidores o indiscretos*.<sup>577</sup>

Por ello, no parecería descabellado imputar ese mérito o a la actuación informada de Pérez Carballo o a la labor obstruccionista e investigadora del comandante Monasterio, pues Salcedo se mantuvo a la expectativa, fiel a su costumbre, conocedor de los movimientos previos a la trama finalmente abortada. El general, sin embargo, no informó a las autoridades civiles provinciales, o al gobierno de Madrid, de las anomalías o indicios conspirativos detectados ni, por el contrario, ordenó ningún movimiento de tropas o vehículos, y la mayoría de los conspiradores siguió confiando en él hasta las horas inmediatamente previas al 20 de julio. Así las cosas, la nómina de hipotéticos “traidores oficiales” al *putsch* de abril se agotaría en las figuras del gobernador civil y el comandante de la Guardia Civil, Fernando Monasterio. En relación a este aserto, debe señalarse que en la instrucción de las causas militares originadas por la represión

<sup>577</sup> A. Viñas (coord.), *Los mitos del 18 de julio*, op. cit, p.366-367.

E. Grandío, “Rumores a gritos: ruido de sables contra el Frente Popular (febrero-mayo de 1936), en *Hispania Nova* nº 11 (2003), dossier: *La Segunda República. Nuevas miradas, nuevos enfoques*.

franquista desatada tras el éxito del golpe de estado y el inicio de la guerra civil, el nombre de Pérez Carballo aparece asociado, en la mayoría de los testimonios examinados, a la defensa a ultranza de la República ya desde el mismo inicio en abril de su mandato en el Gobierno Civil. Este valor simbólico de lealtad y compromiso con el régimen republicano –amplificado, a ojos de militares y guardias civiles, por la imagen irreverente de su esposa, Juana Capdevielle-, le convertiría en un buen candidato para revelarse, en su caso, como esa persona opuesta a los ideales antidemocráticos exhibidos por los conspiradores en abril y señalada por Mola, de forma un tanto enigmática, en sus instrucción reservada.

En apoyo de esta hipótesis, puede aducirse tanto el mismo hecho de la precipitación demostrada por la Guardia Civil en sus actos -esto es consecuencia directa de lo anterior-, como la posibilidad que el golpe en A Coruña no fuese proyectado, como una única secuencia, para la noche del 19, sino en varias fases sin una definición cronológica cerrada, extendidas hasta el lunes 20, como apuntan algunos autores, cuestión factual difícil de aclarar de cualquier modo.

Porque en realidad los factores señalados resaltarían las gestiones realizadas por el gobernador durante la madrugada y la tarde-noche del domingo 19 en relación a los movimientos de los golpistas y a la ausencia del guardia Albino de su puesto en el gobierno civil, que, entre otras, llevaron a su esposa al domicilio de éste para cumplir una misión indagatoria específica. Aceptadas estas premisas, la actuación del gobernador civil de A Coruña en los días anteriores y durante el episodio descrito (o de sus más directos colaboradores), le habría servido a Mola como un elemento importante, en su naturaleza de precedente fallido, para reformular una especie de pedagogía de urgencia, destinada a pulir la estrategia que se debía desplegar para derrocar al gobierno de la República.

En todo caso, si A Coruña no fuese esa capital de provincia referenciada por Mola, si tenía que ser forzosamente una de las ciudades en las que meditaba cuando en el informe citado se revelaba la existencia de más casos análogos. Ángulo desde el que se puede reforzar la argumentación esbozada sobre la posible identidad de esa persona que derribó el plan golpista en aquel lugar específico, pues la voluntad y la perseverancia demostradas, en la medida de sus posibilidades, por Pérez Carballo en el proceso de neutralización del golpe interpretado de forma *sui generis* por la Guardia Civil y, después, tras el fracaso de la intentona y durante la instrucción de la causa militar correspondiente, en la persecución de los implicados en los sucesos de abril -o de las líneas subversivas conectadas durante los preparativos que convergieron en el golpe definitivo de julio-, no parecen en absoluto dudosas y tampoco levantarían, precisamente, los elogios de los conspiradores y sus jefes. Del mismo modo, el estigma de Juana Capdevielle tras la capciosa interpretación de su rol en el esclarecimiento de los hechos, difundida entre militares, guardias civiles y elementos derechistas de la provincia, iría en este sentido y ayudaría a sobredimensionar la figura del gobernador (y de su esposa) a ojos de los integrantes de la trama involucionista gallega y, quizá, del propio Mola.

Hasta tal punto se asoció la figura del joven gobernador civil con la defensa de la legalidad republicana y la desarticulación del complot previsto para la noche del 18 al

19 de abril, que más de un año después de los hechos, a finales de agosto de 1937, el propio Fernando Monasterio, -a esas alturas teniente coronel de la Guardia Nacional Republicana y jefe de este Cuerpo en Valencia-, destacaba como mérito personal, en el contexto de una solicitud de traslado al Cuerpo de Seguridad cursada al efecto, el hecho de que “antes del actual movimiento faccioso, se coadyuvó intensamente, con el Gobernador Civil de La Coruña Francisco Pérez Carballo, a impedir y corregir el intento de rebelión, que, por parte de la Guardia Civil y la guarnición de aquella ciudad, se llevó a efecto el 18 de abril de 1936, por cuyo delito se instruyó un sumario militar”.<sup>578</sup>

Como apunte transversal a este testimonio –que refuerza de manera trascendental la línea argumental defendida en estas líneas-, se puede deducir el reconocimiento de este mando de la Guardia Civil de la importancia de la actuación del gobernador Pérez Carballo, al que no le unía más que una relación profesional que comenzó el 12 de abril, una semana escasa antes de los sucesos reseñados, y terminó a finales de ese mismo mes, cuando fue trasladado a la Inspección General de este Cuerpo en Madrid. Un reconocimiento que, desde la óptica contraria a la de Fernando Monasterio, esto es, desde la perspectiva de los rebeldes, pudo alimentar, como ya se ha dicho, la imagen obsesiva o *pedagógica* de un gobernador enemigo del Ejército y la Guardia Civil, y eclipsar a la vez –esto es indudable- la de un funcionario gubernamental decidido a contrarrestar los planes sediciosos de sus mandos, contemplados como la traducción natural de un ideal sesgado y corporativo.

Por otra parte, es conveniente insistir, de nuevo, en que si bien es cierto que el comandante Fernando Monasterio informó a Pérez Carballo de las visitas de militares al cuartel de la Guardia Civil los días anteriores al frustrado golpe de abril, lo hizo antes (y por lo tanto de una manera parcial, hasta donde podía conocer en esos momentos) de poder conocer nada de boca del guardia Albino Torre. Porque Torre le habría referido toda su odisea personal a la esposa del gobernador, Juana Capdevielle, cuando ya habían transcurrido más de veinticuatro horas desde la aparición de este guardia en el cuartel de la Guardia Civil y la espontánea y forzada conversación mantenida con los mandos de este Cuerpo, implicados en la activación de una improvisada y descoordinada toma del Gobierno Civil, capitán Rañal y teniente Aranguren. Esto es importante porque ilumina mejor luces y sombras de la actuación de un joven gobernador civil que, recién incorporado a su nuevo destino, debía avanzar a tientas en un contexto político y social hostil, circunstancia nada extraordinaria para la época, pero sí especialmente significativa por el hecho de que una de las constantes de la labor de Pérez Carballo en el periodo crítico transcurrido hasta el golpe del 20 de julio fue su aislamiento de aquellas personas e instituciones obligadas a prestar su colaboración en el manejo de los asuntos de la provincia.

En especial, se habría distanciado, por unas u otras razones, del ejército y la Guardia Civil, actores sumamente necesarios, esto es obvio, en un trance histórico marcado por la inestabilidad del régimen republicano y la especial agitación de los agentes provocadores o, directamente, sediciosos. Y ese estado de aislamiento, cuya verdadera

---

<sup>578</sup> CDMH, PS-Barcelona, 941/2.

dimensión era en realidad mayor que la percibida o calculada por el gobernador Pérez Carballo, no parecía ya tan común entre los titulares de otros gobiernos civiles españoles que iban a afrontar un mandato en esas fechas siempre al borde del abismo.

Un obstáculo que no desanimaría ni detendría a Pérez Carballo en sus gestiones para conjurar las amenazas que pendían sobre la supervivencia de la República y los problemas del día a día en el Gobierno Civil, como empezó a demostrar antes y después de la intentona de abril y certificó durante la instrucción de la causa relativa a dicha conspiración, en la que su implicación fue muy clara y ciertamente firme, traducida en las presiones ejercidas para conseguir el castigo de los culpables y la adopción de medidas al respecto desde el Ministerio de Gobernación.

Tanto para confirmar el hecho de que Pérez Carballo no confiaba plenamente, ya desde un principio, en los recursos o canales a priori más idóneos para investigar un problema que afectaba a la seguridad del Estado -algo que, desde sus primeros días al frente del Gobierno Civil, tendría, por otra parte, alguna explicación-, como para matizar que su celo en defensa de la legalidad republicana y las instituciones vigentes le podía llevar a asumir cualquier riesgo, lo cierto es que el gobernador civil de A Coruña no dudó en confiarle a su esposa una controvertida misión de enlace, en las visitas efectuadas por ésta al guardia Albino.

Responsabilidad no delegada en función de un supuesto y soterrado ascendente conyugal, sino en la inteligencia de buscar un conducto totalmente seguro para transmitir una información considerada de carácter reservado y urgente. De este modo – y aunque esta proyección fuese demasiado exagerada para un contexto como aquel-, la ayuda prestada por Juana Capdevielle en un asunto oficial de indudable trascendencia, no obstante constituir parte de unas gestiones destinadas a preservar un nivel de confidencialidad, discreción y secreto necesarios dada la cercanía temporal y la magnitud del problema político y militar abordado, empezó a labrar la obsesiva leyenda que le costaría la vida a la mujer del gobernador Pérez Carballo.

Forja de una leyenda, proceso impensable, cuyo segundo episodio se viviría en las horas inmediatas a la sublevación de julio para sembrar las semillas de una memoria que, como estamos viendo, ha contribuido a falsear los verdaderos trazos de una biografía malograda. En esas coordenadas, Juana Capdevielle se convertiría, aunque por razones distintas a las de su marido, enraizadas más bien en la mentalidad atávica con la que los sectores más reaccionarios de la sociedad española concebían la figura de la mujer y su función en la sociedad, en un chivo expiatorio muy agradecido para los militares, que también descargaron o proyectaron sobre ella su frustración por el fracaso de abril.

Esta actitud obsesiva hacia su figura, dirigida también hacia su feminidad, se empezaría a consolidar con la difusión de noticias como la del viaje de Juana Capdevielle a Madrid para informar a Casares Quiroga, entonces ministro de Gobernación, sobre la escaramuza protagonizada por militares y guardia civiles en A Coruña. Al menos, este hecho es cierto y fue conocido por el núcleo de la conspiración coruñesa de primera mano.

A finales de abril, Juana viajó a Madrid por carretera en compañía del guardia Albino y de la mujer del entonces coronel del VI Tercio de Guardia Civil, Brotóns, de

quien desconfiaban los conspiradores por su lealtad hacia el gobierno de la República, conducidos por el chofer del gobernador civil. Del viaje no tuvo conocimiento el teniente coronel Clarés, primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña tras la destitución de Benito de Haro,<sup>579</sup> lo que sugiere la cautela y la discreción con que se planificó, por contradictorio y disonante que pudiera parecer alguno de los extremos del plan. Por otra parte, Juana Capdevielle debía visitar en Madrid al ginecólogo Varela Radío -un prestigioso especialista, profesor de la Universidad Central y diputado republicano galleguista- para controlar el estado de su embarazo, hecho que serviría también, si es que finalmente se consumó esta visita, como pretexto para encubrir la otra razón de su desplazamiento.<sup>580</sup>

De hecho, *La voz de Galicia* publicó en su sección de *Sociedad* la noticia de la salida por carretera hacia Madrid, a las diez y media de la noche del 28 de abril, del gobernador civil, acompañado de su “elegante” esposa, mientras que el diario conservador *El ideal gallego* justificaba el viaje en virtud de la llamada urgente recibida por Pérez Carballo –sin mencionar para nada a su esposa- para asistir a una reunión del Consejo Nacional de IR en que se iba a tratar de las elecciones presidenciales de mayo, a la que, en realidad, no asistió.<sup>581</sup>

Resulta, así mismo, un tanto sospechosa la discrepancia en las noticias publicadas por periódicos que dependían, para este tipo de informaciones, de las notas de prensa dictadas por la misma fuente, el Gobierno Civil. Esta contradicción, sumada a lo declarado por el teniente coronel Clarés –según este testimonio, en el coche viajaban solamente Juana Capdevielle y la mujer del coronel del Tercio, Brotóns, que iba a recoger en Madrid a una sobrina-, o escrito años más tarde de los hechos por Ángel Pérez Carballo, hermano del gobernador civil, nos sitúan en un escenario en el que se observa una clara disonancia entre los testimonios aportados por las fuentes disponibles y la ambigua versión oficial ofrecida por el Gobierno Civil en tiempo real.<sup>582</sup>

De todo ello se infiere una probable maniobra de distracción con la que se pretendería retirar el foco de atención dirigido por los encausados y sus apoyos más directos, y de la guarnición coruñesa en general –a excepción de algunos mandos considerados de confianza-, sobre la actuación del gobernador durante la instrucción de la causa abierta contra el coronel Benito de Haro y el capitán Rañal. Lo cierto es que Pérez Carballo estaba en A Coruña en el momento en que el juez instructor de la causa, el coronel de Artillería César Blasco, elevaba su escrito de conclusiones (martes 28)<sup>583</sup> y, en paralelo, el auditor de la División dictaba el auto de sobreseimiento del proceso seguido contra aquéllos el 30 de abril,<sup>584</sup> tan sólo dos días después de la supuesta marcha del gobernador a Madrid reseñada por el citado diario. Así mismo, hay

<sup>579</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 101.

<sup>580</sup> Entrevista a Carmen Veiga de Bernardo y Juan Pérez- Carballo Veiga. Madrid. 5-2-2008.

<sup>581</sup> *La Voz de Galicia* y *El ideal gallego*, ambos de 29 de abril de 1936.

<sup>582</sup> El testimonio del teniente coronel Clarés en ATMRN, Causa 613/37, fol 101; “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, Gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia*, op. cit, p. 688; Entrevista a Carmen Veiga de Bernardo y Juan Pérez- Carballo Veiga. Madrid, 5 de febrero de 2008.

<sup>583</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 110.

<sup>584</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 116.

constancia de que Pérez Carballo, además de estar relacionado con la instrucción de la causa como denunciante y parte testifical, estuvo presionando al general Salcedo, favorable a la absolución de los oficiales de la Guardia Civil acusados, para que se tomaran medidas contra los implicados en la sublevación.<sup>585</sup>

Más allá de estas consideraciones, el viaje de su esposa a Madrid para informar al gobierno de la República no hacía necesario (ni aconsejable) su desplazamiento. Las presiones del gobernador civil sobre el general Salcedo, titular de la VIII División, calificadas por éste como “muy reiteradas, muy interesadas y muy apremiantes”, se intensificaron el mismo día en que Pérez Carballo tuvo noticia de que el general Salcedo estaba estudiando la causa para emitir un juicio sobre el sobreseimiento decretado por el auditor de la División, al punto de llamar la autoridad civil al jefe de la VIII División de cuatro a seis veces por teléfono en el plazo de media hora.<sup>586</sup>

Este episodio debió de suceder durante las horas transcurridas entre el 30 de abril, fecha en la que el auditor de la División sobreseyó de forma provisional la causa citada, alegando –y contradiciendo, de esa manera, las conclusiones del Juez especial instructor, coronel César Blasco- la poca fiabilidad del testimonio del guardia Albino y la dificultad procesal de probar los propósitos de realizar una acción no consumada, y el 1 de mayo, día en que el auditor de la División telegrafió al comandante militar de Ferrol la orden de libertad de los encausados, teniente coronel Benito de Haro y capitán José Rañal.<sup>587</sup> Salcedo estaba, naturalmente, informado de esta gestión –y Pérez Carballo tendría que haberlo conocido con antelación a su concreción, si nos atenemos a lo declarado por este general-, pues había sido él mismo quien decretó que los procesados fueran puestos en libertad al día siguiente (2 de mayo, aunque la orden efectiva fue enviada la víspera), en todo caso antes de dar su aprobación oficial –y esto es lo importante- al auto de sobreseimiento propuesto por el auditor de la División (4 de mayo de 1936).<sup>588</sup>

Para concentrarse en el proceso judicial abierto, y dado que su intervención en el mismo debía subrayar la contribución del Gobierno Civil de A Coruña a la estabilidad de la República en Galicia –así como para no delatar, con toda probabilidad, su presencia discreta en la ciudad-, Pérez Carballo delegaría en el secretario oficial de esta institución, Fausto Rubín y Puig, la rutina administrativa y burocrática distintiva de algunas de sus funciones, de la que formaba parte la firma de una nota enviada el último de abril al diario *El ideal gallego*, informando sobre la aprobación de los reglamentos de varias asociaciones de diversa naturaleza.<sup>589</sup>

Lo importante del caso para nuestro trabajo, estribaría en que esta cadena de hechos demostraría tanto la decidida postura del gobernador civil de A Coruña en aras de la depuración de responsabilidades por el incidente del 19 de abril (el intento sedicioso y el proyecto subsidiario de asesinarlo) como la realidad efectiva de su permanencia en A Coruña mientras su esposa, Juana Capdevielle, realizaba gestiones en el sentido

<sup>585</sup> Declaraciones del comandante de Estado Mayor, Fermín Rodríguez de Soto, en ATMRN, Causa 413/36, fol. 74 v-75.

<sup>586</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 106.

<sup>587</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 125.

<sup>588</sup> ATMRN, Causa 66/35, fol. 120.

<sup>589</sup> *El ideal Gallego*, 30 de abril de 1936.

apuntado delante de Casares Quiroga, actos coordinados por una estrategia diseñada por el gobernador civil coruñés con el fin de romper el cerco con que el ejército y la Guardia Civil oprimían –al tratar de controlarla- la actuación del poder civil en la provincia. Cerco que durante la propia instrucción de la causa 66/36 se había cernido sobre él sin ambages, sobre todo cuando una comisión de implicados en el complot descubierto el fin de semana anterior lo visitó en su despacho del Gobierno Civil el jueves 22 de abril. Una visita que pretendía intimidarlo a través de amenazas directas y de una actitud displicente, con el fin último de que Pérez Carballo se retractase o no fuese demasiado lejos con su denuncia. O, al menos, para que suavizase la versión de los hechos que tendría que aportar en su testimonio.<sup>590</sup>

No en vano, el juez especial, César Blanco, le había remitido dos días antes (lunes 20) el cuestionario o interrogatorio sobre el que el gobernador civil debería prestar su declaración, que el gobernador civil Pérez Carballo remitiría a la autoridad judicial militar el jueves 23 de abril, de lo que se deduciría tanto la intención de los golpistas como un posible conocimiento previo de los tiempos y diligencias procesales.<sup>591</sup>

La diligencia previa de información abierta por el coronel del Tercio, Juan Vara, con el comandante Monasterio como secretario, a instancias del Inspector general de la Guardia Civil, se había abierto el lunes 20 tras la denuncia del gobernador civil. En esa misma fecha prestaron su primera declaración el teniente coronel Benito de Haro Lumbreras, el teniente Aranguren y el capitán Rañal, por una parte, y el guardia Albino Torre y su hermano, por otra. Las presiones ejercidas por Pérez Carballo, a partir de entonces, para que se depurasen responsabilidades de forma efectiva tendrían una última justificación, entre otros factores, en las amenazas recibidas de parte de los propios acusados, nada reticentes a mostrar todas sus cartas al adversario para amedrentarlo, método a través del que los militares solían “adiestrar” a las autoridades civiles cuando se trataban problemas de orden público. Recordemos las palabras intimidatorias con que el propio general Salcedo advirtió al gobernador civil, el mismo día en que Pérez Carballo llegó a la ciudad Herculina para tomar posesión de su cargo, hasta dónde podía llegar el uso de la fuerza si se producían incidentes graves en el desfile del 14 de abril. Un tipo especial de chantaje político que en tantos casos, durante el periodo republicano, se convirtió en una de las razones principales –excluida la voluntad “inestable” de los ministros de Gobernación de otras épocas- del baile de nombres a cargo de los Gobiernos Civiles españoles, de consecuencias muy graves para la República.

Para mayor coherencia, tanto la responsabilidad del gobernador ante la trascendencia de la trama conspirativa y sus apoyos entre la oficialidad de A Coruña, como el hecho de que el intervalo de tiempo en que se dictó el sobreseimiento de la causa y se produjo el viaje de Juana Capdevielle fue precedido por la elección de compromisarios para las presidenciales del domingo 26 de abril -y contempló igualmente la celebración del primero de mayo, siempre un peligro para el mantenimiento del orden público-, darían especial sentido (por ser motivos añadidos) a la decisión del gobernador civil de

<sup>590</sup> E. Grandío, “Golpe y represión franquista en A Coruña...”, en J. De Juana y J. Prada, *Lo que han hecho en Galicia...* op. cit, p. 28-29.

<sup>591</sup> AtMRN, Causa 66/36, fol. 10-37.

permanecer en A Coruña para vigilar de cerca el desarrollo y resultado de la instrucción de la causa 66/36.

En lo referente al viaje de Juana Capdevielle, de cuya estancia en Madrid no parece haber dudas, se puede afirmar el fracaso de su objetivo esencial, esto es, el intento de convencer a las autoridades republicanas de que debían adoptar medidas excepcionales para encauzar la peligrosa deriva en que parecían atrapados el ejército y la Guardia Civil en el intento de socavar la estabilidad del régimen republicano.

El guardia Albino Torre estuvo en el antedespacho del ministro de Gobernación, Casares Quiroga –que compartió este cargo, en régimen de interinidad desde el 18 de abril al 13 de mayo de 1936, con el de ministro de Obras Públicas-<sup>592</sup> y coincidió con el también guardia civil Francisco Piñeiro, que estaba en Madrid en comisión de servicios. De la visita de Torre al ministerio de Gobernación también tuvo conocimiento el cabo Ángel Fernández, escolta de una conducción de caudales, quien trató de averiguar, en su conversación con aquél, el objeto de la visita de uno de los “traidores” (junto al comandante Monasterio) que, a ojos de los conspiradores, hicieron fracasar la sublevación de abril. En todo caso, la presencia de este testigo en la capital fue irrelevante o, al menos, se limitó a cumplir un papel secundario.<sup>593</sup> Al punto que el “homenaje” o el “premio” esperado para este desafortunado guardia (pronto acabaría en el Manicomio de Conxo), como se deduce de los testimonios de los guardias civiles implicados -recogidos en la causa 613/37- nunca llegó y ni tan siquiera es seguro que llegase a entrevistarse con el ministro para exponerle por sí mismo la secuencia de los hechos.

Por lo tanto, la encargada de transmitirle a Casares Quiroga el relato del proyecto de sublevación del 19 de abril y de sus derivaciones, o de la tensa situación previa que el gobernador Pérez Carballo se había encontrado en A Coruña, marcada por la amenaza latente para la democracia republicana, fue la propia Juana Capdevielle. Como respuesta a su exposición de hechos, obtendría, en principio, un ejercicio de medida autocomplacencia, en el que el ministro minimizaba el valor de lo sucedido y restaba significación a las tramas conspirativas descubiertas hasta entonces en la ciudad galega, según la versión de Ángel Pérez Carballo.<sup>594</sup>

De todos modos, y sin discutir la veracidad del testimonio aportado por el hermano del gobernador civil de A Coruña, resulta extraño que Casares Quiroga negase de plano o despreciase la significación o la trascendencia (y el peligro potencial inherente) de los sucesos acaecidos semana y media antes, pues, al menos en su fuero interno, debía reconocer los síntomas de la evolución de un contrapoder que terminaría por colapsar el proyecto democrático republicano. Sin embargo, otro acento tendrían las formas empleadas o la pose pretendida para transmitir tranquilidad a sus subordinados en los distintos órganos de la administración política republicana y, en especial, a los gobernadores civiles (o, en su caso, a sus emisarios), pues conocía perfectamente los peligros que acechaban a la República y propugnaba una estrategia contemplativa, de

<sup>592</sup> *Gaceta de Madrid*. 18 de abril de 1936.

<sup>593</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 90 v, 98 y 99.

<sup>594</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, Gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, p.688



espera. Esta táctica llevaba aparejada una apelación al uso moderado de la ley –no obstante, los derechos políticos y cívicos fueron recortados por la declaración del estado de alarma durante todo el mandato del Frente Popular- y de la fuerza represiva, en la certeza de que si una de las conjuras activas cristalizaba sería mucho más fácil yugularla o descabezarla si se la dejaba aflorar a la superficie y mostrar todos sus activos militares, civiles y económicos. De esta manera, se evitaría el peligro de las provocaciones que pudieran excitar tanto al ejército, por una parte, como a las fuerzas de la izquierda obrera más exaltada, con especial prevención sobre las renovadas energías de los anarquistas, aunque conviene recordar que éstas, en la primavera-verano de 1936, estaban lejos de traducirse en impulsos revolucionarios similares a los alumbrados con anterioridad a la victoria electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero. La perspectiva de Casares era muy arriesgada -y él mismo lo barruntaba-, pero sus exitosos precedentes (agosto de 1932) le habían conferido tal vez un excesivo aval, también derivado de los abusos de la memoria habituales en la práctica política en situaciones de crisis o transicionales.

Casares Quiroga, en realidad, era perfectamente consciente de la amenaza que se cernía sobre la democracia republicana. Como revelaba en sus memorias José María Varela Rendueles, gobernador civil de Sevilla desde finales de mayo a julio de 1936, el político coruñés permanecía en su despacho hasta altas horas de la madrugada y no se retiraba a descansar hasta pedir o recibir los informes de los gobernadores civiles, proceso en el que exigía y ofrecía concisión, así como escrutaba con celo, actitud compartida con Azaña, cualquier denuncia procedente de un gobernador –o de cualquier otra fuente yuxtapuesta- sobre conductas desleales de militares o tramas conspirativas de cualquier naturaleza y ámbito local o nacional, ignorándolas completamente si no estaban debidamente probadas y justificadas.<sup>595</sup>

Según este razonamiento, no parece muy verosímil la teoría manejada por algunos autores, y por el propio hermano del gobernador Pérez Carballo, en el sentido de atribuir a una posterior visita del teniente coronel González Vallés a Casares Quiroga -que de haberse producido, debió fecharse a mediados o finales de junio- una influencia apreciable en la decisión de Casares Quiroga de desestimar la información documentada que el gobernador le enviaba a través de Juana Capdevielle. Además, González Vallés había sido destituido de su puesto como jefe del parque automovilístico de la Guardia Civil a mediados de abril e ingresado, acto seguido, en la prisión militar de Guadalajara a causa de sus actividades antirrepublicanas -donde permanecería hasta avanzado el mes de junio-, circunstancia que, a priori, lo inhabilitaría para servir como referencia fiable ante Casares, por más que éste pudiera haber confiado en él en un pasado no muy lejano. Un alto mando de la Guardia Civil que sí jugaría un papel esencial en el éxito de la sublevación que estallaría en A Coruña el 20 de julio y en el cruel y alevoso asesinato de Juana Capdevielle, esposa del gobernador Pérez Carballo.

---

<sup>595</sup> J.M. Varela Rendueles, *Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador civil*, Sevilla, Servicio de publicaciones del Ayuntamiento, p. 15 y 99. Contrastar o matizar esta versión, que procede de un colaborador estrecho de Casares, con las reflejadas por Emilio González López (véase, en general, *Memorias de un diputado de las Cortes de la República*, op. cit) o Juan Ruiz-Peinado Vallejo (*Cuando la muerte no quiere*, op. cit).

Bajo este prisma, se entendería la necesidad y la urgencia que, dentro de unos especiales parámetros de absoluto secreto y confidencialidad, animó a Pérez Carballo a enviar a su esposa a Madrid para tratar de convencer en persona al ministro de la Gobernación de la envergadura de la conspiración y de sus poderosos tentáculos en A Coruña, inmunes a las pesquisas coordinadas por las autoridades republicanas y a cualquier intento conciliador ensayado desde el Gobierno Civil o los órganos del poder central.

Un presidente de gobierno, Casares, que ya tendría, antes de la visita de Juana Capdevielle, la versión de Pérez Carballo sobre la marcha de las diferentes tramas conspirativas en Galicia, por medio del teléfono o el telégrafo, pero que se encontraría demasiado confiado, tal vez, en repetir la secuencia de agosto de 1932 y el éxito de la desactivación de la *Sanjurjada* frente a una reedición de un golpe de estado largamente anunciado.

Como es sabido, la proyectada y finalmente no consumada sublevación de abril en A Coruña, reflejo de lo sucedido a nivel nacional, apenas tuvo repercusión para los conjurados en el territorio y circunscripción militar de la VIII División.

Por un lado, tanto el teniente coronel Benito de Haro Lumbreras como el capitán Rañal fueron liberados el 2 de mayo de su breve cautiverio en el castillo de San Felipe de Ferrol, donde habían sido confinados por un auto de prisión provisional, revocado al ser absueltos de las acusaciones que pesaban sobre ellos. Haro permaneció en A Coruña como disponible forzoso, Rañal fue, en cambio, destinado a Pozoblanco.

El resto de los implicados o relacionados directamente con los hechos corrieron, si cabe, mejor suerte (la mayoría ni siquiera fue procesada formalmente), pues aunque se dispusieron algunos traslados –Victoriano Suanzes fue destinado a Calahorra, Gumersindo Varela a Zamora-, buena parte de éstos fueron paralizados o ralentizados por decisión de los propios mandos de la Guardia Civil, caso de los hermanos Santos Otero, que permanecerían en A Coruña -a pesar de haber sido destinados en un principio a Andalucía- y tendrían un papel destacado en la tentativa final de julio. Rodrigo, el teniente, incluso se despacharía con una reacción arrogante y airada ante el comandante Monasterio cuando conoció que iba a ser trasladado a Jaén.<sup>596</sup> Todo un sainete que hablaba del rancio corporativismo imperante en la mentalidad de casta propia del Ejército o las fuerzas del orden españolas de la época.

En definitiva, la estructura de la trama que el ejército y la Guardia Civil habían tejido durante meses en la demarcación de la VIII División sobrevivió casi intacta al fracaso de abril, incluidos la mayoría de los enlaces de las distintas unidades. Situación diferente a la del núcleo central de la conspiración que debía preparar y conducir el proyecto definitivo de golpe de estado a nivel nacional, en el que cambiarían la dirección y algunas pautas operativas y organizativas esenciales –como, por ejemplo, su nueva orientación centrípeta-, modificaciones introducidas por su nuevo director, el general Emilio Mola. Una mala noticia para la República, una pésima noticia para un joven gobernador, que, en su afán legalista y tal vez en su personalidad excesivamente confiada ante los compromisos morales o éticos adquiridos por algunos miembros del

---

<sup>596</sup> E. Grandío, *Anos de odio...*, op. cit, p35-37.

ejército y de las fuerzas del orden, permanecería aislado o demasiado expuesto ante la mayoría de los actores principales de esta tragedia anunciada. También, por distintos motivos y en determinadas ocasiones, se sentiría abandonado o incomprendido ante la pasividad medida del gobierno de Madrid y de su aparato político-administrativo, dedicado a controlar desde muy cerca la evolución de los acontecimientos desde los ámbitos geográficos y competenciales abarcados, a excepción de un muy reducido grupo de colaboradores y contactos militares, policiales y políticos. Una tarea compleja que exigía una capacidad de liderazgo, un nivel de experiencia y una dosis de suerte o de azar difíciles de alcanzar en aquellas coordenadas.

### **Orden público, conflictos laborales, anarquistas...Flujos de política local y provincial.**

En páginas precedentes hemos aportado datos aproximados sobre los índices de violencia política experimentados por la provincia de A Coruña durante el primer semestre de 1936 –centrados en el número de víctimas mortales–, que la alejarían de los niveles alcanzados por los puntos calientes de la geografía española en la primavera de 1936.

Madrid, Sevilla o Albacete -aunque esta última provincia estaba marcada por los sucesos de Yeste, a finales de mayo- presentarían niveles de violencia muy superiores a A Coruña, provincia que se situaría por debajo de la media española, con registros muy próximos a los de Valencia, referencia muy útil para este trabajo. Autores de referencia en esta cuestión como Ramiro Cibrián y Eduardo González Calleja no contemplan el número de heridos o lesionados, los estragos materiales y otras alteraciones del orden público que podrían aportar más luz para delimitar mejor los contornos del fenómeno de la violencia política.<sup>597</sup> Sin embargo, estas referencias y el trabajo realizado sobre fuentes primarias nos permitirían, quizá, afinar más en el ángulo de la repercusión psicológica de las alteraciones de orden público en uno de los periodos más críticos de la historia de España en el siglo XX.

Ahora se sabe que en el periodo citado se produjeron más víctimas entre las filas de los partidos de izquierda, respondiendo en gran parte a una violencia atomizada, revelada en pequeñas reyertas o graves incidentes puntuales (Yeste), y producida no tanto por milicias o formaciones de partido como por las fuerzas de seguridad en virtud, fundamentalmente, de la política represiva dirigida por los gobiernos del Frente Popular. Esta comprobación desmentiría la falacia divulgada por los propagandistas de las fuerzas de la derecha más beligerante en relación a una supuesta inacción del ejecutivo republicano ante un estado de caos y anarquía generalizados. Propaganda que hablaba de una situación social insoportable, generada también desde el poder por una acción contradictoria, mezcla de pasividad y dirigismo maléfico –el genio de la conspiración revolucionaria marxista gestado bajo el paraguas o la desidia

---

<sup>597</sup> R. Cibrián, "Violencia política y crisis democrática. España, 1936", en *Revista de estudios políticos*, nº 6 op. cit, p. 81-115; E. González Calleja, "La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936", en *La España del Frente Popular*, op. cit, p. 37-60.

gubernamental-, cuando lo que sucedía en realidad era, tal vez, la traducción más o menos previsible de una situación de aumento del poder despótico del gobierno.

Poder desplegado a través de sus propios decretos, de la legislación aprobada en las Cortes y del control político y policial compartido con los gobernadores civiles y los alcaldes, no siempre en perfecta sintonía”.<sup>598</sup> Poder “despótico”, que se canalizaría a través, lógicamente, de los vectores políticos gubernamentales en los ámbitos locales (gobernadores, alcaldes, mandos policiales y de la Guardia Civil), investidos en esta materia de una especial autoridad, y de la aplicación, por parte de los gobiernos del Frente Popular, de una legislación restrictiva. De ese modo, se limitaron las libertades de reunión y manifestación de sus adversarios, se coadyuvó a un uso desmesurado o erróneo de la fuerza y se contribuyó con ello a enfatizar la percepción negativa de la crisis política y social afrontada por el gobierno del Frente Popular.

En este punto, parece oportuno aclarar que la aplicación de legislación especial (estructurada en piezas independientes o fragmentada en articulados pertenecientes a diferentes leyes o decretos) y de otras medidas represivas, percibidas hoy en día como nítidamente antidemocráticas o propias de regímenes autoritarios, era entonces perfectamente coherentes en el ámbito del derecho y del funcionamiento interno de las democracias europeas, tanto en las frágiles (la mayoría) como en las más avanzadas, sin que se haga necesario hablar de la estadounidense, que incluso hoy en día alberga verdaderas “joyas” a este respecto.

En este punto, debe incidirse en la necesidad de evitar la proyección del concepto de democracia actual –por otra parte, bastante discutido o, directamente, en quiebra- en el escenario político de los años treinta en Europa y España, en el que la Segunda República constituía un régimen perfectamente homologable –pero aun lastrado por la falta de madurez institucional y de las condiciones socioeconómicas necesarias para un desarrollo sin altibajos- al de las democracias europeas más avanzadas de la época. Dicho de otro modo, y como afirma F. Sánchez Pérez en palabras muy inspiradas, la República fue “una democracia de masas para los parámetros de la época, la más democrática posible entonces, y en sus circunstancias, y dado los problemas que tuvo que afrontar no lo hizo tan mal. Incluso resistió tres años de una guerra claramente desigual”.<sup>599</sup> Este mismo autor nos recuerda, así mismo, que ideas y principios defendidas en los años treinta por la izquierda obrera -la ineficiencia de los derechos políticos sin igualdad de oportunidades, por ejemplo, referencia hoy irrefutable-<sup>600</sup> subrayarían entonces la dificultad intrínseca derivada de la situación política y socioeconómica afrontada por el gobierno y sus delegados provinciales, los gobernadores civiles, de abril a julio de 1936. Situación delicada y compleja, agravada en momentos puntuales, pero en ningún caso insalvable. Contexto sociopolítico que para un gobernador civil de esa época significaba, entre otras cosas, la aplicación de las leyes en su interpretación más rígida posible, guion seguido por otros gobiernos de la República diferentes a los del Frente Popular, sin que entonces se interpusiese la

<sup>598</sup> R. Cruz, *En el nombre del pueblo*, Madrid, Siglo XXI Ed, 2006, p. 335.

<sup>599</sup> F. Sánchez Pérez, “¿Una guerra realmente inevitable?”, en VV.AA, *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013, p. 13.

<sup>600</sup> Ibid, p. 23.

fractura institucional traducida en la defección de servidores del Estado que debían contribuir al sostenimiento de la legalidad vigente.

Una interpretación, esto es revelador, siempre condicionada en un sentido de moderación para no convertir a las organizaciones obreras en enemigas de la República y de su proyecto reformista y, también, por qué no decirlo, para dejarle algún hueco a valores éticos asociados a ideas y concepciones del estado y la sociedad más flexibles, que distinguían a los republicanos de centro-izquierda de la derecha más reaccionaria. Para conseguir ese equilibrio a demasiadas bandas, los gobernadores civiles seguían instrucciones emanadas del gobierno de Madrid con un determinado margen de autonomía en las decisiones a adoptar, a riesgo de perder las riendas del poder local a manos de intereses espurios o de verse desbordado por huelgas, conflictos sociales o intentos de desestabilización procedentes de extremistas de distinto signo.

Y de ese modelo de actuación intervencionista, justificado en buena medida en el contexto de la primavera del 36, se derivaría necesariamente, por otro intrincado sendero, la tentación partidista o la obligación jerárquica de endurecer la interpretación de la norma con que neutralizar o condicionar en lo posible, legal y funcionalmente, la actividad de adversarios u opositores, integrantes algunos de ellos de los propios partidos u organizaciones adheridas al Frente Popular.

Y en la provincia de A Coruña, para hacer frente a todos estos retos en el lugar donde la política perdía su buen nombre (en aras de asegurar la supervivencia del régimen republicano), o eso se pensaba, un gobernador civil debía disponer del apoyo y la colaboración legal y efectiva de las fuerzas de seguridad, recurso con el que Pérez Carballo no pudo contar en la forma debida, auténtico lastre para la importante función desempeñada por el Gobierno Civil en los días críticos de julio de 1936.

En primer lugar -si nos atenemos tanto a un criterio cronológico como a un enfoque administrativo y político-, se observó un progresivo conflicto de competencias entre el poder civil, representado por el gobernador Pérez Carballo, y la Guardia Civil -la invasión de las atribuciones del Instituto armado por parte del gobernador civil, también sería reflejada por los autores profranquistas, por ejemplo Silva Ferreiro-, derivado del empeño de éste en controlar o supervisar, en cada caso, las funciones de mantenimiento del orden público asumidas por aquélla: las peligrosas extralimitaciones derivadas de un peso simbólico hecho tradición no eran menores. Cuestión que afectaba directamente a la regulación de actuaciones y distribución de efectivos de un Instituto militar de carácter policial y, fundamentalmente, a la propia idiosincrasia del Cuerpo, y de sus miembros en su papel de servidores públicos, cuyos mandos se enquistaron en una actitud refractaria ante la más mínima interferencia en lo establecido por el obsoleto reglamento de la Guardia Civil. El problema estribaba en que el gobernador Pérez Carballo trataba de hacer compatible, de encajar en una palabra, la cultura corporativa y el funcionamiento interno de este cuerpo policial, y también de sus correspondientes mecanismos represivos, con la legislación democrática (por lo menos, así era para los parámetros de la época) desarrollada por la República. Algo que significaba, necesariamente, y siempre desde la perspectiva de los mandos de la Guardia Civil, la usurpación de facultades que, de forma reglamentaria, le correspondía desarrollar o ejecutar a los mandos de éste Cuerpo.

Esta invasión de competencias sufrida por la Guardia Civil le producía un gran disgusto a la cúpula de su oficialidad en A Coruña, como relataba el teniente coronel Benito de Haro, jefe de la Comandancia de esta provincia hasta los sucesos de abril y en situación de disponible forzoso desde ese momento, circunstancia personal y profesional que le permitió, paradójicamente, moverse a su antojo por los cuarteles y dependencias militares y policiales de la ciudad durante los meses previos al golpe del 18 de julio. En la declaración prestada durante la instrucción de la causa 413/36, el teniente coronel Haro reconocía haber visitado varias veces al general de la VIII División para quejarse de la actitud del gobernador civil y lograr de Salcedo “el apoyo que el mando superior debe prestar al inferior”. Haro conceptuaba a Pérez Carballo como una figura enfrentada a las autoridades militares de la División, y, para expresar esa posición supuestamente hostil mantenida por esta autoridad civil en relación a los asuntos propios del ejército y de la Guardia Civil, incidía “en la manera poco grata que se presentaba el Gobernador Civil respecto al elemento militar especialmente a la Guardia Civil toda vez que trataba de absorber ciertas facultades del mando”.<sup>601</sup> Facultades cercenadas sólo ocasionalmente, en cualquier caso, que implicaron, por ejemplo, cambios en la regulación del tráfico –corte de carreteras, indagación de carruajes y vehículos-, función encargada al Cuerpo de Seguridad tras el asesinato de Calvo Sotelo cuando era una atribución exclusiva de la Guardia Civil.

Otra interferencia del Gobierno Civil en las funciones o prerrogativas de la Guardia Civil se verificaría -esto es más discutible al no estar clara la naturaleza del suceso que lo origina- en el control de un operativo policial destinado a la localización y detención de los autores de un asesinato múltiple, cometido sobre los ocupantes de un vehículo acribillado en el mes de junio a las afueras de A Coruña. Control expresado en la injerencia del gobernador civil, que por teléfono habría ordenado que no se *extremara mucho los procedimientos* para evitar así las secuelas (huelgas, disturbios) inherentes al hecho de practicar, en aquel momento político, detenciones de individuos considerados como elementos extremistas.

En cualquier caso, de las connotaciones políticas de la investigación y resolución del caso, revelados en su declaración por el teniente coronel Clarés Cruz, jefe de la Comandancia de A Coruña en esas fechas -su relato de la intervención del gobernador civil no aclara si el interés de éste era evitar una actuación *contundente* de la Guardia Civil o impedir en sí la realización de las detenciones de los sospechosos-,<sup>602</sup> se ha hallado un rastro documental un tanto endeble. Se ha registrado un incidente que, por sus características de especial gravedad y su encaje cronológico, podría asemejarse al relatado en los citados términos por este mando de la Guardia Civil (con su correspondiente interpretación), pues implicó el uso de armas de fuego, la pérdida de tres vidas y la huida de los autores del crimen.

La prensa coruñesa de los días posteriores, publicaba la noticia de una agresión armada contra un ómnibus de pasajeros en la carretera de Arteixo a Laracha, ocurrido el lunes 29 de junio de 1936, con el resultado de tres personas muertas por heridas de

<sup>601</sup> ATMRN. Causa 413/36, fol. 423.

<sup>602</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 180.

armas de fuego. Pero hay un matiz importante en este caso que desmentiría un posible móvil político –tampoco los diarios consultados avanzaron teorías en este sentido–, pues uno de los fallecidos, José Freire Caamaño (los dos restantes fueron su hermano y una anciana), estaba implicado, en calidad de acusado, en una causa instruida por un delito de homicidio por imprudencia. Este proceso penal estaba relacionado con un accidente de circulación ocurrido en abril de 1934, cuya vista se había celebrado, precisamente, la mañana de ese mismo lunes 29 de junio. Por este motivo, las investigaciones de las autoridades judiciales apuntaban a un ajuste de cuentas o venganza por parte de personas relacionadas con la víctima del accidente mencionado, descartándose, al menos en principio, un atentado de carácter político.<sup>603</sup>

Y si se utiliza un criterio cuantitativo, el número de víctimas citado por Clarés en su declaración (cuatro, aquí podría incluirse un hipotético cuarto fallecimiento, con el paso de los días, de alguno de los heridos), no se correspondería con los datos aportados por González Calleja para el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 17 de julio de 1936, que para la provincia de A Coruña refleja un total de tres víctimas, una de ellas producida en la capital.<sup>604</sup> En cualquier caso, y de ser el referido el incidente aludido por el teniente coronel Clarés, nada obstaría a que la Guardia Civil explorase la vía “política”, con mayor o menor sesgo tendencioso, o al menos barajase hipótesis paralelas en las que se contemplase el atentado anarcosindicalista, estrategia oscilante que podría haber colisionado con la visión de los hechos sostenida por el juzgado competente y la policía que, desde una perspectiva de una colaboración más fluida con el gobernador civil de la provincia, se inclinarían por otros derroteros. Lo que en este caso no parece verosímil es atribuirle al gobernador civil, como hacía Clarés, la voluntad de proteger a los criminales en aras de una pretendida complicidad política o estratégica con los autores de un atentado supuestamente terrorista.

Otro desencuentro entre la Guardia Civil y el gobernador, en apariencia menor pero muy ilustrativo de cómo iban las cosas entre el Gobierno Civil y la *Benemérita*, tuvo su origen en un curioso incidente ocurrido cuando el gobernador civil y su esposa, que habían viajado a mediados de junio a Santa Uxía de Ribeira, entraron en un café de esta localidad coruñesa y fueron recibidos por las notas y acordes del *Himno de Riego* y la tradicional, y por lo tanto más arraigada en el imaginario republicano, *Marsellesa*.

En ese justo momento, un grupo de jóvenes que estaba jugando al billar, y entre ellos el hijo de un guardia civil adscrito al puesto de Boiro, se manifestaron de forma insolente, desafiante –hicieron ruido ostensible golpeando los tacos contra el suelo– hacia la máxima autoridad provincial y el gesto de cortesía con el que era homenajeado por los responsables del local y su orquesta. Un falso rumor, difundido entre los agentes de la Guardia Civil de la provincia, acusaría a la propia Juana Capdevielle de reprender y multar en persona al hijo de este número –aunque las versiones difieren y los detalles en este tipo de declaraciones se difuminan o realzan a voluntad–, cuando no de incitar a su marido a gestionar el traslado del agente, tensaría un poco más las relaciones entre la autoridad civil y los mandos del Instituto armado.

<sup>603</sup> *La Voz de Galicia*, 1 de julio de 1936 y *El Ideal Gallego*, 30 de junio y 1 de julio de 1936.

<sup>604</sup> E. González Calleja, “La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, op. cit, p. 46.

Todo parece indicar, sin embargo, que el gobernador Pérez Carballo si pudo tratar este asunto y ordenar al teniente coronel Clarés el traslado del padre del joven que cometió la infracción o afrenta reseñada. Fue este mismo mando de la Guardia Civil quien aclaraba, en la declaración prestada en su momento, que el gobernador civil (y nunca su esposa) ya le había pedido el traslado de ese guardia civil, apellidado Casal, poco tiempo después de posesionarse del cargo, es decir, con anterioridad al incidente ocurrido en Ribeira en junio, pues Pérez Carballo conocía su estrecha relación con una influyente persona de derechas de Boiro y lo creía comandante de puesto cuando era un simple número. Comoquiera que los caminos de este guardia, o más bien de su hijo, y del gobernador civil se volvieron a cruzar en Ribeira de la manera relatada más arriba, Pérez Carballo le reiteró la necesidad de tomar medidas contra este agente, Clarés se vio obligado a cumplir sus órdenes y firmar su traslado a Lestedo alrededor del 18 o 20 de junio, decisión que retrasó cuanto pudo.<sup>605</sup> En definitiva, este curioso incidente se suma a las pruebas que revelan tanto las diferencias existentes entre los miembros de la Guardia Civil y el representante del poder civil en la provincia, como la desconfianza mostrada por el gobernador civil en relación a algunos (bastantes) de los efectivos de este Cuerpo, traducida en una constante tarea de vigilancia y depuración de los agentes considerados como sospechosos. Y, para ello, por más sectario que parezca y resulte en realidad, estaría atento a la filiación política y a los contactos personales de sus subordinados.

La situación fue degenerando a medida que se acercaban los días críticos de julio y no mermaban los problemas entre Pérez Carballo y la Guardia Civil con respecto al intento del gobierno republicano y los gobernadores civiles de romper, hasta cierto punto, la hegemonía de la visión corporativa y marcial que el Ejército y las fuerzas de seguridad imponían en el mantenimiento del orden público. Problemas que el gobernador afrontó también, desde su llegada a la ciudad, como se ha dicho, en su relación con el propio general Salcedo, máximo responsable de la VIII División, agravados los días previos a la sublevación de julio. El estallido de las tensiones existentes entre el poder civil y el militar o militarizado –que nunca implicarían un divorcio total con los representantes de estos Cuerpos–, las horas inmediatamente anteriores al golpe, en continuos gestos y muestras de desconfianza y mutuo recelo, contribuiría, de forma definitiva, a que los golpistas se apoderasen de la llave maestra para controlar A Coruña, Galicia y el territorio de la VIII División.

No cabe duda de que la dificultad para entenderse con las autoridades militares y policiales de cada demarcación provincial fue un auténtico quebradero de cabeza para los gobernadores civiles, y no sólo para el joven Pérez Carballo, a quien su inexperiencia no le impidió liderar una resistencia firme, desde la legalidad y su reflejo en la praxis política, a los conspiradores. Y lo fue hasta tal punto que algunos de ellos se vieron obligados a dimitir en las semanas o días previos al golpe, fundamentalmente, por encontrarse aislados y no sentir el aliento del gobierno central para afrontar los problemas derivados de la actitud díscola de las guarniciones de sus respectivas provincias, como por ejemplo el de Granada, el militante de UR, Ernesto Vega

---

<sup>605</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 90, 97 y 100 (en este último, figura la declaración de Clarés al respecto).



Manteca, a quien el Consejo de Ministros aceptó su dimisión el 23 de junio, después de una estancia en el cargo de cerca de dos meses, caracterizada por la tirantez de relaciones con los mandos militares granadinos.<sup>606</sup>

Cuando se habla, con los matices expuestos, de la táctica contemplativa seguida por el gobierno republicano a la hora de afrontar los evidentes planes de involución trazados por importantes sectores del Ejército, se quiere resaltar que en la a veces contradictoria transmisión de órdenes e instrucciones por parte del gobierno (y los órganos centrales de seguridad del Estado republicano) a los gobernadores civiles, alcaldes y funcionarios de distintos cuerpos locales nunca se pretendió que éstos permanecieran cruzados de brazos. En todo caso, esta estrategia apaciguadora –de objetivos claros en un contexto muy cambiante- coadyuvaría a crear un cierto estado de vacilación o duda, cuando no de manifiesto desconcierto, que, por otra parte, podía entonces ser visto como uno de los inevitables gajes del oficio. En palabras de Diego Martínez Barrio:

Eran los ministros de la Gobernación y Guerra quienes avisaban y prevenían a sus subordinados el peligro de una sublevación militar, excitándolos a la adopción de medidas que impidieran o aplastaran el intento y, sin embargo, ellos mismos, más tarde, corregían y castigaban las disposiciones de los funcionarios republicanos. ¡Peregrina manera de ejercer el gobierno, que de un lado enardecía a los conspiradores, seguros de la impunidad, y de otro desalentaba a los órganos subalternos del ministerio, temerosos de incurrir, por exceso de celo, en responsabilidades. Así se explican las inhibiciones y apocamientos de los gobernadores civiles el 17 y 18 de julio. Se les había enseñado prácticamente que la mejor política era cruzarse de brazos, mirándose los respectivos ombligos, que se desvanecieran las tormentas.<sup>607</sup>

Al margen de esta última frase, un tanto desentonada, la afirmación crítica de Martínez Barrio parece acertada en el sentido de señalar la presión bipolar –por otra parte inevitable- a que se sometía a gobernadores civiles, alcaldes y demás autoridades civiles, pues por una parte se les exigía eficacia en labores de inteligencia y represión y, por otra, se fijaba límites estrictos a las gestiones y actuaciones desplegadas, en aras de no prender ninguna mecha susceptible de ser aprovechada por los ideólogos de la conspiración en marcha. Dicho de otro modo, el gobernador Pérez Carballo debía enfrentarse con firmeza y diligencia, pero sin rebasar ninguna línea roja, a la poderosa y activa pinza conformada por falangistas y miembros de la JAP, por un lado, y la renovada energía de los anarquistas coruñeses, la fuerza sindicalista más importante en la ciudad, por otro. Para ello, disponía del tacto suficiente como para neutralizar las amenazas que se cernían sobre el orden público y la seguridad del estado en el ámbito de sus competencias, pero eso no sería suficiente. No había que avivar la espiral o el fuego de las respectivas identidades en pugna, partiendo de la premisa de que la extirpación de los conflictos de raíz no parecía tarea de aquel contexto histórico, y mucho menos de un solo hombre, y aceptando que la hipótesis de trabajo a priori más sólida para derrotar a los conspiradores era seguir la estrategia adoptada con tan buen resultado ofreció en agosto de 1932

Juegos metafóricos traducidos en la realidad de agitación y turbulencias sociales que provenían de las fuerzas o sectores más beligerantes o conflictivos, convergentes en

<sup>606</sup> Informe presentado por Ernesto Vega Manteca a Diego Martínez Barrio, en D. Martínez Barrio, *Memorias...* Barcelona, Planeta, 1983, p.330-334.

<sup>607</sup> Ibid, p. 334.

una más o menos asumida dirección contra el gobierno de la República, que debían ser controlados sin herir determinadas sensibilidades políticas o de *casta*, ni mucho menos mostrar las cartas que se pensaba iba a jugar el poder legalmente constituido llegado el momento. Objetivo que, como es sabido, se frustró tanto para la causa de la República como para la supervivencia física, civil y política de muchos de sus servidores.

Pero para una empresa de esas dimensiones, la estructura político-administrativa del estado debía disponer, en primer lugar, de unas fuerzas de seguridad y de un ejército leales, o al menos no comprometidos en la idea de derrocar el régimen asaltando las instituciones por la fuerza, pues sin esos mimbres ningún diseño estratégico o teórico, ninguna directriz emanada de un órgano político o de la administración civil podría ofrecer garantías de eficacia. Faltaba una organización y articulación moderna, o mejor, suficientemente madura, de los mecanismos que velaban por la seguridad del estado. Si la República era una democracia homologable a las más avanzadas de su tiempo, sus casi inexistentes servicios de inteligencia no se podían compararse con los de éstas. Fallaban los medios, herramientas y procedimientos de inteligencia e información idóneos para un estado democrático moderno y avanzado de la época –la República lo era, a su modo, en muchas otras facetas– y nunca bastaría, por otra parte, con el inestable y muchas veces condicionado apoyo de las organizaciones y fuerzas de la izquierda obrera.

Manos a la obra ya desde los primeros días de su mandato, y bajo la batuta y atenta mirada del ministro de la Gobernación y sus más directos colaboradores en Madrid. Pérez Carballo acometió la labor de control de los grupos de extrema derecha más activos en su intento de desestabilizar el orden público (y obtener de ello evidentes réditos políticos) y, de forma progresiva, ordenó una serie de intervenciones destinadas a tal fin. Entre ellas, las detenciones gubernativas de los elementos más significados de la ilegalizada Falange, que junto a los seguidores de Calvo Sotelo y los japistas ocasionaron alteraciones serias del orden público actuando por propia iniciativa o enfrentándose de manera accidental a anarquistas y extremistas de izquierda, también duchos en esas tácticas de guerrilla urbana o rural.

Conocedor por informaciones recibidas de testigos o informadores de campo – obtuvo datos del complot en sus distintas secuencias, antes y después de los hechos– de que en la trama del 19 de abril había complicados elementos civiles, una parte de ellos se vincularían a la JAP y a Falange, decidió actuar contra ellos, labor en la que contaría con las directrices e instrucciones del ministerio de Gobernación y las referencias generales de la ley y la autoridad judicial en ese momento.

Paradójicamente, y en algún momento durante el bienio rectificador (tal vez unas semanas antes de ser nombrado gobernador civil), elementos de la Falange madrileña, con los que el abogado madrileño había coincidido en las aulas de la facultad de Derecho de la Universidad Central o en los concurridos y heterogéneos salones y tertulias de los cafés madrileños –algunos de ellos, como los hermanos González Canales, eran amigos suyos– habrían intentado cooptarlo para esta organización, oferta desechada de forma inmediata por Pérez Carballo, quien en su vocación de estudiante *fueista* habría evitado que el peso del sectarismo ideológico determinase sus relaciones

personales y, al tiempo, que éstas determinasen sus convicciones políticas o profesionales.<sup>608</sup>

Abriendo un breve paréntesis, cabría decir que el elemento civil de extrema derecha había asistido a reuniones preparatorias del *putsch* de abril y, ya en la madrugada del domingo 19, se incorporaría a un contingente de tropas estacionado en la Plaza de Pontevedra con vistas a ejecutar el plan previsto por los líderes de la conspiración frustrada. A partir de la irrupción de Mola en la dirección de la conspiración a finales de abril, el papel de las organizaciones políticas civiles, desde febrero ya supeditado al ejército en su proyecto “regenerador”, se estructuró rígidamente encuadrándose en el marco de las circunscripciones provinciales.<sup>609</sup>

En definitiva, el gobernador civil dio curso, tanto antes como después de la verificación del fracaso del frustrado golpe de abril, a las detenciones de militantes falangistas y de algunos elementos derechistas de diversa filiación política.<sup>610</sup> En concreto, y como escribe Carlos Fernández Santander, a lo largo del mes de abril ingresó en la cárcel de A Coruña la plana mayor de la Falange local. Nombres como Salas Pombo, Naya Veira, Velasco Calva, Arias Prado, Vidal Verdes, Folla Cisneros, Álvarez de Sotomayor, Camaño, Patiño, Salgado Torres, Colmeiro Laforet y Sanz de Andino se contarían muy pronto entre los reclusos de la cárcel de A Coruña. Pero esta “élite” no tardaría en recobrar la libertad y, a finales de mayo, posaban casi todos los citados ante la cámara de un fotógrafo, al lado de la Torre de Hércules, frente a la prisión donde habían permanecido alrededor de un mes y medio, y muy cerca del lugar donde tras el triunfo de la sublevación se ejecutaría a los prisioneros políticos republicanos y, entre ellos, al propio gobernador Pérez Carballo.<sup>611</sup>

Si bien en A Coruña, como lo fue en el resto de España, la trama civil del golpe de estado desempeñó un papel subordinado al del ejército en la construcción de la trama conspirativa contra la República, no conviene ignorar el papel desempeñado por la JAP y la Falange en la provincia coruñesa y en toda Galicia, muy activos en Santiago de Compostela en los momentos iniciales del golpe de julio y en A Coruña durante las horas que condujeron al fracaso de la intentona de abril.<sup>612</sup> Pero en todo caso, y a lo largo de todo el país, las organizaciones falangistas, derechistas y monárquicas más decididas a acabar con el proyecto reformista de la República, y pese a su inicial fracaso en concretar sus respectivos proyectos involucionistas, continuarían su obsesiva tarea de construcción de una cultura antirrepublicana basada en la divulgación de dos mitos conectados por un lenguaje preñado de connotaciones religiosas y apocalípticas o teñido de un rancio nacionalismo español, según los casos, el de la *ilegitimidad de ejercicio* del gobierno republicano y el del peligro de la *revolución comunista*, cuando no

<sup>608</sup> Entrevista a Juan Pérez-Carballo Veiga y Carmen Veiga de Bernardo. Madrid, 5 de febrero de 2008.

<sup>609</sup> ATMRN, Causa 66/36, fol. 36.

<sup>610</sup> El diario *La Voz de Galicia* de los días 19 y 22 de abril informa de las detenciones de falangistas en Ferrol y Mugardos.

<sup>611</sup> C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, op. cit, TI, p.47.

<sup>612</sup> E. Grandio, “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña”, op. cit, p. 27.

contribuyendo a la financiación de las diferentes tramas conspirativas, cuestión que todavía quedaría por dilucidar.<sup>613</sup>

Para el caso de A Coruña, las visitas a la provincia realizadas por el dirigente monárquico Eugenio Vegas Latapie, a principios de junio, o del líder falangista Manuel Hedilla, poco antes del estallido del golpe, no se limitarían, seguramente, a resolver asuntos menores.<sup>614</sup> Todo ello a pesar de que las directrices trazadas por Mola para las organizaciones civiles que apoyasen el golpe conferían a éstas un papel subordinado a los dictados de los núcleos provinciales de la conspiración militar y circunscrito, en consecuencia, a su ámbito estricto de referencia.

La fuerza del movimiento anarquista en A Coruña y en toda Galicia había aumentado durante la Segunda República, periodo en que su impronta se extendió desde los núcleos urbanos hacia el ámbito rural gallego, fortalecidos los primeros de una manera extraordinaria. En A Coruña, llegó a involucrar en sus organizaciones, como afirma Oscar Freán, aproximadamente a un 15 por ciento de la población total de la ciudad, aunque hay que tener en cuenta que este autor maneja cifras orientativas comprendidas entre los 61,673 habitantes de 1930 y los 92, 189 de 1940 y que difieren de los datos aportados en este trabajo, basados en el Censo de 1930 y el *Anuario estadístico de 1936*. Para Dionisio Pereira y Eliseo Fernández, la CNT coruñesa contaba a la altura de julio de 1936 con cerca de 14.000 afiliados, lo que aumentaría el porcentaje indicado.<sup>615</sup>

En todo caso, y los trabajos de los autores citados lo expresan con claridad, el peso específico de la Federación Local Obrera coruñesa en esta ciudad es muy ostensible, oscilen o no los dígitos unas pocas décimas, habida cuenta de que en A Coruña, a diferencia del resto de las ciudades gallegas, el movimiento obrero estaba capitalizado por los sindicatos anarquistas, hegemónicos en cada sector productivo de la ciudad y adscritos a la FLO. Y éste es un dato indicativo de dónde se encontraba el feudo del movimiento libertario gallego y uno de los referentes geográficos del anarcosindicalismo español.

Si tan importante se revelaba la influencia anarquista en la situación política y social de la ciudad, ésta tenía que reflejarse necesariamente en los resultados electorales de las coaliciones republicanas e izquierdistas en los distintos comicios celebrados en la ciudad durante el periodo republicano. Con el voto anarquista a favor, las candidaturas republicanas coruñesas obtenían excelentes resultados; en su ausencia, se experimentaron fracasos como el de las elecciones a Cortes de noviembre de 1933.

Así las cosas, en las elecciones de 1936 se observó un aumento de votos, con respecto al proceso electoral anterior, que tanto en la ciudad como en la provincia de A Coruña coincidió con el número de votantes necesarios para asegurar la vuelta de los anarquistas a las urnas.<sup>616</sup>

---

<sup>613</sup> A este respecto, véase, fundamentalmente, E. González Calleja, *Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República 1931-1936*, op. cit, en especial 307-388.

<sup>614</sup> C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T I, p. 71.

<sup>615</sup> O. Freán Hernández, *El movimiento libertario en Galicia 1910-1936*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2006, p. 154; E. Fernández y D. Pereira, *O anarquismo na Galiza. Apuntes para una enciclopedia*, Santiago de Compostela, Edicións Positivas, 2004, p. 114-115.

<sup>616</sup> O. Freán Hernández, op. cit, p. 146-147.

En paralelo a lo acontecido a escala nacional, el movimiento anarquista gallego, y la FLO en particular, había visto frustradas muy pronto sus expectativas y se había distanciado nítidamente del proyecto reformista republicano, incorporándose secuencialmente, sobre todo al fin del primer bienio, a los episodios de ese nuevo tipo de gimnasia revolucionaria con que se trató de desestabilizar el régimen burgués que para el anarquismo español significaba la República, especialmente en mayo y diciembre de 1933, meses en los que la Confederación Regional Galaica se incorporaba por primera vez de forma activa y organizada a los movimientos revolucionarios ensayados por la CNT. De los precedentes de los sucesos de julio de 1931 (incidentes anticlericales) y enero de 1932 (huelga general en contra de la aplicación del subsidio de maternidad, dos muertos tras una carga policial), articuladas a nivel comarcal, se pasó a una integración plena en los procesos en marcha por la comité nacional de la CNT.

La huelga general decretada por la Confederación en toda España para los días 9 y 10 de mayo de 1933, desencadenó en A Coruña una serie de incidentes que incluyeron la colación de unos doce artefactos explosivos (sólo cinco de ellos estallaron) en edificios muy significativos y de difícil acceso para los activistas libertarios, como lo eran el Palacio de Justicia, el Municipal y una comisaría de Vigilancia, circunstancia que fue interpretada por los anarquistas, muy oportunamente, para culpar a la policía de haber colocado las bombas con el fin de justificar de ese modo ulteriores acciones represivas.

Más conflictiva resultó la ofensiva anarcosindicalista de diciembre de ese mismo año en A Coruña, donde ya se podía observar una cierta preparación insurreccional, inmediatamente posterior a la derrota de las izquierdas -en la que, como afirmaba Abad de Santillán, la CNT habría arrojado del poder a los responsables de Casas Viejas utilizando el arma política de la abstención-,<sup>617</sup> secuencia a nivel local de un movimiento revolucionario confederal cuyo epicentro se hallaba en Zaragoza.

Comenzó en la noche del día 9 con la colocación de explosivos en varios transformadores de la red eléctrica y el consecuente apagón ocasionado en la mayor parte de la ciudad. Estos ataques contra infraestructuras vitales se reprodujeron en varios puntos de la provincia, pero los sucesos más graves acontecieron en Elviña, localidad cercana a A Coruña (un ataque con bombas de mano a un automóvil de la Guardia de Asalto provocó un muerto y varios heridos ) y Oleiros, donde un centenar de personas ocupó el Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil, cortando las conexiones telefónicas y telegráficas de esta población, y resistió durante horas hasta ser desalojados por la Guardia de Asalto, episodio saldado con la muerte de un miembro del Comité regional de la CRG.<sup>618</sup>

No se puede afirmar que estas dos huelgas significasen una eclosión revolucionaria en toda regla ni que las autoridades fueran incapaces de mantener el orden público, pues no rebasarían, ni a nivel nacional ni en el espacio local, el umbral de “aisladas convulsiones del orden social fácilmente reprimibles”.<sup>619</sup> Este tipo de brotes insurreccionales se inscribirían en una tipología muy diferente de la desarrollada a partir

<sup>617</sup> D. Abad de Santillán, *Por qué perdimos la guerra*, Barcelona, Plaza y Janés, 1977, p. 65.

<sup>618</sup> O. Freán Hernández, op. cit., p. 122-129.

<sup>619</sup> J. Casanova, *Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX*, CSIC, Zaragoza, 2007, p.43.

del 18 de julio, fecha a partir de la cual a la CNT se le abrió la inesperada puerta de la subversión del orden burgués. A este proceso de relativa radicalización en las principales ciudades gallegas, ayudó el hecho de que desde febrero de 1933, la secretaria general de la CRG recayera en el faista José Moreno Torres, quien reemplazaba al moderado José Villaverde, adscrito a la corriente *treintista* y partidario de la Alianza Obrera promovida por la UGT, bajo cuyo mandato (abril de 1931-febrero de 1933) la CRG sumó casi veinte mil nuevos afiliados, alcanzando la cifra de 33.000 cuando Villaverde abandonó su cargo de secretario de la organización.<sup>620</sup> Como dato para la reflexión, apuntar que tras el éxito del golpe de julio en Galicia le fue ofrecida a este último la dirección de los nuevos sindicatos falangistas, oferta rechazada por quien poco después moriría víctima de la represión desatada en Galicia en el verano de 1936.

A partir de la derrota electoral de las izquierdas, y en función también de la presión de un contexto de represión y asfixia de las organizaciones comprometidas en la intentona anarquista de diciembre de 1933, las bases y entidades locales que conformaban tanto la CRG como la FLO tendieron a actuar bajo la perspectiva del Frente Único o Alianza Obrera impulsada por la UGT, con la que la CNT gallega participó en iniciativas sindicales y actos políticos comunes, tendencia desautorizada, finalmente, desde la dirección de la propia CRG.

En estas coordenadas, devino octubre de 1934, un punto de inflexión para acentuar el declive del movimiento anarquista español y gallego, debido al perfil bajo de su participación en las huelgas revolucionarias planteadas contra el gobierno radical-cedista y, en sentido contrario, a la nueva oleada represiva dirigida desde los volubles ejecutivos que se sucedieron hasta la victoria del Frente Popular, cuyo precedente se observó de forma abrupta tras los sucesos protagonizados por los anarquistas en diciembre de 1933. Con respecto a la participación de la CRG en el episodio revolucionario de octubre de 1934, señalar que ésta se comprometió, en la medida de sus posibilidades, mediante huelgas de solidaridad, a establecer una cierta inteligencia entre los distintos sindicatos que la integraban, pero sin llegar a desarrollar un plan conjunto. En A Coruña, concretamente, la FLO anarquista paralizó durante nueve días la actividad laboral en la ciudad, siendo la UGT la que se adelantó en la vuelta a la normalidad en los nueve sectores productivos de la ciudad que controlaba total o parcialmente.<sup>621</sup>

Es a partir de la vuelta del centro-izquierda republicano al poder cuando el movimiento anarquista se revitalizaría de forma progresiva y se orientaría de nuevo hacia el espacio común que estaba construyendo el movimiento obrero, proceso también explicable en la provincia de A Coruña en función de una nueva discrepancia entre la elevación de expectativas y la percepción de la excesiva lentitud de las reformas abordadas por el gobierno republicano, que en algunos asuntos como, por ejemplo, la recomposición de los jurados mixtos resulta perfectamente objetivable ahora y fácil entonces de convertir en un argumento para denunciar la enésima traición burguesa. Pero esta vez, se analizó fríamente el devenir político de la organización durante esos

<sup>620</sup> E. Fernández y D. Pereira, *O anarquismo na Galiza...* op. cit, p. 266-268.

<sup>621</sup> D. Pereira, *A CNT na Galicia*, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994, p. 114.

años, y los dirigentes de la CNT combatieron su desazón, al igual que el conjunto del movimiento obrero, abandonando por un tiempo su tradicional interpretación de la gimnasia revolucionaria y volviendo sus ojos hacia las reivindicaciones de los trabajadores, de sus afiliados, de sus bases, centradas en materia de salarios, reducción del paro, regulación o disminución de horarios y control del proceso de contrataciones y despidos, dejando al margen durante un tiempo la identidad de luchadores permanentes por la revolución.

La CNT coruñesa, representada por la FLO, enfocaba su actuación y adquiría un mayor protagonismo y peso específico en los sectores de la construcción, donde se concentraba el grueso de su afiliación –llegando a un 32% del total en 1932, con unos 3.000 afiliados-, la industria pesquera y de servicios, seguidos por el venido a menos segmento de oficios portuarios y el metalúrgico, de fuerte presencia en la ciudad de Ferrol.

El importante desarrollo urbano experimentado por las ciudades gallegas, y en especial por A Coruña, durante las primeras décadas del siglo XX contribuyó al auge del tejido productivo generado por el ramo de la construcción e, indirectamente, al crecimiento del sindicalismo libertario. Los sindicatos anarquistas de oficio de la construcción más importantes en la ciudad serían los de canteros, carpinteros, pintores, albañiles y peones –este último muy vinculado a la acción directa- y, dada la inestabilidad y precariedad de las condiciones laborales sufridas por los obreros de este gremio, se comprende su tendencia a la radicalización y su completa adhesión a las tácticas anarcosindicalistas.<sup>622</sup>

En segundo lugar, atendiendo a criterios tanto cualitativos como cuantitativos, se encontrarían los sindicatos de la industria pesquera –empacadoras, conserveras, obreros de salazón y escabeche, fogoneros, etc-, que en 1932 alcanzaban la cifra de 2000 afiliados, aproximadamente un 20% de la afiliación anarcosindicalista local.

Por el contrario, los vinculados a la industria de servicios –secciones de comercio, banca, camareros, profesionales liberales, artes escénicas...- habían perdido afiliación durante la Segunda República pero, al igual que los de oficios portuarios, todavía conservaban un peso importante en la actividad sindical coruñesa. También merecerían consideración las sociedades anarcosindicalistas coruñesas activas en el sector de la industria tabaquera y textil.

O. Freán afirma que el número de conflictos huelguísticos convocadas en Galicia por la CNT durante el primer bienio fue de entre cuarenta y cincuenta por año, entre ellos una huelga general en A Coruña, cifra en claro descenso durante el bienio radicalcedista, en especial a partir de octubre de 1934, con alrededor de quince paros, debido a la represión y al debilitamiento del movimiento obrero a partir de esa fecha.

En la misma línea, y lejos de las cifras que implicaría la oleada de huelgas sin precedentes descrita por los partidarios del golpe, entre la victoria del Frente Popular en febrero y el golpe de estado se produjeron una treintena de conflictos promovidos por los sindicatos anarquistas repartidos por toda la geografía gallega. Por su parte, Dionisio Pereira ofrece una cifra similar sobre la conflictividad laboral generada por los

---

<sup>622</sup> O. Freán, *El movimiento libertario en Galicia*, op. cit, p. 120, 121, 124 y 149.

anarquistas gallegos en 1933 y contabiliza 36 huelgas en toda Galicia, 33 de ellas en la provincia de A Coruña -13 en Santiago y otras tantas en A Coruña, dos en Ferrol y cinco en el resto de la provincia-, que se acompañaron con la colocación de 89 artefactos explosivos, la quema de 18 iglesias (produciendo daños parciales o leves en la mayoría de las ocasiones) y la realización de 21 sabotajes, el cuarenta por ciento de todos estos actos asociados a la celebración de huelgas generales.<sup>623</sup>

El valor aproximativo de estas cifras provisionales ayuda a trazar un perfil de un cambio político marcado por la victoria del Frente Popular y desprovisto del aura trágica de un frenesí huelguístico asociado a una violencia casi indescriptible, argüido para teñir de negro la labor de los gobiernos de Azaña y Casares. Un cambio que, eso sí, reactivó la actividad reivindicativa anarcosindicalista en Galicia, proceso traducido en el aumento de la capacidad de movilización de las organizaciones sindicales y, consecuentemente, en la convocatoria de un número muy apreciable de huelgas o conflictos laborales -en cualquier caso no superior a la treintena, es conveniente insistir-, entre ellos la imposición de dos días de huelga general en A Coruña a raíz del asesinato en marzo de un militante de los sindicatos del puerto. Esta renovada energía invertida en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de toda Galicia, plasmada también en las labores intensas de propaganda desarrolladas por la CRG –nacen varias publicaciones, *Orientación* y *Germinal*, vinculadas a los sindicatos de la Construcción y Agrícola coruñeses, deudoras del órgano histórico de prensa de la FLO, *Solidaridad*, o a *Brazo y cerebro*- en la creación, entre mayo (congreso extraordinario de la CNT en Zaragoza) y el golpe de estado de julio, de veinte nuevos sindicatos de oficios sólo en la provincia coruñesa, se vio complementado con el resurgir de ateneos libertarios y centros culturales dirigidos a la alfabetización, mejora del nivel cultural y educación política de los afiliados anarcosindicalistas.<sup>624</sup>

Y en un contexto sobre el que operaba, o pretendía operar, una fórmula no bien perfilada de Alianza Revolucionaria para hacer converger la acción reivindicativa de la CNT y la UGT, al gobernador civil de A Coruña se le planteaban un número importante de conflictos laborales que resolver en función de sus prerrogativas y competencias legales y *fácticas*, alimentados tanto por una realidad a menudo oprobiosa para los trabajadores de la mayoría de los sectores productivos del país, como por la coyuntura favorable –y ya no tanto por las altas expectativas de abril de 1931- que, a priori, englobaría al movimiento obrero en el regreso del centro-izquierda republicano al poder.

Sin embargo, la tardanza de los gobiernos presididos por Azaña y Casares Quiroga a la hora de restaurar la maquinaria de los jurados mixtos se constituiría en una de las razones fundamentales para retomar la “acción directa”, entendida como un medio de intensificar la actividad sindical. En sí, la victoria del Frente Popular conllevaba la vuelta a la *normalidad* de asociaciones y prensa obrera, la reimplantación de la legislación laboral y los jurados mixtos y la amnistía generalizada, tanto la legal como la laboral (readmisión de despedidos, regreso a las condiciones laborales logradas en el

<sup>623</sup> D. Pereira, *A CNT na Galicia*, op. cit, p. 97

<sup>624</sup> Ibid. p. 147-149 y 160-161.



primer bienio), pero lo cierto es que algunas medidas se retrasaron bastante para seguir más tarde un ritmo incierto y, en general, insatisfactorio para los intereses de los trabajadores y de las organizaciones integrantes del movimiento obrero. Este es el caso de la ley derogatoria de 30 de mayo, publicada en la *Gaceta de la Mdrid* tres días después,<sup>625</sup> que reactivó los jurados mixtos más de tres meses después del triunfo de las izquierdas en las elecciones de febrero, en un momento en que proliferaban conatos huelguísticos que buscaban, en especial, la aprobación de nuevas bases de trabajo.<sup>626</sup>

Y esta ausencia, inactividad o inoperancia de los jurados mixtos favorecería, por el contrario, el entendimiento entre las distintas fuerzas sindicales –a pesar de la oposición del débil cuantitativamente pero hiperactiva ala faísta-, pues eliminó un mecanismo burocrático-administrativo que trababa la relación directa entre los dirigentes sectoriales cenetistas y la patronal, además de empujar a la UGT, en buena lógica, a abandonar su tendencia a monopolizar la representación sindical y a apostar por una flexibilidad táctica que la apartase de la doctrina *Largocaballerista* y otorgase a las secciones regionales o locales de esta organización sindical una autonomía necesaria en un momento en que la afiliación estaba creciendo exponencialmente.

No obstante, el que el día 2 de junio se publicara en la *Gaceta de Madrid* la ley derogatoria del texto legal aprobado durante el bienio rectificador para limitar el funcionamiento de los jurados mixtos, no significaba, como es obvio, un efecto inmediato sobre el proceso de regulación de conflictos laborales latentes en aquel momento –y bajo el clima de agitación social percibido como irreversible desde posiciones antirrepublicanas-, base factual sobre la que debía volver a operar una ley destinada a arder, como parte de los fundamentos jurídicos del régimen republicano, en la hoguera del verano de 1936 tras el dilatado, incierto y contradictorio debate social y parlamentario sustanciado durante los meses de junio y julio de ese año.

Por esas fechas, *La Voz de Galicia* informaba de las reiteradas peticiones que el propio gobernador civil de A Coruña había cursado al Ministerio de Trabajo solicitando la creación de dichos jurados mixtos *circunstanciales* como instrumento y cauce esencial para solventar conflictos huelguísticos. Objetivo a lograr, desde la óptica del jurista Pérez Carballo –que, para fundamentar ante el gobierno su interés en este asunto, se habría apoyado en una iniciativa adoptada por el delegado provincial de Trabajo-, “unificando las condiciones laborales, y resolviendo armónicamente las diferencias entre patronos y trabajadores”.<sup>627</sup> En la misma información, se detallaba otro requerimiento efectuado por el gobernador al mismo Ministerio para hallar una solución al problema interno desencadenado en el jurado mixto de Ferrol que, en esos momentos, estaba tratando de dar solución –descabezado como estaba por el cese de su presidente– a una huelga de electricistas declarada en esta ciudad. Esta huelga, que había sido convocada el día 25 de mayo por los trabajadores de la Sociedad General Gallega de Electricidad en demanda de una importante mejora en los salarios –la primera en treinta

<sup>625</sup> Esta ley derogaba la de 16 de junio de 1935 y las disposiciones dictadas para su cumplimiento, restableciendo en su vigor el texto legal impulsado por Largo Caballero, publicado en la *Gaceta de Madrid* de 27 de noviembre de 1931, en lo que se refiere a los Jurados Mixtos de Trabajo.

<sup>626</sup> F. Sánchez Pérez,, “Las protestas de trabajo en la primavera de 1936”, en *La España del Frente Popular*, op. cit, p. 90-91.

<sup>627</sup> *La Voz de Galicia*, 5 de junio de 1936.

años, en el seno de esta empresa eléctrica-, y promovida por la UGT, sindicato de fuerte implantación en la ciudad departamental, se solventaría, en principio, cinco días después con la adopción de un acuerdo satisfactorio para los intereses de los demandantes.<sup>628</sup>

Sin embargo, el enquistamiento posterior de este conflicto, que podemos deducir de la nota emitida por el Gobierno Civil el día 5 de junio, revelaba la dificultad de aunar los intereses de las partes en medio de un clima de agitación social tensado, hasta cierto punto, por la lentitud en la articulación o recomposición de los jurados mixtos, concebidos por la legislación republicana como instituciones de derecho público que debían regular la actividad laboral o profesional y ejercer funciones de arbitraje y conciliación.<sup>629</sup> Y ese enquistamiento, o mejor dicho, la volatilidad de los acuerdos y la complejidad extrema de algunas negociaciones, inscritas en procesos más amplios a escala geográfica o política, o sometidas a un ensayo de democracia directa elogiabile pero expuesto a la interacción de demasiados interlocutores sindicales relacionados con cada actividad productiva –impronta de la CNT, en especial, que como la UGT y el PSOE, debía afrontar su heterogeneidad interna y las consecuencias de ésta a la hora de definir una línea clara de actuación-, iba a caracterizar algunos de los conflictos laborales o huelguísticos a los que el Gobernador Civil debía prestar oídos y ofrecer su activa intermediación tanto en términos legales como políticos.

Es en ese mismo contraste, esto es, el dictado por la autoridad que le conferían tanto las atribuciones de su cargo como gobernador -en el que el conocimiento de las leyes y la ética personal y profesional podía pesar demasiado-, frente al tacto o sexto sentido político con el que debía moverse sobre un terreno inestable, idóneo para hacer más peligrosa la deslealtad de buena parte de los mandos y la oficialidad del ejército y la Guardia Civil de la provincia, se cifraba la verdadera talla política de la máxima autoridad civil de la provincia. Punto de inflexión, encrucijada en que se traslucían perspectivas ideológicas a veces no tan distantes pero forzadas a la tensión, donde Pérez Carballo debería aprender a buscar intrincados equilibrios entre posiciones extremas si quería evitar que su presencia a cargo del Gobierno Civil de A Coruña fuese recordado como un periodo propicio para el desbordamiento sindical del margen legal concedido desde el gobierno central, la aventura efímera de un ambicioso e inexperto jurista en ciernes.

Hasta la mencionada huelga de electricistas convocada en la Sociedad General Gallega de Electricidad, o en paralelo a la misma -esto es, entre su llegada al Gobierno Civil (a mediados de abril) y principios de junio de 1936-, el gobernador civil de A Coruña había intervenido en la resolución de algunos otros conflictos laborales de cierta importancia, en los que los trabajadores involucrados reivindicaban en lo fundamental, desde diversos sectores y estados de necesidad, mejoras salariales y de condiciones laborales y reducción de horarios (del objetivo de las cuarenta horas a la utopía de las 36). Así, se pueden citar los casos de las huelgas planteadas por los tranviarios, empleados de bares y cafés, de artes gráficas, “chalaneros” de la industria pesquera y

<sup>628</sup> *El Ideal Gallego*, 24 y 30 de mayo de 1936; *La Voz de Galicia*, 30 y 31 de mayo de 1936.

<sup>629</sup> Véase el artículo segundo de la *Ley relativa a los Jurados mixtos, del trabajo industrial y rural, de la propiedad rústica y de la producción y las industrias agrarias*, de 27 de noviembre de 1931, publicada en la *Gaceta de Madrid* de día siguiente.

mozos de pescadería, todos ellos planteados en la ciudad de A Coruña, o por sindicatos de transportistas de A Puebla de Caramiñal y Santa Uxía de Ribeira y obreros de una fábrica de conservas en Cedeira.

Buena parte de estos conflictos se resolvieron, temporal o definitivamente, a finales de mayo, principios de junio, en el mismo despacho del gobernador con la firma de unas nuevas bases de trabajo para estos sectores. Mediación gubernativa, encauzada por Pérez Carballo, que no excluía ayudas externas o complementarias, establecidas o autorizadas por la ley.

Otras huelgas, pues, necesitaron la intermediación de algún alcalde siguiendo instrucciones del gobernador (Cedeira) o se sustanciaron mediante laudos de los delegados o inspectores del Ministerio de Trabajo, que en el caso de los empleados de hostelería citados significaba la recuperación de las condiciones fijadas en 1933 y la cesión por parte de los propietarios de un veinte por ciento de las recaudaciones.<sup>630</sup>

De pronóstico y desarrollo más incierto, parecerían las huelgas de marineros y pescadores de la CNT en Pontedeume y Sada, respectivamente. Por otra parte, en esta primera etapa desde el Gobierno Civil se ayudó a solucionar –o, al menos, no se entorpeció el curso de las negociaciones con un criterio inmovilista– cuestiones planteadas por los empleados del ramo de espectáculos de la ciudad herculina y se evitó con ello que estas desembocasen en la convocatoria de huelga. En principio, también se tuvo constancia, pero sin articular ninguna intervención, de la huelga planteada el primero de mayo por la Alianza Marinera y Portuaria de A Coruña, fortalecida por la acción de los sindicatos CNT Y UGT, que en acción combinada ampararon las reivindicaciones del comité de huelga de a bordo del vapor “Habana”, perteneciente a la Compañía Transatlántica Española. Esta huelga “itinerante” se resolvió de manera favorable para la tripulación del barco el día 5 de ese mes, como informaba el órgano de prensa de los anarquistas coruñeses, *Solidaridad*, y traslució una colaboración inter-sindical que ejemplificaría de manera palpable el creciente acercamiento entre anarquistas y socialistas iniciado en A Coruña, no sin ciertos bandazos y rigideces doctrinales, en la primavera de 1936.<sup>631</sup>

Proximidad de clase, convergencia, unificación de actuaciones (¿alianza obrera?), buscada sobre todo por parte de la anarquista FLO coruñesa, también demostrada ese mismo día, primero de mayo –aunque con matices, pues los mítines previos fueron celebrados por separado en la Plaza de Toros (CNT) y en sus locales de Juana de Vega (UGT)–, en la manifestación multitudinaria convocada conjuntamente por la CNT y la UGT, que transcurrió, a través de los Cantones, hasta la alcaldía y el Gobierno Civil, a cuyo titular se le entregó un pliego de conclusiones que reflejaban, en especial, el punto de vista socialista sobre puntos concretos del programa del Frente Popular, matiz desvelado por el propio gobernador civil en una nota de prensa posterior. En la misma, también se comunicaría –y esto es importante– la ausencia en las citadas conclusiones del carácter de reivindicaciones locales y su relación directa con los argumentos esgrimidos a escala nacional por buena parte del movimiento obrero.<sup>632</sup>

<sup>630</sup> *El Ideal Gallego*, 26 y 30 de mayo; 2, 3 y 4 de junio de 1936.

<sup>631</sup> *Solidaridad*, n.º. 48, 23 de mayo de 1936.

<sup>632</sup> *La Voz de Galicia*, 2 de mayo de 1936.

La labor específica de Pérez Carballo en el tratamiento de la problemática laboral y sindical podía arrojar, a primera vista, al menos en esta primera etapa de dos meses, un balance positivo. Sin embargo, en realidad todo dependía de que los equilibrios alcanzados entre patronos y obreros se consolidasen, y para ello urgía –la nota emitida desde el Gobierno Civil de A Coruña así lo explicitaba– una correcta puesta en marcha de la estructura legal y funcional de los jurados mixtos, como ya se ha dicho a lo largo de estas páginas. También en la primera semana de junio, en concreto el día 3, el gobernador Pérez Carballo le escribiría al ministro de Trabajo, Juan Lluhí, para informarle de la solicitud presentada un mes atrás por la Asociación de empleados de Cámaras de la Propiedad para la constitución de una comisión de arbitraje que elaborase un proyecto de reglamento de empleados de estas corporaciones, petición sustentada en lo dispuesto por la Ley de jurados mixtos aprobada durante el primer bienio republicano.<sup>633</sup>

La reimplantación total de esta institución, por tardía que resultase, situaría a los anarcosindicalistas coruñeses, ya situados en el punto de inflexión marcado por el congreso nacional de la CNT en Zaragoza –y sentada la premisa de que su aceptación podría satisfacer mejor las reivindicaciones laborales de sus afiliados–, ante la contradicción, o el dilema aparente, de intentar un acercamiento ostensible a la UGT mientras se rechazaba de plano tanto el control socialista de los jurados mixtos, ejercido a conciencia durante el primer bienio, como la alianza con los republicanos burgueses que el compromiso con los jurados mixtos significaba. Aunque, por otra parte, el grado de autonomía y/o radicalización adquirido progresivamente por las distintas federaciones locales de la UGT podría crear un espacio, en los márgenes de la legislación laboral del Frente Popular, para facilitar el entendimiento con los anarquistas.

En todo caso, el movimiento anarcosindicalista coruñés continuaría emitiendo cantos de sirena dirigidos a las bases de la UGT coruñesa, y reprochando a los dirigentes ugetistas la pasividad y la moderación en su actuación recomendada a los afiliados de estas organizaciones, muestra, desde la óptica libertaria, de su apego a la maquinaria estatal, para terminar por discutir la interpretación defendida por amplios sectores socialistas partidarios de la acción política como freno de la revolución.<sup>634</sup>

El proceso de radicalización experimentado por la CRG en 1933, con el ascenso de José Moreno Torres a la secretaría de esta organización, no significó un triunfo de las líneas maximalistas de la FAI, a pesar de la reactivación de la acción directa a la que coadyuvó. Ni los dirigentes de la CRG abrazaron esta corriente, dedicados como estaban a las tareas de organización sindical, ni su intento de influir en los destinos de la CRG –su mejor baza no fue, desde luego, el peso numérico de sus militantes, que, en el momento de su mayor expansión geográfica por la comunidad gallega, alcanzaría los 200 militantes– apartó a esta organización de una cierta equidistancia entre postulados *treintistas* y *faístas*. Todo ello posibilitó que los anarcosindicalistas gallegos, y

<sup>633</sup> La correspondencia relativa a este caso, en CDMH. PS. Madrid. 622/3.

<sup>634</sup> *Solidaridad*, nº 50, 6 de junio de 1936.

coruñeses en particular, se mostrasen menos reticentes a la intermediación de gobernadores civiles y jurados mixtos, que en principio habían rechazado de plano.<sup>635</sup>

En este sentido, se dibujaba para los intereses políticos del joven gobernador un horizonte político provincial a priori bastante complejo, marcado por los vaivenes propios de las relaciones laborales en periodos de efervescencia política, condicionadas también por la previsión (o el temor) de que se desplegasen estrategias maximalistas, fundamentalmente por parte de la CNT y su voluntad de llegar a converger con la UGT en la provincia (y nunca con el PSOE). Este factor complicaría algo más cualquier proceso o gestión que se considerase cerrado en un contexto vulnerable de transición o provisionalidad en la implantación de la legislación laboral republicana.

En cualquier caso, la falta de datos suficientes para establecer un seguimiento preciso de conflictos laborales de distinta naturaleza o de la totalidad de las huelgas esbozadas o convocadas realmente, sólo permite, por tanto, extraer conclusiones de carácter provisional, y aun trascendiendo con claridad el mero plano referencial.

Por otra parte, ninguno de estos conflictos laborales o huelguísticos acontecidos en los dos primeros meses de la breve estancia de Pérez Carballo al frente del Gobierno Civil, afectaría tan directamente a la figura del gobernador, a su papel de árbitro o mediador en este tipo de problemas laborales -siempre subordinado, en esta materia, al dictamen del delegado local o regional del Ministerio de Trabajo-, como lo hizo el conflicto huelguístico generado por los obreros municipales coruñeses. La huelga que protagonizó el personal laboral del Ayuntamiento de la ciudad Herculina, sumada a las acontecidas en los ramo del vestido (“obreros de la aguja”), comercio (en busca de la semana inglesa), oficios del puerto o alimentación, o en el seno de la CAMPSA -todos ellos convocadas en esta ciudad-; o las promovidas por zapateros, albañiles y carpinteros en Noya, transportistas (CNT), obreros metalúrgicos o de la construcción naval en Ferrol y los sindicatos agrarios y maderistas a lo largo de la provincia de A Coruña, constituirían todas ellas, a priori, los principales conflictos laborales que se encadenarían durante los meses de junio y julio de 1936 en la provincia de A Coruña.

A pesar de los conflictos huelguísticos citados, se configuraría una última etapa de Pérez Carballo como gobernador que no parece caracterizarse precisamente, en lo relativo a la dimensión socio-laboral de su actuación y a la vida política de la provincia, por un aumento significativo o agravamiento de las tensiones sociales vividas a lo largo del gobierno del Frente Popular o del periodo republicano contemplado en perspectiva, ni que éstas llegasen, ni mucho menos, a convertir las calles de A Coruña, Ferrol o Santiago, o de los diseminados núcleos de población rurales –y, en general, de toda Galicia-, en una orgía de huelgas, pólvora o gestos y de revolución social.

Asunto diferente, y probablemente mejor enfocado, sería plantearse si el relato maniqueo de un progresivo ascenso de las turbulencias sociales, a medida que se iba acercando la fecha crítica planeada, no obedecería en realidad a una distorsión, más o menos dirigida, en la percepción psicológica colectiva, que confundiría la naturaleza de ruidos o rumores y no detectaría la superposición de la lógica propia del “discurso”

---

<sup>635</sup> D. Pereira, *A CNT na Galicia (1922-1936)*, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994., p.96-99; E. Fernández, “La FAI en Galicia”, en *Germinal*, nº3 (abril de 2007), p. 109.

reaccionario o militar –retórica del miedo, dialéctica de la clandestinidad, mística de las armas de fuego- sobre las magnificadas expectativas sociales de la izquierda obrera gallega y nacional, relacionadas más con una crisis de identidad compartida que con un raptó de inconsciencia revolucionaria.

La mayoría de los conflictos huelguísticos acontecidos durante los meses de junio y julio en la provincia donde ejercía Pérez Carballo la magistratura del Gobierno Civil, citados líneas atrás, se resolvieron, como ocurrió con los planteados en los meses anteriores de su mandato (abril y mayo), de manera satisfactoria, aunque algunos de ellos reaparecerían de forma intermitente y seguirían latentes en los días previos a la sublevación, como es el caso del de los estibadores del puerto coruñés. Éstos se declararon en huelga unos días antes de la sublevación, pero no parece que sus actos de reivindicación o sus movilizaciones pusieran en jaque a las autoridades civiles de la provincia, a pesar de que revistieron la suficiente importancia como para justificar la intervención y estudio del problema por parte del alcalde y el gobernador civil, en aras de frustrar su utilización artera bajo el prisma circular de los conspiradores y, en su caso, de canalizar la energía de los obreros en favor de los intereses del gobierno republicano.

En relación al conflicto laboral denunciado por los obreros municipales coruñeses, las organizaciones obreras Unión de dependientes municipales de La Coruña (UGT) y Sindicato de obreros y empleados municipales “La Aurora” (CNT) plantearon durante el mes de mayo una serie de reivindicaciones centradas en un aumento salarial, horarios de trabajo y plazos de vacaciones, traducidas al terminar la compleja y alambicada negociación, por ejemplo, en la adopción del descanso dominical, la semana inglesa o quince días de descanso para todos los trabajadores de esta institución municipal.<sup>636</sup> Este conflicto cristalizó, tras una infructuosa reunión mantenida la noche del sábado en el ayuntamiento de A Coruña, en un conato de huelga que el domingo 7 de junio paralizó, en especial, los servicios de limpieza y bomberos de A Coruña, y se resolvió, finalmente, cuando el asunto pasó a manos del gobernador Pérez Carballo, quien en la tarde de ese mismo día convocó a las partes (Ayuntamiento y sindicatos) a una reunión en su despacho, prolongada hasta la madrugada del lunes 8 de junio para alumbrar un preacuerdo que estableció un aumento medio de 262, 50 pesetas en el salario de los empleados municipales y la concesión, con matices, tanto del día de descanso semanal como del periodo de vacaciones quincenal reivindicados. Más ambigua resultó la respuesta dada a la demanda de la denominada “semana inglesa”, admitida en parte bajo la presión de los precedentes sentados en la resolución de otros conflictos laborales relativos a varios sectores productivos de la ciudad. Este preacuerdo, logrado a través de la mediación del gobernador civil entre las dos y tres de la mañana, fue ratificado por una asamblea de obreros pocas horas después, de forma que los servicios municipales volvían a la normalidad esa misma mañana.<sup>637</sup>

En este punto, lo que interesaría en mayor medida para este trabajo es el solapado enfrentamiento –envuelto en sutilezas, pero nada desdeñable- entre el diario

<sup>636</sup> *La Voz de Galicia*, 24 de mayo de 1936.

<sup>637</sup> *Ibid*, 9 y 10 de junio de 1936.

conservador *El Ideal Gallego* y el gobernador civil, al que el citado medio acusó de actuar como mero portavoz de los sindicatos municipales. Las razones aducidas para imputarle esta tendenciosidad a la máxima autoridad civil de la provincia resultaban un tanto endeble, y bastante sospechosas de una rutina de oposición al adversario político e ideológico, pues el hecho denunciado por este periódico -trabas propias de la censura al margen-, como base de su acusación contra el gobernador, fue la urgencia de éste en solicitar, alrededor de las dos de la madrugada del lunes 8, que un empleado de *El Ideal Gallego* se desplazase al edificio del Gobierno Civil para recoger la noticia de la convocatoria -dirigida por los sindicatos de obreros o empleados municipales a sus afiliados- de una asamblea extraordinaria para ratificar el preacuerdo alcanzado en la citada reunión, prevista para las siete y media de la mañana de ese mismo día.

Los responsables de este diario criticaron los procedimientos ordenancistas de Pérez Carballo y calificaron su petición de intempestiva, alegando no contar en aquel momento con el personal suficiente para realizar el encargo -que, además, consideraron poco eficaz dado el momento del día elegido para ello, prejuzgando la verdadera trascendencia de la misma-, y colocar después la noticia en la pizarra que *El Ideal Gallego* y otros medios de prensa e instituciones instalaban en la misma vía pública, como era costumbre extendida entonces, para informar al público de las noticias o convocatorias más urgentes. En las últimas líneas del artículo, se verificaba, además, un doméstico ajuste de cuentas, pues su autor se decantó por una “respetuosa protesta” y realizó una velada alusión a la censura con un final bien explícito: “y nada más... porque no puede ser”.<sup>638</sup>

En la contestación de Pérez Carballo a las críticas vertidas por *El Ideal Gallego*, publicada por la prensa coruñesa del día siguiente, encontramos las claves que necesitábamos para revelar la trascendencia de este episodio, pues el gobernador civil insistiría en que la urgencia empleada para requerir la ayuda de este diario obedecía al objetivo de evitar la prolongación de una huelga que, a mayores, podría desembocar en un conflicto social fácil de manipular o sobredimensionar bajo la perspectiva de las fuerzas antirrepublicanas y sus correlatos en la conspiración, contemplado también el influjo que la CNT tenía entre el personal laboral del Ayuntamiento, un peso que los anarcosindicalistas hacían valer, en su lenguaje, para quebrar los espurios intereses de la burguesía. Aunque en sus manifestaciones a la prensa, Pérez Carballo no incidía de forma literal en el peligro que la prolongación de la huelga significaba para el mantenimiento del orden público, esta preocupación estaba latente en el momento en que, como él mismo reconocía ante los periodistas, su primera idea había sido presionar a los sindicalistas para que la asamblea obrera de ratificación del principio de acuerdo alcanzado se convocase inmediatamente después de concluir la reunión mantenida entre las partes en su despacho -y no esperar hasta las siete y media, hora en que finalmente se celebró-, intención que vio frustrada por la imposibilidad material de avisar a los obreros con la suficiente antelación.<sup>639</sup>

<sup>638</sup> *El Ideal Gallego*, 9 de junio de 1936

<sup>639</sup> *La Voz de Galicia* y *El Ideal Gallego*, 10 de junio de 1936.

Dicho de otro modo, a pesar de la envergadura nada despreciable de la huelga -que implicó a cerca de ochocientos trabajadores municipales y a los sindicatos CNT y UGT y se relacionó con un aumento de la tensión social en posible sintonía con algún otro conflicto laboral activo en la ciudad-, el peligro potencial del enquistamiento de este u otro tipo de conflicto laboral no hubiera exigido, tal vez, actuar con tanta celeridad si no fuese porque se tenía la certeza de que las trama conspirativa coruñesa se encontraba perfectamente engarzada, a esas alturas, para rentabilizar con eficacia e inmediatez cualquier baza a su favor, y cumplir hasta las últimas consecuencias su papel en el plan subversivo trazado por Mola.

Pérez Carballo también quería evitar cualquier gesto susceptible de ser interpretado como una provocación que, tras un posible estallido social -convenientemente magnificado mediante los procedimientos al uso-, forzase a los aún indecisos entre las filas del ejército y las fuerzas policiales de la provincia, en realidad no demasiados, a sumarse a las redes conspirativas que sabía perfectamente estaban operativas y apuntando de nuevo hacia el corazón de la República.

La relación entre el Gobierno Civil y el poder local constituido en la provincia se incardinaba en la teoría y praxis políticas imperantes durante la Segunda República, en el sentido de procurar la adaptación del mapa político municipal y provincial a la relación de fuerzas existente en el gobierno. Esquema básico desplegado en el control de los procesos electorales, administración de subvenciones o concesiones, regulación del orden público y cooperación en la labor de proyectar la política gubernamental sobre el fuerte peso específico conservado por el mundo rural en una sociedad donde los mecanismos de movilización política, y los partidos en particular, no alcanzaban todos los ángulos de la sociedad española, ni en términos geográficos ni culturales.

Esquema que también afectaba a la resolución de los conflictos laborales, y tuvo una especial dimensión en el tratamiento, entre otros, de algunos problemas agrarios, a causa de la excesiva autonomía con la que actuaban algunos alcaldes o, en sentido contrario, de los condicionamientos impuestos por la política seguida por el partido de Azaña.

IR buscaría, bajo estos parámetros, consolidar su espacio político en el seno de la coalición del Frente Popular a lo largo del país, en peligro por el desgaste de la imagen del partido y la presión ejercida por la izquierda obrera en la calle y el Parlamento, mientras que, en paralelo, trataría de no quebrar el equilibrio necesario para que funcionase este pacto o coalición de izquierdas en provincias como A Coruña.

No en vano, la estrategia común que habían desarrollado los partidos del Frente Popular en A Coruña empezó a debilitarse ya antes de la llegada de Pérez Carballo al Gobierno Civil, dificultad añadida a la pérdida reciente de fuerza e implantación del *casarismo* en la provincia, debida en parte a la imagen autoritaria de la actuación del que fuera ministro de la Gobernación durante la fase más crítica del primer bienio republicano, ya forjada en el imaginario colectivo. Problema al que se le trató de dar solución, bajo la supervisión de la facción casarista de IR, con el nombramiento de Pérez Carballo, maniobra interpretada por E. Grandío como una posible forma de desequilibrar (o reequilibrar, según se mire) la relación de fuerzas entre los partidos de centro-izquierda en A Coruña y entregar el rumbo de las instituciones y centros de



decisión, donde se jugaban los intereses de la República en la provincia, al principal partido del gobierno, en su necesidad de constituirse en el guardián del régimen a escala local.<sup>640</sup>

Esta interpretación, que contemplaría la figura del gobernador Pérez Carballo como la de un hombre de partido, puede sostenerse en parte si la reforzamos con el análisis contextual de los cambios introducidos desde el Gobierno Civil en algunas corporaciones locales de la provincia, como veremos a continuación, pero no abarcaría determinadas variables, como, por ejemplo, los riesgos que contraería el partido de Azaña y Casares si intentaba recuperar terreno en un momento político tan marcado por la amenaza involucionista, más indicado para tratar de aunar los intereses de las fuerzas integrantes del Frente Popular. Del mismo modo, tampoco aportaría todas las claves para calibrar en qué medida a Pérez Carballo y a IR —o a sus notables locales— les movía la percepción de estar perdiendo peso político en esta circunscripción o, en caso de confirmarse ese declive, cuáles serían los cálculos políticos (y el horizonte final) en que se inscribiría este proceso de expansión, si es que había un más allá tras la obligación impuesta de controlar los impulsos de la izquierda obrera, en este caso del PSOE.

Por otra parte, este autor afirma que Pérez Carballo mantenía malas relaciones con el alcalde de A Coruña, Suárez Ferrín, miembro de UR y situado en minoría respecto de IR en este ayuntamiento, y para sostener este argumento se basa en las declaraciones de este regidor municipal en la causa militar que se le instruyó tras el golpe de estado, muestra del poco entendimiento existente entre ambos.

Suárez Ferrín había sido destituido, a finales de 1933, de la alcaldía de la ciudad de A Coruña por el nuevo gobierno radical formado tras la derrota de las izquierdas en las elecciones de noviembre de ese año, regresando al cargo en la siguiente legislatura, concretamente en febrero de 1936, a la cabeza de una gestora constituida por quince concejales pertenecientes a IR, un socialista, dos radicales y sólo tres de sus correligionarios. UR contaba sólo con cuatro representantes en la gestora municipal, uno de ellos el alcalde Suárez Ferrín.<sup>641</sup> Esta posición minoritaria dentro de la corporación no ayudaba precisamente a la consolidación de su mandato ni en términos jurídicos —se actuaba en una situación de cierta vulnerabilidad legal dado el carácter interino de estos órganos—, ni políticos, ya que la vocación hegemónica del partido de Casares Quiroga y del gobernador Pérez Carballo en el ayuntamiento coruñés, alianzas tácticas o coyunturales al margen, hacía casi inevitable un movimiento de enroque favorecido por la desproporción de piezas sobre el tablero de ajedrez de la política municipal en la ciudad Herculina.

Las negociaciones acerca de la constitución de una candidatura a las elecciones de abril de 1936 —en las que representantes del Partido Sindicalista no consiguieron desbancar de sus pretensiones a los líderes de la izquierda burguesa— traslucen, tal vez, la prevalencia de la lógica del servicio al partido seguida por estos últimos, que en función de determinados intereses de prohombres locales, sobre la necesidad de no

<sup>640</sup> E. Grandío, “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña...”, en op cit, p.25

<sup>641</sup> L. Lamela García, *Estampas de injusticia*, op cit, p. 16

perjudicar la alianza con un socio de gobierno en los ámbitos de la política local o provincial.<sup>642</sup>

De todos modos, el problema jurídico y político representado por la nueva articulación del poder municipal en el proceso de modernización política impulsado por la joven y abrupta (en su trayectoria) democracia republicana fue una constante en el devenir del régimen. La cultura política de la Restauración no pudo ser modificada de raíz en un espacio de tiempo tan breve y la legislación empleada, tanto proveniente de la obsoleta ley municipal de 1877, como de la normativa dispersa reguladora de las funciones y potestades del Ministerio de Gobernación y sus representantes, los gobernadores civiles, en esta y otras cuestiones –por no hablar de la complejidad del contexto político en que advino la República–, no representó el cauce adecuado para evitar el baile de nombramientos y destituciones de corporaciones municipales que, en la tradición de teñir del color político del gobierno todas las instituciones del estado posibles, comenzó en abril de 1931 y continuó en toda España hasta el fin del periodo republicano.

En principio se optó por no destituir todas las de signo monárquico electas en abril de 1931 y se prefirió ir sustituyéndolas mediante un modelo mixto, bien sea mediante órdenes y decretos o a través de la convocatoria de elecciones parciales estratégicas, diseñadas para sustanciar expedientes de protesta sobre irregularidades administrativas o reemplazar a los miembros de la corporaciones locales elegidos por el artículo 29 de la ley electoral de 1907 –en concreto, las celebradas el 31 de mayo de 1931 y 23 de abril de 1933–, con lo que se enriqueció el juego político y se movilizó a amplios sectores de la población rural. Pronto se vio la dificultad de conseguir o consolidar, en aquel contexto, un canal que extendiese el flujo de la organización política estatal moderna a todo el territorio nacional, razón de que el control de los ayuntamientos todavía constituyese una necesidad esencial del sistema en la idea de republicanizar un país repleto de “republicanos de nuevo cuño” o “acomodaticios”, categorías fortalecidas progresivamente debido a la premura de tiempo con que se actuaba ante la certeza de una amenaza involucionista y la necesidad de atraer al sistema a los fuerzas de la izquierda obrera.

Como dato a tener en cuenta para extraer las oportunas conclusiones sobre la política municipal desplegada por los distintos gobiernos republicanos en la provincia de A Coruña, Julio Prada afirma la importancia del papel de la FRG en la destitución de las corporaciones de signo monárquico y sostiene que durante el bienio rectificador el PRR llegaría a duplicar su representación en los municipios de esta circunscripción provincial, cambio de coordenadas y patronazgos políticos acentuado aún más, si cabe, tras la revolución de octubre, con la destitución de veintiséis ayuntamientos bajo acusaciones de implicación en los hechos revolucionarios de Asturias, falta de colaboración con las autoridades gubernamentales o irregularidades administrativas.<sup>643</sup> En todo caso, y al margen de la endeblez de la posición del alcalde Suárez Ferrín, sin apoyos y acechado por las maniobras de los representantes de IR en la ciudad (con el

<sup>642</sup> *El Ideal Gallego*, 3 de abril de 1936.

<sup>643</sup> J. Prada, “Clientelismo y poder local en la Segunda República”, en *Hispania Nova*, nº 11 (2013), dossier: *La Segunda República...* op. cit, p. 21 y 29

gobernador civil a la cabeza), conscientes de la conveniencia de instalar en la alcaldía a uno de los prohombres locales del partido de Azaña y Casares, dado el mayor peso de IR en esta gestora, -y de la vía abierta para ello con la convocatoria de las elecciones municipales de abril del 36 o, tras su suspensión, de la posibilidad de modificar la gestora vigente-, para matizar la falta de sintonía entre el gobernador civil y el alcalde de A Coruña debe interpretarse en su contexto la declaración de aquél en la causa 207/36. En ella, en su condición de reo inmerso en un proceso judicial de pronóstico sombrío - contemplado, desde esta perspectiva, como una oportunidad sobrevenida de auto exculparse subrayando la distancias políticas o personales con el ex gobernador civil, ejecutado semanas atrás para engendrar un símbolo de lealtad a la República-, se trasluciría un argumento para desenfocar el asunto hacia una exageración notable, sino de la realidad, si del deterioro de las relaciones personales entre ambos.<sup>644</sup>

Esta postura de distanciamiento del gobernador civil –en la memoria corta, en el recuerdo- fue seguida por otros acusados, tanto funcionarios como militares, que, en cierto modo, cargaron las tintas contra la figura del desaparecido gobernador, un culpable al que de agosto de 1936 en adelante, tiempo en el que se instruyeron las causas examinadas, nada le podía hacer daño, no así a su desafortunada esposa, Juana Capdevielle. Y esta premisa debe servir para matizar o pulir algunas cuestiones relevantes, que interpretadas en sentido literal, contribuirían, paradójicamente, a trazar un retrato de Pérez Carballo –según estas versiones- como un auténtico héroe en la defensa de la democracia republicana.

Mención aparte merecerían los choques puntuales habidos entre el gobernador civil y el general jefe de la VIII División, Enrique Salcedo, cuyo primer episodio se vivió, como se ha dicho, el mismo día de la llegada del abogado madrileño a la ciudad Herculina, pues se inscribirían en la atmósfera de recelo y desconfianza -cuando no de abierta hostilidad- hacia la autoridad civil creada por militares y guardias civiles, pronto contestada por el gobernador con una actitud observante, de natural reserva, por otra parte justificada, intentando compensar su desventaja frente al Ejército con un acercamiento al general Caridad Pita, afianzado de forma progresiva en el papel de consejero de Pérez Carballo, los ojos y oídos del gobernador civil en los cuarteles coruñeses.

Lo cierto es que Pérez Carballo tomaría posesión de su cargo en pleno proceso de desvertebración de la estructura del Frente Popular en la provincia de A Coruña. Para arrojar algo de luz a esta cuestión, pueden valer dos titulares aparecidos en la portada de *El Ideal Gallego* del día 3 de abril de 1936, que introducían sendos artículos dedicados a analizar el panorama político local ante las elecciones municipales que, en principio, se iban a celebrar el domingo 12 de abril –serían desconvocadas horas más tarde ante la dificultad intrínseca al momento político presente.-, fecha en que Pérez Carballo empezó a gestionar los asuntos del Gobierno Civil. Dos titulares explícitos, dos formas

---

<sup>644</sup> El reconocimiento del alcalde de A Coruña, Suárez Ferrín, de su distanciamiento personal e institucional respecto de la figura del gobernador civil, en la declaración prestada por éste el día 9 de agosto de 1936, dieciséis días después de la ejecución de Pérez Carballo, en ATMRN, Causa 207/36, fol. 141

distintas de decir lo mismo bajo el prisma interesado, pero no por ello desdeñable, de la línea política conservadora defendida por *El Ideal Gallego*.

El primero, “Las elecciones municipales y nuestro deber”, incidía en las diferencias entre los republicanos y los socialistas (“marxistas”) en el seno del Frente Popular coruñés a causa de la debatida relación entre las nociones de representatividad y proporcionalidad, que habría provocado la retirada de los primeros de la ante-votación de la alcaldía para ultimar la candidatura a presentar de cara a las elecciones municipales finalmente no consumadas.

El segundo, nada opaco, despejaba cualquier duda, “Ha quedado roto el frente Popular en la Coruña. Los Sindicalistas irán solos a las elecciones”, subrayando la decisión de los dirigentes del Partido Sindicalista de abandonar la coalición izquierdista, al considerarse marginados en el reparto “proporcional” de poder en una candidatura destinada a ir al copo –solamente se les concedían dos puestos–, donde IR colocaría a ocho candidatos, UR a cuatro, los socialistas a tres, galleguistas, comunistas y los citados sindicalistas a dos, para completar los veintiún puestos convenidos.<sup>645</sup>

En acusaciones vertidas en la nota repartida por el PS se rechazaba la “oligarquía de grupos y partidos” conformada para favorecer a los partidos burgueses, a los que se consideraba sobrerrepresentados. Estos titulares, por más tendenciosos que pudieran ser, reflejaban una realidad que parece relevante y certificaban el hecho de que la influencia de Pérez Carballo en los problemas internos del Frente Polar en A Coruña, en el sentido que ésta se orientase, devenía, en todo caso, después de haberse llegado a la ruptura de la supuesta unanimidad o coordinación con que las distintas fuerzas políticas integrantes del Frente Popular habrían actuado desde febrero a abril de ese año. Esto es así, ya que las conflictivas gestiones para elaborar una candidatura a las finalmente aplazadas elecciones municipales se habían fraguado antes de que tomase posesión de su cargo como gobernador civil.

Asunto distinto sería el conceptualizar al nuevo gobernador como el eje motriz de una maniobra diseñada por su partido, IR, para restablecer o lograr un equilibrio político favorable a sus intereses dentro del pacto del Frente Popular en la provincia, operación muy común durante la Segunda República y a cargo de gobernadores civiles más fieles a los intereses de sus respectivos partidos que a la política del gobierno de coalición del que éstos formaban parte. Una maniobra percibida también, desde una hipótesis alternativa o complementaria, como un modo de revertir los efectos de la erosión sufrida por IR (y el *casarismo*) durante el bienio rectificador, partido que, a pesar de haber logrado mantener una base sólida a lo largo de ese periodo crítico, acusaba la necesidad de reforzar o recomponer sus redes clientelares para ocupar de nuevo un puesto privilegiado dentro de algunos delgados equilibrios, y esto era tan importante como restañar las posibles fracturas producidas en el seno del pacto del Frente Popular en A Coruña a la altura de la primavera de 1936.

Y el desarrollo de esa estrategia requería el control de los ayuntamientos o las gestoras repartidos por la provincia, objetivo en el que se comprometieron la mayoría de los gobernadores civiles de IR con el fin de lograr la estabilidad política necesaria para,

---

<sup>645</sup> *El Ideal Gallego*, 3 de abril de 1936.

por ejemplo, inclinar a su favor las elecciones de compromisarios para las presidenciales de finales de mayo -o, en el caso específico de Pérez Carballo y el resto de los gobernadores gallegos, ejercer el control del proceso estatutario-, regular mejor los mecanismos que velaban por el orden público o contrarrestar la inercia a la feudalización de los núcleos de población rural, característica de las políticas municipales articuladas por la derecha antirrepublicana. Paradójicamente, este último objetivo sólo se podía encarar, en aquellas coordenadas geográficas y políticas, mediante la utilización en beneficio propio de las redes clientelares.

Aquí si se vería actuar, en cierto modo, a un hombre de partido, el gobernador Pérez Carballo, atento a las directrices del gobierno pero también leal, si cabe, a unas convicciones legalistas que sobrevaloraban la pureza de las instituciones republicanas (aunque esta lealtad se contemplarse como un exceso), en la creencia generalizada de que los usos extremos de la ley sólo podían activarse para asegurar la supervivencia de la República. Inmerso, como un republicano más, en la cultura democrática de su tiempo -también la imperante en las democracias europeas más avanzadas-, sobre la que no se debe proyectar los valores democráticos estrictos de hoy en día, por otra parte muy distantes de la propia praxis política observada en las democracias actuales.

Pérez Carballo suspendía el 21 de mayo de 1936 las corporaciones municipales de Villamayor y Miño y nombró a un delegado especial, concretamente a Ángel García Toribio, para gestionar la sustitución de las mismas por gestoras interinas,<sup>646</sup> operación repetida el 1 y el 11 de junio en los ayuntamientos de Puentes (Fernando Osorio sería el encargado de realizar la transición y Francisco Guerreiro Guerreiro uno de los concejales socialistas designados) y Noia (con el nombramiento de cinco concejales interinos), proyectándose para final de ese mes algún otro movimiento análogo en otros municipios como Meda.<sup>647</sup> El diputado de IR por A Coruña, Manuel Guzmán, hombre al que se atribuye una influencia en la política desarrollada por el gobernador civil Pérez Carballo en temas locales o municipales, se atribuyó la causa de la ruptura del Frente Popular en la provincia al frustrar una operación orquestada, seguramente, desde el Gobierno Civil, pactada muy probablemente con los socialistas coruñeses -que, abordada en clave local, compensaría también el apoyo parlamentario que el PSOE le estaría prestando al gobierno del país-, para nombrar corporaciones y sustituir concejales en los ayuntamientos de Amés, Brión, Negreira, Santa Comba, La Baña, Padrón, Dodro, Puentes y Mazaricos, en un intento de alejar a los socialistas del poder.<sup>648</sup> Intento secundado de forma presunta, y al menos en su orientación, por algunos funcionarios del Gobierno Civil o del Ayuntamiento de A Coruña, como es el caso de Francisco Prego Campos.<sup>649</sup>

A pesar de que estas fuentes se expresaban dentro del contexto represivo de la instrucción de las causas militares en las que figuraban como acusados o testigos de cargo, y por lo tanto debían mostrarse como férreos adversarios del *marxismo* -y

<sup>646</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Libro-registro de correspondencia de salida (1935-1941), p. 91.

<sup>647</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Libro-registro de correspondencia de salida (1935-1941), p. 95 (Puentes) y 97 (Noia); Proxecto de Investigación Interuniversitario "Nomes e voces", Entrevista nº 2173.

<sup>648</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 36.

<sup>649</sup> Las declaraciones de Francisco Prego Campos a este respecto, en ATMRN, Causa 207/36, fol 37.

valorando posibles inexactitudes en las fechas-, sus afirmaciones parecen coherentes con el contexto de fractura producido en la coalición del Frente Popular semanas antes de la llegada de Pérez Carballo a A Coruña y agravada durante los meses de mayo y junio, que tendría en la distancia tomada por el PSOE con respecto a las posiciones de la izquierda burguesa un referente a contrastar con los códigos y el juego del poder político a nivel local y provincial. Escenario, el del poder local en la provincia de A Coruña, controlado tradicionalmente por las organizaciones casaristas (FRG/ PRG/IR) o republicanas independientes que gravitaban en torno al socio de Azaña -en el primer bienio los *casaristas* llegaron a controlar el setenta por ciento de los ayuntamientos de la provincia; en el peor momento del bienio radical-cedista, no bajaron del treinta- y, por lo tanto, propicio para repetir tendencia a partir de febrero de 1936, proceso iniciado con el ritual republicano de nombramientos de gestoras bajo la presión y la efervescencia popular.<sup>650</sup>

Estos movimientos, que deberían ser forjados desde el control del comité provincial del FP para evitar males mayores, entroncaban con la lógica contradictoria de la política municipal republicana, lastrada por los usos de la vieja política y el dilema de a qué intereses servir en primer lugar. Gobernadores civiles y alcaldes debían decidir si priorizar los propios del partido o decantarse por los específicos del pacto o alianza que sustentaba al gobierno, elección importante si de lo que se trataba era de asegurar la proyección de la maquinaria administrativa y política del estado hacia los núcleos rurales y su organización política, para ajustar de ese modo los resortes sobre los que, por ejemplo, articular una política de orden público capaz de utilizar el poder local en favor de una República en dificultades.

En estas coordenadas, y siempre bajo la premisa de la supervivencia de rasgos importantes de la cultura política de la Restauración, cabría preguntarse con qué grado de autonomía actuaba el gobernador Pérez Carballo en la utilización de las gestoras para controlar el poder municipal, verdadera obsesión del republicanismo histórico por la importancia concedida a la neutralización del caciquismo rural y de apoyos incrustados en los partidos de la derecha (especialmente, la agraria). ¿De qué margen disponía para interpretar las líneas maestras dictadas desde Madrid. Y, en todo caso, ¿cuáles serían los criterios privilegiados en este proceso de control o absorción de algunos de los ayuntamientos de la provincia, entre ellos los de A Coruña y Santiago, por parte del partido de IR?.

Sobre esta cuestión, el gobernador de Almería por aquellas meses cruciales de la primavera de 1936, Juan Ruiz-Peinado Vallejo, nos ofreció en sus memorias claves muy útiles para comprender correctamente el problema planteado a los gobernadores de IR por las especiales derivaciones de la política municipal republicana.

Ruiz-Peinado confirmó que las instrucciones recibidas desde Madrid sobre la cuestión de la sustitución de las gestoras, nombradas durante el *bienio rectificador* en la provincia, se orientaron a la reposición de los ayuntamientos elegidos en 1931 –los de signo republicano de izquierda, incluidas las gestoras nombradas, se entiende-, frente a

---

<sup>650</sup> E. Grandío, “O poder local na provincia da Coruña durante a II República”, en L. Fernández Prieto (cord), *Poder local, élites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936)*, USC, 1997, p. 243-274.

la postura adoptada por los socialistas, partidarios (secundados por UR y PCE). del nombramientos de gestoras que reflejasen la relación de fuerzas inherente al pacto del Frente Popular.<sup>651</sup> De estas palabras, se infiere la importancia concedida al contexto local a la hora de tomar decisiones en este punto concreto, pues a la hora de nombrar gestoras o cubrir vacantes se debía valorar cuál era la correlación de fuerzas políticas en cada circunscripción provincial para así equilibrar apoyos y no perjudicar las alianzas favorables al gobierno en el seno del mismo ejecutivo o del Parlamento. Pero también imperaban criterios partidarios enfrentados, necesariamente, con éstas, fenómeno bastante complejo y muy conflictivo en los feudos socialistas del sur de España.

En A Coruña, sin embargo, la fuerza de los republicanos *casaristas* se debería medir tanto con los resabios de los partidos de la Restauración absorbidos por UR, junto con un importante contingente de tahúres de la vieja política –por otra parte, también presentes en las organizaciones políticas promovidas por Casares Quiroga-, como con las crecientes aspiraciones de los socialistas locales, hasta cierto punto y hasta cierto momento, influidas obviamente desde la dirección nacional del partido. Todo ello hace difícil examinar y valorar en profundidad la postura del gobernador Pérez Carballo sobre esta cuestión –por la falta de fuentes suficientes para delimitar su actuación y los criterios exactos utilizados en cada caso- y pone en riesgo el análisis de ciertas posiciones o tendencias fácticas al desconocerse algunas claves contextuales.

En todo caso, y a primera vista, los cambios impuestos desde el Gobierno Civil en los ayuntamientos de Miño, Villamayor y Noia –y según los datos disponibles hasta el momento-, no parecerían formar parte de un amplio plan de renovación del mapa político municipal de la provincia. Otra cosa sería analizar las modificaciones y reasignaciones que se estarían gestando en aquel momento –además de los supuestos movimientos fracasados al intentar nombrar determinadas gestoras socialistas durante todo este periodo-, por ejemplo las hipotéticas sustituciones proyectadas por el gobernador Pérez Carballo en nombre de IR en el ayuntamiento de A Coruña, en el marco de una pugna cerrada con el partido de UR, al que el gobernador civil estaría tratando de neutralizar o marginar de la vida política local,<sup>652</sup> y en el de Santiago de Compostela, complicado y ensombrecido este último caso por la dimisión del alcalde Anxo Casal el 7 de julio de 1936.<sup>653</sup> Un enfrentamiento con partidos afines que, esto no es ningún descubrimiento, entrañaba más riegos –y no sólo por el factor de inestabilidad representado en el seno de la coalición del Frente Popular- que ventajas ofrecía a efectos de articular una estrategia común ante una crisis de Estado inminente.

En esta tarea, y en todo lo concerniente a la política local o provincial, sus decisiones habrían sido inspiradas, influidas o informadas por el diputado provincial de IR, Manuel Guzmán, verdadero factótum en las gestiones entre bambalinas, y el secretario del Gobierno Civil, Fausto Rubín y Puig, reclamado por Pérez Carballo para este puesto por sus conocimientos de los vericuetos de la política en la provincia.

---

<sup>651</sup> J. Ruiz Peinado Vallejo, *Cuando la muerte no quiere*, op. cit, p.102-103.

<sup>652</sup> Declaraciones del secretario municipal, Joaquín Martín Martínez, en ATMRN, Causa 207/36, fol 75.

<sup>653</sup> ATMRN, Causa 231/36, fol. 119.

A Manuel Guzmán, el auténtico valedor o portavoz de Casares en A Coruña, se le consideraba, si nos atenemos a testimonios recogidos en las causas instruidas por la justicia militar franquista tras el golpe de estado, un hombre muy influyente en el gobernador Pérez Carballo, al menos en lo concerniente a aspectos relacionados con la identidad e idiosincrasia política de esta provincia.

Guzmán ejercería una función similar a la del secretario Rubín y Puig, un técnico de la administración del estado, pero más específica y orientada al control de los ayuntamientos, y guiaría a Pérez Carballo en todo lo relacionado con la política provincial, velando por los intereses de IR a través o en la ruta de los viejos usos clientelares, lo que no afectaría necesariamente a la autonomía del gobernador civil para tomar decisiones en materia de orden público o la regulación o supervisión de funciones de los distintos ministerios del gobierno en la esfera local.<sup>654</sup> Las visitas del Manuel Guzmán al Gobierno Civil eran muy frecuentes, circunstancia advertida por muchos testigos de dentro y fuera de este organismo, y sus relaciones con funcionarios como Francisco Prego se hicieron muy estrechas, hecho que sugeriría el papel de este diputado de IR como supervisor o filtro de los asuntos públicos y privados de Casares Quiroga en su feudo coruñés.

No obstante la influencia de Guzmán en el Gobierno Civil, en su rol de portavoz de Casares Quiroga, parece una evidencia, no estaría tan clara la disposición de Pérez Carballo a formar parte, como último eslabón, de esa cadena de mando en el control político de la circunscripción provincial, dirigida en última instancia por Casares.

Y, probablemente, la supuesta “marioneta” de Casares, el a priori advenedizo o inexperto gobernador, sólo se atuviera a las instrucciones u orientaciones que le abriesen los ojos en determinados problemas de carácter local, y sólo en este tipo de asuntos –debido, en esencia, al desconocimiento de un gobernador recién llegado de las intrincadas claves de la administración provincial gallega-, pues en asuntos relacionados con el mantenimiento del orden público o la neutralización de las tramas conspirativas Pérez Carballo mantendría, en cierta manera –aunque no dejó de acatar ni de hacer efectivas las decisiones y órdenes emanadas del gobierno central-, una línea más o menos crítica con la política de apaciguamiento dictada desde Madrid.

En este punto, parece claro que la representación de los intereses de Casares la ostentaría a pulso un diputado como Manuel Guzmán, ligado al prohombre coruñés por un vínculo cuasi clientelar, cuya inclusión en la candidatura del Frente Popular por A Coruña para las elecciones de febrero fue muy discutida por militantes y dirigentes locales de IR, al revelarse como una imposición del que en breve presidiría el gobierno de la República.<sup>655</sup> Reacción, por otra parte, que matizaría la idea de la absoluta

---

<sup>654</sup> Se pueden encontrar testimonios relativos a la influencia del diputado Manuel Guzmán sobre el gobernador Pérez Carballo, en las declaraciones prestadas por los funcionarios del Gobierno Civil, Fausto Rubín (secretario de este órgano, destinado nuevamente a A Coruña en abril de 1936), Juan Martínez de Tejada y José Presas Sobrino -entre otros-, en ATMRN, Causa 207/36, fol. 95, 96 y 97, respectivamente.

<sup>655</sup> L. Lamela, *Estampas de injusticia*, op cit, p.14.



prevalencia de la opinión e intereses del presidente del gobierno de la República en su propio “feudo” y ante una abultada clientela política.<sup>656</sup>

Al margen de los conflictos laborales y sus correlatos huelguísticos, y trascendiendo la perspectiva del poder local en la articulación de una verdadera política de estado o la consecución de mejoras para la sociedad coruñesa, el gobernador Pérez Carballo desarrolló, en función de las atribuciones que le confería su cargo, una intensa labor orientada en varias direcciones. A modo de resumen, hay que recordar que las funciones de los gobernadores civiles abarcaban labores de protección de la infancia; gestión de la beneficencia (Pérez Carballo presidía el Patronato de la Caridad y se empeñó en su control en favor de IR); regulación de diferentes aspectos de la vida local y de espectáculos, juego y prostitución; registro de asociaciones y elaboración de estadísticas y censos (para lo que el gobernador Pérez Carballo debió apremiar a algunos municipios retrasados en su ejecución), e incluían la asunción de algunas atribuciones propias de los ministerios de Hacienda (delegación de impuestos y contribuciones), Fomento (gestión de obras públicas), Trabajo o Instrucción Pública, entre otros.

A estas atribuciones habría que añadir las dos más importantes, cifradas en el mantenimiento del orden público –desde este prisma, y también cumpliendo algunas funciones delegadas por el Ministerio de Trabajo, intermediaría en conflictos laborales y huelgas- y el control de procesos electorales, en relación directa con el Ministerio de Gobernación, como el referéndum convocado sobre el Estatuto de Galicia de 28 de junio, para el que se levantó dos días el estado de alarma –del 27 al 29 de junio, teniendo en cuenta que en Galicia se había decretado el 17 de febrero-<sup>657</sup> o las distintas fases de las presidenciales de abril y mayo hasta la proclamación de Azaña como presidente de la República.<sup>658</sup>

En el campo de la acción humanitaria, uno de los objetivos abordados por el gobernador Pérez Carballo en los tres meses y medio de su gestión al frente del Gobierno Civil de A Coruña fue citar el intento de solución al problema de la mendicidad en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad Herculina, para lo que mantuvo una serie de reuniones con el alcalde Suárez Ferrín, contactos interrumpidos por el estallido del golpe de estado y la fractura consiguiente de la estructura del estado a todos los niveles. Del mismo modo, el Gobierno Civil aprobó un sinfín de reglamentos de asociaciones o grupos políticos; concedió o denegó autorizaciones para celebrar bailes, verbenas o festivales –actuando como presidente de la Junta consultiva e inspectora de espectáculos-<sup>659</sup> y canalizó a nivel local, distintas iniciativas y proyectos

<sup>656</sup> La policía franquista, en informes posteriores, y siguiendo la pauta bien marcada de imputarle al político coruñés una progenie política inacabable, señalaría al militante de IR, Ricardo García Lago, o al secretario del Gobierno de la Audiencia Territorial, Ángel Caffarena Sola, como algunos de los numerosos protegidos o *habilitados* de Casares Quiroga en A Coruña.

Véase, a este respecto, AHN, F:C- Interior- Policía, H, Exp. 13.474 y 15.352.

<sup>657</sup> *Boletín Oficialm. Provincia de La Coruña*, nº 28 (27 de junio de 1936).

<sup>658</sup> J. Serrallonga, “El aparato provincial durante la II República. Los gobernadores civiles, 1931-1936”, op. cit, p. 142.

<sup>659</sup> Correspondencia entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Gobierno Civil de esta provincia, relativa a algunas actuaciones de esta Junta consultiva –durante el mes de junio, el gobernador civil autorizó una verbenas en A Grela y rechazó la solicitud de la Asociación lírica coruñesa para celebrar bailes y festivales en su local social-, en Archivo Municipal de A Coruña.

gubernamentales –patrocinados, fundamentalmente, por Casares- para dotar de infraestructuras o equipamientos escolares o sanitarios a la provincia de A Coruña, cumpliendo determinadas funciones delegadas por los Ministerios de Hacienda, Instrucción Pública, Trabajo o Fomento.<sup>660</sup> Pérez Carballo también cooperaría o se ocuparía de asuntos relacionados con la gestión y supervisión de las concesiones oficiales para la construcción de un grupo escolar y varias carreteras, así como se encargaría del seguimiento de una serie de obras y reformas realizadas en los puertos de A Coruña y Ferrol y de la creación o extensión de algunas líneas de ferrocarril que tendrían a la capital de la provincia como eje.

En el apartado institucional, Pérez Carballo recibió la visita de numerosas comisiones y representantes de diversos sectores profesionales, empresariales, culturales y políticos. Un día como el 15 de julio de 1936, una fecha muy crítica por razones obvias, la prensa informaba de que Pérez Carballo había recibido la mañana anterior al alcalde de Carballo, a un representante de la Asociación de la Prensa, al gerente de la empresa “Cros”, a un concejal de Ferrol y a una comisión de barberos, además de a un número indeterminado de particulares, un hecho significativo a todas luces del halo de normalidad que se quería mantener y de la vocación de proximidad a la ciudadanía desarrollada en aquella época por los representantes de los distintos gobiernos civiles.<sup>661</sup> Como nota destacable, constatar que acudió a la recepción ofrecida al ex presidente de la República de Cuba, José. A. Barnet, celebrada el 19 de junio en el mismo buque en el que viajaba este político, escritor y diplomático nacido en España, fondeado en el mismo puerto de A Coruña.

Pero, aparte de las atribuciones mencionadas, al gobernador civil le correspondía la atención personalizada a los ciudadanos comunes y corrientes –permítasenos la expresión- que se acercasen a exponer sus problemas particulares, en muchos casos relacionados con demandas de trabajo, penurias económicas y otras circunstancias en busca de la recomendación o mediación de la autoridad civil en asuntos de naturaleza privada.<sup>662</sup> Pérez Carballo había fijado un horario específico para atender al público en general, de 13 a 14 horas, para así tratar de poner orden en su agenda y priorizar los asuntos más urgentes. Horario que no afectaría a la función paralela e inexcusable, como costumbre clientelar extendida y aceptada por la sociedad política y la ciudadanía española de todas las épocas, que todo alto funcionario o cago político de responsabilidad debía desarrollar –y el gobernador Pérez Carballo no sería una excepción- en el territorio previsible de las recomendaciones laborales o académicas, un tráfico de influencias que ha dejado en tantos archivos un rastro más extenso que otra documentación de mayor relevancia o trascendencia.<sup>663</sup>

---

<sup>660</sup> *La Voz de Galicia* del día 6 de junio de 1936 anunciaba la concesión, a las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, de fondos para la construcción de los futuros edificios de las escuelas de Magisterio (Normal), Aparejadores y Peritos agrícolas, así como de un Hospicio.

<sup>661</sup> *La Voz de Galicia*, 15 de julio de 1936.

<sup>662</sup> Los relatos memorísticos de los gobernadores Varela Rendueles, Braulio Solsona o Juan Ruiz-Peinao Vallejo, entre otros de los citados a lo largo de este trabajo, inciden en este punto y, bajo distintas perspectivas, ofrecen una visión de conjunto muy ilustrativa de lo que se podría denominar las funciones sociales de los gobernadores civiles.

<sup>663</sup> Por ejemplo, CDMH. PS-Madrid. 177/8 y 179/ 48.

Labor intensa en cualquier caso que no dejó de ser discutida por *El Ideal Gallego*, quien si el día 17 de abril –recién jurado el cargo– elogiaba la disposición del gobernador civil a colaborar con la prensa local, poco a poco se iría decantando por una actitud menos diplomática y más contaminada por la política para denigrar la labor de Pérez Carballo, como se reflejó en la crítica de este periódico –se deduce por el contexto, que apareció en *El Ideal Gallego* la primera semana de junio-- de sus supuestas “ausencias” del Gobierno Civil, invectivas contestadas por el gobernador con cierta contundencia, recordando que había permanecido en su despacho de forma constante atendiendo comisiones, resolviendo los problemas de patronos empleados de cafés, espectáculos y de la compañía de tranvías.<sup>664</sup> Así mismo, se daba la circunstancia de que, a finales de mayo, Pérez Carballo le habría impuesto al director de *El Ideal Gallego*, Santiago Lozano García una multa de 1.000 pesetas en aplicación de la Ley de Orden Público, confirmación del enturbiamiento de las relaciones entre el Gobierno Civil y este diario local de tendencia conservadora. Este proceso estuvo salpicado, posiblemente, tanto de discrepancias e intereses ideológicos como de interferencias derivadas de la acción, más o menos acentuada según el momento, de la censura de prensa ejercida por el gobierno del Frente Popular y sus representantes, fenómeno cuya evaluación certera merecería un apartado especial que en este trabajo no puede contemplarse.<sup>665</sup>

Las funciones de un gobernador civil de la época como Pérez Carballo no se limitaban, sin embargo, a ejercer de mero representante del gobierno central en una provincia determinada –con las graves responsabilidades derivadas de esa jerarquía– ni a en asistir a actos, celebraciones, visitas o recepciones sociales de toda índole, organizados bajo cualquier pretexto o intención. Sus obligaciones no terminarían, pues, en el nivel de la representatividad oficial del máximo órgano del poder ejecutivo a escala provincial, o en la gestión de los asuntos de su jurisdicción, sino que acarrearían, para llevar a cabo toda esa labor global, el despliegue de un amplio abanico de habilidades sociales y, acaso, artes de diplomático consumado, en especial cuando se trataba con notables locales en busca de la más rutinaria de las prebendas y recomendaciones, o decididos a conservar a cualquier precio su esfera de poder local. Bastaría, por ejemplo, en citar la decepción o la sorpresa mostrada por el diputado de UR, José Miñones, ante la negativa de Pérez Carballo a concederle una licencia de armas a un recomendado suyo, considerada como un acto de venganza del gobernador civil, a quien le habría irritado la oposición mostrada por Miñones y parte de UR –según la versión de este último– a la política de detenciones de elementos derechistas y falangistas orquestada desde el Gobierno Civil.<sup>666</sup> Este desacuerdo traslucía también la ambigüedad (o la cautela) de un buen número de dirigentes locales de UR (Miñones, Suárez Ferrín, entre ellos) e, incluso, de IR (el propio Guzmán, a la postre) a la hora de

<sup>664</sup> Los efímeros elogios dirigidos por la prensa conservadora coruñesa a Pérez Carballo en *El Ideal Gallego*, 17 de abril de 1936. La contestación a una información que se refería a las ausencias del gobernador civil de su despacho, achacándole una falta de compromiso o una cierta laxitud en el desempeño del cargo, en *La Voz de Galicia*, 6 de junio de 1936.

<sup>665</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil Libro de entrada de correspondencia GC, p 125. Refleja recepción documento relativo a esta sanción, con fecha de 25 de mayo.

<sup>666</sup> ATMRN, Causa 207/ 36, fol. 88.

posicionarse decididamente en contra de los peligros que acechaban a la República, prueba en cierto modo del vértigo sentido hacia la transgresión de ciertos valores o códigos sociales, traducidas en una actitud displicente hacia el gobernador civil, en primera instancia, y en un compromiso difuso con la democracia republicana en las horas finales de ésta en A Coruña.

Un gobernador civil, Pérez Carballo u otro cualquiera, no siempre podía, sabía o estaba dispuesto a actuar como el *factótum* característico de la Restauración –ni tampoco era seguro que dispusiera de la experiencia necesaria para templar ánimos, aunar voluntades o medir los tiempos de la política *cotidiana*-, extrapolado el poder cuasi doméstico del regidor o representante local a las atribuciones más arbitrarias (o menos confiables) de la máxima autoridad provincial, que si ya había dejado de ser la pieza maestra del tradicional *encasillado*, todavía debería representar un papel de mediación que, visto desde una perspectiva sincrónica, tampoco desentonaría demasiado en la cultura democrática de la época.

## **VI. EL DEBER DEMOCRÁTICO O EL ÉXITO DE UN GOLPE DE ESTADO**

### **La estrategia de apaciguamiento. El gobierno y sus gobernadores.**

Durante las semanas que precedieron al golpe de estado de 20 de julio de 1936 en A Coruña no se produjo, a nivel provincial, ninguna oleada de violencia ciega, ni proliferaron atentados, asaltos o estragos que convirtieran las calles en intransitables o el clima social en irrespirable. Esto no significa que se viviese una idílica relación entre la República, sus instituciones y representantes, los ciudadanos y el ejército, actor este último comprometido desde febrero, y a escala nacional, en la tarea de demoler las reformas proyectadas o reactivadas de forma progresiva por el gobierno del Frente Popular.

Nada de eso. Tampoco ocurrieron hechos excepcionales en relación a la dificultad observada durante todo el periodo republicano de ajustar el mecanismo del cambio social y político a la estructura de una sociedad compleja, marcada por el peso de algunos sectores políticos decididos a terminar de una vez con la experiencia de la democracia republicana, preñada de proyectos endebles. Sectores reaccionarios bien conocidos, partidarios de darle la vuelta a la situación política por medio de la fuerza, empresa abordada sin los suficientes apoyos hasta las elecciones de febrero del 36, en cuyo auxilio acudieron los militares a la señal del regreso de la izquierda al poder.

De todos modos, la prensa conservadora de la provincia de A Coruña, con mención especial para el diario *El Ideal Gallego*, ya se encargaría de dibujar un panorama social y político crítico, turbulento, irreversible, retratado, por ejemplo, con la publicación a lo largo de junio de noticias sobre la escasez de sepulturas en el Cementerio del Este madrileño –el día 13 de junio se cifraba en unos 18 días la fecha del colapso de este recinto- o la explosión de hasta diez bombas en la capital de la República durante la noche del día 30 de junio, ubicada ésta última en la sección de *Última hora*.<sup>667</sup>

Muchos artefactos parecen, en principio –por no hablar de la manipulación y tendenciosidad de la otra noticia-, pero si la realidad era que en Galicia no estaba ocurriendo una ofensiva terrorista de ese calibre, bastaba la imagen del Madrid europeo y republicano y, por lo tanto, propenso a la anarquía de huelgas violentas como la de la construcción –poseído por esa clase de fiebre revolucionaria e iconoclasta tan perniciosa para la ordenada y previsible vida provinciana-, para extender el estado de terror necesario para justificar cualquier medida “extraordinaria” con que restaurar la normalidad. Y este mensaje iría calando entre algunas capas sociales y disiparía, poco a poco, las dudas de algunos militares, guardias civiles y policías indecisos.

En la ciudad de A Coruña también se registraron algunos incidentes que implicaron el uso de explosivos, fundamentalmente durante el mes de mayo. Dos artefactos estallaron en una peluquería de la céntrica calle de San Andrés el jueves 4 de mayo de 1936, ataque que sólo originó daños materiales –relacionado con un posible conflicto

---

<sup>667</sup> *El Ideal Gallego*, 13 de junio y 1 de julio de 1936.

laboral y el despido de un empleado con alguna vinculación sindical,<sup>668</sup> y en el vestíbulo del café-cantante Iberia de la Avenida Fernández Latorre —éste de gran potencia-, con el resultado de cuatro heridos de gravedad entre la clientela del local. Este último atentado se vinculó a la negativa de los nuevos dueños del negocio a contratar personal y sus autores pertenecían al sindicato de camareros “La Herculina”, aunque una comisión de la denominada “Radio Comunista de La Coruña” denunció que estos hechos respondían a provocaciones de pistoleros fascistas.<sup>669</sup> La hipótesis de esta especie de *sicariato*, la de los pistoleros a sueldo al servicio de oscuros intereses —generalmente, los de rivales ideológicos o competidores políticos— era argüida con frecuencia por organizaciones sindicales y políticas de uno u otro signo para desviar o enrostrar posibles culpas a sus adversarios políticos, pero su excesiva artificiosidad no ocultaba la posibilidad de que en ciertos contextos de fuertes tensiones sociales se recurriera a agentes provocadores para prender la mecha de disturbios sociales de forma premeditada.

Otros sucesos de carácter muy violento, como el ya reseñado triple homicidio de la carretera de Arteixo a Laracha —el acribillamiento, a finales de junio, de un ómnibus a causa de una venganza entre las partes, afectadas por un proceso judicial sustanciado ese mismo día-, el asesinato del patrono ferrolano Mariano Piñeiro y de un guardia jurado de la Ciudad Jardín en A Coruña en la primera semana de julio —a los que hay que sumar un atraco y una reyerta con una víctima mortal en cada caso, acontecidos en la ciudad Herculina y en Culleredo en mayo y junio-<sup>670</sup> no parecen responder a ningún móvil político. No obstante, eran claramente susceptibles de ser interpretados como síntomas de la degeneración de la convivencia social en la provincia, sobre todo si aparecían en la prensa junto a las crónicas o reseñas de otros fenómenos de violencia política y social *transferidos* o extrapolados desde ciudades como Madrid o Sevilla, incluidas algunas huelgas especialmente prolongadas, intermitentes o enquistadas, repartidos por todo el país.

Si tuvieron un trasfondo político tanto el apuñalamiento de un joven anarquista a manos de un grupo de falangistas en Santiago (principios de julio), como un acto anticlerical ocurrido el primero de mayo (el intento de agresión a dos sacerdotes en Betanzos, acompañantes del cadáver de un niño al cementerio local, impedido por la actuación del alcalde y de la Guardia Civil). La noticia de este suceso —según nuestros datos, siempre provisionales-, el primero de cierta entidad, y de estas características, ocurrido desde finales de febrero en la provincia (la euforia por el triunfo del Frente Popular y sus efectos), apareció en la portada de *El ideal Gallego* dos días después y se reflejó en la línea tendenciosa seguida por este diario cuando podía sortear los escollos que le ponía la censura ejercida por las autoridades civiles republicanas.<sup>671</sup>

Abriendo un paréntesis necesario en este punto, cabe decir que las relaciones del gobernador civil Pérez Carballo con las autoridades religiosas de la provincia fueron

<sup>668</sup> *El Ideal Gallego*, 15 de mayo de 1936.

<sup>669</sup> *La Voz de Galicia*, 24 y 26 de mayo de 1936.

<sup>670</sup> *La Voz de Galicia*, 27 de mayo, 16 de junio y 7 de julio de 1936; *El Ideal Gallego*, 16 de mayo, 30 de junio y 7 de julio del mismo año.

<sup>671</sup> *El Ideal Gallego*, 3 de mayo de 1936.

correctas, más allá de las tensiones existentes entre algunos párrocos -nada reticentes a mezclarse en política y a esgrimir, sin pudor, sus puntos de vista antirrepublicanos desde el púlpito o a participar directamente en actos de naturaleza política- y las autoridades civiles de algunas poblaciones de la provincia. Hasta tal punto se verificó esta tendencia a la politización del clero gallego y coruñés, que el propio Arzobispado de Santiago reconocía algunos de los hechos y le remitía al gobernador civil, a principios de mayo, una carta en la que acusaba recibo del escrito remitido en abril por Pérez Carballo al Arcipreste de Faro -a modo de queja por la postura beligerante observada por los religiosos- y se comprometía a exigir a los párrocos aludidos, y a todos los sacerdotes adscritos al Arzobispado en general, que abandonasen toda actividad política y “se consagrasen de lleno a las obligaciones propias de su ministerio sacerdotal”.<sup>672</sup>

Pero lo más relevante, al margen del reconocimiento oficial de la jerarquía de la iglesia gallega de la animosidad política que afectaba a algunos de sus miembros, era el tono de las palabras con que el vicario general del Arzobispado de Santiago de Compostela, que firmaba la misiva, se despedía de la máxima autoridad civil de la provincia:

Hemos de manifestar también a V.E nuestro agradecimiento sincero por su conducta en el caso presente, rogándole que si en adelante se repitieran otros análogos o semejantes, se digne dirigirse también a Nós, que deseosos siempre de complacerle, procuraremos tomar las medidas oportunas en cada caso.<sup>673</sup>

Las palabras del Vicario general de Santiago de Compostela, elogio del tacto y respeto a las formas demostrado por Pérez Carballo para hacer cumplir la legislación civil republicana, relativas al modo de encarar las relaciones con la iglesia en un área geográfica especialmente sensible, y las maneras legalistas de abordarla, revelaban el carácter templado que un representante del gobierno republicano necesitaba para resolver conflictos y enfrentarse a problemas de trascendencia política. Y esto con independencia de que este entendimiento entre el poder civil y el religioso en la provincia de A Coruña, fuese o no flor de un día.

Cortesías aparte -conductas más o menos ajustadas a una interpretación flexible de la ley, que impidiese a la larga su transgresión-, no parece que las relaciones entre el Arzobispado y el Gobierno Civil sufriesen, en los meses transcurridos hasta el golpe de julio, ninguna ruptura abrupta. Otra cosa sería conocer en profundidad la evolución ideológica y la disciplina mostradas por el clero de base, sacerdotes y párrocos, o la dimensión real de la reacción anticlerical de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda coruñesas, a medida que se acercaban las fechas críticas, intuitas por todos los actores involucrados de una u otra forma en el intento de provocar o evitar males mayores. Si se sabe que, al menos hasta finales de junio, el gobernador siguió utilizando el cauce acordado con el Vicario general del Arzobispado de Santiago en las mismas

<sup>672</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Correspondencia GC, Comunicación dirigida por el Vicario general del Arzobispado de Santiago de Compostela, Fernando Pena, al gobernador civil de La Coruña (Santiago de Compostela, 2 de mayo de 1936).

<sup>673</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Correspondencia GC, Comunicación dirigida por el Vicario general del Arzobispado de Santiago de Compostela, Fernando Pena, al gobernador civil de La Coruña (Santiago de Compostela, 2 de mayo de 1936).

condiciones formales, pues el 25 de junio enviaba a éste una serie de hojas parroquiales confeccionadas por un sacerdote cuya actuación era considerada impropia por el Gobierno Civil, en la expectativa de que el Arzobispado le llamase la atención al religioso.<sup>674</sup> En cualquier caso, la idea de un gobernador aislado en sus objetivos de partido, inexperto y a veces sectario, se puede matizar en algunos puntos, a tenor de lo desprendido de la documentación analizada.

Por lo tanto, durante el periodo en que Pérez Carballo estuvo al frente del Gobierno Civil de A Coruña no se asistió a un desbordamiento institucional a causa de las alteraciones del orden público o la violencia política que afectó a la provincia, ni a una eclosión de conflictos laborales y huelgas durante los meses de mayo, junio y julio. Estos conflictos ni sobrepasarían significativamente las cifras de otros periodos anteriores al gobierno del Frente Popular, ni ocasionarían víctimas mortales. Si bien es cierto que la violencia de baja intensidad, la agresiones leves, los acosos, los daños materiales e intangibles ocasionados son muy difíciles de medir o cuantificar, pero se produjeron y tuvieron indudables efectos.

Aunque la globalidad de la agitación social generada sí que pudo crear un caldo de cultivo idóneo –un estado de opinión también– para transmitir el mensaje interesado de la debilidad institucional ante un inminente movimiento revolucionario articulado a escala nacional. Mensaje convenientemente reforzado o amplificado con la proyección subliminal de las noticias publicadas por la prensa local sobre conflictos huelguísticos y atentados producidos en el escaparate madrileño, imagen de la capital de una futura República de soviets, con el permiso de la denominada *Sevilla la roja*. Este mensaje calaría en los sectores políticos más conservadores de la ciudad, ansiosos por prestar un servicio crucial y muy disciplinado a la patria, y teniendo un origen multifocal no necesitaría, esto es obvio, ningún aval documental o verificación rigurosa para ser asumido por el ejército, que también habría desempeñado un papel importante en su gestación.

En este sentido, y bajo la premisa de intentar mermar la base factual sobre la que los elementos del ejército comprometidos en la conspiración asentaban los argumentos con que ganarse adeptos a la misma, se entenderían las medidas adoptadas por Pérez Carballo para agilizar los procesos de resolución de algunas huelgas como la de los obreros municipales, entre otras, o para controlar algunos conflictos laborales y sociales surgidos en determinados municipios. Medidas que incluirían, ya desde el principio de su mandato, y en virtud de lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley de Orden Público de 28 de junio de 1933, el nombramiento de delegados de orden público en los municipios de la provincia. Por ejemplo: Carballo (Francisco Prego, Jefe de Negociado del Ayuntamiento de A Coruña, 11 de abril),<sup>675</sup> Pontedeume (Fernando Balsa Antón, 23 de abril),<sup>676</sup> Riveira (Enrique Fernández Dopico, 8 de mayo), Ares (José María Eirís

<sup>674</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Libro-registro de correspondencia de salida (1935-1941), p. 100.

<sup>675</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Correspondencia GC, Oficio del gobernador civil nombrando delegado de orden público en los ayuntamientos del partido judicial de Carballo a Francisco Prego Campos (A Coruña, 11 de abril de 1936)

<sup>676</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Correspondencia GC, Oficio del gobernador civil nombrando delegado de orden público en todos los ayuntamientos del partido judicial de Puentedeume a Fernando Balsa Antón (A Coruña, 23 de abril de 1936).



Carro, 9 de mayo, enviado en julio a Teo) y Arzúa (Narciso López Ramos, 1 de junio).

<sup>677</sup> Partiendo de la premisa de que el control y la limitación de la concesión y uso de licencias de armas,<sup>678</sup> o la prohibición a los alcaldes de ordenar detenciones gubernativas sin previa autorización del Gobierno Civil,<sup>679</sup> eran expresiones de la decidida apuesta del gobierno de la República por el desarrollo –también a través de los edictos emitidos por los gobernadores civiles- de un plan de contención de posibles manifestaciones extremistas, es preciso examinar ahora cuál fue exactamente la postura adoptada por el gobernador civil, bajo la sombra o la amenaza certera de un nuevo *coup de force*. Un nuevo proyecto de involución, o tal vez la repetición del de abril, pero esta vez intuido o vislumbrado como un modo aún más real y más violento de subvertir la democracia republicana. En este punto, y con respecto a las instrucciones impartidas por Pérez Carballo a los alcaldes de la provincia, sería conveniente abrir un breve paréntesis y puntualizar que los alcaldes estaban subordinados a los gobernadores civiles sólo en cuestiones relativas al mantenimiento del orden público, no pudiendo afectar esta dependencia funcional a todas aquellas iniciativas derivadas de la plena autonomía municipal concebida por la filosofía política republicana, cuyo desarrollo se estaba verificando durante la Segunda República.<sup>680</sup>

La trama militar avanzaba bajo la renovada dirección del general Mola y sus instrucciones reservadas pero, por unas u otras razones, no concretaba la fecha final del golpe, aunque en lo referente a Galicia ya habría ajustado, de forma trabajosa eso sí, la conexión entre los diversos enlaces y las unidades implicadas o dudosas.

El gobernador civil, mientras tanto, extremaba las precauciones a lo largo del mes de junio y ordenaba a las fuerzas policiales la aplicación estricta de la ley en un sentido (detenciones de elementos derechistas en la Puebla del Caramiñal tras diversos disturbios, rápidamente puestos en libertad) y otro (cuatro trabajadores de la UGT detenidos en Padrón a causa de un enfrentamiento con obreros de otra población),<sup>681</sup> e incidía en la necesidad de erradicar de la mentalidad social la percepción psicológica del miedo. Erradicar un miedo colectivo permeable a un uso político espurio, relacionado también con determinadas pulsiones antropológicas, inherentes a bajos niveles de alfabetización o preparación cultural, e imágenes de cambios estructurales traumáticos - pero así mismo combustible fácil de utilizar en procesos de agitación política-, era una ardua tarea y el gobernador Pérez Carballo habría de afrontarla con rigor.

Así pues, a principios de junio, tomó cartas en el asunto en cuanto tuvo conocimiento de que en Noia se había propagado peligrosamente un rumor, difundido o manejado con una clara intencionalidad política, que acusaba a los miembros de un equipo médico - autorizado en realidad para llevar a cabo una campaña de vacunación e higiene escolar-

<sup>677</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Libro-registro correspondencia de salida, p. 89 (Riveira, Ares) y 95 (Arzúa).

<sup>678</sup> *Boletín Oficial. Provincia de La Coruña*, nº 127 (martes 2 de junio de 1936): circular del Ministerio de Gobernación a los gobernadores civiles declarando extinguidas las licencias gratuitas de armas expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento vigente de 13 de septiembre de 1933; y nº 136 (viernes, 12 de junio de 1936): circular del Ministerio de Gobernación a los gobernadores civiles ampliando los plazos del proceso de revisión de licencias de armas iniciado en marzo.

<sup>679</sup> *La Voz de Galicia*, 27 de junio de 1936.

<sup>680</sup> Artículos séptimo y octavo de la *Ley de orden público*, de 28 de junio de 1933.

<sup>681</sup> *La Voz de Galicia*, 6 de junio de 1936.

de intentar envenenar a los alumnos de los colegios locales. Ante esta situación telegrafió inmediatamente al alcalde de esta localidad y le ordenó la averiguación del origen exacto de tal especie y la detención de los autores de su propagación, y al tiempo hizo un llamamiento a las personas de cualquier *matiz político* para que colaborasen con las autoridades en la evitación de este tipo de invocaciones a la psicosis colectiva, indicativas muy probablemente de algo más que de amplias carencias culturales.<sup>682</sup> Estos gestos de racionalidad política, de respeto a la ley definían a un jurista pero debían de contener algo más que un buen puñado de buenas intenciones para manejar una situación tan compleja, al fallar los resortes necesarios para asegurar la supervivencia de la democracia republicana. Y la labor del gobernador Pérez Carballo no debía limitarse a una mera demostración de civismo republicano para enfrentarse a los hechos y sortear los obstáculos derivados de una cierta inexperiencia en el trato con avezados y correosos militares o guardia civiles -acostumbrados desde abril de 1931 al juego de las ambigüedades, cuando no al engaño interesado-, en su obligada contribución a la supervivencia del régimen republicano.

Durante las semanas previas al golpe de estado, como estamos viendo, los esfuerzos del gobernador Pérez Carballo se centraban en controlar con celeridad los disturbios que pudiesen perturbar el orden público y neutralizar a los elementos más exaltados o provocadores, generalmente vinculados al movimiento libertario o al sindicalismo socialista, que se activaban en el transcurso de huelgas o conflictos laborales repartidos a lo largo de la provincia.

Los obreros metalúrgicos ferrolanos, por ejemplo, trataron de convocar una huelga días antes del referéndum sobre el estatuto gallego. El gobernador civil denegó su autorización y la retrasó hasta el 29 de junio en aplicación del art. 28 de la LOP.<sup>683</sup> En sentido contrario, se contemplaron coletazos crecientes de la ilegalizada Falange –a principios de julio, elementos falangistas habían herido de gravedad a un joven anarquista en Santiago- o de las JAP locales, cada vez más activas y concentradas en objetivos concretos a pesar del aumento de la presión policial. Estas organizaciones ya se habrían sometido a la disciplina operativa impuesta por el ejército y la Guardia Civil, actores principales de la conspiración y, por lo tanto, no estarían operando al azar.

Sin embargo, el foco principal de este plan de prevención, inspirado tanto desde el Ministerio de Gobernación como apoyado por las informaciones recibidas por el gobernador civil de sus propias fuentes -las principales, el general Rogelio Caridad Pita o France García, presidente de las Juventudes Socialistas de A Coruña-, seguía estando en los movimientos filtrados desde los cuartos de banderas del ejército y la Guardia Civil, y precisaba de la participación del Cuerpo de Seguridad o del de Vigilancia e Investigación, vitales para contrarrestar la acción de los conspiradores.

De esta manera, Pérez Carballo pasaba revista el viernes 3 de julio a los agentes de Asalto en el cuartel de este Cuerpo, acompañado del mando provincial de esta fuerza, el comandante Quesada, y les dirigía una breve alocución para comprobar, acto seguido, el “buen espíritu de la tropa”, coherente con el “orden, disciplina e higiene del

<sup>682</sup> *La Voz de Galicia*, 6 de junio de 1936.

<sup>683</sup> ARG. Fondo Gobierno Civil. Libro-registro de salida de correspondencia GC (1933-1936), p.139.

alojamiento”, todo ello redundante en un servicio eficaz en defensa de las instituciones republicanas.<sup>684</sup>

Pérez Carballo se mostraba muy activo en las semanas previas al golpe, dormía pocas horas y dedicaba casi todo el día al trabajo, que incluía el contacto directo y continuo con la calle o las visitas citadas a acuartelamientos policiales y militares, acompañado en bastantes ocasiones por Caridad Pita. Normalmente se desplazaba caminando y hasta bien entrado el mes de julio no llevaría escolta, imposición del comisario del Cuerpo de Vigilancia e Investigación de A Coruña.

Despachaba, con bastante frecuencia, con las autoridades del Ministerio de Gobernación y con sus colaboradores, un círculo muy estrecho, algunos de los mandos del Cuerpo de Seguridad y Asalto y la Guardia Civil en la provincia y funcionarios del Gobierno Civil, en especial su secretario particular, Leovigildo Taboada, reforzado en sus tareas por un funcionario de la diputación trasladado temporalmente al gabinete del gobernador civil, Eugenio González. También se reunía con algunos miembros de IR y otros partidos del Frente Popular, con los que compartiría sus preocupaciones acerca de la necesidad de evitar cualquier alteración del orden público y de anticiparse y neutralizar el golpe de estado que se presumía inminente.

Preocupaciones que dejó entrever de forma clara y directa, a principios de julio, en una cena organizada en el Gobierno Civil como recepción a Esther Casares, hija del presidente del gobierno, y a su esposo, el capitán Enrique Varela, adscrito a la Casa Militar de la Presidencia de la República, que hicieron parada en A Coruña para reemprender más tarde su viaje a Ferrol, donde la hija y la nieta de Casares Quiroga pensaban pasar sus vacaciones. Junto a ellos y a Pérez Carballo, asistieron a la cena, entre otros, el hermano menor del gobernador y Juana Capdevielle, el diputado Manuel Guzmán –recordemos su vinculación con Casares Quiroga y su condición de consejero de Pérez Carballo en materia de política provincial- y el funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Prego Campos, transferido al Gobierno Civil de forma temporal, sumando un total de trece comensales. Esta cifra le pareció a Esther Varela Casares –nieta de Casares Quiroga, entonces una niña- una premonición de la tragedia que se avecinaba.<sup>685</sup>

En un momento de una conversación, pronto encauzada por los comensales hacia la actualidad política nacional y los peligros que acechaban a la joven República, y ante la pasividad que Pérez Carballo achacó al gobierno a la hora de actuar contra la conspiración en marcha, el capitán Enrique Varela trató de tranquilizar al gobernador civil de A Coruña restando importancia a la amenaza cernida sobre la democracia republicana.<sup>686</sup> Varela reveló algo sabido en sus palabras: la confianza transmitida por Casares Quiroga (una estrategia más que una certeza), y asumida como propia por él mismo, en la neutralización de cualquier amenaza golpista ante la intuición de que en el

<sup>684</sup> *La Voz de Galicia*, 4 de julio de 1936.

<sup>685</sup> Entrevista telefónica realizada por el autor de este trabajo a Esther Varela Casares, 20 de febrero de 2008. Este dato también aparece en Proxecto de Investigación Interuniversitario “Nomes e voces”, Entrevista nº 2266.

<sup>686</sup> A Pérez Carballo, “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en op. cit, p. 690-691.

peor de los casos el ejército y la Guardia Civil se mantendrían leales al gobierno republicano. Esta teoría se veía reforzada por el hecho de que la mayoría de los militares desafectos al régimen republicano se había retirado merced a la ley Azaña, algo que no era cierto en absoluto, pero que en esos momentos constituía una expectativa reconfortante.

Y para ahogar definitivamente las dudas que el gobernador civil seguía planteando al respecto, el yerno de Azaña insistió en que, en última instancia, “la República tenía una gran baza: si el Ejército se sublevaba se echaba mano del pueblo y si éste era el que se levantaba, se echaba mano del Ejército”.

A esta afirmación literal -más ocurrencia que aserto-, respondería Pérez Carballo, según el relato legado por su hermano Ángel -testigo directo de los hechos-, con una pregunta que llevaba implícita una respuesta inquietante, incómoda para los miembros de la cúpula de IR con altas responsabilidades en el gobierno o en la estructura política e institucional del estado. Y, de paso, retrataba perfectamente el carácter moderado y el temple de jurista que le había definido como miembro de las Juventudes del partido de Azaña y directivo de la FUE. Una pregunta, en definitiva, que destilaba una dosis de pragmatismo poco acorde con las expectativas proyectadas desde la estrategia de la conciliación a toda costa: “¿Entonces, que haremos los republicanos que nos hemos quedado en medio de ambas fuerzas?”.<sup>687</sup>

¿Qué hacer en medio de dos posibles *revoluciones*?, ¿cómo afrontar la certeza de que una parte de las fuerzas encargadas de la defensa de la legalidad estaban conspirando o, en el mejor de los casos, meditaban seriamente la alternativa de sumarse al proyecto de sublevación contra la República liderado por el general Mola?, ¿se debía confiar sólo en la palabra de honor o había que pedir hechos concretos y verificables aun a riesgo de caer en posibles provocaciones?. Por otra parte, ¿percibían realmente los gobernadores civiles republicanos la efervescencia de la izquierda obrera como el preámbulo de una oleada revolucionaria, más allá de los efectos de la acostumbrada propensión insurreccional de los anarquistas?

El gobernador de Sevilla por aquellas fechas, Varela Rendueles, se enfrentó también a la profundidad de ese dilema y su difícil resolución en aquel contexto histórico, en el que se partía de premisas distintas tanto en el nivel de la organización del estado como en el terreno de las mentalidades y de su complejo engarce o traducción al lenguaje de las relaciones sociales y corporativas. Códigos de honor, percepciones e identidades de casta que los servidores públicos de una democracia avanzada como la republicana debían saber filtrar hasta en los momentos más difíciles, donde las palabras velan algunos actos o posicionamientos dudosos. Algo que no ocurrió de forma suficiente, entre otras razones, por la imposición desde el gobierno central de una táctica de alerta y espera de acontecimientos para neutralizarlos en inicio, o de expectativa activa si se prefiere -pero en ningún momento de pasividad-, destinada a evitar gestos de provocación a ojos de los conspiradores.

Al escribir sobre la traición de uno de los militares que le había prometido fidelidad absoluta a la República, Joaquín Otero Goyanes, el gobernador Varela Rendueles hacía

---

<sup>687</sup> A Pérez Carballo, “Testimonio...”, op cit, p. 691.

una reflexión lúcida sobre el golpe de estado de julio del 36 y situaba el proceso de responsabilidades derivado de su éxito final en un punto intermedio entre la historia y la memoria:

Lo normal es leer en los hechos de antes con ojos de ahora. Resulta difícil, cuando no imposible, leerlos poniendo en los ojos de hoy la mirada, el ver de entonces. Pero es más difícil todavía analizar y juzgar, con mentalidad actual, conductas y resoluciones que, lógicas y naturales entonces, resultan incomprensibles hoy. Los mismos que vivimos o protagonizamos aquellos hechos nos sentimos, al referirlos o contemplarlos ahora, influenciados por lo que posteriormente ocurrió, por sus consecuencias, por cuanto tras aquellos hubo de acontecer. Ya no se trata sólo de la diferencia ambiental, de circunstancias, sino del distinto modo de interpretar conceptos. Lo que hoy puede parecer ingenuidad, indecisión, exceso de confianza era entonces el ser como se debía ser, el juzgar ecuánime, libre de apasionamientos, el confiar en la verdad ajena y en la ajena lealtad. Si se nos decía: -Yo acato la República. -Yo estoy dispuesto a servir a la República. -Tiene usted mi palabra de que seré leal a la República. Esa tenía que ser la verdad y no cabía dudar de ella (...) Aun sabiendo como se sabía que se conspiraba en los cuarteles, se mantenía la confianza en el Ejército. Una cosa es un general determinado, o tres o media docena de generales y otra el Ejército. Generales descontentos los hubo siempre, con la Monarquía liberal, con la Dictadura, con la República; ero el que los hubiera no justificaba la desconfianza hacia todos los generales, jefes y oficiales. Había que conceder a todos la condición no de rebeldes, sino de leales (...) ¿Con que derecho poner en duda la fidelidad a la palabra empeñada por unos hombres que hacen culto del honor y sagrado el empeño de cumplirla? (...) El tiempo y las circunstancias vendrían a demostrarnos el poco valor de ciertas palabras cuando del darla, para luego no cumplirla, se hace ardid de guerra.

Todavía, a pesar de los enconos políticos y de la pasión que enfrentaba a los bandos ideológicos en los pueblos de España, era frecuente el que llegaran hasta los Gobiernos Civiles hombres de izquierdas, incluso de las más extremas agrupaciones, garantizando conductas de hombres de derechas y gestionando la libetas de quienes, políticamente, resultaban enemigos.

Aún por entonces, se creía no sólo en la palabra empeñada, sino en la verdad y en la sinceridad de las simples afirmaciones, en la pureza de la amistad. Y a la misma mesa, sentados a la misma tertulia, podían verse hombres de opuestas tendencias ideológicas, adversarios en política; pero amigos en su vida social y afectiva. Luego resultó que todos llevábamos pólvora en el alma y la pistola o el fusil montados, dispuestos a disparar.<sup>688</sup>

Más allá del afán reivindicador de su propia actuación, y la de tantos funcionarios o gobernadores republicanos sobre los que recayó una buena parte de la culpabilidad de la inacción o ineficacia del estado republicano en los días precedentes y durante el golpe de estado de julio, el gobernador civil de Sevilla incidía en una cuestión primordial para entender en perspectiva el concepto que los gobernantes de la República tenían del papel y la idiosincrasia del ejército. Y, por lo tanto, del verdadero significado tanto de esta institución como de las políticas y estrategias utilizadas en su incardinación en la estructura democrática institucional republicana, cuya percepción en el tiempo explicaría la vigencia de la teoría del fracaso del gobierno republicano y de los gobernadores civiles en la neutralización de la trama conspirativa que provocó la sublevación del 18 de julio. Y esto es así porque los responsables de las instituciones republicanas habían presenciado o conocían perfectamente la historia o la memoria de las injerencias militares en la vida política española, reavivadas con la erupción de las Juntas militares en 1917 y con el golpe de estado de septiembre de 1923, y, por ello, sabían que quienes había tomado esas iniciativas, tendentes a devolver al estamento militar su antiguo papel de actor o árbitro de la política nacional, no representaban a la totalidad del ejército sino sólo a una facción, por más poderosa que ésta fuese.

En estas coordenadas, el error del gobierno de Casares (antes de Azaña) o, en segundo plano, de gobernadores civiles como Varela Rendueles o Pérez Carballo, no fue tanto su fe en las palabras de honor dadas o aceptadas, con o sin hechos fehacientes con que avalarlas, como su certeza o creencia en que si se contaba con los generales de

<sup>688</sup> J. M. Varela Rendueles, *Rebelión en Sevilla...*, op. cit, p 92-94.

las ocho divisiones (o con los jefes de las distintas unidades del Ejército o la Guardia Civil) se podrían conjurar o limitar los conatos de sublevación a escala local o regional y, en consecuencia, se neutralizarían los planes del núcleo directivo de la sublevación, esta vez diseñada en un sentido centrípeto. Un relativo error cometido por los gobernadores civiles como Pérez Carballo debido, tal vez, a que no tenían más opción para basar una estrategia de preservación de la legalidad republicana que la de confiar en sus escasas opciones y recursos, y depender con ello, en buena medida, del grado de compromiso republicano de mandos militares y policiales.

Por otra parte, la confianza que las autoridades republicanas depositaron en la palabra dada por muchos militares, que acudían a ver a Azaña (en las audiencias de los miércoles) y al propio presidente Casares, o les enviaban telegramas de adhesión por decenas, podría ser vista como una evidencia de que la veteranía de éstos y otros políticos republicanos, por contraste con la juventud de un representante del estado o de cualquier político situado ante la misma complejidad situacional, no significaba una mayor protección contra el engaño o el ardid, sentadas ahora las bases de la relación corporativa entre el poder y sus hipotéticos defensores en la necesidad de fijar premisas de una mínima estabilidad para asentar sobre ellas cualquier estrategia.

En sentido contrario, y en relación a la supuesta ingenuidad o inocencia atribuida a un gobernador civil como Pérez Carballo, enfrentado a la opacidad de determinados actos o lenguajes, cabría preguntarse qué debía interpretar y, sobre todo, cuál sería para él la forma correcta de actuar –permítasenos la ironía- cuando llegase a su conocimiento, por la fuente que fuese, qué un anarquista como Juan García Oliver afirmaba, en un mitin celebrado por la CNT en la Plaza de toros de A Coruña (21 de junio de 1936), que “la alianza obrera revolucionaria no puede dedicarse a más objetivos que no sea la revolución”, frase no muy difícil de contextualizar en un sentido muy concreto.<sup>689</sup> En otras palabras, y excesos lingüísticos al margen, no se puede soslayar que tanto militares como anarquistas –estos últimos representaban el otro polo del peligro involucionista, más por experiencias previas que por su peligrosidad real en esos momentos- jugaban, literalmente, una partida sin reglas destinada en gran medida a descabilar, por unas u otras razones, la labor de un gobierno de izquierda burguesa decidido a implementar en breve importantes y controvertidas reformas. En sí, los anarquistas venían demostrando en A Coruña una animosidad contra el Frente Popular que, sin embargo, no implicaría el mismo grado de respuesta gubernamental –en este caso, de censura- sufrido en otras partes del país, lo que nos llevaría a una nueva obviedad relacionada con el factor humano en política.<sup>690</sup>

Las autoridades civiles republicanas no evaluaron suficientemente, pues, algunas variables de gran importancia, el azar la primera -el espíritu gremial o corporativo y el de casta no le irían a la zaga-, que al final harían realidad el golpe de julio, la guerra civil y el fin de la Segunda República. Pero ni Varela Rendueles, ni Pérez Carballo, ni Juan Ruiz-Peinado Vallejo, ni posiblemente ningún otro de los gobernadores civiles enfrentados al desarrollo de la conspiración, dejaron nunca de advertir al presidente

<sup>689</sup> *Solidaridad*, nº 54, 4 de julio de 1936.

<sup>690</sup> *Solidaridad*, nº 56, 18 de julio de 1936.

Casares, o a los ministros de la Guerra o Gobernación, sobre la evolución de las distintas tramas conspirativas, creyesen o no en la supuesta lealtad de los militares, guardias civiles o policías de Seguridad o Asalto que debían auxiliarlos en su labor.

De esa manera, también solicitarían del gobierno de Madrid la adopción de las medidas consideradas como necesarias en cada caso para neutralizar el peligro; generalmente, cambios de destino o traslados de los elementos más comprometidos, aumento de efectivos y permisos para efectuar vigilancias, cuando no la flexibilización de algunas interpretaciones legales.

Varela Rendueles realizaría gestiones análogas a las emprendidas por Pérez Carballo en su demarcación provincial. Por ejemplo, envió a un hermano suyo a Madrid para transmitirle un mensaje a Casares Quiroga sobre la dudosa lealtad de buena parte de la oficialidad de las unidades del ejército acantonadas en Sevilla –recibiendo, por respuesta, la seguridad de que toda la guarnición se mantendría fiel a la legalidad representada por el general Villa-Abrille-; mostró su recelo ante la actuación de los mandos de la Guardia Civil, cuerpo del que desconfiaban la mayoría de los gobernadores republicanos; ordenó vigilancias de forma discreta en los acuartelamientos más señalados por su involucración en el proceso de sedición iniciado –operativo montado por guardias urbanos de paisano, pues ni el vacilante general Villa-Abrille, perfecto equivalente del general Salcedo, ni el Jefe Superior de Policía lo apoyaron- y no desoyó las informaciones trasladadas diariamente al Gobierno Civil por los representantes de los partidos y sindicatos integrantes del gobierno del Frente Popular.<sup>691</sup>

No obstante lo anterior, la estrategia de *apaciguamiento*, de mantenimiento del orden público y de evitación de cualquier tipo de provocación desplegada por el gobierno republicano, puede considerarse no sólo como una de las opciones plausibles para controlar los problemas de seguridad interior que amenazaban la supervivencia de la democracia republicana, sino tal vez como la mejor alternativa para neutralizar un inminente proyecto sedicioso cuando se es consciente de la debilidad y las limitaciones del aparato político-administrativo estatal.

Un proyecto, ahora un plan más violento y mejor coordinado, que no sería apoyado por el ejército como un todo orgánico y que requería para su desactivación de un conocimiento muy exhaustivo por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, que esperaban yugularlo como hicieron con la *Sanjurjada* –aunque eran conscientes, en contra de lo afirmado por muchos autores, de la mayor dificultad de sofocarlo ahora-, enrocadas en la cautela de no enajenarse el apoyo global de los militares a la estabilidad de una democracia arquetípica de la época y sorprendidas a la postre, al igual que los conspiradores, por las dimensiones desmesuradas y contradictorias del golpe liderado por Mola y Sanjurjo. Estrategia de contención compartida, en función de diversas variables, por socialistas y anarquistas, de acuerdo en no emprender ninguna acción contundente o, expeditiva -de tipo preventivo- para neutralizar antes de tiempo el proyecto de sublevación. Esto era así porque los socialistas esperaban encontrar tras la rebelión una oportunidad para catapultar a la clase

---

<sup>691</sup> J. M. Varela Rendueles, *Rebelión en Sevilla...*, op. cit, p.77-78.

obrero al poder y los anarquistas estaban convencidos de poder vencer con las armas a las fuerzas contrarrevolucionarias y acercarse, de ese modo, a la utopía del comunismo libertario.<sup>692</sup>

A este respecto, Paloma Aguilar ofrece una vez más una perspectiva de análisis conceptual muy sugerente, al adentrarse en la compleja relación entre memoria y aprendizaje en procesos históricos críticos o transicionales. Esta autora afirma que “aquellos que toman decisiones políticas tienden a recalcar excesivamente las lecciones derivadas de su propia experiencia personal y a infrautilizar los aprendizajes ajenos”.

Y ese peligro acecharía a Azaña y Casares –en agosto de 1932, presidente del gobierno y ministro de la Guerra, el primero, ministro de Gobernación el otro-, la táctica empleada por un enemigo que en el verano de 1936 no era el mismo que cuatro años atrás. Ni siquiera era el de abril de ese año, pues había cambiado para bien suyo y perjuicio de la República.<sup>693</sup>

En conjunto -y como modo de contemplar matices o ángulos menos transitados en el análisis de procesos históricos complejos-, la actuación de ambos líderes políticos, de su partido (IR), del gobierno y su estructura y del propio Frente Popular, antes y después del golpe de julio, podría ser contemplada a la luz de dos premisas nuevas: la primera estribaría en que “cuando una decisión política tiene éxito, pocas veces se reflexiona sobre los costes de la misma, ni tampoco si a través de una decisión distinta se hubiesen podido conseguir mejores resultados” –o si en realidad el éxito fue debido a la decisión adoptada o devino a pesar de ella-; la segunda trascendería el fracaso de determinadas decisiones o medidas para indagar si éstas resultaron de la elección de la mejor opción entre las alternativas posibles en un momento histórico concreto, o, en su caso, averiguar qué hubiera sucedido con la adopción de otras diferentes pero ajustadas a un marco estratégico también coherente. Aquí, resuena como contrapunto y referencia interpretativa la tesis de Edgar Morin sobre el grado de incertidumbre –el azar y el desorden no se traducirían en jirones de pura arbitrariedad- inherente a cada decisión adoptada o realidad de partida a considerar.

Pero Casares y Azaña también habrían aprendido de experiencias ajenas, por ejemplo de la vivida por el gobierno radical-cedista en octubre de 1934, y tenían la seguridad de que si los anarquistas u otras fuerzas de la izquierda obrera hubieran intentado algún otro movimiento revolucionario en julio, se habría podido neutralizar con ayuda del ejército y los cuerpos policiales. Por ello, el intento de control de las organizaciones izquierdistas o anarquistas se orientaba a que sus actos o su simple aureola pudieran excitar a los militares. Y esa relativa seguridad la proyectaban ambos hacia la amenaza del sector golpista del ejército en la certeza de que la lealtad de los mandos situados al frente de las divisiones o unidades que, a priori, poseían un mayor valor estratégico - junto a la labor de control desarrollada en especial durante los meses de junio y julio por el gobierno, los gobernadores civiles y los cuerpos de seguridad-, podría ser suficiente para erradicar cualquier proceso sedicioso una vez que éste hubiera emergido a la superficie en su totalidad.

<sup>692</sup> S. Juliá, “La República enfrenta la rebelión militar”, en J. Villa, *El golpe 75 años (1936-2011)*, Sevilla, 2012, p. 42-44.

<sup>693</sup> P. Aguilar Fernández, *Memoria de la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1996, p.52.



El gobierno republicano conocía, a grandes rasgos, la marcha de la conspiración en las semanas previas al golpe, eso parece evidente. El director general de Seguridad, Alonso Mallol, había tejido una amplia red de informadores en torno a las tramas conspirativas civil y militar, ayudado en ello por oficiales de la UMRA, y pronto se aprestó a estimular la actividad de delatores y soplones en los cuarteles. Del mismo modo, se intervinieron las líneas telefónicas de los principales actores de la conspiración, instalándose, además, escuchas en sus domicilios respectivos (obtuvieron, incluso, seudónimos y contraseñas operativas), o se convenció sutilmente a José Antonio de que sus cartas –con información significativa acerca de los preparativos del golpe–, interceptadas por los agentes gubernamentales antes de salir de prisión, llegaban a su destino gracias a su capacidad de maniobra en la clandestinidad.

Toda esta labor de inteligencia sirvió para confeccionar una lista de más de quinientos nombres de implicados en el proyecto subversivo y, sobre todo, para mantener informados a los presidentes del gobierno y de la República, que, a pesar de la insistencia del subsecretario de Presidencia, Carlos Esplá, y del mismo Alonso Mallol, en que se debía proceder a las detenciones de los más significados enemigos de la República, descartaron tal opción por su carácter expeditivo, centrados como estaban en el seguimiento de las huelgas protagonizadas por los anarcosindicalistas, como la de la construcción en Madrid.<sup>694</sup> En conclusión, el gobierno había hecho sus deberes y disponía de información más que suficiente como para saber quién estaba propagando el ruido de sables, pero quizá ese conocimiento exhaustivo le invitara a cultivar un estado de confianza exagerado al que, con las cautelas pertinentes, también contribuiría la percepción de que la cúpula del ejército –aunque no todos los nombramientos y traslados habrían sido los más indicados– se bastaría para controlar cualquier brote golpista que no se superpusiera a un hipotético estallido anarquista.

Aquí estribaba el matiz principal o la clave de esta cuestión –más o menos sutil– consistente en desmontar cualquier argumento provocador de las suspicacias o temores militares para, de ese modo, no arriesgar los apoyos que el gobierno republicano creía tener en el Ejército, obtenidos tras una labor consciente de recomposición de su cúpula, al menos en los puntos geográficos considerados como más relevantes o sensibles en términos estratégicos.

Esta confianza gubernamental, sin embargo, no podía estar fundada en la existencia de un servicio de inteligencia de exclusiva dependencia gubernamental, dotado de la autonomía suficiente para resultar inmune a las interferencias del Ejército y la Guardia Civil, y de algunos otros cuerpos policiales donde el elemento civil no prevaleciese en las funciones de prevención e información sobre las amenazas que afectaban a la seguridad del estado.

Estas unidades o cuerpos de inteligencia e información adscritos al poder civil brillaban por su ausencia, aun cuando las brigadas político-sociales, pertenecientes al Cuerpo de Vigilancia o la Oficina de Información y Enlace (embrión de las actuales brigadas de información), estaban ya operativas desde hacía tiempo con resultados muy

---

<sup>694</sup> P. Angosto Vélez, *José Alonso Mallol. El hombre que pudo evitar la guerra*, Alicante, Instituto Gil-Albert, 2006, p. 213-214.

desiguales, pues dependían de los equilibrios profesionales e ideológicos existentes en las plantillas locales o en las unidades centrales de la policía gubernativa.

El gobernador civil de A Coruña, Pérez Carballo, por su parte, no se mostraba precisamente confiado ante los últimos acontecimientos, reveladores de las tensiones sociales existentes y del flujo constante de la conspiración en la provincia de A Coruña y en toda Galicia. En uno de sus frecuentes conversaciones telefónicas con Madrid -hablaba prácticamente a diario con Casares Quiroga-, el gobernador civil comunicó haber recibido una lista que le habría entregado en su despacho una comisión formada por representantes de partidos de izquierda (otra lista para cotejar con las ya conocidas por el gobierno republicano), compuesta por los nombres de civiles y militares complicados en la trama conspirativa en la provincia de A Coruña.

Parecía evidente que Pérez Carballo había encontrado en esta ciudad motivos suficientes para cuestionar, de ese modo, la referencia básica de la neutralización de la *Sanjurjada* -un precedente exitoso basado en dejar que el peligro aflorase a la superficie para poder así controlarlo más fácilmente- como argumento esencial para sustentar el plan o la respuesta gubernamental a un previsible proyecto de involución, en la que Casares tal vez confiaba en exceso. No en vano, el abogado madrileño había presenciado de forma directa -y en calidad de secretario particular del subsecretario de la Presidencia, Enrique Ramos-, algunas fases del proceso conducente a aquellas tensas horas de agosto de 1932 y la elaboración de la respuesta gubernamental a la revuelta encabezada por Sanjurjo, experiencia como observador atento que no bastaría para disipar un temor justificado ante el desarrollo, rodeado de impunidad, de la conspiración en Galicia durante los meses previos al golpe de estado de julio del 36.

Al parecer, el presidente del gobierno desecharía la información sobre los nombres de los presuntos conspiradores, proveniente del Gobierno Civil coruñés, como parte del creciente número de rumores orientados hacia una realidad ya asimilada como una rutina política o una disfuncionalidad estructural más a afrontar -aunque el análisis prospectivo resultase más o menos erróneo- por los órganos del poder central.

De hecho, Casares prohibiría al gobernador Pérez Carballo la adopción de cualquier medida susceptible de erosionar la estrategia de vigilancia y espera decretada, habida cuenta, además, de la “calidad” de algunas de las personas consignadas en el citado documento.<sup>695</sup> Esto no significa, en absoluto, que el gobernador Pérez Carballo no moviese sus piezas, con mayor o menor fortuna, para asegurarse apoyos vitales en caso de una nueva insurrección, dada, además, la controvertida relación entablada por el abogado madrileño con el general Salcedo y con algunos de los mandos de la Guardia Civil en A Coruña, celosos de la interferencia del poder civil en el funcionamiento y actuación del Cuerpo y muy reticentes a ceder atribuciones consideradas como propias. Todo lo contrario, pues el deseo del gobernador de tomar en lo posible las riendas de la situación se tradujo de inmediato en su intento de recuperar la iniciativa tras su abrupto aterrizaje en el Gobierno Civil de A Coruña, o más bien de controlar más de cerca la actividad operativa y “política” de la Guardia Civil, reflejada también en la perspectiva

---

<sup>695</sup> La referencia a la lista en “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, op. cit., T II, p. 690.

de análisis y en las intenciones reales de sus mandos, estrategia que generó un efecto contradictorio y contribuyó a distanciar aún más a éstos de la máxima autoridad civil de la provincia.

En sí, Pérez Carballo habría requerido, con frecuencia casi diaria durante las semanas previas al golpe, al teniente coronel José Clarés Cruz y al comandante José Álvarez Ríos, máximos responsables de la Guarida Civil en la provincia, para que se personasen en su despacho con el fin de tratar, en principio, asuntos de orden público. Este hecho revelaba tanto la estrategia del gobernador como la de ambos jefes de vigilarse mutuamente. La vigilancia ejercida sobre Pérez Carballo por los mandos del Instituto armado se traduciría, en caso necesario, en un intento de desviar su atención o de mantenerlo engañado en la interpretación de determinados hechos, en un juego a dos bandas que dependería de las oscilaciones de la balanza entre la legalidad vigente y el deber corporativo. En concreto, la ambigua posición del comandante Ríos resultó clave en el desenlace del golpe de estado del 20 de julio y, tras el éxito de la conspiración, daría lugar a una trayectoria llena de contradicciones que, en un giro inesperado, le llevaría finalmente a pasar unos años en prisión.

Esta pauta impuesta por Pérez Carballo (la presencia, casi permanente, de Clarés y Ríos en el Gobierno Civil) se había contemplado con desconfianza por parte de miembros significativos de la Comandancia provincial de la Guardia Civil, que recelarían tanto del excesivo tiempo que ambos pasaban al lado del gobernador civil como del papel absorbente desarrollado por la autoridad civil respecto de ciertas competencias consideradas como exclusivas de este Cuerpo, prueba de que una parte de ellos ignoraban en realidad los verdaderos planes de actuación y los diferentes roles asignados dentro del proyecto subversivo. De hecho, el capitán Roger Oliete, enlace exclusivo de la Guardia Civil de A Coruña en los preparativos del golpe encabezado por el ejército, destinado casualmente a esta Plaza a finales de abril, era el único que conocía a la perfección los detalles del nuevo guion de la conspiración.<sup>696</sup>

### **Comienza la sublevación en Marruecos: A Coruña espera su turno.**

Las noticias de la sublevación de las tropas del Ejército de África llegó a A Coruña la tarde del viernes 17 de julio de 1936. Tanto el ministro de Gobernación, Juan Molés, como el subsecretario de este Ministerio se comunicarían con Pérez Carballo y el resto de los gobernadores gallegos para advertirles de la situación y transmitirles las primeras instrucciones al respecto. Así por ejemplo, el gobernador civil de Pontevedra relató que desde las dieciocho horas recibió constantes llamadas del ministro anunciándole que el subsecretario de la Presidencia, Osorio Tafall, se encargaría de darle instrucciones concretas.<sup>697</sup>

Casares Quiroga, y los demás miembros del gobierno, por su parte, también participarían en este carrusel frenético de comunicaciones telefónicas y telegráficas con las distintas autoridades civiles, militares y policiales para tratar de cortar las previsibles ramificaciones del golpe en marcha. Según Luis Lamela, Pérez Carballo conoció los

<sup>696</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 25, 73 (v) y 93.

<sup>697</sup> ATMRN, Causa, 660/36, fol. 52.

sucesos acaecidos en el Protectorado a primera hora de la noche del viernes, justo en el transcurso de la conversación telefónica mantenida también con Osorio Tafall, quien le ordenaría reunir a todos los dirigentes políticos y sindicales de la ciudad para proponerles la constitución de un frente común contra los militares golpistas, que en los casos de A Coruña (y de otras muchas provincias) debía establecerse, considerando las fracturas internas existentes en los respectivos comités locales del Frente Popular, bajo la consigna de la unidad de actuación frente a una amenaza inminente para la supervivencia del régimen republicano. Se improvisaría de ese modo un Comité de defensa de la República, órgano informal no previsto como tal en realidad, pero que si estaba amparado en su constitución por la Ley de Orden Público, pues para perturbaciones excepcionalmente graves, que no exigieran la declaración del estado de guerra, se facultaba a la autoridad gubernativa a reclamar en su auxilio a las autoridades pertinentes de *todo orden*, y en esta categoría podrían entrar los dirigentes políticos y sociales más relevantes en cada caso.<sup>698</sup>

Como es obvio, Pérez Carballo se puso en contacto de inmediato con el máximo responsable de la VIII División, el general Salcedo, y con otros jefes militares y policiales –con el coronel del VI Tercio, Pérez Tello, hablaría posiblemente al día siguiente, fecha de la llegada de éste a la ciudad-, de las que obtuvo, al menos de palabra, la seguridad de su lealtad y colaboración para con las autoridades de la República, en tanto en tanto –se entiende- no se produjeran alteraciones muy graves del orden público.

En concreto, el Comité de defensa de la República en A Coruña, similar a los constituidos a lo largo del país, estaría formado por el gobernador civil, Ramón Maseda (presidente de la Agrupación local del PSOE), José García García (JSU), José Moreno Torres (secretario general de la CRG), Francisco Mazariegos (UGT), Alfredo Suárez Ferrín (alcalde de la ciudad, UR), Eladio Muíños (CNT), J. Méndez Esporín (FAI), Manuel Fernández Fernández (PS), Nicolas Torres (PCE), Plácido R. Castro (PG), Manuel Guzmán (IR) y el representante de las Juventudes de este partido, Luis Vidal, nombramiento este último en el que se podía ver claramente la mano de Pérez Carballo, antiguo dirigente de esta organización juvenil a nivel nacional.<sup>699</sup>

Las funciones de coordinación desarrolladas por este Comité –claramente diferenciadas de las asumidas por el que representaba a la coalición electoral de febrero, aunque asentadas sobre su estructura o modo de articulación- entroncarían, en conformidad con lo dispuesto en la citada *Ley de orden público*, con la administración por parte de la autoridad gubernativa de aquellas medidas del estado de guerra compatibles con el mando civil en labores de protección, custodia y vigilancia de

<sup>698</sup> L. Lamela, *Estampas de injusticia*, op. cit, p.37.

*Ley de orden público*, de 28-6-1933, artículo 17º.

<sup>699</sup> L. Lamela, *Estampas de injusticia*...op. cit, p. 37-39. A estos nombres, se añadirían algunos más, como el del pintor galleguista Luis Seoane y el secretario del Ayuntamiento coruñés Francisco Prego (IR), o los de los militantes comunistas Bilbao y Montero (en lugar del de Nicolás Torres), véase a este respecto, “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña” y “Testimonio de Manuel Fernández, dirigente Sindicalista, defensor del Gobierno Civil de La Coruña el 20-7-36”, ambos contenidos en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia*... op. cit, p. 570 y 605, respectivamente.

edificios, lugares estratégicos y de personas o grupos especialmente significativos por su relación con el poder civil o la trama conspirativa. En consecuencia, estaría aquí contemplada la vigilancia de los establecimientos y cuarteles militares, labor emprendida desde mucho antes del 20 de julio y reforzada en las horas previas al golpe de estado, y casi podría decirse que, para el desarrollo de estas funciones, se contaría con centenares de obreros o militantes izquierdistas de procedencia heterogénea, que transitaban por las concurridas calles del corazón o centro neurálgico de la ciudad.

Este servicio de información doméstico estaría probablemente constituido por diferentes grupos de individuos que actuarían en paralelo desde probablemente finales de abril, y sin más coordinación que la habilidad demostrada en cada momento por el gobernador civil correspondiente. Vinculados al ejército –Caridad Pita, su ayudante Goizueta y algún otro oficial, junto a sus enlaces en las distintas unidades-, a las fuerzas de seguridad –el teniente de Asalto Pousada Serantes tendrá un papel destacado en este sentido- o a las organizaciones de izquierda –entre ellos, recordemos, los *hermanos de la lejía*, socialistas, uno de los cuales, France García, suministró una valiosa información a Pérez Carballo sobre los movimientos de los conspiradores del fracasado *putsch* de abril-, ninguno de los integrantes de estas células informativas tendría, sin embargo, la capacidad para acceder a las claves que habrían desactivado la sublevación en A Coruña. Estas claves desvelarían el nombre de los enlaces designados para el golpe de julio o la verdadera posición, si es que habían tomado alguna en concreto a esas alturas, de generales como Salcedo, coroneles como Torrado (Artilería) y de los máximos responsables de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Clarés y el comandante Ríos.

En el caso del general Caridad Pita, que quizás hubiera podido, desde su posición en el ejército y su vocación de esforzada y sincera lealtad a la República, haber jugado un papel más decisivo para evitar el fatal desenlace del golpe del 20 de julio en Galicia, se daba la circunstancia, negativa para los intereses del gobierno republicano, de su reconocida identidad ideológica y legalista. En consecuencia, su vinculación gubernamental le marcaría como seguro opositor a cualquier tipo de operación sediciosa y le privaría del conocimiento de determinadas reuniones o movimientos de la trama conspirativa –su imagen pública distaba de cualquiera de las posiciones ambiguas o de las dobles lealtades exhibidas por sus compañeros de armas-, información que trató de captar por sus propios medios con resultados no siempre satisfactorios.

Eso, lo esencial, el haber penetrado en las entrañas del golpe y casi en las verdaderas intenciones de algunos de los protagonistas de esta conspiración, era pura labor de inteligencia, y esa herramienta no había madurado entre los recursos con los que un gobernador civil contaba para enfrentarse a una urgencia de este calibre. Las fuerzas policiales y militares españolas no contaban con especialistas en inteligencia que, además, se subordinasen al poder civil, a excepción de unas insuficientes –y, en términos ideológicos, sospechosas o ambivalentes- brigadas político-sociales, adscritas al Cuerpo de Vigilancia y aún no liberadas de la impronta reaccionaria de la dictadura de Primo de Rivera, complementadas por una Oficina de Información y Enlace de reciente creación. Por ello, las autoridades republicanas debían confiar en fuentes o mandos en teoría *leales*, pero que no dejaban de ser miembros del ejército o la Guardia

Civil –precisamente, los dos focos más importantes de peligro involucionista- y, por tanto, estaban también expuestas, a través de vínculos sentimentales y corporativos, a una percepción más real de determinados movimientos o sesgos internos.

Los hermanos García García, los *hermanos de la lejía*, reconocieron, en la causa instruida contra ellos tras el golpe militar, que habían acudido al Gobierno Civil las noches previas al estallido de la sublevación, como también lo hicieron numerosos civiles –a los que ya se podría calificar de milicianos por su disposición a enfrentarse a los pronto sublevados-, en busca de armas e instrucciones para colaborar en la defensa de la legalidad vigente, con el fin primordial de oponerse a la inminente acción del ejército. En el caso del citado France García, hay que subrayar el hecho de que su presencia nocturna en el Gobierno Civil se remontaba a dos semanas antes de la declaración del estado de guerra, circunstancia reveladora de su papel de confidente o, en todo caso, persona de confianza del gobernador Pérez Carballo –tanto como para delegar en él alguna misión expeditiva de mera información-, mientras que Babel habría acudido a ese lugar las tres tardes-noches previas al golpe.<sup>700</sup>

En cualquier caso, la actuación de estos miembros de la JSU coruñesa debe ser matizada tanto por su carácter un tanto histriónico de agitadores políticos, como por el hecho de que abandonasen el Gobierno Civil justo antes de que se iniciase el fuego artillero contra este edificio durante la tarde del lunes 20, decisión adoptada también por un buen número de los que habían permanecido en esas dependencias durante las horas anteriores, como los funcionarios de este organismo. Los trabajadores del Gobierno Civil se movieron en su mayoría por razones de una neutralidad ideológica subyacente, que rayaba el límite entre una estrategia auto-exculpatoria (o de evitación de riesgos) y una muestra notoria de deslealtad a la causa de la República. Por su parte, también dejaría el lugar el líder anarquista José Moreno Torres, decidido a reclutar hombres o conseguir más armamento en los núcleos de población próximos a la ciudad.

Fue, precisamente, el secretario de la CRG quien reclamaba dos días antes (esto es el sábado 18), en el transcurso de un mitin celebrado en la Plaza de toros coruñesa, la entrega inmediata de armas para combatir a los militares,<sup>701</sup> o proponía, en la noche de ese mismo día, un plan para asaltar los cuarteles de A Coruña, iniciativa rechazada inmediatamente por el gobernador Pérez Carballo. Proyecto temerario que rivalizaría en su impracticabilidad con la idea de secuestrar y mantener como rehenes a los familiares de los principales cabecillas militares de la conspiración, manejada por algunos de los concentrados en el Gobierno Civil las horas inmediatas al golpe.<sup>702</sup>

En las horas que pasaron en el Gobierno Civil, los miembros del Comité de defensa o los ya investidos como milicianos, vigilantes o agentes cívicos –abundaban los incluidos en varias de estas categorías-, habían participado en labores de patrulla por la ciudad, atendido los turnos de vigilancia establecidos y colaborado en los preparativos para la defensa del edificio –levantamiento de barricadas, protecciones de sacos terreros

<sup>700</sup> ATMRN, Causa 127/36, fol. 5 a 7 (declaraciones de France, Babel y Jaurés García García)

<sup>701</sup> Las declaraciones de los funcionarios del Gobierno Civil y del Ayuntamiento de A Coruña, incluido el alcalde Suárez Ferrín, en ATMRN, Causa 207/36, en general.

<sup>702</sup> “Testimonio de Manuel Fernández, dirigente Sindicalista, defensor del Gobierno Civil de La Coruña el 20-7-36”, en C Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, p.605.

y plataformas para armamento pesado-, intensificados en la madrugada del lunes 20. Mientras tanto, se habían realizado gestiones preventivas para la obtención o requisa de armas, ordenadas por el Comité de defensa o por el propio Gobierno Civil en nombre del ejecutivo central.

Ambos órganos tratarían de actuar de forma coordinada en este y otros asuntos –la inercia de los acontecimientos o la envergadura de la amenaza enfrentada dictaban ciertos límites, al menos de forma temporal-, sin querer prodigarse en interferencias mutuas insalvables ni evidenciar síntomas de colapso letales –y repartidas, de manera oficial, a partir de la mañana del lunes 20–, pero en relación a los intentos de requisa de armas o municiones se verían superados por grupos de obreros o militantes de izquierda que venían actuando por iniciativa propia desde hacía semanas o, incluso, meses. Iniciativas o, directamente, provocaciones como la plasmada en un robo practicado, a escasas horas del golpe de Estado, en las oficinas de la Audiencia Provincial, ante la confusión generalizada provocada por el debate en torno a la posibilidad o necesidad de armar a civiles.

En puridad, el Comité de defensa articulado en torno al Gobierno Civil, o los organizados a lo largo de la provincia, si pudieron influir en las decisiones de Pérez Carballo, al conocer con más profundidad la realidad social y política de la provincia e implicar un peso político específico real, no determinaría las decisiones adoptadas por el gobernador civil hasta el punto de absorber sus funciones y eclipsar su capacidad de liderazgo. Algo que ocurriría en otras provincias como Málaga o Pontevedra, donde los diferentes comités de defensa establecidos constituyeron un verdadero poder paralelo que fue siempre por delante del gobernador Gonzalo Acosta.<sup>703</sup> Por su parte, Pérez Carballo impuso siempre la autoridad y las directrices recibidas del gobierno de Madrid, el deber y la disciplina política pesaron en su actuación de forma significativa. Y si pecó tal vez de una falta de iniciativa o liderazgo, no es fácil interpretar que habría podido hacer, en posesión plena de esos atributos, sin el apoyo, en cualquier caso, del Ejército o la Guardia Civil, entregados desde mayo a las tareas subversivas coordinadas por Mola.

Avanzando un punto importante en el que se profundizará más adelante, debe distinguirse aquí el hecho de que miembros de las organizaciones izquierdistas personados en el Gobierno Civil consiguiesen armas por su cuenta, sin orden expresa del gobernador -convirtiéndose así en una suerte de guardias cívicos sobre los que recaerían misiones de protección o vigilancia del edificio o de patrulla de las calles de la ciudad-, del verdadero significado del acto de entrega de armas realizado en la mañana del lunes 20 bajo la dirección del Gobierno Civil, provisto de la autorización concedida el día anterior por el recién constituido gobierno Giral.

La entrega de armas se encauzó a través de dos vías paralelas que desembocaron en un mismo fracaso. La primera, malograda debido a la velada interferencia del teniente coronel Clarés,<sup>704</sup> claramente contrario a la misma, y a la intermediación a regañadientes del comandante de la Guardia Civil Ríos -obligado por el gobernador

<sup>703</sup> A. Rodríguez Gallardo, “Golpe de estado y represión franquista en Pontevedra”, en J. de Juana y J. Praa, *Lo que han hecho en Galicia...* op. cit, p. 141.

<sup>704</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 8.

civil y las circunstancias debía cumplir las órdenes de éste, cosa que evitó en lo posible, moviéndose siempre entre la obstrucción silenciosa o el puro sabotaje de la causa gubernamental-, consistió en ordenar a una parte de los jefes de puestos de la provincia la entrega de las armas custodiadas en depósito a los alcaldes respectivos, con el fin de que éstos las repartiesen entre las fuerzas de izquierda.

La segunda, que también partió del Gobierno Civil ese mismo día 20 -aunque los testigos no supieron precisar la fuente exacta, todo hace suponer que esta decisión fue adoptada por el gobernador civil-, estableció un canal para advertir a los civiles comprometidos en la defensa de la República que debían acudir a armarse en sus respectivos partidos o sindicatos,<sup>705</sup> o permitió, paralelamente, que se repartiera a representantes políticos, civiles y paisanos personados en las dependencias del Gobierno Civil cerca de medio centenar de escopetas de caza de uno y dos cañones, para estupor de buena parte de los presentes, que esperaban recibir otro tipo de armamento.<sup>706</sup>

Esta circunstancia –no derivada en exclusiva de la responsabilidad del gobernador civil- en nada ayudaría, seguramente, a que algunos cultivadores de la memoria de la izquierda, como es el caso de Domínguez Benavides, quien podría haber presenciado ésta o alguna otra secuencia de los acontecimientos producidos aquellos días en A Coruña y su provincia –o conocerlas a través del relato directo de testigos o protagonistas de los mismos-, matizasen sus tesis en contra de la actuación de Pérez Carballo, a quien este autor tacharía de incapaz por su negativa a armar al pueblo, fundamentalmente, posición dictada por el gobierno que no habría sido secundada -según esta versión- por Juana Capdevielle y otros mandos policiales.<sup>707</sup>

Pero para poder repartir armas, había primero que disponer de ellas, asunto de difícil abordaje, pues tanto las disponibles en el Gobierno Civil como en la Secretaría de la Audiencia Provincial, radicada en el mismo edificio, eran muy escasas y las rescatadas o eran defectuosas o no resultaban adecuadas para su uso en el contexto indicado.

En otras palabras, las armas sólo podían provenir de dos fuentes: los arsenales o depósitos del ejército o la Guardia Civil, obviamente inasequibles por la implicación de sus diferentes unidades en el golpe de estado; las requisas en armerías o a particulares, opción que tampoco aportarían las suficientes, como era de esperar.<sup>708</sup>

Aun con todo, restaría una última oportunidad para que los defensores de la legalidad republicana se dotasen de alguna baza defensiva que jugar si la situación así lo demandaba, ésta técnicamente mucho más compleja de cara a un posible uso militar, pues se trataba de los cartuchos de dinamita depositados en los sótanos del Ayuntamiento de A Coruña para su utilización en las obras municipales, de cuya incautación se ocupó el concejal Martín Ferreiro siguiendo órdenes del Gobierno Civil, a la cabeza de un grupo numeroso de obreros y utilizando para ello un automóvil de propiedad municipal cedido a la autoridad gubernativa.

<sup>705</sup> ATMRN, Causa, 207/36, fol 5 y 20

<sup>706</sup> “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36”, en C. Fernández Santander, *alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p. 572.

<sup>707</sup> M. Domínguez Benavides, *La escuadra la mandan los cabos*, op. cit, p.124-125.

<sup>708</sup> Sobre la requisa en la armería propiedad de Santiago Eiroa, ordenada en la mañana el día 20, véase ATMRN, Causa 207/ 36, fol. 156



Una última opción, un último cartucho –permítasenos la expresión- que, a diferencia de lo evocado en los rumores falsos extendidos en la ciudad en aquellas horas críticas (para intoxicar sobre la existencia de un vagón lleno de armas y explosivos en la estación de tren de A Coruña), al menos pudo verificarse en favor de los defensores de la legalidad vigente con la incautación de la dinamita custodiada por el consistorio coruñés.

En este caso se apreciaba la intervención de Pérez Carballo, pues semanas atrás, y en medio de la huelga de empleados municipales, ya le había ofrecido su ayuda al alcalde Suárez Ferrín para trasladar, por motivos de seguridad, la dinamita al edificio del Gobierno Civil. El gobernador civil, en todo caso, no actuaría fuera de la órbita gubernamental, pues la comisión que procedió a la incautación de este tipo de explosivo se personó en el Ayuntamiento la tarde del día 19, casi cuarenta y ocho horas después de que el gobierno Casares enviase a los distintos Gobiernos Civiles las primeras órdenes e instrucciones para organizar las requisas preventivas de armamento, y de forma casi simultánea a que el ejecutivo presidido por Giral autorizase la entrega efectiva de armas a las organizaciones políticas y sindicales afines al Frente Popular.<sup>709</sup>

Independientemente de cualquier otra consideración acerca de la utilidad o eficacia final de la entrega de armas, gestionada o intermediada por el Gobierno Civil de esta provincia, si parece evidente que el gobernador Pérez Carballo ordenó finalmente la distribución de las mismas a partidos y sindicatos, en cumplimiento de las instrucciones dictadas la víspera por el nuevo gobierno encabezado por otro de los hombres de confianza de Azaña. Esta decisión se tomó no sin las reservas y vacilaciones que a un gobernador de IR le *debía provocar* el mero hecho de armar a civiles, cuando no a militantes de la izquierda obrera, y especialmente en un contexto en el que se quería evitar cualquier gesto de provocación hacia los militares o estaba tan reciente el empeño casi compulsivo de Casares Quiroga en impedir que se armase a las masas.

Piénsese, si se quiere enfocar mejor este problema, en que el gobierno Giral empezó a coordinar la entrega de armas a primera hora de la tarde del domingo 19, mientras que la sublevación en A Coruña tardaría aún casi veinticuatro horas en estallar, realidad que configuraría un espacio de sombra e incertidumbre muy difícil de gestionar desde la perspectiva de equidistancia que debía emplear el Gobierno Civil (con mayor o menor convicción), rota definitivamente en el mediodía del lunes 20 para afrontar la inexistencia de los medios técnicos y humanos o del tiempo material necesarios ante una crisis de esta naturaleza. Estrategia de equidistancia que, en el tiempo de su aplicación, traducía en especial el chantaje ejercido por militares y guardias civiles sobre las autoridades republicanas –que, inmersas en una contradicción flagrante, debían prepararse para un golpe de estado a espaldas de quienes actuarían simultáneamente, y de forma corporativa, como defensores y virtuales transgresores de la legalidad vigente- y la supervivencia de un estado democrático, expertos en la turbia tutela de la coacción, instrumento utilizado para determinar políticas y decisiones que debían vertebrar la paz y la convivencia ciudadana.

---

<sup>709</sup> Testimonio de Alfredo Suárez Ferrín, alcalde de A Coruña, en ATMRN, Causa 207/36, fol. 141.

La obsesión de Casares Quiroga por evitar las provocaciones a los militares y la creación de milicias armadas se translucía, perfectamente, en el relato del siempre agudo Julián Zugazagoitia, al recordar como el político gallego llegó a amenazar con el pelotón de fusilamiento a quien repartiese armas a las masas sin su consentimiento.<sup>710</sup> Dudas que trató de avivar, de forma interesada, el secretario del Gobierno Civil, Fausto Rubiín y Puig, cuando debatía con el gobernador Pérez Carballo el modo de efectuar una requisita generalizada de armas y explosivos, para su distribución en el momento oportuno, decretadas por el gobierno entre los días 17 y 19 de julio.<sup>711</sup> Las mismas fechas en que los gobernadores de Pontevedra y Orense, Gonzalo Acosta y Gonzalo Martín March, declararon haber recibido instrucciones del subsecretario Osorio Tafall en ese sentido y otros -requisita y, en su caso, posterior entrega de armas, expedición de licencias gratuitas para su uso, pautas para el nombramiento de guardias cívicos y la intermediación con el fin de dividir a los conspiradores-, testimonios importantes para contrastar y confirmar la disposición de Pérez Carballo a cumplir las medidas que se arbitrarían desde el gobierno, como medio, al menos, de estar preparado ante la eventualidad (o seguridad) de un levantamiento militar.

Por cierto, el gobernador de Pontevedra, Gonzalo Acosta, rehusaría cumplir en un principio las órdenes enviadas desde Madrid para rectificar más tarde, cambio de postura justificado ante los instructores de su causa en función de las graves amenazas proferidas hacia su persona por el propio Osorio Tafall y algunos representantes de las fuerzas constituyentes del Frente Popular en la provincia, actitud diferente a la del gobernador civil de Ourense, Martín March, que recibió la orden de entrega de armas el domingo 19 y no pudo llevarla a cabo porque no disponía de ellas, limitándose a expedir licencias gratuitas de uso.<sup>712</sup> Este dato aportado por el gobernador civil de Ourense, en el caso de ser exacto, ratificaría el hecho conocido de que el gobierno Giral decretó la distribución de armamento a las organizaciones políticas y sindicales nada más tomar el poder, pues esa era una de las cláusulas establecidas para iniciar su tortuoso mandato.

Pérez Carballo, pues -y con un posible retraso de algunas horas sobre las órdenes dadas por Martín March en Ourense-, verificó tanto la requisita como la entrega posterior de las armas, entre el respaldo de la legalidad emanada de las decisiones urgentes adoptadas por Giral y su gobierno y la obligación impuesta de no proceder al reparto de armas hasta que el ejército o la Guardia Civil se echasen a la calle, pues todavía se tenía la esperanza de que, finalmente, éstas permaneciesen fieles a la República.

La orden fue clara y se dio en la mañana del día 20 en las direcciones apuntadas. Cuestión distinta es discernir si las armas que estaban a disposición del Gobierno Civil eran de calidad, suficientes en número o si podían ser eficaces en manos del pueblo, habida cuenta de la hostilidad a la democracia republicana que imperaba -junto a un cinismo aún más pernicioso- entre militares, guardias civiles y miembros del Cuerpo de Seguridad. Así como, bajo esta perspectiva, quedan dudas sobre si el procedimiento o la

<sup>710</sup> L. Lamela, *Estampas de injusticia...* op. cit, p. 64; J. Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 69.

<sup>711</sup> ATMRN, Causa 207/ 36, fol. 95.

<sup>712</sup> ATMRN, Causa 660/36. Fol 52-53 (G. Acosta), Causa 438/36, fol 21 (G. Martín March).

estrategia empleados para su reparto fueron los más adecuados, cuando, además, ya era probablemente demasiado tarde tanto en A Coruña como en el resto de España, para que su hipotético uso coadyuvase a la defensa de la República.

La tesis esbozada en estas líneas matiza significativamente afirmaciones realizadas por autores como R. Carr, en el sentido de que el gobierno republicano no entregó armas al pueblo en Galicia, a diferencia de lo que si habría hecho en el resto de España.<sup>713</sup>

En las horas posteriores al comienzo de la sublevación en Marruecos, Pérez Carballo debía manejar con temple, o aprender a manejar en un curso acelerado, en primer lugar - y como reto insoslayable para la imagen de fortaleza y solvencia que debían transmitir las instituciones republicanas-, una gravísima crisis gubernamental provocada por la dimisión de Casares Quiroga en la tarde-noche del sábado 18 de julio. Desde la perspectiva de Pérez Carballo, o de cualquiera de los gobernadores civiles que a lo largo del país sufrieron la terrible incertidumbre de aquellas horas, esa dimisión se incardinaba en una confusa y contradictoria catarata de información oficiosa –se empezarían a captar las emisoras enclavadas en las zonas geográficas dominadas por los rebeldes desde la misma noche del día 17- y oficial -decretos como el de la disolución de unidades militares o policiales sedicentes, órdenes y contraórdenes internas, notas gubernamentales nebulosas como la emitida la mañana del 18 dando la rebelión por sofocada-, emanada del Ministerio de Gobernación hacia los distintos gobiernos civiles o del improvisado gabinete de crisis que conocería tres presidentes en menos de veinticuatro horas.

Una información, unas instrucciones (las oficiales) que, transmitidas desde tres gobiernos diferentes en el plazo de unas horas, desbordados por el avance de la conspiración e incapaces de saber cómo controlar la situación, no infundieron a los gobernadores civiles la confianza debida para ponerse al frente de los movimientos populares locales en defensa de la República –signo de la división o la fractura ya existente en el seno del Frente Popular, agigantada durante esas horas críticas-, ni reflejaron una estrategia coherente de actuación.

Como afirma el profesor Aróstegui, los gobernadores civiles, a los que *El Socialista* tildaría después como un conjunto de *ineptos*, deberían haber sido piezas esenciales para decidir la partida en aquellos lugares donde no hubiera existido unanimidad en el seno de las fuerzas militares ante la inminencia de la sublevación.<sup>714</sup> Juicio crítico de difícil discusión que, sin embargo, no afectaría tanto al caso de Pérez Carballo, pues la mayoría de la oficialidad y los mandos de las unidades del ejército o la Guardia Civil adscritas a esta ciudad no vacilaron en manifestar una adhesión ideológica más o menos explícita al movimiento sedicioso, cuando no se implicaron activamente, más tarde o más temprano, en los preparativos o en el proceso de ejecución del golpe, lo que generaría un obstáculo casi insalvable para el poder civil. Y si algunos dudaron en sumarse a la insurrección –el general Salcedo, el coronel de Artillería, Adolfo Torrado, el contralmirante Azarola, por ejemplo, permanecerían en el limbo hasta el mismo

<sup>713</sup> R. Carr, *España. 1808-1975*, Ariel, Barcelona, 1998, p.626.

<sup>714</sup> J. Aróstegui, *Por qué el 18 de julio...* op. cit, p. 91.

momento de ser ejecutados - lo hicieron en función de criterios estrictamente personales o cálculos posibilistas.

Por no hablar del profundo vínculo corporativo que unía a todos los militares y guardias civiles, causa de que muchos de los que no apoyaron el golpe o se opusieron a él apenas ofreciesen resistencia o no informasen a las autoridades republicanas, en las semanas previas a la sublevación, de la marcha de una conspiración cuyos pasos conocían o intuían en gran medida. Este síndrome militar corporativo de “pasividad” ante una manifiesta ilegalidad cometida por compañeros de armas, por caballeros *golpistas*, manifestado de una u otra manera por los militares aparentemente leales a la República, se pudo verificar con claridad en A Coruña, como así en otras muchas ciudades, circunscripciones o regiones militares, e incluso afectó al voluntarioso y declarado republicano Caridad Pita, general de la 15 brigada de infantería con base en la ciudad Herculina. Esta base argumental construida con lo sucedido en Galicia en general, y A Coruña en particular, serviría para avalar, desde nuestro punto de vista, la idea de revisar la teoría extendida de un ejército realmente fraccionado ante el golpe militar y, a la luz de este nuevo enfoque, contemplar la confrontación inicial entre un bando sublevado y otro pasivo o resistente por imperativo legal o circunstancial –y menos en función de convicciones ciudadanas firmes y adaptadas a los parámetros democráticos de la época.<sup>715</sup>

Cuando en la tarde del domingo 19, José Giral accedía a la presidencia del gobierno y aceptaba el reto de entregar las armas disponibles a las organizaciones políticas y sindicales, o lo que es lo mismo, se exponía finalmente al desbordamiento social (a la revolución tan temida por la izquierda republicana y burguesa), se había perdido un tiempo precioso, irrecuperable para neutralizar el golpe de estado de forma absoluta. Atrás quedaban casi cuarenta y ocho horas de absoluta incertidumbre para muchos gobernadores como Pérez Carballo, que debía lidiar con los representantes de las distintas fuerzas políticas y sindicales presentes de forma casi permanente en el Gobierno Civil, convocadas como integrantes del citado Comité de defensa de la República, que exigían medidas drásticas contra los líderes de la conspiración y la entrega de armas a sus militantes. Un comité cuyos miembros no entendían, en buena medida, la moderación y la, por momentos, vacilante estrategia de espera que el gobernador Pérez Carballo trataba de imponerles a todos, aunque estaban dispuestos a aceptarla por motivos tácticos: la puerta de la revolución o del acceso al poder de la clase obrera podrían abrirla, precisamente, los militares y ese desbordamiento político podría poner en jaque a un gobernador de la izquierda burguesa.

Un gobernador en franco declive físico, por el esfuerzo de tantas horas en vela que luchaba por clarificar las directrices que le llegaban del gobierno y demandaba, en ocasiones, cuando la interpretación de su sentido le parecía insuficiente para revertir la situación creada por la amenaza militar o por las presiones que le llegaban de la izquierda obrera, la adopción de medidas más contundentes o eficaces.

O, sencillamente, se mostraba a favor de compensar en lo posible la pasividad del gobierno de Madrid, forzada en buena medida por la situación de transitoriedad y

---

<sup>715</sup> J. Aróstegui, *Por qué el 18 de julio...* op. cit, p.91.

desconcierto vivida durante esas horas cruciales. La solución no estribaba, para Pérez Carballo, en el “simple” reparto de armas, que de realizarse debía advenir de forma ordenada y bajo criterios claros y no cambiantes. El gobernador civil había demandado, durante el tiempo de su mandato al frente del Gobierno Civil de A Coruña, medidas dirigidas a renovar la mayor parte de la cúpula del ejército en Galicia y a reestructurar también la dirección del VI Tercio y de la Comandancia provincial coruñesa, orientadas mediante traslados y destinos estratégicos de los oficiales comprometidos en la intentona de abril o manifiestamente desafectos a la República. Las armas serían importantes -desde la óptica de Pérez Carballo- en su caso y momento, pero las otras decisiones debieron haberse tomado en su tiempo para posibilitar en julio una respuesta coherente y eficaz ante cualquier contingencia de tipo involucionista.

Un desconcierto, una sensación de perplejidad en aumento, a medida que se iba tomando conciencia de la magnitud del golpe (algo más que un pronunciamiento clásico), en medio de un sonido incesante de teléfonos y conversaciones mantenidas en los pasillos o en las distintas dependencias del Gobierno Civil coruñés por una multitud de personas expectantes, cautivadas por la trascendencia de un momento que, sin embargo, llevaban esperando mucho tiempo bajo distintas perspectivas.

Dentro de esta escena general, Pérez Carballo hablaría estos días críticos, desde la tarde del viernes 17 al mediodía del lunes 20, con propios y extraños, autoridades militares y civiles, mandos de la Guardia Civil y del cuerpo de Carabineros. Pero, fundamentalmente, se centraría en las conversaciones con el resto de los gobernadores civiles gallegos y, por supuesto, con el aparato del gobierno en Madrid, su interlocutor privilegiado y a la vez forzoso en este trance.

Con o sin autorización previa de Madrid, le ordenaría a los alcaldes de la provincia, la madrugada del 18 al 19, la detención de aquellos elementos derechistas sospechosos de ser fascistas -léase, de estar apoyando la conspiración en ciernes-, orden que el alcalde de Betanzos no cumpliría según afirma en su declaración.<sup>716</sup> En ese mismo afán preventivo, esta vez algo mejor enfocado, le había dirigido una instrucción especial al regidor santiagués, contenida en el texto de un telegrama enviado unas horas antes, concretamente a las 21: 20 horas de ese mismo día 18:

“”Aquí gobernador.- Espera decirle que está muy atareadísimo. -Es para decirle disponga servicio de vigilancia automóviles justificando personalidad ocupantes descubrir posible viaje alguna destacada personalidad procedente Portugal.- Al mismo tiempo puede detener destacados peligrosos fascistas.- También vigilarán paso por ésa aviones dando cuenta cualquier anomalía.- Nada más.””<sup>717</sup>

Finalmente, el avión de Sanjurjo -la pieza deseada en este caso- se estrelló en las proximidades de la ciudad portuguesa de Cascais, pero la sombra de este general, como veremos, si sobrevolaría la sede de la VIII División e influiría muy probablemente a la hora de retrasar el inicio del golpe en A Coruña. Este incidente reflejaba al mismo tiempo tanto la actividad frenética emprendida como el hecho de que las gestiones realizadas en aquel momento, por el gobierno y sus representantes, los gobernadores civiles, no iban siempre tan desencaminadas, pues el aparato del estado estaría usando la

<sup>716</sup> ATMRN, Causa 177/36, fol. 1 (v).

<sup>717</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 155.

lógica para intentar predecir las etapas de un viaje capital para el futuro de la sublevación.

Distinta es, desde luego, la perspectiva aportada por Emilio González López, diputado de IR presente la noche del 18 de julio en el edificio de la Telefónica en Madrid, deudora tal vez de su necesidad de ajustarle las cuentas a Casares Quiroga como el chivo expiatorio que era. En concreto, González López trató de hacer gestiones durante horas con gobernadores civiles y autoridades militares desde el despacho de su cuñado, Emilio Morayta, consejero del gobierno en esta compañía. En una de las conversaciones mantenidas durante estas horas decisivas, tuvo la oportunidad de hablar con el gobernador civil de A Coruña y conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo en la ciudad gallega, consecuencia –según esta perspectiva– de la falta de previsión gubernamental (aunque tampoco se soslaya la responsabilidad de Pérez Carballo) en el diseño de un plan de actuación que situase a los gobiernos civiles como ejes de una respuesta coordinada a cualquier proceso de involución en marcha:

Con el gobernador civil de La Coruña, mi antiguo discípulo Francisco Pérez Carballo, Oficial Letrado del Congreso, hablé varias veces esa noche angustiosa, y pude comprobar su desorientación e incertidumbre, su falta de preparación, de instrucciones y de fuerzas para enfrentarse con los rebeldes (...) Los gobernadores civiles, muchos de los cuales, entre ellos los de Galicia, pararon con su vida su incertidumbre y su desorientación, que no era la suya, sino la del gobierno, parecían irresolutos y perdidos en medio de una gran confusión. Los portugueses le llamaron a la guerra civil española en un principio “o gran barullo español” y así parecía en los gobiernos civiles de las capitales en las que nada se había organizado ni se había coordinado plan alguno para combatir a las fuerzas alzadas. Y de todos los gobiernos civiles con los que hablé fue en el de La Coruña en el que el gobernador era víctima de esa total falta de preparación por parte del gobierno de un plan en el que se coordinaran las fuerzas militares leales, sobre todo las de los guardias de Asalto, con las civiles.<sup>718</sup>

Víctima o cómplice indirecto de una situación política y social en la que se barruntaba el drama de un conflicto civil percibido como inevitable, el gobernador Pérez Carballo ya se había enfrentado con éxito en abril –al menos había puesto toda su energía al servicio de la legalidad republicana– a un serio conato de insurrección que le pudo costar la vida. Las líneas del que fuera uno de sus predecesores en la presidencia de la APED (FUE) de Madrid conciben más la figura del gobernador civil de A Coruña como una pieza más del puzle institucional de un Estado republicano en franca descomposición, situándola en el centro de una diana donde proyectar también la imagen del presidente del gobierno y la inadecuada o vacilante maquinaria gubernamental o estatal. Ésta perdió unas horas esenciales en resolver cuestiones políticas de base, derivadas del prejuicio estratégico esgrimido por la izquierda obrera, y pusieron a Martínez Barrio y a Giral en el brete de sacrificar sus principios en balde, al precio de nada, con los amargos resultados consabidos.

Fausto Rubín y Puig, secretario del Gobierno Civil, abundaría, sin embargo, en la capacidad de liderazgo o la disposición a resistir de Pérez Carballo en el lapso de tiempo que precedió al golpe anunciado, afirmando que al gobernador civil de A Coruña no le influyó nadie en esas horas decisivas para tomar la decisión de desoír y no

<sup>718</sup> E. González López, *Memorias de un diputado republicano en la guerra civil española (1936-1939)*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1990, p. 17-18 –fragmento textual citado parcialmente en página 57.

plegarse a las exigencias y al ultimátum de los golpistas y negarse a rendir el Gobierno Civil ante la amenaza y confirmación del ataque armado contra las instituciones republicanas.<sup>719</sup>

El valor de este testimonio es doble, pues Rubín y Puig no estaba encausado (declaraba como testigo) y no tenía por qué cargar las tintas sobre Pérez Carballo para salvar su propia vida. Aunque si es cierto que podría haber actuado en defensa de algún otro encausado, por miedo a un futuro incierto o movido por la tensa relación mantenida con el gobernador civil, elemento también a considerar. Del mismo modo, en el acta de celebración del consejo de guerra contra los acusados en la causa 207/36, el abogado defensor de varios de los acusados (el alcalde Suárez Ferrín, el diputado Guzmán o el funcionario municipal Prego), pronunciaba una sentencia lapidaria en su alegato, perfecta síntesis de lo sostenido por la mayoría de los acusados: “en el Gobierno, no había más dirigente que el gobernador, y los demás obedecían las órdenes superiores.”<sup>720</sup> Testimonios que podrían probar, con los matices y condicionantes apuntados, la voluntad firme y la personalidad de un joven abogado que recibía su bautismo de fuego como si se tratase de un gobernador del siglo XIX, pero enfrentado esta vez a la moderna doctrina totalitaria del golpe de estado, destinado a exterminar las malas raíces del “marxismo”.

Más contundentes si cabe, para reforzar la imagen de un Pérez Carballo decidido a defender de forma enérgica la legalidad republicana (como lo hizo en abril y a lo largo de los meses precedentes a la insurrección militar), resultarían los testimonios aportados por el alcalde Suárez Ferrín, el teniente coronel F. González Vallés y el comandante de la Guardia Civil Ríos, colaborador estrecho de Pérez Carballo hasta el estallido del golpe y segundo jefe de la Comandancia de este Cuerpo en A Coruña.

Todos ellos redundan en la función de intermediario desempeñada por el comandante Ríos –a espaldas de Pérez Carballo, al que supuestamente asesoraba en cuestiones de orden público- con el fin de pedirle a varios políticos del Frente Popular, como el propio Suárez Ferrín y Ramón Mazariegos, que hiciesen lo posible para convencer a Pérez Carballo de que una vez comenzada la sublevación no opusiese resistencia al ejército y “cesase en su actitud” de fidelidad inequívoca a la República. El alcalde Suárez Ferrín aceptó esta sugerencia y trató de convencer al gobernador Pérez Carballo de la inutilidad de hacer frente a los militares llegado el caso y se encontró como respuesta la negativa rotunda del gobernador civil a consentir que se violentase la ley y, con ello, quebrasen las instituciones republicanas.<sup>721</sup>

La discutida presencia del comandante Ríos en el Gobierno Civil denotaba la existencia de dos estrategias cruzadas y marcadas por un evidente pragmatismo, derivadas, por un lado, de la necesidad de los mandos de la Guardia Civil en A Coruña de controlar a la autoridad civil -con la que disentían a consecuencia de las competencias absorbidas por Pérez Carballo- y, por otro, por la desconfianza del gobernador civil coruñés respecto de la identidad republicana de este Cuerpo, sentimiento que le induciría a “tomar rehenes” entre sus oficiales para así vigilar más de

<sup>719</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 95.

<sup>720</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 277.

<sup>721</sup> AtMRN, Causa 613/37, fol. 210, 242 y 320.

cerca sus movimientos. De esa forma –obligando a Ríos o a Clarés a permanecer junto a él en su despacho en momentos claves–, obtenía también el aval de estos mandos para que sus subordinados ejecutasen determinadas órdenes gubernativas, para cuyo cumplimiento se requería de la colaboración necesaria de los cuarteles de este Cuerpo. Si el doble juego seguido por Ríos, documentado párrafos atrás, no hubiera clarificado de forma suficiente la afinidad o la relación directa de él mismo, de Clarés y de otros mandos de la *benemérita* con la trama golpista, las declaraciones del citado teniente coronel Clarés en la causa 613/37, afirmando que le aseguró en varias ocasiones al gobernador civil (ante las sospechas de Pérez Carballo sobre el compromiso republicano de la Guardia Civil) la fidelidad de este Cuerpo a la República para mantenerlo engañado, e impedir que adoptase medidas excepcionales contra algunos oficiales o en perjuicio de la marcha de la conspiración, arrojan algo más de luz al asunto.<sup>722</sup>

La última ocasión en que Clarés y Ríos reiteraron al gobernador civil la lealtad inquebrantable de la Guardia Civil al gobierno de la República, y también a su persona, se verificó en la cena que el mismo domingo 19, y a pocas horas del inicio del golpe en A Coruña, se celebró en el Gobierno Civil con la asistencia también de los mandos de Asalto, comandante Manuel Quesada y capitán Gonzalo Tejero (con los que ya se había reunido a lo largo de ese día),<sup>723</sup> y de la esposa y hermano del gobernador civil. En su transcurso, Pérez Carballo obtuvo de Clarés y Ríos promesas emocionadas (y envenenadas) de fidelidad al gobierno republicano y toda clase de seguridades acerca del comportamiento de sus hombres en las horas críticas que se aguardaban.<sup>724</sup>

Con respecto a la disposición favorable a la defensa de la democracia republicana mostrada por los mandos de Seguridad y Asalto en la provincia, hay que señalar que si como se deduce de la mayoría de los testimonios recabados –entre ellos el del secretario del Gobierno Civil, Rubín y Puig–, el gobernador Pérez Carballo estaba arropado por los mandos de Asalto (Quesada, Tejero y el teniente Manuel Valcárcel se significaron con especial celo como defensores del Gobierno Civil), no parece que esta actitud fuese secundada por buena parte de la oficialidad de este Cuerpo, aunque sin alcanzar los niveles de desobediencia de la Guardia Civil en su decisiva y particular contribución al éxito del golpe militar.<sup>725</sup>

<sup>722</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 103 y 237.

<sup>723</sup> Archivo del Ministerio del Interior, Expedientes personales nº 19. 139 (Manuel Quesada del Pino) y 20.165 (Gonzalo Tejero Langarita). Como datos a tener en cuenta, Quesada ostentaba la categoría de comandante de Estado Mayor y Tejero el grado de capitán de Infantería –además era masón, perteneciendo a la logia *Patria Nueva* nº 4 de Valencia, con el grado 4º, maestro secreto, y el nombre simbólico de *Kant*. Esto es, ambos eran militares destinados en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, el primero como su Jefe provincial y el segundo como capitán de la octava compañía de Especialidades del Grupo de Asalto.

<sup>724</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p. 693.

<sup>725</sup> El gobernador civil de Sevilla relata en sus memorias como recibió un telegrama cifrado (que bien pudo ser una circular) dirigido por el Ministerio de Gobernación a todos los Gobiernos Civiles horas después del asesinato de Calvo Sotelo, en el que se advertía –de forma un tanto obvia– sobre la existencia, entre las filas de la Guardia de Asalto, de elementos dispuestos a provocar disturbios y desórdenes. En esta comunicación se hacía referencia, fundamentalmente, a extremistas de izquierda, citada por Varela para aclarar que hasta ese momento sólo se habrían tomado precauciones especiales contra agentes



Como ya se ha dicho, las relaciones entre Pérez Carballo y el indeciso general Salcedo no fueron fluidas desde un principio –recordemos el incidente previo al desfile conmemorativo del 14 de abril, y la disposición de este general a ahogar en sangre cualquier amenaza extremista perceptible desde el punto de vista militar-, llegando a enturbiarse peligrosamente y a llegar a una ruptura virtual en el momento más inoportuno, durante las horas previas al golpe, al calor de un episodio de desconfianza e incomprensión mutua. La mayoría de los autores que han estudiado la cuestión han señalado la edad avanzada de Salcedo, a escasos meses de pasar a la reserva, o el recuerdo del fracaso del golpe de agosto de 1932 y la consecuente defenestración de Sanjurjo -figura reverenciada por el general de la VIII División-, como causas principales de la ambigüedad demostrada por Salcedo a la hora de interpretar y evaluar los procesos de involución orquestados en el territorio de su jurisdicción militar y que este general conocía perfectamente.

Por otra parte, a estas posibles explicaciones del permanente estado dubitativo del general Salcedo -que no quería retirarse o ser recordado como un general rebelde- en relación a los proyectos de sublevación contra el gobierno de la República, y al de julio en particular, habría que añadirles otras hipótesis factuales, basadas en los testimonios del propio Salcedo y algunos de sus colaboradores o subordinados (en especial, del comandante del Estado Mayor, Gutiérrez de Soto) durante la instrucción de la causa 413/36. En ellas se pondría en relación el desacuerdo mostrado por el general Salcedo con la elección de Mola como organizador de la conspiración y el papel desempeñado con posterioridad por el militar navarro al frente del movimiento “salvador”. Este disenso obedecería, en principio, a que el “director” –por otra parte, inferior en rango a Salcedo, que era general de división-, no estaría investido, dese la óptica del general de la VIII División, de la autoridad necesaria para ordenarle nada a un superior. Salcedo tampoco se sentiría halagado, precisamente, por el hecho de que Mola solamente lo contactase de forma directa la tarde del 18 de julio (para decirle que Sanjurjo llegaría el día siguiente a Burgos procedente de Portugal), esto es, cuando el golpe ya estaba en marcha y sólo quedaba por repartir un ramillete de papeles secundarios de este trágico episodio.

Otra posible explicación de las reservas de este militar estarían en la promesa de fidelidad que le realizó, presuntamente, a una alta dignidad –Sanjurjo otra vez, quizá, pero tampoco sería descartable el establecimiento de contactos sobre la marcha con el efímero gobierno de Martínez Barrio-, hipótesis que podrían combinarse con factores relativos a vínculos corporativos o de casta o a la certeza de que la VIII División no jugaría un papel destacado, dada su situación geográfica, en el plan trazado por Mola.<sup>726</sup>

Pero vayamos por partes, si analizamos los hechos en la perspectiva marcada por el acceso al gobierno del Frente Popular, Salcedo firmó en abril, según el comandante de Estado Mayor Gutiérrez de Soto, las órdenes que contenían instrucciones de actuación para las distintas unidades del ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros en caso de declaración del estado de guerra; presionó a las autoridades civiles y militares

---

derechistas pertenecientes a este cuerpo, siempre menos numerosos que los adscritos a la Guardia Civil o a los demás cuerpos policiales. Véase, J. M Varela Rendueles, *Rebelión en Sevilla...* op. cit, p.87.

<sup>726</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 55 y 75.

para impedir el traslado de Martín Alonso y González Vallés, apoyando la postura de la guarnición coruñesa, y aprobó el sobreseimiento de la causa instruida contra el teniente coronel De Haro y el capitán Rañal, pese a las fuertes presiones en contra de esta decisión ejercidas por el gobernador Pérez Carballo.<sup>727</sup> No hay ninguna duda, pues, de que el general Salcedo conocía la marcha de la trama conspirativa en cada momento y parece evidente que las tensiones con el gobernador Pérez Carballo comenzaron en abril, en relación al diseño del operativo de seguridad previsto para las celebraciones del 14 de abril y, a continuación, con la pugna mantenida entre la autoridad civil y la militar durante el breve y fallido proceso de depuración de responsabilidades judiciales iniciado tras los sucesos ocurridos en la madrugada del domingo 19 de ese mismo mes. Según testificaba el teniente coronel Luis Tovar, Jefe de Estado Mayor de la VIII División, fue él quien llevó al retornado capitán de la Guardia Civil José Rañal, de nuevo activo en las lides conspirativas como enlace de Mola, al despacho de Salcedo, en mayo o junio de 1936, para informarle con detalle acerca del proceso seguido hasta entonces por el renovado núcleo de la insurrección, ofreciéndole nombres de jefes y generales involucrados, información que Salcedo agradeció sin hacer ninguna observación ni tomar ninguna medida contra este oficial.<sup>728</sup>

El teniente coronel Vallés, en situación de disponible forzoso y regresado a A Coruña a finales de junio de 1936 también se entrevistó con el general de la División para cambiar impresiones y conocer de primera mano su posición ante la inminencia del golpe militar y sus sucesivos aplazamientos durante ese mes, concluyendo que ésta era favorable a la sublevación y corroborando la imagen de un Salcedo partidario del *movimiento* y dispuesto a encabezarlo en el momento adecuado que, en su estancia en la prisión militar de Guadalajara, le había transmitido el capitán Eduardo Ozores.<sup>729</sup>

A partir de ese momento, tanto el teniente coronel Tovar como el comandante Gutiérrez de Soto, que había sido comisionado en febrero, por los oficiales de los distintos cuerpos integrantes de la célula conspirativa constituida en A Coruña, para ejercer papeles de enlace con el mando de la VIII División, mantuvieron informado a Salcedo de la marcha de los preparativos de la sublevación, sin ser recriminados por ello en ningún momento.<sup>730</sup> Ambos militares se entrevistaron por última vez con Salcedo la noche del 18 de julio, quien les confesó que “estaba recibiendo muchísimas injerencias y presiones de elementos altos y bajos, así como órdenes “de una elevadísima personalidad que nunca se las había dado”, tal vez refiriéndose –apunta Gutiérrez de Soto- a Martínez Barrio, quien sería nombrado presidente del gobierno esa misma noche, lealtad sobrevenida (y contradictoria) a añadir a la profesada por Salcedo desde hacía mucho tiempo al africanista general Sanjurjo.<sup>731</sup>

A Gutiérrez de Soto, Salcedo le habría expresado varias veces sus firmes convicciones patrióticas y su intención de actuar con decisión, en el sentido de ponerse al frente de sus hombres en el contexto de una solución militar (si la situación del país

<sup>727</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 59-60 y 74 (v)-75.

<sup>728</sup> ATMRN, Causa 413/ 36, fol. 25 (v) y 26

<sup>729</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 175, 176.

<sup>730</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 471.

<sup>731</sup> ATMRN, Causa 413/ 36, fol. 84 (v).

así lo demandaba), pero los días previos a la sublevación se movió con pies de plomo, dando largas y barajando probablemente varias cartas. Esperaba, sencillamente, que se dieran las condiciones necesarias para sumarse al golpe y no quedar como un general traidor o “rebelde”, término mencionado en el sentido descrito en una reunión mantenida con el coronel del Regimiento de Infantería Zamora nº 29, Pablo Martín Alonso –otra de las piezas esenciales de la conspiración en A Coruña- a lo largo de la tensa noche del domingo 19 de julio.<sup>732</sup>

Las maniobras dilatorias de Salcedo no expresaban, sin embargo, un sentimiento de lealtad a la República convenientemente disfrazado de una tutela paternal de sus hombres, no había en él ninguna convicción democrática lo suficientemente sólida como para desarrollar una estrategia personal o pactada con el gobierno –hablamos de los parámetros de la época, respetando los valores imperantes en aquel contexto-, nada de eso. En realidad, e independientemente de las consideraciones que podamos hacer aquí, el general de la VIII División no estaba ni contra el objetivo del golpe militar ni contra los métodos a emplear para revertir la situación política del país.

A Salcedo lo que le irritaba y le inspiraba una gran desconfianza eran los defectos formales del golpe, los procedimientos técnicos y estratégicos, desde las anomalías jerárquicas –en especial, el hecho de que los cabecillas del golpe no se pusiesen en contacto con él hasta última hora, 18 de julio por la tarde, al margen de los chismorreos de sus enlaces divisionarios Gutiérrez de Soto o Tovar- al incumplimiento de sus órdenes –se contactó sin su permiso con los mandos de las guarniciones de las demás provincias gallegas-, pasando por el hecho de que era partidario del tradicional golpe centrífugo y la táctica centrípeta o periférica de Mola le producía un fuerte rechazo.

Sólo la estela de Sanjurjo le impulsaría a poner en juego prestigio, honor y carrera. Las promesas hechas a Azaña, el día de su nombramiento, o a los ministros de la guerra (Molero y Masquelet) y al subsecretario de este mismo ministerio (Miaja) nada valdrían bajo la azarosa doble lealtad (la antigua, a Sanjurjo, su viejo compañero; la “nueva”, al evanescente Martínez Barrio), exhibida la noche del 18 de julio. Entre esta polaridad ética y política, podría caber la casi olvidada tesis que atribuye a Sanjurjo –recordemos la estrecha relación que le unía a Salcedo- un intento de presionar a Mola en favor de una solución rápida y pactada al fracaso del golpe hasta entonces, ocurrido la noche en que el *director* conversó telefónicamente con el líder de UR.<sup>733</sup> Esta teoría nos explicaría mejor las manifestaciones de Salcedo a Tovar y Gutiérrez de Soto en la noche del 18 y su esfuerzo por detener los impulsos desbocados de los mandos de las unidades a su cargo, en la expectativa, quizá, de una pronta solución sino pacífica, si más conectada –desde su visión de viejo y astuto militar- a la base real del problema.

En este punto, el hecho de que en la noche del 18 y la madrugada del domingo 19 las comunicaciones telefónicas y telegráficas con Galicia estuviesen cortadas a partir de una hora indeterminada y continuasen así hasta la madrugada del 20 –en el caso de A Coruña, por orden del gobernador Pérez Carballo, con el fin de aislar al núcleo conspirador atrincherado en los cuarteles de la provincia-, dificultó cualquier

<sup>732</sup> La conversación entre el coronel de Infantería Pablo Martín Alonso y Salcedo en ATMRN, Causa 413/36, fol. 298(v) y 299.

<sup>733</sup> P. Preston, *La guerra civil en España*, Barcelona, Debate, 2006, p.125.

entendimiento (y no solamente entre los sublevados), partiendo siempre de la base de que los jefes y oficiales de las distintas guarniciones agrupadas en la VIII División, y quién sabe si Salcedo entre ellos, eran considerados por Martínez Barrio como partidarias de una sublevación en la que aún no se habrían involucrado por razones puramente estratégicas:

Virtualmente, una parte de las guarniciones de todas las regiones militares estaba sublevada, pues no recataban los jefes y oficiales sus simpatías y solidaridad con los que en África, Canarias, Baleares, Sevilla, Valladolid, Pamplona y La Coruña habían levantado la bandera de la rebelión, pero formalmente se mantenían dentro de la disciplina, esperando, arma al hombro, el curso de los acontecimientos.<sup>734</sup>

Las gestiones emprendidas por Diego Martínez Barrio, alrededor de las tres de la madrugada del domingo 19, destinado a contactar con los diversos responsables de las divisiones militares -y a recuperar, a la carrera, las horas perdidas en la resolución de la crisis gubernamental provocada por el estallido del golpe de estado y la dimisión de Casares Quiroga-, se basaban, como premisa fundamental, en la idea de dominar la rebelión, restablecer el orden y devolver el país a la normalidad perdida. Una trilogía de objetivos que podría convencer a generales moderados o veteranos como Salcedo, con quien tal vez pudo haber contactado el líder de UR antes de la interrupción de las comunicaciones con A Coruña, ordenada por el gobernador Pérez Carballo, y al que a las cinco y media de la mañana envió un telegrama receptado por el Estado Mayor de la VIII División y entregado a Salcedo en las últimas horas de la tarde de ese mismo domingo 19 de julio, según reconocía el propio general.<sup>735</sup> Este dato llama la atención porque a esa hora el gobierno Martínez Barrio era ya historia, por lo que aquí cabe o una interferencia (intervención gubernativa) o un retraso, intencionado o no, del Estado Mayor en entregarle a Salcedo un telegrama en el que se le informaba de la constitución de un gobierno de "tendencias más templadas" para emprender de este modo una "obra pacificadora", que tendría como protagonistas a hombres como Felipe Sánchez Román –se le cita textualmente-, comunicación contestada por Salcedo expresando sus sentimientos de disciplina y lealtad a la Patria.<sup>736</sup> En esta respuesta vemos también un desajuste cronológico, pues si Salcedo contestó en la idea de que se estaba dirigiendo a un Martínez Barrio presidente del gobierno, quien recibiría en realidad el mensaje sería el recién nombrado Giral, a no ser que la noticia de la dimisión del líder de UR no hubiera llegado todavía al conocimiento de la cúpula militar coruñesa y el general de la VIII División siguiese confiando, al menos durante algunas horas más, en la docta palabra de Martínez Barrio y aguardando a que Sanjurjo se pronunciase al respecto o diera la señal para arrastrarle hacia el *movimiento* militar.

<sup>734</sup> D. Martínez Barrio, *Memorias...* op. cit, p. 362-363.

<sup>735</sup> El texto de este telegrama decía así: *En este momento su excelencia el presidente República acaba aprobar lista nuevo gobierno bajo mi presidencia y con representaciones partidos Izquierda Republicana Unión Republicana y Nacional Republicano participando como ministro sin cartera D Felipe Sánchez Román lo que comunico a VE esperando secunde con todo celo la obra de pacificación que se propone realizar.*

*EL GOBIERNO LE SALUDO- DIEGO MARTÍNEZ BARRIO,*  
en ATMRN, Causa 413/ 36, fol. 388.

<sup>736</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol.383.

Pérez Carballo había ordenado intervenir la madrugada del 19 las comunicaciones del general de la VIII División, Enrique Salcedo, y del resto de los mandos de las guarniciones militares y cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, una medida inducida por el gobierno en las horas previas pero activada ahora por el gobernador civil coruñés en medio de un vacío de poder asfixiante para las autoridades civiles republicanas, aisladas a lo largo del país. De hecho, la noche del 19 al 20 de julio, el general Bosch, comandante militar de León, informó a Salcedo (a través de un telegrama o de la radio militar, este detalle no lo recordaba bien Salcedo) de que el general inspector Gómez Caminero le había entregado a los mineros procedentes de Asturias 300 fusiles y 4 ametralladoras procedentes del arsenal de la guarnición leonesa. La respuesta de Salcedo, radicalmente contrario a la entrega de armas a civiles, fue inmediata pero infructuosa, pues no consiguió comunicar con León en sus numerosos intentos de conectar telefónica y telegráficamente con esta Plaza, fracaso repetido al tratar de dirigirse a los comandantes militares de Vigo y Pontevedra.

Este problema “técnico”, inspirado por un delegado del gobernador civil en la central telefónica que seguirá un criterio selectivo prefijado desde el Gobierno Civil, permitiría a Salcedo y otros militares y guardia civiles sospechosos recibir ciertas comunicaciones pero censuraría la mayoría de las dirigidas al exterior, estrategia diseñada para obstaculizar las conexiones de los golpistas y conocer de paso sus intenciones e instrucciones operativas –para lo que también se establecieron escuchas-, hecho que provocó un nuevo incidente entre Salcedo y Pérez Carballo. De hecho, el general llegó a gritar y amenazar violentamente al gobernador civil, al recriminarle que hubiera ordenado la intervención de sus comunicaciones, durante la conversación que mantuvieron por teléfono.<sup>737</sup>

Era evidente que el gobernador civil desconfiaba de la actitud de Salcedo y del conjunto de la oficialidad a su mando y que, a su vez, su actuación estaba siendo observada por lupa por la cúpula de la guarnición coruñesa, complejo equilibrio puesto a prueba a lo largo de las cuarenta y ocho horas anteriores al golpe del día 20 de julio en A Coruña. Quizá uno de los incidentes más graves acaecidos en el ámbito competencial de los máximos responsables del poder civil y militar en la provincia, aconteció cuando empezaron a sonar las sirenas de los barcos fondeados en el puerto de A Coruña, señal convenida por los sindicatos para anunciar el comienzo de la sublevación militar en Marruecos. Esta maniobra de la izquierda obrera hizo que Salcedo llamase repetidamente a Pérez Carballo y le instase de forma airada, en medio de una conversación muy tensa por las dos partes, a intervenir para que esos ruidos cesasen, petición atendida por el gobernador civil no sin haber pretextado, en un principio –la intención del gobernador era evitar males mayores, pero no podía excusar lo obvio-, que los avisos respondían a la preceptiva alerta transmitida tras la detección de un incendio en una embarcación pesquera.

Ni siquiera la intervención del diputado de UR, José Miñones, retornado a A Coruña a bordo del último tren que salió de Madrid hacia tierras gallegas hasta el final de la guerra civil –en cumplimiento de la orden gubernamental que requería, en aquellas

---

<sup>737</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 124 y 194 (v).

horas críticas, a los diputados para que regresasen a sus circunscripciones respectivas-, y dispuesto a intermediar entre el gobernador y el general de la VIII División, pudo deshacer el nudo de incomprensión y recelo mutuo existente entre ambos, aunque sí logró, a petición de este último, que Pérez Carballo desbloquease temporalmente algunas de las comunicaciones relativas a la sede orgánica de la División en la tarde del 19 de julio.<sup>738</sup>

Otra complejidad revestiría aceptar la hipótesis planteada en *Galicia bajo la bota de Franco*, emanada tal vez de la pluma del propio Luis Seoane –quien bien pudo contarse entre los defensores o *visitantes* del Gobierno Civil durante aquellos días críticos-, que contemplaría como el gobernador civil habría frenado las intenciones iniciales de Salcedo de sumarse a la sublevación, al amenazarlo con un reparto inmediato de armas al pueblo en caso de que éste declarase el estado de guerra. Este éxito aparente de Pérez Carballo se sumaría –según ésta versión- a otras posturas, medidas o decisiones acertadas del joven gobernador, adoptadas en aras de controlar los movimientos de los insurgentes desde semanas antes del golpe y hasta el momento de la insurrección militar (entre ellas, la vigilancia sobre los altos mandos de la Guardia Civil), de evitar cualquier derramamiento de sangre –al tratar de que la conspiración abortase en los cuarteles, mediante el uso racional de la información aportada por sus fuentes en el interior de los mismos- y, finalmente, ya con la insurrección en marcha, de organizar la resistencia a ultranza ante el ataque rebelde contra el baluarte del Gobierno Civil.<sup>739</sup>

En cualquier caso, las discrepancias entre el gobernador civil y el general de la VIII División se relacionaban más con la falta de adhesión de Salcedo a la idea democrática de la República en aquellas horas críticas, que con problemas de carácter personal o la pretendida inexperiencia de un gobernador que, en cierto modo, tenía la percepción de haber sido abandonado a su suerte por quienes, a ambos lados de la complejidad de ese trance histórico, tenían la obligación de prestarle apoyo y colaboración.

Otra razón para agravar el estado de incertidumbre del general Salcedo, situado entre la duda y la desconfianza generalizada, surgió del telegrama procedente de Burgos recibido por el jefe de la VIII Región Militar la tarde del domingo 19 en la sede de la División –horas después de que el gobierno Martínez Barrio hubiese presentado su dimisión-, en el que se le ordenaba sumarse a la insurrección en marcha.

El telegrama, en lugar de estar firmando por Sanjurjo, que era lo que Salcedo estaba esperando para declarar el estado de guerra y ponerse, acto seguido, al frente de sus hombres y en contra de la República, lo estaba por un “general delegado de Sanjurjo”, probablemente por Mola. Esta circunstancia fue interpretada por Salcedo de manera un poco abrupta. Se sintió menospreciado en su jerarquía y ello reforzó su conciencia de la marginación de la VIII División a un papel secundario, que no se convertiría en estímulo suficiente, en cambio, como para llevar a sus hombres a un posible salto al vacío o a someterse a los dictados de una dictadura republicana sobrevenida.

Cuando ya clareaba la mañana del día 20 de julio, el día señalado finalmente para la sublevación en Galicia, el gobernador Pérez Carballo, tras tomar todas las medidas

<sup>738</sup> ATMRN, Causa 207/36 fol. 57 ; y L. Lamela, *Estampas de injusticia...* op. cit, p. 52-54.

<sup>739</sup> *Galicia bajo la bota de Franco...* op. cit, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, p. 181-193.

apuntadas en las últimas páginas –enfocadas, fundamentalmente, a controlar los movimientos y comunicaciones del ejército y la Guardia Civil o evitar que cualquier chispa prendiese el fuego “purificador” de la reacción- y atravesar un terrible vacío de poder gubernamental, del que no se recuperarían tan pronto las instituciones republicanas, esperaba con impaciencia y, ahora resignación, la hora en que los militares saliesen a la calle. Sabía que en los planes de los sublevados, trazados por Mola con mano de hierro –en este aspecto, una copia de los diseñados a trompicones en abril-, la toma del Gobierno Civil y la eliminación física del gobernador civil, de su figura institucional, de su papel simbólico (en su caso agrandado, si cabe, tras su actuación después del *putsch* de abril), se constituían en prioridades para cuyo logro no se ahorrarían esfuerzos ni riesgos. Y tampoco ignoraba que este factor estratégico ofrecía, como contrapartida sobre el mapa imaginario de la futura contienda, una ventaja eventual nada despreciable, que no podría ser aprovechada por las fuerzas leales a la República debido a la imposibilidad de asegurar a priori los apoyos necesarios para tal empresa.

Los últimos días y semanas habían puesto a prueba el carácter templado y la capacidad de trabajo de Pérez Carballo, restándole ahora más que nunca horas de descanso, palabra desaparecida de su diccionario personal en aquel trance. Se había esforzado por dar una sensación de normalidad y una imagen institucional estable. Había organizado, por ejemplo, una salida conjunta de dos camionetas de Asalto y una de la Guardia Civil por las calles de la ciudad para transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad coruñesa. Salió en diferentes ocasiones al balcón del edificio del Gobierno Civil, junto a los mandos policiales presentes en sus dependencias, para infundir calma o animar a los grupos de paisanos que se concentraban en los alrededores del Gobierno Civil. O dispuso la escritura de noticias y avisos tranquilizadores en las pizarras de información al público, instaladas habitualmente en avenidas céntricas como los Cantones.<sup>740</sup> No obstante lo anterior, al mismo tiempo habría dado las órdenes oportunas para fortificar el Gobierno Civil, preparativos conocidos en tiempo real por los sublevados y utilizados por éstos para reforzar sus argumentos en favor de la pronta ejecución del golpe militar, ante la magnitud de la revolución *marxista*, basados siempre en una percepción exagerada y descontextualizada de la actuación de la autoridad civil y del Comité de defensa establecido por las fuerzas integrantes del Frente Popular.

Otros sucesos ocurridos durante las horas previas al golpe contribuyeron también a elevar el grado de tensión e incertidumbre por ambas partes. Uno de ellos fue el intento de un grupo numeroso de obreros de obtener armas y explosivos en el polvorín de Santa Cristina. Para resolver este incidente, el gobernador civil ordenó la retirada de los obreros de los alrededores del polvorín tras conversar telefónicamente con el teniente coronel Clarés, al que el impenitente Benito de Haro, testigo de la conversación

---

<sup>740</sup> El teniente coronel Clarés negó parte de los vehículos y hombres que el gobernador civil le pidió para esta peculiar demostración motorizada de normalidad institucional, alegando que no tenía efectivos suficientes para distraer de sus funciones cotidianas a algunos de sus hombres, Véase ATMRN, Causa 613/ 37, fol. 151.

telefónica, pues se hallaba en el despacho de su jefe haciendo los pertinentes “pasillos”, le espetó un “pero todavía hablas con ese sinvergüenza”.<sup>741</sup>

El otro episodio devino de los excesos cometidos en los cacheos por las patrullas de guardias civiles establecidas por el sargento de la Guardia Civil -jefe del puesto de A Coruña, Manuel Santos Otero-, para proteger los cuarteles y controlar, de paso, los accesos a la ciudad, hacia los que iba afluyendo un número elevado de obreros y campesinos procedentes de la provincia y de toda Galicia. Este heterogéneo contingente de paisanos había sido objeto de continuos llamamientos por parte del Comité de defensa los días previos al golpe, acentuados durante la mañana del 20 de julio, por la acción del mismo gobernador civil, que, al albur de las ahora apremiantes órdenes dictadas por el gobierno de Madrid, se valía de Radio Coruña como altavoz de los intereses de la República del mismo modo que en momentos previos.

Con respecto a las maniobras sospechosas ordenadas por el sargento Santos Otero, la rápida actuación del gobernador civil intentó la eliminación de estas patrullas porque obstaculizaban el acceso a la ciudad de los partidarios del Frente Popular, hecho interpretado por los partidarios de la sublevación militar como un gesto de complicidad con las masas o turbas *marxistas*, cuando no como otra muestra de debilidad ante éstas. En sí, la intervención del gobernador consistió en el envío de un coche cuyos ocupantes -el secretario local de IR y al juez municipal viajaban a bordo, entre otros- portaban órdenes suyas de transmitir a los mandos de la Guardia Civil la necesidad de que cesase el hostigamiento a los civiles que quisieran entrar en A Coruña y se evitasen choques entre paisanos y fuerzas del orden -intención subordinada a la conveniencia de recibir apoyo exterior ante la inminencia de la sublevación-, maniobra frustrada por el sargento Manuel Santos Otero. Este suboficial, golpista recalcitrante, se encargó de reactivar, tan sólo unas horas después de la visita conciliadora de los emisarios de Pérez Carballo, el servicio de vigilancia interior y exterior de los cuarteles, informando de ello solamente a algunos oficiales, entre ellos al enlace de la Guardia Civil en la trama urdida por el ejército, el capitán Roger Oliete Navarro.<sup>742</sup>

En torno a las cinco de la mañana del lunes 20 de julio, el Gobierno Civil interceptó un telegrama en el que el Jefe de Estado Mayor de la VIII División, Luis Tovar, le comunicaría al resto de las guarniciones gallegas que la declaración del estado de guerra y la salida de las tropas a la calle se había fijado para las dos de la tarde de ese mismo día.<sup>743</sup> Acto seguido, Pérez Carballo le transmitiría la noticia a los demás gobernadores civiles gallegos, así como al teniente coronel Clarés, advirtiéndoles de que estuviesen preparados al efecto. Clarés, a su vez, informaría a su superior, el coronel Pérez Tello, máximo responsable del VI Tercio, llegado a la ciudad el sábado 18 de julio, fecha en

<sup>741</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 327 (v).

<sup>742</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol.91

<sup>743</sup> E. Grandío, *Años de odio...* op. cit, p. 52; C. Fernández Santander, *alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, p. 78-79; y L. Lamela, *Estampas de injusticia...* op. cit, p. 62. Por el contrario, un testimonio apócrifo, posiblemente el de uno de los miembros del Comité de defensa presente en el Gobierno Civil esos días, fijaba la hora de interceptación de ese telegrama en las diez de la mañana, dato este último que parece poco verosímil, salvo que fuese una segunda emisión del mismo texto y contenido, vista la secuencia de acontecimientos superior (“Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña”, en C Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p.571)



que pudo comprobar la adhesión unánime a la rebelión de la totalidad de la oficialidad de la Guardia Civil, incluidos Clarés y el comandante Ríos, en el transcurso de una reunión colectiva celebrada a las ocho de la tarde, tras mantener un aparte con cada uno de los mandos citados.<sup>744</sup>

Sin embargo, y según consta en la declaración del propio coronel Pérez Tello, el gobernador Pérez Carballo les llamó poco después para rectificar la orden dada, comunicarles que todo había sido una falsa alarma y asegurarles que cuando el ejército declarase el estado de guerra “él lo sabría con anticipación” y les avisaría nuevamente, ocasión aprovechada por los mandos de la Guardia Civil para reclamar la vuelta a la Comandancia del comandante Ríos bajo el pretexto de su estado de agotamiento en los últimos días, al haber permanecido de guardia permanente en el Gobierno Civil.

La solicitud cursada telefónicamente por el coronel de la Guardia Civil, con la idea de liberar al comandante Ríos de su presencia en el despacho del gobernador –todo apunta a que ante el cariz de los hechos que estaban acaeciendo, se trataba de no darle ninguna ventaja a los defensores de la legalidad-, no fue atendida por el gobernador civil, con lo que Ríos no retornaría al Cuartel hasta después de la finalización exitosa del golpe militar en A Coruña. Pérez Tello achacó esta retención a una maniobra artera de Juana Capdevielle, su interlocutora al teléfono en un momento en que el gobernador Pérez Carballo se había tomado un respiro para descansar al menos unas horas.<sup>745</sup>

Esta marcha atrás precedió, de forma no casual, a la iniciativa de Pérez Carballo de ordenar a las siete de la mañana una huelga general en la provincia -secundada, de forma coordinada, por los gobernadores de las restantes provincias gallegas-, decisión rectificada dos horas más tarde *en vista de que las circunstancias lo aconsejan así*.<sup>746</sup> Esta rectificación revelaba el miedo gubernamental a que si la declaración de huelga precedía al estado de guerra, podría generar un estímulo más para que los militares lo declarasen finalmente, teoría que, por ejemplo, a Pérez Carballo le planteó el vicealmirante Indalecio Núñez, jefe de la Base Naval de Ferrol, cuando a las seis de la mañana fue informado por el gobernador de su intención de convocarla. La posición del vicealmirante Núñez fue suscrita por el contralmirante Azarola, convencidos ambos de que ni el ejército ni las masas darían un paso en falso y unidos, por un pacto no escrito, en la postura de no abonarle el terreno a ninguna transgresión de la normalidad.<sup>747</sup>

Pero, por otra parte, bajo este cambio de estrategia decidido por Pérez Carballo se puede deducir la influencia inicial de los representantes sindicales presentes en el Comité de defensa y, en concreto, tras la decisión de desconvocar la huelga, se trasluce la resistencia del gobernador civil y los representantes de la izquierda burguesa, y de algunos miembros del PSOE, a considerar la huelga en sí como un instrumento eficaz en la resolución de este tipo de conflictos, surgidos al margen de la ley y marcados por el uso de la fuerza militar, por más que en agosto de 1932 hubiera contribuido, al menos en apariencia, a neutralizar la *Sanjurjada*.

<sup>744</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 126.

<sup>745</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 126.

<sup>746</sup> Al gobierno de Madrid llegaron sendos telegramas informando de estas decisiones, véase ATMRN, Causa 207/ 36, fol. 146-147.

<sup>747</sup> ATMRN, Causa 19/36, fol. 99, 115 y 123.

Difícil trance, en cualquier caso, para un hombre de leyes abocado a una situación de extrema incertidumbre, sobre la que intentaba ejercer un liderazgo necesario pero muy difícil de articular al ocupar una posición aglutinadora de diversas perspectivas e intereses, entrecruzadas en un escenario irreconocible. En este punto, cualquier análisis crítico debe contemplar la fuerza innegable del contexto, territorio letal incluso para hombres muy experimentados y capaces en puestos civiles o militares como Núñez de Prado y Varela Rendueles, refugio perfecto para desleales como el coronel Carrascosa, jefe del Regimiento de Transmisiones de El Pardo, quien el día 18 tuvo a Azaña a su merced antes de sublevarse para sorpresa de todos.<sup>748</sup>

En definitiva el gobernador civil, a pesar de la energía invertida en controlar las embestidas de la Falange coruñesa durante las últimas semanas –reforzada, los días anteriores a la sublevación, por la presencia en la ciudad de Manuel Hedilla-, en componer equilibrios obligados con las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda obrera, cuyos militantes ya recorrían las calles y empezaban a actuar de forma incontrolada, y, finalmente, en sobreponerse a la crisis gubernamental desatada en Madrid la noche del 18 de julio, se encontraba en una posición vulnerable, aislado entre un ruido incesante de informaciones y actos fragmentarios o inconexos, inmerso en el desconcierto lógico ante un desenlace tantas veces aplazado en cuestión de unas horas.

Y ante la situación de soledad vivida por un funcionario o un político al servicio del Estado, entendida como la falta de medios o recursos humanos o técnicos para restañar una fractura en la propia estructura institucional que vertebra un país, el factor de la experiencia en el cargo, o de las capacidades o habilidades sociales asociadas a ella, debe ser contemplado con cautela –y no privilegiarlo en el análisis de forma automática-, pues el poder político o la autoridad civil nunca había afrontado un reto tan serio como el golpe pergeñado por Mola.<sup>749</sup> En estas coordenadas, el gobernador civil de A Coruña era consciente de la debilidad de su posición frente a acontecimientos inminentes (el país ardía en llamas y Galicia esperaba su turno), presionado por personas interpuestas para que calculase riesgos concienzudamente –recordemos las intervenciones de Suárez Ferrín o Mazariegos, a instancias del comandante Ríos, para convencer al gobernador de que no se opusiese activamente al “movimiento” si el ejército salía al fin a la calle-<sup>750</sup> o, en otras palabras, para plegarse a una fuerza armada superior, como así hizo el resto de los gobernadores gallegos y otros representantes gubernamentales a lo largo del país.<sup>751</sup>

<sup>748</sup>La imposibilidad de una “noche de los cuchillos largos” republicana, en S. Martínez Saura, *Memorias del secretario de Azaña*, Barcelona, Planeta, 1999, p.442.

<sup>749</sup> Desde luego, los sucedáneos de los pronunciamientos decimonónicos acontecidos durante la dictadura de Primo de Rivera, por fijar un referente muy próximo, o la misma *Sanjurjada*, por no hablar de otros ensayos frustrados en uno y otro sentido –incluidas los brotes insurreccionales anarquistas o la tan cacareada revolución de Asturias-, nunca habían gozado del nivel organizativo, la implicación de los apoyos procedentes de la misma estructura institucional del Estado (Ejército y cuerpos policiales) y el espíritu criminal de violación de la ley y exterminio físico del adversario con que la conspiración del 18 de julio condujo a la sociedad española a la guerra civil.

<sup>750</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 210, 242 y 320.

<sup>751</sup> Véase en el caso de los gobernadores de Lugo (Ramón García Núñez), Ourense (Gonzalo Martín March) y Pontevedra (Gonzalo Acosta Pan), los trabajos de los historiadores M. J. Souto Blanco, J. Praa y A. Rodríguez Gallardo, dedicados a analizar los procesos del golpe de estado y represión en estas provincias, contenidos en J. de Juana y J. Prada, *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio*, Barcelona, Crítica, 2006.

Otra luz sobre este asunto (o la misma, según la perspectiva empleada) aporta el testimonio anónimo del hijo de un político republicano que vivió en primera persona la indiferencia de Casares Quiroga ante sus advertencias sobre el ruido de sables en A Coruña –supuestamente, el presidente del gobierno le tacharía poco menos que de “pirado”–, y también la postura legalista del gobernador civil de A Coruña, que se debía a los dictados del Ministerio de la Gobernación. Desde esa perspectiva, Pérez Carballo:

era “un hombre de una gran integridad, firmeza y muy responsable, pero sin apenas experiencia porque es demasiado joven (...) hace lo que tiene que hacer: “yo dependo del ministro de la Gobernación, mientras no reciba instrucciones del ministro de la Gobernación, a mi todo lo que me venga de la calle me trae al fresco” [interpretación literaria del testigo]... es lo que tiene que hacer, salvo que tenga una gran experiencia porque en ese caso ya no espera las instrucciones del ministerio de la Gobernación porque incluso se las puede saltar, si cree que debe saltárselas... Y pago con la vida esa inexperiencia...”<sup>752</sup>

En sí, cuando al gobernador civil de A Coruña se le imputa falta de experiencia, desorientación e, incluso, incapacidad política (condición que compartiría con el gobierno de Madrid) a lo largo de la crisis institucional afrontada –algunos escritores ligados a la construcción de la memoria de la izquierda obrera, como Joaquín Maurín (éste llegó a reunirse varias veces con el gobernador civil, quien le hizo varias recomendaciones relativas a su seguridad personal) o Domínguez Benavides, enfatizarían estos defectos–,<sup>753</sup> se quiere incidir, básicamente, en su interpretación rígida o acrítica de las directrices gubernamentales. Un obstáculo, sin duda, para haber implementado medidas que, tal vez en otro momento histórico, y bajo las reglas de un gobierno en solitario o de otra relación de fuerzas en el conjunto de una coalición o partido, hubiesen sido muy pertinentes, pero cuya eficacia nunca se podría demostrar en realidad, más allá –es necesario insistir de nuevo– de la incidencia del factor o la categoría de ser *joven* en política a la luz de una situación crítica.

Situación crítica inminente, determinada por acontecimientos que, en realidad, ya se habían gestado y ahora maduraban en el peligro potencial de engullirlo a él y a todo lo relacionado con las instituciones de un estado republicano en plena quiebra.

Al tiempo que en la calle se palpaba el ambiente veraniego y se dejaban ver los primeros turistas venidos de la meseta, se hablaba de las fiestas en curso y del estado de las playas o se comentaba el resultado del derby de la víspera –se jugaba un amistoso y una copa donada por el alcalde Suárez Ferrín–, finalizado con la victoria del Coruña sobre el Celta de Vigo (dos goles a uno), en la mañana del lunes 20 se ultimarían los preparativos para la defensa de un Gobierno Civil invadido por una marea humana y sonora, que dificultaba la organización racional de los efectivos y recursos existentes y se dispararía una vez iniciadas las hostilidades.

En el interior del edificio se multiplicaban las gestiones, las conversaciones o las decepciones, previas a la espantada general del comienzo de las hostilidades, entre un murmullo constante de teléfonos y telégrafos transmitiendo instrucciones o requiriendo información a ayuntamientos, cuarteles o sedes de organizaciones políticas diseminados

<sup>752</sup> Testimonio anónimo contenido en Proxecto interuniversitario “Nomes e voces”, Entrevista nº 2021.

<sup>753</sup> M. Domínguez Benavides, *La escuadra la mandan los cabos*, op. cit, p. 125; testimonio de Joaquín Maurín e introducción de Luis Portela, en Jeanne Maurín, *Cómo se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios*, op. cit, p. 9 y 49-50.

a lo largo de la provincia. También se podía ver, entre los nuevos ocupantes del Gobierno Civil, a grupos de obreros o paisanos en demanda de armas, directrices o información de última hora, diseminados en un flujo continuo que provenía de todas partes y retornaba a la efervescencia de las calles de la ciudad, y en especial a los puntos considerados como estratégicos.<sup>754</sup>

Desde la tarde del 18 de julio y hasta el día del golpe, lunes 20, Fortunato Carreras Trigo, oficial de Telégrafos de primera clase y hombre de confianza del gobernador civil, estuvo presente en la estación de Radio Coruña, junto a una escolta de Asalto, para impedir cualquier tipo de sabotaje, interferencia deliberada de su emisión o la misma incautación de la emisora. La razón de esta medida estribaba en que tanto el propietario de la misma, Francisco Hervada, como su locutor principal, Enrique Mariñas, estaban desconectando, de forma selectiva, la estación de radio coruñesa de la emisión en red coordinada a través de Unión Radio, que venía emitiendo, por orden del gobierno, y desde el mismo sábado 18, una programación musical alternada con conexiones en directo con el Ministerio de Gobernación para la lectura de notas o discursos políticos por parte de diversos líderes políticos como Prieto, *La Pasionaria*, Besteiro o Margarita Nelken.

Estos fugaces apagones o desconexiones se producían cuando, por ejemplo, y a juicio de algunos de los citados, se hacían llamamientos a la movilización de los obreros en defensa del Gobierno del Frente Popular, procedentes tanto de Madrid como del Gobierno Civil de A Coruña. Esta anomalía quizá hubiera pasado desapercibido de no ser porque el gobernador Pérez Carballo disponía en su despacho de un aparato de radio conectado directamente con Madrid, gracias al cual pudo detectar, contrastando con informaciones recibidas o con lo escuchado en otros aparatos activos en el edificio, que Radio Coruña permanecía en silencio o emitía anuncios o artículos leídos, de temática diversa, cuando en la emisión madrileña se estaban propagando contenidos políticos, discursos y llamamientos a la movilización general.<sup>755</sup>

Con o sin interferencias, desde las seis de la mañana del lunes 20 se leyeron en antena varias notas redactadas por el Gobierno Civil de A Coruña. Así pues, y de forma progresiva, se informó de la convocatoria y posterior anulación de una huelga general, se llamó, entre las once y las dos de ese día, a la tranquilidad y a la confianza en las autoridades republicanas y –esto desde la noche del día anterior– se exhortó a los ciudadanos a hacer frente a la inminente declaración del estado de guerra por parte del ejército, y, en consecuencia, a acudir en defensa del Gobierno Civil y de otros edificios institucionales o estratégicos.

Desafortunadamente, no existen datos suficientes para calibrar qué incidencia real tendrían los sabotajes citados –o los que pudieron pasar desapercibidos– en la eficacia o el efecto divulgativo perseguido por la autoridad civil y protegido, a priori, con la presencia en la emisora del delegado Carreras y de varios oficiales y clases de Asalto.

<sup>754</sup> La percepción de un viajero eventual de la atmósfera que se encontró en las calles de A Coruña en los momentos previos e iniciales del golpe militar, en “Testimonio del historiador Rafael Abella Bermejo: “Mi alzamiento en Galicia”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T. II, p. 563-565.

<sup>755</sup> ATMRN, Causa 1031/37, fol. 8-10, 17, 18 y 20

Parece probable que los mensajes transmitidos por la radio, entre ellos las notas firmadas por el gobernador, llegaran en buena parte a su destino e influyesen en la llegada a A Coruña de los numerosos grupos de civiles que colapsaban los accesos a la ciudad, con intención de sumarse a las autoridades republicanas en el intento de contrarrestar el golpe militar. También lo es que ante una situación tan delicada, marcada por factores y decisiones azarosas, la práctica de cualquier sabotaje o interferencia –por pequeña que fuese– en el uso de la radio como instrumento de movilización contra el ejército o, por contra, de control, información o apaciguamiento de la población, podría incidir de manera decisiva en la coordinación de los apoyos sociales a la causa de la República. En cualquier caso, y hacia las cuatro de la tarde, la voz de Enrique Mariñas cambiaría de color político tras la toma de la emisora de Radio Coruña por fuerzas de Asalto partidarias del golpe, y de los “Vivas a la República” se pasaría al discurso filo-fascista condensado en la declaración del estado de guerra.<sup>756</sup>

### **El asalto al Gobierno Civil: una plaza más en poder de los rebeldes.**

Por tanto, y con sus piezas principales atentas a los movimientos producidos en torno al Gobierno Civil o en las concurridas calles de A Coruña, la trama militar coruñesa se iba deshilvanando al fin en esta capital y, muy pronto, de forma progresiva, en las ciudades y pueblos de la provincia y de toda Galicia, recibido directamente el impacto producido por la colisión entre el poder civil y el militar en la sede orgánica de la VIII División o, sencillamente, por la propagación del eco del mismo.

A pesar de los intentos de Caridad Pita y sus ayudantes, que en contacto constante con el gobernador civil hasta las primeras horas del lunes 20 de julio, habían recorrido (o velado en la práctica) los cuarteles coruñeses para intentar descubrir o neutralizar los pasos dados o previstos por los golpistas, la marcha de la conspiración no podía ser detenida fácilmente con palabras disuasivas o gestos de intimidación jerárquica.

No en vano, la estructura que proyectó la intentona de abril, incluido el esquema de enlaces entre las unidades de las guarniciones gallegas y el núcleo de la conspiración liderado por Mola, había permanecido casi intacta y se vio fortalecida con la llegada, en ese mismo mes, del capitán de la Guardia Civil Roger Oliete Navarro, procedente de Marruecos, o el retorno a finales de junio del conflictivo Florentino González Vallés, en calidad de disponible forzoso y disfrutando una licencia de enfermedad de dos meses.<sup>757</sup> Ambos mandos desempeñaron un papel clave para implicar a la Guardia Civil como actor del plan trazado por los militares y su condición de “dudosos” era suficientemente conocida por el gobierno republicano, tal vez confiado en que con la supuesta lealtad de los mandos de este Cuerpo en la provincia de A Coruña –Clarés, Ríos y el recién llegado coronel del VI tercio, Pérez Tello<sup>758</sup> bastaría para mantenerlo dentro de la

<sup>756</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, op. cit., T II, p.695.

<sup>757</sup> Archivo del Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil, Hoja de servicios de Roger Oliete Navarro (fol. 15 v) y Florentino González Vallés (fol. 13).

<sup>758</sup> El teniente coronel José Clarés Cruz, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, había sido destinado a esta plaza a finales de abril y su nombramiento respondería a la idea de situar a un mando leal –no en vano habría ocupado un puesto importante en la Academia de Valdemoro– en un

legalidad vigente. El mismo criterio flexible utilizado para fijar la expectativa gubernamental en relación a los mandos designados para la VIII División, y alcanzar el objetivo de que capacidad de liderazgo, lealtades y jerarquía se combinaran en favor de las instituciones republicanas, bajo la tutela de hombres como los generales Salcedo y Caridad Pita o el coronel del Regimiento de Artillería nº 8, Adolfo Torrado, todos ellos militares veteranos, nada temerarios y bien conectados con el Ministerio de la Guerra o la Presidencia del Gobierno republicano. El general de brigada Caridad Pita profesaba ideas progresistas –tibias, matizadas por una mentalidad militar- eso sí- y ello, sazonado con un concepto transparente de lealtad asumido con firmeza, se tradujo en su apoyo activo a las autoridades republicanas en labores de inteligencia y vigilancia, que le llevaban a visitar cuarteles y establecimientos militares a horas intempestivas, actuación discutida por sus compañeros de armas y vista con cierto escepticismo por su superior, el general de la VIII División. De hecho, Salcedo le habría manifestado a algunos de los detractores del papel de Caridad Pita, como era el caso del comandante de Estado Mayor Gutiérrez de Soto, que, en caso necesario, si este general se propasaba en sus funciones, no le sería difícil “eliminarlo”.<sup>759</sup>

En una de las rondas de control realizadas por el general Caridad Pita durante la madrugada y la mañana del lunes 20 de julio, aproximadamente a las siete horas, y tras encontrarse el vehículo del capitán de Artillería Ozores -uno de los más conocidos conspiradores de la guarnición coruñesa- aparcado en las proximidades del Parque de Artillería, o toparse, acto seguido y esta vez en el Cuartel de Infantería, con los oficiales y jefes de Estado Mayor de la División -teniente coronel Tovar, comandante Gutiérrez de Soto y capitán Castañón-, que no supieron o no quisieron justificar su presencia allí, aparecieron por fin los indicios claros de que se estaba asistiendo al preludio del golpe esperado desde hacía semanas.<sup>760</sup>

En vista de esta certeza, por otra parte casi un secreto a voces, Caridad Pita se personó de inmediato en el palacio de Capitanía, sede orgánica de la VIII División, para relatarle a Salcedo lo sucedido y obtener de éste la orden de detención de los citados oficiales de Estado Mayor. Una vez hubo finalizado la conversación con Salcedo, el general de Brigada regresó al Cuartel de Infantería para entrevistarse con el jefe del Regimiento de Zamora nº 8, coronel Pablo Martín Alonso.

En esta nueva conversación, Caridad Pita no pudo conseguir que Martín Alonso – quien se mantuvo, en los días previos, en una posición más matizada, secundaria, cuando era en realidad un elemento fundamental de la trama en A Coruña- le diera seguridades sobre la lealtad de sus hombres al poder civil constituido, razón por la cual le destituyó en el acto para, en un lapso de minutos, y tras comprobar que la oficialidad del Regimiento en pleno demandaba la restitución de éste en el cargo y se negaba a que corriese el escalafón –y le diera una incierta palabra de honor colectiva de fidelidad

---

puesto clave como el citado, en Archivo del Ministerio del Interior. Dirección de la Guardia Civil, Hoja de servicios de José Clarés Cruz, fol. 12.

<sup>759</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 74.

<sup>760</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 12.

institucional-, decidió dejar sin efecto la medida adoptada anteriormente y restituir a Martín Alonso en su puesto.<sup>761</sup>

El error cometido por Caridad Pita al revocar su decisión, además de destilar un rancio corporativismo, similar al cometido por el coronel Torrado con los oficiales de la unidad artillera a su mando –que debe situarse, por otra parte, en su contexto-, daba cuenta de la escasa fiabilidad ofrecida, desde la perspectiva del poder civil, por la actuación preventiva de los mandos del ejército considerados, a priori, como leales al gobierno republicano –y qué decir de los indecisos- frente a la mecánica interna de un proceso involucionista que sólo se podría frenar, precisamente, con la desactivación de vínculos de honor o visiones comunes de una realidad fácil de simplificar.<sup>762</sup> Si el militar de la guarnición de A Coruña más identificado con la causa gubernamental, y por ello el más odiado por oficiales y mandos partidarios de la sublevación, había demostrado una debilidad inusual ante sus hombres, qué cabría esperar del resto de sus compañeros y subordinados, en especial de los aún indecisos, testigos de una escena protagonizada por un mando experimentado y perfecto conocedor de la marcha de la conspiración, pero lo suficientemente ingenuo como para transitar sólo, y en el peor de los momentos, por un nido de serpientes. Una ingenuidad, un exceso de confianza, que a Caridad Pita, para mayor escarnio, le granjearía a continuación -y tras el impacto sufrido al conocer la detención del general Salcedo en la sede de la División- su propio arresto a manos del coronel Martín Alonso, el hombre al que había librado de una sanción reglamentaria que, de haberse hecho efectiva, hubiera podido cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Y ante esta situación, un gobernador civil enfrentado a la cúpula militar gallega y demasiado constreñido por los criterios o los silencios provenientes de Madrid –factores que se combinarían para terminar por aislarlo entre los muros del Gobierno Civil-, poco podía hacer, con independencia de su edad o grado de preparación política y psicológica para afrontar una crisis de estado de tal envergadura, pues hombres mayores o mucho más expertos no habían observado, precisamente, una estrategia o diplomacia capaz de atemperar la belicosidad de los mandos militares. De hecho, el arresto de Salcedo -poco después de haber ordenado la destitución del Jefe de Estado Mayor, Luis Tovar, decisión protestada por la oficialidad en Capitanía-, también a manos de sus hombres y en su propio despacho, en el mediodía del lunes 20, ocurrió casi en paralelo, y no sólo por su sincronía, al de Caridad Pita en el Cuartel de Infantería, si nos atenemos al relato estricto de los hechos.

La detención de Salcedo fue también otra muestra de la vulnerabilidad de quienes se atrevieran a desafiar mínimamente un espíritu gremial destinado a socavar el poder constituido, o al menos a mostrarse indecisos, sin oponer nada más que su prestigio o jerarquía dentro de unos códigos muy rígidos que no quisieron trascender de forma completa. Salcedo había mantenido, entre la vacilación y la espera de acontecimientos, su decisión de no sumarse a la insurrección en marcha, desoyendo los ruegos de los

<sup>761</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 13-15.

<sup>762</sup> Torrado llegó a pasarle a sus hombres, semanas antes del golpe de estado, que ratificasen por escrito su fidelidad a la República y la renuncia a participar en reuniones clandestinas o preparatorias del mismo, en ATMRN, Causa 413/ 36, fol. 45-52.

oficiales que abarrotaban su despacho y le conminaban a ponerse al frente del mismo y reiterando que, aunque no le parecían mal los objetivos de la sublevación, “estaba ligado por promesas a las que no podía faltar”. Esta frase lapidaria, grabada en la memoria de su sucesor en el puesto, el coronel Enrique Cánovas Lacruz, testigo privilegiado de su defenestración, nos remitiría a las verdaderas razones de sus dudas y de las largas que les había dado a los cerebros de la conspiración y a los responsables de la V, VI y VII División.<sup>763</sup> Desde un posible pacto con Martínez Barrio a su deseo de evitar una guerra civil (señal de que percibía, esta vez, la dimensión real del golpe militar), pasando por su convencimiento de que en el plan centrípeto trazado por Mola el papel de la VIII División, debido a razones geográficas, era casi irrelevante -fuese cual fuese el motivo de la actitud dilatoria del general Salcedo-, lo cierto es que su postura indecisa fue la clave principal para explicar el retraso del golpe militar en A Coruña, pues la percepción de que los generales y el coronel de Artillería de la VIII División no se sumaban a la sublevación cundía en los cuarteles de la región militar.<sup>764</sup> Paradójicamente, esa misma indecisión contribuyó, de forma decisiva, a explicar la pérdida para la República de la provincia de A Coruña y del resto del territorio de la jurisdicción militar de la VIII División y, desde otro ángulo, nos hace preguntarnos qué habría sucedido si el general Salcedo y la cúpula de la Región Militar Noroeste hubiesen adoptado una postura inequívocamente progubernamental desde semanas antes de la rebelión militar que provocó la guerra civil en España.

Por su parte, la Guardia Civil salía al fin a la calle pese a la actitud dubitativa de sus mandos. Lo hacía debido, fundamentalmente, a la decidida actuación del violento *outsider* teniente coronel González Vallés, quien tras ser llamado por los nuevos mandos de la VIII División –en la Comandancia de la Guardia Civil no le ofrecieron ni un automóvil, ni escolta para llevar a cabo el desplazamiento y tuvo que ser la autoridad militar quien se los brindase-, y comprobar como sus superiores directos no se decidían a involucrar a la Guardia Civil en el golpe, pudo lograr, ya desde la División, la incorporación de sus hombres al plan en marcha. Para ello, se apoyó en los hermanos Manuel y Rodrigo Santos Otero (sargento y teniente, respectivamente), los tenientes González y Sarandés y el eficaz y discreto capitán Roger Oliete, enlace único de este Cuerpo con los militares.<sup>765</sup>

En este punto, a primera hora de la tarde del lunes 20 de julio, el gobernador Pérez Carballo, tuvo noticia del arresto de los generales Caridad Pita y Salcedo gracias al sargento de Artillería Febe Sánchez Turienzo, quien se desplazó ex profeso al Gobierno Civil para informar de la gravedad de la situación, y al comandante de Ingenieros Auz, también personado en el edificio después de ausentarse con sigilo de la sede de la División y, en consecuencia, testigo (y uno de los pocos apoyos de su superior en el

<sup>763</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol.8, 92-98 y 162 v (Cánovas)

<sup>764</sup> Declaración del teniente coronel de la Guardia Civil José Clarés Cruz, en ATMRN, Causa 613/37, fol.237 v. El renovado optimismo del núcleo directivo de la conspiración, liderado por Mola y retratado por su secretario, sobre las probabilidades de éxito de la insurrección en Galicia, cuyos artífices se veían ahora reforzados gracias al papel de Wenceslao Fernández Garra, amigo íntimo del “Director”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, p. 71. Y B.Félix Maíz, *Mola, aquel hombre*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 242.

<sup>765</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 209.



violento forcejeo provocado por el capitán Jack Caruncho) del arresto de Salcedo en el propio despacho de este general.<sup>766</sup>

Como ya se ha dicho, en el Gobierno Civil se trataba en esos momentos de solucionar el problema de la obtención de armas para entregárselas a los distintos comités del Frente Popular repartidos por toda la provincia -puesto que las armerías no podían proporcionar las necesarias-, y la única forma de conseguirlas era convencer a los mandos del ejército o de la Guardia Civil para que cediesen, al menos, las custodiadas en depósito o las excedentes del uso profesional a los alcaldes o representantes habilitados del poder civil. Para ello, el comandante Ríos, presente físicamente desde hacía horas en el Gobierno Civil, o el teniente coronel Clarés vía telefónica, debían avalar ante sus subordinados, normalmente jefes de los respectivos puestos o líneas de la Guardia Civil a lo largo de la provincia, las órdenes impartidas al respecto por el gobernador Pérez Carballo. Este respaldo aparente, ficcional, prestado casi a la fuerza por los mandos de la Guardia Civil, evidenciaba tanto la inflexibilidad de un obsoleto reglamento militar, como su alejamiento de los principios o fundamentos de la legalidad republicana, representada en A Coruña a través de lo que se percibía como una injerencia del gobernador civil en los asuntos internos de este Cuerpo.

Las reservas de Pérez Carballo en este punto se habían traducido, días atrás, en la exigencia planteada a la compañía Telefónica para lograr la intervención y el desvío a su despacho de toda llamada que entrara o saliera de la Comandancia de la Guardia Civil coruñesa. De hecho, el comandante Ríos, presente en una dependencia anexa, recordaría el momento en que Clarés llamó al Gobierno Civil, sin percatarse de que estaba conectando con este organismo, e intervino de forma abrupta el gobernador civil con voz desfigurada, para colgar el auricular a continuación, al ser reconocido por aquél.<sup>767</sup> Pérez Carballo ordenó que a partir de ese momento se pasasen inmediatamente a su despacho todas las llamadas realizadas por Clarés al Gobierno Civil o a los diferentes puestos de la provincia, así como las recibidas por este mando policial.

Este control telefónico, muy difícil de ocultar por otro lado, fue detectado por los jefes de la Guardia Civil y condicionó, sin duda, la posición ambigua, camaleónica, adoptada por Pérez Tello, Clarés y Ríos en los momentos previos y durante las primeras horas de la sublevación militar. Esta limitación fue sorteada fácilmente, dada su situación personal, por el hombre clave para incorporar a la Guardia Civil al golpe desde su inicio, el teniente coronel González Vallés, que actuó siempre por libre y, pese a estar perfectamente identificado (y más o menos controlado), supo jugar sus cartas a base de carisma y decisión.

El estrecho “marcaje” a que estos oficiales fueron sometidos por el gobernador civil impidió, por ejemplo, la concentración de fuerzas solicitada con insistencia por los partidarios y actores de la conspiración dentro de este Cuerpo, temerosos de que los distintos Puestos de las villas y pueblos coruñeses –escasos de personal y armamento-

<sup>766</sup> Sobre la presencia en el Gobierno Civil del comandante de Ingenieros, José Auz Auz, véase ATMRN, Causa 962/36, fol. 39 v y 40; “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña” y “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, T II, p. 570 y 694, respectivamente.

<sup>767</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 13.

podieran ser doblegados por las *hordas o turbas marxistas*. En este sentido, el entonces coronel del VI Tercio, Pérez Tello, utilizaría ambos argumentos –las escuchas realizadas u ordenadas por el Gobierno Civil o la vulnerabilidad de los Puestos rurales ante cualquier agresión armada-, como pretextos para insistir en que la Guardia Civil no podía ser la que iniciase el golpe militar en A Coruña y revelar que no dio la orden de concentración de fuerzas porque Pérez Carballo se opuso firmemente a ello.

Y esta oposición del gobernador civil a cualquier intento de reagrupamiento de efectivos por parte del Instituto armado, estaba fundamentada tanto en la intervención de comunicaciones citada, como en el hecho de que Pérez Carballo hubiera designado delegados de orden público en lugares estratégicos con capacidad suficiente para transmitir información de forma fluida –al menos en teoría-, utilizando también para ello los automóviles disponibles.<sup>768</sup> Afirmación que, si bien posee un valor autojustificadorio en el contexto represivo de la instrucción de una causa militar, denotaría la falta de consistencia de las tesis alusivas a la pasividad del Gobierno Civil, o del Comité de defensa improvisado en su entorno, en aquellas horas críticas.

De este modo, el comandante Ríos o el teniente coronel Clarés se vieron obligados a ratificar las órdenes de entregar armas impartidas por Pérez Carballo,, en conversaciones mantenidas con el jefe de la línea de Carballo, Eduardo Afonso Cruz, y con los responsables de los Puestos de Santiago, Mugardos, Sada, Fene, Cedeira, Xubia y Ferrol, entre otros –hubo, además, algunos que quedaron incomunicados-, cometido que sabotearon o ralentizaron, en la medida de lo posible, para no mermar las reticencias mostradas por los aludidos a la hora de acatar la voluntad del poder civil.<sup>769</sup> El gobernador, además, habría requerido a los alcaldes que solicitasen las armas a los jefes de Puesto de sus respectivas poblaciones, petición que debió efectuar esa misma mañana, aunque algunos autores consideran que no hubo conexión entre el Gobierno Civil y los regidores municipales durante el lunes 20 de julio. Las gestiones emprendidas por Ríos y Clarés, a instancias de Pérez Carballo, no redundaron en una actuación eficaz y sólo los puestos de Fene y Mugardos entregaron algunas armas -no sin antes manifestar sus dudas o escamotear las de buena calidad- a los alcaldes o a los representantes del Frente Popular de esas villas. En concreto, y si le damos crédito a las declaraciones del jefe accidental del puesto de Mugardos, guardia segundo Juan Gómez Vidal, resulta significativo el hecho de que este agente le entregase cuatro revólveres al alcalde de esta población –la mitad inutilizables, la otra defectuosos, sin munición alguna- e hiciese desaparecer, con posterioridad, unas diez armas que arrojó al mar.<sup>770</sup>

Se dieron casos de manifiesta insubordinación que ni el gobernador civil, ni Ríos o Clarés pudieron resolver satisfactoriamente, como el del insolente capitán de la Guardia Civil Jesús Barba, quien se amparó en el Reglamento de este Instituto para negar su colaboración a Pérez Carballo tras pedirle éste que se pusiese en comunicación con el alcalde de Ferrol, o del teniente Eduardo Afonso, al mando de la línea de Carballo.<sup>771</sup>

<sup>768</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 300 v-301.

<sup>769</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 66.

<sup>770</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 182 v, 183 y 222.

<sup>771</sup> ATMRN, Causa 613/ 37, fol. 174 v y 202 v.

Como ya se ha apuntado, en todo este proceso de ratificación de las órdenes del gobernador civil incidiría, sin duda, la falta de energía demostrada por el teniente coronel Clarés o el comandante Ríos en la defensa de la legalidad republicana. Paradójicamente, Ríos fue tachado por algunos de sus compañeros -F. González Vallés, Afonso, M. Santos Otero...miembros del núcleo duro de los golpistas en la Guardia Civil- como una marioneta del gobernador, recordándose que en febrero de ese año se habría pronunciado de forma complaciente respecto de una posible revolución comunista o que su supuesta implicación en la intentona de abril no fuese castigada, como sí se hizo con otros oficiales con o sin formación de causa –él, sin embargo, se quejaría de no haber sido elevado a la jefatura de la Comandancia de A Coruña tras la destitución del coronel Haro-, acusaciones refutadas total o parcialmente por otra facción de guardias civiles menos crítica con su actuación personal.<sup>772</sup>

Lo que resulta significativo, y aún más revelador, es que tanto Clarés como Ríos –y también el dubitativo capitán Rodríguez Cubero- permanecieron al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña tras el éxito de la sublevación en Galicia, llegando incluso el teniente coronel Clarés a ser designado como delegado de Orden Público en A Coruña, Santiago y Ferrol entre octubre y diciembre de 1936, antes de ser procesados y condenados con penas leves unos meses más tarde.<sup>773</sup>

Impartidas las órdenes oportunas, y puesta en marcha la operación bajo la dirección de los coroneles Martín Alonso y Cánovas, tras la oportuna declaración del estado de guerra en el mediodía del lunes 20, dos compañías de Infantería se dirigieron a la Plaza de María Pita y al edificio de la Telefónica, al que también llegaron efectivos de la Guardia Civil –a pesar del retraso indicado, finalmente se encargaría de tomar Radio Coruña y la Telefónica-, mientras que secciones de Ametralladoras ocuparían el Palacio Municipal y el edificio de Correos y Telégrafos en la calle Riego de Agua, intentando asegurar con ello el avance de las tropas por esta calle hacia el Gobierno Civil.

A esas alturas, el que a esas horas ya se había convertido en el símbolo de una resistencia romántica a la rebelión militar, el Gobierno Civil, se encontraba ya bien protegido por varias barricadas de sacos terreros, ubicadas junto a la fachada principal del edificio, frente a la Marina –allí se situaran un grupo de guardias de Asalto y paisanos con armamento desigual y algunos morteros-, en sus flancos y en la calle Riego de Agua, y por la instalación de una ametralladora en la azotea del cine París, cuya perspectiva desde la confluencia de las calles Riego de Agua y Real hasta el arco de la Plaza de María Pita, permitía establecer una sólida línea de contención. En un punto más alejado, una ametralladora más delimitaba un área de contención sobre la azotea del edificio del Banco Pastor.<sup>774</sup>

Pero el verdadero peligro vendría de la batería artillera situada por los militares en O Parrote, posición decisiva para decantar la lucha en favor de los sublevados, al permitir

<sup>772</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 61, 62, 177 y 210.

<sup>773</sup> Archivo del Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil, Hoja de servicios de José Clarés Cruz, fol. 12 v; ATMRN, Causa 613/37, fol. 183.

<sup>774</sup> L. Lamela, *Estampas de injusticia...* op. cit, p.82; C. Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, p.80 y “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, T II, p.694.

un ataque combinado sobre el Gobierno Civil a base de fuego de fusilería y ametralladoras y de un uso selectivo de las piezas desplegadas.

Alguien, autotitulado “el general”,<sup>775</sup> llamó al Cuartel del Cuerpo de Seguridad y Asalto sobre la una y media de la tarde y concedió un plazo de un cuarto de hora para la rendición de las fuerzas gubernamentales, mensaje transmitido por el capitán de Asalto, Herminio Vicente Barrios, a su superior, comandante Quesada, quien se encontraba en esos momentos en el Gobierno Civil, dispuesto a dirigir la defensa del edificio. Este capitán le aseguró a su interlocutor militar que las fuerzas de Asalto, a su mando en el Cuartel de ese Cuerpo, no dispararían contra el ejército, promesa que cumplió escrupulosamente, no entregando, tampoco, ni armas ni municiones a los grupos de obreros obligados a deambular en busca de las mismas por toda la ciudad, o a oficiales leales a la República como el teniente de Asalto Valcárcel, desplazado a ese lugar en su demanda desde el Gobierno Civil.<sup>776</sup>

Ese fue probablemente el último de los ultimátum rechazados por Pérez Carballo hasta entonces. Literalmente pegado al teléfono, o al telégrafo que había ordenado instalar en la Secretaría anexa a su despacho, el gobernador civil despachaba con unos y con otros de manera frenética, se aferraba a la esperanza depositada en las fuerzas de Asalto y a la palabra dada por los mandos del VI Tercio y la Comandancia provincial de la Guardia Civil, no tenía otra opción. Antes del inicio de las hostilidades, y especialmente tras la caída de los primeros obuses, fueron abandonando el gobierno Civil bastantes de los hombres y mujeres que habían permanecido en ese edificio en cumplimiento de las más diversas funciones.

Así, salieron a la calle los miembros del Comité de defensa y diputados de IR que habían tratado de arropar al gobernador, como Somoza y Guzmán, quien desde primera hora de la mañana se dedicó a reclamar a los alcaldes y dirigentes izquierdistas de toda la provincia el envío de voluntarios, armas o vehículos para ayudar a la defensa del Gobierno Civil. Uno de los miembros del citado Comité, el expeditivo dirigente anarquista Moreno Torres, dejó el edificio con esta misma misión de reclutamiento, encomendada por el mismo Pérez Carballo, que, de ese modo, trataría de coordinar la fuerza de los grupos de obreros y civiles dispuestos a aceptar sus directrices y recorrió algunos de los ayuntamientos limítrofes, misión a la que se sumaría Jaurés García García, joven socialista, uno de los denominados *hermanos de la leña*.<sup>777</sup> Junto a los anteriores, se internó en la Ciudad Vieja un número importante de obreros y civiles, entre los cuales figuraba Francisco García Valdecasas, amigo íntimo del gobernador Pérez Carballo, o el dirigente del POUM Joaquín Maurín, con destinos e intenciones diferentes, malográndose en las horas siguientes el esfuerzo de los decididos a ayudar en lo posible a contener la insurrección, un objetivo muy difícil de abordar, por no hablar de una lógica incapacidad técnica y operativa.

Sin preparación táctica ni dirección, sin armas –poco antes de declararse el estado de guerra, se había repartido una exigua cantidad de ellas en los soportales del Gobierno

<sup>775</sup> En realidad era el coronel de Infantería, Martín Alonso, como este mando reconoció en su momento, en ATMRN, Causa 1169/ 37, fol. 137.

<sup>776</sup> ATMRN, Causa 1169/ 37, fol. 27-28.

<sup>777</sup> ATMRN, Causa 127/ 36, fol. 7.

Civil, prácticamente inútiles para ese tipo de combate-, los oponentes al golpe adolecían de una alta vulnerabilidad con el único aliado de la confusión reinante en las calles.<sup>778</sup>

Por su parte, García Valdecasas, rector de la Universidad de Barcelona años después, había llegado el sábado 18 de julio a A Coruña para visitar al gobernador y pudo asistir, al día siguiente, a una reunión mantenida por Pérez Carballo y dirigentes obreros en la que éstos le pidieron autorización al gobernador civil para detener a los cabecillas de las conspiración y conjurar así el peligro sedicioso, solicitud denegada por el gobernador civil como antes había hecho con otros planes semejantes –recordemos la lista que le fue entregada semanas atrás-, demostrando de nuevo su compromiso con una legalidad insuficiente, claramente reductible a la lógica de la fuerza impuesta por el ejército.<sup>779</sup> Del mismo modo, y por una puerta lateral del edificio, abandonaba el Gobierno Civil, muy afectada por la situación, la mujer del gobernador, Juana Capdevielle, acompañada de alcalde Suárez Ferrín. Juana buscaría refugio de inmediato en una farmacia cercana, regentada por una familia amiga, los López Abondo. Atrás, en el interior del edificio, permanecería su falsa imagen de miliciana en armas, una sombra perfecta para que los propagandistas de la memoria fabricasen el mito relativo a la debilidad de los republicanos burgueses liderados por Azaña y Casares.

Durante esas tensas horas de espera transcurridas entre el viernes 17 y el mediodía del lunes 20 de julio, había permanecido junto al gobernador civil y, en las escasas horas que su marido pudo descansar, lo había sustituido en funciones testimoniales o ayudado únicamente -ya con él en plena actividad- en la tarea de recibir llamadas telefónicas, transmitir determinados mensajes o tomar recados ante el continuo sonar de los teléfonos y el telégrafo del Gobierno Civil, pero sin pretender ni llegar a determinar decisiones o iniciativas estratégicas y políticas. En el transcurso de aquellos tres días críticos, el gobernador se habría retirado a descansar tan sólo en un par de ocasiones -empujado a ello por los que veían en él síntomas claros de agotamiento, subía a sus habitaciones particulares a dar unas breves cabezadas, vestido con ropa de calle, casi siempre al amanecer-, descansos con frecuencia interrumpidos por requerirse su presencia para resolver asuntos urgentes o despachar con Madrid o con los gobernadores civiles del resto de las provincias gallegas, como ocurrió durante la madrugada del 20 de julio cuando tuvo que atender desde su propio dormitorio una

---

<sup>778</sup> De los testimonios examinados tanto en las causas militares consultadas como en fuentes impresas, se puede deducir que la orden de repartir armas debió partir del gobernador civil, ya autorizado para ello por el gobierno de Madrid y muy presionado por representantes y miembros de las organizaciones políticas o sindicales de izquierda, así como el hecho palmario de la escasez de las requisadas o en poder de la autoridad civil o judicial. En el raquítico reparto verificado poco antes de iniciarse la sublevación en el Gobierno Civil, el líder anarquista Moreno Torres, Antonio Barros, el funcionario municipal adscrito al Gobierno Civil, F Prego, el diputado Guzmán y el secretario particular del gobernador, Leovigildo Taboada -junto a algún oficial de Asalto- pudieron distribuir pistolas, escopetas y hasta alguna ametralladora, con la munición correspondiente, a los paisanos presentes en el edificio, perplejos ante la escasez de las mismas. También es probable que se expidiesen vales para que los civiles que así lo demandasen se armasen en los propios locales de partidos y sindicatos. Véase al respecto, ATMRN, Causa 127/36, fol. 5-7; “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña”, en C Fernández Santander, *Alzamiento...* op cit, T II, p. 572.

<sup>779</sup> Proxecto Interuniversitario “Nomes e voces”, Entrevista nº. 2374.

llamada telefónica de Gonzalo Acota Pan, realizada desde el Gobierno Civil pontevedrés.<sup>780</sup>

En todo ese tiempo, y en las semanas precedentes, se había mantenido la expectativa de que el golpe daría comienzo a media noche o en las primeras horas de la madrugada –la influencia de la memoria de lo ocurrido en agosto de 1932 o en abril de ese año no sería despreciable-, horas en las que el gobernador y sus colaboradores en el Gobierno Civil permanecerían en alerta y preparados para cualquier contingencia.

Sin embargo, existen testimonios que interpretan su actuación y la de Juana Capdevielle en un sentido diferente, procedentes, todos ellos, y no por casualidad, de agentes o mandos de la Guardia Civil, a la que pertenecían los autores del fracasado *putsch* de abril, sucedáneo precipitado de un golpe abortado por el ejército. Un golpe que Pérez Carballo contribuiría a esclarecer, o al menos eso intentaría –recordemos-, con medidas entra las que se contaba el viaje de Juana a Madrid para visitar a Casares Quiroga y transmitirle la versión del Gobierno Civil, debidamente detallada y documentada, sobre los hechos acontecidos a finales de ese mes.

Ya espoleados, sin duda, por la imagen de la esposa del gobernador que se había fraguado entre la oficialidad de la Guardia Civil durante las semanas precedentes y se reforzaría tras el golpe de estado, el cabo de la Guardia Civil Ceferino Raposo (jefe de puesto de Outes y asistente telefónico del jefe de línea de Santiago, alférez Rey, afectado por un problema de sordera), que en una de sus llamadas previas al Gobierno Civil, no habría aceptado –en nombre de su superior- la orden directa del gobernador de repartir armas y trataba de discutir el asunto con el comandante Ríos (forzado a ratificar las órdenes de Pérez Carballo), declararía que escuchó a Juana Capdevielle aconsejarle *que se preocupase de sublevar a los soldados de Artillería para que asesinasen a sus jefes*.<sup>781</sup> En sintonía con esta visión de una Juana Capdevielle ordenando entregas de armas y soluciones expeditivas a voluntad, se mostraron tanto el resto de los “asistentes” del mencionado alférez-jefe de línea, José Rey (por ejemplo, el cabo Manuel Carreira Fernández), como el inefable teniente coronel Florentino González Vallés, auténtico urdidor del alevoso asesinato de Juana Capdevielle en agosto de ese año.

El cabo Carreira, tan preocupado como su compañero Raposo y el alférez Rey sobre las continuas presiones a las que eran sometidos por grupos de obreros para que les facilitasen armas, manifestó en la causa en que testificó como Juana le habría asegurado aquella mañana que los guardias civiles y los de Asalto estaban con ellos, tachándolos de “héroes”, y que ella estaría preparada con una *ametralladora* al frente de los partidarios de la República. Esta testimonio –muy poco verosímil, por las razones expuestas con anterioridad, incluso ciñéndose a una frase pronunciada bajo el peso de una situación crítica, y anterior al inicio de la sublevación en Galicia- puede constituir el origen del mito, o leyenda negra -reelaborados en la memoria de varias generaciones- de una Juana Capdevielle convertida en poco menos que una jefa guerrillera, versión refrendada y cultivada por Gonzalez Vallés, escandalizado de que una mujer llevase las

<sup>780</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 59.

<sup>781</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol.215.

riendas del Gobierno Civil.<sup>782</sup> El avanzado estado de gestación en que se encontraba la esposa del gobernador civil bastaría por sí sólo para cuestionar determinadas interpretaciones que trascendían, difícilmente, significados y expresiones puramente coloquiales.

En realidad, sólo se había requerido su ayuda para transmitir a una mínima parte de las decenas de alcaldes, representantes políticos o jefes de puesto de la Guardia Civil – con los gobernadores civiles de las restantes provincias gallegas y de otras limítrofes ya habría hablado Pérez Carballo para intentar coordinar acciones y estrategias- la orden unívoca de entrega de armas, bajo una idea inicial de resistencia a ultranza ante el golpe militar. Este aserto desmentiría, por encima de posibles excesos dialécticos o interpretaciones difusas, una obsesión de género vinculada, ineluctablemente, a cierta mentalidad de casta. En este sentido, no tranquilizaría a los golpistas el que en una ocasión, y antes de producirse la sublevación fascista, Juana Capdevielle convenciese a un grupo de obreros de que el uso de las armas no era necesario en esos momentos, pero sí se reseñaría en un informe de la Fiscalía su disposición *natural* a servir café en el gobierno civil.<sup>783</sup>

En conclusión, para gran parte de la oficialidad de la Guardia Civil, Capdevielle “interveníá directamente en todos los asuntos del Gobierno Civil” (coronel Pérez Tello, culpando a Juana de haber retenido a Ríos la madrugada del lunes 20)<sup>784</sup> y, además de sustituir al gobernador cuando éste se retiraba a descansar, impartía órdenes que eran acatadas de forma servil por Clarés y Ríos “aunque fuesen disparatadas” (teniente Santos Otero).<sup>785</sup> La confirmación de los rumores que, según González Vallés, correrían por cuarteles y salas de banderas establecería la imagen de que, en definitiva, Juana “mandaba” en el Gobierno Civil”, un hecho inaudito para la cúpula de la Guardia Civil en A Coruña.<sup>786</sup> Esta percepción distorsionada de la influencia de una mujer en los asuntos públicos a través de una supuesta usurpación de funciones, confrontaba con una realidad en la que la esposa del gobernador civil no habría participado en actividades políticas durante su estancia en A Coruña, idéntica actitud a la seguida en Madrid en sus facetas universitaria y profesional. Ni tampoco se había compartido o manifestado en términos incompatibles con su papel de acompañante de Pérez Carballo –un hombre prudente y reservado, que no hubiera aceptado fácilmente la transgresión de los estrictos códigos de comportamiento de la época- en actos oficiales, recepciones o banquetes, uno de los cuales les fue ofrecido, como gesto de bienvenida, al gobernador y su esposa por la Asociación Republicana Femenina de A Coruña.<sup>787</sup>

Y desde luego, apelando a la lógica de los hechos –reflejada en la documentación existente- y no a la memoria sesgada o a los prejuicios latentes, la decisión de resistir, de no rendir bajo ningún concepto el mando civil de la provincia sin luchar antes por conservarlo, fue adoptada por el gobernador civil de forma autónoma en la convicción de que esa posición era la más conveniente para los intereses de la República, pues esta

<sup>782</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 209 y 230.

<sup>783</sup> ATMRN, Causas 613/37, fol. 63 ; y 276/36, fol. 35.

<sup>784</sup> ATMRN, Causa 613/ 37, fol. 126 v.

<sup>785</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 178 v.

<sup>786</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 209 v.

<sup>787</sup> *La Voz de Galicia*, 16 de abril de 1936.

responsabilidad era suya en puridad, y así lo veía él, en especial, ante la crisis gubernamental vivida las horas anteriores al estallido de la sublevación en A Coruña (20 de julio).

La idea de no plegarse al chantaje de los rebeldes no partió en ningún momento de quienes trataron de influir o determinar sus actos y pensamientos durante los últimos días o semanas en uno u otro sentido, como hemos visto. Por otra parte, ni los discretos intermediarios del comandante Ríos (recordemos, Suárez Ferrín, Mazariegos) ni una posible o puntual falta de unanimidad del Comité de defensa de la República forjaron argumentos determinantes para que Pérez Carballo renunciase o modificase su voluntad de servir a la República desde la ley, y sólo los dos responsables del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la provincia, el comandante Quesada y el capitán Tejero Langarita, pudieron determinar con nitidez algunas medidas adoptadas con estricto carácter técnico o policial.

Pérez Carballo se diferenciaría así de los comportamientos seguidos por los gobernadores de las restantes provincias gallegas, que prácticamente entregaron el mando civil a la autoridad militar sin oponer ninguna resistencia o denotando una falta de energía o decisión que, si no se puede censurar desde el punto de vista del contexto de abandono sufrido -en especial la tarde-noche del 18 de julio, ante la crisis gubernamental protagonizada por Casares Quiroga y Martínez Barrio-, sí que resulta cuanto menos significativo a efectos del mantenimiento de la legalidad republicana amenazada. Resulta difícil de justificar, por ejemplo, el hecho de que el recién nombrado gobernador civil de Lugo, Ramón García Núñez, hasta entonces funcionario del Banco de España y presidente de IR en Vigo, se hallase en su ciudad natal de permiso el sábado 18 de julio y tuviera que retornar apresuradamente a su puesto en el Gobierno Civil de Lugo, con el que, previamente, no pudo comunicar en la madrugada del domingo.<sup>788</sup>

No queremos cargar las tintas en la actuación de García Núñez ni en su insólita forma de proceder en este caso -un prometedor abogado con una proyección comparable a la de Pérez Carballo, aunque algo mayor, veintisiete años-, justificable en cualquier otra ocasión, pero difícil de entender en el contexto de aquellos días, ni en la de ninguno de los gobernadores que se plegaron a las exigencias de los golpistas o confiaron en los mandos militares confabulados con la conspiración a lo largo de la geografía del país. Tampoco se pretende una crítica descontextualizada de los que gestionaron defectuosamente la legalidad vigente y, mucho menos, de los derrotados tras intentos de resistencia desiguales, lastrados también por el factor de la incertidumbre ante la naturaleza proteica del golpe. En comparación con los casos de las provincias donde se consiguió frenar la conspiración, en A Coruña jugarían un papel importante a favor de los sublevados, según la mayoría de los autores consultados, el pedigrí o la identidad golpista de los Martín Alonso, González Vallés, Haro y otros -por no hablar de la oficialidad intermedia-, la incapacidad de los militares leales de coordinar el elemento obrero y civil en apoyo de la causa republicana -las armas

---

<sup>788</sup> ATMRN, Causa 330/36, fol. 100-103.



disponibles eran las del ejército y de los cuerpos policiales, y la preparación técnica también era suya- y, en última instancia, la bisonería del gobernador civil.

Sin embargo, y a riesgo de que determinadas premisas de análisis se hallen o no un tanto simplificadas, se puede colegir que a algunos de los gobernadores que contribuyeron o asistieron al fracaso de la sublevación en sus respectivas demarcaciones provinciales les ayudó una baza sorpresiva: el auxilio de una unidad militar exterior, por ejemplo, o algo más prosaico como la propia situación geográfica y el carácter y la dependencia orgánica de las respectivas guarniciones o circunscripciones militares. Entre los gobernadores *victoriosos* se hallaría el de Almería, Juan Ruiz-Peinado Vallejo. Su caso nos puede servir, desde una perspectiva comparativa, para valorar la actuación de Pérez Carballo. Ruiz-Peinado sufrió también la incertidumbre de más de cuarenta y ocho horas de espera tras la noticia del golpe militar en Marruecos, fue igualmente engañado por los jefes militares de la guarnición almeriense y adoptó, finalmente, medidas similares a las tomadas por Pérez Carballo: formó o improvisó un comité de defensa, mantuvo un desesperante (pero algo menos tenso) tira y afloja con el vacilante comandante militar de la provincia, teniente coronel Huerta, y sometió a un particular “marcaje” al capitán Peñafiel de las fuerzas de Asalto, *alter ego* de los mandos de la Guardia Civil de A Coruña, comandante Ríos y teniente coronel Clarés. El novelesco relato de sus peripecias y avatares políticos y humanos, durante esas trágicas horas en Almería, resulta bastante esclarecedor, reflejos de subjetividad al margen.<sup>789</sup> Sus dudas, expresadas a las para él desorientadas o ausentes autoridades de Madrid, sobre cómo llevar a cabo la tarea de amar a la ciudadanía, parecen muy reveladoras: “¿dónde tenía yo, dónde tenían los gobernadores las armas que poder distribuir al pueblo?. Las armas del Estado siempre han permanecido en poder del Ejército”.<sup>790</sup> Resaltan, sin duda, sus asertos sobre las razones de que los militares no se sublevaran el mismo día: “no creían en su éxito” y “nadie quería ser el primero, por si quedaba sólo. Ahora, si otros iban ya adelante, la cosa era diferente”.<sup>791</sup>

El gobernador Ruiz-Peinado no divagaba a la hora de explicar por qué se sublevaron finalmente aquellas guarniciones que habían permanecido indecisas varios días tras la insurrección de Marruecos: “Fue el instinto de conservación, el miedo a la reacción del pueblo”.<sup>792</sup> En esta escala de certezas, basadas en relatos muy descriptivos y lúcidos, y tras la derrota de la insurrección en Almería, su transcripción de las razones esgrimidas por un capitán golpista, para justificar su apoyo a la trama conspirativa, puede arrojar alguna luz sobre la cuestión que estamos debatiendo: “señor gobernador (...) usted no podrá comprenderlo, pero nosotros, los militares, somos una gran familia, y lo que se acuerda por nuestros hermanos, lo tenemos que cumplir todos”.<sup>793</sup>

Pero con independencia de los rasgos de la idiosincrasia militar descritos en el párrafo anterior, y en lo que aquí interesa, a Ruiz-Peinado de nada le valieron sus inteligentes estratagemas –se hizo pasar, con éxito y varias veces, por un capitán de la

<sup>789</sup> J. Ruiz Peinado Vallejo, *Cuando la muerte no quiere*, México, Imprenta Azteca, 1969, p. 137-173.

<sup>790</sup> Ibid, p. 140.

<sup>791</sup> Ibid, p.148

<sup>792</sup> Ibid.

<sup>793</sup> Ibid, p 169.

guarnición cuando llamaban desde Granada para exigir que el mando militar almeriense declarase el estado de guerra-, o sus buenas relaciones con el comandante militar de Almería, teniente coronel Huerta, pues todos los vínculos y ententes cultivadas con los mandos militares y de la Guardia Civil se desvanecieron cuando el espíritu corporativo estalló y unos y otros salieron a la calle con la impronta de la sedición en sus movimientos.

Situación análoga a la vivida por los gobernadores de A Coruña y de otras provincias españolas (o casi), pues el gobernador civil de Almería contó con el auxilio imprevisto, postrero, de una unidad de soldados de Aviación –setenta hombres y una ametralladora-, de algunos aeroplanos de este arma y del destructor *Lepanto*, factores decisivos a la hora de romper el sangriento cerco del Gobierno Civil y dominar la sublevación en la ciudad mediterránea. En otros casos, sin embargo –y en estas líneas no se puede realizar un estudio exhaustivo, sólo establecer algunos elementos de contraste-, una avalancha popular, en este caso con predominio anarquista, eclipsó al gobernador y derrotó a la sublevación (Málaga, J.A. Fernández Vega); o una entente entre un gobernador audaz y las fuerzas sindicales solventó la situación en la mayor parte de la provincia (Jaén, Luis Rius Zanón).

No obstante, Jaén, Málaga o Almería no eran sedes de División o de Región Militar del ejército español, con el potencial militar intrínseco o la abundancia de oficiales *contaminados*, en especial de Estado Mayor, concentrados en éstas y, por descontado, integrados en las unidades radicadas en A Coruña: 15º Brigada de Infantería, al mando del general Caridad Pita (Regimiento Zamora nº 8, coronel Pablo Martín Alonso), 8º Brigada de Artillería (Regimiento nº 16, Adolfo Torrado) y, dependiendo de la Base Naval de Ferrol, el Regimiento de Costa nº 2.

Compárese la dimensión de esta fuerza –sólo se han consignado los nombres de la unidades acantonadas en la ciudad, sin contar las radicadas en las restantes ciudades gallegas, Asturias o León o los servicios centrales de la VIII División- con la falta de cualquier tipo de guarnición militar en provincias donde las fuerzas de seguridad, al mando de sus respectivos gobernadores civiles, dominaron el conato de sublevación con gran facilidad, caso, por ejemplo, de Cuenca y Ciudad Real.

Tanto es así –un análisis profundo del papel de los gobernadores civiles durante el golpe de estado, contemplaría las realidades sociopolíticas y la dimensión de las fuerzas militares o policiales de cada demarcación-, que cinco de las ocho ciudades constituidas como sedes de Región Militar cayeron en poder de los sublevados en los primeros días del golpe de estado, y, entre las tres que resistieron, Madrid y Barcelona eran plazas casi inexpugnables por distintas razones (desde la fuerza del aparato del Estado al peso institucional representado). La tercera ciudad sede de División que no cedió ante el golpe de estado, Valencia (tercera división), vio como los sublevados al mando de Martínez Monge no pudieron superar ni sus divisiones internas ni las ya tópicas indecisiones de partida, factores magnificados cuando se recibió la noticia del fracaso de Goded en Barcelona.<sup>794</sup>

---

<sup>794</sup> J Aróstegui, *Por qué el 18 de julio*, op. cit, p. 87.

La breve perspectiva comparativa esbozada no serviría para librar de cualquier responsabilidad al gobernador civil de A Coruña, pero sí ayudaría a matizar la teoría que incidiría en las tensiones surgidas entre Salcedo y Pérez Carballo como una de las claves de la descoordinación ente el poder civil y las fuerza leales a la República y, en consecuencia, del éxito de la sublevación. Esto es así por varias razones: la primera, porque Salcedo permaneció indeciso porque su situación personal y el temor al fracaso de la conspiración -y a las posibles consecuencias del plan para él y sus hombres- se lo impidieron; la segunda, y sin dudar de la existencia de perspectivas antagónicas -derivadas de concepciones diferentes de la organización del Estado y de evidentes conflictos competenciales-, constituiría una obviedad pero evitaría, al fin y al cabo, la exageración de la importancia de las relaciones personales, o de los vínculos forjados entre representantes del poder civil y militar, en el proceso global de un golpe de estado. Un proceso involutivo, resultado de un plan de carácter tanto político como criminal, que se llevó por delante, como es sabido, a gobernadores y alcaldes muy bien avenidos, en principio, con los mandos del ejército, caso, por ejemplo, del gobernador de Sevilla, Varela Rendueles, o, en cierto modo, de los gobernadores de Lugo, Orense y Pontevedra.

Pérez Carballo pidió, de igual forma, esta ayuda exterior a Ferrol –la misma que, bajo otras coordenadas, lograría Ruiz Peinado *in extremis*- un último recurso cuando las balas y el fuego artillero arreciaban y no se veía otra salida posible, pues no podía contar ni con las guarniciones ni con los gobernadores civiles de las provincias limítrofes, encuadradas dentro de la jurisdicción de la Región militar Noroeste (VIII División), sublevada casi en pleno en A Coruña. Su llamada desesperada al Vicealmirante Núñez, jefe de la Base Naval de Ferrol, ordenando que enviase un torpedero para bombardear el monte de Pedroso, Capitanía General y el castillo de San Antón –la prioridad era neutralizar las piezas de artillería enclavadas en sus inmediaciones-, recibió la negativa de este Jefe, basada en la disfuncionalidad de este tipo de buque para ese cometido, con toda probabilidad un pretexto banal justo antes de que la conversación telefónica se interrumpiese al cortar los rebeldes las comunicaciones del Gobierno Civil.<sup>795</sup> En el momento de hablar con el gobernador Pérez Carballo, el vicealmirante Núñez había sido destituido por el Ministerio de la Guerra y ya actuaba bajo el signo y las órdenes de los sublevados, circunstancia desconocida para Pérez Carballo. Núñez habría sido empujado a sumarse a la sublevación por su oficialidad, en especial por el capitán de Navío Francisco Moreno – hasta ese momento habría esperado el plácet de Salcedo para levantarse contra la República-, mientras que el contralmirante Azarola (ministro de Marina con Portela Valladares) se aferraría a una posición de neutralidad y se consideraría arrestado esa misma tarde, antes de ser también destituido, dada la coyuntura creada de ruptura con la legalidad vigente.

Azarola, jefe militar del Arsenal ferrolano, adoptaría esta actitud pasiva tras desoír por la mañana las instrucciones impartidas por el alcalde de Ferrol, Antonio Santamaría, a instancias de Pérez Carballo -quien ya se lo habría interesado previamente a las

---

<sup>795</sup> ATMRN, Causa 19/36, fol 99.

autoridades de Madrid, sin recibir contestación-, para que se hiciese cargo de la Base Naval.<sup>796</sup> Por su parte, la marinería, sublevada el día de autos, resistiría hasta el miércoles 22 a bordo de los buques *Cervera* y *España*, día en que cedió ante el cerco dispuesto por fuerzas del ejército y la Guardia Civil, neutralizadas la víspera las fuerzas leales, encabezadas por el alcalde y el presidente de la Diputación coruñesa, López Bouza, que se habían atrincherado en el Ayuntamiento ferrolano.

Situación no tan diferente, sobre todo en el papel deslucido que jugaron los defensores de la legalidad, de lo sucedido en Santiago de Compostela, en donde el alcalde Anxel Casal frenó, en principio, los ímpetus de los milicianos, decididos a ocupar objetivos estratégicos y hacerle frente a la sublevación de manera activa –aunque un grupo no muy numerosos partió hacia A Coruña sobre las ocho de la tarde, ya rendido el gobierno Civil de A Coruña-, y acabó por entregar el poder al comandante militar de la plaza, Bermúdez de Castro, a última hora del lunes 20 de julio. El resto de las provincias gallegas también respondió a esta lógica de rápida erosión de la autoridad legal republicana y se fueron derrumbando, como un castillo de naipes, la misma tarde-noche del 20 de julio –las fuerzas sublevadas en Lugo, Ourense y Pontevedra seguirían, escasas horas más tarde, el mismo guion interpretado en A Coruña-, pues los diferentes núcleos de resistencia constituidos a lo largo de la geografía gallega no pudieron frenar la amenaza o la agresión directa de los militares fascistas. Tan sólo algunos puntos de la provincia de Pontevedra conseguirían prolongar la resistencia más allá del fatídico lunes 20: Teis y O Calvario (en Vigo) y la localidad fronteriza de Tuy, sometida el 27 de julio tras duros combates en los que los rebeldes no escatimaron en el empleo de medios materiales y humanos.<sup>797</sup>

Así pues, Pérez Carballo y los ya escasos defensores del Gobierno Civil no tenían más opción que tratar de prolongar una resistencia incierta, en condiciones de franca desigualdad, y esperar que el gobierno controlase la insurrección en el resto del país y, con ello, vaciar de significado la acción de los golpistas en A Coruña. Porque con la irrupción del fuego artillero, cuyo inicio se retrasó de manera sospechosa para hacerse después intermitente, se hacía casi imposible mantener a raya a los rebeldes, más allá de propiciar que un halo romántico pudiera convertir un acto de dignidad en defensa de la ley y las instituciones republicanas en un símbolo para quienes luchaban entonces contra la insurrección en las calles de A Coruña y del resto de Galicia.

Ángel Pérez Carballo, hermano del gobernador civil y testigo directo de la defensa del edificio, no en vano permaneció en su interior durante toda la refriega -había llegado semanas atrás para pasar las vacaciones, tras finalizar sus estudios de Bachillerato- estimó en unos treinta el número de guardias de Asalto que, junto a sus jefes, los leales Quesada y Tejero, y grupos de paisanos que entraban y salían del edificio

<sup>796</sup> ATMRN, Causa 19/36, fol. 115.

<sup>797</sup> A este respecto, revisten un gran interés las aportaciones de M. X. Souto Blanco, J Prada y A. Rodríguez Gallardo para retratar las secuencias del golpe de estado y la represión desatada en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente.

continuamente, se enfrentaron a los sublevados, armados con mausers y algunas ametralladoras.<sup>798</sup>

Sin embargo, no se pudieron usar de forma eficaz los morteros disponibles en el Gobierno Civil, pertenecientes al Cuerpo de Seguridad, pues fueron deliberadamente sabotados por el teniente Benito Rodríguez Reigada para que desde su emplazamiento en el baluarte defensivo improvisado en la fachada principal del Gobierno Civil, frente a la Marina, no alcanzasen la batería artillera instalada por las fuerzas rebeldes en O Parrote. Estos morteros se calibraron para una distancia de unos 300 metros y, sin embargo, los cañones de los sublevados se encontraban a no más de 200 –situados, además, en un plano más elevado que el Gobierno Civil, por lo que su eficacia aumentaría al estar techado de pizarra este edificio–, por lo que la mayoría de los proyectiles fueron a parar a las aguas del Atlántico.<sup>799</sup> La actitud del teniente Reigada levantó las suspicacias de los paisanos que luchaban a su lado, situados a su espalda, pendientes de la actuación de los agentes del Cuerpo de Seguridad, circunstancia sorteada con astucia por este oficial para no abortar su plan de sabotaje, causa de que las únicas víctimas producidas entre los servidores de la batería artillera de las fuerzas rebeldes se debieran a la explosión de una pieza defectuosa.

Aunque la versión de este oficial de Asalto podría, esto es obvio, ajustarse a un intento de justificar de algún modo su presencia entre los defensores del Gobierno Civil –se le juzgaba y, además, debía afrontar hipotéticos ajustes de cuentas o faccionalismos que lastraban a este cuerpo policial, denunciados por el teniente Raúl García y agravados, si cabe, por el contexto político generado–, el agente de Vigilancia Manuel Morgade testificó que la mañana del lunes 20 había presenciado como el capitán Tejero ordenaba una vigilancia especial sobre el teniente Reigada por tener sospechas sobre su actuación, circunstancia de la que informó al interesado de manera muy discreta, con el fin de alertarle sobre las intenciones de uno de los colaboradores más estrechos del gobernador civil Pérez Carballo.<sup>800</sup>

Para mayor dificultad e infortunio de los defensores del Gobierno Civil, y en relación con la pasividad o conducta favorable a los rebeldes manifestada por una parte de la oficialidad de Asalto, no faltaron negativas de entrega de municiones –el teniente Valcárcel se desplazó al Cuartel de Asalto para obtener únicamente la negativa del capitán Vicente Barrios a facilitarle armamento, y un arresto de propina–, defensas pasivas de edificios estratégicos (Correos y Telégrafos, Radio Coruña, entre otros) y desertiones como la del teniente de este cuerpo Raúl García, que aprovechó la ausencia del capitán Tejero Langarita, verdadero artífice de la defensa del Gobierno Civil desde el punto de vista militar y garante del mantenimiento de la disciplina entre sus hombres.<sup>801</sup> La figura del capitán Tejero Langarita se reveló, de forma indiscutible –existen innumerables pruebas y testimonios de ello–, y con el permiso de su superior, el cauteloso y competente comandante Quesada, como la del único mando policial capaz

<sup>798</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II. p.694.

<sup>799</sup> ATMRN, Causa 1169/37, fol.40-41.

<sup>800</sup> ATMRN, Causa 1169/37, fol. 35 (Raúl García) y 207 v (Manuel Morgade).

<sup>801</sup> ATMRN, Causa 1169/37, fol. 32.

de proponer alguna forma de frenar el avance de los militares por las calles de A Coruña o de liderar más tarde, en medio de un intenso tiroteo, a los guardias y suboficiales de Asalto comprometidos realmente en la lucha. Algunos de ellos, así como un número indeterminado de civiles, parapetados dentro o fuera del Gobierno Civil o en tránsito por las calles de A Coruña, dejarán la vida en el empeño. Varias estancias del Gobierno Civil, incluido el dormitorio del gobernador civil, se convirtieron en una improvisada y mal provista enfermería.

Horas antes de la declaración del estado de guerra, el capitán Gonzalo Tejero, preocupado por el cariz que iba tomando la situación, quiso llevar a cabo una maniobra envolvente para rodear y aislar el Cuartel de Artillería tomando la muralla del convento de los Capuchinos y las callejuelas adyacentes, estrategia desaconsejada, de manera interesada, tanto por los oficiales de Asalto, como por el comandante Ríos, reunidos en un despacho del gobierno Civil o haciendo apartes con el propio Tejero en los pasillos del edificio.<sup>802</sup> De hecho, Ríos fue sondeando uno por uno a todos los oficiales de este Cuerpo –comandante Quesada, capitanes Tejero, Armas y Vicente Barrios, tenientes Raul García, García Losada, Rodríguez Reigada...- acerca de la postura que adoptarían si el golpe militar se consumaba y pudo verificar una respuesta mayoritaria en favor de la sublevación, o cuanto menos la voluntad tangible de no oponerse a ella.

La única excepción a la regla, según la versión de Ríos, fue, como no, la del capitán Tejero, quien le dejó muy claras sus intenciones: “aunque me quede sólo, haré frente con un mosquetón a todos los que vengan”.<sup>803</sup> En este punto, no parece verosímil la velada referencia del comandante de la Guardia Civil, Ríos, a la neutralidad benévola observada por el jefe del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la provincia, comandante Quesada, respecto a la trama conspirativa y el desarrollo del golpe, pues tanto sus antecedentes como responsable del Cuerpo de Seguridad en Vizcaya (y después en A Coruña), como su actuación durante el combate no arrojaron ninguna duda y estuvieron, a la vez, teñidos de buen juicio. La cautela de sus actos, y un razonable aunque difícil cálculo de probabilidades, no ocultaron la energía puesta en la defensa de la legalidad para desmentir cualquier tipo de connivencia con los golpistas, que Ríos creyó vislumbrar en un cruce de impresiones ocurrido en el domicilio particular del gobernador, situando en el mismo edificio del Gobierno Civil, horas antes de la declaración del estado de guerra.<sup>804</sup>

Lo que sí conoció el gobernador civil de primera mano, para su sorpresa, fue la defección de la Guardia Civil y su incorporación a las fuerzas rebeldes, hecho ocurrido con un cierto retraso pero que implicó un plus importante de eficacia o de disuasión más a la hora de controlar objetivos estratégicos en la ciudad, además de constituir un factor

<sup>802</sup> ATMRN, Causas 613/37, fol. 61 v; y 1169/37, fol. 26.

<sup>803</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 59-63.

<sup>804</sup> Un aval para la trayectoria e identidad del comandante de Asalto, Manuel Quesada del Pino, como hombre leal a la República, en J. M. Rendueles, *Rebelión en Sevilla*, op cit, p. 14. Como contraste, la versión aportada por el comandante Ríos, convencido de que Quesada no era partidario de hacer fuego contra los rebeldes, argumento basado, entre otras cosas, en el hecho de que la orden de comenzar a disparar sobre los sublevados la dio el capitán Tejero, en ATMRN, Causa 276/36, fol. 10; o, en este mismo sentido de atribuir a Tejero la ruptura de la pasividad impuesta supuestamente por su jefe, en “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p. 573.

naturalmente desequilibrante y esclarecedor para comprender que la provincia de A Coruña estaba, virtualmente, en manos de los sublevados. Y a escala local, su concurso permitió estrechar el cerco del Gobierno Civil sobre la Avenida de la Marina, los jardines de Méndez Núñez y el Hotel Atlántico, una muralla que los grupos de obreros y voluntarios izquierdistas no podrían romper para auxiliar al grupo de guardias de Asalto y de civiles dirigidos por Tejero y Quesada.

En el momento de ser informado de este particular, Pérez Carballo reaccionó librándose de ese estigma de persona reservada y cautelosa que lo caracterizaba –su propio secretario, Leovigildo Taboada lo definía en esos términos- y mostró sin pudor su sorpresa y su cólera ante el hecho consumado de la traición de la Guardia Civil y, en consecuencia, de sus mandos provinciales, Clarés y Ríos, en los que había confiado porque su lealtad, aun percibida como un tanto forzada, y su colaboración necesaria eran las premisas fundamentales para conjurar la conspiración en marcha. Como afirma el comandante Ríos:

(...) Cuando llegó al Gobierno Civil la noticia de que la Guardia Civil les había causado víctimas por el Camino Nuevo, se levantó rápidamente de su asiento el Gobernador Civil y al abrir la puerta del despacho para salir, dijo con coraje “ahora lo comprendo todo” y continuó por el pasillo, y esto unido a la pasividad de los guardias de Asalto debido a gestión del declarante con los oficiales de dicho Cuerpo, les deprimió de tal modo los ánimos que empezaron a hablar de rendición.<sup>805</sup>

Esta escena pudo ocurrir ya avanzada la tarde, probablemente varias horas después de que la defección de la Guardia Civil se consumase (la noticia tardaría, de ese modo, en ser confirmada por el gobernador y sus colaboradores). La traición de este Cuerpo constituiría –para algunos protagonistas, testigos y estudiosos, y no sólo para la fuente citada- la causa fundamental de la claudicación de los gubernamentales y, en consecuencia, de la entrega del Gobierno Civil a las fuerzas sublevadas. En todo caso, y más allá de la interpretación simplificada subyacente al relato extractado, resulta en parte verosímil dado el transcurso de los acontecimientos hasta ese momento, y la secuencia inmediata de informaciones cruzadas entre los defensores del Gobierno Civil y los pocos agentes u obreros que se atrevían a regresar al edificio para transmitir las últimas novedades, ya que las comunicaciones habían sido cortadas por los rebeldes poco después de empezar los combates. La incomunicación y el aislamiento de la autoridad civil se acentuaron con la pérdida de Radio Coruña. Hasta las cuatro de la tarde esta emisora se había constituido en un poderoso altavoz de las fuerzas progubernamentales, pero a partir de esa hora cambió súbitamente de bando con el locutor Enrique Mariñas luciendo sus recién adquiridos galones de propagandista de la insurrección. Esta estación de radio había emitido durante toda la mañana -bajo las circunstancias analizadas páginas atrás- notas enviadas por el gobernador civil para informar y tranquilizar a la población, proclamando que las fuerzas de seguridad garantizaban el control de la situación por parte del gobierno o, en paralelo, animando a los ciudadanos a salir a la calle a prevenir o combatir el golpe militar. Ahora empezaría a hacer lo mismo en favor de los sublevados, pero con otro tono y lenguaje.

Pero justo antes de comenzar a hablar de rendición, el comandante de la Guardia Civil Ríos tuvo que afrontar las consecuencias de su propios actos o maniobras sibilinas

<sup>805</sup> ATMRN, Causa 613/ 37, fol. 242.

para sabotear u obstaculizar la defensa del Gobierno Civil, o de la percepción de todo ello por parte del capitán Tejero, el gobernador civil y algunos de los defensores del Gobierno Civil pertenecientes al Comité de defensa del Frente Popular: manipulación de diferentes intermediarios para convencer al gobernador civil de que renunciase a oponer resistencia al golpe militar, entorpecimiento de las diligencias de requisa de armas, ocultamiento de una caja de bombas *Laffite*, deslealtad en el asesoramiento táctico y técnico de la autoridad civil... traición a la ley y a la República, en definitiva.

De este modo, el comandante Ríos se vio acorralado, de forma súbita, en uno de los pasillos interiores del Gobierno Civil, entre el cañón de un mosquetón oprimiéndole el vientre y la indignación del corajudo oficial de la Guardia Civil, Gonzalo Tejero, que empuñaba el arma. De no ser por la intervención conciliadora del gobernador Pérez Carballo, que se interpuso entre ambos y le pidió calma a Tejero, el incidente podría haber degenerado en algo mucho peor.<sup>806</sup> La recobrada serenidad de Pérez Carballo le ayudaría también a meditar la posibilidad de negociar un alto el fuego -y, en principio, nunca una rendición- con la nueva cúpula de la VIII División (eran las siete de la tarde), tras un combate que había comenzado hacía cinco horas y una tensa y agotadora espera de cerca de tres días hasta el comienzo de la insurrección en A Coruña.

Según el testimonio anónimo de uno de los dirigentes políticos o sindicales que todavía permanecían junto al gobernador Pérez Carballo, en torno a esa hora se había producido una reunión para debatir la situación crítica en que se encontraban los defensores del Gobierno Civil, celebrada en el teatro Rosalía de Castro, situado en los bajos del edificio, cuyo interior había sido gravemente afectado por los obuses.<sup>807</sup> Obviamente, el motivo de la misma era explorar qué alternativas existían ante la certeza de que, salvo un giro impredecible de los acontecimientos, no había, en la práctica, posibilidades de mantener vivo tanto un símbolo democrático imprescindible en ese trance como la más alta magistratura civil de la provincia.

En el debate planteado, ya no pesaron tanto consideraciones políticas, factores institucionales o equilibrios sostenidos hasta entonces entre el Comité de defensa, el gobernador civil y, en última instancia, el gobierno de la República y sólo se vislumbró la responsabilidad institucional que a un gobernador civil le hacía pensar con la lógica de un sistema político demasiado frágil para enfrentar desequilibrios globales o ataques directos a principios democráticos insoslayables. Después del intercambio de opiniones producido, la opción de resistir habría sido descartada de forma virtual, pese a las reservas manifestadas por Pérez Carballo, partidario de agarrarse (como abogado que era) a cualquier resquicio de esperanza legalista, política, antes que aceptar la rendición incondicional, en el más amplio sentido de este concepto jurídico y militar en aquellos momentos.

La sensación de que todo estaba perdido se debía, en primera instancia, en lo fundamental al problema de la escasez de municiones –todos los intentos de reponerlas

<sup>806</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p. 695.

<sup>807</sup> “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña”, en C. Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, T II, p. 575



habían tropezado con la oposición de los oficiales de Asalto recluidos en el Cuartel de este Cuerpo, liderados por el capitán Vicente Barios- y al número de bajas producidas hasta ese instante. Entre ellas, se contaban varias víctimas mortales y algunos heridos muy graves, atendidos por improvisadas enfermeras a base de antisépticos provenientes del contenido de una botella de Jerez, luego convertida por la historiografía franquista en el eje de un grosero mito. Pero también era evidente que la falta de una mínima expectativa de apoyo exterior o de noticias sobre los civiles enviados a expediciones temerarias –parte de los *hermanos de la lejía* trataron de estrellar un camión de explosivos contra las fuerzas sublevadas, aunque otras versiones hablan de un mero intento de transporte de explosivos-, tampoco justificaban un derramamiento de sangre innecesario.

En último término, Pérez Carballo habría discutido con el resto de los miembros del Comité de defensa y los mandos de Asalto, bajo el rumor de fusiles y obuses, en la idea de acordar una salida airosa para evitar la humillación de someterse a los dictados de los enemigos de la República -o, quizá, en la estrategia de ganar tiempo a toda costa- y nunca cómo modo de afrontar los primeros jalones de una derrota. Entre los asistentes a esta reunión, se encontrarían probablemente, además de los mandos de Asalto Quesada y Tejero, el presidente de la Agrupación local del PSOE, Ramón Maseda, Enrique Rosende y Eladio Muñíos (CNT), Manuel Fernández (PS) y José María Eirís (IR, en esos momentos delegado de Orden Público en Teo), entre algunos otros.

En defensa de Pérez Carballo, se podría argumentar sin dificultad que el gobernador de A Coruña se había resistido hasta última hora a rendir el Gobierno Civil, decisión tomada finalmente con muchas dudas, a pesar de la conciencia de la incapacidad efectiva de continuar con la resistencia armada, como le confesaba a su hermano Ángel. El capitán Tejero había sugerido, en su momento, prolongar el combate hasta agotar las municiones y éstas se habían agotado, virtualmente, antes de que Pérez Carballo se aviniera a debatir, con representantes de partidos políticos o sindicatos, la posibilidad de claudicar –bajo ciertas condiciones que dimensionase el esfuerzo realizado para contener el asedio- ante la fuerza militar demostrada por los sublevados. En cambio, su superior jerárquico, el comandante Quesada -jefe del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la provincia- se había mostrado siempre más proclive a la defensa del código de honor militar, cumplido, no obstante, el compromiso de luchar hasta donde fuese posible, principios que no traicionaría en ningún momento. Eran dos formas de servir a una misma causa, dos ejemplos de lealtad bajo el peso y los rasgos de la mentalidad militar o de los matices contextuales contemplados a lo largo de este texto.

Abundando en el proceso que condujo a la rendición del Gobierno Civil, cabe decir que la secuencia final se tradujo en la propuesta presentada por Pérez Carballo a sus colaboradores para tratar de buscar un punto de encuentro con los responsables del Asedio, Ejército y Guardia Civil. Una propuesta que consistía en pactar con los sublevados una especie de armisticio o alto el fuego que daría lugar a una tregua de veinticuatro horas, destinada a aguardar a que se aclarase el panorama nacional, tras cuya dilucidación ambos bandos aceptarían, de forma tácita, las coordenadas políticas imperantes en ese hipotético momento. La idea esbozada por el gobernador fue aceptada de forma unánime por todos sus colaboradores en el transcurso de la reunión

mencionada –significaba una forma de ganar tiempo y, por otra parte, se confiaba, seguramente, en que la situación se resolviese con rapidez en favor del gobierno republicano y de la legalidad vigente- y, de inmediato, se envían emisarios para parlamentar con los rebeldes.<sup>808</sup>

Al margen de la dificultad intrínseca a esta proposición, la posibilidad de que los jefes militares sublevados la aceptasen era prácticamente nula, pues si bien es cierto que aún no controlaban la dispersa y descoordinada resistencia obrera, sabían cómo culminar la tarea sin correr riesgos innecesarios, dadas las características de sus oponentes y el progresivo descenso de los niveles de incertidumbre.

Así las cosas, y a pesar de que la vocación de jurista del gobernador civil había concedido a la causa de los progubernamentales la oportunidad, al menos, de tener algo que negociar con los militares, el mando sublevado decretó la inmediata salida incondicional de los defensores del Gobierno Civil –Pérez Carballo, los jefes de Asalto, el militante de IR, Manuel Vázquez, y el dirigente anarcosindicalista, Enrique Rosende, entre ellos-, a través de la calle Riego de Agua y en dirección a la Plaza de María Pita. Los ya prisioneros de los sublevados no tuvieron otra opción y cumplieron la voluntad del vencedor. Antes de dar por concluida la lucha, Pérez Carballo había rechazado una oferta de un marinero del transatlántico “Magallanes”, que le había ofrecido un hueco a él y a sus colaboradores en el barco y un traslado inminente a Asturias, pero la responsabilidad de la autoridad civil pesaba demasiado como para poner en riesgo la palabra dada. Casualmente, en la mañana del 18 de julio, una comisión de oficiales del “Magallanes” visitó a Pérez Carballo para presentarle sus respetos, como era costumbre entonces, afirmó la mecanógrafa del Gobierno Civil, Manuela Castilla –quien, por cierto, vio al gobernador bastante deprimido en esas horas-, dato que puede aportar veracidad a ese ofrecimiento.<sup>809</sup>

La comitiva del gobernador, que finalmente había aceptado la dolorosa rendición del Gobierno Civil, avanzó lentamente, flanqueada por hileras espaciadas de soldados pertrechados con cascos y bayonetas caladas. Durante el trayecto, el encargado de portar la bandera fue Enrique Rosende, quien declararía más tarde que se vio obligado a ello pues nadie quería cogerla por temor a ser tiroteado. Algunos militantes o dirigentes de la izquierda obrera, como Eladio Muíños o Antonio Barrios, consiguieron escapar en circunstancias un tanto confusas.<sup>810</sup> Mientras los defensores del Gobierno Civil caminaban al encuentro de las autoridades militares, el comandante Ríos no cesó de ofender gravemente al gobernador civil, que lo ignoró guardando un significativo silencio. Pérez Carballo le había salvado la vida, pero la situación era ahora otra las tornas ahora eran otras y el oficial de la Guardia Civil lo sabía perfectamente.<sup>811</sup>

Entretanto, Juana Capdevielle, que esperaba acontecimientos en el interior de la farmacia López Abente, en la calle Real, sede improvisada de un hospital de campaña, logró escuchar la conversación telefónica mantenida por el teniente de Asalto Reigada,

<sup>808</sup> “Testimonio anónimo sobre la sublevación de julio del 36 en La Coruña”, en C Fernández Santander, *Alzamiento y guerra civil en Galicia...* op. cit, T II, p. 575

<sup>809</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 48.

<sup>810</sup> ATMRN, Causa 207/36, fol. 50.

<sup>811</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, T II, p. 696.

presente en este lugar, y el coronel Martín Alonso. Según uno de los guardias de Asalto, que estaba siendo atendido en aquellos momentos, la esposa del gobernador civil comentó en alto en referencia a Reigada, el oficial que había dirigido el fuego de morteros (o más bien desviado) desde el parapeto instalado para la defensa del Gobierno Civil en la Avenida de la Marina: “claro, éste es como todos, está con ellos, esto tenía que pasar”.<sup>812</sup>

Al día siguiente, preocupada como estaba por la falta de noticias sobre su marido, el gobernador Pérez Carballo, Juana Capdevielle llamó en varias ocasiones al Gobierno Civil para interesarse por su paradero. En casa de los López Abente, la familia amiga que le ofreció refugio, permaneció la noche del lunes y pasó la mayor parte del martes 21, hablando por teléfono con autoridades militares para conocer la situación exacta de Pérez Carballo y clarificar la suya propia en función de la marcha de la insurrección, sin intentar ningún ardid ni ocultar su identidad o las señas del domicilio donde se encontraba. Fue su conversación con el delegado de Orden Público, Florentino González Vallés, la que originó su detención a las doce de la noche de ese mismo martes. Nada más fácil para uno de sus principales detractores que utilizar la ansiedad y la angustia de Juana, deseosa de ver a su marido -y, de paso, recuperar sus efectos personales en el Gobierno Civil- y todavía no plenamente consciente de la peligrosidad de la situación, para atraerla hacia una trampa que poco después se convertiría en mortal. Trasladada en coche hacia su supuesto reencuentro con Pérez Carballo, Juana Capdevielle acabó en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil.

Al ingresar en ellos, pronunció, “a grandes gritos”, duras palabras contra el comandante de la Guardia Civil Ríos, acusándolo de traidor, de haberlos engañado a última hora y de contribuir decisivamente al triunfo de la sublevación, después de demostrarles “buena amistad”, como consta en los testimonios aportados en la causa correspondiente por varios oficiales de Asalto, que conocieron los hechos.<sup>813</sup>

Sin saberlo, Juana Capdevielle estaba cerrando el círculo de una historia preñada de traiciones o lealtades dudosas que se fraguarían en silencio, a espaldas de una legalidad violada a conciencia. El miércoles 22 de julio, la esposa del gobernador civil de A Coruña le escribía una carta, esta vez desde los calabozos del Cuartel de Asalto, al general Enrique Salcedo. La misiva comenzaba con el reconocimiento de que ambos no habían “tenido una gran amistad (...) pero siempre mantuvimos una cordial relación propia de personas educadas” y expresaba después su convencimiento de que su condición de “ser mujer de una autoridad legal que cumplió con su deber no era crimen suficiente en un país civilizado para ser apresada”, por lo que apelaba a los sentimientos de humanidad del ya ex general de la VIII División en la expectativa de ser liberada. Como base argumental para esta solicitud, relataba Juana Capdevielle en esta carta que había demostrado su inocencia -en las horas previas y durante su estancia en el Cuartel de la Guardia Civil-, tras solicitar un careo entre las partes que sostenían las dos acusaciones vertidas sobre ella, a pesar de lo cual se le denegó la libertad y se la trasladó al “cuartelillo de Seguridad”, donde coincidiría con los oficiales de Asalto citados, antes

<sup>812</sup> ATMRN, Causa 1169/ 37, fol. 187 v.

<sup>813</sup> ATMRN, Causa 613/37, fol. 54 v, 55 y 57.

de ser internada en la cárcel de A Coruña.<sup>814</sup> Resulta significativo que esta carta fuese aportada por el teniente coronel González Vallés como prueba de cargo contra Salcedo –en el intento de trazar un vínculo torticero entre este general y el gobernador y su esposa-, al que acusaba de haber traicionado al movimiento nacional, que en un principio habría apoyado de forma fehaciente –como podía certificar el mismo, en su calidad de conspirador o artífice del éxito del golpe en esta Región Militar-, para convertirse más tarde, de forma meditada o súbita –que eso era irrelevante- “en el enlace que tenía el Gobierno Civil y el Gobierno de Madrid”.<sup>815</sup>

Mientras Juana Capdevielle peregrinaba por varios calabozos coruñeses, Pérez Carballo y su hermano Ángel, Enrique Rosende y Manuel Vázquez eran trasladados desde la Plaza de María Pita al Cuartel del Regimiento de Infantería “Zamora” nº 8. En ese lugar fueron recibidos por el coronel Martín Alonso y sus hombres con evidentes muestras de hostilidad y todo tipo de excesos verbales, para ser trasladados en la madrugada del martes 21 a la cárcel local, ubicada en las proximidades de la Torre de Hércules. Un camión sin luces los transportó a las afueras de la ciudad tras un accidentado trayecto que incluyó un fallo mecánico del vehículo bordeando el cementerio de San Amaro. Conducido a su celda e incomunicado, el gobernador Pérez Carballo aparentó una serenidad que, tal vez, sentía en su interior y buscó refugio en la lectura. Conocía su destino, tal vez confirmado horas más tarde en un juicio sumarísimo, una parodia de procedimiento judicial cuyo rastro, de existir en realidad, permanece oculto hasta el momento. La noticia de la confesión pública de sus pecados políticos corrió por la prensa del recién inaugurado régimen de terror como la pólvora, pero estaba inscrita en un acto de pura propaganda, como ya se ha dicho a lo largo del primer capítulo.

Antes de despedirse de su hermano pequeño, le entregó el sello de goma del Gobierno Civil. El gobernador no quería que ningún símbolo de la legalidad republicana pudiera ser utilizado para pervertir los principios inspiradores de la República. En la mañana del viernes 24 de julio, un oficial de prisiones penetró en la celda de Ángel Pérez Carballo y le devolvió el reloj de su hermano, era la señal de que el gobernador civil había sido ejecutado.

No había muerto sólo, los dos mandos de Asalto que lo acompañaron en la defensa del Gobierno Civil en A Coruña también lo flanquearon esta vez.<sup>816</sup> No fue una elección al azar, la cultura de la violencia franquista poseía cierto grado de sofisticación en el terreno de lo simbólico. Pero, aun con todo, resumaba una crueldad especial y proclamaba el lenguaje de la venganza, que pocos se atrevieron a desafiar entonces, Cuando el grupo de guardias de Asalto que llevó a cabo la ejecución regresaba a la ciudad, el oficial designado, de forma nada casual, para mandar el pelotón de fusilamiento, el teniente Manuel Valcárcel, amigo de los anteriores y hombre de probada lealtad a la República, encontraba el momento para descerrajarse un tiro en la cabeza dentro de una camioneta del Cuerpo. El suicidio pasó en la prensa como un

<sup>814</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 179-182.

<sup>815</sup> ATMRN, Causa 413/36, fol. 176.

<sup>816</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado en La Coruña el 24-7-36”, en C Fernández Santander, *Alzamiento...* op. cit, T II, p. 696-699.

desgraciado accidente de guerra.<sup>817</sup> El gobernador fue enterrado en el cementerio de San Amaro en la mañana del día 24. Entre el 23 y el 30 de julio el Ejército iría eliminando los puntos de resistencia en toda la provincia y en el resto de Galicia. El resto de las autoridades de A Coruña se habían entregado al mando de las fuerzas sublevadas el mismo lunes 20, incluido el alcalde Suárez Ferrín, que no entregó las llaves de la ciudad a los nuevos regidores del municipio. En la ciudad de A Coruña, en concreto, la jornada de lucha del día 20 provocó 12 víctimas mortales (entre ellas, 8 “rojos”) y unos 36 heridos, según estadísticas elaboradas por los militares.<sup>818</sup>

Ángel Pérez Carballo decidió buscar en la mañana del día 2 de agosto, tras ser liberado unas horas antes por orden del director del centro penitenciario coruñés, el lugar donde fue fusilado su hermano Francisco, el gobernador civil. En un pequeño saliente de la península de Punta Herminia, muy cerca de la prisión, la Torre de Hércules y del *Campo da rata*, un entrono hermoso batido por la violencia del mar y de aquella ceguera represiva que aniquilaría a tantos presos republicanos durante tanto tiempo. Un pescador le relató al muchacho la escena que él deseaba escuchar, que era, al mismo tiempo, la más real de las posibles, un fresco de horror ya cotidiano.

De espaldas al mar, los tres reos se despidieron con un abrazo. El gobernador Pérez Carballo se quitó el sombrero ceremoniosamente -ni a la República ni a la izquierda burguesa se le podía infligir daño o miedo desde fuera de la ley- para después, los tres en posición de firmes y en silencio, esperar el veredicto seguro de las armas.

A su esposa, sin embargo, le esperaba un final menos romántico, sin lugar para trazos poéticos, pues su asesinato o su *paseo* se meditó a conciencia y, probablemente, se diseñó para producirle el mayor daño posible a una mujer. De los calabozos del Cuartel de Asalto había pasado al pabellón de mujeres, punto en que la leyenda labrada en torno a su persona fabuló en diversas direcciones -como se analizó en su momento-, desde un aborto que nunca se produjo hasta algunas enfermizas proyecciones sexuales de los represores.

Liberada a principios de agosto, residió varias semanas en casa del diputado de IR Victorino Veiga, en Vilaboa, ayuntamiento de Culleredo, mientras su cuñado Ángel trataba de conseguir para ella la protección del Consulado Francés -el padre de Juana era de esta nacionalidad-, ayuda que el cónsul, León Poretio, siempre le hurtó, aunque llegaría a visitarla gracias a la insistencia del joven. Es más, el 9 de agosto el cónsul le comunicó al hermano del último gobernador republicano de A Coruña que, en adelante, se vería obligado a mantener puntalmente informadas a las autoridades militares acerca de las novedades producidas en el caso de su cuñada, pues tenía noticias de que Juana Capdevielle había manejado una ametralladora en el Gobierno Civil.

Este hecho precipitaría probablemente los acontecimientos, al temerse, desde la delegación de Orden Público coruñesa, que las gestiones realizadas en su favor llegasen a fructificar en algún momento. El detalle de la ametralladora, o más bien, la obsesión resultante de manipular palabras e intenciones, señaló por sí sola a los instigadores (cuando no ejecutores materiales) de su muerte. A los que reunidos durante varias

<sup>817</sup> *El Ideal Gallego*, viernes 25 de julio de 1936.

<sup>818</sup> E. Grandío, “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña”, en J. de Juana y J. Prada (eds), *Lo que han hecho en Galicia...* op. cit, p. 37.

sesiones fabularon con modos y maneras de asesinarla –provocarle un aborto, arrojarla al mar, envenenarla...-, como llegó a confesarle un testigo de estas deliberaciones al hermano del gobernador civil, al finalizar la segunda guerra mundial. Este testigo era José María Bejarano, un fiscal de carrera deseoso de congraciarse con los nuevos y previsibles tiempos tras la victoria aliada, y supuesto autor de la propuesta “más humanitaria”: el fusilamiento a secas.<sup>819</sup>

En paralelo a la secuencia final de los hechos, se estaba labrando una ruta hacia la memoria falsa, la leyenda se fraguaba sin dilación. La esposa del gobernador rechazó la posibilidad de pasar a Asturias a través de Piedrafita do Cebreiro, plan ofrecido por un guardia municipal de A Coruña. El lunes 17 de agosto llegó un oficio a la casa de los Veiga en el que se le comunicaba a Juana Capdevielle que debía salir, de forma inmediata, del Ayuntamiento de Culleredo. Por la tarde, varios familiares de Vitorino Veiga, entre ellos su hija, Carmen Veiga de Bernardo, acompañaron a Juana Capdevielle al cuartelillo de la Guardia Civil de la capital del municipio, que así mismo la había reclamado en cumplimiento de una orden de la delegación de Orden Público.

Ya en la madrugada del martes 18, un automóvil la condujo desde el local de la Falange en Culleredo -en el que permaneció algún tiempo, después de haber sido trasladada allí por agentes de la Guardia Civil- hasta las afueras de Rábade, en Lugo, donde fue acribillada a tiros en una cuneta, cerca de un paso a nivel.<sup>820</sup> Se saldaba de ese modo la *deuda* que había contraído con Florentino González Vallés, el comandante José Álvarez Ríos y el resto de la cúpula de la Guardia Civil en la provincia, sin que haya prueba o evidencia alguna que identifique a los ejecutores materiales del crimen. Semanas atrás, y poco antes de ser conducido ante el pelotón de fusilamiento, el gobernador Pérez Carballo escribió, a modo de despedida, una nota dirigida a su esposa. Su accidentado mandato al frente del Gobierno Civil de A Coruña había terminado por arrebatárle la vida. Era el precio que pagaba por haber cumplido con su deber, con mayor o menor acierto, hasta sus últimas consecuencias y representado la causa del gobierno republicano en una provincia ganada de antemano por la sublevación, pero también por cometer el error de confiar en quien urdía a sus espaldas la connivencia con los rebeldes o jugaba a dos barajas hasta ver de qué lado se decantaban los hechos. La convicción del deber cumplido, del respeto a la ley y a la autoridad del gobierno como acto de servicio a la República, pese a todo, le consolaría en esos momentos.

En las últimas líneas que escribió antes de ser ejecutado, su caligrafía se mostró tan irregular como siempre, pero el trazo se mantuvo firme y austero para redactar, con toda la lucidez posible en aquel trance, sus más íntimos pensamientos, uniendo así escritura y existencia en aras de un soplo final de dignidad.<sup>821</sup>

---

<sup>819</sup> “Testimonio de Ángel Pérez Carballo sobre su hermano Francisco, gobernador civil de La Coruña fusilado el 24-7-36”, en C. Fernández Santander, op cit, T II, p 700-701.

<sup>820</sup> Datos aportados por Carmen Veiga de Bernardo, testigo de los últimos días de Juana y de su trayecto al cuartelillo de la Guardia Civil en Culleredo. Entrevista a la citada y Juan Pérez-Carballo Veiga, Madrid, 5 de febrero de 2008.

<sup>821</sup> “Juana: Has sido lo más hermoso de mi vida. Donde esté y mientras pueda pensar, pensaré en ti. Será como si estemos juntos. Beso tu anillo una vez cada día. Te quiero. Paco. Para Juana Capdevielle, mi querida esposa. Viernes, 24 de Julio de 1936” (texto de la nota conservada por la familia Pérez Carballo).

### CONCLUSIONES

La trayectoria vital de Francisco Pérez Carballo se grabó, con intensidad variable, en diferentes memorias políticas y culturales entrecruzadas bajo determinados valores simbólicos, que concebían una figura casi anónima -contemplada al margen del contexto social reflejado, siempre de forma parcial, en una huella intelectual o política concentrada en el papel de un gobernador civil que afrontó una crisis estatal prebélica- como una metáfora del ideal imperfecto o malogrado, pero siempre luminoso y recuperable, de la República necesaria. Esta era la hipótesis de partida y este el momento de confirmarla, pues el último gobernador republicano de A Coruña encarnó, para los artesanos o tahúres de la memoria, esa compleja y abstracta identidad.

Si se nos permite este símil, Pérez Carballo atravesó durante las décadas iniciales de siglo los umbrales de modernidad que le abrieron la puerta de la clases medias educadas, movilizadas en el ámbito político y lo suficientemente ambiciosas como para aspirar a un futuro de emancipación de un pasado aún latente. Curiosamente, Azaña, el ídolo político de Francisco (del abogado y profesor universitario madrileño, del oficial letrado de las Cortes, del dirigente estudiantil y representante político de las juventudes de izquierda burguesa), había hecho del encaje del proletariado y de los campesinos en el sistema democrático republicano una de sus grandes prioridades, estrategia que, a escala individual –y a ojos de muchos observadores diseminados en el tiempo-, compartió (simbolizó) el recorrido cronológico del último gobernador republicano de A Coruña. Y también el hecho mismo de su muerte, tan prematura (imagen fuertemente evocadora) como una República yugulada cinco años después de su proclamación, trazó, desde esa perspectiva, un claro paralelismo con el proceso de la defenestrada República.

Sin embargo, la razón de este simbolismo que, desde distintas memorias colectivas (culturales, políticas, propagandistas, de género...), y bajo diferentes perspectivas ideológicas, cronológicas y funcionales –siempre entrecruzadas, fácilmente moldeables- se cernió sobre su vida y la de su esposa, Juana Capdevielle, estaría, en realidad, en la noción de ciudadanía que tradujeron sus respectivas biografías, categoría política y ética que, en su percepción positiva, entroncaría *a la izquierda* con su condición de víctimas arquetípicas de la represión franquista (en especial, Juana Capdevielle, una mujer intelectual y profesional: una República para iluminar las zonas oscuras de una sociedad colapsada), reivindicada, con especial énfasis en los últimos años, por sectores culturales y políticos afines a un renacido republicanismo filosófico y político.

Esta idea, este rostro o identidad de ciudadanos, que fue y está siendo ensalzada por las distintas memorias políticas o culturales progresistas (y en especial en el ámbito gallego), se granjeó, en sentido contrario –y con especial virulencia en el tiempo histórico de la guerra civil o de la inmediata posguerra-, la animadversión y la obsesión represiva de conspiradores, servidores y propagandistas de la dictadura franquista –capaces de acceder, sobre todos los que escribieron en una primera época, a fuentes directas de la sublevación, para tejer un relato nada refractario al plagio-, conjurados contra el papel civilista asumido por Pérez Carballo como gobernador civil y, en paralelo, empeñados en la estigmatización de su esposa como coautora de una particular “traición” contra la trama golpista urdida en A Coruña. En este sentido, se ha podido

verificar cómo varios mandos de la Guardia Civil, encabezados por el teniente coronel de la Guardia Civil, Florentino González Vallés, se ocuparon, en las declaraciones prestadas en las causas instruidas por la justicia militar franquista contra los defensores de la República en A Coruña, de ajustar cuentas (en el sentido más amplio del término) contra el gobernador civil por sus injerencias al tratar de absorber competencias y funciones de este Cuerpo o, más directamente, por su decidida actuación para neutralizar el *putsch* de abril y obstaculizar la acción posterior de los conspiradores.

Con este objeto, Pérez Carballo envió a su esposa a Madrid a informar a Casares de la supervivencia -tras el golpe abortado en la madrugada del domingo 19 de abril- de células conspirativas militares o de la Guardia Civil, muy activas, provistas de sus respectivos enlaces y conectadas al proceso involutivo destinado a estallar de nuevo en cuestión de semanas, así como del fracaso de sus gestiones para que la causa instruida contra los oficiales de la Guardia Civil Rañal o Haro, entre otros, llegase a buen puerto con la condena de estos significados líderes golpistas.

El intento del gobernador civil de forzar el castigo de los implicados en la militar de abril y, con vistas al futuro, de cortar las raíces de un nuevo y muy probable proyecto subversivo, se frustró, fundamentalmente, por la actitud de algunos militares como el general de la VIII División, Enrique Salcedo Molinuevo, o la pasividad de algunos miembros del aparato político y administrativo del gobierno, errados, o cuando menos demasiado confiados, a la hora de adoptar determinadas medidas de orden disciplinario y el arbitrio de ciertos traslados o destinos.

Esta involucración de Pérez Carballo, e indirectamente de Juana Capdevielle, en la tarea de desarticular la estructura y organización de la conspiración dirigida por los militares en la provincia de A Coruña provocó una reacción airada y violenta de los mandos del ejército y, sobre todo, de la Guardia Civil, que, desde ese momento, se emplearon con renovadas energías en la interpretación rigurosa de las instrucciones dictadas por el nuevo cerebro de la conspiración (Mola) y, de forma subsidiaria, proyectaron la venganza de la afrenta política y personal del gobernador en la figura de su esposa.

El viaje de Juana Capdevielle a Madrid para desempeñar una misión oficial para la que fue designada por Pérez Carballo no fue consecuencia, esto es obvio,, de una excepción caprichosa o de una medida inusual en un contexto sociopolítico que exigía de los gobernadores civiles, y del resto de los altos funcionarios del Estado republicano, una especial discreción y cautela en la gestión de asuntos confidenciales o relativos a materias delicadas, estrategia en la que, por ejemplo, se debía afinar para contactar directamente con el gobierno.

En este sentido, y como se ha visto en el lugar oportuno de este trabajo, el gobernador civil de Sevilla, Verela Rendueles, sabiéndose también sobre terreno inestable, envió a su hermano a Madrid para transmitirle al presidente del ejecutivo -en una situación análoga- un mensaje urgente de alarma acerca de los movimientos habidos dentro de los círculos conspiradores en aquella provincia, sin que sobre él recayese ninguna crítica relativa a la debilidad *moral* o de carácter manifestada por un representante gubernamental enfrentado a una situación de crisis aguda, como base posible para elaborar otro mito con que descalificar la actuación global de un gobierno



de republicanos burgueses, situado de inmediato –debido a una falsa percepción de una realidad sociológica *de proximidad de clase* o, en sentido contrario, a una expresión casi literal de mala conciencia- en el punto de mira de los propagandistas de la memoria franquista.

La particular *vendetta* de ciertos mandos de la Guardia Civil contra Juana Capdevielle se gestó, pues, siguiendo una especial inercia identitaria, que construyó la imagen de la esposa del gobernador civil como eje de una leyenda negra, fraguada en las declaraciones de oficiales, clase y tropa de este Instituto y amplificadas por los voceos del nuevo régimen en aras de glorificar a los héroes que erradicaron la *mala hierba* de la provincia de A Coruña y del conjunto del país.

Por medio de esa estrategia, y utilizando fragmentos de realidad convenientemente manipulados y ensamblados –Juana Capdevielle sustituyó a Pérez Carballo en ocasiones para que éste pudiera descansar al menos unas horas, y sólo recogió recados o impartió, bajo una fuerte presión emocional, las consignas dictadas por el gobernador-, se la representó como una guerrillera, metralleta en ristre, o como la persona que llevaba las riendas del Gobierno Civil desde abril, decidida a convertir a los miembros de la Guardia Civil en servidores de sus caprichos personales, delito que apuntaría –desde un enfoque sesgado a conciencia- hacia la corrupta naturaleza del gobernador civil y de una élite política republicana, confiada a las decisiones de, por ejemplo, una *mujer*.

Era también el precio a pagar por no haber rendido el Gobierno Civil de A Coruña sin antes oponer resistencia –el peso de la estrategia gubernamental sobre la voluntad de un gobernador dependiente en exceso de las decisiones o los silencios provenientes de Madrid, o su posible falta de experiencia, no enturbiaron un gesto de lealtad institucional, la peor de las traiciones a ojos de los golpistas- y González Vallés cobró su parte de la deuda engañando en varias ocasiones a Juana Capdevielle y entregándola, a mediados de agosto, a pistoleros de la Falange de Culleredo (en una de cuyas aldeas se encontraba la casa de los Veiga, donde estaba refugiada la esposa de Pérez Carballo) para que terminasen con su vida.

De todo ello hay indicios suficientes –aunque no pruebas con que intentar una justicia penal ulterior que trascienda juicios éticos o el puro análisis historiográfico-, como también de las pasiones contradictorias que casi ochenta años después de los hechos todavía despierta en A Coruña la figura de esta intelectual discreta y esforzada – y que el investigador no puede reflejar en su totalidad por la resistencia de ciertos testigos a que sean desveladas-, que sólo interpretó el papel de persona de confianza que le correspondía, acentuado bajo el imperativo compartido de la defensa de la legalidad y legitimidad republicanas.

Esta relativa obviedad se hace necesaria para subrayar la sinrazón empleada por los represores e instigadores del asesinato alevoso de Juana Capdevielle, pero también para retratar la respuesta democrática, ética o moral implícita en la generación del *contramito* o la *contramemoria* correspondiente –el recuerdo a través del tiempo de los hoy símbolos de la legitimidad y las luces de la República añorada- por parte de la izquierda intelectual gallega y española (la republicana, ahora renacida), o de algunos productores o vectores de memoria cultural, política, gremial, profesional o de género, bastante refractarios en general al reduccionismo subyacente a las categorías conceptuales

rígidas. En estas coordenadas, el historiador (¿el historiador de la memoria?) debe trascender al fin, si es que esto es posible, el debate metodológico y conceptual abierto en el territorio de las *ciencias de la memoria* –acuñamos este término no sin cierto vértigo- y centrarse, finalmente, en la tarea misma de desgranar la realidad del mito, apoyado eso sí por una mirada capaz ahora de explorar las múltiples dimensiones de un hecho o figura social determinada.

Para ello, debe situarse también al margen del efecto o las secuelas de los intrincados trabajos de la memoria y retomar decididamente el enfoque historiográfico, que debe contemplar y, más tarde, esquivar la subjetividad del recuerdo personal o colectivo, para captar los destellos de una biografía –la de Francisco Pérez Carballo, el sujeto histórico retratado y analizado en estas páginas- que ofrece ángulos específicos, rasgos individuales a confrontar con la estructura o el contexto social y político de su tiempo. Perspectivas interesantes por estar relacionados con una vida intensa, esforzada, brillante en términos intelectuales, pero nunca arquetípica o “ejemplar” al someterse a los niveles de incertidumbre política del momento histórico atravesado.

Un muchacho, Francisco, educado en una familia de emigrantes gallegos, enfrentado a un entorno urbano muy humilde, casi de miseria, del que se propuso salir, de forma enérgica, a base de lograr las calificaciones más altas posibles, siempre las máximas, y de un especial atrevimiento para participar en las movilizaciones políticas estudiantiles más precoces, encauzadas, desde el instituto Cardenal Cisneros hasta la facultad de Derecho de la Universidad Central, a través de la FUE (y su decisiva lucha contra la dictadura de Primo de Rivera) o del Ateneo de Madrid, en cuyos círculos ingresó siendo todavía un adolescente.

Como presidente de la APED de Madrid y vocal de la Junta de Gobierno de la FUE madrileña, o representante de la UFEH en congresos internacionales organizados por la CIE –en el XV congreso de esta organización, celebrado en Venecia, definió perfectamente la monumentalidad del derecho romano, de forma simultánea a denunciar su flagrante inhumanidad- y la ISS, abogó siempre por la doctrina del *profesionalismo*, concebido tanto en términos de exclusión del mundo universitario (y de las esferas de la enseñanza y de la actividad estudiantil) de todo tipo de compromisos religiosos o políticos –que debían afrontarse al margen de la universidad-, como del vínculo permanente que debía unir al estudiante y a ésta en aras del sostenimiento de una condición vital.

La profesionalización del estudiante y del profesor universitario pretendía separar las ideologías políticas, y también las creencias religiosas latentes, de las reivindicaciones académicas estrictamente profesionales. Constituía uno de los puntos de una estrategia que convenía a una segunda generación de dirigentes de la FUE, de la que formaba parte Pérez Carballo, que, una vez instaurada la República y copados los órganos de poder de la universidad por esta organización –en virtud de su proximidad ideológica a los gobiernos republicanos, transformada muy pronto en militancia política-, debía defender su nuevo y privilegiado estatus de poder de la amenaza de los estudiantes católicos o falangistas, pronto agrupados en torno al SEU. Para ello, los dirigentes de la FUE también apostaron por el principio de la unicidad organizativa, en el intento de que cada centro académico no tuviera más de una asociación estudiantil representativa.

La progresiva debilitación de los gobiernos de Azaña, y el retraso en la concreción de la tan ansiada Ley de reforma de la enseñanza –para cuya consecución se celebraron congresos, reuniones o mítines en los que participaría el abogado madrileño- provocó disensiones en el interior de la FUE y permitió una progresiva infiltración en sus filas de elementos procedentes de los partidos obreros, proceso agravado desde mediados de 1934. La posición personal de Pérez Carballo ante la cuestión de la politización o no de la condición permanente de estudiante universitario, esto es, de la independencia o autonomía del ámbito de la universidad del mundo de la política, no fue tan ambigua como la articulación o implementación real de este concepto, aunque también incurrió en algunas contradicciones inherentes, por ejemplo, al vínculo labrado con el gobierno que posibilitó la casi estatalización de la FUE durante el primer bienio republicano.

Pérez Carballo siempre fue un jurista vocacional y, por lo tanto, partidario de la teoría de la justicia y de los principios éticos más próximos a la neutralidad política pactada, pero se vio obligado a desafiar el especial maximalismo pragmático subyacente al espíritu *purista* afirmado por la FUE, pues, por otra parte, era difícil desprenderse de la identidad universitaria activa en la esfera política (extramuros del ámbito académico, se supone), donde se comprometería con el partido de AR (después, IR), que absorbió en su programa importantes postulados educativos y culturales *fueistas*, de cuyos militantes se nutrió en especial durante los primeros compases del periodo republicano.

La derrota electoral de noviembre de 1933 lo cambiaría todo -o no demasiado tal vez- pues los aires de radicalización que recorrían los amplios espacios políticos y culturales de la izquierda burguesa le hacían sentir en ocasiones un tanto incómodo o desubicado, cuando no en franca desventaja al profesar una fe innegociable en Azaña, un símbolo siempre sólido, incluso en los momentos más difíciles –cuando la política y la estrategia desafiaban peligrosamente todo criterio de racionalidad-, situado en una dimensión intelectual y política encarnada de forma consciente.

Su admiración hacia la figura del político alcalaíno, al que había conocido en el Ateneo cuando casi era un adolescente, le llevó a militar en los dos partidos dirigidos por éste y a formar parte de sus respectivas Juventudes, JAR (de Acción Republicana) y JIR (de Izquierda Republicana), en calidad de miembro de las directivas o ejecutivas nacionales de ambas organizaciones juveniles. Del mismo modo, había coincidido con Azaña casi diariamente desde noviembre de 1931, cuando empezó a trabajar como secretario particular del subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Enrique Ramos, profesor auxiliar en el mismo departamento de Derecho Romano de la Universidad Central en que Pérez Carballo desempeñaría el puesto de profesor ayudante de prácticas desde octubre de 1933.

Desde finales de noviembre de 1933, formó parte, como vicepresidente segundo, de la directiva entrante de JAR, ya decantada hacia la formación de un frente juvenil republicano de izquierda sensible a una orientación socialista -y de cerrarle, por tanto, la puerta a la tendencia interna liderada por Alfonso Ayensa, que se había mostrado receptiva a un pacto con el republicanismo histórico representado por Lerroux- y enquistada en el intento de emanciparse de los dictados del partido y, en consecuencia, de tener voz en el diseño de la política y las acciones de propaganda de AR.

La posición política personal de Pérez Carballo (y de muchos de sus correligionarios) en este punto de inflexión fue paralela, y no de una manera casual, a la seguida por Azaña tras perder las elecciones de noviembre, en el sentido de cooperar en el proyecto de recuperación de la República caminando hacia un frentismo posibilista de izquierdas. Esta táctica, traducida a los términos en que se movían tanto la JAR como su versión posterior, JIR, significaba la conformidad de Pérez Carballo con la idea de abandonar la confusión entre el reformismo social y el liberalismo económico de carácter decimonónico o doctrinario, para darle a esta última doctrina un barniz u orientación socialista (o, más bien, socialdemócrata) sin abandonarla de raíz.

Se iniciaba el bienio rectificador y había que adaptarse a los nuevos tiempos, y entender o aceptar que la base social de estas organizaciones estaba cambiando.

Elegido miembro del Consejo Nacional de IR en la asamblea fundacional de este partido, como representante de la nueva organización juvenil, presidió la Juventud madrileña de IR durante un espacio muy breve de tiempo y acabó por distanciarse del presidente y del secretario de la Ejecutiva nacional de JIR, lo que le llevó a presentar su dimisión de este órgano –y, por tanto, a desactivar en apariencia su papel representativo en el Consejo Nacional del partido de Azaña-, nunca llevada a efecto en realidad al estallar la guerra civil y variar el rumbo natural de la vida política española.

Las razones de este disenso se encontraban en su malestar ante la certeza de que sus funciones estaban siendo puenteadas por Prudencio Sayagués y García Lorencés, máximos responsables de JIR, quienes se dirigían con frecuencia al CN del partido sin utilizar los canales que pasaban por su cargo. En este conflicto, y en el hecho de que Pérez Carballo aplazase el momento de hacer efectiva su dimisión, habría también una parte importante de cálculo político ante la perspectiva de que la izquierda burguesa recuperase el poder en breve.

En cualquier caso, la directiva de JIR asumiría de forma progresiva la imposibilidad de consolidar un grado de autonomía suficiente con respecto a IR y, además, no vería cumplidas sus expectativas de alcanzar cotas de representatividad real en los órganos directivos del partido o en las candidaturas electorales diseñadas. Esta circunstancia se verificó, especialmente, en febrero del 36, sin que ni IR ni ningún otro partido de izquierda contase en sus candidaturas definitivas con miembros de sus respectivas organizaciones juveniles.

Así las cosas, el ya oficial letrado de las Cortes y profesor ayudante de derecho romano (marzo y octubre de 1933), abogado privatista en ejercicio, vocal electo en varias instancias ateneístas -1933, otra vez, ese año mágico en que, a comienzos de octubre, leería *Estampa de universidad* en el acto de inauguración del nuevo curso universitario, justo después de haber representado a la UFEH en Venecia-, podía acreditar una labor muy activa en todos los ámbitos, a lo largo de un tiempo vivido con mucha intensidad, que estuvo a punto de costarle más de un disgusto a su salud.

Tanto en funciones de representante estudiantil como interviniendo en actos de propaganda de las organizaciones juveniles del partido de Azaña, Pérez Carballo se forjó un carácter y una personalidad política sin fisuras, reflexiva, apegada a la impronta azañista del partido -con independencia de juicios políticos disímiles o marcados por las circunstancias-, identidad extendida a las labores ateneístas, docentes y profesionales

simultaneadas, que complementó o interfirió con la asistencia a reuniones, mítines o viajes por España y Europa (emprendidas éstas como líder estudiantil).

Un trabajo global coherente en la lógica de una época y un sistema político en construcción, una dedicación exigente, traducida por fin, en su proyección política, con su nombramiento como gobernador de A Coruña en abril de 1936, al descartarse cualquier opción –si es que la hubo en realidad, por más que Pérez Carballo observase esa expectativa en algún momento- de incluir su nombre entre los miembros de IR elegidos para ocupar un puesto en la candidatura del Frente Popular por Madrid.

El periodo en Pérez Carballo estuvo al frente del Gobierno Civil de A Coruña -una ciudad conflictiva por el peso en ella de los anarcosindicalistas, pero también por la actitud antirrepublicana de falangistas, *japistas* y de una importante élite política conservadora-, no se caracterizó, precisamente, por contemplar ninguna oleada o frenesí huelguístico, ni afrontar manifestaciones extremas de violencia política, lo que no quiere significar la inexistencia de coyunturas de intensificación de conflictos laborales, favorecidos por los acercamientos entre el movimiento libertario y los socialistas, la tardanza del gobierno del Frente Popular en reimplantar los jurados mixtos: la huelga de obreros municipales o los problemas en el puerto revistieron, en este sentido, una especial importancia.

El verdadero reto llegó con el golpe frustrado de abril -precedido por un incidente entre el gobernador civil y el general Salcedo, en relación a la forma de actuar en previsión de un hipotético atentado marxista durante las celebraciones del V aniversario de la proclamación de la República-, que tuvo como uno de sus objetivos principales la toma del Gobierno Civil de A Coruña y la neutralización o eliminación física del gobernador Pérez Carballo, plan del que la máxima autoridad civil de la provincia estaba parcialmente informada a través de sus propias fuentes.

A lo largo de estas páginas se ha acreditado, en buena medida, tanto la inequívoca lealtad a las instituciones como la voluntad firme demostradas por Pérez Carballo a la hora de tratar de desarticular la trama golpista de abril y, más tarde, de depurar las responsabilidades de los implicados en la misma y de reclamar del gobierno de Madrid la adopción de medidas más efectivas contra la efervescencia de las células conspirativas que operaron en A Coruña hasta el estallido del golpe de estado, señal de que al gobernador no consideraba el éxito de la represión de la *Sanjurjada* como un referente ineludible para planificar la respuesta del Estado a cualquier proceso involutivo.

En este punto, sus funciones como secretario particular del subsecretario de la Presidencia, Enrique Ramos, le habrían permitido observar, en primera línea, cómo se gestó la respuesta gubernamental ante los acontecimientos de agosto de 1932 y extraer de ello las oportunas conclusiones, así como atesorar una experiencia que debía interpretar con cautela al contrastarla con la realidad afrontada desde el Gobierno Civil, en una ciudad y una provincia que, en toda su complejidad, Casares creía conocer y controlar con cierta suficiencia. El gobernador Pérez Carballo no compartía, pues, la aparente confianza de su presidente –matizada por los factores estratégicos referidos y por un evidente problema estructural de comunicación política- y se sentía aislado en su percepción privilegiada de una amenaza involucionista bien definida, que había

conocido de forma traumática, como reveló –recordemos- en la conversación mantenida a principios de julio con el yerno de Casares Quiroga, el capitán Enrique Varela (también vinculado a Azaña al formar parte de su escolta presidencial), de visita en la ciudad.

También se ha destacado su implicación en el intento de control de las competencias de la Guardia Civil y de otras fuerzas policiales de la provincia, en aplicación de la legislación republicana en materia de orden público. Asunto distinto sería contemplar factores como el peso real de la experiencia política, algunos procedimientos y actitudes puntuales a la hora de reconfigurar el mapa político de la provincia en función de los intereses de IR, la búsqueda de apoyos a la causa de la República entre las fuerzas militares o policiales adscritas y la literalidad de los resultados obtenidos en cada momento y al final de un proceso interrumpido de forma trágica.

El celo demostrado por el gobernador civil de A Coruña en presionar a las mismas autoridades de la VIII División para que los delitos de sedición de abril no quedasen impunes, no redundó finalmente en favor de los intereses y la seguridad del gobierno republicano, ya embarcado en una estrategia de apaciguamiento bien meditada y decidido, en consecuencia, a permanecer a la expectativa hasta que se consumase el tan temido *coup d'état* que ahora preparaba Mola y, una vez visibles todas las cartas del adversario, a pasar a la acción para repetir el éxito cosechado en agosto de 1932 con la neutralización de la *Sanjurjada*.

El hecho de que los mandos de la Guardia Civil y del ejército involucrados en el golpe de la madrugada del 19 de abril (y acusados en la causa militar 66/36) siguieran, salvo alguna excepción, destinados en A Coruña hasta después del éxito de la sublevación de julio -y que durante ese tiempo hubieran formado parte tanto de la trama conspirativa como de la secuencia misma del golpe de estado en A Coruña-, se debió tanto a la inoperancia y sesgo corporativo de la jurisdicción militar como a los propios defectos de una democracia política, todavía inmadura para imponer los principios en que se basaba la supremacía del poder civil. No obstante, esta laguna en el sistema político y legal republicano, esta pasividad medida en la política de inteligencia gubernamental, no llevaría aparejada en ningún caso -como se deduce, entre otras fuentes, del testimonio del entonces comandante de la Guardia Civil, Fernando Monasterio-, una dejación de funciones por parte de un gobernador civil comprometido en la erradicación de cualquier amenaza sediciosa, posición de firmeza que volvería a exhibir en los días previos y durante las trágicas horas del lunes 20 de julio, que condujeron a la pérdida del Gobierno Civil y a la derrota de la causa de la República en esta provincia.

La memoria simbólica de la resistencia del Gobierno Civil, institución clave cuyo control era una prioridad en los planes de Mola (y, específicamente, en los de las células golpistas coruñesas desde principios de abril), y del gobernador Pérez Carballo emergiendo de los cenáculos de la izquierda burguesa para *rebelarse*, eufemísticamente, contra los sublevados, con o sin la ayuda de otros –su esposa, supuesta líder de una defensa legal galvanizada de manera poco *viril*-, empezaron a forjarse antes de los sucesos de julio de 1936.

Tras el fracaso de la intentona golpista de abril, envuelta en tintes casi surrealistas, Pérez Carballo tuvo que digerir la decepción ocasionada tanto por la impunidad concedida a los mandos de la Guardia Civil como por el exceso de confianza (o, quizá, de cautela) reflejado en la estrategia apaciguadora decretada por el gobierno de Casares Quiroga que, con los precedentes citados en la memoria, trataba de evitar cualquier chispa que prendiese en los planes de una conspiración en marcha y la convirtiera en un ataque directo al corazón de la República.

Partiendo de la premisa de que la oficialidad y buena parte de los mandos de la VIII División del ejército y del VI Tercio de la Guardia Civil estaban conspirando contra el gobierno republicano, o permanecían a la expectativa para verificar de qué lado y en qué momento se decantaría la balanza, a Pérez Carballo sólo le quedaba la opción de confiar en los jefes del Cuerpo de Seguridad y Asalto y en los de la Comandancia provincial de la Guardia civil coruñesa, teniente coronel Clarés y comandante Ríos. Estos últimos se embarcaron en una espiral de tensiones conducida por una táctica dilatoria -cuando no por la intención real de engañar a Pérez Carballo-, que el gobernador trató de conjurar manteniendo (o, en puridad, reteniendo) a un obstruccionista Ríos en su despacho para asegurarse de que sus órdenes fuesen cumplidas -al ser, en teoría, ratificadas por éste- por los agentes de la Guardia Civil, resuelta finalmente a favor de los sublevados al frustrarse, por el motivo apuntado, el reparto de armas que el Gobierno Civil decretó a lo largo de la provincia y encauzó, la mañana del lunes 20 de julio, a través de los diferentes puestos de este Cuerpo.

Como apunte transversal -y realmente significativo- al papel desempeñado por Clarés, Ríos o el propio coronel del VI Tercio, Pérez Tello, entre otros jefes y oficiales que fingieron guardar lealtad al gobierno y las instituciones republicanas, debe señalarse que los citados permanecieron al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña hasta finales de 1936 o recibieron nombramientos de delegados de Orden Público en varias ciudades gallegas durante el periodo indicado.

Finalmente, y como es sabido, la estrategia de espera dictada por el gobierno de Casares, basada en la premisa de la fidelidad de los generales de división o de brigada y articulada a partir de la vigilancia ejercida, demasiadas veces, por servicios de información improvisados (que acabarían colapsándose por su falta de capacidad operativa), fracasó solamente donde al ejército le faltó capacidad para captar o identificar apoyos internos, coordinar unidades y actuar rápida o contundentemente contra los representantes del poder legal constituido.

No fue así en A Coruña, donde el golpe tuvo éxito a pesar de que el general Salcedo se mantuvo vacilante hasta el final. El máximo responsable de la VIII División hizo de su indecisión una peligrosa (y un tanto enigmática o críptica) identidad paternalista que proyectar sobre la oficialidad a su mando y exhibió lealtades contradictorias o cruzadas a Sanjurjo y Martínez Barrio, cuando no se parapetó en sus certeros cálculos sobre la dificultad de un triunfo de la insurrección a nivel nacional o el papel secundario concedido a la VIII División.

Atrincherado en el Gobierno Civil, con el único respaldo de los dos jefes provinciales de Asalto, Quesada y Gonzalo Tejero -buena parte de la oficialidad de este Cuerpo se situó en su contra y trató de sabotear la defensa del edificio-, el gobernador

civil, a pesar de sus esfuerzos por cumplir el tardío encargo del gobierno Giral, no encontró armas suficientes que entregar –hecho discutido en parte por la memoria de la izquierda obrera, que vio pasividad o negligencia en la estrategia dilatoria del gobierno y de los gobernadores civiles, en lugar de la imposibilidad material de obtener cualquier tipo de armamento en los arsenales y depósitos militares o policiales-, ni medios técnicos, operativos o humanos adecuados para resistir eficazmente a un enemigo provisto de potencia de fuego y organización superiores.

Bajo la idea generalizada y compartida por los bandos contendientes en este drama a escala gallega –no dos, sino tres, contando a la mayoría formada por los indecisos o posibilistas- de que todo estaba perdido desde el principio (a pesar de que los accesos a A Coruña estaban llenos de paisanos dispuestos a luchar contra los golpistas), todo resultó demasiado previsible, incluida la tenaz pero estéril resistencia del gobernador civil y los escasos leales a su cargo a la ofensiva de las fuerzas rebeldes.

Entre aquellos parámetros y certezas, Pérez Carballo impulsó actos y gestos de lealtad a la democracia republicana y cooperó en la organización de la defensa del Gobierno Civil, prolongada con sus decisiones hasta que se consideró agotados todos los recursos posibles para la supervivencia de la República en Galicia. Su vocación jurídica le impediría, en principio, dar curso a proyectos arriesgados o temerarios que, de fructificar, le hubieran costado bastantes vidas a los golpistas –por otra parte, difíciles de articular- y, por el contrario, le llevaría a la paradoja de permitir una negociación con los rebeldes en condiciones de igualdad, siempre con vistas a la evolución del golpe a escala nacional, opción ensayada de forma infructuosa cuando las municiones se habían terminado y las bajas eran ya cuantiosas.

Decantada ya la lucha en el Gobierno Civil del lado del Ejército y la Guardia Civil, el gobernador Pérez Carballo se resistió a la evidencia durante un tiempo indefinido. Tardó en reconocer, tal vez invocando la dignidad del cargo que ocupaba, la imposibilidad o inutilidad de una resistencia de horas lograda a un alto precio, que no podía prolongarse, en realidad, a falta de los medios necesarios para sostenerla, pues tan sólo seguían a su lado un puñado de guardias de Asalto y un grupo reducido de paisanos, incapaces de hacer fuego de forma eficaz contra los insurgentes. Cuando tomó conciencia de la situación, intentó pactar –como antes se ha sugerido- una tregua muy difícil de articular en una situación de franca desventaja ante un enemigo muy bien aleccionado, que fue rechazada por los mandos de la sublevación.

Muchos se ha especulado acerca de su supuesta falta de liderazgo o de habilidades para ganarse a Salcedo en los momentos críticos, marcados por los incidentes habidos entre ambos, pero no hay evidencia alguna, ni tampoco argumentos sólidos, para imputarle al gobernador civil una actitud negligente o una culpabilidad especial en la pérdida de A Coruña para la causa de la República.

A pesar de su obvia inexperiencia para desempeñar un cargo de alta responsabilidad en aquellos momentos, y de no haber podido actuar con mayor autonomía ni desarrollar plenamente su capacidad de iniciativa –defectos imputados, no sin cierto fundamento, a su actuación durante los días y horas previas al golpe de estado, para cuya evitación tendría que haber desafiado la autoridad del gobierno central y generado, paradójicamente, un nuevo factor de inestabilidad-, lo cierto es que Pérez Carballo



cumpliría, en buena medida, la obligación asumida de traducir a una realidad social compleja y turbia las directrices enviadas por el gobierno republicano.

No en vano, y ya en la fase crítica de su mandato, coordinó la actuación de los restantes gobernadores gallegos, convocó un Comité de defensa en precario, intervino teléfonos de conspiradores y se esforzó, finalmente, en compensar con innegable estoicismo un vacío de poder letal, provocado, a partes iguales, por la dimisión del gobierno Casares y la confusa disolución del efímero gobierno Martínez Barrio en la mañana del 19 de julio.

El argumento relativo a su falta de experiencia e iniciativa ante una crisis de estado de aquella naturaleza –sintetizado más arriba–, cuya proyección a nivel regional acabaría por aplastarlo a él y a las instituciones republicanas en A Coruña, contrasta con la certeza de la difícil interpretación del margen real de actuación de un gobernador civil frente a un contexto en que el aparato gubernamental, y sus vías de conexión con los mecanismos del poder local, corría el peligro de un colapso fatal.

Y ese fallo, ese desajuste que, por otra parte, sería la consecuencia lógica de una estrategia de apaciguamiento apurada al límite, podría señalarse en la actuación de muchos de los gobernadores civiles diseminados por el país, pues en bastantes de los casos en que el golpe acabó fracasando en una circunscripción provincial, lo hizo debido a las vacilaciones o descoordinación de las fuerzas sublevadas o a factores relacionados con el estatus geográfico, político o militar de la provincia en cuestión, cuando no merced a la irrupción de un factor azaroso, definido en los perfiles difusos de un apoyo militar y gubernamental imprevisible o de coordinación ulterior.

En realidad, y por más que se ponga el énfasis en otras cuestiones también relevantes, la acción del gobierno y sus gobernadores se vio considerablemente limitada cuando el poder coercitivo que debe auxiliar a la autoridad civil, a la legalidad en esencia, frente a cualquier proceso de involución se volvía, sin embargo, en su contra. En este caso, además, debe tenerse en cuenta el efecto devastador de los procesos de incertidumbre en situaciones críticas, límites, donde actores políticos, policiales y militares vacilaban en el trance de asumir papeles y estrategias que les alinearían en uno u otro bando.

Para sintetizar, en favor del gobernador civil de A Coruña se podría incidir en la postura sostenida por buena parte de los políticos, funcionarios, guardias civiles y militares involucrados, de una u otra forma, en la coyuntura histórica señalada (y, en consecuencia, afectados como acusados, testigos o *dudosos* en las causas instruidas por la legislación militar tras el éxito de la sublevación en A Coruña) a la hora de enjuiciar la figura y la labor del gobernador Pérez Carballo como la de uno de los principales valedores de la causa republicana, democrática y legalista desde el amago insurreccional de abril al golpe definitivo de julio de 1936. Este argumento debe matizarse, por una parte, en función de las circunstancias personales o políticas y de los intereses convergentes durante el periodo de instrucción de cada sumario judicial y, por otra, a través de la incorporación y el análisis de lo expresado por algunas voces discrepantes o heterodoxas, adscritas al ámbito ideológico o simbólico de la izquierda obrera, fragmentada y aislada en el territorio del exilio personal y político.

Así pues, el 24 de julio de 1936 era ejecutado Francisco Pérez Carballo. Tenía veinticinco años, un carácter reservado y trabajador y ambiciones políticas, académicas e intelectuales evidentes y, tal vez, no bien sopesadas en el desgaste sufrido por abordarlas todas de forma casi simultánea. Semanas o días antes de morir, preparaba, en el escaso tiempo libre que le dejaban sus responsabilidades oficiales, y gracias a su dominio del alemán, una traducción de textos jurídicos para la editorial Labor.

De este modo, finalizaba su historia personal y pública y surgían, en completa libertad, los moldeables y complejos trabajos de la memoria, en la espiral incierta determinada por criterios ideológicos y culturales que fluyen a través de un tiempo histórico aún latente.

### LISTADO DE SIGLAS

#### Organizaciones estudiantiles, partidos políticos y sindicatos:

APED	Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho.
ACNP	Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
BOC	Bloque Obrero y Campesino.
CEDA	Confederación Española de Derechas Autónomas.
CECE	Confederación de Estudiantes Católicos Españoles.
CIE	Confédération Internationale des Étudiants.
CNT	Confederación Nacional del Trabajo.
CRG	Confederación Regional Galaica.
FJS	Federación de Juventudes Socialistas.
FLO	Federación Local Obrera.
FRG	Federación Republicana Gallega.
FUE	Federación Universitaria Escolar.
ICE	Izquierda Comunista de España.
IR	Izquierda Republicana.
ISS	International Student Service.
JAR	Juventud de Acción Republicana.
JIR	Juventud de Izquierda Republicana.
JSU	Juventudes Socialistas Unificadas.
ORGA	Organización Republicana Gallega Autónoma.
PCE	Partido Comunista de España.
PRR	Partido Republicano Radical.
PRRS	Partido Republicano Radical Socialista.
PRSI	Partido Radical Socialista Independiente.
PS	Partido Sindicalista.
PSOE	Partido Socialista Obrero Español.
UFEH	Unión Federal de Estudiantes Hispanos.
UGT	Unión General de Trabajadores.
UJCE	Unión de Juventudes Comunistas de España.
ULE	Unión Liberal de Estudiantes.
UNE	Unión Nacional de Estudiantes.
UR	Unión Republicana.

#### Archivos nombrados bajo abreviatura:

CDMH	Centro Documental de la Memoria Histórica.
(PS)	(Político Social)
AGA	Archivo General de la Administración.
AHN	Archivo Histórico Nacional.
AJAE	Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios.
ARG	Archivo del Reino de Galicia.
ATMRN (ATMT IV)	Archivo del Tribunal Militar de la Región Noroeste.

## **FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA**

### **ARCHIVOS CONSULTADOS**

Archivo del Ateneo de Madrid.  
 Archivo del Congreso de los Diputados.  
 Archivo de la Diputación de A Coruña.  
 Archivo de la Edad de Plata.  
 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.  
 Archivo de la Fundación Universitaria Española (Fondo Sbert).  
 Archivo General de la Administración.  
 Archivo General Militar de Ávila.  
 Archivo de la Guardia Civil.  
 Archivo Histórico de la Fundación Francisco Largo Caballero.  
 Archivo Histórico Nacional.  
 Archivo del Instituto Cardenal Cisneros.  
 Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios.  
 Archivo del Ministerio del Interior.  
 Archivo Municipal de A Coruña.  
 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  
 Archivo del Reino de Galicia.  
 Archivo de la Residencia de Estudiantes.  
 Archivo del Tribunal Militar de la Región Noroeste (Ferrol)  
 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid)  
 Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid.  
 Archivo de la Villa de Madrid.  
 Centro Documental de la Memoria Histórica.

### **FUENTES HEMEROGRÁFICAS**

*Ahora.*  
*Boletín Oficial de la Dirección General de Seguridad.*  
*Boletín Oficial de la Guardia Civil.*  
*Boletín de información bibliográfica y parlamentaria.*  
*Boletín Oficial. Provincia de La Coruña.*  
*Compluto.*  
*Crisol.*  
*El Correo Gallego.*  
*El Ideal Gallego.*  
*El Imparcial.*  
*El Liberal.*  
*El Socialista.*  
*El Sol.*  
*Estampa.*  
*Europa Press.*  
*FUE órgano de la Federación Universitaria Escolar (Valencia).*  
*Gaceta de Madrid.*  
*Gaceta Universitaria (Madrid).*  
*Heraldo de Madrid.*  
*Jar. Órgano de prensa de las Juventudes de*  
*Acción Republicana.*  
*La Libertad.*

*La Nación.*

*La Voz.*

*La Voz de Galicia*

*Luz.*

*Política.*

*Solidaridad (A Coruña)*

*Unión Libre.*

*Universitarios.*

## **FUENTES ORALES**

Entrevistas realizadas por el autor a:

-Carmen Veiga de Bernardo y Juan Pérez-Carballo Veiga.

-Esther Varela Casares.

-Isaac Díaz Pardo.

-Luis Novo Bernedo.

-Alfredo Gironde Coedo.

-Carlos Fernández Santander.

-Entrevistas anónimas con testigos o familiares directos de protagonistas del periodo comprendido entre la victoria del Frente Popular y el inicio de la guerra civil A Coruña, relativas, de alguna manera, a las figuras de Pérez Carballo y Juana Capdevielle-, cedidas por los responsables del Proxecto Universitario “Nomes e Voces”.

## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS Y ARTÍCULOS:

- Abad de Santillán, Diego: *Por qué perdimos la guerra*, Barcelona, Plaza y Janés, 1977
- Abellán, José Luis: *El Ateneo de Madrid: historia, política, cultura, teosofía*, Madrid, La Librería, 2006.
- Aguilar Fernández, Paloma: *Políticas de la memoria y memorias de la política*, Madrid, Alianza Editorial, 2008.
- Memoria y olvido de la Guerra Civil española*, Madrid, Alianza Editorial, 1996.
- Alía Miranda, Francisco: *Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República*, Barcelona, Crítica, 2011.
- Alport, Michael, *El Ejército Popular de la República, 1936-1939*, Barcelona, Crítica, 2007.
- Altamira Ramos, Álvaro: *Diario de un general*, Madrid, Visión Libros, 2011.
- Altbach, P. G: "The international student movement", en *Journal of Contemporary History*, Vol. 5, nº 1 (1970)
- Angosto Vélez, Pedro: *José Alonso Mallol. El hombre que pudo evitar la guerra*, Alicante, Instituto Gil-Albert, 2006.
- Aróstegui Sánchez, Julio: *Por qué el 18 de julio...Y después*, Madrid, Flor del Viento, 2006.
- La historia vivida*, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
- Arrarás, Joaquín: *Historia de la cruzada española* (reed), Vol III, Madrid, Datafilms, 1984.
- Assman, Jan: "Collective memory and cultural identity", en *New German Critique*, nº 65 (1995)
- Aub, Max: *La gallina ciega*, México, Joaquín Mortiz, 1971.
- Avilés Farré, Juan: *La izquierda burguesa y la tragedia de la II República*, Comunidad de Madrid, 2006.
- Ayala, Francisco, *Recuerdos y olvidos*, Madrid, Alianza Editorial, 2006.
- Azcárate, Manuel: *Derrotas y esperanzas. La República, la Guerra Civil y la Resistencia*, Barcelona, Tusquets, 1994.
- Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique: "Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana", en J.P. Fusi (dir): *España: Autonomías*: Madrid, Espasa Calpe, 1989. Reproducido en <http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/indexleoc.htm>
- Bal, Mieke: "Second generation, Testimony, transmisión of memory and postmemory", en *Poetics today*, 2006, 27 (2)
- Balbé, Manuel: *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
- Beltrán Guëll, Felipe: *Preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional*, Valladolid, Librería Santarén, 1939.

- Ben Ami, Shlomo: *La dictadura de Primo de Rivera*, Barcelona, Planeta, 1983.
- Blanco, Carmen: *Alba de mulleres*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2003.
- Atracción total*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2008.
  - “Xoana Capdevielle”, en *Marea negra* 11, Ferrol, enero-febrero (2006)
  - “Vida y muerte de Juana Capdevielle”, en *Unión Libre*, nº 11, *Vermellas*, Edicións do Castro (2006).
  - “Juana Capdevielle”, *Álbum de mulleres*, [www.culturagalega.org](http://www.culturagalega.org), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega (2006).
- Catálogo de la exposición *Vermellas. Chamábanlles “rojas”*, organizada por la Vicerrectoría de Cultura de la Universidad de Santiago de Compostela, dentro de las actividades del *Lugo cultural* (2009).
- Homenajes literarios:
- “Juana Capdevielle”, *Foeminas, Revista virtual de género*, nº 4, Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Lugo (2006). Recopilado en Manuel Fernández Rodríguez, (ed), *Poemas pola memoria (1936-2006)*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2006.
  - “Juana Capdevielle”, en *Foeminas. Revista virtual de género*, Concejalía de la Mujer, Ayuntamiento de Lugo, marzo de 2009.
- Bergson, Henri: *La pensée et le mouvant. Essais et conférences*, París, Presses Universitaires de France, 1946.
- *Matière et mémoire*, París, PUE, 1990.
  - *Memoria y vida*, Madrid, Alianza, 1977.
- Blaney, Gerald: “En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana 1931-1936”, en *Ayer*, 88/ 2012 (4)
- Burdiel, Isabel: “Historia política y biografía: más allá de las fronteras”, en *Ayer*, nº. 93, 2014 (1)
- Capdevielle San Martín, Juana: “El fin que persiguen las bibliotecas de hospital, ¿debe ser distraer o instruir a los enfermos?”, en *Actas del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, 20- 30 de mayo de 1935*, Madrid, Librería de Joaquín Barbazán, 1949, vol, 3 (Bibliotecas Populares).
- “La biblioteca de Filosofía y Letras”, en *Compluto*, Revista de la A.P.E.F.L (FUE), Madrid, núm. 1 (1932). Reproducido en el catálogo de la exposición *La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años 30*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/ Ayuntamiento de Madrid/ Escuela de Arquitectura/ Fundación de Arquitectura COAM, 2008.
  - “El amor en el ambiente universitario”, en *Genética, eugenesia y pedagogía sexual*, Madrid, Javier Morata Editor, 1934.
- Caralps, Antoni: “Retrat de metges: Francisco García Valdecasas”, en *Annals de Medicina*, Vol 86, n º 4 (octubre/noviembre/ diciembre 2004)
- Carr, Raymond: *España, 1808-1975*, Ariel, Barcelona, 1998.
- Casanova, Julián: *Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX*, Zaragoza, CSIC, 2007.
- República y guerra civil*, en J. Fontana y R. Villares (dir), *Historia de España* (Vol 8), Madrid, Crítica/ Marcial Pons, 2007

Caudet, Francisco: “Antecedentes de la generación del 98. Estudiantes y profesores frente a la dictadura”, en *Tiempo de historia* (Cadiz) nº8 (julio de 1975),  
 Cibrián, Ramiro: “Violencia política y crisis democrática: España en 1936, en *Revista de estudios políticos*, nº 6 (noviembre-diciembre de 1978)  
 Claremont de Castillejo, Irene: *Respaldada por el viento*, Madrid, Castalia, 1995.  
 Cubitt, Geoffrey, *History and memory*, Manchester University Press, 2007.  
 Cruz, Rafael: *En el nombre del pueblo*, Madrid, Siglo XXI, 2006.  
 Cuesta Bustillo, Josefina: *La odisea de la memoria: Historia de la memoria en España, Siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2008.

- “Los componentes del testimonio, según Paul Ricoeur”, en *Historia, antropología y fuentes orales*, nº. 30, 2003.

Delgado Criado, Buenaventura: *Historia de la educación en España y América*, Madrid, Fundación Santa María, 1994.

Díaz Alcaraz, Francisco y Moratalla Isasi, Sonia: “La segunda enseñanza hasta la Dictadura de Primo de Rivera”, *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, nº 23 (2008)

Domínguez Almansa, Andrés (y otros): “Da visualización social da muller á inmersión no terror: 1936. Golpe de estado, vítimas e memoria” (Catálogo de la exposición *Vermellas: Chamábanlles “rojas”...*)

Domínguez Benavides, Manuel: *La escuadra la mandan los cabos*, México, Colección Luz sobre España, 1944.

Engel, Carlos: *Historia de las brigadas mixtas del Ejército Popular de la República*, Madrid, Almena Ediciones, 2005.

Espín, Eduardo: *Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana*, Madrid, C.I.S, 1980.

Faber, Sebastian, Sánchez León, Pablo e Izquierdo Martín, Jesús: “El poder de contar y el paraíso perdido. Polémicas públicas y construcción colectiva de la memoria en España”, *Política y Sociedad*, 2011, Vol. 48, nº.3.

Fernández Fernández, Eliseo: “Casares Quiroga, el movimiento obrero y la cuestión del orden público”, en E. Grandío y J. Roderó (eds), *Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder*, Madrid, Eneida, 2011.

- “La FAI en Galicia”, en *Germinal*, nº3 (abril de 2007).

-(con) Dionisio Pereira, *O anarquismo na Galiza. Apuntes para una enciclopedia*, Santiago de Compostela, Edicións Positivas, 2004.

Fernández Leiceaga, Xesús y López Iglesias, Edelmiro: *Estructura económica de Galicia*, 2000.

Fernández Prieto, Lorenzo (ed): *Terra e progreso*, Vigo, Xerais, 2000.

-A *gran historia de Galicia*, Tomo XIII: *Século XX Unha economía: dúas sociedades*; Vol I: *Dinamismo social e desenvolvemento económico*, La Voz de Galicia/ Arrecife Edicións, 2007.



Fernández Santander, Carlos: *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2007 (2 vol.)

-*Casares Quiroga, una pasión republicana*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2000.

Fernández del Riego, Francisco: *O río do tempo: una historia vivida*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1994.

Freán Hernández, Oscar: *El movimiento libertario en Galicia 1910-1936*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2006.

Fusi Aizpurua, Juan Pablo “La trágica grandeza de Azaña”, en *Claves de razón práctica*, nº 186, 2008.

-(con) Palafox, Jordi: *España: 1808-1996. El desafío de la modernidad*, Madrid, Espasa-Calpe, 1997.

Gállego Rubio, Cristina: *Juana Capdevielle San Martín. Bibliotecaria de la Universidad de Madrid*, Madrid, Editorial Complutense, 2010.

Gallencia, J: “The Confederation Internationale de Etudiants”, *The Student*, nº. 10 (1957).

García Cárcel, Ricardo: *La herencia del pasado*, Barcelona, Galaxia, 2011.

García Queipo de Llano, Genoveva: *Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera*, Madrid, Alianza Editorial, 1988.

Gascón, Antonio: *Los estudiantes*, Madrid, Castro, s.f.

Gómez Molleda, María Dolores: “Juventud y política en la España contemporánea”, en *Studia Histórica* (Salamanca), vol V, nº 4 (1987).

González Calleja, Eduardo: *Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea*, Madrid, Alianza, 2009.

-*Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936*, Madrid, Alianza Editorial, 2011.

-*Memoria e historia Vademécum de conceptos y debates fundamentales*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.

- *La España de Primo de Rivera*, Madrid, Alianza Editorial, 2005.

-“La radicalización de las derechas”, en Ángel Viñas (ed), *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013.

-“La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936”, en *La España del Frente Popular/ L’Espagne du Front Populaire*, Madrid, Melanges de la Casa de Velázquez, Tomo 41-1 (2011)

-del mismo autor y Souto Kustrín, Sandra: “De la dictadura a la República. Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España”, en *Hispania (Revista española de Historia)*, 2007 , Vol. LXVII, nº. 225 (enero-abril)

González Hernández, María Jesús: *La curiosidad del zorro. Una biografía*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010.

González López, Emilio:

-*El espíritu universitario*, Madrid, Javier Morata, 1931.

-*Memorias de un estudiante liberal*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1987.

-*Memorias de un diputado de las Cortes de la República*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1988.

-*Memorias de un diputado republicano en la guerra civil española (1936-1939)*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 1990.

Grandío Seoane, Emilio: *Anos de odio. Golpe, represión e guerra civil na provincia da Coruña (1936-1939)*, Diputación de A Coruña, 2007.

- “Golpe de estado y represión franquista en A Coruña. ¿Qué pasa con Coruña?”, en J. de Juana y J. Prada, *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.

- “Rumores a gritos: ruido de sables contra el Frente Popular (febrero-mayo de 1936), en *Hispania Nova* nº 11 (2003), dossier: *La Segunda República. Nuevas miradas, nuevos enfoques*.

- “O poder local na provincia da Coruña durante a II República”, en L. Fernández Prieto (coord), *Poder local, élites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936)*, USC, 1997.

-(con) J. Roderó (eds): *Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder*, Madrid, Eneida, 2011.

-(ed), *Casares Quiroga. Discursos parlamentarios (1931-1936)*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2006.

Granja Sainz, José Luis de la (coord): *Manuel Tuñón de Lara, maestro de historiadores* (catálogo de la exposición biográfica y bibliográfica), Madrid, 1994.

Graham, Helen: *La República española en guerra 1936-1939*, Barcelona, Debate, 2006.

Halbwachs, Maurice: *La memoria colectiva*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.

Herrera Tejada, Clara: “Juana Capdevielle, bibliotecaria del Ateneo de Madrid (1933-36)”, comunicación presentada en la *Jornada sobre Juana Capdevielle San Martín, bibliotecaria de la Universidad Central*, Universidad Complutense de Madrid. 15 de junio de 2010.

Hiriart, Ricardo: *Conversaciones con Francisco Ayala*, Madrid, Espasa-Calpe, 1982.

Hirsch, Marianne: “The generation of postmemory”, en *Poetics Today*, 29:1 (spring 2008)

-con Valerie Smith, *Gender and Cultural Memory*, Special Issue of *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 28, 1, (2002).

Huyssen, Andreas: *En busca del futuro perdido*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Jato Miranda, David: *La rebelión de los estudiantes*, Madrid, Cies, 1968.

Juana, Jesús de y Prada, Julio: *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.

Judt, Tony, *Algo va mal*, Madrid, Taurus, 2010.

Julía, Santos: *Vida y tiempo de Manuel Azaña. 1880-1940*, Madrid, Taurus, 2008.

- “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en S. Gálvez (coord.), *Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria*. Dossier monográfico de *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 7 (2007)

- “De cómo Madrid se volvió republicano”, en J. L. García Delgado (ed), *Los orígenes culturales de la II República, IX coloquio de historia de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara*, Madrid, Siglo XXI, 1993.

- “Ser intelectual, y ser joven, en Madrid, hacia 1930”, en *Historia Contemporánea*, nº 27 (2003)

- “La República enfrenta la rebelión militar”, en J. Villa, *El golpe 75 años (1936-2011)*, Sevilla, Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, 2012.
- (editor) Manuel Azaña, *Obras completas*. (7 volúmenes), Madrid, Taurus /C.E.P.C, 2007.
- (con) Ringrose, David y Segura, Cristina: *Madrid. Historia de una capital*. Madrid, Alianza Editorial, 1994.

- Laín Entralgo, Pedro: *Descargo de conciencia (1930-1960)*, Barcelona, Barral, 1976.
- Lamela, Luis: *Estampas de injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión*, Sada (A Coruña), Ed. do Castro, 2005.
- Levi, Daniel y Sznajder, Natan: “Memory unbound. The Holocaust and the formation of cosmopolitan memory”, en *European Journal of social theory*, 5 (1), 2002.
- López Corral, Miguel: “El gobernador civil y la Guardia Civil”, en VV.AA, *El gobernador civil en la política y en la administración de la España Contemporánea*
- López Rey, José: *Los estudiantes frente a la dictadura*, Madrid, Morata Editor, 1930.
- López Vázquez, Ramón: *O pensamento rexeneracionista en Eloy Luis André (Do europeísmo o galleguismo)*, Xunta de Galicia, 1996.
- López Vega, Antonio: *Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal*, Madrid, Taurus, 2011.
- Losada, Juan Carlos: “La sublevación militar de julio del 36”, en A. Viñas (ed), *En el combate por la historia. La República, la guerra civil y el franquismo*, Barcelona, Pasado y Presente, 2012.
- Luis André, Eloy: *Rudimentos de derecho español o sea derecho usual patrio*, Madrid, Imp. Clásica. Española, 1929 (prólogo a la primera edición)
- Malefakis, Edward: *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Barcelona, Ariel, 1971.
- Mancebo, María Fernanda: *La universidad de Valencia. De la monarquía a la República (1919-1939)*, Universidad de Valencia, 1994.
- “Una élite estudiantil: Los primeros Congresos de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U.F.E.H)”, en *Las élites espagnoles á la Espagne contemporaine*, Pau, 1982.
- Maravall, José María: *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*, Madrid, Alfaguara, 1978.
- Marías, Julián, *Una vida presente Memorias*, Madrid, Páginas de Espuma, 2008.
- Martín, Jeanne, *Cómo se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios*, Madrid, Ediciones Júcar, 1980.
- Martínez Bande, José Manuel: *República, conspiración, revolución y alzamiento*, Madrid, Encuentro, 2007.
- Martínez Barrio, Diego: *Memorias*, Barcelona, Planeta, 1983.
- Martínez Saura, Santos: *Memorias del secretario de Azaña*, Madrid, Planeta, 1999.
- McMillan, Margaret: *The uses and abuses of memory*, Londres, Profile Books, 2009.
- Misztal, Barbara: *Theories of social remembering*, Philadelphia, Open University Press, 2003.
- Morin, Edgar: *Ciencia con conciencia*, versión on line en [www.edgarmorin.org](http://www.edgarmorin.org). Org.
- Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 2004.
- Moure Mariño, Luis, *Galicia y el movimiento nacional*, Madrid, Ediciones Españolas, 1939.
- Muñoz Rojas, José Antonio: *La gran musaraña. Memorias*, Valencia, Pre-Textos, 1994.
- Nora, Pierre: *Les lieux de mémoire* (3 vol), París, Galliard, 1997.

- “Between memory and history: Les lieux de mémoire”, en *Representations*, nº 26, spring 1989.
- Noguera, E y Huerta, L: *Libro de las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas: Genética, eugenesia y pedagogía sexual*, Vol II, Madrid, Javier Morata, 1934.
- Novick, Peter: *The Holocaust in American Life*. Chicago: University of Chicago Press. 2000.
- Núñez, Clara. E: *La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea*, Madrid, Alianza, 1992.
- Otero Carbajal, Luis Enrique: “Tradición y modernidad en la España urbana d la Restauración”, en Guadalupe Gómez Ferrer y Raquel Sánchez (eds), *Modernizar España: Proyectos de reforma y apertura internacional (1898-1914)*, Madrid, Biblioteca nueva, 2007.
- Páramo, Andrés: “Casares Quiroga o el compromiso republicano”, en *Cuadernos Republicanos*, nº 58 (2005)
- Payne, Stanley. G: *The spanish revolution*, New York, 1970 y “Political violence during the spanish second republic”, en *Journal of contemporary history*, vol XXV, 2-3 (1990).
- Pereira, Dionisio: *A CNT na Galicia*, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994.
- Pérez Carballo, Francisco, *Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1933 a 1934*, Madrid, Imp. Colonial, 1933.
- Pérez Galán, Mariano: *La enseñanza en la Segunda República Española*, Madrid, Ed. Cuadernos para el diálogo, 1977.
- Prada, Julio: “Clientelismo y poder local en la Segunda República”, en *Hispania Nova*, nº 11 (2013), dossier: *La Segunda República: nuevas miradas, nuevos enfoques* (dossier), en *Hispania nova*, nº 11 (2013)
- “Golpe de estado y represión franquista en Ourense”, en Juana, Jesús de y Prada, Julio (ed), *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.
- (con) Grandío, Emilio (cord): *La Segunda República: nuevas miradas, nuevos enfoques* (dossier), en *Hispania nova*, nº 11 (2013)
- Preston, Paul: *La guerra civil en España*, Barcelona, Debate, 2006.
- Puell de la Villa, Fernando: “La trama militar de la conspiración”, en F. Sánchez Pérez (coord.), *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013.
- Puelles Benítez, Manuel de: *Historia de la educación en España*. Tomo III, *De la Restauración a la II República. Textos y documentos*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1989.
- Puyol Montero, José María: “El Plan de estudios de Derecho en la Universidad Central”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, nº. 8 (2005)
- El plan republicano en la Facultad de Derecho de Madrid (1931-1934”, en *Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija*, 7 (2004)
- Rabaté, Jean Claude y Colette: *Miguel de Unamuno Biografía*, Madrid, Santillana, 2009.

- Ranzato, Gabriele: “La izquierda republicana y la defensa de la democracia”, en M. Álvarez Tardío y F. del Rey Reguillo, *El laberinto republicano. La izquierda republicana y sus enemigos (1931-1936)*, Barcelona, RBA, 2012.
- Rey, Fernando de: *Paisanos en lucha: Exclusión política y violencia en la Segunda República española*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
- Reyes Mate, Manuel: *La herencia del olvido*, Madrid, Errata Naturae, 2008.
- Ricour, Paul: *La memoria, la historia, el olvido*, Madrid, Trotta, 2003.
- Rivas Cherif, Cipriano de: *Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña.*, Madrid, Grijalbo, 1981.
- Rodríguez Fer, Claudio: *A loita continúa*, Edicións Xerais de Galicia, 2004.
- Km. 526, Aula de Teatro de la USC, dirección y dramaturgia de Paloma Lugilde (sobre el texto “As costureiras”, de C. Rodríguez Fer), 2006.
  - “As costureiras”, en *Unión Libre*, nº 11, *Vermellas*, Edicións do Castro, 2006.
  - “A Juana Capdevielle”, en *Ámote vermella*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009.
  - “La última lección de las maestras”, en *Foeminas. Revista virtual de género de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Lugo*, julio de 2009.
- Rodríguez Gallardo, Ángel, “Golpe de estado y represión franquista en Pontevedra”, en J. de Juana y J. Prada, *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.
- Romero, Luis: *Tres días de julio*, Barcelona, Ariel, 1967.
- Rousso, Henry: *The Vichy Syndrome. History and memory in France since 1944*, Cambridge, Harvard University Press, 1991.
- La hantise du passé*, París, Textuel, 1998.
  - “La mémoire n’est plus ce qu’elle était”, en *Écrive l’histoire du temps présent. En hommage á Francois Bedarida*, París, CNRS Edits, 1993.
- Ruiz Barrio, Julio: *La educación en los tiempos modernos. Textos y documentos*, Madrid, Actas, 1996.
- Ruiz-Manjón Cabeza, Octavio, “El republicanismo español del siglo XX”, en Martínez López, Fernando; Ruiz García, Maribel, *El republicanismo de ayer a hoy*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012.
- Ruiz- Peinado Vallejo, Juan: *Cuando la muerte no quiere*, México: La impresora Azteca, 1967.
- Ruiz Salvador, Antonio: *Ateneo, Dictadura y República*, Valencia, Fernando Torres Editor, 1976.
- Ryan, Lorraine: “Memory, power and resistance. The anatomy of a tripartite relationship”, en *Memory Studies* DOI: 101177/1750698010366502 (version on line first) (2010)
- Salaverría, José María: *Instantes: Literatura. Política. Costumbres*, Madrid, 1927.
- Sánchez Pérez, Francisco: “¿Una guerra realmente inevitable?”, en Ángel Viñas (ed): *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013.
- “Las protestas de trabajo en la primavera de 1936”, en *La España del Frente Popular/L’ Éspagne du Front Populaire, Melanges de la Casa de Velázquez*, T. 41-1 (2011)

Sánchez Ron, José Manuel (ed): *La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su Centenario*, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2010.

Serrallonga, Joan: “El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939”, en *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, nº 7 (2007)

Silva Ferreiro, Manuel: *Galicia y el movimiento nacional*, Santiago de Compostela, Imp. y enc. del Seminario Conciliar, 1938.

Simeón Vidarte, Juan: *Todos fuimos culpables*, México, FCE, 1973.

Souto Blanco, María Xesús: “Golpe de estado y represión franquista en Lugo”, en Juana, Jesús de y Prada, Julio (ed), *Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939)*, Barcelona, Crítica, 2006.

Souto Kustrín, Sandra: *¿Y Madrid?, ¿qué hace Madrid? Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936)*, Madrid, Siglo XXI Edit, 2004.

-*Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en la República Española*, Universidad de Valencia, 2013.

-“Políticas gubernamentales y organizaciones juveniles en la Segunda República”, en *Ayer*, nº 59/ 2005 (3)

-“Generaciones y grupos de edad, uso, mal uso y abuso de un concepto”, en J. A. Martínez Martín, E. González Calleja, S. Souto Kustrín y J. A. Blanco Rodríguez (coord), *El valor de la historia. Homenaje al profesor Julio Aróstegui*, Madrid, Ed. Complutense, 2009.

Strachey, Lyton: *Victorians eminentes*, Madrid, Valdemar, 1998.

Tagüeña, Manuel: *Testimonio de dos guerras*, Madrid, Planeta, 2005.

Todorov, Tzvetan: *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Paidós, 2008.

Torres, Rafael: *Nuestra Señora de la Cuneta*, Vigo, Nigratrea, 2009.

Townson, Nigel: *La república que no pudo ser*, Madrid, Taurus, 2002.

Tumblety, Joan, *Understanding memory as source and subject* (versión Kindle), 2013.

Tusell, Javier: *Las elecciones del Frente Popular en España*, Madrid, Edicusa, 1971.

Varela González, Isaura: *La universidad de Santiago 1900-1936. Reforma universitaria y conflicto estudiantil*, Sada (A Coruña), Ed do Castro, 1989.

Varela Rendueles, José María: *Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador civil*, Sevilla, Servicio de publicaciones del Ayuntamiento.

Villares, Ramón: *Historia de Galicia*, Vigo, Galaxia, 2004.

Viñas, Ángel: *La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada*, Barcelona, Crítica, 2011.

-(ed) *En el combate por la historia. La República, la guerra civil, el franquismo*, Barcelona, Pasado y Presente, 2012.

-(ed): *Los mitos del 18 de julio*, Barcelona, Crítica, 2013.

VV.AA: *La España del Frente Popular/L'Éspagne du Front Populaire*, en *Melanges de la Casa de Velázquez*, T. 41-1 (2011)

VV.AA, *El gobernador civil en la política y en la Administración de la España contemporánea*, Ministerio del Interior, 1997.

VV.AA: *Galicia bajo la bota de Franco. Episodios sobre el terror blanco acaecidos en las provincias de Galicia contados por quienes los han vivido*, París, Jean Flory, 1938.

-*Lo que han hecho en Galicia*, París, Ediciones España, 1938.

-H. Quijano (pseudónimo), *Galicie mártir. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas*, Buenos Aires, Neos, 1938.

- *Galicie bajo la bota de Franco. La edición clandestina de 1938*, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2005.

VV.AA, "Juana Capdevielle", en *Biblioteca en guerra*, Madrid, Biblioteca Nacional, 2005.

Zerubavel. Yael: *Recovered roots: Collective memory and the making of Israeli national tradition*. University of Chicago Press, 1995.

Zugazagoitia, Julián: *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Barcelona, Tusquets, 2001.

#### FUENTES PRIMARIAS IMPRESAS:

-“Biblioteca de la Universidad de Madrid. Memoria correspondiente al año 1934”, en *Anales de la Universidad de Madrid. Letras*, T IV, 1935 (conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla)

-*Conclusiones del Congreso Extraordinario para la Reforma de la Enseñanza. Unión Federal de Estudiantes Hispanos*, Madrid, Imp. Murillo, 1932.

-*Discurso leído por el alumno Pedro Nicandro Martín González, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1932 a 1933*

-*Disertación sobre el tema del momento universitario, leída por el alumno José García y García, presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras (FUE) con motivo de la apertura del curso académico de 1931 a 1932.*

-*Estampa de universidad. Discurso leído por el alumno D. Francisco Pérez Carballo, miembro de la Asociación Profesional de Estudiantes de Derecho en representación de la Federación Universitaria Escolar (F.U.E) con motivo de la apertura del curso académico de 1933 a 1934*, Madrid, Imp. Colonial, 1933.

-*Libro del estudiante (Anuario de la Universidad de Madrid ) de 1935* (conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla)

-*Memoria estadística correspondiente al curso 1926-27*, Universidad de Madrid (redactada por la Secretaria General), conservada en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la UCM.

-*Memoria estadística correspondiente al curso 1930*, Universidad de Madrid (redactada por la Secretaria General), conservada en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”.

-*Reglamento del Ateneo científico, literario y artístico de Madrid.*

Madrid, Est. Tip. “sucesores de Rivadeneyra”, 1903.  
de la UCM.

### **ANEXO DOCUMENTAL**

- Declaración de Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de A Coruña, incluida en la causa 66/36, 23-4-1936. Antecede cuestionario previo (ATMRN, Causa 66/36, fol.35-37).....412-415
- Instancia y memoria elevadas por Pérez Carballo a la JAE (1935-36) con el fin de obtener una pensión de estudios en el extranjero (expediente Pérez Carballo, AJAE).....416-419
- Solicitud cursada por F. Monasterio, teniente coronel de la Guardia Nacional Republicana, para pedir su traslado al Cuerpo de Seguridad, con alusiones a la figura de Francisco Pérez Carballo, 20-9-1937 (CDMH, PS, 941/2).....420-421
- Declaración prestada por el secretario del Gobierno Civil, Fausto Rubín y Puig (ATMRN, Causa 207/36, fol. 95) .....422-423
- Declaración de Florentino González Vallés, teniente coronel de la Guardia Civil, en la causa 613/37, 15-4-1936 (ATMRN, Causa 613/37, fol. 209-210).....424-426
- Telegrama enviado por Martínez Barrio al mando de la VIII División en la madrugada del 19 de julio de 1936 (ATMRN, Causa 413/36, fol. 388).....427
- Fotos de Francisco Pérez Carballo y Juana Capdevielle San Martín.....428 y 429
- Foto de la tribuna de autoridades que presidía el desfile conmemorativo del V Aniversario de la proclamación de la República española, organizado en A Coruña. Aparecen, de izquierda a derecha, Suárez Ferrín, Salcedo, Juana Capdevielle, Caridad Pita (en segunda fila) y el gobernador Pérez Carballo.....430.



ESPECIAL  
JUZGADO MILITAR PERMANENTE  
8.ª DIVISIÓN  
CUARTEL DE ATOCHA - ALA NORTE

SECRETARÍA DE Oficial

se ruega que en la contestación se haga  
referencia al número de la Secretaría)

INTERROGATORIO a tenor del cual ha de contestar S.E.  
el Excmo. Señor Gobernador Civil de esta provincia, en causa --  
que por el supuesto delito de rebelión militar instruyo, en la  
forma prevenida en el Código de Justicia Militar.

1ª.-Las generales de la Ley.

2ª.-Cuales son las noticias que tenia para formular la  
denuncia objeto de esta causa.

3ª.-Diga cuanto directamente sepa sobre el particular.

La Coruña 22 de abril de 1.936.

El Capitan Secretario,

*[Firma manuscrita: Juan Olanche]*

Vº

Bº

El Coronel Juez Especial,

*[Firma manuscrita: Blasco]*



36



## AL JUZGADO ESPECIAL DE LA 8ª DIVISION

DON FRANCISCO PEREZ CARBALLO, Gobernador civil de La Coruña, absolviendo posiciones del interrogatorio que al efecto se le ha formulado, por el Juzgado Especial Militar, para que lo responda; de acuerdo con el artículo 443 del Código de Justicia Militar;

CERTIFICO y prometo por mi honor:

Sobre la primera pregunta, que son mis nombres y apellidos paterno y materno los que indicados quedan, que es mi profesión la de Abogado, mi estado el de casado, y que no he sido procesado ni se me ha impuesto pena alguna.

Sobre la segunda pregunta.- Que venia recibiendo, por razon de mi cargo, referencias de que d terminados elementos que se suponian militares celebraban reuniones en circunstancias de lugar y momento que parecian indicar el propósito de pasar inadvertidos para la poblacion y para este Gobierno que tiene el deber de velar por el orden constituido.- Segun informacion obtenida del Comandante de la Guardia Civil D Fernando Monasterio Bustos de la Comandancia de La Coruña, en el cuartel de la Guardia Civil se recibieron en los dias anteriores al sábado y domingo numerosas visitas injustificadas de militares.-El viernes por la tarde (se alude al dia diez y siete del actual) me llegaron insistentes noticias de que estaba realizándose una de estas reuniones en un lugar tan inusitado y propicio a despertar recelos legítimos como la Granja Agrícola, situada fuera del casco de la Ciudad, concurriendo la circunstancia de que por lo intempestivo del dia no se comprende bien que tuvieran que hacer en ella un nutrido grupo de personas de la validez mencionada. Requerí al Sr. Teniente Coronel de la Guardia Civil, Jefe a mis órdenes de la Comandancia para que hiciera practicar un reconocimiento y comprobase la veracidad de la informacion por mí recibida. El Teniente Coronel me comunicó pasadas unas horas que sus fuerzas no habian encontrado en la Granja nada anormal. En la madrugada de ese dia al siguiente obtenia yo por otro conducto, Presidente de la Juventud Socialista de la Coruña, Don France Garcia, calle de San Roque, nº 24, confirmacion de la reunion celebrada, y se me reiteró por otras personas a la mañana siguiente.-El sábado durante todo el dia me llegaron rumores de que se preparaba un complot de tipo militar. En su mañana el Sargento de la Guardia Civil D. Manuel Santos Otero, estuvo en la Secretaria judicial del Sr. Santamaria hablando con los Oficiales para tratar de adquirir pistolas.-La noche del sábado los rumores parecieron concretarse por cuanto en toda ella se observó movimiento de camiones que transportaban Oficiales soldados y paisanos. A las once y media de esa noche D. France Garcia (domicilio mencionado) y Don Juan Martinez Fontenla (Juana de Vega 58), vieron llegar dos camiones a la Plaza de Pontevedra, pertenecientes, uno, a Intendencia, y otro, a Artilleria; uno de ellos recogió paisanos en dicha plaza; tomaron dichos camiones camino distinto: fué uno hacia las "fortificaciones" y otro hacia el Monte de San Pedro. Tratando de confirmar la noticia envié al Agente de Investigacion Don Fernando Freire, y al tambien Agente Don José Nieto de la plantilla de esta Capital, quienes de una a una y media de la madrugada vieron atravesar de la calle de Rubine a la plaza de Pontevedra, bajada obligada del Fuerte de San Pedro, una camioneta de Artilleria del segundo de Costa con ocho o diez soldados dentro, armados de mosqueton. Esta noticia me fué confirmada asi mismo por Don Manuel Vazquez Gonzalez, que vive en Travesia de Cordone-ria 2, -2ª.-A las tres de la madrugada se vió por otra persona al comienzo de la calle de La Barrera un coche con Oficiales de la Guardia Civil, bajándose uno de ellos al que advirtieron sus compañeros en alta voz que lo esperaban.-De todo este movimiento de tropas no se me dió noticia oficial. Tampoco se me dió del acuartelamiento de la Guardia Civil, que sin duda existió, por ningun Jefe de ella como era su obligacion y como venia teniendo por costumbre; dicho acuartelamiento se realizó sin conocimiento del Sr. Coronel ni del Sr. Monasterio, Comandante, que así me lo manifiesto.



tan.-D. Ramiro Muñiz Blanco que vive en Picavia, n. 5, 1ª. izquierda, puede testificar que el Capitán retirado de la Guardia civil, vecino suyo, Sr. Penelaz, que no recibe, recibió esos días visitas numerosas de oficiales y guardias civiles. A las cuatro tuvo información de que había cesado el movimiento de automóviles que transportaban militares y me retire a descansar.

El domingo, al pasar de mi despacho al domicilio a las dos y media de la tarde el conserje de servicio me advirtió de la presencia de un número de Guardia Civil diferente del que ordinariamente prestaba servicio en este Gobierno, Albino Torre. Dicho número llamado Tomás, de la sección de caballería, que tengo entendido que es el carrero, manifestó que Albino estaba enfermo y que el sargento Santos, Comandante del Puesto de La Coruña le había mandado venir a él.

Pregunté por Albino el domingo por la tarde, enviando a uno de los porteros del Gobierno para que se interesara por él. El lunes por la mañana fue mi mujer que le visitó. Llegó al domicilio de Albino, calle de Juan Castro Mosquera 41, y al preguntarle por la mujer de Albino la llevó a la habitación de este. Manifestó, quien era y que iba de parte del Gobernador para saber como se encontraba Albino, y al oírlo este pareció comprender muy bien lo que se le decía; preguntado si necesitaba algo, respondió varias veces que no. En vista de su estado de postración, no insistí y salió a una habitación contigua con la mujer del enfermo a la que pregunté allí si sabía algo de la causa de la enfermedad de su marido. Habiendo respondido esta mujer que preguntaba a su marido, volvió mi esposa a entrar en la habitación del enfermo. Advirtiéndole Albino y se alteró extraordinariamente. Manifestó entonces a la mujer que antes que excitarle con algún doloroso recuerdo de la declaración, la mujer de Albino se mostró dispuesta a referir lo que sabía que era lo siguiente:

El sábado por la noche, a las once aproximadamente, llegó Albino a su casa muy preocupado, y ante las insistentes preguntas de su mujer y su suegro acabó por decir que "el capitán le había mandado que amenazase aquella noche al Sr. Gobernador y que él no lo haría, estando dispuesto a dejarse matar si no lo hacía". La mujer y el suegro le animaron en esta actitud y decidieron todos que se metiera en la cama y se diera por enfermo para no ir al cuartel. Hacia las dos de la madrugada, vino un coche de la Comandancia con varios guardias civiles que llamaron desde abajo. Contestó el suegro, diciendo que Albino estaba enfermo. Hicieron ademán de marcharse, pero volvió a subir, habló con el guardia Albino, ignorando la familia la conversación, y acabaron por marcharse sin él. Media hora más tarde volvió el coche, esta vez con varios guardias y un sargento quien rudamente ordenó se abriera la puerta, subiendo a la habitación de Albino cuya puerta cerraron. Al través de los cristales, la familia pudo ver que el sargento daba empujones al muchacho para hacerle salir del lecho. Le hicieron vestirse, y sin siquiera ponerse el correa, que llevó, con las pistolas, uno de los visitantes, metieron a Albino en el coche y le llevaron con ellos.

La mujer no sabía más. Al día siguiente por la tarde, habían traído a su marido en el estado de excitación en que mi esposa le encontraba.

En una visita posterior que ha hecho mi esposa el martes por la noche, encuentro en casa de Albino al hermano de este, Brigada de la Guardia Civil, Don Latino Torre, y número del mismo cuerpo Don Ramiro, y al suegro de Albino, obteniendo de ellos mayores detalles. El Brigada refirió que al llegar el lunes al cuartel se enteró de que su hermano estaba en el calabozo y enfermo y tuvo por un Guardia una idea de lo que se había intentado hacer la semana. Hablando entonces con los otros dos Brigadas del mismo cuartel, les comunicó a que en ningún caso le consintieran salir a la calle en formación si no que le visitara el Médico de la familia tropezaron con la oposición de los familiares, dijo de los Oficiales, que le impusieron un Médico amigo de ellos hasta que por fin, ante la insistencia y amenaza del hermano de Albino de inmediatamente cuenta puntual de todo lo sucedido al Gobernador, accedieron que Albino fuera a su casa adonde lo llevaron a la hora referida.

También tuve ocasión de saber al través de mi esposa que el Teniente de la Guardia Civil, Sr. Aranguren estaba presente cuando el Capitán Rañal dijo al Gobernador: "Va a darse hoy un golpe de Estado y eres tú el que tiene que cargar con las vagas primeras noticias obtenidas al través de su esposa, según la posterior que cuando el Capitán Rañal reprochaba a Albino por no querer



hacerlo llamándole traidor y cobarde y le decía que por su culpa había fracasado el golpe en La Coruña, estaban presentes Aranguren y el Capitán Ayudante del Coronel, Sr. Duarte, quien se acercó a Rañal y le dijo que no gritara tanto porque se iba a enterar todo el mundo. También dijeron a Albino en relación con el golpe que si ofrecía resistencia el Gobierno civil la Artillería del Ejército estaba prevenida para cañonearlo. En relación con esta aseveración de Albino están mis noticias de las relaciones entre elementos de la Guardia Civil y militares. Concretamente se, por Don *Jose Quintas Pena*, que el Teniente Coronel D. Oswaldo Nevado, Del Regimiento nº 8 de Infantería descendió de uno de los camiones que transportaban fuerza y paisanos la noche del sábado, ante su domicilio en la calle de San Andrés. Una última declaración de Albino nos habla de otro tipo de relaciones, a saber: habiendo aludido en el cuartel de la Guardia Civil alguien a la dificultad de que, por haber de ir Albino enseguida de cenar al Gobierno en cumplimiento de orden recibida del Gobernador, precedería a los Jefes de la Guardia Civil que pensaban presentarse despues, con lo que, encontrándose éstos solos ante la puerta, no se la tranquilizó al que exponía la dificultad diciendo que "llevarían uno de Asalto".

Por el conductor del coche de la Comandancia de la Guardia Civil Francisco Piñeiro, que expresó a mi mujer su pena por el trato que había recibido Albino, supo ésta que dicho conductor, ignorante del motivo había sido quien fué a buscar a Albino cuando le recogieron en su domicilio.

Las manifestaciones de mi esposa despues de su primera visita que confirmaban al detalle los fundados indicios que yo ya tenía, y quedan anteriormente relatados, me decidieron a dar conocimiento al Gobierno y a los Comandantes de la Guardia Civil Sres Alvarez Rios y Monasterio que se encontraban en la Capital y a participarlo a Pontevedra donde se encontraba el Coronel del Tercio para hacerle venir.

En cuanto a la tercera pregunta que se me hace, he de advertir que por las especiales circunstancias de trabajo del Gobernador, realizados siempre desde su despacho oficial, no he tenido ni podía tener más conocimiento directo, que el del cambio del Guardia Civil que presta servicio a mis ordenes. Más noticias directas las hubiera tenido desgraciadamente en el triste caso de haberse realizado la intentona. Las demás noticias son siempre de tipo informativo, por lo que tiene gran importancia la evacuación de las citas personales que se contienen en esta certificación sino estuvieran ya suficientemente probadas por otros caminos a juicio del Juzgado Especial.

Lo que pongo en conocimiento de V.S. al efecto de la evacuación de las preguntas contenidas en el pliego de posiciones que se me ha remitido.

La Coruña, 23 de Abril de 1936  
El Gobernador civil



*N. Peña Carballo*

Ilmo. Sr. Coronel Juez Especial Militar de la 8ª Division



Excmo. Sr.:

Francisco VAREZ CARRILLO, natural de Madrid, mayor de edad, Ayudante de la Catedra de Derecho Romano de la Universidad Central y Oficial Letrado del Congreso por oposición (DOCUMENTO N.º 1), domiciliado en esta capital, Pza. del Dos de Mayo, número 5 y con cédula personal de tarifa 1, clase 5, número 253403 expedida en 10.3.34;

A V. E. Expone: Que encomendándose en las condiciones que la convocatoria de 1935 para concesión de pensiones de ampliación de estudios en el extranjero (Gaceta del 8 de enero) señala en su capítulo 1.º, para poder solicitarlas, presenta esta instancia dentro de término para participar en el concurso mencionado.

Gras hallarse en esas condiciones por ser Ayudante de la Facultad de Derecho (DOCUMENTO N.º 2), en la que anteriormente se graduó con revalida (a cuyo hecho y circunstancias se refieren los DOCUMENTOS 3 y 4).

Y solicita pensión de un año para estudiar en Alemania Derecho privado: lo primero fundamentalmente la Universidad de Berlín con sus Profesores FABER, de Derecho Romano y Civil de Obligaciones, y WOLFF, de los Derechos reales, pero cree conveniente hacer proceder la temporada en Berlín, a la que se puede dedicar el segundo semestre de una estancia en la Universidad de Göttingen que tiene también buenos Profesores tanto en el Derecho privado (GLERKE) como en el Procesal (CHERMANN) con el estudio de cuya materia completara en lo posible el peticionario su labor.

Añade también la posibilidad de pasar en Inglaterra algún tiempo utilizando la diferencia resultante entre el periodo real de duración de los semestres académicos y el año natural durante todo el cual solicita pensión para estudiar la organización de tribunales.

El camino de su formación, los documentos académicos al detalle y referencias a la labor que lleva realizada, se indican en la Memoria que, por si la Junta, la estimare suficiente base para concederle la pensión que pide, hace acompañar a esa instancia.

Por lo expuesto, SUPLICA A LA JUNTA que V. E. presida se sirva tener por presentada esta instancia y resolverla favorablemente en el caso.

Madrid, 5 de febrero de 1935

*F. Varez Carrillo*



## MEMORIA

## I

DECLARACION PREVIA, CONJUNTA CON LAS DE LA INSTANCIA A QUE ACOMPAÑA ESTA

## MEMORIA.

El aspirante comenzaría a disfrutar su pensión en el momento en que la Junta lo hiciera posible, si la concesión llega a tiempo para alcanzar el semestre próximo, que según las noticias obtenidas comenzará este año en abril o mayo; manifiesta conocer francés, alemán e inglés; no señala la cuantía de la pensión, prefiriendo remitirse a lo que la misma Junta concede en casos análogos a pensionados que han de vivir en Alemania y en Berlín y en Inglaterra en su caso, añadiendo las cantidades que usualmente se asignan para viaje; acepta de buen grado los compromisos de contribuir a sostener nuevos pensionados mediante la devolución de todo o parte de lo que por pensión recibe si en el porvenir pudiera, de dedicarse plenamente al estudio que menciona sin perjuicio de la natural ojeada al estado de la enseñanza en Alemania e Inglaterra, de presentar la nota-resumen y demás obligaciones que señalan las bases del concurso.

## II.

## NOTAS PERSONALES SOBRE LA CARRERA Y LA VIDA DEL SOLICITANTE

De los certificados que presenta, unos muestran el curso ordinario de los estudios de Bachillerato con especificación de notas en las asignaturas y en la reválida, voluntaria al tiempo de sus estudios, cuyos ejercicios y oposición a premio realizó (DOCUMENTO 5); otros, dan señal de su paso por la Universidad tanto en lo que se refiere al curso normal de los estudios, con indicación de nota en los años sucesivos (DOCUMENTO 6) y en la reválida (DOCUMENTO 8), como en relación con las oposiciones numerosas a premios anuales en mérito primero (DOCUMENTOS 7 y 10) y del Doctor Montalbán al fin de la licenciatura (DOCUMENTO 4) después, como acerca de las becas que le fueron concedidas (DOCUMENTOS 3 y 9), como en fin sobre un trabajo que obtuvo en concurso el premio entre los presentados: versaba sobre "Influencia de los estudios realizados por la Casa de Contratación de Indias de Sevilla en la mentalidad y la cultura europeas"; se realizó con abundante compulsión de archivos y fue lastimosamente perdido en la Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, quedando sólo de él la constancia del certificado nº 10, que alude a su lema, al catedrático ponente y a la concesión; otros documentos certifican bien la situación del peticionario de Ayudante de la Universidad (DOCUMENTO 2), bien la de Oficial Letrado del Congreso por oposición (DOCUMENTO 1).

En esas certificaciones se ve como con base de las calificaciones obtenidas se solicitaron becas y se hicieron oposiciones a premio; auna y otra cosa le impulsaba la circunstancia que se ha dado en todos sus estudios de tener que atender a la vez que a ellos a la obtención de algún ingreso.

Esta misma exigencia halla, desde muchos años atrás, cauce de satisfacción en función de enseñanza: las clases privadas en lo modestísimo de las posibilidades del aspirante que empezó a dar cuando contaba once años, de lengua latina, para seguir durante todo su Bachillerato y sus estudios de Facultad, hasta que, ya en condiciones de optar a puestos del Estado, resolvió su problema económico de momento con la oposición a Oficiales del Congreso.

Ello ha arraigado en él su interés por la enseñanza; y también por las cuestiones de la enseñanza, en la que ha sido un jalón su discurso en la apertura del año académico de 1933 que hace acompañar a esta Memoria porque tiene una parte que alude a la misión de la Universidad. En la misma línea está su interés por el trabajo que desarrolla como

encuentra también su aspiración de optar a Cátedras cuando la preparación que adquiriera y su formación se lo condientan.

Enfocado este problema de la enseñanza dentro del más general de la juventud a que se dedica, el peticionario ha creído que le permitiría añadir unas notas de un artículo suyo sobre la juventud; y otras, de un discurso ~~en~~ en materia de Inter-ayuda universitaria: Problemas económicos y sociales de los estudiantes. No añade, en cambio, la Memoria de su actuación juvenil universitaria en el extranjero con ocasión de la cual conoció Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, por ser cuestiones estrictamente estudiantiles que, por tanto, caen fuera del objeto de esta Memoria.

### III

#### LA AFICIÓN AL DERECHO PRIVADO

Durante bastante tiempo advirtió el aspirante cuan difícil le era una opción entre las materias del Derecho público y las del Derecho privado; y es justamente cuando se ha decidido a la elección cuando ha penetrado las razones de la dificultad primera. En efecto, ha optado por los estudios privados porque en ellos se da una técnica más elaborada y es en ellos donde la técnica parece seguir teniendo más amplios desenvolvimientos; es todo lo referente a la técnica jurídica lo que le ha interesado siempre, y así ha preferido en cualquier instante las pretensiones de simplificación rigurosa de materiales, de resolución de casos prácticos, de preguntas escueltas y certeras; y a la vez, los campos en que la técnica jurídica se daba más ampliamente en ese problema, a la vez difícil y hermoso, en que terminan los principios y comienzan sus conclusiones, terreno de atractivo y peligro en que se unen la teoría y la práctica.

En este aspecto es indudable la primacía del Derecho privado y en relación con él las cuestiones de Procedimiento civil.

Así ya, durante su carrera, le ha interesado la solidez de edificio del Derecho romano, el ancho campo de trabajo ordenado del Derecho civil, las cuestiones de casuística dogmática.

### IV

#### PRESENTA ALGUNOS DE SUS TRABAJOS:

Una muestra de la labor en sus clases prácticas;

Un ejemplo de su afición casuística que le hizo resolver todos los casos de un texto (el del Sr. Becerra) en una clase en que sólo se pudo resolver la décima parte de ellos;

Unos trabajos que se refieren a la propiedad;

Otros, que no tienen relación directa con temas privados: el Orden público en el Derecho Internacional privado, la Administración como sujeto de la actividad jurídico administrativa, la actividad jurídica y la técnica, garantías de la relación jurídico administrativa, tres partes de una monografía sobre Duguit.

ACTUALMENTE, realiza labores de traducción del alemán. Inseguida se encargará de traducir la obra de ~~Binder~~ Erbrecht, proponiéndose también comenzar muy pronto la publicación de estudios en revistas, al empezar a disfrutar de serenidad mayor de la que hasta ahora le ha dejado la necesidad de resolver problemas de existencia.

### V

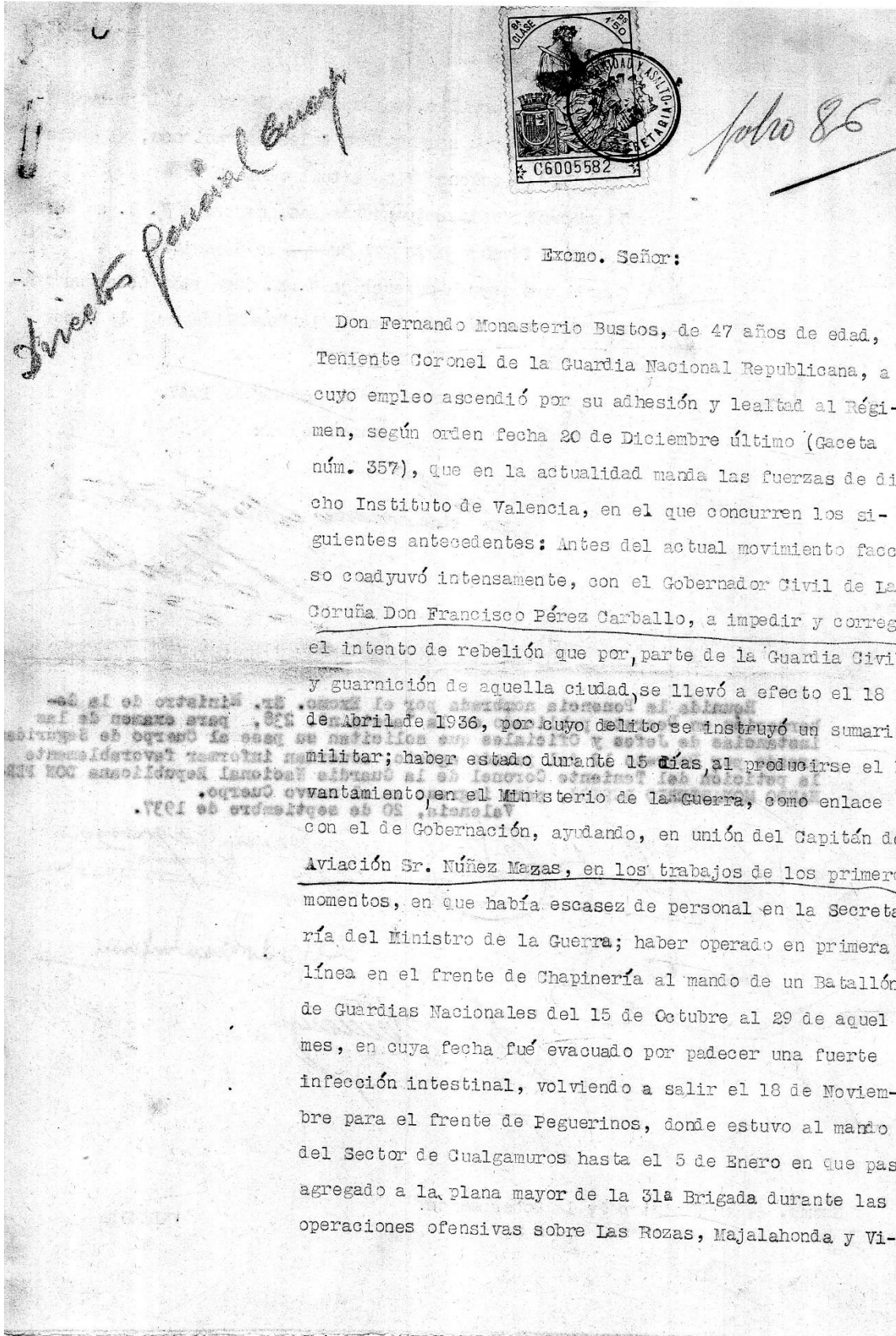
Tiene grandes esperanzas de realizar los estudios que ha elegido en materia de Derecho privado y completarlo con el Derecho procesal y, en general, de adquirir una buena base desde el punto de vista técnico jurídico. Quisiera también poder estudiar la enseñanza en otros países donde pueda ver

visita que pueda realizar para sentir vivir las instituciones inglesas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P.D. La presente MEMORIA ha sido presentada tal como aparece, en la Comisitoria para concesión de pensiones de 1933. Al volverla a presentar en uniuicemente tiene que añadir el solicitante que, enfermo desde Noviembre, profesor titular de la asignatura de que aquél es ayudante, viene dando regularidad clases teóricas en dicha Cátedra, con lo que cree haber subido su condición de "docente"; cualidad a que alude preferentemente la Comisitoria.





llanueva del Pardillo, regresando a Madrid el 16 del citado Enero, una vez suspendidas tales operaciones, al serle comunicado su ascenso a su actual empleo.

Consignadas estas circunstancias, expone a V. E. su deseo de pasar a formar parte del Cuerpo de Seguridad.

Gracia que espera merecer de V. E. cuya vida deseo se consigne muchos años para bien de la República y de la Causa Antifascista.

Valencia, 28 de Agosto de 1937.

Excmo. Señor:

*Fernando Monasterio*  
*Burros*

Reunida la Ponencia nombrada por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en Decreto publicado en la Gaceta nº. 238, para examen de las instancias de Jefes y Oficiales que solicitan su pase al Cuerpo de Seguridad creado por Decreto 12 del pasado agosto, acuerdan informar favorablemente la petición del Teniente Coronel de la Guardia Nacional Republicana DON FERNANDO MONASTERIO BURROS, para ingreso en el nuevo Cuerpo.

Valencia, 20 de septiembre de 1937.

*Vicente Albalade*

*Enrique G. Ariza*  
*Forner*

*Antonio García*

*Sebastián Lupión*

*Francisco J. J. J.*

Excmo. Señor Ministro de la Gobernación

VALENCIA



## DECLARACIÓN DE FAUSTO RUBIN Y PUIG.

En La Coruña, a siete de Agosto de mil novecientos treinta y seis. ante el Sr. Juez y de mí, Secretario, comparece el que dice ser y llamarse Don Fausto Rubin y Puig, de sesenta y cuatro años de edad casado; natural de Santiago, provincia de La Ogruña, y en la actualidad vecino de esta Capital, Plazuela de los Angeles, núm. 6, piso 2o.

Instruido y juramentado por S. S.<sup>a</sup> con arreglo a derecho después de haber prometido decir verdad.

cumplir las prescripciones legales de todas las que fué enterado, siendo examinado convenientemente, DECLARA:

que el declarante era Secretario del Gobierno Civil de esta provincia, y fué trasladado al Gobierno Civil de Santander, y a su instancia, en febrero de 1935, habiendo regresado a prestar los mismos servicios en el Gobierno de esta provincia en Abril del corriente año, después de reiterados requerimientos del Ministerio.

que unos dos días antes de la declaración del Estado de guerra, el Gobernador le habló de que había que hacer una requisita de armas, rogándole el declarante que no le hiciera, haciéndole ver el peligro que esto representaba dado el carácter levantisco de las organizaciones obreras de esta ciudad, respondiéndole dicha Autoridad, que ello eran órdenes del Gobierno, retirándose el declarante creyendo haberle convencido; pero al siguiente día oyó decir que se había verificado dicha requisita, ignorando detalles, es decir que no sabe si lo que se hizo fué, repartirlas entre los obreros, o incautarse de las que había en las armerías.

que el lunes día veinte del pasado los obreros entraban en el Gobierno Civil, en grandes grupos pidiendo armas, pero no ha visto que nadie se las diera, lo que se explica porque el declarante, aunque tiene su despacho con puerta de entrada al pasillo que comunica con el del Gobernador, suele tener esta siempre cerrada. Que recuerda que entró en su despacho un momento el Señor Prego en dicha mañana, viendo asimismo al Señor Guzmán por los pasillos, el cual se dirigía al despacho del Gobernador; que este Sr Guzmán era, indudablemente, el Diputado que ejercía mayor fuerza sobre el Gobernador en asuntos políticos provinciales.

que los Diputados Sres Miñones y García Ramos cree tenían poca influencia en el Gobierno, pues ha visto algunas veces en la firma como se negaban algunas peticiones de licencias de armas recomendadas por ellos, así como peticiones de libertad

de detenidos gubernativos. que en cuanto a la actitud adoptada por el Gobernador Civil el lunes día veinte del pasado no sabe que nadie se la aconsejase, y cree que la cuestión de la defensa del Gobierno debió tratarse solamente con los jefes de Seguridad, y singularmente con el Comandante.

Que de los restantes procesados solamente conoce al funcionario del Gobierno Don Leovigildo Taboada a quien también se veía circular con frecuencia por loampasillos, sin que esto, a juicio del declarante, tenga significación alguna, pues por el dinamismo de dicho Señor frecuentemente recorría diversos despachos.

Que hasta el declarante llegó el rumor, de la calle, que se habían dado armas a los obreros, pero no cree que este reparto se hiciera en las oficinas del Gobierno.

Que antes de salir de este, lo que verificó sobre la una de la tarde del día de autos, pudo ver en su despacho una caja de bombas de mano, que custodiaba una pareja de guardias de asalto; y en ocasión de ir a despedir a los empleados, por no haber nada que hacer en el Gobierno aquella mañana, que por cierto pudo comprobar que ya se habían marchado todos, vió en uno de los despachos que dan a la calle de Riego de Agua un cajón de madera custodiado por un individuo a quien preguntó que hacía allí, contestando aquel que se hallaba custodiando un cajón con cartuchos de dinamita.

Que el declarante no estaba en buena armonía con el Gobernador, porque después de haberle instado repetidamente a que viniese a esta provincia, a prestar sus servicios, fué recibido con hostilidad por el Frente Popular y organizaciones obreras, hasta el punto de que el declarante interesó nuevamente su traslado oponiéndose a él, el Gobernador Civil. Que por esta relación, frecuentaba poco el despacho, y no está muy enterado de lo que allí se tramara.

Que al Secretario del ayuntamiento Sr Martín Martínez no le ha visto nunca en el Gobierno; al Alcalde Sr Suárez Ferrín le ha visto algunas veces, principalmente con ocasión de conflictos sociales que interesasen a los servicios municipales.

Leída que le fué esta declaración, se afirma y ratifica en su contenido, firmando con S.S. y doy fé.

*Santiago López*

*Leovigildo Taboada*

*Rafael Alonso y Corredor*



H.6.998.047

209

DON GERARDO LANDROVE MOINO, COMANDANTE DE INFANTERIA RETIRADO, JUEZ MILITAR  
EVENTUAL DE LA PLAZA DE LUGO Y NOMBRADO PARA LA TRAMITACION DEL PRESENTE  
EXHORTO.

CERTIFICO: Que debiendo nombrar Secretario para que conmigo actue en  
la tramitacion de este exhorto, nombre al Teniente de Infanteria Reti-  
rado Don Benjamin Alvarez Oleire, el cual comparece y enterado de su  
cometido dijo: que podia aceptar y aceptaba dicho cargo, prometiendo  
cumplir bien y fielmente en el desempeño del mismo.  
Y en prueba de ello, firma conmigo en Lugo a los catorce dias del  
mes de abril de mil novecientos treinta y siete.

*Gerardo Landrove*

*Benjamin Alvarez Oleire*

Providencia Juez! En Lugo a los catorce dias del mes de abril de mil nove-  
Sr. Landrove. ! novecientos treinta y siete. Por recibido oficio del Go-  
bierno Militar de esta plaza acompañando exhorto para di-  
ligenciar en el Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia de la Guar-  
dia Civil de esta provincia, guardese y cumplase lo mandado por la Autori-  
dad Militar de la plaza y a este fin oficiase al expresado Jefe a fin de  
que comparezca ante este Juzgado a las once horas del dia de mañana, con el  
fin de prestar declaracion. Unase an cabeza el oficio y exhorto.  
Lo mando y firma el señor Juez y doy fe.

*Antonio*

N O T A.- Seguidamente se cumplio lo mandado en el proveido anterior.  
Doy fe.

*Alonso*

DECLARACION DE DON FLOREN- En Lugo a los quince dias del mes de abril de  
TINO GONZALEZ VALLES ! milnovecientos treinta y siete. Ante el señor  
Juez y mi Secretario, comparecio el que dice

ser y llamarse como al margen se expresa, de cincuenta y dos años de edad,,  
casado, natural de Santiago de Cuba, Teniente Coronel del Instituto de la  
Guardia Civil con destino en la Comandancia de Lugo. Advertido, examinado  
y bajo promesa que preste de ser veraz y despues de darle lectura a las  
preguntas del interrogatorio, declara:  
A la primera; que conoce a los Jefes que motivan esta declaracion, no tienen  
de amistad ni enemistad con ellos y que tiene interes en el esclarecimiento  
de los hechos que se persiguen, solo en el sentido de su amor a la patria  
y en que quede bien puesto el honor y buen nombre de la Institucion a que  
pertenecen el declarante y los acusados.  
A la Segunda; que conoce no se tomaron medidas en favor del Glorioso movi-  
miento Nacional por los Jefes se referencia, conocimiento que le tiene por  
informaciones recibidas de varios Oficiales y clases de trepa de aquella  
Comandancia y por apreciacion propia que tuvo en los dias 19 y 20 de Julio  
ultimo y este debido a lo siguiente: El referido dia diez y nueve en las  
primeras horas de la mañana tuvo noticia de manera no reglamentaria que



hacia uno ó dos días se había incorporado el Coronel del Tercio señor Don Ramon Perez Tello. En su vista se presente en el cuartel de la Guardia Civil ante dicho Jefe, quejándose el declarante de que no se le hubiera avisado su llegada; de que se encontraba vigilado por alguien del Instituto que convivía en la casa-Cuartel y de que por los Jefes de la Comandancia no se le guardaban las consideraciones que se merecía como Jefe del Cuerpo pareciendo como si estuviera residenciado y tenido como peligroso, y por ultimo, le hizo saber a dicho Coronel que apreciaba la situación gravísima y que no obstante no se habían tomado medidas algunas ni aún las mas elementales y reglamentarias cuales eran la concentración de los puestos para evitar fueran atacados aisladamente y que se concentraran en situaciones difíciles de defensa. En vista de esto le llevó al despacho del Primer Jefe Teniente Coronel Don Jose Clares Cruz, donde había algunos oficiales; le hizo presente mis indicaciones que mandé y las vi asistidas por los allí presentes, limitándose el dicho Teniente Coronel a llamar por telefono al Gobierno Civil para consultarlo. En la conferencia que mantuve me dio cuenta el declarante, que lo hacía con una mujer a la que llamaba Juanita, lo que reprimió y censuró, esta mujer era la que se decía esposa, del Gobernador Civil, diciendoles el que declara me parecia inaudito la confirmacion del rumor de que era ella la que mandaba; se negó la concentración de los puestos, y en la primera visita que hice el día 20 insistí en la necesidad de concentrar las fuerzas, la efervescencia era enorme y estaban las masas por las calles, se sabía se habían repartido armas y que se había fortificado el Gobierno Civil. Por haberle oído a varios oficiales y clases de tropa, supe que tanto por el señor Teniente Coronel Señor Clares como por el Comandante Señor Ries, se había ordenado a varios puestos entregaran las armas que tubieran a elementos del Frente Popular. Me es desconocido se tomaran por dichos Jefes medidas decisivas y ejecutivas en contra del Glorioso movimiento Nacional. A la tercera: Que el día 20 de julio me ya citado estuve dos veces en el Cuartel de la Guardia Civil; la primera sobre las nueve horas a protestar de la pasividad y abandono en que se tenía la fuerza de la Comandancia a pesar de la gravedad de las circunstancias, la noche del 19 al 20 como en las dos anteriores, habían sonado las sirenas de los buques anclados en el Puerto y como consecuencia se habían concentrado en la Poblacion elementos del Frente Popular; también protesté del aislamiento y abandono en que se me tenía. Sobre las doce horas estando en mi casa, pues se me tenía prohibida la estancia en el cuartel por el mencionado Coronel, recibí aviso por un Guardia, de que la Division ordenaba me presentara inmediatamente en ella, y acto seguido le hice en el Cuartel de la Guardia Civil, el Coronel conocía la orden, no obstante me negó el coche y escolta para poder efectuarlo, ellas obtuve la misma negativa; de todo esto se enteraron los oficiales que estaban en el Cuartel y el señor Fiscal Pardo de Andrade que accionadamente se hallaba presente. Tuve que contener a varias clases y Guardias que a todo trance querian salir conmigo. Puesto al habla por telefono particular, con ella. Vine a buscarme el capitán de caballeria Señor Togores y la negativa del Coronel la había comunicado al Comandante de Estado Mayor Señor Gutierrez de Soto. Ya en la Division se me hizo presente por el entonces Coronel de Ingenieros Señor Canevas y el Jefe de Estado Mayor Señor Tovar, de la incertidumbre que tenían de que la Guardia Civil no se uniera al movimiento, fundandola en que habían conferenciado telefonicamente con el Coronel y Teniente Coronel y estos habían dicho que la Guardia Civil no podia salir a la calle por que tenían que atender al cuartel, le respondí que la Guardia Civil saldría en cuanto yo lo dispusiera y así ocurrió al acordarse la declaracion del Estado de Guerra. Le di la orden de salida al Sargento Santos y Teniente Gonzalez, echándose a la calle toda la fuerza disponible con los oficiales, Tenientes Gonzalez, Sarandés, Santos y Capitan Ollate, no haciendole ni Coronel ni Teniente Coronel, que ni en este día ni en días despues se presentaron en la Division. El Comandante Ries estaba en el Gobierno Civil. Estos tres Jefes y Capitan Sr. Cubero se mantuvieron en actitud de sospechosa pasividad. En los meses de marzo y abril del año 1936 andando la Comandancia de



H.6.998.048

210

asisti a varias reuniones en la Coruña preparatorias del glorioso movimiento Nacional, en ninguna de ellas estuvieron presentes el Comandante Ríos ni el Comandante Monasterio, habiendome dicho los capitanes Varela y Rañal que se reservaban de los dos por no merecer confianza. Estando en el parque móvil asesinado el día catorce de abril de aquel año Don Anastasio de los Reyes, tuve noticias del sumario que por conspiración se había incoado contra el entonces primer Jefe de la Comandancia de la Coruña Don Benito de Haro Lumbraez y Capitán Don Jose Rañal, siendo el promotor el Comandante Monasterio, valiendose del Guardia ordenanza del Gobierno Civil. Conoci después el sobreseimiento del sumario y que fueran destinados todos los Jefes y oficiales excepto el Comandante Ríos. Mas tarde destinaron a la Comandancia como Jefe de ella en mando de superior categoría, al hoy Teneinte Coronel Don Jose Clares Cruz. Durante mi permanencia en las prisiones militares de Guadalajara (dos meses) estos Jefes no han tenido la menor consideración y atención con mi familia, que residía en la Coruña y su actitud motivó que igual conducta se observara por casi todos los que pertenecían a la Guardia Civil y esto en contraposición a los demás elementos de la población en particular militares. Aquellos actuaban buscando no contrariar a los elementos del Frente popular pues todos los que fuimos encarcelados en aquel mes de abril nos señalaban como fascistas. Cuando regresé a la Coruña en fines de Junio en situación de disponible forzoso, aquellos siguieron igual conducta, no así algunos Teneintes, clases de tropa y gran numero de Guardias que fueron a visitarme a mi llegada y que me ofrecían su adhesión incondicional. La conducta de aquellos Jefes unida a que me enteré de que mis entradas en el cuartel eran vigiladas dando aviso al Gobierno Civil y a la Inspección General del Instituto en Madrid, motivó a que ya ascendido el señor Clares me entrevistara con el en su despacho Oficial, exigiendole explicaciones por el proceder que observaban conmigo, que parecia como si me tibiéran residenciado, contestandome que no estaba conforme con una nota que había mandado estando en Guadalajara al Director de los Colegios, nota que llegó a conocimiento del Inspector General el mismo día de su envío. Esta nota existió y fue una que el día 18 de abril, mandé al Teneinte Coronel señor Arcos Fajardo, Director de los Colegios a consecuencia de visita que en ese día nos hicieron en la prision varios oficiales del Ejército para que estuvieramos preparados en la noche de aquel día que vendrían a sacarnos de ella entregandonos armas cortas de fuego. También me dijo aquel Teneinte Coronel que no estaba conforme con lo que se le había dicho al Inspector, y que no estaba conforme ni con mi manera de pensar ni de obrar y en cuanto a que mis entradas y salidas del cuartel eran objeto de vigilancia, no tuve la menor explicación.

Del Comandante Ríos, he conocido por ser de rumor y de dominio notorio tanto entre los del cuerpo como de los extraños a él que estaba en íntima convivencia con los elementos del Frente Popular y asidue visitante del Gobierno Civil, dentro de este se hallaba cuando fué cañoneado y rendido en la tarde del veinte de Julio, del cual salió prisionero como los demás elementos que estaban dentro, ignorando por que causa fué puesto en libertad y apareció a los dos otros días en su Comandancia. Tuve que conocer el reparte de armas que desde el Gobierno Civil se hizo a los elementos del Frente Popular y también tuve que conocer la fortificación que se hizo alrededor del Gobierno Civil para su defensa, ignorando si de todo ello dió cuenta a algunos de los que componían la Junta de Organización del glorioso movimiento; En Coreboración a lo antes dicho dice que el alcalde fusilado señor Ferrín le citó como intermediario con el Gobernador Civil para hacer desistir a este, de enfrentarse contra el Ejército y por ultimo manifiesta que durante su estancia de Gobernador Civil en la Coruña, hubo de llamar la atención al Teneinte Coronel Clares y Comandante Ríos de la poca asistencia que tenía en ellos pues ni los veía por el Gobierno Civil ni en las diversas manifestaciones que se organizaban con motivo de actos Patrióticos.

Que no tiene mas que decir.  
Y leida que fue por si mismo esta declaración, en ella se afirma y ratifica, firmando despues del señor Jues de lo que doy fe.

INDICACIONES DEL SERVICIO

FOMENTAD LOS SERVICIOS DEL ESTADO

NÚMERO 19-4-3

39035 S CORUNAMADRID 17/180 150 19 5830 DEL PTE CONSEJO MTROS

EN ESTE MOMENTO SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE REPUBLICA ACABA APROBAR LISTA  
 EVO GOBIERNO BAJO MI PRESIDENCIA Y CON REPRESENTACIONES PARTIDOS  
 UERDA REPUBLICANA UNION REPUBLICANA Y NACIONAL REPUBLICANO PARTICIPANDO  
 MO MINISTRO SIN CARTERA D FELIPE SANCHEZ ROMAN LO QUE COMUNICO A VE ESPERANDO  
 SECUNDE CON TODO CELO LA OBRA DE PACIFICACION QUE SE PROPONE REALIZAR  
 EL GOBIERNO LE SALUDO - DIEGO MARTINEZ BARRIO

388









## SUMMARY

### FRANCISCO PÉREZ CARBALLO: MEMORIA Y BIOGRAFÍA

As part of the **introduction** to the summary of the objectives, methodology, results and conclusions of this doctoral thesis, I would like to emphasise that Francisco Pérez Carballo perfectly embodies the values and principles of a brilliant and mistreated generation of intellectuals and liberal professionals, who due to necessity or political strategy, occupied the border between the bourgeois left-wing, whose ideologies derived from liberal and democratic positions, constrained in a certain way, by the longstanding, anticlerical curse generated by historical republicanism and the increasing tensions between the concepts of social and political revolution, and the utopian and revolutionary left. This generation, who was until recently consigned to oblivion, was sacrificed in the defense of the Republic, of the rule of law as the cornerstone of the political community, and of democracy understood as an essential philosophy of the Republican ideal and its institutions.

The thesis's **objectives** focus on formulating the biography of Francisco Pérez Carballo, a young man from a humble family, born in Madrid, on the 8th of November 1910, and educated in the San Antón School, Cardinal Cisneros Secondary School, and the Law Faculty in the Central University, and politically trained in the university student movement, APED/FUE- and the youth organisations of the left-wing bourgeoisie, represented by the parties led by Manuel Azaña (JAR and JIR), which enabled him to accede to the civil government of La Coruña in the spring of 1936. In order to generate a wider perspective on his rise to power, the methodological approach, which initially departed from the necessary perception of the individual in surrounding social structures, to an analysis of the perception and representation of the careers of Francisco Pérez Carballo and his wife, who was linked to him not only in terms of historical reality but also in memory narrative, but never in the sense alleged by Francoist propagandists and some left-wing memory vectors, who due to different motivations, provided decontextualised information on this couple's actual circumstances.

Consequently, this work attempts to recuperate their history, a task justified by the fact that only the memory of Francisco Pérez Carballo as well as his wife, Juana Capdevielle, intellectual, a woman ahead of her time, a mother killed before giving birth, has prevailed in certain circles, while there is a conspicuous dearth of historiographical studies dedicated to them. Their memory has been expressed in a revindicative sense, which has reduced both of them to scapegoats of the repressive Francoist barbarism or, in more recent years, to a clear-cut concept of Republican citizenship, or denigratory on the part of the historiography and Francoist press at that time. The **results** of this investigation have clearly highlighted the nuanced conceptual distinction between history, as an intellectual operation that requires critical discourse and analysis, and memory, understood as deducing abstractions from different versions of memory, individual, collective, historic, hegemonic and dominant. Memory is understood as the presence of the past, a psychic and intellectual reconstruction which presupposes a selective representation that is never just from the isolated individual, but

rather than of the individual in his familial, social, national contexts, in other words, a collective memory. The importance of the documental sources employed (particularly the contents of the Northeastern Military Tribunal Archive) have helped to clarify the distinction between the elements pertaining to objective historiographical discourse and those that pertain to essentially memorialistic production, which in relation to this specific case, had its apogee in the era in which Pérez Carballo was the president of the Civil government in La Coruña, and in which he confronted the frustrated April 1936 conspiracy, and the coup d'état that provoked the Civil War. These conspiracies strove to control or definitively neutralise, by means of the permanent dialectic maintained with the Republican government, an advocate of appeasement that originated as much in the success garnered in the August 1932 *Sanjurjada* as the certainty that in this occasion the insurgent forces were much better structured and co-ordinated.

In the **conclusions**, I emphasise that the legacy of Francisco Pérez Carballo's career trajectory, and indeed life, was forged, with variable intensity, in different cultural and political memories, interrelated by certain symbolic values. They conceived an almost anonymous figure, divorced from his social context, always in a biased form, in an intellectual and political perspective focused on the role of the civil governor who confronted an antebellum state crisis, as a metaphor for the imperfect and poorly executed ideal, but always inspiring and recoverable, of the Second Republic. That was the point of departure, and the last Republican governor of La Coruña embodied, for these memory-makers this complex and abstract identity. To use a relevant simile, Pérez Carballo crossed the thresholds of modernity in the initial decades of the twentieth century, which permitted him to accede to the educated middle classes, mobilised in the political arena and sufficiently ambitious to aspire to freedom from a still latent past. Significantly, Azaña, Francisco's political ideal (of the lawyer and university professor, of the student leader who defended the notion of professionalism, conceived as a way in which to dislodge politics from academia, to pre-empt the interference of Catholic University and Falangist organisations, of the political representative of the left-wing bourgeois youth-groups) had made the incorporation of the proletariat and the peasants in the Republican democratic system one of his greatest priorities, a strategy which, on an individual level, and in the opinion of many contemporaneous observers, the last Republican governor of La Coruña also shared. And also his premature death, so frequently evoked, could be paralleled to the Second Republic, sundered five years after its proclamation.

However, the reason for this symbolism, springing from distinct collective memories (cultural, political, propagandistic, gender) and from different intermeshed and easily malleable ideological and chronological perspectives, can be attributed to his life and that of his wife, Juana Capdevielle's embodiment of an idea of citizenship, evident in their biographies, political calibre and ethics, which in a positive interpretation firmly located the left as typical victims of Francoist repression (particularly Juana Capdevielle, an intellectual and professional woman). Their figures have been revindicated in the most recent years by cultural and political sectors who sympathise with a resurgent philosophical and political republicanism. This idea of specific citizens' identities, which was and is currently being exalted by distinctive political and

progressively cutlural memories (especially in the Galician sphere) lodged, with a certain virulence during the civil war and the immediate postwar period. The enmity and the obsessive repression of conspirators, sycophants, and propagandists of the Francoist dictatorship, who were capable of obtaining, especially those who wrote in the immediate postwar period, the risings' direct sources in order to construct a nonbelligerent account of the rising, condemned the civil role played by Pérez Carballo as a civil governor, and also villified his wife as a conspirator in an act of treason in opposition of the uprising in La Coruña. In this sense, it has been verified that various high-ranking members of the *Guardia Civil*, led by the Colonel Lieutenant, Florentino González Vallés, avenged themselves (in the widest sense of the term) against the civil governor, in their declarations, in retaliation for his attempt to control the Army, and more specifically, for his decisive action in neutralising the April uprising and in hindering the conspirators' ensuing action.

And now returning to the historical reality, Pérez Carballo who was faced with the coup d'état and the fact that most of officialdom and a good part of the high-ranking officers of the VIII Division of the Army and the sixth division of the *Guardia Civil* were conspiring against the Republican government, could wait to ascertain which side time would favour, or he could confide in the leaders of the security division and in the provincial command of the Coronese *Guardia Civil*, tenant coronel Clarés and Commander Ríos. The latter embarked on a spiral of tensions, inspired by a dilation tactic and the intention to deceive Pérez Carballo. The governor tried to counteract maintaining or more precisely retaining the obstructionist Ríos in his office to assure himself that orders were being followed by the *Guardia Civil*, upon his ratification of them. This conflict was finally resolved in favour of the rebels as the distribution of arms which the Civil governor had ordered throughout the province and in different police bodies, on the morning of Monday, the 20th of July, failed. Under the general and consensual ideal that this Galician style drama –not two, but three, told to the majority trained by indecisive people, that everything was lost from the very beginning (despite the fact that the roads to La Coruña were full of compatriots willing to fight against the insurgents), everything was too predictable, including the tenacious but ultimately sterile resistance of the civil governor and the few loyal followers who sided with him against the rebel forces.

In the midst of these parameters and certainties, Pérez Carballo inspired acts and gestures of loyalty to Republican democracy, and co-operated in the organisation of the defense of the Civil Government. He headed a committee encharged with that task; he co-ordinated the rest of the Galician governors, he bugged conspirators' phones and he finally strove to compensate, with undeniable stoicism, the lack of real power; provoking, in equal measure, the resignation of Governor Casares and the confused dissolution of the ephemeral governor, Martínez Barro, in the morning of the 19th of July. He maintained faith with his decisions until he deemed all possible survival tactics for the Republic in Galicia exhausted. His legal vocation prevented him from sanctioning risky and fearless projects, which if they had prospered, would have taken the lives of some of the insurgents, and on the contrary, led him to the paradox of a negotiation with the rebels on equal footing, always with the evolution of the uprising

on a national level in mind, an option tried and failed when the munitions had run out and many were killed. As much as one cannot deny that his inexperience in carrying out this post of responsibility was a contributing factor in the surrender of La Coruña and the rest of Galicia, one has to question what would have happened if the civil governor had acted with more autonomy. In answering this, one has to analyse the context in which he governed and its connectivity with local power nuclei, and to emphasise that Pérez Carballo fulfilled, in large part, his obligation to translate Republican dictates in the context of a complex and dark social reality.

In summary, the merits of La Coruña's civil governor centered on the position maintained by a significant sector of politicians, civil servants and military personnel involved in this historical episode (and consequently affected as the accused, witnesses or dubious people in the cases instructed by military legislation after the success of the uprising there) that Pérez Carballo was one of the maximum exponents of the Republican democratic and legal cause from the inception to the definitive uprising in July 1936. This affirmation must be nuanced by personal and political circumstances and convergent interests, and also by the incorporation and analysis of the discrepant and unorthodox voices, affiliated to the working-class left, who were frequently fragmented and isolated in personal and political exile.